

REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE 1963

TITULO 34AP - APÉNDICE II

En General

Adoptadas por el Tribunal Supremo en 21 de enero de 1960.

Desaprobadas por la Asamblea Legislativa por la Ley de junio de 1960, Núm. 76.

Adoptadas Nuevamente por el Tribunal Supremo en 27 de diciembre de 1960.

Desaprobadas por la Asamblea Legislativa por la Ley de junio de 1961, Núm. 127.

Adoptadas Nuevamente en 7 de febrero de 1962.

Desaprobadas por la Ley de 21 de junio de 1962, Núm. 86.

Adoptadas Nuevamente en 5 de febrero de 1963, y sometidas a la Asamblea Legislativa al comienzo de la Tercera Sesión Ordinaria (1963).

Enmendadas por la Ley Núm. 87 aprobada en 26 de junio de 1963.

En vigor 60 días después de la terminación de la sesión (30 de julio de 1963) a tenor con el art. V, sec. 6 de la Constitución.

La Tercera Sesión Ordinaria se extendió hasta el 31 de mayo de 1963 a tenor con la Resolución Conjunta Núm. 23, aprobada en 25 de abril de 1963.

I. TITULO, VIGENCIA E INTERPRETACION

Regla 1. TITULO E INTERPRETACION.

Estas reglas serán conocidas y citadas como "Reglas de Procedimiento Criminal". Se interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos injustificados.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. Criminal, 1902, art. 1; Fed. R. Crim. P. 2.

Disposiciones especiales.

La cita de cualquier Regla en el texto de este apéndice deberá considerarse como cita de una Regla de Procedimiento Criminal de 1963, salvo indicación en contrario.

Regla 2. APLICACIÓN Y VIGENCIA.

Estas reglas regirán el procedimiento en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos los procesos de naturaleza penal iniciados en o con posterioridad a la fecha en que entraren en vigor, y en todos los procesos entonces pendientes siempre que su aplicación fuere practicable y no perjudicare los derechos sustanciales del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 1.

Disposiciones Constitucionales.

Veanse las Secs. 7 y 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Titulo 1.

Contrarreferencias.

Abolición de la pena de muerte, Véase la sec. 995 de este título.

Derechos del acusado en general, Véase la sec. 11 de este título.

Derechos sustanciales del acusado, veanse las Reglas 36, 38 y 188 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

Las Reglas Federales de **Procedimiento Criminal** no son aplicables a Puerto Rico. Lozada Espinosa v. Rodríguez, 97 D.P.R. 130 (1969).

Un proceso **criminal** una vez iniciado judicialmente no puede archivarse por el Poder Ejecutivo sin la anuencia del correspondiente tribunal de instancia. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59 (1967).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico no está necesariamente obligado a seguir las disposiciones de la Corte Suprema de California, aun en los casos en que este último tribunal interprete disposiciones estatutarias iguales a las de Puerto Rico. Pueblo v. Hernández, 93 D.P.R. 435 (1966).

La sec. 59 del Título 1, al disponer que se emplearan indistintamente los idiomas inglés y español en lo que concierne a los trámites judiciales en los tribunales, solo tiene un alcance directivo, y no confiere un derecho de opción, ni al acusado ni a su abogado, para elegir el idioma en que se deba ventilar un proceso **criminal**. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596 (1965).

El español es el idioma en que deben seguirse los procedimientos judiciales en esta jurisdicción, pero los jueces tomaran aquellas medidas que resulten necesarias para que, en protección de los derechos de cualquier acusado que no conozca suficientemente dicho idioma, se mantenga a este y a su abogado informados-por medio de traductores o de otro modo eficaz-de todo lo que transcurra en el proceso, y para que así lo revele el record. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596 (1965).

I. PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

Regla 3. MAGISTRADOS.

Un magistrado es un funcionario con autoridad para dictar una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa un delito. Son magistrados los jueces del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal de Primera Instancia, los jueces del Tribunal de Distrito y los jueces de paz.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 12 y 13; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 807 y 808.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

ANOTACIONES

1. En general.

La función de un juez de paz en un caso de incendio malicioso es la de determinar causa probable para arrestar y fijar fianza. Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969).

Regla 4. ARRESTO; DEFINICION; COMO SE HARA Y POR QUIEN; VISITA DE ABOGADO.

Un arresto es el acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza. Podrá hacerse por un funcionario del orden público o por una persona particular. El arresto se hará por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona o sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario. El arrestado no habrá de estar sujeto a más restricciones que las necesarias para su arresto y detención, y tendrá derecho a que su abogado o su familiar más cercano lo visite y se comuniquen con él.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 44 y 114 a 117; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 825 y 834 a 837; Código modelo, Rs. 18, 19 y 37.

Contrarreferencias.

Huellas digitales y fotografías previa determinación de causa probable para arresto, facultades de la Policía, veanse las secs. 1151 et seq. del Título 25.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Asistencia de abogado.
3. Ausencia de advertencias.
4. Vista preliminar.

1. En general.

No toda intervención policíaca con una persona constituye una detención o arresto. Pueden existir circunstancias en las cuales un funcionario del orden público interviene con una persona-con el propósito de obtener información-sin restringirle la libertad a esa persona. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Un arresto es el acto-por un funcionario del orden público o por una persona particular-de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza, y se hará por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona o sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Se entiende que una persona ha sido arrestada, a la luz de la Cuarta Enmienda Constitucional Federal, solo si, tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias que rodean al incidente entre la Policía y el presunto arrestado, una persona razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder marcharse del lugar. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Cuando un policía tiene motivos fundados para creer que, contra él u otras personas, un sospechoso representa una amenaza de grave daño corporal, no es irrazonable Constitucionalmente impedir su huida usando fuerza mortal. Por ende, si el sospechoso amenaza al policía con un arma o existen motivos fundados para creer que aquel ha cometido un delito que inflige o amenaza infligir grave daño corporal, si es necesario puede usar fuerza mortal para prevenir la huida, y de ser ello viable, le sea dada una advertencia. Cruz y otra v. Sierra Maya y otros, 133 D.P.R. 871 (1993).

Si se esta o no bajo arresto depende de si de un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias que rodean el incidente se puede concluir que una persona prudente y razonable, inocente de todo delito, hubiera pensado que no estaba en libertad de marcharse. Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664 (1992).

El debido proceso de ley requiere que todo imputado sea arrestado dentro de un término razonable a partir del momento en que fue denunciado y se ordeno su arresto. Para determinar la razonabilidad del término se debe considerar los siguientes factores: gestiones oficiales tendentes a arrestar al imputado; si este conoce de la orden de arresto en su contra; si ha huido o se ha ocultado; su disponibilidad a los fines de haberse podido realizar el diligenciamiento efectivo; si se conoce o debio conocerse su dirección o paradero; si se ha mudado de direccion; si ha salido de la jurisdicción; su movilidad en Puerto Rico, y otros. Pueblo v. Guardiola Davila, 130 D.P.R. 585 (1992).

La Policía de Puerto Rico, en protección de la ciudadanía en general, tiene derecho a patrullar las vías públicas y tiene la obligación de investigar toda confidencia sobre actividad delictiva. La intervención con unos individuos a partir de cierta confidencia, con motivos fundados para su arresto, y la subsiguiente ocupación de evidencia es una acción policiaca legal que no justifica la supresión de la evidencia obtenida. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

El arresto de una persona no tiene ni puede tener el alcance de senalarle con el estigma de que es un delincuente, y no puede ni debe tener efecto alguno sobre dicha persona una vez se le exonera en un proceso judicial. Pueblo v. Torres Albertorio, 115 D.P.R. 128 (1984).

Es ilegal el registro de una sospechosa de traficar en drogas narcoticas-lo que hace inadmisibile la evidencia ocupadale en su persona-cuando el agente del orden público, antes de registrarla y sacarle del seno un paquetito que luego resulto contenia drogas narcoticas, no la puso bajo arresto o custodia ni la detuvo fisicamente, y la prueba demuestra que la sospechosa no trato de huir, o de destruir la evidencia, ni hizo resistencia, asi como dicha prueba tampoco demuestra que las circunstancias exigian, para protección de vidas, que el registro se practicara antes del arresto de la sospechosa y su complice ni la evidencia indica que el registro fuera incidental a un arresto, ya que el primero precedio al segundo. Pueblo v. Gonzalez Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972).

Es legal el arresto efectuado por un funcionario del orden público sin la correspondiente orden cuando tiene motivos fundados para creer que las personas arrestadas han cometido un delito grave en su presencia, siendo admisible en evidencia la prueba ocupadale a dichas personas al momento de su arresto. Pueblo v. Morales Soler, 94 D.P.R. 384 (1967).

No puede quejarse la defensa de que el juez de instancia no accediera, al llamarse el caso para vista, a su solicitud para entrevistarse con el acusado y examinar la prueba, cuando el record demuestra que el magistrado le dio tal oportunidad durante recesos decretados después de insaculado el jurado, y después de declarar el primer testigo de descargo, maxime cuando del record surge que con antelación al juicio, la defensa tuvo tiempo suficiente para entrevistarse con el acusado y sus testigos. Pueblo v. Roman Nieves, 92 D.P.R. 703 (1965).

2. Asistencia de abogado.

Un acusado no queda privado de su derecho a asistencia de abogado aunque el juez le ordene a representarse a si mismo y el abogado designado por el tribunal para representar a dicho acusado permanece en el juicio y le asiste en su defensa. U.S. v. Daniel, 962 F.2d 100 (1992).

Un acusado, para el 14 de agosto de 1962, no tenía derecho a exigir que se le permitiera asistencia legal desde el momento mismo de su arresto, más una convicción no podia prevalecer si la ausencia de abogado en una etapa anterior a su proceso creaba una situación tal que trasladada al juicio impedia un proceso

justo e imparcial. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

No queda privado un acusado de su derecho a asistencia de abogado al producirse una confesión oral extrajudicial-y por lo tanto, la misma, como en este caso, es admisible en evidencia-cuando: (a) la misma se hace voluntariamente en un cuartel de la Policía mientras se practicaba una investigación general para determinar si la muerte de un occiso había sido un accidente, o si se trataba de un asesinato-no estando enfilada dicha investigación contra el acusado ni contra ninguna otra persona como sospechosa de la comisión de un crimen; (b) dicho acusado luego repite su confesión oral el mismo día en otro pueblo ante un testigo; (c) en la noche de ese mismo día confiesa por escrito ante el fiscal; (d) el Estado no negó petición alguna del acusado para emplear abogado defensor, y (e) la falta de asistencia de abogado en la investigación privada anterior al juicio no le perjudicó de tal manera que dicha falta de asistencia de abogado imprimiera a su juicio posterior con la carencia de aquella fundamental imparcialidad esencial al concepto mismo de la justicia. *Pueblo v. Figueroa García*, 91 D.P.R. 729 (1965).

Todo acusado puede exigir que se le permita asistencia legal en las etapas previas a su proceso, y desde el momento mismo del arresto. *Soto Ramos v. Supert. Granja Penal*, 90 D.P.R. 731 (1964).

3. Ausencia de advertencias.

Es inadmisile en evidencia de acuerdo con la regla establecida en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965)-la confesión de un acusado o sospechoso, o las admisiones que le perjudiquen sustancialmente, obtenidas mientras se encuentra bajo custodia de la Policía u otra autoridad competente cuando se le interroga con el propósito de obtener manifestaciones incriminatorias, en ausencia de las advertencias sobre sus derechos Constitucionales de permanecer en silencio y a no incriminarse y de obtener asistencia de abogado. *Pueblo v. Laguna Rodríguez*, 92 D.P.R. 831 (1965).

Es inadmisile en un proceso **criminal** la confesión o las admisiones de un sospechoso detenido en la etapa acusatoria del **procedimiento** de investigación preliminar cuando dicho sospechoso no fue advertido, antes de extraersele la confesión o admisiones que sustancialmente lo incriminan, de sus derechos Constitucionales absolutos a permanecer en silencio y a no incriminarse, así como a tener asistencia de abogado. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

4. Vista preliminar.

El propósito de la vista preliminar es el de determinar si es necesario celebrar un juicio plenario contra el imputado, con las gravosas consecuencias que ello conlleva tanto para este como para el Estado. *Del Toro Lugo v. E.L.A.*, 136 D.P.R. 973 (1994).

La vista preliminar, en términos del *quantum* de la prueba, requiere un mínimo de evidencia para apoyar la determinación *prima facie* de que se cometió un delito que con toda probabilidad fue el imputado quien lo cometió. *Del Toro Lugo v. E.L.A.*, 136 D.P.R. 973 (1994).

La exoneración producto de una determinación de no causa en vista preliminar no es una de carácter final, ya que no se trata de una adjudicación en los méritos, y no impide que el Estado pueda continuar el proceso contra el imputado, dado que existen procedimientos subsiguientes que son parte integral de la acción penal seguida contra el imputado. *Del Toro Lugo v. E.L.A.*, 136 D.P.R. 973 (1994).

Cuando se determina inexistencia de causa en la vista preliminar y el Ministerio Público no solicita la celebración de una vista preliminar en alzada, transcurrido el término de 60 días, como norma general, esa determinación exonerando al imputado adviene final y firme. *Del Toro Lugo v. E.L.A.*, 136 D.P.R. 973

(1994).

Una sentencia final y firme de un tribunal respecto a una determinación de no causa en vista preliminar constituye cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia en el pleito de impugnación de confiscación. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973 (1994).

Regla 5. LA DENUNCIA.

La denuncia es un escrito firmado y jurado que imputa la comisión de un delito a una o a varias personas. Cualquier persona que tuviere conocimiento personal de los hechos que constituyen el delito imputado en la denuncia tendrá capacidad para ser el denunciante. Los fiscales y los miembros de la Policía Estatal en todos los casos y otros funcionarios y empleados públicos en los casos relacionados con el desempeño de sus deberes y funciones podrán, sin embargo, firmar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito les consten por información y creencia.

(Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 1, ef. 60 días después de Junio 19, 1987.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 22 a 24; Fed. R. Crim. P. 3; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1426; Código modelo, R. 4.

Enmiendas

-1987, ley 98. -La ley de 1987 suprimio la oración final que limitaba las denuncias hechas por funcionarios y empleados públicos en cuanto a sus efectos.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Contrarreferencias.

Acusación y denuncia; definiciones; contenido, veanse las Reglas 34 y 35 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

No constituye fundamento para declarar con lugar una moción para desestimar una denuncia bajo esta regla y la Regla 65 de **Procedimiento Criminal**, un error de forma en la misma cuando la denuncia contenía suficiente exposición de hechos, fechas y personas para dejar claramente establecido su propósito en ley, y la firma del denunciante y su carácter como tal constan en el documento, con mayor razón cuando dicho documento radicado ante el juez de paz está acompañado de una declaración jurada del denunciante relatando los hechos delictivos. Pueblo v. Nevarez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973).

Atacada la presunción legal de que la ley ha sido acatada, al probar el acusado la existencia de errores fundamentales en un formulario de denuncia el hecho en que ella se materializa queda controvertido y pierde dicha presunción de carácter de presunta verdad. Martínez Cortes v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970).

El Pueblo no está impedido de iniciar un nuevo proceso **criminal** contra un acusado por el hecho de que, al momento de iniciarlo, aun no haya sido remitido ni recibido ni ejecutado un mandato emitido por el Tribunal Supremo en relación con acusaciones presentadas por los mismos hechos cuyo sobreseimiento

se ordeno. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969).

Aun cuando la mejor practica es que el fiscal determine con razonable certeza la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos e incluirla en la denuncia y luego en la acusación, una acusación es suficiente aunque en ella no se especifique la fecha o el momento en que se alega que se cometio el delito, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito. Pueblo v. López Alamo, 94 D.P.R. 8 (1967).

Aun cuando exista una discrepancia entre la acusación y la prueba en cuanto a la fecha en que se realizo un hurto, ello no da base para la revocación de la sentencia dictada cuando la prueba establece que se trata de un solo incidente, el cual dio lugar a la comisión del delito, maxime cuando el record no demuestra que el acusado fuese perjudicado por tal error. Pueblo v. López Alamo, 94 D.P.R. 8 (1967).

Es suficiente una denuncia contra un acusado por conducir en estado de embriaguez un vehículo de motor aun cuando la misma no mencione el nombre de la calle en que se cometio el delito. Pueblo v. Vazquez Bruno, 93 D.P.R. 540 (1966).

No hay conflictos irreconciliables entre el sistema de denuncia-citación simultaneas en los casos en que se aplica y el **procedimiento** de las Reglas 5, 6 y 7 de **Procedimiento Criminal**, no estando un arresto por medio; pero si existiera tal conflicto, se deberia resolver que el **procedimiento** del sistema es uno integrado estatuido por el legislador con miras a una politica pública especifica en busca de fines deseables en la materia de transito en general. Pueblo v. Ramos, 92 D.P.R. 607 (1965).

A menos que en las Reglas de **Procedimiento Criminal** hubiera alguna disposición expresa con la subsiguiente aceptación directa o implicita de la Legislatura sustituyendo el sistema de denuncia-citación simultaneas, no puede decirse que este ha quedado sin efecto. Subsiste como un **procedimiento** especial con fines especificos. Pueblo v. Ramos, 92 D.P.R. 607 (1965).

Las Reglas de **Procedimiento Criminal** no han derogado el sistema de denuncia-citación simultaneas establecido para las infracciones del transito en la sec. 1491 [ahora 5502] del Titulo 9, y los juicios en los meritos por estas infracciones pueden verse con el formulario o boleto como base, excepto en los casos en que el propio sistema dispone que se radicara denuncia ordinaria. Pueblo v. Ramos, 92 D.P.R. 607 (1965).

Regla 6. ORDEN DE ARRESTO A BASE DE UNA DENUNCIA.

(a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable.

El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieran conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta

concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para determinar causa probable.

En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor.

Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del proceso **criminal**.

(b) Forma y requisitos de la orden de arresto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el título oficial del magistrado que la expidiere, dirigida para su ejecución y diligenciamiento a uno, varios o a cualquier funcionario del orden público. Ordenará el arresto de la persona o personas a quienes se les imputare el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilación innecesaria ante un magistrado, según se dispone en la Regla 22(a). La orden deberá además, describir el delito imputado y deberá especificar el nombre de la persona o personas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, designará a dichas personas mediante la descripción más adecuada posible que las identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha y el sitio de su expedición y el monto de la fianza fijada por el magistrado que la expidió.

(c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un delito inferior o distinto a aquél que el fiscal entendiere procedente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados. (Febrero 8, 1966; Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268, art. 1; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 2; Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 25, 44(a), 63 y 100; Fed. R. Crim. P. 4; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 813, 816 y 817; Código modelo, Rs. 2 a 4 y 24.

Enmiendas

-1990, ley 26. Inciso (a): La ley de 1990 suprimió la última oración del segundo párrafo que ordenaba al magistrado autorizar la correspondiente denuncia ante el tribunal competente.

-1987, ley 29. Inciso (a): La ley de 1987 enmendó el único párrafo original en términos generales y añadió los párrafos segundo a cuarto.

Inciso (b): La ley de 1987 suprimió "en la denuncia" después de "delito imputado", y "cuando esta se requiera" delante de "el monto de la fianza".

Inciso (c): La ley de 1987 añadió, en la primera oración, "jurado o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma" y "bajo juramento", y en la segunda oración sustituyó "al imputado, el fiscal" con "a aquel que el fiscal entendiére procedente, este ...".

-1986, ley 80. Inciso (c): La ley de 1986 añadió este inciso.

-1966. Inciso (b): La resolución del Tribunal Supremo de Febrero 8, 1966, añadió en la última oración de este inciso la frase "cuando esta se requiera".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268.

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503.

Contrarreferencias.

Denuncia, Véase la Regla 5 de este apéndice.

Enmiendas a la acusación, denuncia o escrito de especificaciones, Véase la Regla 38 de este apéndice.

Procedimiento ante el magistrado, Véase la Regla 22 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.
3. Causa probable.

1. En general.

Es contrario a derecho toda vez que recae en la discreción del magistrado permitir que la vista se celebre en ausencia del imputado. Para ello, el magistrado debe pasar juicio sobre la suficiencia de las justificaciones provistas por el Ministerio Público para no haber citado a los imputados a la determinación de causa para arresto. 2008 DTS 064 Pueblo v. Rivera Martell, 2008 TSPR 064

El juez que presida la vista de determinación de causa para arresto no tiene discreción para posponer la celebración de la vista inicial de revocación de libertad a prueba, aun cuando el probando no esté presente. Asimismo, las referidas leyes disponen que si el juez determina causa probable para el arresto del probando, se revocará preliminarmente la probatoria en ese momento. Artículos 2A y 4(2) de la Ley de Sentencias Suspendidas y del Artículo 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas. 2008 DTS 035 Pueblo v. Acevedo Ramos 2008 TSPR 035

No procede la entrega, antes de la celebración de la vista de determinación de causa para arresto en alzada bajo la Regla 6(c) de **Procedimiento Criminal**, evidencia alegadamente exculpativa. 2007 DTS 028 Pueblo v. Rosselló González, 2007TSPR028 Resolución revocando al Tribunal de Apelaciones.

El derecho que la Regla 6 de las de **Procedimiento Criminal**, *supra*, le consagra al imputado a estar presente, asistido de abogado, contrainterrogar a los testigos en su contra y ofrecer prueba a su favor durante la celebración de la vista de causa probable no es absoluto. Pueblo v. Rodríguez López, 2001 TSPR 172 (2001)

El delito continuo se ha definido como "una pluralidad de actos que aisladamente pudieran concebirse como delitos independientes, pero que en conjunto se conciben como un delito único". Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999).

La etapa de vista preliminar bajo esta regla o la Regla 23, y sus respectivas vistas en alzada, son momentos procesales adecuados para hacer determinaciones de intencionalidad, ya que equivale a hacer de estas vistas mini-juicios. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999).

Tanto la vista que tiene lugar al amparo de esta regla como aquella que se celebra bajo la Regla 23 de este Apéndice exhiben características comunes, ambas reglamentando los procedimientos preliminares al juicio, y tienen por finalidad una determinación de causa probable. Pueblo v. Jimenez Cruz, 145 D.P.R. 803 (1998).

Tal como esta redactada esta regla, da la impresión de que el imputado puede reclamar el derecho absoluto a estar presente en esa vista a contrainterrogar los testigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor, en cuyo caso la vista se convertiría en un **procedimiento** adversativo similar al juicio. Dicha interpretación es inconsistente con la disposición de esta regla, la cual autoriza la celebración de una vista en ausencia del imputado. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803 (1998).

No abusa de su discreción un magistrado al denegar la petición del recurrido para presentar evidencia en la vista celebrada en alzada al amparo del inciso (c) de esta regla. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803 (1998).

La determinación de causa probable para el arresto por la comisión de un delito grave bajo esta regla no es revisable mediante la moción reglamentada por la Regla 64(p) de **Procedimiento Criminal**. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803 (1998).

El ciudadano queda sujeto a responder (*held to answer*) por la comisión de un delito en el momento en que un juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a dicho ciudadano por la comisión del delito imputado y, desde ese instante, cobra vigencia el derecho a juicio rápido. Pueblo v. Miro González, 133 D.P.R. 813 (1993).

La doctrina que se ha desarrollado respecto al derecho a juicio rápido en torno a la vista preliminar en alzada estatuida en la Regla 24(c) de este apéndice no se aplica a la vista en alzada que contempla el inciso (c) de esta regla. Pueblo v. Miro González, 133 D.P.R. 813 (1993).

El Estado debe seguir rigurosamente el trámite de revisión dispuesto en el inciso (c) de esta regla: someter el asunto a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia significa al juez del foro que inmediatamente sigue en jerarquía a aquel donde se origino inicialmente la determinación y que esa oportunidad existe una sola vez. Pueblo v. Cabrera González, 130 D.P.R. 998 (1992).

Los jueces municipales están incluidos en los magistrados autorizados para expedir ordenes de arresto o citación, y de registro y allanamiento, previa la determinación de causa probable. Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807 (1986).

La determinación por un juez municipal de que no existe causa probable para efectuar un arresto no es final. El Estado puede someter el asunto de nuevo a un magistrado de categoría superior. Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807 (1986).

En el trámite del Estado para obtener una determinación de causa probable para el arresto o citación es impermisible la practica de probar fortuna entre jueces de igual rango hasta obtener una determinación favorable. Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807 (1986).

Los agentes del orden público no tienen por si solos la facultad de impugnar ante un juez de distrito la determinación de un juez municipal de que no existe causa probable para un arresto o citación. Los

agentes deberán obtener, por lo menos, la autorización del fiscal, la cual debe constar por escrito. Pueblo v. Pérez Suarez, 116 D.P.R. 807 (1986).

La determinación de un magistrado de ordenar la reinvestigación del asunto equivale a una determinación de no causa probable. Pueblo v. Pérez Suarez, 116 D.P.R. 807 (1986).

No resta eficacia jurídica a la determinación de causa probable hecha por un magistrado conforme a la ley-por lo que la sentencia dictada no es nula e ineficaz-el hecho de que el fiscal examinara a los testigos de cargo que luego declararon ante dicho magistrado. Pueblo v. Forti Velázquez, 105 D.P.R. 4 (1976).

Es el propósito principal de esta regla y la Regla 23-cada una de las cuales provee una vista preliminar, esta regla una vista de tipo no adversativo-el determinar la existencia de causa probable para creer que se ha cometido un delito. Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974).

En la determinación de causa probable para arrestar, un juez instructor puede descansar -además de la prueba que se presente-en una denuncia que informe racionalmente al acusado el delito imputado, no teniendo dicha denuncia que incorporar con extenuante perfección académica absolutamente todos los elementos integrantes y definidores del delito por el cual se procesa. Dicha denuncia imperfecta interrumpe la prescripción del delito. Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 39 (1974).

A un menor no le es aplicable el **procedimiento** señalado para la determinación por un magistrado de causa probable para su arresto. Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 80 (1971).

En la determinación de causa probable por un juez del Tribunal Superior-luego de un Juez de Distrito determinar que no existe causa probable o que existe causa por un delito inferior al imputado-no es necesario que el fiscal presente al Juez Superior la misma prueba que ofreció en la vista preliminar ante el Juez de Distrito, pudiendo dicho funcionario, a su elección, someter el caso con la misma prueba, con parte de ella o con otra prueba enteramente separada y distinta o adicional a toda o parte de la prueba que ofreció en la vista preliminar original. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).

Actúan en su capacidad individual los magistrados del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones y facultades para determinar la existencia de causa probable para acusar a un sospechoso. Sus determinaciones en estos casos no son decisiones de un tribunal. Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412 (1967), revocada, Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

Un apelante renuncia a plantear en apelación la cuestión de que la determinación de causa probable para su arresto se hizo sin seguir los requisitos de ley al no levantar dicha cuestión en el tribunal de instancia. Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720 (1963).

2. Constitucionalidad.

Obedecen los requisitos establecidos por el inciso (b) de esta regla para la expedición de una orden de arresto, al mandato contenido en el art. II, sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico y de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).

3. Causa probable.

Los elementos del delito, el decir embustera y vieja ridícula no son de tal grado hirientes e irritantes para constituir el delito de alteración a la paz, art. 260 del Código Penal. 2002 DTS 062 (2002) Pueblo V. Irizarry Irizarry 2002 T.S.P.R. 062 (2002)

La práctica de determinar causa probable, de una manera automática y siguiendo “ciegamente” la “determinación inicial”, sobre responsabilidad en casos de delitos menos graves, que lleva a cabo el

agente del orden público que realiza la investigación del caso, es una que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. (Énfasis Suplido) 2002 DTS 062 (2002) Pueblo V. Irizarry Irizarry 2002 T.S.P.R. 062 (2002)

El magistrado instructor viene en la obligación de escuchar los testimonios de todas las personas que, voluntaria y libremente, deseen ante él declarar, incluyendo las partes en controversia, y que tengan conocimiento de algún hecho que pueda arrojar luz sobre el incidente ante su consideración; incluso, si factible, procediendo a ordenar la citación de personas, no presentes, que puedan tener conocimiento personal de los hechos. 2002 DTS 062 (2002) Pueblo V. Irizarry Irizarry 2002 T.S.P.R. 062 (2002)

Una vez el juez instructor se convence de la existencia de causa probable, puede delimitar o regular el alcance y duración de la prueba de defensa, siempre y cuando no impida el ejercicio total de tal derecho. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121 (1996).

Una válida determinación de causa probable para acusar en vista preliminar subsana todo género de error en la determinación de causa probable para el arresto. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121 (1996).

Aunque se haya determinado causa probable para arresto (primera fase) en el Tribunal de Distrito, el fiscal puede presentar una denuncia nuevamente ante otro juez de igual jerarquía para que se celebre allí la vista preliminar (segunda fase). Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121 (1996).

Una determinación válida de causa probable para acusar bajo la Regla 23 de este apéndice tiene el efecto de enmendar cualquier bifurcación en el **procedimiento** llevado a cabo al amparo de esta regla. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121 (1996).

Una confidencia es suficiente para validar la existencia de causa probable si se establece la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: (1) que el confidente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el **criminal** en términos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes, y (4) que la corroboración se relacione con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).

Para que la información provista por un confidente anónimo sirva parcialmente de base para determinar válidamente la existencia de causa probable, la confidencia debe haber sido corroborada por el agente mediante observación personal o por información de otras fuentes. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).

Regla 6.1. FIANZA HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA; CUANDO SE EXIGIRA.

Las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo condenatorio.

(a) En casos menos graves. En todo caso menos grave en que no hubiere derecho a juicio por jurado, ni sean delitos de carácter violento, no será necesaria la prestación de fianza, imposición de condiciones o una determinación de fianza diferida para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. Se considerarán de carácter violento cualesquiera delitos cuya comisión envuelva el uso, intento de uso o amenaza de uso de fuerza física con la persona o contra la propiedad. En el caso de los delitos menos graves exceptuados, el magistrado deberá imponer fianza sólo si el fiscal así lo solicita, tomando en consideración los criterios que establece la Regla 218(b). En todo caso en que motu proprio, o a solicitud del ministerio fiscal, el magistrado determine que existen circunstancias de orden o interés público podrá imponer

condiciones de conformidad con la Regla 218(c).

El fiscal solicitará la prestación de una fianza o la imposición de condiciones de conformidad con la Regla 218 en todo caso en que la persona arrestada haya sido convicta anteriormente por cualquier delito grave, o en tres (3) delitos menos graves, o cuando se trate de un no domiciliado en Puerto Rico.

(b) En casos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por jurado. En todo caso grave o menos grave en que hubiere derecho a juicio por jurado el magistrado exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. En casos apropiados el magistrado podrá permitirle al imputado permanecer en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo custodia de tercero, bajo fianza diferida o bajo cualesquiera condiciones que estime pertinentes imponer. El tribunal podrá imponer, motu proprio o a solicitud del Ministerio Fiscal, condiciones de conformidad con la Regla 218(c). Sin embargo, en los casos de personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales: Asesinato, Homicidio negligente- cuando se impute una muerte ocasionada al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas; Robo agravado; Incendio agravado; Utilización de un menor para pornografía infantil; Envenenamiento intencional de aguas de uso público; Agresión sexual cuando: (a) la víctima padezca una enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, o incapacidad para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización; (b) la víctima haya sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e inmediato daño corporal; (c) se le haya anulado o disminuido sustancialmente su conocimiento o sin su conocimiento, su capacidad de consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes, sustancias o medios similares; (d) se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física o psicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas; (e) si el imputado es ascendiente o descendiente de la víctima por consanguinidad hasta el tercer grado; Secuestro, Secuestro agravado y Secuestro de menores; Maltrato intencional de menores, según dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Núm. 177, *supra*; Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa **Criminal** Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los Artículos 5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar, el 5.10 sobre Remoción o Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; violaciones a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma, según ésta se define en la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, además de fijar la fianza correspondiente, el tribunal podrá, al fijar la fianza, imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218 de estas reglas, conforme al **procedimiento** establecido en dicha Regla.

En ese caso, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio deberá recomendar la alternativa de supervisión electrónica antes de ser impuesta por el tribunal.

En todos los casos en que se impute la comisión de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado, sólo podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218.

(c) En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el magistrado o el tribunal podrá exigir la prestación de una fianza, revocar o modificar una determinación de libertad bajo propio reconocimiento o bajo custodia de tercero, revocar o modificar una concesión de libertad bajo fianza diferida, o imponer condiciones, así como revocar o modificar condiciones previamente impuestas, de conformidad con la Regla 218(c) antes del fallo condenatorio a cualquier persona que se encontrare en libertad haya o no prestado fianza.

(d) Si la persona a quien se ha dejado en libertad sin la prestación de fianza no compareciere, y se le detuviere fuera de Puerto Rico, se considerará que ha renunciado a impugnar su extradición.

(e) No se admitirá fianza ni se hará una determinación de libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero ni de fianza diferida con relación a imputados que se encuentran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Tampoco se impondrán condiciones ni se admitirá fianza ni se hará determinación de libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero ni de fianza diferida con relación a un imputado que no haya sido arrestado o comparecido ante un magistrado para ser informado del delito o los delitos por los cuales ha sido denunciado o acusado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Regla 22.

(f) En todo caso, el magistrado requerirá la evaluación, informe y recomendaciones de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio sobre todo imputado antes de hacer una determinación sobre fianza o hacer una determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento o libertad bajo custodia de tercero.

(Reglas de [Procedimiento Criminal](#), 1963; Adicionada en Febrero 8, 1966; Junio 22, 1966, Núm. 100, p. 338, art. 1; Marzo 30, 1984, Núm. 5, p. 17, sec. 1; Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 1; Julio 20, 1989, Núm. 30, p. 114, art. 1; Diciembre 6, 1993, Núm. 105, art. 1; Agosto 13, 1994, Núm. 82, art. 1; Diciembre 1, 1995, Núm. 230, art. 1; Diciembre 24, 1995, Núm. 245, art. 1, ef. 60 días después de Diciembre 24, 1995; Marzo 13, 2003, Núm. 85, art. 1, deroga la Ley Núm. 82 de 13 de agosto de 1994; Junio 3, 2004, ley 133, art. 5, enmendados los incisos (b) y (f); Junio 3, 2004, Núm. 134, art. 1, incisos (b) y (f); Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 1, efectiva el 1 de mayo de 2005; Diciembre 22, 2009, Núm. 190, , art. 1, enmienda el inciso (b).)

HISTORIAL

Enmiendas

2009, ley 190- Esta ley 190 enmienda el inciso (b)

2004, ley 317- Inciso (a): La Ley de Septiembre 15, 2004, Núm. 317, enmendó la primera oración del primer párrafo de este inciso en terminos generales.

2004, ley 134- Inciso (b): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134, en la primera oración, sustituyo "acusado" con "imputado" antes de "para permanecer"; sustituyo el Disponiendose con una segunda oración enmendada en terminos generales; y adiciono las cuarta y quinta oraciones.

Inciso (f): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134, enmendó este inciso en terminos generales.

2004, ley 133- Inciso (b): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133, suprimio el rubro en negrillas; inserto "una" antes de "fianza" en la primera oración; en el Disponiendose sustituyo "en caso de todo imputado de delito que se haya sometido voluntariamente. . . . permitirle a este" con "una vez el magistrado examine. . . . al imputado" antes de "permanecer", e introdujo cambios menores de redacción en el resto de la misma oración del Disponiendose.

Inciso (f): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133, enmendó este inciso en terminos generales.

-2003, ley 85- La ley de 2003 derogó la Ley de Agosto 13, 1994, Núm. 82, que enmendó esta sección.

-1995, ley 245- Inciso (b): La Ley de Diciembre 24, 1995, añadió el "Disponiendose".

Inciso (c): La Ley de Diciembre 24, 1995, añadió las frases "revocar o modificar . . . fianza diferida" y "asi como revocar o modificar condiciones previamente impuestas".

Inciso (e): La Ley de Diciembre 24, 1995, añadió la referencia a libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero y de fianza diferida.

Inciso (f): La Ley de Diciembre 24, 1995, añadió este inciso.

Inciso (a): La Ley de Diciembre 1, 1995, sustituyo "un domiciliado en Puerto Rico" con "un no domiciliado en Puerto Rico".

-1994. Inciso (b): La ley de 1994 añadió la última frase, "excepto cuando se trate ... para la comunidad", al fin de la primera oración.

-1993. Inciso (a): La ley de 1993 enmendó este inciso en terminos generales.

-1989. Inciso (a): La ley de 1989 enmendó este inciso en terminos generales.

-1986. La ley de 1986 enmendó esta regla en terminos generales.

-1984. Inciso (e): La ley de 1984 añadió este inciso.

-1966. Inciso (b): La ley de 1966 suprimio la facultad que se le conferia al magistrado para dispensar la prestación de fianza en casos graves.

Vigencia.

El art. 20 de la Ley de Septiembre 15, 2004, Núm. 317, dispone:

"Esta Ley [que enmendó esta sección] comenzara a regir cuando entre en vigor el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [Mayo 1, 2005].

El art. 3 de la Ley de Agosto 13, 1994, Núm. 82, que fue derogado por el art. 1 de la Ley de Mayo 13, 2003, Núm. 85, disponia: "Esta ley entrara en vigor una vez se apruebe la enmienda propuesta a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme se dispone en la Resolución Concurrente de la Camara Num. 32 de 16 de mayo de 1994."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 30, 1984, Núm. 5, p. 17.

Diciembre 6, 1993, Núm. 105.

Agosto 13, 1994, Núm. 82.

Diciembre 1, 1995, Núm. 230.

Diciembre 24, 1995, Núm. 245.

Mayo 13, 2003, Núm. 85.

Junio 3, 2004, Núm. 133.

Junio 3, 2004, Núm. 134.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Asignaciones.

El art. 7 de la Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133, dispone:

"Se asigna del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año Fiscal 2004-2005, la suma de \$500,000.00 dolares para llevar a cabo la implantación inicial de lo dispuesto por

esta Ley [que enmendó esta sección]."

Contrarreferencias.

Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, veanse las secs. 1301 et seq. del Título 4.

Regla 7. CITACIÓN POR UN MAGISTRADO O FUNCIONARIO DEL ORDEN PÚBLICO.

(a) Citación. Se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado ante quien se presentare la denuncia o que haya examinado a algún testigo que tenga conocimiento personal de los hechos, tuviere motivos fundados para creer que la persona va a comparecer al ser citada, o si la persona fuere una corporación. Se podrá expedir más de una citación basada en un solo delito imputado. En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un magistrado, en vez de arrestarla. La citación informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra.

Cualquier magistrado podrá expedir una citación contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedirse la correspondiente citación y de cumplirse con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que el caso se transfiera a la sala correspondiente para la continuación del proceso **criminal**.

(b) **Procedimiento** si la persona no compareciere después de citada. Si la persona que ha sido debidamente citada no compareciere, o si hay causa razonable para creer que no comparecerá, se expedirá una orden de arresto contra ella. Si la persona fuere una corporación y no compareciere después de haber sido debidamente citada, se hará constar ese hecho en el expediente y se continuará el **procedimiento** como si la corporación hubiese comparecido.

(c) Forma y requisitos de la citación. Excepto lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla, la citación se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y será firmada por un magistrado. Requerirá que la persona mencionada en ella comparezca ante el magistrado ante quien se hubiere presentado la denuncia, con expresión del día, la hora y el sitio, e informará a la persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra. Si la persona fuere una corporación se le advertirá que de no comparecer los procedimientos continuarán de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (b) de esta regla.

(Enmendada en Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 3, ef. 60 días después de Junio 19, 1987.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 24, 39 a 42, 47 y 453 a 460; Fed. R. Crim. P. 4; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 813; Código modelo, Rs. 12 a 17.

Enmiendas

-1987. Inciso (a): La ley de 1987, en el unico párrafo original, añadió "o que haya examinado ... de los hechos" y sustituyo "una sola denuncia" con "un solo delito imputado", y añadió el segundo párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Contrarreferencias.

Citación por un magistrado o funcionario del orden público, Véase la Regla 6 de este apéndice.

Enmiendas a la acusación, denuncia o escrito de especificaciones, Véase la Regla 38 de este apéndice.

Procedimiento ante el magistrado, Véase la Regla 22 de este apéndice.

Testigos; arresto y fianza para garantizar comparecencia, Véase la Regla 238 de este apéndice.

ANOTACIONES**1. En general.**

Un policía que se presenta en el lugar de un accidente después de ocurrido a investigar un delito menos grave -por lo que no puede arrestar al sospechoso sin orden de arresto por no haber ocurrido el delito menos grave en su presencia y no tener una orden de arresto- no puede validamente expedir la citación en lugar de una orden de arresto a que hace referencia esta regla. *Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez*, 105 D.P.R. 173 (1976).

Una invitación a pasar por el cuartel de policía, escrita en una hoja rasgada de una libretita de bolsillo por un policía estatal y entregada a un sospechoso, no constituye la citación a que hace referencia esta regla que pone en marcha el término de 60 días para presentar la correspondiente acusación. *Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez*, 105 D.P.R. 173 (1976).

Es legal la expedición por un policía de la citación autorizada por esta regla requiriendo-en vez de arrestarlo-al conductor de un vehículo de motor, quien voluntariamente se somete a análisis químico de su sangre o aliento por sospecha fundada de conducir en estado de embriaguez, para que comparezca ante un magistrado. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 363 (1975).

Regla 8. ORDEN DE ARRESTO O CITACION; DILIGENCIAMIENTO.

(a) Personas autorizadas. La orden de arresto o citación será diligenciada por el alguacil de cualquier sección o sala del Tribunal General de Justicia o por cualquier agente del orden público o cualquier otro funcionario autorizado por la ley. [Vigente hasta el 30 de abril de 2004]

(a) Personas autorizadas. La orden de arresto o citación será diligenciada por el alguacil de cualquier sección o sala del Tribunal General de Justicia o por cualquier agente del orden público o cualquier otro funcionario autorizado por la ley. [Efectiva el 1 de mayo de 2004]

(b) Límites territoriales. La orden o citación podrá ser diligenciada en cualquier sitio bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [Vigente hasta el 30 de abril de 2004]

(b) Límites territoriales. La orden o citación podrá ser diligenciada en cualquier sitio bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América, así lo permitan." [Efectiva el 1 de mayo de 2005]

(c) Manera de hacerlo. La orden de arresto será diligenciada arrestando a la persona o personas. El funcionario que diligencie la orden no estará obligado a tenerla en su poder al hacer el arresto. Si la tuviere deberá mostrarla al detenido al momento de dicho arresto; si no la tuviere, deberá en dicho momento informar al detenido el delito del cual se le acusa y el hecho de que se ha

expedido una orden para su arresto. A requerimiento del detenido deberá mostrarle dicha orden tan pronto como fuere posible.

La citación se diligenciará entregando copia a la persona o dejando dicha copia en su hogar o en el sitio usual donde residiere, o enviándosela por correo a su última residencia con acuse de recibo. Si la persona fuere una corporación se diligenciará entregándole copia personalmente a uno de sus directores o funcionarios o a su agente residente, o enviándosela por correo con acuse de recibo.

(d) Constancia. El funcionario que diligenciar la orden de arresto deberá dar constancia del diligenciamiento de la misma ante el magistrado ante quien se condujere la persona arrestada, según se dispone en la Regla 22.

El funcionario que diligenciar la citación dará constancia de haberlo hecho y de la manera como lo hizo mediante certificación al efecto. En los casos en que la citación se enviare por correo deberá además, acompañarse el acuse de recibo.

(Enmendada en Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 2, efectiva el 1 de mayo de 2005)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 121, 122 y 138; Fed. R. Crim. P. 4; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 841, 842 y 983.

Enmiendas

-2004, ley 317. Inciso (b): La ley de 2004 añadió "cuando los tratados...asi lo permitan" después de "Puerto Rico".

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Regla 9. ORDEN DE ARRESTO O CITACIÓN DEFECTUOSA.

(a) Efectos; enmiendas. No se pondrá en libertad a ninguna persona que fuere arrestada mediante una orden de arresto o que hubiere comparecido ante un magistrado por el mandato de una citación, por defectos de forma de la orden de arresto o citación. El magistrado podrá enmendar dichos defectos.

(b) Nueva denuncia o nueva orden de arresto o citación. Si al llevarse ante el magistrado a la persona arrestada o citada se demostrare que la denuncia o la orden de arresto o citación no nombran o describen con certeza a la persona o al delito que se le imputa, pero hay fundamentos razonables para creer que la persona ha cometido el delito u otro delito, el magistrado no libertará ni exonerará a la persona, sino que hará que se presente una nueva denuncia o expedirá una nueva orden de arresto o citación, según proceda.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 76 y 83; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 953 y 960; Código modelo, R. 5.

ANOTACIONES

1. En general.

Es nula, como regla general, una orden para el arresto de "John Doe", a secas. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).

Es inadecuada por imprecisa, una orden de arresto expedida contra "John Doe c/p Papo" cuando el agente encubierto a cuya instancia se expide la orden conocía la descripción del sospechoso y la misma no se incluyó en dicha orden. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).

Aun cuando una orden de arresto sea insuficiente por imprecisa-falta del nombre así como la descripción del sospechoso-ello no conlleva la revocación de la sentencia dictada bajo la alegación de que todo el andamiaje procesal del caso carece de sosten, cuando en el certificado de diligenciamiento de dicha orden se incluye el nombre exacto del sospechoso, en la acusación radicada aparece el nombre correcto del arrestado y este no formula oportunamente objeciones contra la orden de arresto o la acusación, maxime cuando no se demuestra que en la situación descrita se haya incurrido en error perjudicial al acusado. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).

Regla 10. ARRESTO; CUANDO PODRA HACERSE.

La orden de arresto podrá diligenciarse en cualquier hora del día o de la noche salvo en el caso de delito menos grave o en delitos graves de cuarto grado en cuyo caso el arresto no podrá hacerse por la noche, a menos que el magistrado que expidió la orden lo autorizare así en ella. (Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 4, ef. 60 días después de Junio 19, 1987; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 3, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

Historial

Procedencia

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 120; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 840; Código modelo, R. 22 y 23.

Exposición de Motivos

La Ley de Junio 19, 1987, Núm. 29, tiene una exposición de motivos. Véase Leyes de Puerto Rico de 1987, p. 98.

Contraferencia.

Delitos graves y menos graves, véase la sec. 3044 del Título 33.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 suprimio ("*misdeemeanor*") después de "menos grave" y añadió "o en delitos graves de cuarto grado" antes de "en cuyo".

-1987, ley 29. La ley de 1987 enmendó esta regla en terminos generales.

Regla 11. ARRESTO POR UN FUNCIONARIO DEL ORDEN PÚBLICO.

Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente:

(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o

dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario, el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto.

(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (felony), aunque no en su presencia.

(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad.

Para efectos de estas Reglas, se considera funcionario o funcionaria del orden público a aquella persona que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto incluye, pero sin limitarse a, todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial.

Se considera también funcionario o funcionaria del orden público de carácter limitado a todo empleado o empleada público estatal o federal, con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades especiales.

(Reglas de **Procedimiento Criminal**, 1963; Abril 16, 2010, Núm. 43, art. 1, añade los últimos dos párrafos.)

Notas Importantes

ENMIENDA

-2010, ley 43 – Esta ley 43 añadió los últimos dos párrafos de esta Regla.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 116; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 836; Código modelo, R. 21.

Vigencia.

La sec. 3 de la Ley de Abril 23, 2004, Núm. 98, dispone:

"Esta Ley [que enmendó la nota de disposiciones especiales bajo esta sección] comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación. Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad."

Disposiciones especiales.

La Ley de Enero 20, 1995, Núm. 20, según enmendada por las Leyes de Agosto 9, 1995, Núm. 137 y Abril 23, 2004, Núm. 98, y otra vez enmendada por los arts. 1 y 2 de la Ley de Septiembre 27, 2006, Núm. 206, dispone:

"Artículo. 1.- Los oficiales federales del orden público del 'Department of Homeland Security', 'Federal Bureau of Investigation' (FBI), 'US Marshalls Service', 'Drug Enforcement Administration' (DEA), 'US Coast Guard', 'US Citizenship and Immigration Service', 'Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms', 'U.S. Secret Service', 'U.S. Customs and Border Protection', del 'USDA Forest Service', la Oficina de Investigaciones Criminales de 'Food and Drug Administration' (FDA), 'US Postal Inspectors' y los policías de la Administración de Veteranos, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de la Defensa y el Servicio Postal con autoridad para practicar arrestos en el ejercicio de sus funciones

como tales, cuando estan en el desempeño de sus responsabilidades y actuan conforme a las limitaciones impuestas por la ley habilitadora de su agencia se consideraran funcionarios del orden público en Puerto Rico y ejerceran poderes de arresto de la misma manera y sujetos a las mismas disposiciones sustantivas y procesales que los agentes del orden público de Puerto Rico a tenor con la Regla 11 de las de **Procedimiento Criminal**.

"Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, el término 'oficiales del orden público' significara cualesquiera agentes especiales, funcionarios y oficiales del 'Department of Homeland Security', 'Federal Bureau of Investigation' (FBI), 'US Marshalls Service', 'Drug Enforcement Administration' (DEA), 'US Coast Guard', 'US Citizenship and Immigration Service', 'Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms', 'US Secret Service', 'US Customs and Borden Protection', del 'USDA Forest Service', la Oficina de Investigaciones Criminales de 'Food and Drug Administration' (FDA), 'US Postal Inspectors' y los policias de la Administración de Veteranos, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de la Defensa y el Servicio Postal con funciones de mantener el orden público y con permiso o autorización para realizar arrestos en el ejercicio de sus funciones ordinarias."

"Artículo 3.- Dicho oficiales federales del orden público podran actuar al amparo de las disposiciones de esta Ley, una vez hayan recibido orientación sobre los preceptos Constitucionales y legales aplicables segun el ordenamiento juridico de Puerto Rico.

"Artículo 4.- Dicho oficiales federales del orden público que, en el ejercicio de las funciones conferidas por esta Ley, fueren demandados en su capacidad o caracter personal por danos y perjuicios, cuando la causa de acción fuere por alegada violación a los derechos civiles, estaran cubiertos por las disposiciones de la Ley Num. 104 de 29 de junio de 1955, segun enmendada [secs. 3077 et seq. del Titulo 32], siempre y cuando el Gobierno Federal no les provea tal protección. El Gobierno de Puerto Rico podra pagar las sentencias que pudieren recaer como resultado de las acciones civiles incoadas como resultado de los actos culposos o negligentes de dichos oficiales aun cuando el Gobierno Federal les proveyere a estos de representación legal en el curso de los mismos.

"Artículo 5.- Nada de los dispuesto en esta Ley se considerara una renuncia del Gobierno de Puerto Rico a la inmunidad que le confieren las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos de America.

"Artículo 6.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

ANOTACIONES

1. En general.
2. Registro sin orden judicial.
3. Registro incidental al arresto.
4. Prueba a plena vista.
5. Funcionario del orden público.

1. En general.

La prueba demostró que efectivamente se cometió un delito grave en la presencia de un guardia municipal, razón por la cual este estaba plenamente facultado para proceder con el arresto del recurrido, y la sustancia controlada-cocaína-fue admisible en evidencia. Pueblo v. Cruz Calderon, 156 D.P.R. 61 (2002).

Respecto a arrestos efectuados por agentes del orden público como consecuencia de haber estos recibidos una "confidencia" sobre supuesta actividad delictiva, el tribunal ha adoptado la norma jurisprudencial federal utilizada para evaluar las circunstancias en que una confidencia puede servir de base para la existencia de causa probable. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999).

Para que un arresto por agentes del orden público bajo una confidencia sea valido, basta la concurrencia de uno de los siguientes criterios: (1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el **criminal** en terminos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes, y (4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999).

Una confidencia sobre posible actividad delictiva, por si sola, no es suficiente para privar de su libertad a una persona, teniendo que haber corroboración de actividad sospechosa o delictiva, es decir, la confidencia recibida no se corrobora con cualquier información que tienda a establecer que alguna parte del contenido de la misma es veraz. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999).

No existe causa probable para un arresto sin orden efectuado por agentes del orden público bajo una confidencia cuando en las observaciones que hizo el policía, luego de recibirse la supuesta confidencia, brilla por su ausencia la corroboración de actividad sospechosa o delictiva. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173 (1999).

Para que existan motivos fundados para realizar un arresto sin orden judicial, deben existir circunstancias excepcionales que lo justifiquen. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

El agente del orden público que realiza un arresto debe conocer o estar informado de hechos concretos que razonablemente apunten a la comisión de un delito; las meras sospechas no bastan. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

No existen motivos fundados que justifiquen el arresto sin previa orden judicial cuando un policía recibe una llamada por radiotelefono que solo se refiere a la presencia en un area residencial de unos individuos de apariencia sospechosa, no informando de la comisión de acto delictivo alguno, no observando ninguna conducta que de por si fuese delictiva, y las personas observadas se comportaban adecuadamente y no resistieron el interrogatorio a que fueron sometidos. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

No procede el arresto sin orden donde el arresto realizado por el policía se baso solamente en la conjetura de que la bicicleta que conducia el peticionario podia ser hurtada. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

La Policía de Puerto Rico tiene la obligación de investigar toda llamada telefonica recibida o información brindada por ciudadanía referente a posible actividad delictiva. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

El intervenir con y privar de su libertad a una persona sin orden judicial previa, a los fines de investigar una mera sospecha, solo es posible en casos excepcionales en los cuales hay clara justificación para ello. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

Incorre en error un tribunal que niega de plano una moción de supresión de evidencia presentada por el peticionario y donde se planteaba que un arresto habia sido sin previa orden judicial y sin que hubiesen motivos fundados para ello. Pueblo v. Colón, Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

Los demandantes no han probado que agentes del Hospital de la Administración de Veteranos hayan incurrido en una detención ilegal, donde los agentes tenian motivos fundados para creer que se estaba cometiendo un delito en su presencia luego que los demandantes atacaran a un agente y se enfrascaran en una pelea violenta con otros tres. Santana v. U.S., 919 F. Supp. 558 (1996).

Los oficiales del orden público del Hospital de la Administración de Veteranos tienen autoridad para realizar arrestos acorde con esta regla, cuando la alegada actividad **criminal** sea punible tanto bajo la ley local como federal. Santana v. U.S., 919 F. Supp. 558 (1996).

Causa probable o motivo fundado se determina a base de criterios de probabilidad y razonabilidad. Lo importante es si el agente que efectúa el arresto y allanamiento sin orden judicial tiene, al momento de hacerlo, base razonable o motivos fundados para creer que se estaba violando o se iba a violar la ley; esto es, si se desprende, de la totalidad de las circunstancias, que una persona prudente y razonable creería que se ha cometido o se va a cometer la ofensa objeto de las confidencias. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).

Al tomar en consideración la totalidad de las circunstancias de este caso, o sea, el hecho de que el informante había ofrecido información confiable previamente; la corroboración sobre la utilización de los vehículos descritos en la confidencia; el que uno de los peticionarios estuvo presente en las 3 ocasiones, y el que en la primera ocasión pasaron por el Polígono de Cayey, se estima que esto no levanta un grado de sospecha suficiente para que una persona prudente y razonable crea que los acusados estaban portando drogas y armas de fuego para la venta. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).

Aunque muchas entidades públicas y privadas contratan con agencias de seguridad privada y tienen empleados a cargo de la protección de sus propiedades, estos guardias particulares no son funcionarios del orden público bajo esta regla, y al efectuar arrestos su autoridad emana de la Regla 12 de **Procedimiento Criminal** y es necesario que cumplan con los requisitos de dicha regla. Pueblo v. Rosario Igartua, 129 D.P.R. 1055 (1992).

Los policías de la Administración de Veteranos tienen el carácter de funcionarios del orden público, y cuando están en el desempeño de sus responsabilidades y actúan conforme a las limitaciones impuestas por la Ley de la Administración de Veteranos, tienen autoridad para efectuar arrestos al amparo de esta regla cuando la actividad viola una ley federal que también es punible bajo nuestro ordenamiento. Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991).

La facultad para arrestar que tiene un ciudadano particular es más limitada que la del funcionario del orden público y se requiere que un ciudadano tenga certeza de la comisión del delito o de su tentativa. Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991).

Un funcionario del orden público puede hacer un arresto cuando tiene motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha delinquido en su presencia. Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991).

No procede considerar al oficial de Guarda Costas responsable por falso arresto cuando había causa probable para creer que la tripulación del buque estaba participando en operaciones de drogas. Harrington v. U.S., 748 F. Supp. 919 (1990).

La causa de acción por falso arresto o prisión ilegal nace cada vez que una persona, agente del orden público o no, por sí mismo o a través de terceros detiene u ordena la detención de una persona ilegalmente. Harrington v. U.S., 748 F. Supp. 919 (1990).

Es legal el arresto inmediato sin orden de arresto bajo el inciso (a) de esta regla cuando el agente que lleva a cabo el arresto tiene motivos fundados para creer que se ha cometido delito en su presencia. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Cuando un agente del orden público observa a un ciudadano portar sobre su persona en la vía pública lo que aparenta a simple vista ser un arma de fuego, a tenor con esta regla el agente tiene motivos fundados para creer que la persona que porta el arma ha cometido o está cometiendo un delito grave, independientemente de que así sea o no. En consecuencia el agente tiene el derecho e incluso el deber de intervenir o arrestar al ciudadano y ocuparle el arma, hasta que le sea demostrado en forma satisfactoria que el ciudadano estaba autorizado para portarla. *Pueblo v. Del Río*, 113 D.P.R. 684 (1982).

Se puede establecer la existencia de causa probable para justificar un arresto sin orden basado en información policiaca colectiva al momento del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento personal de las circunstancias. Basta con que el agente de la Policía que inició la cadena de comunicaciones tenga información de primera mano. *Pueblo v. Luzón*, 113 D.P.R. 315 (1982).

El concepto de motivos fundados consignado en esta regla no es incompatible con la persecución del crimen cuando los agentes de la Policía actúan coordinada y concertadamente. A tal efecto se ha sostenido que el conocimiento de cada agente cuando trabajan cerca y se mantienen informados es atribuible a los demás. *Pueblo v. Luzón*, 113 D.P.R. 315 (1982).

Es suficiente para validar la existencia de causa probable-motivos fundados-para el arresto de una persona sin la correspondiente orden de arresto, aquella confidencia que recibe un miembro de la Policía Estatal, si se establece la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: (a) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; (b) que la confidencia conduce hacia el **criminal** en términos de lugar y tiempo; (c) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes, y (d) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de cometerse. *Pueblo v. Acevedo Escobar*, 112 D.P.R. 770 (1982); *Pueblo v. Díaz Díaz*, 106 D.P.R. 348 (1977).

Un funcionario del orden público puede hacer un arresto sin la orden correspondiente: (a) cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia; (b) cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (*felony*) aunque no en su presencia, y (c) cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (*felony*), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad. *Pueblo v. Alcalá Fernández*, 109 D.P.R. 326 (1980); *Pueblo v. González Rivera*, 100 D.P.R. 651 (1972).

A los fines de esta regla "motivo fundado" es la información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido un delito. *Pueblo v. Alcalá Fernández*, 109 D.P.R. 326 (1980).

Es legal un arresto realizado por un funcionario del orden público sin la correspondiente orden bajo las disposiciones de esta regla cuando dicho funcionario conoce de un conjunto de circunstancias que constituye motivo fundado para que una persona razonable y prudente creyera que el arrestado había cometido un delito. *Pueblo v. Alcalá Fernández*, 109 D.P.R. 326 (1980).

En la determinación de la legalidad del arresto de una persona sin la correspondiente orden, un tribunal debe juzgar la conducta del funcionario público que arresta en orden al criterio de la persona prudente y razonable, considerando las circunstancias específicas del arresto. *Pueblo v. Alcalá Fernández*, 109 D.P.R. 326 (1980).

La existencia de motivos fundados para el arresto sin orden de magistrado es el resultado de una rápida evaluación de circunstancias, en la cual el oficial de policía llega a la conclusión de que la persona ha cometido un delito en su presencia. *Pueblo ex rel. E.P.P.*, 108 D.P.R. 99 (1978).

El intento de fuga es uno de los factores circunstanciales y objetivos que puede considerar un agente del orden público en la determinación de motivos fundados para creer que se ha cometido un delito en su presencia. Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978).

En la determinación de si una persona ha cometido un delito en presencia de un agente del orden público, este debe relacionar el comportamiento de la persona frente a él con los hábitos de conducta y manera de actuar de infractores de la ley en circunstancias similares, lo que requiere el conocimiento de usos y costumbres de los infractores con los cuales el policía está familiarizado, especialmente si se trata de delitos comunes de alta incidencia. Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978).

En la determinación de si en un caso específico existen motivos fundados que justifican el arresto de un sospechoso sin orden de magistrado por haber cometido un delito en presencia de un agente del orden público, un tribunal debe tomar en cuenta que cada delito tiene unas características externas, una manera de realizarse, que lo proyectan visualmente, tipifican las circunstancias delictivas y dirigen el raciocinio hacia la concreción de motivos fundados para el arresto. Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99 (1978).

A los fines de esta regla, las palabras "motivos fundados" son sinónimas de "causa probable" para proceder a arrestar a una persona sin orden de arresto. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

Puede el Estado establecer motivos fundados para el arresto de un sospechoso sin mediar un mandamiento de arresto mediante prueba de una confidencia que, aunque en su origen sea incompleta, unida a información ulterior obtenida por los agentes, en algún sentido o medida corrobore que la persona arrestada estaba en el proceso de cometer un delito grave. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

Queda corroborada una confidencia a un agente de la Policía sobre la futura comisión de un delito-la que sirve de base para el arresto del sospechoso-cuando los actos de este demuestran que estaba en proceso de cometerlo. Ello constituye causa probable para su arresto por la Policía sin la correspondiente orden. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

El resultado positivo de un allanamiento-vistas las disposiciones de esta regla-no es indispensable para la validez y legalidad del arresto de un sospechoso sin orden de allanamiento expedida por un magistrado, cuando el funcionario del orden público tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (*felony*). Pueblo v. De Jesus Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973).

Es legal el arresto por un Policía de un pasajero en un automóvil que estaba estacionado en una calle pública-quien estaba dentro del mismo en ese momento acompañado de cuatro personas-cuando la conducta sospechosa del grupo unida a una confidencia recibida por la Policía de que dicho grupo estaba cometiendo un delito, crea en la mente de una persona razonable la convicción de que se estaba cometiendo un delito en su presencia. Pueblo v. Nieves Vargas, 101 D.P.R. 263 (1973); Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971).

Constituyen motivos, fundados para un arresto sin mandamiento efectuado por un Policía, la información recibida de un informante confiable, corroborada por las observaciones del agente respecto a la exactitud de la descripción de un acusado ofrecida por el informante y de la presencia de aquel en un sitio específico. Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971).

Aun cuando la información producida por una confidencia a la Policía constituya prueba de referencia, ello no destruye su validez para determinar motivos fundados para arrestar. Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971).

En la determinación de si un funcionario del orden público tenía motivos fundados para creer que se había cometido un delito en su presencia-lo que justificaria el arresto del sospechoso sin la correspondiente orden-la conducta del funcionario o agente ha de ser juzgada a base de la apreciación que haría una persona prudente y razonable de las circunstancias presentes. Pueblo v. Lafontaine Alvarez, 98 D.P.R. 75 (1969); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966).

No es necesario que en efecto se haya cometido un delito en presencia de un funcionario del orden público para que este pueda hacer un arresto sin la correspondiente orden, siendo suficiente que dicho funcionario tenga motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966).

Un arresto por un funcionario del orden público sin la correspondiente orden es legal-basado en que este tenía motivos fundados para creer que la persona que iba a arrestar había cometido un delito en su presencia-aun cuando posteriormente se determine por un tribunal que la persona arrestada no cometió el delito. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966).

La frase "motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada [sin orden de arresto] ha cometido un delito grave"-usada en esta regla, refiriéndose a los motivos fundados que pueda tener un funcionario del orden público para hacer un arresto sin la orden correspondiente-consiste en la posesión por el funcionario del orden público de aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido el delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).

Bajo las disposiciones de esta regla, un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente cuando tenga motivos fundados para creer que la persona arrestada ha cometido un delito en su presencia, sin que sea necesario-como lo exigía el inciso (1) del art. 116 del Código Enj. **Criminal**-que el delito se cometa o trate de cometerse en su presencia. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).

Es legal el arresto de dos personas hecho por un policía que observa cuando una de ellas inyecta algo a otra y quienes al percatarse de su presencia arrojan un cuentagotas cuyo contenido dio positivo de heroína, siendo admisible el mismo como evidencia pues la garantía Constitucional contra allanamiento y registro ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es abandonada o arrojada por una persona. Pueblo v. Saura Gomez, 90 D.P.R. 801 (1964).

Un oficial del orden público puede hacer un arresto legal de un ciudadano en horas de la noche en un caso menos grave-infracción a una ordenanza municipal-sin una previa orden judicial, solo y únicamente si dicha infracción se cometía o intentaba en su presencia. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

Arrestado y registrado un acusado por un alegado delito menos grave cometido durante la noche, de ser ilegal el arresto porque se realizó sin previa orden judicial no habiéndose cometido ni intentado cometer ninguna violación de ley en presencia del policía que arrestara al acusado, la evidencia ocupada a dicho acusado-la que dio lugar a la iniciación de un proceso por dos delitos graves, vistos conjuntamente con el delito menos grave, y que condujo a la convicción del acusado por los mismos-no sería admisible para condenar al acusado por dichos dos delitos graves. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

Cuando existe evidencia conflictiva sobre si un acusado cometía actos delictivos en presencia de un funcionario del orden público que justificaran un arresto de noche sin orden previa judicial-la alegada violación de una ordenanza municipal-la determinación final sobre dicha prueba conflictiva a los efectos de la validez del arresto corresponde al jurado y no al juez que preside la causa, con mayor razón cuando dicho delito menos grave era también de la competencia del jurado, a quien correspondía determinar si el

apelante había infringido o no la ordenanza y condenarlo o absolverlo de ese delito. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

La prueba de la existencia de causa probable o de motivos razonables para un arresto sin orden judicial es una cuestión de derecho que corresponde determinar al juez que preside la causa, a menos que la evidencia de donde surgiera la causa probable o motivo razonable fuera conflictiva; en tal caso será deber de la corte instruir al jurado que hechos, de probarse, constituirían causa probable o motivo racional, y someterle al jurado el asunto en cuanto a tales hechos. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

Cuando la prueba de la existencia de causa probable o de motivos razonables para un arresto sin orden judicial es conflictiva corresponde al jurado y no al juez determinar, como cuestión de hecho, si existió o no causa probable para dicho arresto. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

Un policía-al igual que un ciudadano particular-tiene facultad en ley para arrestar sin orden de arresto a un conductor que conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez, lo que constituye un delito cometido en su presencia. Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720 (1963).

2. Registro sin orden judicial.

Un agente que arresto y registro a la acusada sin orden judicial no tuvo motivo fundado ni causa probable, por lo cual el arresto y registro fueron ilegales porque solo tuvo un recuerdo de haber visto una foto de la acusada en el cuartel, cual recuerdo no establecía el motivo fundado. Pueblo v. Calderon Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002).

Todo registro e incautación sin orden judicial previa se presume inválido. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356 (1997).

Nada impide que la determinación de motivos fundados sea el resultado de la suma acumulativa de hechos que se desarrollan en rápida sucesión dentro de un tiempo relativamente corto. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991).

Un agente que observa que los ocupantes de un vehículo hacen varios disparos desde el interior de este puede registrar validamente, sin previa orden judicial, un maletín y mochila que se encontraban en el interior de la cabina del vehículo en virtud de la alta probabilidad de que todos los ocupantes del vehículo estuvieran armados y/o de que hubiera varias armas de fuego dentro del vehículo, cuando los objetos registrados estaban al alcance de los arrestados. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Algunos de los factores para determinar si el titular de la protección Constitucional contra registros y allanamientos irrazonables renuncia expresa o tacitamente a su derecho ante un registro sin orden previa son: (a) si ha habido fuerza o violencia; (b) si el registro se realizó después de un arresto, y (c) si se encontraban otras personas presentes, además de que la renuncia ha de ser clara y demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982).

Un arrestado que por ser agente de Rentas Internas conoce sus derechos y que abre el baúl de su auto a petición de un policía y no objeta que se abra un maletín que llevaba como equipaje renuncia a la protección contra la intromisión indebida por parte del Estado. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982).

Suponiendo que la renuncia al registro de un baúl de un auto no se extendiera al equipaje, subsistiría la admisibilidad del contrabando ocupado cuando el agente del orden público deriva el conocimiento de su existencia a través del sentido del olfato. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982).

Es admisible en evidencia en un caso por violación a la Ley de Narcóticos un *deck* de heroína, dos agujas hipodermicas y una jeringuilla plastica ocupadale al acusado en el bolsillo derecho de su pantalon al ser registrado por agentes del orden público en una calle de Bayamon, cuando el arresto sin mandamiento de dicho acusado fue realizado al tener dichos agentes motivos fundados para creer que el acusado estaba cometiendo un delito en su presencia al observar que este entregaba *decks* de heroína a otras personas. Pueblo v. Hoffman Pérez, 100 D.P.R. 556 (1972).

Un arresto legal no convierte ipso facto el registro del arrestado en uno razonable. Pueblo v. Lafontaine Alvarez, 98 D.P.R. 75 (1969); Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967).

Se relaciona la prueba para concluir que tanto el arresto sin la correspondiente orden, como el registro del acusado en este caso, fueron legales-por existir circunstancias que en conjunto llevaban al funcionario del orden público que realizo el arresto sin mandamiento a creer que el apelante estaba cometiendo un delito en su presencia-por lo que el *deck* de heroína que le ocupo el agente del orden público al acusado era admisible en evidencia. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).

La garantia Constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es abandonada o arrojada por una persona. Pueblo v. Saura Gomez, 90 D.P.R. 801 (1964); Pueblo v. Gonzalez Charon, 83 D.P.R. 450 (1961).

3. Registro incidental al arresto.

El hecho de que un agente pueda actuar a base de una comunicación de otro policía, sin tener motivos fundados para practicar un registro, no releva al Ministerio Fiscal de la carga probatoria de establecer la legalidad del arresto, del cual el registro fue incidental. Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

Es valido el registro incidental a un arresto legal sin orden cuando el funcionario que investiga un incidente contemporaneo al arresto crea que la persona que va a arrestar ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en la realidad. Pueblo v. Gonzalez Navarrete, 117 D.P.R. 577 (1986).

Un registro incidental a un arresto legal se puede extender a la persona arrestada y a los lugares (*premises*) y cosas bajo su control. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974); Pueblo v. Marcano Romero, 101 D.P.R. 938 (1974).

Arrestados legal y validamente tres sospechosos por la Policía dentro de una letrina de una casa abandonada, es legal el registro incidental de dicha letrina realizado por los agentes del orden público. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974).

Arrestado legalmente un sospechoso sin que medie una orden judicial previa para su arresto, una vez puesto dicho sospechoso bajo la custodia fisica del agente del orden público, este puede registrarlo. Pueblo v. Marcano Romero, 101 D.P.R. 938 (1974).

Un agente del orden público puede legalmente proceder a un registro e incautación sin una orden judicial-como excepciones a las disposiciones Constitucionales que prohíben los registros e incautaciones sin orden judicial-cuando: (a) el registro es incidental a un arresto legal; (b) se realiza el registro de un vehículo de motor, barco o vagon cuando existe causa probable para creer que se transporta mercancia de contrabando o prohibida por ley; (c) el vehículo ha sido confiscado y el registro posterior del vehículo esta relacionado con la razon por la cual se arresto a su ocupante; (d) la propiedad a ser incautada esta en

proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida; (e) las exigencias de las circunstancias hacen imperativo proceder a un registro previo al arresto como cuando, de no efectuarse el registro, se pone en peligro la vida de los agentes o de otras personas, y (f) se da consentimiento para el registro o se renuncia al derecho Constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Gonzalez Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972).

El derecho de un oficial del orden público a efectuar un registro contemporaneo a un arresto legal y a ocupar evidencia no solamente se extiende a la persona que esta siendo legalmente arrestada, sino también a los lugares (*premises*) y cosas que estan bajo su control inmediato. Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971).

Evidencia ocupada a un detenido no es el producto de un arresto ilegal cuando un oficial del orden público procede a arrestarlo en un cuartel de la Policía después de ser debidamente identificado en dicho cuartel como el autor de un escalamiento en primer grado previamente denunciado, y siendo valido dicho arresto, el registro del acusado, incidental a dicho arresto, era también legal. Pueblo v. Soto Requene, 91 D.P.R. 143 (1964); Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206 (1954).

El registro de un automovil tras haberse arrestado al conductor por guiar en estado de embriaguez, y sin previamente haberse obtenido un mandamiento judicial de registro, no es razonable-y por lo tanto viola la sec. 10 del art. II de la Constitución de Puerto Rico-cuando dicho registro tiene lugar en ausencia del acusado, cuando ya este habia sido arrestado y se encontraba bajo custodia policiaca, en un lugar distinto y apartado de aquel en que se hallaba el vehículo. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

Se examina la evidencia para concluir que el registro del automovil en este caso se hizo muy remotamente en tiempo y lugar para que se considere como incidental al arresto del conductor de dicho vehículo-ya que dicho registro no fue realizado para evitar la fuga del acusado, ni un ataque o agresión a quienes le habian detenido, o la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito-por lo que dicho registro sin mandamiento judicial al efecto fue uno irrazonable en violación de la sec. 10 del art. II de la Constitución de Puerto Rico. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

4. Prueba a plena vista.

Es valido un arresto con ocupación de un arma por la Policía cuando el arma es detectable a simple vista, sin necesidad de registro, allanamiento o incautación y su poseedor admite no poseer licencia para portarla. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244 (1988).

La doctrina sobre la "prueba a plena vista"-cuyos contornos no estan todavia completamente definidos-aplicable al "acto ilegal a plena vista" y a los casos de "la evidencia abandonada o lanzada al suelo" requiere, para poder ser invocada por el Estado y utilizada en un caso **criminal**, el cumplimiento de los siguientes requisitos: (a) el articulo ocupado por la Policía debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razon de un registro; (b) el agente que observa la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse tal prueba; (c) debe descubrirse el objeto inadvertidamente, y (d) la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observacion. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

La ocupación por agentes del orden público de cuanto "lleva encima" un individuo arrestado por orden de magistrado no la impide la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, la cual prohíbe las incautaciones, registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Marcano Romero, 101 D.P.R. 938 (1974).

5. Funcionario del orden público.

Posteriormente, en Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992), concluimos que, distinto a lo resuelto en Velazco Bracero, un guardia de seguridad de la Autoridad de Tierras no es un funcionario del orden público para efectos de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, porque la ley de dicho ente gubernamental no le confiere expresamente la autoridad para realizar arrestos. 2008 DTS 060 Pueblo v. Viruet Camacho, 2008 TSPR 060

Los Guardias Municipales también se pueden considerar funcionarios del orden público, en el contexto de esta regla. Op. Sec. Just. Num. 21 de 1992.

A tenor con la legislación federal correspondiente, 18 USCS §§ 3606, los oficiales *Park Rangers* pueden efectuar arrestos en el desempeño de sus deberes, y el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico los autorizo en el año 1975 a portar armas de fuego para su protección personal durante el desempeño de dichos deberes. En este sentido, los Oficiales Probatorios del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, al igual que los *Park Rangers*, son "funcionarios del orden público" al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal. (*Dejando sin efecto la Opinion de 3 de agosto de 1990.*) Op. Sec. Just. Num. 27 de 1992.

Regla 12. ARRESTO POR PERSONA PARTICULAR.

Una persona particular podrá arrestar a otra:

(a) Por un delito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente.

(b) Cuando en realidad se hubiere cometido un delito grave (felony) y dicha persona tuviere motivos fundados para creer que la persona arrestada lo cometió.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. Criminal, 1902, art. 117; Código Enj. Criminal de California, sec. 837; Código modelo, R. 22.

ANOTACIONES

1. En general.

Cualquier arresto efectuado por un oficial de corrección, fuera de su función como tal, constituye un arresto por una persona particular cuya validez queda sujeta al cumplimiento con la Regla 12 de Procedimiento Criminal. 2008 DTS 060 Pueblo v. Viruet Camacho, 2008 TSPR 060

Viruet Delgado, [hermano del acusado] tuvo los "motivos fundados" que requiere la Regla 12(b) de Procedimiento Criminal, para que se pueda llevar a cabo un arresto por un ciudadano particular. 2008 DTS 060 Pueblo v. Viruet Camacho, 2008 TSPR 060

Efectua un arresto un guardia particular de seguridad cuando sigue a un empleado de una fabrica que abandona una fila a la salida del empleo en que se estaba efectuando un registro de los bultos y paquetes que los empleados llevaban, lo agarra por los hombros y lo espos. Pueblo v. Rosario Igartua, 129 D.P.R. 1055 (1992).

Un empleado gubernamental en funciones analogas a las de un policía estatal, pero que no tenga

autoridad expresa en ley para arrestar, esta autorizado a realizar arrestos unicamente cuando concurren los requisitos de esta regla. Pueblo v. Rosario Igartua, 129 D.P.R. 1055 (1992).

Regla 13. ARRESTO; INFORMACIÓN AL REALIZARLO.

La persona que hiciere el arresto deberá informar a la persona que va a ser arrestada de su intención de arrestarla, de la causa del arresto y de su autoridad para hacerlo, excepto cuando la persona que hiciere el arresto tuviere motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada está cometiendo o tratando de cometer un delito, o cuando se persiguiera a la persona arrestada inmediatamente después de haberlo cometido o luego de una fuga, o cuando la persona ofreciere resistencia antes de que el funcionario pudiese informarle, o cuando surgiera el peligro de que no pudiese hacerse el arresto si se ofreciere la información.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 121 y 122; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 841 y 842; Código modelo, Rs. 24 y 25.

Contrarreferencias.

Arresto, sin el debido **procedimiento** de ley, veanse las secs. 4032, 4171 a 4176, 4181 y 4182 del Título 33.

Regla 14. ARRESTO; ORDEN VERBAL.

Un magistrado podrá verbalmente ordenar a un funcionario del orden público o a un particular que arreste a cualquier persona que estuviere cometiendo o intentare cometer un delito en la presencia de dicho magistrado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 118.

Regla 15. ARRESTO; REQUERIMIENTO DE AYUDA.

Cualquier persona que estuviere haciendo un arresto podrá verbalmente requerir el auxilio de tantas personas como estimare necesarias para ayudarlo a llevarlo a cabo.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 62 y 119; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 839; Código modelo, R. 27.

Contrarreferencias.

Negación de ayuda al hacer arresto, veanse las [33 LPRA secs. 4171 a 4182] del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.

No existe impedimento para que, una vez promulgado el reglamento para las [25 LPRA secs. 951 a 955] del Título 25, se distribuya, de acuerdo con los preceptos del mismo, la recompensa para los ciudadanos que intervinieron en la captura de un **criminal** tanto por la aportación de informes como por la captura física del mismo-ocurrida después de la vigencia de dichas secciones, siguiendo los procedimientos

fiscales establecidos para los desembolsos de fondos públicos por el Departamento de Hacienda. Op. Sec. Just. Num. 33 de 1974.

Regla 16. ARRESTO; MEDIOS LICITOS PARA EFECTUARLO.

Cuando el arresto se hiciere por un funcionario con autorización de una orden de arresto, o sin orden de arresto por un delito grave (felony) cometido en su presencia, si después de que se informare a la persona que ha de ser arrestada de la intención de verificar el arresto, dicha persona huyere o resistiere violentamente, el funcionario podrá usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto.

Para realizar un arresto en cualesquiera otras circunstancias, cualquier funcionario o persona particular podrá emplear todos los medios necesarios, excepto que no podrá infligir grave daño corporal.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 123; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 843.

ANOTACIONES

1. En general.

Un juez sentenciador esta justificado en impartir instrucciones al jurado sobre esta regla cuando la prueba de cargo demuestra que el acusado resistió violentamente su arresto tratando de huir y los agentes del orden público tuvieron que utilizar la fuerza para poder practicar su arresto. Pueblo v. Hoffman Pérez, 100 D.P.R. 556 (1972).

Regla 17. ARRESTO; DERECHO A FORZAR ENTRADA.

Cuando una persona particular realizare un arresto por un delito grave (felony), y cuando en cualquier caso lo realizare un funcionario del orden público, podrá forzarse cualquier puerta o ventana del edificio en que estuviere la persona que ha de ser arrestada, o de aquél en que ellos tengan fundamentos razonables para creer que estuviere dicha persona, después de haber exigido la entrada y explicado el propósito para el cual se deseare dicha entrada.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 124; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 844; Código modelo, Rs. 28 y 29.

ANOTACIONES

1. En general.

Existiendo una orden de arresto contra un profugo peligroso, que autorizaba a los agentes del orden público a penetrar en propiedad privada y forzar la entrada de una estructura segun esta regla, era innecesaria la orden de registro previa para realizar el allanamiento del lugar donde el profugo se encontraba. Pueblo v. Espinet Pagan, 112 D.P.R. 531 (1982).

El **procedimiento** relativo a la entrada a la fuerza para ejecutar un mandamiento de arresto se regula por la ley del estado. Defino Martone v. United States, 396 F.2d 229 (1968).

Regla 18. ARRESTO; SALIDA A LA FUERZA AL SER DETENIDO.

Cualquier persona que hubiere entrado legalmente en un edificio con el propósito de realizar un arresto podrá forzar cualquier puerta o ventana si ha sido detenida dentro y si dicha acción fuere necesaria para obtener su libertad, y un funcionario del orden público podrá hacer lo mismo para libertar a una persona que hubiere entrado legalmente a un edificio con el fin de efectuar un arresto y estuviere detenida dentro.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 125; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 845; Código modelo, Rs. 30 y 31.

Regla 19. ARRESTO; DESARME DEL ARRESTADO; DISPOSICIÓN DE LAS ARMAS.

Cualquier persona que realizare un arresto podrá quitar al individuo arrestado todas las armas que llevare encima y deberá entregarlas al magistrado ante quien se condujere al arrestado. En el caso de que el arresto se realizare por una persona particular y ésta entregare la persona arrestada a un funcionario del orden público según lo dispuesto en la Regla 22(a), dicha persona particular deberá entregar al funcionario las armas que ocupare, y éste a su vez deberá entregarlas al magistrado ante quien condujere a la persona arrestada.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 126; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 846; Código modelo, R. 32.

Contrarreferencias.

Sacar, exhibir o usar de modo ilegal arma mortífera, Véase la sec. 4521 del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.

A los fines de esta regla, el concepto "llevar encima" no se limita al cuerpo del intervenido sino que se extiende a cualquier maletín, bolso, funda, cartera, maleta, caja u objeto de uso y naturaleza similar a estos en que pueda ocultarse evidencia delictiva y que el individuo figurativamente "lleva encima" porque se mueve con el y seguira tan unido a su persona como un bolsillo de su pantalón o una vaqueta, manteniendo un arma allí oculta a la inmediata disposición de su portador. Pueblo v. Marcano Romero, 101 D.P.R. 938 (1974).

Es legal y razonable y esta plenamente justificado el registro incidental de la persona de un sospechoso y de un maletín que portaba al cumplimentar agentes del orden público una orden judicial de arresto de dicho sospechoso, con mayor razón cuando uno de los agentes había recibido información previa de que dicho sospechoso estaba armado y este, además de resistir el arresto y llamar a una turba que atacó con piedras a los policías en un intento de impedir la detención, forcejeó con los agentes cuando lo introducían en el vehículo oficial, momento en que dicho maletín cayó al piso del vehículo. Pueblo v. Marcano Romero, 101 D.P.R. 938 (1974).

Regla 20. ARRESTO; TRANSMISIÓN DE LA ORDEN.

Por medio de un endoso escrito de su puño y letra en una orden de arresto, cualquier magistrado podrá autorizar la transmisión de dicha orden por teléfono, teletipo, radioteléfono, fax o cualquier otro medio electrónico de comunicación, y desde ese momento tendrá que enviarse copia de la orden de arresto a todo funcionario del orden público a quien se le haya transmitido la

orden. Dichas copias tendrán completa validez y los funcionarios que las reciban habrán de proceder con ellas del mismo modo que si tuviesen una orden de arresto original. El magistrado que expidiera copias de una orden de arresto con el objeto de transmitir las deberá certificar su exactitud con el original, y enviará a la oficina desde la cual dichas copias han de ser transmitidas, una copia de la orden de arresto y del endoso puesto en ella haciendo constar en el original lo actuado por él.
(Enero 10, 1999, Núm. 31, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 127 y 128; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 850 y 851.

Enmiendas

-1999, ley 31. La ley de 1999 enmendó la primera oración del primer párrafo en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Enero 10, 1999, Núm. 31.

Regla 21. ARRESTO DESPUÉS DE FUGA.

Si un individuo arrestado o bajo custodia se fugare o fuere rescatado, la persona encargada de su custodia deberá perseguirlo diligentemente y prenderlo de nuevo a cualquier hora y en cualquier lugar, y para ello podrá utilizar los mismos medios autorizados para realizar un arresto.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 129 y 130; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 854 y 855; Código modelo, Rs. 33 y 34.

Contrarreferencias.

Fuga de presos, Véase la sec. 4428 del Título 33.

Regla 22. PROCEDIMIENTO ANTE EL MAGISTRADO.

(a) Comparecencia ante el magistrado. Un funcionario del orden público que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano. Cualquier persona que hiciere un arresto sin orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano, y si la persona que hiciere el arresto sin orden de arresto fuere una persona particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier funcionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante un magistrado, según se dispone en esta regla. Cuando se arrestare a una persona sin que se hubiere expedido orden de arresto y se le llevare ante un magistrado, se seguirá el **procedimiento** que disponen las Reglas 6 y 7, según corresponda.

(b) Deberes del magistrado; advertencias. El magistrado informará a la persona arrestada o que hubiere comparecido mediante citación, del contenido de la denuncia o acusación presentada contra ella, de su derecho a comunicarse con su familiar más cercano o con un abogado y a obtener sus servicios, y de su derecho a que se le celebre una vista preliminar si el delito que se le imputa es grave. Le informará, además, a la persona que no viene obligada a hacer declaración

alguna y que cualquier declaración que hiciere podrá usarse en su contra. El magistrado impondrá condiciones, admitirá fianza, con o sin condiciones, según se dispone en estas reglas, o hará las determinaciones correspondientes en los casos de imputados de delito que se hayan sometido voluntariamente a la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio para evaluación, informe y recomendaciones de la Oficina en los casos de aquellos imputados de delito que se hayan sometido voluntariamente a la supervisión de dicha Oficina. De no obligarse la persona arrestada a cumplir con las condiciones impuestas, o no prestar la fianza, ordenará su encarcelación. En caso de un imputado que se encuentre en libertad bajo fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero o libertad condicional e incumpla las condiciones impuestas, el magistrado revocará la determinación de fianza diferida y ordenará la prestación de la fianza, con o sin condiciones, y de no prestar la misma el imputado, ordenará su encarcelación.

(c) Constancias en la orden de arresto o citación; remisión. En la orden de arresto o citación el magistrado hará constar la comparecencia de la persona y las advertencias que se le hicieron, y en los casos de delito grave (felony), de ser ello así, la circunstancia de que dicha persona no puede obtener los servicios de un abogado para asistirle en el juicio o en la vista preliminar.

En tal caso, será deber del magistrado que determine causa para arresto por un delito grave citar al imputado de delito que no tenga representación legal a una conferencia con antelación a la vista preliminar dentro de las dos semanas de efectuado el arresto. A dicha conferencia, si el imputado está confinado, éste deberá ser transportado al tribunal por el Departamento de Rehabilitación y Corrección a los fines de gestionarle representación legal. La Administración de Tribunales proveerá facilidades para que funcionarios de programas de asistencia legal lo entrevisten y certifiquen su indigencia antes de asumir su defensa. Si no puede ser representado por uno de estos programas y el tribunal acredita que dicho confinado no tiene los recursos para contratar abogado, procederá a designarle uno de oficio.

El magistrado remitirá la denuncia, el acta en aquellos casos en que se hubiere levantado la misma y la orden de arresto o citación a la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia para que se dé cumplimiento a los trámites posteriores que ordenan estas reglas.

(Febrero 8, 1966; Junio 22, 1966, Núm. 100, p. 338, art. 1; Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 2; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 5; Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503, art. 22; Diciembre 24, 1995, Núm. 245, art. 2; Septiembre 2, 2000, Núm. 376, sec. 1, ef. 30 días después de su aprobación.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 31 a 33, 35, 36, 38, 43, 44, 44(a) y 317; Fed. R. Crim. P. 5(a)(b); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 825 y 841; Código modelo, R. 39.

Enmiendas

-2000, ley 376. Inciso (c): La ley de 2000 suprimio la anterior segunda oración, añadió un segundo párrafo, y redesigno la anterior tercera oración como el tercer párrafo.

-1995, ley 245. Inciso (b): La ley de 1995 añadió "o hara . . . ", al final de la tercera oración, y añadió la oración final.

-1990, ley 26. Inciso (b): La ley de 1990 suprimio la frase "cuando el magistrado que hizo la determinación inicial de causa probable no hubiere examinado a ningun testigo con conocimiento

personal de los hechos o cuando el imputado no hubiere estado presente en la determinación de causa probable para el arresto" al final de la primera oración, y la última oración.

Inciso (c): La ley de 1990 suprimio "en los casos en que corresponda celebrar la misma" al final de la primera oración.

-1987, ley 29. Inciso (a): La ley de 1987 añadió "según corresponda" al final.

Inciso (b): La ley de 1987, en la primera oración, sustituyó "de la denuncia" con "del contenido ... o acusación", y añadió "cuando el magistrado ... para el arresto" y la última oración.

Inciso (c): La ley 1987 añadió "en el juicio o" delante de "en la vista preliminar" y "en los casos ... misma" después de dicha frase; la oración "[e]n tal caso ... fuere el caso" y la frase "el acta en aquellos casos en que se hubiere levantado la misma" en la oración final.

-1986, ley 39. Inciso (b): La ley de 1986 enmendó la oración final en términos generales.

-1966, ley 100. Inciso (b): La resolución del Tribunal Supremo de Febrero 8, 1966, suprimio las anteriores dos últimas oraciones que regulaban los casos de juicios mediante denuncia ante el Tribunal de Distrito a tenor con la Regla 24(a) y antepuso a la presente tercera oración la frase "Cuando se requiera la prestación de fianza", pero la ley de 1966, al aprobar esta enmienda, suprimio la frase en cuestión.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503.

Diciembre 24, 1995, Núm. 245.

Septiembre 2, 2000, Núm. 376.

Contrarreferencias.

Arresto; desarme del arrestado; disposición de las armas, Véase la Regla 19 de este apéndice.

Citación por un magistrado o funcionario del orden público, Véase la Regla 7 de este apéndice.

Corrección, Administración de, secs. 1101 et seq. del Título 4.

Enmiendas a la acusación, denuncia o escrito de especificaciones, Véase la Regla 38 de este apéndice.

Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, veanse las secs. 1301 et seq. del Título 4.

Orden de arresto o citación; diligenciamiento, Véase la Regla 8 de este apéndice.

Procedimientos posteriores, Véase la Regla 24 de este apéndice.

Vista preliminar, Véase la Regla 23 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

En atención a que el tiempo transcurrido entre el arresto y la presentación de dos imputados ante el magistrado fue 13 horas, la demora no fue injustificada; el arresto se produjo a las cuatro de la madrugada y las cinco de la tarde de ese mismo día ya fueron presentados ante el foro de instancia. 2006 DTS 62 (2006) Pueblo v. Aponte Nolasco, 2006 TSPR 62 (2006): 167 D.P.R. ____ (2006).

En atención a que el tiempo transcurrido entre el arresto y la presentación de los arrestados ante el magistrado fue menor de 36 horas, no podemos presumir que la dilación fue irrazonable. 2006 DTS 62 (2006) Pueblo v. Aponte Nolasco, 2006 TSPR 62 (2006); 167 D.P.R. ____ (2006).

La determinación de inexistencia de causa probable realizada por el foro de instancia, fundada en una cuestión de estricto derecho, es revisable mediante el recurso de *certiorari*. 2006 DTS 62 (2006) Pueblo v. Aponte Nolasco, 2006 TSPR 62 (2006); 167 D.P.R. ____ (2006).

Una nota aclaratoria hecha por un periódico en relación a la identificación errónea de una persona no constituye evidencia inadmisibles bajo esta regla debido a que su publicación con anterioridad al evento en forma alguna hubiera tendido a hacer menos probable su ocurrencia. Pérez v. El Vocero de P.R., 149

D.P.R. 427 (1999).

Los detenidos en espera de juicio no son confinados, y su retención esta justificada a tenor con la Quinta o Decimocuarta Enmienda Constitucional, siempre y cuando no constituya un castigo o las condiciones y restricciones que se les impongan no constituyan por si mismas violaciones Constitucionales. Feliciano v. Barceló, 497 F. Supp. 14 (1979).

La actuación gubernamental en relación con los retenidos provisionalmente en espera de juicio es punitiva y viola los derechos Constitucionales de estos porque las condiciones o restricciones de su retención son arbitrarias y ajenas al proposito de la misma, que es garantizar la presencia en juicio del retenido. Feliciano v. Barcelo, 497 F. Supp. 14 (1979).

Es al **procedimiento** posterior al arresto de un acusado seguido ante un magistrado, no a la etapa investigativa de un delito durante la cual un sospechoso presta una declaración, que se aplican las disposiciones de esta regla. Pueblo v. Vergara Vazquez, 99 D.P.R. 318 (1970).

Un fiscal no viene obligado a unir a la acusación por un delito menos grave de la competencia original del Tribunal Superior el expediente del caso a que se refiere esta regla. Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 580 (1967).

No constituye justa causa para la demora en la iniciación del correspondiente proceso contra un arrestado de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, el hecho de que el Juez de Paz ante quien se le formulo denuncia por dicho delito no actuara en la forma requerida por estas reglas, posponiendo toda acción en el caso hasta recibir el resultado de la muestra de orina que fue remitida al Departamento de Salud para el analisis correspondiente. Davila Vives v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 776 (1966).

Es admisible en evidencia la confesión escrita del acusado hecha ante el fiscal, no obstante su declaración durante el juicio sobre el caracter involuntario de su confesión, si de la faz del propio documento surge que el apelante declaro "previas las advertencias de ley que me han sido hechas, ...", y si no alego ni intento probar que el fiscal al momento de tomar por escrito su confesión no le hiciera tales advertencias. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

Regla 23. VISTA PRELIMINAR.

(a) Cuándo se celebrará. Se celebrará una vista preliminar en aquel caso en que se imputare a una persona un delito grave (felony). En estos casos deberá citársele para esa vista por lo menos cinco (5) días antes de su celebración. En los casos en que se hiciere constar, de acuerdo con la Regla 22(c), que la persona no puede obtener asistencia legal, el magistrado correspondiente le nombrará abogado y el nombre de éste se incluirá en la citación para la vista preliminar. El magistrado comunicará dicha vista al abogado.

(b) Renuncia. Luego de haber sido citada, la persona podrá renunciar a la vista preliminar mediante escrito al efecto firmado por ella y sometido al magistrado antes de comenzar la vista o personalmente en cualquier momento durante la vista. Si la persona renunciare a la vista o no compareciere a ella luego de haber sido citada debidamente, el magistrado la detendrá para que responda por la comisión de un delito ante la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia.

(c) **Procedimiento** durante la vista. Si la persona compareciere a la vista preliminar y no renunciare a ella, el magistrado deberá oír la prueba. La persona podrá contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba a su favor. El fiscal podrá estar presente en la vista y podrá también interrogar y contrainterrogar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Al ser requerido para ello el fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los testigos que haya puesto a declarar en la vista. Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad. El magistrado podrá mantener en libertad a la persona bajo la misma fianza o determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento o libertad bajo custodia de tercero o bajo las mismas condiciones que hubiere impuesto un magistrado al ser arrestada, o podrá alterar las mismas o imponer una fianza o tomar una determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero o condiciones de acuerdo con la Regla 218(c) si éstas no se le hubiesen impuesto, y si a juicio del magistrado ello fuere necesario. No obstante lo anterior el magistrado no podrá alterar la fianza fijada o la determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento o libertad bajo custodia de tercero o condiciones impuestas por un magistrado de categoría superior, a menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Después de que terminare el **procedimiento** ante él, el magistrado remitirá inmediatamente a la secretaría de la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia todo el expediente relacionado con dicho **procedimiento**, incluyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se hará constar la fecha y el sitio de la vista preliminar, las personas que a ella comparecieron y la determinación del magistrado.

La vista preliminar será pública a menos que el magistrado determine, previa solicitud del imputado, que una vista pública acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho Constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razonables que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos la decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.

También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales efectos, que tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que no existen otras alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.

Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en esas funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos.

(Enero 24, 1967; Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 3; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 6; Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503, art. 3; Agosto 12, 1995, Núm. 197, art. 1; Diciembre 24, 1995, Núm. 245, art. 3, ef. 60 días después de Diciembre 24, 1995.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 43 y 44; Fed. R. Crim. P. 5(c) y 44; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 825 y 841; Código modelo, Rs. 39 a 60.

Enmiendas

-1995, ley 245. Inciso (c): La Ley de Diciembre 24, 1995, enmendó las sexta y séptima oraciones del primer párrafo en términos generales y agregó el segundo párrafo al final del primero, redesignando así los anteriores cinco párrafos en cuatro.

Inciso (c): La Ley de Agosto 12, 1995, suprimió la segunda oración disponiendo sobre vista privada; redesignó las dos últimas oraciones del primer párrafo como un segundo párrafo, y añadió los tercer a quinto párrafos.

-1990, ley 26. Inciso (a): La ley de 1990 suprimió "y el magistrado que hizo la determinación inicial de causa probable para creer que la persona ha cometido el delito imputado, no hubiere examinado a ningún testigo con conocimiento personal de los hechos o cuando el imputado no hubiere estado presente en la determinación de causa probable o habiendo estado presente no estuviera acompañado de abogado" al final de la primera oración.

-1987, ley 29. Inciso (a): La ley de 1987 enmendó este inciso en términos generales.

-1986, ley 39. Inciso (c): La ley de 1986 enmendó en términos generales lo relativo a la prestación de fianza.

-1967. Inciso (c): La Resolución del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1967 añadió la quinta oración.

Vigencia.

Véase la nota bajo la Regla 6.1 de esta parte.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Diciembre 8, 1990, Núm. 26, p. 1503.

Agosto 12, 1995, Núm. 197.

Diciembre 24, 1995, Núm. 245.

Contrarreferencias.

Acusación y denuncia, definiciones, Véase la Regla 34 de este apéndice.

Delitos graves y menos graves, Véase la sec. 3044 del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Causa probable.
3. Delitos graves y menos graves.
4. Peso de la prueba.
5. Defensas afirmativas.
6. Privacidad.
7. Razonabilidad del arresto.
8. Vista preliminar en alzada.

1. En general.

La Regla 23(c) de **Procedimiento Criminal**, 34 L.P.R.A. Ap. II, no concede un derecho de exclusión automática del público de la sala de vista preliminar cuando el Ministerio Público se propone presentar el testimonio de un agente encubierto que aún se encuentra en funciones. Procede en el caso de autos, pero no procede automáticamente. 2008 DTS 101 Pueblo v. Pepin Cortes, 2008 TSPR 101

Actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso de *certiorari* bajo el fundamento que, aun cuando se trataba de una cuestión de Derecho, la determinación que se pretendía revisar estaba estrictamente vinculada a la prueba desfilada durante la vista preliminar y a la aquilatación que el tribunal de instancia hizo de la misma, incluyendo la credibilidad que le merecieron, o no, los testigos que declararon en dichas vistas. 2007 DTS 194 Pueblo En Interés del Menor K.J.S.R. 2007, TSPR 194

Ni la ley estatutaria, ni la garantía de debido proceso de ley imponen al Tribunal de Primera Instancia la obligación de ordenar la grabación de la vista preliminar como la designación del tribunal de instancia como "tribunal de record" no significa necesariamente que todos los procedimientos tienen que ser grabados electronicamente. 2004 DTS 165 (2004) Pueblo v. Soler, Caraballo, 2004 TSPR 165 (2004); 163 D.P.R. ____ (2004).

El Ministerio Público no esta obligado a entregar a la defensa en la vista preliminar declaraciones juradas prestadas ante entidades federales y bajo el control de estos porque las declaraciones no se encuentran en la posesión constructiva del Ministerio Público. 2004 DTS 3 (2004) Pueblo v. Rosario Matos, 2004 TSPR 3, (2004); 161 D.P.R. ____ (2004).

En aquellos casos donde en la primera vista preliminar se ha determinado que existe causa probable pero por un delito menor al contenido en la denuncia, el magistrado que preside la vista preliminar en alzada solo tiene autoridad para determinar si existe o no causa probable por el delito originalmente imputado en la denuncia o por algun otro delito menor incluido pero mayor a aquel por el cual se determino causa originalmente. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R. 761 (1999).

Un tramite que ha sido diseñado para proporcionar al fiscal una segunda oportunidad para mejorar su posición tras la celebración de la vista preliminar original no puede producir un resultado que coloque al fiscal en una peor posición que aquella en la que se encontraba cuando acudió al proceso en alzada. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R. 761 (1999).

Bajo los hechos del caso, unos empleados de la A.E.E. representantes de servicios no son titulares del derecho que establece la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, ya que al atender las llamadas cursadas a la A.E.E., no estaba en riesgo alguno su propia intimidad como personas. U.T.I.E.R. v. A.E.E., 149 D.P.R. 498 (1999).

A los fines de hacer viable que el imputado tenga la oportunidad de demostrar que la imputación en su contra es infundada, este tiene un claro derecho en la vista preliminar a recibir las declaraciones juradas que tenga en su poder el Ministerio Público de aquellos testigos que hayan declarado en dicha vista. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363 (1999).

En aras de evitar las acusaciones insustanciales, se reconoce el derecho del imputado a demostrar en la vista preliminar que la credibilidad de los testigos de cargo es improbable. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363 (1999).

Aunque el **procedimiento** de vista preliminar no persigue el propósito de establecer la culpabilidad o inocencia del imputado sino el de averiguar mediante una vista adversativa si el Estado tiene suficiente prueba para continuar con el proceso judicial, el imputado tiene derecho a contrainterrogar los testigos de cargo para impugnar su credibilidad y a presentar prueba de defensa que derrote la probabilidad de su vinculación con el delito como autor del mismo. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363 (1999).

Por la misma lógica jurídica de que el imputado tiene la oportunidad en la vista preliminar de demostrar que el testimonio en su contra no es susceptible de ser creído, en consecuencia de ello tiene también el

derecho a obtener aquella prueba que lo haga posible. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363 (1999).

Procede la entrega a la defensa de unas declaraciones y grabaciones en poder del Ministerio Público, en especial bajo los hechos del caso donde el testigo principal había prestado varias declaraciones contradictorias y que había expresado con anterioridad a la vista que había sido presionado por la Policía. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363 (1999).

Es cierto que la Sec. 11 del Art. II de la Constitución es la fuente del derecho del acusado a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor y no es menos cierto, sin embargo, que en la etapa de vista preliminar un imputado de delito grave tiene varios derechos sumamente importantes, garantizados los mismos por disposiciones estatutarias y reglamentarias. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

Es difícil hablar sobre el derecho a presentar prueba a su favor, estatuido en la vista preliminar, sin atender el derecho a obtener la comparecencia compulsoria de testigos, pues ambos derechos están íntimamente relacionados. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

Al permitir que el imputado presente prueba a su favor en la vista preliminar, este tiene al menos dos herramientas: (1) atacar la probabilidad de que se haya infringido la ley, y/o (2) demostrar que es menos probable que haya cometido el delito, probabilidades alrededor de las cuales gira la determinación de causa probable para acusar. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

La facultad de presentar prueba y la comparecencia compulsoria de testigos en la etapa de vista preliminar no tiene un alcance irrestricto; sin embargo, el tribunal debe velar por la eficacia y validez de los derechos del imputado en la vista e impedir que se presenten testigos a favor del imputado, lo cual constituye una actuación arbitraria e irrazonable. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

La única limitación que tiene un imputado de delito, en cuanto al derecho a la citación de testigos a nivel de vista preliminar, es con respecto a aquellos testigos consignados en la denuncia como "testigos de cargo" que no son utilizados por el fiscal en dicha vista. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

Un imputado no tiene derecho de que se califique, en la etapa de vista preliminar, como testigo de defensa a una persona a quien el ministerio fiscal le tomo declaración jurada en la etapa investigativa del caso pero que no lo incluyo en la denuncia como testigo de cargo. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

Ni las Reglas de **Procedimiento Criminal** ni su jurisprudencia interpretativa reconocen el derecho del acusado a obtener copia de las declaraciones juradas que sirvieron de base para la determinación de causa probable para arresto, antes de que declaren por primera vez en alguna de las etapas posteriores significativas del proceso **criminal**, tales como la vista preliminar o el juicio. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366 (1998).

El magistrado que preside la vista puede decidir no escuchar prueba de defensa una vez se convenza de la existencia de causa probable, pero dicha discreción no es absoluta ni es acorde con el espíritu y letra de la regla que específicamente le reconoce al imputado el derecho de presentar prueba a su favor. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656 (1997).

No se niega a escuchar la evidencia ofrecida por el apelante un magistrado cuando sus manifestaciones se limitan a expresar que dicha evidencia solo tendía a establecer una controversia de prueba a dirimirse solamente a base de la credibilidad de los testigos de una y otra parte, y donde la defensa, en vez de presentar tales testigos, se reservo los mismos para el día del juicio. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656 (1997).

La vista preliminar constituye una revisión de la determinación de causa probable para el arresto, en cuanto al aspecto central de si se puede o no continuar el proceso **criminal** contra el imputado. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121 (1996).

Se activa el derecho a obtener declaraciones juradas durante la vista preliminar cuando, luego de que el testigo haya declarado en dicha vista, medie una solicitud de la defensa para que se le entreguen las declaraciones de dicho testigo que estén en poder del Ministerio Público, por lo cual el imputado podrá estar en posición de impugnar la credibilidad del declarante durante esa misma vista. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 138 (1995).

Si se acepta o demuestra que el Ministerio Público tomó declaraciones juradas del testigo de cargo presentado en la vista preliminar relacionadas con los hechos del delito imputado, es razonable presumir que el Estado ha continuado en poder de las mismas; y para rebatir esta presunción el fiscal tiene que demostrar que las declaraciones no están en su poder y de acreditar las gestiones que ha realizado para localizar y producirlos. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 138 (1995).

Si se presenta en la vista preliminar un testigo que ha prestado declaración jurada y el imputado de delito la solicita, la misma le debe ser suplida a menos que se demuestre que el Ministerio Público no la tiene en su poder; la mera alegación a los efectos de que la declaración no se encuentra en el expediente no constituye causa suficiente para eximir al Ministerio Público de cumplir con esta regla. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 138 (1995).

Aunque la vista preliminar original y la vista preliminar en alzada son dos vistas independientes, son partes de un mismo y continuo proceso judicial y, por lo tanto, la determinación de no causa probable en la vista preliminar original no equivale automáticamente al fin del **procedimiento** incoado contra el imputado. Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427 (1993).

La determinación de no causa probable para acusar recaída en la vista preliminar que originalmente se celebró al peticionario no tuvo el efecto de terminar con el **procedimiento** penal incoado en su contra y, en consecuencia, no se reactiva el conteo del periodo prescriptivo del delito que había quedado interrumpido por la determinación de causa probable para arresto. Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427 (1993).

Una determinación adversa en vista preliminar puede ocurrir de dos maneras: cuando se determina inexistencia de causa probable, o cuando se determina causa probable por un delito inferior al que el fiscal entendía procedente; en ambos casos la persona queda exonerada del delito imputado en la denuncia original. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).

En casos de determinación adversa en vista preliminar el fiscal tiene las siguientes opciones: (1) puede solicitar una nueva vista preliminar en alzada; (2) puede optar por no seguir adelante con los cargos; (3) ante una determinación de causa probable por un delito inferior, puede seguir adelante con los cargos por el delito por el cual si se le autorizó a encausar, o (4) puede acudir en alzada ante el Tribunal de Primera Instancia en revisión de la determinación de causa por el delito inferior. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).

Si el fiscal se opone a que se procese al imputado por un delito inferior al que dicho fiscal entendía procedente, el tribunal no tendrá facultad o jurisdicción para proseguir adelante con el juicio en su fondo por el delito menos grave. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).

La regla de **procedimiento criminal** que requiere que las vistas preliminares se conduzcan en privado excepto cuando el imputado solicita que se abran al público viola la Primera Enmienda de la Constitución federal. El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147, 113 S.Ct. 2004; 124 L. Ed. 2d 60 (1993).

El magistrado que preside la vista preliminar esta en completa libertad de admitir la prueba que tengan a bien presentar las partes y determinar causa probable por el delito que el entienda infringido, independientemente del que se imputa en la denuncia. Pueblo v. Torres, Esparra, 132 D.P.R. 77 (1992).

El **procedimiento** que se establece en esta regla hace innecesario que el Estado venga obligado a solicitar que se enmiende la denuncia, al amparo de lo dispuesto en la Regla 38 de **Procedimiento Criminal**, en la situación de que la prueba presentada demuestre la comisión de un delito distinto al imputado en la denuncia. Pueblo v. Torres, Esparra, 132 D.P.R. 77 (1992).

La vista preliminar no es ni debe convertirse en un "minijuicio"; todo lo que se requiere para determinar que existe causa probable es una prueba que establezca prima facie que probablemente se cometió el delito y que el imputado fue el que probablemente lo cometió. El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992).

La vista preliminar en Puerto Rico es un **procedimiento** limitado, de naturaleza investigativa judicial, que no se asemeja lo suficiente a un juicio como para que le sea aplicable los requerimientos establecidos por el Tribunal Supremo federal relativo al acceso del público y de la prensa en dicha etapa del proceso **criminal**. El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992).

La garantía Constitucional de juicio rápido se extiende y aplica en toda su extensión a los procedimientos de vista preliminar. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Las determinaciones en vista preliminar no son finales. Pueblo v. Lebron Lebron, 116 D.P.R. 855 (1986); Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986).

El derecho a vista preliminar es de rango estatutario y no Constitucional. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986).

Como la vista preliminar no constituye una adjudicación final, la prueba no tiene que evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la vista preliminar ha establecido lo siguiente: (1) su objeto central no es hacer una adjudicación en los meritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se trata de una función propiamente judicial no es un mini juicio; (3) el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que posea; (4) esta encaminada a proteger al imputado a través de un filtro o cedazo judicial, y (5) una vez se demuestra y justifica esta intervención, la vista ha cumplido su propósito de ley. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En la vista preliminar la evaluación del magistrado sobre la credibilidad de los testigos esta supeditada al *quantum* de la prueba requerida en esta etapa procesal. Si de la prueba presentada no surge la probabilidad de que se haya cometido el delito o de que el imputado lo haya cometido, su deber es exonerarlo y ordenar su libertad. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

La vista preliminar no es ni debe convertirse en un mini juicio o juicio preliminar, ni usarse como medio para prematura e incidentalmente extender más allá de lo permisible el descubrimiento de prueba oral (y declaraciones juradas) de los testigos de cargo. Para este fin el imputado tiene los mecanismos provistos en la Regla 95. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Una vista preliminar en alzada ante un Juez Superior debe celebrarse dentro del término máximo de 60 días a partir de la resolución del Juez de Distrito determinando que no había causa probable contra el

acusado. Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976).

Un fiscal no puede presentar una acusación imputando un delito grave hasta cumplido el trámite de vista preliminar ordenado por esta regla para el cual se ha señalado un término de sesenta días. Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178 (1976).

A partir del 25 de septiembre de 1975-y a los fines de impartir eficacia a la garantía Constitucional de un juicio rápido-la vista preliminar en un caso **criminal** deberá celebrarse dentro del término de sesenta días, contados desde el arresto del acusado o su citación para responder del delito imputado, pudiendo extenderse dicho término únicamente por justa causa, o por demora imputable al acusado o consentida por este. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

No son revisables por *certiorari* las determinaciones tomadas por un magistrado en una vista preliminar sobre la existencia o inexistencia de causa probable para acusar a un sospechoso. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

El derecho a una vista preliminar concedido por la ley de Puerto Rico puede ser renunciado. Ruiz v. Martínez, 385 F. Supp. 800 (1974).

En Puerto Rico no existía la vista preliminar antes de entrar en vigor esta regla. Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969).

Cuando del record no surge que el acusado solicitara entrevistarse con un abogado en la investigación preliminar del delito que se le imputa y que las autoridades se negaran a ello, este no puede senalar en apelación el que se le negara el derecho de asistencia legal en dicha etapa de la investigación preliminar del delito, maxime cuando en la misma el no presto declaración ni se obtuvo evidencia para usarse en su contra en el juicio. Pueblo v. Saura Gomez, 90 D.P.R. 801 (1964).

2. Causa probable.

Cuando en la vista preliminar se determina que no existe causa probable para acusar por delito alguno el imputado queda exonerado y el tribunal pierde jurisdicción para procesarlo por delito alguno; para que el tribunal adquiera o retenga autoridad o jurisdicción, tendra que citarle nuevamente para la celebración de la vista enalzada. Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332 (1993).

La determinación de causa probable goza, como todo dictamen judicial, de presunción legal de corrección. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975).

El proposito de una vista preliminar ante un juez instructor es evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso **criminal**. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970).

La función básica de la vista preliminar es la determinación de existencia o no de causa probable para creer que se ha cometido un delito y que este fue cometido por el imputado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Aunque en la vista preliminar el magistrado haya determinado causa probable para acusar, el fiscal no está obligado a presentar la acusación correspondiente de así creerlo adecuado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

La determinación en los meritos hecha por el Juez Superior sobre la existencia de causa probable no es revisable. No obstante, cualquier otra determinación de derecho si puede ser revisada mediante *certiorari*. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).

Procede el auto de *mandamus* para obligar a un juez a pronunciarse sobre la existencia o inexistencia en los meritos de causa probable para acusar. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

Actua en su capacidad de magistrado-no en su capacidad individual-el juez instructor de causa probable para detener y acusar a un sospechoso cuando interviene en la celebración de una vista preliminar. En su objetivo y función, dicha vista es judicial. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

Es el proposito de esta regla y la Regla 6 determinar la existencia de causa probable para creer que se ha cometido un delito. Alvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974).

Para que la determinación de causa probable se haga por el juez instructor conforme a la ley y a derecho en una vista preliminar, el juicio del magistrado debe basarse en alguna prueba que demuestre que existe causa probable para creer que el acusado cometio el delito. Vazquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972).

Durante la celebración de una vista preliminar, es deber del fiscal demostrar que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona ante el juez instructor lo cometio. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970).

Una determinación de existencia de causa probable de la comisión de un delito por un sospechoso hecha por un juez instructor no queda alterada por el hecho de que el fiscal elimine de la acusación el nombre del unico testigo que en la determinación de causa probable habia conectado al acusado con la comisión del delito. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970).

No es necesaria la celebración de una nueva vista para determinar causa probable cuando, bajo las circunstancias especificas en un caso, la nueva actuación del fiscal más que de una nueva acusación, en su efecto legal se trata de la radicación nuevamente de la acusación. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969).

No es necesario en una acusación por un delito menos grave de la competencia original del Tribunal Superior el expresar que la acusación se base en causa probable determinada de acuerdo con esta regla. Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 580 (1967).

3. Delitos graves y menos graves.

El mandato estatutario taxativo de esta regla excluye expresamente a personas imputadas de delitos menos graves del derecho a la vista preliminar. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986).

No existe derecho a vista preliminar en casos en que se imputa un delito menos grave aun cuando se le haya concedido derecho a juicio por jurado. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986).

Un acusado de homicidio involuntario-delito menos grave-no tiene derecho a la celebración de una vista preliminar. Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970).

Delito grave (*felony*) comprende los delitos clasificados como tales por el Código Penal, Titulo 33. Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970).

4. Peso de la prueba.

El Ministerio Fiscal tiene discreción para no presentar toda su prueba en la vista preliminar, sino solamente sobre todos los elementos del delito imputado en la denuncia y su conexión con el imputado. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989).

En la vista preliminar, el Ministerio Fiscal debe presentar prueba que a juicio del magistrado establezca la comisión de un delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

La prueba del fiscal en la vista preliminar tiene que estar sostenida con evidencia admisible que prima facie establezca un caso contra el imputado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En la vista preliminar el fiscal, al ser requerido, tiene la obligación de poner a disposición del imputado las declaraciones juradas que tenga en su poder de los testigos presentados a declarar en la vista. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En la vista preliminar, la defensa no tiene derecho absoluto a presentar los testigos de cargo que el Ministerio Fiscal reserve para el juicio en su fondo. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

La prerrogativa del Ministerio Fiscal de no presentar en la vista preliminar toda la prueba que posea no activa la presunción que la Regla 16(5) de Evidencia establece para el juicio. En consecuencia, no puede estimarse que tiene que poner a disposición de la defensa los testigos anunciados en la denuncia y no presentados en la referida vista. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

El derecho que reconoce esta regla al imputado a ofrecer prueba en su favor en la vista preliminar no es irrestricto ni es una excepción a la doctrina de que el sumario fiscal no está sujeto a un descubrimiento total y absoluto. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En contraste con la prohibición que recae sobre el Ministerio Fiscal, la defensa tiene derecho a entrevistar los testigos de cargo. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Los magistrados en la vista preliminar están facultados discrecionalmente para atender cualquier reclamo genuino de un imputado, basado en que determinado testigo de cargo puede aportar evidencia que excluiría la determinación de causa probable. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Cuando en la vista un imputado reclame un testigo consignado al dorso de la denuncia como testigo de cargo, deberá hacer una demostración prima facie de que ese testigo puede aportar prueba exculpatória que razonablemente y con toda probabilidad derrotaría la estimación de causa probable para acusar. No basta una simple alegación. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

El examen por la defensa de un testigo de cargo para destruir una determinación posible de causa probable versará sobre los elementos del delito y las probabilidades de que el imputado lo cometió. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Una declaración jurada, prestada por un testigo ante un fiscal en la etapa investigativa del caso puede ser utilizada como evidencia sustantiva, para satisfacer el grado de evidencia necesario para determinar causa probable contra un acusado en la vista preliminar. Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980).

Un fiscal no viene obligado a presentar en una vista preliminar toda la prueba de que dispone para establecer en su día la culpabilidad del acusado, bastando con que dicho funcionario presente aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el acusado lo cometió. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279

(1974).

En una vista preliminar, un fiscal no viene obligado a probar la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable. *Pueblo v. Figueroa Castro*, 102 D.P.R. 279 (1974).

5. Defensas afirmativas.

En la vista preliminar puede plantearse la defensa afirmativa de locura, pero ello no impide al Ministerio Público acudir a vista preliminar en alzada para una nueva determinación sobre la inimputabilidad del acusado. *Pueblo v. Lebron Lebron*, 116 D.P.R. 855 (1986).

Cuando se plantea la defensa afirmativa de locura en la vista preliminar, el juez no tiene que adjudicar de forma final si la defensa afirmativa prevaleciera o no eventualmente, fuera de toda duda, en la vista en su fondo. *Pueblo v. Lebron Lebron*, 116 D.P.R. 855 (1986).

La norma establecida por el caso de *Hernández Ortega v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 765 (1974), de permitir que la defensa de locura pueda ser promovida en la vista preliminar, no tiene el propósito de convertir la vista preliminar en un juicio separado para litigar la capacidad mental de un imputado, sino que solo persigue darle la oportunidad al imputado de que en una etapa temprana del proceso pueda establecer mediante prueba clara y convincente que no debe ser sometido a juicio porque era inimputable al momento de los hechos. *Pueblo v. Lebron Lebron*, 116 D.P.R. 855 (1986).

La defensa afirmativa de locura del sospechoso al realizar los alegados hechos delictivos puede plantearse en ocasión de la vista preliminar, más queda incolume también el principio que es suficiente en esta etapa de los procedimientos que el juez determine la existencia o no de causa probable, no teniendo el juez que adjudicar finalmente si dicha defensa afirmativa prevaleciera o no eventualmente, fuera de toda duda, en la vista en su fondo de estos casos. *Hernández Ortega v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 765 (1974).

6. Privacidad.

El daño que abrir todo proceso penal al escrutinio público podría acarrear al derecho de todo acusado a un juicio justo e imparcial, a la presunción de inocencia y a la protección a su reputación y dignidad como ser humano, justifican el que la vista preliminar sea privada, salvo que el imputado al comenzar la misma solicitare que fuera abierta, o que por sus actuaciones o conducta se pueda entender que implícitamente la ha renunciado, o que por las circunstancias particulares del caso no este presente el derecho que se intenta proteger. *El Vocero de P.R. v. E.L.A.*, 131 D.P.R. 356 (1992).

La privacidad de la vista preliminar es el medio más efectivo que posee el Estado para proteger el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial y a la intimidad de una persona en esta etapa investigativa judicial del proceso **criminal**. *El Vocero de P.R. v. E.L.A.*, 131 D.P.R. 356 (1992).

7. Razonabilidad del arresto.

La vista preliminar constituye un segundo cedazo con respecto a la razonabilidad y legalidad del arresto. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 141 D.P.R. 121 (1996).

8. Vista preliminar en alzada.

El propósito de la vista en alzada existe para darle una segunda oportunidad al Pueblo de conseguir, con la misma u otra prueba, una determinación favorable de causa, sea para arresto o acusar. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 141 D.P.R. 121 (1996).

El fiscal tiene el derecho de acudir en alzada una sola vez de una determinación adversa en la vista de causa para arresto y una vez más en la vista de causa para acusar. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 141 D.P.R. 121 (1996).

Exigir que la vista preliminar siempre se lleve a cabo ante el Tribunal de Primera Instancia, aunque no se prohíbe, constituye una anomalía procesal, pues no habría magistrado de categoría superior ante el cual celebrar una vista preliminar en alzada. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 141 D.P.R. 121 (1996).

Cuando el demandado solicita una copia de la declaración Jurada hecha por el testigo quien testifica en una vista preliminar, la declaración se debe entregar a menos que el fiscal demuestra no tener posesión de dicha declaración; mera alegaciones no constituyen suficiente causa. *Pueblo v. Rivera Rodríguez*, 138 D.P.R. 138 (1995).

Regla 24. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES.

(a) En el Tribunal de Distrito. Cuando de acuerdo con lo prescrito en la Regla 22(c) se recibiere el expediente de un caso en la secretaría de alguna sala de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia, se procederá en dicha sala a la celebración del juicio, y la denuncia remitida por el magistrado servirá de base al mismo.

(b) En el Tribunal de Primera Instancia. Cuando el expediente fuere remitido a la secretaría de alguna sala de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia, el secretario deberá referir el mismo inmediatamente al fiscal de dicha sala, quien presentará la acusación que procediere si se tratare de un caso donde no se hubiere radicado la correspondiente acusación de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a). Si por causa justificada el fiscal considerare que no debe presentarse acusación, archivará el expediente en la secretaría de la sala correspondiente con su endoso en tal sentido. El secretario, previa aprobación del tribunal, lo guardará registrando dicha causa en el "Registro de Causas Archivadas" que deberá llevar en su oficina, y expedirá inmediatamente una orden para la excarcelación de la persona, si ésta se hallare bajo custodia. Si se hallare en libertad bajo fianza, ésta quedará sin efecto desde el momento del archivo de la causa y si la fianza fuere en depósito será devuelta una vez acreditado el archivo.

Si a juicio del fiscal el proceso por el delito imputado debiera verse ante alguna sala de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia, el fiscal remitirá el expediente a dicha sala dentro de los diez (10) días de habersele sometido, para que ésta continúe el **procedimiento** según se dispone en el inciso (a) de esta regla.

(c) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.

(d) Efectos de la determinación de renuncia de jurisdicción en Procedimientos para Asuntos de Menores. Cuando el expediente fuere remitido a la secretaría de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia en virtud de una resolución del tribunal renunciando a la jurisdicción sobre un menor, el secretario deberá referir el mismo inmediatamente al fiscal de distrito. El fiscal deberá presentar la acusación que proceda en el término de quince (15) días a partir del recibo de la notificación de renuncia.

No será necesaria la celebración de vista para determinar causa probable para arresto conforme a la Regla 22, ni la vista preliminar en los casos que deba celebrarse conforme a la Regla 23, de existir determinación previa de un magistrado dictada según las Reglas 2.9 y 2.10 de **Procedimiento** para Asuntos de Menores, Ap. I-A de este título.

(Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268, art. 2; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 7; Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221, sec. 1, ef. 30 días después de Agosto 22, 1990.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 43, 99, 100, 102 y 105; Fed. R. Crim. P. 5c; Código modelo, Rs. 52 a 54 y 59.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1990, ley 55. Inciso (d): La ley de 1990 añadió este inciso.

-1987, ley 29. Inciso (b): La ley de 1987 añadió "si se tratare de ... Regla 6(a)".

Inciso (c): La ley de 1987 añadió, en la primera oración, "en los casos ... la misma" y suprimio la última oración relativa a la expedición de citaciones y su diligenciamiento.

-1986, ley 80. Inciso (c): La ley de 1986 añadió la oración final.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268.

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221.

Contrarreferencias.

Acusación y denuncia, definiciones, Véase la Regla 34 de este apéndice.

Procedimiento ante el magistrado, Véase la Regla 22 de este apéndice.

Término dentro del cual el fiscal debiera radicar acusación luego de haber sido arrestada una persona,

Véase la Regla 64 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

El Ministerio Público no puede solicitar una vista preliminar en alzada, y una vez pautada esta, no puede continuar simultáneamente los trámites encaminados a acusar al imputado por un delito menor o uno distinto al que motivo la solicitud de la vista. Pueblo v. García Saldana, 151 D.P.R. 783 (2000).

El término de 60 días para celebrar la vista preliminar en alzada bajo esta regla no es uno inflexible ni rígido. Pueblo v. Gonzalez Rivera, 132 D.P.R. 517 (1993).

Una vez determinado en la vista preliminar inicial que no existe causa probable para acusar, el magistrado que preside la vista esta obligado a exonerar a la persona imputada y a ordenar que sea puesta en libertad, pero esta exoneración no es de carácter final ya que la determinación de causa probable no constituye una adjudicación de responsabilidad **criminal**. Pueblo v. Felix Aviles, 128 D.P.R. 468 (1991).

La citación del imputado para la vista en alzada puede hacerse en corte abierta por el tribunal de instancia.

Pueblo v. Felix Aviles, 128 D.P.R. 468 (1991).

La vista preliminar en alzada debe celebrarse dentro de un término de 60 días, contados a partir de la determinación en la vista inicial de inexistencia de causa probable por un delito inferior al imputado. Pueblo v. Felix Aviles, 128 D.P.R. 468 (1991).

La citación del imputado para la vista preliminar en alzada es de carácter jurisdiccional y requisito indispensable del debido proceso de ley. Pueblo v. Felix Aviles, 128 D.P.R. 468 (1991).

La fianza prestada y admitida antes de que recaiga convicción cubre todo el proceso judicial, incluyendo el proceso de vista preliminar en alzada, y subsiste hasta que se celebre el pronunciamiento y ejecución de la sentencia. Pueblo v. Felix Aviles, 128 D.P.R. 468 (1991).

Una determinación de inexistencia de causa probable en la vista preliminar basada en inimputabilidad por defecto mental al momento de la comisión de los hechos no impide que el Ministerio Fiscal acuda en alzada ante el Tribunal Superior para obtener la revisión de esa determinación. Pueblo v. Lebron Lebron, 121 D.P.R. 154 (1988).

La citación del imputado a la vista preliminar en alzada es requisito indispensable del debido proceso de ley. Pueblo v. Mendez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987).

La única consecuencia que puede tener un diligenciamiento negativo de una citación para una vista en alzada es la interrupción del término de 60 días para la segunda o subsiguientes vistas. Pueblo v. Mendez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987).

La vista preliminar en alzada no es un trámite apelativo de la primera vista, sino un **procedimiento** independiente, separado y distinto. Pueblo v. Mendez Pérez, 120 D.P.R. 137 (1987).

Cuando el imputado se encuentra recluido en una institución penal del Estado, la vista preliminar en alzada debe celebrarse dentro del término de 60 días a partir de la determinación inicial de falta de causa probable, a menos que: (1) exista justa causa para la demora; (2) la demora se deba a solicitud del imputado o sea consentida por el mismo, o (3) el imputado haya renunciado expresa y voluntariamente, con pleno conocimiento de causa. Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114 (1987).

La garantía Constitucional de juicio rápido se extiende y aplica en toda su extensión a los procedimientos de vista preliminar. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

La segunda vista preliminar que establece el inciso (c) de esta regla no es una apelación de la primera, sino una vista independiente, separada y distinta. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).

Cuando en la vista preliminar El Pueblo no obtiene la determinación de causa probable-o la obtiene por delito menor al imputado-el Ministerio Público solo puede acudir a un magistrado de jerarquía superior en busca de la correspondiente determinación de causa probable, no comenzar un nuevo **procedimiento** mediante nueva denuncia. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).

Determinado por un juez del Tribunal de Distrito que no existía causa probable para creer que se hubieran cometido ciertos delitos menos graves imputados en una denuncia-por lo cual se negó a expedir orden de arresto contra el acusado-existe el derecho a someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado del Tribunal Superior. Alvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236 (1974).

El inciso (c) de esta regla es de aplicación tanto a casos por delitos graves como a casos por delitos menos

graves. *Alvarez v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 236 (1974).

Los fiscales no estan autorizados bajo las disposiciones de esta regla, ni a solicitar la revisión mediante *certiorari* de la determinación de la inexistencia de causa probable hecha por un magistrado del Tribunal Superior, ni a someter el asunto de nuevo a un magistrado del Tribunal Supremo. *Pueblo v. Tribunal de Distrito*, 97 D.P.R. 241 (1969).

III. COMPETENCIA

Regla 25. DISTRITO; DEFINICION.

Según se usa en las Reglas 25 a 33, "distrito" significará una de las unidades territoriales en que Puerto Rico está dividido para fines judiciales, e incluirá las unidades correspondientes a las salas del Tribunal de Distrito y a las salas del Tribunal Superior.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 8; Fed. R. Crim. P. 1 y 54; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 777; Código modelo, Rs. 238 a 249.

Disposiciones especiales.

La sec. 10 de la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31, sec. 62 del Título 4, disponia:

"El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de jurisdicción original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo **procedimiento** civil o **criminal**, segun más adelante se dispone. Toda acción civil o **criminal** se presentara en aquella sala del tribunal situada en el territorio en que la misma hubiese sido radicada bajo la legislación en vigor hasta el presente, pero no se desestimara ningun caso fundado en haberse sometido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia para ello. Todo caso podra ventilarse en la sección o sala en que se radique, por convenio de las partes y la anuencia del juez que presida dicha sala en ese momento, o, de no ser asi oido, sera transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente, de conformidad con las reglas que el Tribunal Supremo adoptare."

Regla 26. DELITOS ENJUICIABLES EN PUERTO RICO.

Cualquier persona que cometiere dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un delito contra dicho Estado, ya estuviere dentro o fuera de los límites territoriales de Puerto Rico a la fecha de su comisión, podrá ser juzgada en los tribunales de Puerto Rico. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

Regla 26. DELITOS ENJUICIABLES EN PUERTO RICO.

Será enjuiciable en Puerto Rico, toda persona que cometa o intente cometer un delito en la extensión territorial sujeta a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Será también enjuiciable en Puerto Rico, toda persona que cometa o intente cometer un delito fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en las circunstancias establecidas en el Artículo 7 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [2004, ley 317, Efectiva el 1 de mayo de 2005]

(Enmendada en septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 4, efectiva el 1 de mayo de 2005)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 8 y 9; Fed. R. Crim. P. 1 y 54; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 777; Código modelo, Rs. 238 a 249.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 enmendó esta regla en terminos generales.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Distrito, definicion, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Personas sujetas a penalidad, veanse las secs. 3151 et seq. del Título 33.

Regla 27. COMPETENCIA; EN GENERAL.

En todo proceso **criminal** el juicio se celebrará en la sala correspondiente al distrito donde se cometió el delito, excepto lo que en contrario se provea en estas reglas. [2004, ley 317, Vigente hasta el 30 de abril de 2005]

Regla 27. COMPETENCIA; EN GENERAL.

En todo proceso **criminal** el juicio se celebrará en la sala correspondiente al distrito donde se cometió el delito, excepto lo que en contrario se provea en estas reglas. En los delitos cometidos fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, serán juzgados en el distrito de San Juan. [Efectiva el 1 de mayo de 2005]

(Enmendada en septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 4, efectiva el 1 de mayo de 2005)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 8; Fed. R. Crim. P. 18; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 777; Código modelo, R. 240.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 añadió la segunda oración de esta regla.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Distrito, definicion, Véase la Regla 25 de este apéndice.

ANOTACIONES

General

La Regla 27 de las Reglas de **Procedimiento Criminal**, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 27, dispone que en todo proceso **criminal** “el juicio se celebrará en la sala correspondiente al distrito **donde se cometió el delito**, excepto lo que en contrario se provea en estas reglas.” Consistente con lo anterior, el artículo 10 del Código Penal de 1974, aplicable a varios de los cargos que penden contra los acusados, establece que **el delito se considera cometido** “[d]onde se ha ejecutado la acción o **donde debía ejecutarse la acción omitida**.” El delito de no rendir planilla de contribuciones sobre ingresos se comete en el Municipio de San Juan donde ubican las oficinas del Secretario de Hacienda. 2007 DTS 052 Pueblo v. Medina Boria 2007 TSPR 052

No ofende el derecho a juicio justo e imparcial concluir que, para efectos de determinar la competencia territorial correspondiente, dispongamos que el delito de dejar de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos se comete en la región judicial de San Juan donde tiene su sede el Departamento de Hacienda. 2007 DTS 052 (2007) Pueblo V. Medina Boria, 2007 TSPR 052 (2007)

Regla 28. COMPETENCIA; COAUTORES EN DISTINTOS DISTRITOS.

Cuando en un distrito una persona ayudare, indujere o procurare la comisión de un delito en otro distrito, podrá ser juzgada por dicho delito en cualquiera de los dos distritos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 8; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 777; Código modelo, R. 241.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Regla 29. COMPETENCIA; ACTOS REALIZADOS EN MÁS DE UN DISTRITO.

Cuando para la comisión de un delito se requiriese la realización de varios actos, el juicio podrá celebrarse en cualquier distrito donde se realizare cualquiera de dichos actos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 8; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 781; Código modelo, R. 242.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Regla 30. COMPETENCIA; DELITOS EN UN DISTRITO COMETIDOS DESDE OTRO.

Cuando desde un distrito una persona cometiere un delito en otro distrito, el juicio podrá celebrarse en cualquiera de los dos distritos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 8; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 777; Código modelo, R. 244.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Regla 31. COMPETENCIA; DELITOS COMETIDOS EN TRANSITO.

Cuando se cometiere un delito en cualquier vehículo público o privado mientras se encontrare en el curso de un viaje, y no pudiese determinarse el sitio donde se cometió, el juicio podrá celebrarse en cualquier distrito a través del cual dicho vehículo pasare en dicho viaje.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 783; Código modelo, Rs. 245 y 246.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Regla 32. COMPETENCIA; DELITOS EN O CONTRA NAVES AEREAS.

Cualquier persona que cometiere un delito en o contra cualquier nave aérea mientras ésta volare sobre el territorio de Puerto Rico, podrá ser juzgada en los tribunales estatales y en cualquier distrito.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 783; Ley de Julio 12, 1952, c. 695, 66 Stat. 589; 18 USCS § 7.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Regla 33. COMPETENCIA; PROPIEDAD LLEVADA DE UN DISTRITO A OTRO.

Cuando una persona adquiriere bienes mediante la comisión de un delito en un distrito y transportare dichos bienes a otro distrito, podrá ser juzgada en cualquiera de los dos distritos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 786; Código modelo, R. 248.

Contrarreferencias.

Distrito, definición, Véase la Regla 25 de este apéndice.

Personas sujetas a penalidad, veanse las secs. 3151 et seq. del Título 33.

IV. LA ACUSACIÓN Y LA DENUNCIA

Regla 34. DEFINICIONES.

(a) La acusación. La acusación es una alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de Primera Instancia en la cual se imputa a una persona la comisión de un delito. La primera alegación de parte de El Pueblo en un proceso iniciado en el Tribunal de Primera Instancia será la acusación. Se firmará y jurará por el fiscal y se radicará en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia correspondiente.

En todo caso, el juramento será suficiente si expresare que la acusación se basa en causa probable determinada de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas o de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 2.10 de **Procedimiento** para Asuntos de Menores, Ap. I-A de este título, en los casos de renuncia de jurisdicción del tribunal sobre un menor.

(b) La denuncia. La primera alegación en un proceso iniciado en el Tribunal de Distrito será la denuncia, según ésta se define en la Regla 5 y del modo dispuesto en la Regla 24(a). (Mayo 27, 1980, Núm. 67, p. 176; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 8; Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221, sec. 2, ef. 30 días después de Agosto 22, 1990.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 3, 22, 67, 68 y 95; Fed. R. Crim. P. 7(a); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 949 y 1426; Código modelo, R. 151.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1990, ley 55. Inciso (a): La ley de 1990 añadió "o de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 2.10 ... sobre un menor" al final del segundo párrafo.

-1987, ley 29. Inciso (a): La ley de 1987 añadió a la oración final original "[e]n todo caso" al principio, sustituyo "la Regla 23" con "estas reglas" al final y la transfirió al párrafo segundo.

-1980, ley 67. Inciso (a): La ley de 1980 sustituyo "se presentara en sesión pública" con "se radicara en la Secretaría del Tribunal Superior correspondiente".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 67, p. 176.

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Contrarreferencias.

Contenido de la acusación y de la denuncia, Véase la Regla 35 de este apéndice.

Examen de testigos, Véase la sec. 11 de este título.

Representación del Estado Libre Asociado, Véase la sec. 72 del Título 3.

ANOTACIONES

1. En general.

Una denuncia o acusación tiene como función básica informar al acusado que se ha iniciado un proceso judicial en su contra para que prontamente gestione y ponga en acción sus elementos de defensa con los cuales enfrentar la acusación. *Rabell Martínez v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 39 (1974).

Un proceso **criminal** comienza, no con la presentación de la acusación, sino con la determinación de causa probable y el consiguiente arresto o citación del acusado. *Pueblo v. Ortiz Díaz*, 95 D.P.R. 244 (1967).

En un proceso **criminal** ante el Tribunal Superior, la primera alegación por parte de El Pueblo la constituye la radicación de la acusación. *Pueblo v. Ortiz Díaz*, 95 D.P.R. 244 (1967).

Regla 35. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DE LA DENUNCIA.

La acusación y la denuncia deberán contener:

(a) El título del proceso designando la sección y la sala del Tribunal de Primera Instancia en las cuales se iniciare el mismo. Si se tratare de una denuncia, el juez deberá ordenar la enmienda correspondiente en el título de la misma designando su sala en sustitución del magistrado ante quien se presentó la denuncia.

(b) La identificación del acusado por su verdadero nombre o por aquel nombre por el cual se le conociere. Si se desconociere su nombre, se alegará ese hecho y se le designará por un nombre ficticio, pero en ningún caso será necesario que se pruebe que el fiscal o el denunciante desconocen el verdadero nombre del acusado. Para identificar a cualquier persona que no fuere el acusado, bastará en todo caso que se le identifique del modo dispuesto en esta regla para el acusado.

Si la acusada fuere una corporación o sociedad, será suficiente el expresar el nombre corporativo o la razón social, o cualquier otro nombre o denominación por el cual la acusada fuere conocida o pudiere ser identificada, sin que fuere necesario alegar que se trata de una corporación o sociedad ni cómo fue ésta organizada o constituida. Para identificar a cualquier corporación o sociedad que no fuere la acusada, bastará en todo caso que se le identifique del modo dispuesto en esta regla en cuanto a una corporación o sociedad acusada.

Para referirse a algún grupo o asociación de personas que no formen una corporación o sociedad, bastará en todo caso expresar el nombre de dicho grupo o asociación o aquel nombre por el cual ha sido o fuere conocido, o expresar los nombres de todas las personas que constituyen dicho grupo o asociación o el de una o varias de dichas personas, y referirse a las demás como "y otros".

Al hacer referencia a cualquier persona o entidad que no fuere la parte acusada, no será necesario en caso alguno alegar ni probar que el fiscal o el denunciante desconocen el verdadero nombre de la persona o entidad.

(c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial.

(d) La cita de la ley, reglamento o disposición que se alegue han sido infringidos, pero la omisión de tal cita o una cita errónea se considerará como un defecto de forma.

(e) La firma y juramento del denunciante o del fiscal según se dispone en las Reglas 5 y 34, respectivamente.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 23, 71, 72, 75, 80 a 82, 84 y 88; Fed. R. Crim. P. 7(c); Código Enj.

Criminal de California, secs. 950 a 952, 957 a 959, 961 y 1426; Código modelo, Rs. 151, 154, 157 y 167.

Contrarreferencias.

Omisión de negar excepciones, Véase la Regla 49 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

La acusación es la alegación que sirve de base para el juicio ya que son los hechos consignados en la misma los que permiten identificar el delito imputado y las disposiciones estatutarias involucradas. Ésta es suscrita y jurada por el fiscal y presentada en el Tribunal Superior. 2007 DTS 008 Rivera Beltrán v. Junta De Libertad 2007 TSPR 008

Los incisos (b)(4) y (b)(5) de la sec. 5204 del Título 9, en cuanto eximen al fiscal de alegar la reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez, violan la cláusula del debido proceso de ley tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal. Pueblo v. Montero, 169 D.P.R. ____; 2006 TSPR 158 (2006).

No se cumple con el requisito de adecuada notificación de los cargos presentados en contra del acusado, cuando se permite que el fiscal no alegue la condición de reincidente en la denuncia o acusación. Pueblo v. Montero, 169 D.P.R. ____; 2006 TSPR 158 (2006).

No es aconsejable utilizar el mecanismo procesal de sentencia sumaria en casos donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea esencial. Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).

Un imputado no puede ser procesado bajo términos y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley vigente a la fecha en que se perpetraron los hechos imputados en la acusación. Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993).

La cláusula Constitucional del debido proceso de ley exige que el acusado este adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito que se le imputa; por ello la acusación para imputar la comisión de un delito específico debe incluir una exposición de todos los hechos constitutivos del mismo. Pueblo v. Gonzalez Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985).

Queda satisfecho el mandato Constitucional establecido en el art. II, sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico cuando una acusación-en cumplimiento de las disposiciones del inciso (c) de esta regla-incluye una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia comun. Dicha exposición no tendra que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley. Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981); Pueblo v. Santiago Ceden, 106 D.P.R. 663 (1978).

No es un requisito legal que una acusación o denuncia exprese en su faz presunciones legales. Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).

Aunque una acusación o denuncia debe informar a un acusado de que se le acusa, para ello no es necesario seguir ningun lenguaje estereotipado o técnico o talismánico. Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).

Lo fundamental en una acusación es que consigne los elementos del delito imputado en forma que constituya debida notificación de la naturaleza y causa de los cargos. Pueblo v. Santiago Ceden, 106

D.P.R. 663 (1978).

Una acusación no tiene que calificar el delito con arreglo al Código Penal, ni siquiera expresar si es grave o menos grave. Pueblo v. Santiago Cedeno, 106 D.P.R. 663 (1978).

No es necesario especificar en una acusación-bajo las disposiciones del inciso (c) de esta regla-el grado del delito imputado al acusado ni la totalidad de las circunstancias en que se cometio. Pueblo v. Santiago Cedeno, 106 D.P.R. 663 (1978).

Una acusación por el delito de asesinato en primer grado no tiene que imputar modalidad alguna de dicho delito. Pueblo v. Santiago Cedeno, 106 D.P.R. 663 (1978).

No exige el inciso (c) de esta regla que una acusación siga fielmente las palabras de la ley, ya que su proposito no es cumplir mecanicamente con una forma ritual, sino informar al acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977).

Es valida una denuncia donde aparece la firma del fiscal y se hace constar que la denuncia se juro ante un juez, quien asi lo aseguro bajo su propia firma, aun cuando en la misma no se incluya el texto del juramento en si. Pueblo v. Villahermosa, 103 D.P.R. 273 (1975).

El pliego de particulares es el instrumento procesal mediante el cual un acusado puede obtener datos que interesa sobre el delito imputado, los cuales no aparecen en la acusación. Pueblo v. Yoder Hernández, 101 D.P.R. 360 (1973).

La ausencia en una acusación de los elementos esenciales del delito imputadole a un acusado no queda subsanada por la prueba ofrecida en el correspondiente **procedimiento criminal**. Pueblo v. De Jesus Rosado, 100 D.P.R. 536 (1972).

En una acusación, la calificación de un delito hecha por el fiscal no es definitiva. Son los hechos alegados en la acusación los que sirven de base para identificar el delito imputado y la disposición estatutaria envuelta. Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971).

De existir un conflicto entre los hechos probados en un caso **criminal** y la calificación del delito hecha por el fiscal en la correspondiente acusación, los hechos deben prevalecer. Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971).

Cuando el conocimiento es un ingrediente esencial de un delito, es necesario alegar en la correspondiente acusación tal conocimiento. Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969).

Para adicionar, antes de comenzar el juicio, nuevos cargos a una denuncia o nuevos acusados, el tribunal debiera acudir primero a los procedimientos preliminares provistos en las Reglas 6, 7 y 22. Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967).

No expone hechos constitutivos del delito establecido por la sec. 1250 del Título 33 una acusación que omite alegar que el material relacionado con el juego ilegal de la bolita y/o bolipool en la posesión del acusado se pudiese utilizar o usar en el referido juego ilícito y que estuviese conectado con la practica del mismo. Pueblo v. Febres Colón, 95 D.P.R. 172 (1967).

Cuando no se trata de una denuncia que imputa una violación de ley aunque en formas diferentes, ni de la imputación de varios actos que bajo un artículo del Código Penal se penalizan como un delito, ni de

varios actos relacionados, todos los cuales constituyen un solo delito, ni de una serie de actos intimamente relacionados que conducen a la comisión de un delito principal, aunque alguno de esos actos pudiera aisladamente constituir un delito, algunos de los criterios generales para determinar si uno o más delitos están envueltos o han sido imputados en una denuncia-lo que da derecho a un acusado a solicitar el archivo de la acusación o denuncia-incluyen: (a) si los delitos en cuestión están constituidos por elementos diferentes; (b) si los delitos requieren diferente prueba, y (c) si las palabras usadas en una acusación indican al sentido común la imputación de un solo delito. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 392 (1967).

Un defecto en la acusación en cuanto a la fecha en que se cometió un delito constituye únicamente un defecto de forma cuando dicha fecha no es un ingrediente esencial del delito imputado, y la acusación alega hechos indicativos de que el delito se cometió dentro del período prescriptivo estatutario. Pueblo v. López Alamo, 94 D.P.R. 8 (1967).

No es fatal ni perjudicial a los derechos de un acusado de hurto mayor-en el cual la fecha en que fue cometido no es un ingrediente esencial del delito-el que en la acusación se alegue que el delito se cometió entre distintas fechas de distintos meses, o que el delito se cometió en fecha posterior a la acusación o el día (en blanco) de un mes en particular. Pueblo v. López Alamo, 94 D.P.R. 8 (1967).

En una acusación que imputa al acusado el que "ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, tenía en su posesión y dominio la droga conocida como heroína" no se requiere que en la misma se alegue que el acusado no tenía licencia para traficar con drogas. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966).

Se examinan las alegaciones en la acusación por tentativa de robo en este caso para concluir que la misma aduce hechos constitutivos de dicho delito, no conteniendo dicha acusación alegaciones vagas o inciertas. Pueblo v. Acosta Torres, 92 D.P.R. 887 (1965).

Una acusación debe referirse al sitio donde se cometió el delito imputado y el proceso debe celebrarse en el mismo sitio. Baez Montalvo v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 609 (1964).

Regla 36. DEFECTOS DE FORMA.

Una acusación o denuncia no será insuficiente, ni podrán ser afectados el juicio, la sentencia o cualquier otro **procedimiento** basados en dicha acusación o denuncia, por causa de algún defecto, imperfección u omisión de forma que no perjudicare los derechos sustanciales del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 83; Fed. R. Crim. P. 52(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 960.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Contrarreferencias.

Derechos del acusado en general, Véase la sec. 11 de este título.

Derechos sustanciales del acusado, veanse las Reglas 2, 38 y 188 de este apéndice.

Enmiendas a la acusación, denuncia o escrito de especificaciones, Véase la Regla 38 de este apéndice.

Regla 37. ACUMULACIÓN DE DELITOS Y DE ACUSADOS.

(a) Acumulación de delitos. En la misma acusación o denuncia se podrán imputar dos o más delitos, en cargos por separado para cada uno de ellos, si los delitos imputados fueren de igual o

similar naturaleza, o hubieren surgido del mismo acto o transacción, o de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí o que constituyeren partes de un plan común. Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse en los demás cargos por referencia.

(b) Inclusión de varios acusados. En la misma acusación o denuncia se podrán incluir dos o más acusados si se les imputare el haber participado en el mismo acto o transacción o en la misma serie de actos o transacciones, constitutivos del delito o delitos imputados. Se podrá incluir a dichos acusados en uno o más cargos conjunta o separadamente, y no se tendrá que incluir a todos los acusados en cada cargo.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 77; Fed. R. Crim. P. 8; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 954.

Contrarreferencias.

Alegaciones en la alternativa, Véase la Regla 50 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

Las normas de hermenéutica que nos exigen interpretar los estatutos de forma integrada, concluimos que el juicio simultáneo al que alude el citado Art. 79 del Código Penal se refiere a las instancias de acumulación descritas en la Regla 37(a) de **Procedimiento Criminal**. Por tanto, para que aplique el tratamiento dado al concurso real por el Art. 79 del Código Penal, es necesario que los delitos en concurso sean de igual o similar naturaleza, surjan del mismo acto o transacción, surjan de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí, o sean parte de un plan común. 2008 DTS 063 Pueblo v. Alvarez Vargas, 2008 TSPR 063

No constituye error perjudicial que justifique la revocación de una sentencia **criminal** el hecho que sea recibida por el jurado una acusación que contiene dos cargos, uno de los cuales había sido archivado, cuando la acusación contiene dos modalidades de un solo delito y no hace referencia a delito anterior alguno que hubiese cometido el acusado. Pueblo v. Martínez Ríos, 109 D.P.R. 303 (1979).

Un fiscal no tiene la obligación de acumular la imputación de dos o más delitos en la misma acusación o denuncia, aun cuando surjan del mismo acto o transacción, más la práctica reconocidamente más recomendable es acumular en una misma acusación o denuncia dos o más delitos, en cargos por separado, si los delitos imputados fueren de igual o similar naturaleza o hubieren surgido del mismo acto o transacción. Fuentes Morales v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 705 (1974).

Cuando no se trata de una sola transacción ni de una serie de actos continuos puestos en movimiento por un solo impulso-un delito continuo-son validos los distintos cargos formulados por el fiscal contra un acusado. Pueblo v. Bell Pound, 101 D.P.R. 41 (1973).

Acelerar la administración de la justicia es el propósito que persigue el autorizar la inclusión de varios acusados en una sola acusación, así como la celebración conjunta de varios casos contra distintos acusados. Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971).

Procede la celebración de juicios conjuntos únicamente si los actos imputados en las acusaciones podían haber sido incluidos en una sola acusación. Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971).

En la interpretación de esta regla y la Regla 89, ambas reglas deben ser consideradas conjuntamente. Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971).

Regla 38. ENMIENDAS A LA ACUSACIÓN, DENUNCIA O ESCRITO DE ESPECIFICACIONES.

(a) Subsanación de defectos de forma. Si la acusación, la denuncia o un escrito de especificaciones adolecieren de algún defecto, imperfección u omisión de forma aludido en la Regla 36, el tribunal podrá permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias para subsanarlo. En ausencia de enmienda, dicho defecto, imperfección u omisión se entenderá subsanado una vez rendido el veredicto del jurado o el fallo del tribunal.

(b) Subsanación de defecto sustancial. Si la acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventilare originalmente el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo. Si se tratare de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le celebre de nuevo el acto de la lectura de la acusación. Si se tratare de una denuncia, el acusado tendrá derecho a que el juicio se le celebre después de los cinco (5) días siguientes a aquél en que se hiciere la enmienda.

(c) Adición de cargos o de acusados. Antes de comenzado el juicio el Tribunal de Distrito podrá permitir enmiendas a la denuncia para añadir nuevos cargos, a [o] nuevos acusados a quienes se les hubieren celebrado los procedimientos preliminares provistos en las Reglas 6, 7 y 22. En tales casos, los acusados tendrán derecho a que el juicio se les celebre después de los cinco (5) días siguientes a aquél en que se hiciere la enmienda.

(d) Incongruencia entre las alegaciones y la prueba. El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a la denuncia o a un escrito de especificaciones en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, en caso de que hubiere incongruencia entre las alegaciones y la prueba. La incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado; pero el tribunal, siempre que el acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si es de opinión que los derechos sustanciales del acusado se han perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado o ante el mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según el tribunal determinare.

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, no incluido en éste, o estableciere la comisión de un delito fuera de la competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobreseerá el proceso.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 83 y 158; Fed. R. Crim. P. 7(a); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 960 y 1009; Código modelo, R. 184.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Contrarreferencias.

Derechos del acusado en general, Véase la sec. 11 de este título.

Derechos sustanciales del acusado, veanse las Reglas 2, 36 y 188 de este apéndice.
Enmiendas a la orden de arresto o citación, Véase la Regla 9 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Incongruencia.
3. Enmienda a la acusación.

1. En general.

Determinada la existencia de causa probable para un arresto y radicada subsiguientemente una acusación, aun cuando imperfecta, opera la interrupción del término prescriptivo de un año señalado para el delito de conspiración, y no procede por tanto una moción para desestimar la acusación enmendada que ya transcurrido el año presente el fiscal, y la cual surtió el efecto, bajo esta regla, de subsanar los defectos de la acusación original. *Rabell Martínez v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 39 (1974).

Las disposiciones de esta regla deben ser interpretadas y aplicadas no solamente de modo que aseguren la tramitación justa de todo **procedimiento** y eviten dilaciones y gastos injustificados, sino que deben aplicarse de forma que se logre la liberalidad y flexibilidad en los procedimientos criminales, salvaguardando siempre los derechos del acusado. *Pueblo v. Gonzalez*, 97 D.P.R. 541 (1969).

Una enmienda en corte abierta a una acusación aclarando la forma en que ocurrieron los hechos delictivos, enmienda que no era necesaria para poder imputar al acusado la comisión del delito y que no perjudicaba los derechos sustanciales del acusado, no obliga al juez sentenciador a suspender la vista del proceso. *Pueblo v. López Jimenez*, 96 D.P.R. 132 (1968).

El propósito de esta regla es impedir que se malogre la administración de la justicia cuando existen discrepancias entre la prueba y la acusación, pero salvaguardando a la vez los derechos de un acusado a tener un juicio imparcial y justo con amplia oportunidad de preparar su defensa. *Rios Mora v. Tribunal Superior*, 95 D.P.R. 117 (1967).

2. Incongruencia.

Si el desacuerdo entre las alegaciones y la prueba es de tal naturaleza que afecta los derechos sustanciales del acusado, el foro de instancia debiera posponer el juicio, pero nunca absolver al acusado. Únicamente cuando la incongruencia es de tal naturaleza que la prueba establece un delito distinto no incluido se debiera disolver el jurado y sobreseer el proceso. *Pueblo v. Flores Betancourt*, 124 D.P.R. 867 (1989).

Solamente si se perjudican los derechos sustanciales de un acusado puede el desacuerdo entre las alegaciones y la prueba provocar las consecuencias que expone el inciso (d) de esta regla, no produciéndose tal perjuicio, por regla general, a menos que la incongruencia sea de tal orden que impida u obstaculice de modo significativo la preparación de la defensa o exponga al acusado a la posibilidad de ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. *Pueblo v. Santiago Cedeno*, 106 D.P.R. 663 (1978).

No existe incongruencia alguna entre las alegaciones en una acusación por asesinato en primer grado y la prueba desfilada que justifique la revocación de la sentencia dictada contra el acusado, por el hecho de que la prueba establezca que el acusado estaba acechando a la víctima y en la acusación no exista tal alegación. *Pueblo v. Santiago Cedeno*, 106 D.P.R. 663 (1978).

Un tribunal tiene facultad, bajo el inciso (d) de esta regla, para permitir, al terminar la prueba de cargo y ante una solicitud del abogado de los acusados que se les absolviera por una argumentada incongruencia entre la prueba y las alegaciones, para conceder permiso al fiscal a los fines de dar por enmendadas

ciertas acusaciones por ataque para cometer asesinato, robo y por infringir la Ley de Armas, de manera que se alegara, conforme a la prueba desfilada, que los acusados actuaron en concierto y comun acuerdo entre si y con una tercera persona, enmiendas que no trataban de introducir a las acusaciones ningun elemento que afectaba sustancialmente los derechos de los acusados, y el tribunal sentenciador le concedio un receso del juicio por un término que efectivamente se extendio a más de dos meses a los fines de que la defensa pudiera controvertir nuevos elementos introducidos por las enmiendas a las acusaciones. Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977).

Concedido permiso al fiscal para introducir enmiendas a una acusación para conformarla a la prueba desfilada de acuerdo con las disposiciones de esta regla, no hay necesidad de nueva lectura de la acusación. Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977).

Planteada ante un tribunal la aplicación de esta regla-al fiscal solicitar, después de terminada la prueba de cargo, una enmienda a la acusación y a una especificación de particulares por existir una incongruencia entre dichos documentos y la prueba-la defensa no puede objetar a que se disuelva el jurado y se celebre un nuevo juicio ante un jurado distinto, y al mismo tiempo objetar a que se continuara el juicio que se estaba celebrando. Rios Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 117 (1967).

3. Enmienda a la acusación.

La subsanación por enmienda de un defecto de la acusación-aun cuando se trate de un defecto sustancial-no requiere la celebración de una nueva vista preliminar. Pueblo v. Vélez Pumarejo, 113 D.P.R. 349 (1982).

Un acusado no puede levantar en apelación un supuesto error de que el tribunal sentenciador erro al permitir que la acusación correspondiente se enmendara el dia originalmente señalado para el juicio, enmiendas que adicionaron alegaciones fundamentales cuando, en el dia señalado para el juicio, dicho acusado dio por leida la acusación enmendada, ratifico la alegación de inocencia y, al ser suspendida la vista para otro dia, comparecio y nuevamente dio por leida la acusación, ratifico su alegación de inocencia y renuncio a ser juzgado por jurado, renuncia que le fue aceptada. Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977).

Enmendada una acusación original previo permiso del tribunal pasado el término prescriptivo del delito imputado, no ha habido interrupción del tracto procesal ni se ha roto la secuencia acusatoria de tal modo que permita el correr del término prescriptivo del delito. Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 39 (1974).

Concedido validamente un permiso al fiscal para enmendar una acusación, un juez no tiene que ordenar la radicación de una nueva acusación cuando la originalmente radicada no se archivo en virtud de haberse interpuesto contra ella la antigua excepción perentoria o una moción para desestimar. Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827 (1970).

Una enmienda a una acusación introducida después de presentar la defensa su prueba, que no alega un delito distinto al imputado en la acusación original, no constituye fundamento para archivar el proceso **criminal** bajo las disposiciones del 2do. párrafo del inciso (d) de esta regla. Ortiz Baez v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 261 (1970).

A los fines de enmendar una acusación bajo las disposiciones de la Regla 38(b), son cuestiones sustanciales todos los hechos que necesariamente deben ser probados para hacer del acto imputado un delito. Pueblo v. Gonzalez, 97 D.P.R. 541 (1969).

El tribunal tiene facultad para autorizar una enmienda a una acusación que corrige una omisión en ella de elementos del delito imputado. Pueblo v. Gonzalez, 97 D.P.R. 541 (1969).

Aceptado el hecho de que una acusación no aduce suficientes hechos constitutivos de delito público, esta puede ser enmendada antes de la convicción o absolución del acusado, tras lo cual se le celebrara de nuevo el acto de la lectura de la acusación, no procediendo la desestimación de dicha acusación bajo las disposiciones de la Regla 64. Rodríguez Munoz v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 360 (1967).

Regla 39. OMISIÓN DE ALEGAR LA FECHA.

La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especifiquen la fecha o el momento en que se alega que se cometió el delito, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito.

La alegación en una acusación o denuncia al efecto de que el acusado cometió el delito se considerará como una alegación de que el delito se cometió después de creado por ley, antes de presentarse la acusación, y dentro del período de prescripción.

Todas las alegaciones en una acusación, denuncia o escrito de especificaciones se interpretarán en el sentido de que se refieren a la misma fecha o momento, a menos que se exprese lo contrario.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 78 y 82(5); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 955 y 959(5); Código modelo, R. 158.

ANOTACIONES

1. En general.

Para que una discrepancia entre la fecha que se alega en la acusación en que se cometió el delito y la fecha que se prueba en el juicio pueda considerarse fatal, deben existir por lo menos dos requisitos: (a) que la fecha sea una circunstancia esencial del delito imputado y (b) que la discrepancia afecte los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Colón Velázquez, 107 D.P.R. 843 (1978).

Aun cuando un fiscal no solicite afirmativamente enmendar una acusación en cuanto a la fecha de la comisión del delito para conformarla a la prueba presentada-delito en el cual la fecha no es un elemento esencial-el tribunal tiene facultad para, motu proprio, entender que la acusación ha sido enmendada por la prueba, siempre y cuando se pruebe que los hechos delictivos ocurrieron dentro del término prescriptivo del delito imputado. Pueblo v. Colón Velázquez, 107 D.P.R. 843 (1978).

No es fatal la omisión en una acusación de la fecha en que se cometió el delito imputado, a menos que fuese una alegación necesaria para imputar un delito. Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969).

Un acusado no queda perjudicado por la omisión en la acusación original de la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos cuando tal información le fue suministrada a dicho acusado con antelación a la celebración del juicio. Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969).

Regla 40. OMISIÓN DE ALEGAR EL SITIO.

La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especifiquen el sitio exacto en donde se alega que se cometió el delito, siendo bastante la alegación de que el mismo se cometió en un

sitio dentro de la competencia del tribunal, a menos que una alegación en aquel sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito.

Todas las alegaciones en una acusación, denuncia o escrito de especificaciones se interpretarán en el sentido de que se refieren al mismo sitio, a menos que se expresare lo contrario.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 82(4); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 959(4); Código modelo, R. 159.

ANOTACIONES

1. En general.

En acusaciones por los delitos de poseer, vender, ocultar y transportar heroína, es esencial alegar donde se cometió el delito; pero en una acusación por venderla no hay que alegar el nombre del comprador. Pueblo v. Méndez Cabo, 91 D.P.R. 851 (1965).

En casos de escalamiento, la identificación de la propiedad escalada es esencial, y cuando se identifica como perteneciente a una persona, sin anadir más datos, y de la prueba aparece que es de otra, la incongruencia es fatal; pero si aparece que la estructura estaba siendo poseída por la persona designada en la acusación como propietaria de la misma, la incongruencia no resulta fatal. Pueblo v. Medina Walker, 90 D.P.R. 650 (1964).

Regla 41. ALEGACIÓN DE SENTENCIA O **PROCEDIMIENTO.**

Al referirse una acusación o denuncia a una sentencia, o a un **procedimiento** ante cualquier tribunal o funcionario, civil o militar, no será necesario alegar los hechos que confieran jurisdicción a dicho tribunal o funcionario, sino que bastará con alegar en términos generales que la sentencia se dictó o que el **procedimiento** se llevó a cabo, de modo que se identifiquen los mismos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 85; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 962; Código modelo, R. 174.

Regla 42. ALEGACIÓN ERRONEA EN CUANTO A LA PERSONA PERJUDICADA.

Cuando un delito ocasionare la realización de un daño particular, o la tentativa para realizarlo, y en sus demás particulares se describiere con claridad, se considerará como defecto de forma una alegación errónea con respecto a la persona perjudicada o que se intentó perjudicar.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 79; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 956.

Regla 43. ALEGACIONES EN CUANTO A COAUTORES O COOPERADORES

Al acusarse a personas como coautores en la comisión de un delito, por haber ayudado, forzado, inducido, provocado o instigado a su comisión, no será necesario hacer en cuanto a ella más alegaciones que las requeridas contra el principal o autor personal de los hechos. [Vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(Mayo 27, 1980, Núm. 64, p. 172; septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 5 y 20, vigente hasta el 30 de abril de 2005.)

Regla 43. ALEGACIONES EN CUANTO A COAUTORES O COOPERADORES

Al acusarse a personas como coautores o cooperadores en la comisión de un delito, por haber ayudado, forzado, inducido, provocado, instigado o cooperado a su comisión, no será necesario hacer en cuanto a ella más alegaciones que las requeridas contra el principal o autor personal de los hechos. [Efectiva el 1 de mayo de 2005

(Mayo 27, 1980, Núm. 64, p. 172; septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 5, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 93; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 971; Código modelo, R. 181.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 añadió "o cooperadores" después de "coautores" y "o cooperado" después de "instigado", y suprimio "o" después de "provocado".

-1980, ley 64. La ley de 1980 sustituyó "a personas complicadas" con "a personas como coautores", y "ayudado, aconsejado, o instigado" con "ayudado, forzado, inducido, provocado o instigado".

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 64, p. 172.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Encubridores, Véase la sec. 3173 del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Posesión constructiva.

1. En general.

Aunque la mera presencia durante la comisión de un delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción, este hecho puede considerarse junto con las otras circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de la determinación de responsabilidad. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 117 D.P.R. 283 (1986).

Para imponer responsabilidad penal no es indispensable que el acusado ejecute personalmente el acto delictivo y basta con su presencia pasiva, siempre que su responsabilidad como coautor pueda establecerse por actos anteriores, o como el resultado de una conspiración en que participo, o de un designio común. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 117 D.P.R. 283 (1986).

2. Posesión constructiva.

La posesión ilegal de armas o de sustancias controladas no se refiere solamente a la tenencia física inmediata por un individuo sino que incluye la llamada posesión constructiva, que es la posesión común que ocurre cuando varias personas, con conocimiento, comparten el control sobre el artículo delictivo.

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Cuando una persona se combina con otra para cometer un acto ilegal, cada una de ellas es responsable criminalmente por los actos de su socio cometidos al ejecutarse el designio comun. Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183 (1964).

Regla 44. PROCESOS CONTRA COAUTORES.

Un coautor podrá ser acusado, juzgado y castigado aunque el autor no fuere acusado ni juzgado, o aunque hubiere sido juzgado y absuelto.

(Mayo 27, 1980, Núm. 66, p. 175; 2003, ley 230, art. 1).

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 94; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 972.

Enmiendas

-2003, ley 230- Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 230 de 2 de septiembre de 2003. En la ley tiene jurisprudencia importante de Puerto Rico y la ley original de California referente a la Regla.

-La ley de 2003 sustituyo "encubridor(es)" con "coautor(es)" en el rubro y el texto de esta sección.

-1980, ley 66. La ley de 1980 sustituyo complice(s) con encubridor(es) en el rubro y en el texto.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 66, p. 175.

Septiembre 2, 2003, Núm. 230.

Contrarreferencias.

Castigo; ayuda para cometer un delito menos grave, Véase la sec. 4433 del Título 33.

Regla 45. OMISIÓN DE ALEGAR VALOR O PRECIO.

La acusación o la denuncia serán suficientes aunque no especificaren el valor o precio de la propiedad afectada a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito. Bastará con alegar que el valor o precio de la propiedad iguala o excede el valor o precio determinativo del delito. No habrá que alegar los hechos que determinan dicho valor o precio.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 23; Código modelo, R. 161.

Contrarreferencias.

Apropiación ilegal y apropiación ilegal agravada, veanse las secs. 4271 y 4272 del Título 33.

Regla 46. ALEGACIÓN SOBRE INTENCIÓN DE DEFRAUDAR.

Una alegación sobre intención de defraudar o de causar daño será suficiente sin que se alegue la intención de defraudar o de causar daño a determinada persona en particular, a menos que una alegación en ese sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 8; Código modelo, R. 163(2).

Regla 47. ALEGACIÓN CON RELACIÓN A DOCUMENTOS.

Cuando en una acusación o denuncia fuere necesario hacer una alegación con relación a un documento bastará con referirse a dicho documento por cualquier nombre mediante el cual usualmente fuere conocido o identificado, y no tendrá que incluirse una copia de todo o de parte del mismo.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 169.

Contrarreferencias.

Interpretación de frases y palabras y definiciones, veanse las secs. 3021 y 3022 del Título 33.

Regla 48. ALEGACIÓN DE CONVICCIÓN ANTERIOR.

Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 172.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Doctrina anterior.

1. En general.

Los incisos (b)(4) y (b)(5) de la sec. 5204 del Título 9, en cuanto eximen al fiscal de alegar la reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez, violan la cláusula del debido proceso de ley y contravienen a la Regla 48 de los Procedimientos Criminales. 2006 DTS 158 (2006) Pueblo v. Montero, 2006 TSPR 158 (2006); 169 D.P.R. ____ (2005).

No se cumple con el requisito de adecuada notificación de los cargos presentados en contra del acusado, cuando se permite que el fiscal no alegue la condición de reincidente en la denuncia o acusación. 2006 DTS 158 (2006) Pueblo v. Montero, 2006 TSPR 158 (2006); 169 D.P.R. ____ (2005).

Es admisible en evidencia prueba sobre actos cometidos por el acusado contra una de las víctimas con anterioridad a la fecha de la comisión del delito que se le imputa cuando dicha prueba es admitida a los fines de demostrar que el acusado es una persona propensa a cometer dichos actos, pues de hecho ha cometido en el pasado varios iguales o parecidos. Pueblo v. Gonzalez Soto, 103 D.P.R. 48 (1974).

Aun cuando la norma general es al efecto de que no es admisible prueba de otros delitos cometidos por el acusado distintos a aquel cuya comisión se ventila en el juicio, salvo determinadas circunstancias la necesidad de hacer justicia ha llevado a los tribunales a crear y a aceptar una serie de excepciones a dicha norma general. Pueblo v. Gonzalez Soto, 103 D.P.R. 48 (1974).

Es admisible en un proceso **criminal** prueba de otros delitos anteriores cometidos por el acusado (a) cuando se trata de transacciones similares coetaneas con los hechos del delito imputado en la acusación- en este caso la prueba de otro delito se admite para probar un plan preconcebido o la intención de defraudar; (b) si el delito anterior (i) es un hecho pertinente para establecer la comisión del crimen por el cual se le juzga, o (ii) forma parte del *res gestae*, o (iii) puede demostrar motivo, premeditación, malicia o un designio comun, y (iv) forma parte de la misma transacción; (c) de declarar el acusado, (i) puede el fiscal traer prueba de sus anteriores delitos graves como parte del contrainterrogatorio del acusado, y (ii) si este abre la puerta a su pasado y declara con el proposito de establecer su buena reputación, es admisible prueba de cualquier delito anterior, con el objeto de impugnar su veracidad. Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972); Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969); Pueblo v. Cruz Manfredi, 94 D.P.R. 163 (1967); Pueblo v. Martínez Lucena, 92 D.P.R. 881 (1965).

En un proceso **criminal** no es admisible, como regla general, prueba de otros delitos cometidos por un acusado. Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972).

Constituye un error fundamental de derecho que justifica la revocación de la sentencia dictada el que un juez sentenciador, una vez el acusado ha aceptado una convicción anterior por delito grave antes de darse lectura a la acusación, permita al fiscal introducir evidencia para establecer dicho hecho, irrespectivamente de que la defensa no hubiera objetado la misma en el juicio. Rivera Rivera v. Jefe Penitenciaria, 99 D.P.R. 81 (1970).

Admitida por el acusado la alegación de convicción anterior contenida en la acusación, el fiscal puede presentar evidencia sobre dicha convicción anterior y sobre otros delitos por el cometidos-acusado quien habia alegado defensa propia-cuando el tribunal admite prueba sobre crímenes de sangre cometidos por la víctima del asesinato. Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827 (1970).

No comete error un juez sentenciador al admitir prueba sobre otros delitos cometidos por el acusado en un caso de asesinato en primer grado, cuando dicho juez instruyo específicamente al jurado que dicha prueba era admitida únicamente a los fines de demostrar el móvil o designio del acusado para cometer el delito que se le imputaba. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969).

Negada por el acusado una alegación, el fiscal viene obligado a sustanciarla con prueba presentada ante el jurado, viniendo obligado este a manifestarse en su veredicto sobre dicha alegación. Pueblo v. Quiñones Torres, 95 D.P.R. 659 (1968).

Aceptada previamente por un acusado la anterior convicción por delito grave, la misma no puede ser llevada ante el jurado so pretexto de impugnar la veracidad del testimonio que presto el acusado, maxime cuando la prueba de cargo tiene serias fallas o lagunas y es susceptible de interpretarse en pro o en contra del acusado. Pueblo v. Hernández Pérez, 94 D.P.R. 616 (1967).

Únicamente cuando el acusado niega una anterior convicción por delito grave es que el jurado debe recibir prueba y determinar si tal alegación sobre convicción anterior contenida en la acusación es o no cierta. Pueblo v. Hernández Pérez, 94 D.P.R. 616 (1967).

2. Doctrina anterior.

El Código Penal contiene disposiciones que permiten el castigo del delito subsiguiente, pero tales disposiciones solo afectan la discreción del juez sentenciador al imponer la pena una vez que el acusado ha sido convicto ya que, a tenor con esta regla, las convicciones anteriores del acusado no se someteran al jurado si el acusado admite la alegación de subsiguiente. Pueblo v. Caban Rosa, 92 D.P.R. 866 (1965).

Un acusado que ocupe la silla testifical para declarar en su propio interés no puede quejarse de que el juez y el fiscal le preguntaran sobre convicciones anteriores, maxime cuando dichas preguntas no lesionaron los derechos del acusado, ya que fue el propio acusado, en el interrogatorio directo, quien hablo de investigaciones en otros casos de que el habia sido objeto y sobre el resultado de esas investigaciones. Pueblo v. Soto Requene, 91 D.P.R. 143 (1964).

En un **procedimiento criminal** por un delito subsiguiente, una vez el fiscal establece mediante copia de la sentencia que una persona del mismo nombre que el acusado fue sentenciada previamente por otro delito, es a este a quien le incumbe como cuestion de defensa demostrar que no es la misma persona. Pueblo v. Huertas Soto, 90 D.P.R. 170 (1964).

Regla 49. OMISIÓN DE NEGAR EXCEPCIONES.

Una acusación o denuncia no será insuficiente por razón de que no se nieguen en ellas las excepciones o excusas establecidas por ley, a menos que la excepción o excusa hubiere sido incorporada formando parte inseparable de la definición del delito, de tal manera que si se omitiere negar dicha excepción o excusa la acusación o denuncia no cumpliría con los requisitos de la Regla 35.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 175.

Regla 50. ALEGACIONES EN LA ALTERNATIVA.

Una acusación o denuncia por un delito que se podría cometer mediante la realización de uno o más actos, o por uno o más medios, o con una o más intenciones, o con uno o más resultados, no será insuficiente por razón de que se aleguen en la alternativa dos o más de dichos actos, medios, intenciones o resultados.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 77; Fed. R. Crim. P. 7(c); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 954; Código modelo, R. 176.

Contrarreferencias.

Acumulación de delitos y acusados, Véase la Regla 37 de este apéndice.

V. ARRESTO DEL ACUSADO DESPUÉS DE LA ACUSACIÓN

Regla 51. ORDEN DE ARRESTO DESPUÉS DE PRESENTADA LA ACUSACIÓN.

Si los hechos alegados en la acusación constituyeren delito y no se hubiere arrestado al acusado por dicho delito con anterioridad a la presentación de la misma, el tribunal deberá expedir la orden correspondiente para su arresto. El funcionario que diligenciar la orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el tribunal que expidió la orden o ante cualquier magistrado disponible, a los efectos de que se le fije fianza al acusado.

El término para diligenciar una orden de arresto será igual al término prescriptivo del delito imputado, computado a partir de la expedición de la orden de arresto. En el caso de delitos que tengan un término prescriptivo mayor de cinco (5) años o que carezcan del mismo, el término

para diligenciar una orden de arresto será de cinco (5) años computado a partir de la expedición de la orden de arresto.

En circunstancias excepcionales, el juez podrá aceptar como válida una orden de arresto diligenciada fuera del término establecido. A tales efectos, el juez deberá tomar en consideración, entre otros, los siguientes factores:

- (1) Gestiones oficiales tendentes a arrestar al imputado.
 - (2) Si el acusado conoce de la orden de arresto en su contra.
 - (3) Si el acusado ha huido o se ha ocultado.
 - (4) La disponibilidad del acusado a los fines de haberse podido realizar el diligenciamiento efectivo.
 - (5) Si se conoce o debió conocerse su dirección o paradero.
 - (6) Si se ha mudado de dirección.
 - (7) Si ha salido de la jurisdicción del Estado Libre Asociado.
 - (8) Su movilidad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado.
- (Enmendado en el 2003, ley 146, art. 1)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 73, 74, 138 y 318; Fed. R. Crim. P. 9; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 983; Código modelo, R. 195.

Enmiendas

-2003, ley 146 - Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 de 3 de septiembre de 2003. Tiene jurisprudencia importante de Puerto Rico y los Estados Unidos referentes a esta Regla.

-La ley de 2003 añadió los segundo y tercer párrafos.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Septiembre 3, 2003, Núm. 246.

Disposiciones Constitucionales.

Expedición de mandamientos de arresto, Véase la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Disposiciones especiales.

La enmienda a esta regla adoptada por el Tribunal Supremo en Febrero 8, 1966 y remitida a la Asamblea Legislativa el día 10 de los propios mes y año fue desaprobada por la Ley de Junio 22, 1966, Núm. 100, p. 338, art. 2.

VI. ACTO DE LECTURA DE LA ACUSACIÓN

Regla 52. CUANDO SE LEERA LA ACUSACIÓN.

En los casos en que se presentare acusación, antes de someterse a juicio al acusado deberá llevarse al tribunal para el acto en sesión pública de la lectura de la misma, a no ser que en ese acto el acusado renunciare a dicha lectura, y para que formule su alegación. Tampoco será necesaria la lectura de la acusación si con anterioridad se hubiere entregado personalmente al

acusado una copia de la misma y estando representado por abogado, hubiere respondido o cuando no hubiere contestado y ha transcurrido el término de diez (10) días para hacer alegación, en cuyo caso se registrará una alegación de no culpable. Sujeto a lo dispuesto en la Regla 243, el acusado deberá hallarse presente para la lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Se le entregará una copia de la acusación con una lista de los testigos, antes de que se le requiera que formule alegación alguna.

Cuando en los casos en que por virtud de renuncia de jurisdicción sobre un menor se le procese como adulto se le entregarán, a petición de éste, las declaraciones juradas de los testigos que haya utilizado en la vista el Procurador para Asuntos de Menores para determinar causa probable conforme a la Regla 2.10 de **Procedimiento** para Asuntos de Menores, Ap. I-A de este título. (Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 9; Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221, sec. 3, ef. 30 días después de Agosto 22, 1990.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 131 a 133 y 142; Fed. R. Crim. P. 10; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 976 a 978; Código modelo, R. 201.

Enmiendas

-1990, ley 55. La ley de 1990 añadió el segundo párrafo.

-1987, ley 29. La ley de 1987 añadió la segunda oración, redesigno la anterior segunda como tercera y le añadió "en los casos ... dicho acto".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Agosto 22, 1990, Núm. 55, p. 221.

ANOTACIONES

1. En general.

2. Testigos.

1. En general.

Presentada una acusación imputándole a un acusado la posesión y venta de material de bolita, no es necesario que se celebre nuevamente el acto de la lectura de la acusación una vez el tribunal autorice la presentación de una acusación enmendada imputándole únicamente a dicho acusado la venta de dicho material. *Pueblo v. Belen*, 96 D.P.R. 669 (1968).

Es mandatorio el acto de lectura de una acusación enmendada únicamente cuando se introduce una enmienda sustancial a la acusación original. *Pueblo v. Belen*, 96 D.P.R. 669 (1968).

Cuando la prueba revela que un acusado renunció a que se le leyera la acusación habiéndosele entregado copia de la misma, este no puede alegar en apelación que su convicción es errónea por no habersele leído dicha acusación. *Pueblo v. Díaz Torres*, 89 D.P.R. 720 (1963).

2. Testigos.

El tribunal dentro de su discreción puede permitir la inclusión en el juicio de testigos no anunciados previamente por el fiscal a la defensa. Si la defensa no alega sorpresa, perjuicio o necesidad de tiempo para refutar declaraciones, no es necesario concederle tiempo para prepararse. *Pueblo v. Ramos Alvarez*, 118 D.P.R. 782 (1987).

La protesta de un apelante porque el fiscal no puso a su disposición declaraciones juradas de los testigos que ni figuraban al dorso de la acusación, ni declararon en el juicio, requiere alguna demostración afirmativa de la existencia de esa prueba, de un esfuerzo por examinarla antes del juicio y de la materialidad o relevancia de la misma a la defensa. Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437 (1982).

No es tardía una moción de un fiscal presentada ocho días antes de la fecha señalada para el comienzo del juicio **criminal** en la que se solicitaba la inclusión de un testigo de cargo adicional. Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437 (1982).

La declaración de un testigo cuyo nombre no aparecía al dorso de la acusación y quien había estado en sala durante el juicio no es un motivo de revocación de una sentencia cuando dicho testigo no declaró sobre los hechos en el caso, habiendo comparecido a los fines de identificar la evidencia material a los efectos de su admisión en el caso. Pueblo v. Aquino Aquino, 90 D.P.R. 450 (1964).

El requisito legal de que al acusado se le suministre la lista de los testigos de cargo tiene como fundamento el que este pueda prepararse adecuadamente para su defensa. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964).

Un acusado puede entrevistar a todas aquellas personas que conozcan de los hechos de su caso, aunque estas hayan sido examinadas por el fiscal y se hubieren de utilizar como prueba de cargo. Ello no presenta para el abogado de la defensa un problema de ética o de práctica indebida. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964).

En circunstancias normales, el Estado no puede impedir que un abogado de la defensa tenga acceso, con el fin de entrevistarle, a un testigo de cargo que se encuentre bajo su custodia o en alguna forma recluido en una de sus instituciones, ni puede afirmativamente ordenar que tal entrevista no se celebre por el hecho de tratarse de un testigo de El Pueblo. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964).

Bajo el estado de derecho procesal positivo, a un acusado no le asiste la prerrogativa de obtener una orden mandatoria de un tribunal para que los testigos mencionados al dorso de la acusación comparezcan a la sala del tribunal de instancia antes de la fecha del juicio a fin de ser entrevistados o interrogados por la defensa, y a invocar el poder coercitivo del tribunal a tal efecto. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964).

Regla 53. NECESIDAD DEL ACTO DE LECTURA EN CASOS DE DENUNCIAS.

En los casos en que se imputare mediante denuncia la comisión de un delito menos grave (misdemeanor) podrá prescindirse del acto de la lectura de la denuncia, pero ésta se le leerá al acusado al comenzar el juicio.

Al citarse al acusado para juicio deberá entregársele una copia de la denuncia.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 29 y 132; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 977.

Contrarreferencias.

Delitos menos graves, Véase la sec. 3044 del Título 33.

Regla 54. LECTURA DE LA ACUSACIÓN EN CASOS DE COACUSADOS.

La lectura de una acusación formulada contra dos o más coacusados se podrá efectuar separada o conjuntamente, a discreción del tribunal.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 131; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 976; Código modelo, R. 202.

Regla 55. COMPARECENCIA DEL ACUSADO.

El tribunal podrá ordenar al funcionario que tuviere al acusado bajo custodia que lo conduzca ante su presencia para oír la acusación. Si el acusado estuviere bajo fianza, se le notificará personalmente cuándo deberá comparecer a oír la lectura de la acusación. Si el acusado no compareciere, el tribunal podrá confiscar la fianza de acuerdo con lo provisto en la Regla 227, o expedir mandamiento de arresto, o disponer ambas cosas. Dicho mandamiento de arresto se podrá diligenciar en cualquier sitio bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 133, 134 y 136; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 978 a 980 y 983; Código modelo, R. 205.

Regla 56. SALA EN QUE SE EFECTUARA LA LECTURA.

La lectura de la acusación se efectuará ante la sala del Tribunal de Primera Instancia en que se presentare, a no ser que antes de la lectura la causa se hubiere trasladado a otra sala. De haber ocurrido esto último, la lectura se efectuará en esa otra sala.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 131; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 976; Código modelo, R. 204.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Regla 57. ASISTENCIA DE ABOGADO.

Si el acusado compareciere sin abogado a responder de la acusación, el tribunal deberá informarle de su derecho a tener abogado defensor y designará un abogado para que lo represente en el acto de la lectura de la acusación y en todos los trámites siguientes, a no ser que el acusado renunciare a su derecho a asistencia de abogado o pudiere obtener uno de su propia selección. El tribunal concederá al abogado que nombre un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. Dicho abogado servirá sin costo alguno para el acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 141; Fed. R. Crim. P. 44; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 987; Código modelo, R. 203.

Contrarreferencias.

Comunicación con el arrestado, Véase la Regla 4 de este apéndice.
Suspensiones y transferencias de vistas, Véase la Regla 17 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, Ap. II-B del Título 4.
Términos para prepararse para juicio, Véase la Regla 109 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Invocación.
3. Aplicación prospectiva.
4. Nombramiento de abogado.
5. Renuncia.
6. Honorarios.
7. Actuaciones subsiguientes.

1. En general.

El derecho a asistencia de abogado incluye tener disponible un tiempo razonable para que el abogado pueda entrevistarse con el acusado y para que pueda prepararse para el juicio, dicho derecho no puede ser utilizado por el acusado para obstaculizar el trámite normal de las causas. *Pueblo v. Torres Rivera*, 137 D.P.R. 630 (1994).

Lo que constituye tiempo razonable para que el abogado se entienda con el acusado varía de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular, según el grado de sencillez o complejidad de cada uno. *Pueblo v. Torres Rivera*, 137 D.P.R. 630 (1994).

La obligación de proveer asistencia de abogado a los indigentes no recae exclusivamente sobre el Estado sino es compartida con los abogados admitidos al ejercicio de la profesión. *Ramos Acevedo v. Tribunal Superior*, 133 D.P.R. 599 (1993).

Esta regla no viola, en su faz o en su aplicación, la cláusula Constitucional sobre igual protección de las leyes. *Ramos Acevedo v. Tribunal Superior*, 133 D.P.R. 599 (1993).

Procede relevar al representante de los acusados de la representación de uno de ellos tan pronto como dicho representante alegue la existencia de incompatibilidad en sus respectivas defensas. *Pueblo v. Padilla Flores*, 127 D.P.R. 698 (1991).

El derecho a asistencia de abogado no puede invocarse como derecho absoluto en una investigación general de un crimen cuando no hay un sospechoso en específico, como por ejemplo, en una investigación general en una prisión luego de que se ha cometido un crimen. *Pueblo v. Falu Martínez*, 116 D.P.R. 828 (1986).

El derecho a asistencia de abogado no quiere decir el derecho a la asistencia de un abogado en particular, sino de un abogado admitido a ejercer en los tribunales, de la libre selección del acusado cuando esto es factible y en su defecto, de un defensor público o del que le provea el tribunal, y que en el caso particular de que se trate haga una defensa *bona fide* y no meramente pro forma. *Pueblo v. Rivera Navarro*, 113 D.P.R. 642 (1982); *Pueblo v. Pardo Toro*, 90 D.P.R. 635 (1964).

Un acusado no queda privado de una defensa efectiva al denegar el juez una moción de suspensión del juicio por enfermedad de uno de los defensores cuando el desarrollo del proceso así lo demostro, pues dicha condición no afecto en modo alguno la militancia y habilidad de la defensa. *Pueblo v. Tursi*, 105 D.P.R. 717 (1977).

En ausencia de asistencia de abogado y de la correspondiente advertencia al acusado sobre su derecho a no declarar, el testimonio de un policía sobre manifestaciones inculpativas del acusado es inadmisibile. *Pueblo v. Torres Alvarado*, 98 D.P.R. 178 (1969).

No queda privado un acusado de una efectiva asistencia de abogado durante la lectura de su sentencia por el mero hecho de que el tribunal de instancia, en ausencia del abogado que lo represento en el juicio, le designe a otro abogado para que lo represente en dicho acto, en ausencia de una demostración por parte del acusado de que dicho abogado actuó o dejó de actuar en forma tal que le causó perjuicio, o de una demostración de los perjuicios que haya sufrido con motivo de la actuación del tribunal. *Pueblo v. Delgado Martínez*, 96 D.P.R. 720 (1968).

Un convicto indigente tiene derecho a asistencia de abogado en el unico recurso de apelación de la sentencia que lo condena. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 95 D.P.R. 718 (1968).

La regla de exclusión establecida en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), no impide en todos los casos y bajo todas las circunstancias la admisión de manifestaciones inculpativas de un acusado o sospechoso por el mero hecho de que se hayan hecho a un policía o a un fiscal. *Pueblo v. Laguna Rodríguez*, 92 D.P.R. 831 (1965).

Toda admisión o confesión de un sospechoso de haber cometido un delito, de otro modo voluntaria, que se obtenga extrajudicialmente sin asistencia de abogado no debe ser automaticamente excluida. Su admisión o exclusión en cada caso dependera de los hechos y circunstancias bajo las cuales fue obtenida. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971); *Soto Ramos v. Supert. Granja Penal*, 90 D.P.R. 731 (1964).

Cuando, como en esta jurisdicción, el suministrar ayuda de abogado a un sospechoso de haber cometido un delito es un requisito Constitucional, el derecho a que se le proporcione abogado no depende de una petición de dicho acusado. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

Es inadmisibile en un proceso criminal la confesión o las admisiones de un sospechoso detenido en la etapa acusatoria del procedimiento de investigación preliminar, cuando dicho sospechoso no fue advertido, antes de extraersele la confesión o admisiones que sustancialmente lo inculpan, de sus derechos Constitucionales absolutos a permanecer en silencio y a no inculparse, así como a tener asistencia de abogado. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

Examinados los hechos que rodearon la confesión sin asistencia de abogado prestada por el acusado-con una herida de bala en la cabeza, sangrando y semiconsciente-se concluye que ello creo una situación de fundamental injusticia que vicio el juicio que posteriormente se le celebro al acusado. *Soto Ramos v. Supert. Granja Penal*, 90 D.P.R. 731 (1964).

Un acusado tiene reconocido el derecho a asistencia legal en cuanto a todo delito, incluyendo las faltas leves que cometa. *Soto Ramos v. Supert. Granja Penal*, 90 D.P.R. 731 (1964).

2. Invocación.

El derecho a asistencia de abogado no puede invocarse como derecho absoluto en una investigación general de un crimen cuando no hay un sospechoso en específico, como por ejemplo, en una investigación general en una prisión luego de que se ha cometido un crimen. *Pueblo v. Falu Martínez*, 116 D.P.R. 828 (1986).

Bajo la Sexta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, el derecho a asistencia de abogado solo se aplica cuando ya se han iniciado procedimientos judiciales adversativos contra el imputado y no antes. *Pueblo v. Falu Martínez*, 116 D.P.R. 828 (1986).

El derecho Constitucional a estar asistido de abogado no ampara a los confinados que están segregados administrativamente durante el curso de una investigación. *Pueblo v. Falu Martínez*, 116 D.P.R. 828 (1986).

Es patentemente frívolo un señalamiento de error en apelación en que se alega que "una vez efectuado el arresto y durante la etapa investigativa a los apelantes no se les hicieron las advertencias de rigor establecidas en el caso de *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436; 86 S. Ct. 1602; 16 L. Ed. 2d 694; 10 A.L.R.3d 974 (1966), así como [que] les fue negado su derecho a estar debidamente asistidos por un abogado, a pesar de haberlo solicitado," cuando en el correspondiente juicio no se presentaron confesiones ni admisiones extraídas a los acusados en la etapa investigativa. *Pueblo v. Peterson Pietersz*, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, *Peterson v. People of Puerto Rico*, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

No tienen derecho a asistencia de abogado durante su identificación dos sospechosos de haber cometido varios delitos cuando son identificados, a iniciativa propia, por los propios perjudicados por la comisión de los crímenes, antes de que se verificara el arresto por los delitos por ellos cometidos-etapa en que todavía no había intervenido la maquinaria policial-no siendo tampoco aplicables a sospechosos en tal situación las normas sentadas en *Pueblo v. Gomez Incera*, 97 D.P.R. 249 (1969), en cuanto a la identificación de sospechosos. *Pueblo v. Bell Pound*, 101 D.P.R. 41 (1973).

Un sospechoso de haber cometido un delito, quien ha sido arrestado, no tiene derecho a requerir asistencia de abogado durante el **procedimiento** de su identificación fotográfica por un testigo de cargo-**procedimiento** que no conlleva la confrontación del acusado con el testigo-cuando el mismo se efectúa antes del juicio en la etapa anterior a la acusación. *Pueblo v. Morales Romero*, 100 D.P.R. 436 (1972).

La doctrina de *United States v. Wade*, 388 U.S. 218; 87 S. Ct. 1926; 18 L. Ed. 2d 1149 (1967), no se aplica al acto de identificación fotográfica de un sospechoso antes de radicarse acusación. *Pueblo v. Morales Romero*, 100 D.P.R. 436 (1972).

Un acusado tiene derecho a la asistencia de abogado al ser presentado para identificación en unión a otras personas. *Pueblo v. Gomez Incera*, 97 D.P.R. 249 (1969).

Un acusado, para el 14 de agosto de 1962, no tenía derecho a exigir que se le permitiera asistencia legal desde el momento mismo de su arresto, más una convicción no podía prevalecer si la ausencia de abogado en una etapa anterior a su proceso creaba una situación tal que trasladada al juicio impedía un proceso justo e imparcial. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

No está viciada de nulidad una confesión de un acusado obtenida el 14 de agosto de 1962 en la etapa investigativa de un caso ante un juez de paz sin estar el arrestado asistido de abogado, máxime cuando el acusado no demuestra que la ausencia de un abogado le creó una situación tal que impedía un juicio justo e imparcial. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

La posibilidad real de que pueda causarse perjuicio sustancial al acusado es el criterio rector que debe usar un tribunal para determinar la necesidad de asistencia de abogado en las etapas anteriores al juicio. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 96 D.P.R. 397 (1968).

En un proceso por falsificación, los especímenes de las firmas alegadamente falsificadas tomadas al sospechoso en una etapa crítica de la investigación de dicho delito sin estar asistido de abogado, equivalen prácticamente a las admisiones orales incriminatorias de un sospechoso a que se alude en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965). *Pueblo v. Tribunal Superior*, 96 D.P.R. 397 (1968).

Una declaración prestada por un sospechoso de haber cometido el delito de violación-después de advertirle el fiscal de su derecho a no declarar y de su derecho a que este presente un abogado en la tramitación de la declaración-al efecto de que el había realizado el acto carnal con la perjudicada a invitación y con el consentimiento de esta-fundamento en que apoyaba su defensa junto a su alegada locura-es admisible como prueba de refutación (*rebuttal*) en el juicio que luego se le celebra, a los fines de impugnar la prueba de locura aducida por el acusado, no siendo de aplicación la doctrina sentada en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965). *Pueblo v. Soto Quintana*, 93 D.P.R. 26 (1966).

La norma adoptada en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), de rechazar la confesión de un acusado obtenida mientras se encuentra bajo custodia policiaca cuando se le interroga con el propósito de obtener manifestaciones incriminatorias, en ausencia de las advertencias sobre su derecho Constitucional a permanecer en silencio, no incriminarse y obtener asistencia de abogado, no impide en todos los casos y bajo todas las circunstancias la admisión de tales manifestaciones por el mero hecho de que se hayan hecho a un policía, maxime si las manifestaciones incriminatorias fueron hechas espontáneamente por el apelante en su domicilio al agente policiaco que lo fue a buscar. *Pueblo v. Laguna Rodríguez*, 92 D.P.R. 831 (1965).

No son admisibles en evidencia en el proceso **criminal** la confesión de un acusado o sospechoso o las admisiones que le perjudiquen sustancialmente, obtenidas de el bajo custodia de la Policía u otra autoridad competente mientras se le interroga con el fin de obtener manifestaciones incriminatorias: (1) cuando no fue advertido de manera eficaz por la Policía u otra autoridad competente, antes de declarar, de su derecho Constitucional absoluto a permanecer en silencio y a no incriminarse, y (2) cuando no fue advertido por la Policía u otra autoridad competente, antes de declarar, de su derecho a tener ayuda de abogado, sin que el hecho de no haber sido solicitada afirmativamente por el acusado releve de la obligación de advertirle su derecho a tenerla, o (3) cuando solicito consultar con abogado y no se le permitió el estar así asistido al obtenerse su declaración. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

La decisión de *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964) extiende el derecho absoluto de asistencia de abogado de la Enmienda VI de la Constitución federal a la etapa de investigación del delito, derecho que también hace extensivo a los estados a través de *Gideon v. Wainwright*, 372 U.S. 335; 83 S. Ct. 792; 9 L. Ed. 2d 799; 93 A.L.R.2d 733 (1963), y del debido **procedimiento** de ley de la Enmienda XIV, y si bien aquí no rige por sí misma la Enmienda VI ni somos uno de los cincuenta estados de la Unión, debe tener pleno vigor en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la protección de mayor alcance sobre el derecho a asistencia legal que ofrece *Escobedo v. Illinois*, y en consecuencia no deben ya prevalecer pronunciamientos como los expresados en *Pueblo v. Rivera*, 66 D.P.R. 216 (1946), y en casos anteriores y posteriores, en el sentido de que el derecho absoluto a la asistencia de abogado en los procesos criminales no se extendía a etapas en la persecución del delito

anteriores al proceso ni a etapas anteriores a la radicación de la acusación. Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, Rivera Escute v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, Escute v. Delgado, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

Al sospechoso detenido en una etapa ya acusatoria debe advertirsele el derecho a tener asistencia de abogado antes de extraerse una confesión o admisiones que sustancialmente lo incriminen; y en ausencia de esas advertencias, y de permitirle tener la asistencia de abogado si la desea por razón de su derecho Constitucional, la confesión es inadmisibile en su proceso. Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, Rivera Escute v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, Escute v. Delgado, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

Un acusado queda privado de su derecho a asistencia de abogado-y como consecuencia de ello ninguna confesión o declaración por el presentada puede ser usada en su contra por el Estado en un juicio **criminal**-cuando la investigación de la Policía deja de ser ya la pesquisa general de un crimen aun no aclarado, y empieza a enfilarse sobre el acusado en particular y ese acusado esta bajo la custodia policiaca, y se le interroga para sacarle declaraciones incriminatorias, y dicho acusado ha solicitado y se le ha negado la oportunidad de consultar con abogado, y la Policía no le ha advertido de manera efectiva de su derecho Constitucional absoluto de permanecer en silencio. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

No queda privado un acusado de su derecho a asistencia de abogado al producirse una confesión oral extrajudicial-y por lo tanto, la misma, como en este caso, es admisible en evidencia-cuando: (a) la misma se hace voluntariamente en un cuartel de la Policía mientras se practicaba una investigación general para determinar si la muerte de un occiso habia sido un accidente, o si se trataba de un asesinato-no estando enfilada dicha investigación contra el acusado ni contra ninguna otra persona como sospechosa de la comisión de un crimen; (b) dicho acusado luego repite su confesión oral el mismo día en otro pueblo ante un testigo; (c) en la noche de ese mismo día confiesa por escrito ante el fiscal; (d) el Estado no nego petición alguna del acusado para emplear abogado defensor, y (e) la falta de asistencia de abogado en la investigación privada anterior al juicio no lo perjudicaron de tal manera que dicha falta de asistencia de abogado imprimiera a su juicio posterior la carencia de aquella fundamental imparcialidad esencial al concepto mismo de la justicia. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

Cuando del record no surge que el acusado solicitara entrevistarse con un abogado en la investigación preliminar del delito que se le imputa y que las autoridades se negaran a ello, este no puede senalar en apelación el que se le negara el derecho de asistencia legal en dicha etapa de la investigación preliminar del delito, maxime cuando en la misma el no presto declaración ni se obtuvo evidencia para usarse en su contra en el juicio. Pueblo v. Saura Gomez, 90 D.P.R. 801 (1964).

El derecho del acusado a tener asistencia en todo momento del **procedimiento criminal** esta garantizado en esta jurisdicción, incluyendo el acto de la lectura de la acusación y el trámite en apelación. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964).

Si la ausencia de abogado en una etapa anterior a su proceso crea una situación tal que trasladada al juicio impide un proceso justo e imparcial, la convicción no debe prevalecer. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964).

Bajo las disposiciones de las Reglas 4, 22 y 23, un acusado puede exigir que se le permita asistencia legal en las etapas previas a su proceso. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964).

La garantía Constitucional a asistencia de abogado no se extiende a una moción sobre anulación de sentencia cuando, para sustanciar las alegaciones contenidas en dicha moción, no se requiere la presentación de prueba y en la misma se exponen con precisión y claridad los fundamentos que se aducen para solicitar dicha anulación. *Pueblo v. Huertas Soto*, 90 D.P.R. 170 (1964).

3. Aplicación prospectiva.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el intérprete autorizado de la Constitución de Puerto Rico y aun cuando un tribunal de Puerto Rico aplicó la Constitución de Puerto Rico usando como precedente análogo a *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964), la autoridad del Tribunal Supremo de Puerto Rico para dar solamente efecto prospectivo a su norma doctrinaria dependió de la autoridad conferida por la Constitución de Puerto Rico, según interpretada por dicho tribunal, y la corte federal de distrito no pudo decir, en un **procedimiento** subsiguiente de habeas corpus, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico carecía de autoridad para emitir una doctrina prospectiva. *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971).

Admisiones inculpativas de un acusado en un cuartel de la Policía hechas voluntariamente, sin que mediara promesa, engaño o coacción física o psicológica, son admisibles en evidencia en un juicio **criminal** celebrado con anterioridad al 26 de octubre de 1965-fecha en que se resolvió *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965)-aun cuando a dicho acusado no se le hubiera advertido de sus derechos Constitucionales absolutos a no inculparse y a tener asistencia de abogado. *Pueblo v. Vales Aviles*, 96 D.P.R. 246 (1968).

Bajo el estado de derecho vigente en 21 de octubre de 1962 y en 26 y 27 de junio de 1963, no viola el debido proceso de ley, ni el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial-y por tanto es admisible en evidencia en el correspondiente juicio-una declaración extrajudicial escrita, cuando de la misma se desprende, si bien no de la mejor manera que debió ser, que al acusado se le advirtió su derecho a no inculparse, y que lo que declarara podría utilizarse en su contra en cualquier caso, máxime cuando del estudio del record se llega a la conclusión que dicha declaración fue voluntariamente hecha, sin coacción de índole alguna. *Pueblo v. Figueroa Gonzalez*, 95 D.P.R. 98 (1967).

La regla de exclusión establecida en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), no impide en todos los casos y bajo todas las circunstancias la admisión de manifestaciones inculpativas de un acusado o sospechoso por el mero hecho de que se hayan hecho a un policía o a un fiscal. *Pueblo v. Laguna Rodríguez*, 92 D.P.R. 831 (1965).

La regla enunciada en *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964) -a los efectos de que en determinadas circunstancias un tribunal debe excluir la confesión de un acusado, por razón de la garantía Constitucional del derecho a abogado que dicho caso expande-no tiene aplicación retroactiva por vía de la anulación de un proceso celebrado o la concesión de un nuevo juicio, a casos del pasado finalmente decididos ya al anunciarse dicha regla excluidora de evidencia. *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

La ausencia de asistencia legal cuando el peticionario dio su confesión con anterioridad al 1964, según la ley entonces vigente, no afecta el hecho en sí de la culpabilidad o inocencia del peticionario ya que con anterioridad se sostuvo la voluntariedad de su confesión, por lo cual no hay base para anular colateralmente su convicción y aplicarle retroactivamente la norma Constitucional para la administración de la justicia **criminal** en esta jurisdicción establecida en *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964). *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, *Rivera Escute v. Delgado*, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, *Escute v. Delgado*, 404 U.S. 824; 92

S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

Se entiende por un "fallo estatal final"-a los fines de la aplicación retroactiva de la doctrina Constitucional establecida en *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964)-aquel caso en que se ha dictado sentencia condenatoria, la disponibilidad de una apelación se ha agotado y el término para solicitar *certiorari* estaba ya vencido a la fecha en que se resolvió el caso de *Escobedo*. Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, Rivera Escute v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), *certiorari* denegado, Escute v. Delgado, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

4. Nombramiento de abogado.

No obstante el tiempo transcurrido, se excede el magistrado que dispone que se vea un caso, a pesar de las reiteradas protestas de los abogados de la defensa en el sentido de que no estaban preparados si, tal como surge del record, hubo una verdadera confusión en cuanto a quien tendría a su cargo la defensa, los que en definitiva la asumieron se enteraron momentos antes de que el acusado había estado en un hospital de psiquiatría debido a una enfermedad mental, y para la defensa de locura en que iban a descansar en verdad no estaban preparados, dadas las circunstancias en que comenzaron a ver el caso. *Pueblo v. Mojica Pedroza*, 92 D.P.R. 733 (1965).

Como regla general, al ejercer su derecho de escoger sus abogados, un acusado asume también la responsabilidad de quedar obligado por lo que dichos letrados hagan, poniéndose en la situación de ser favorecido por la diligencia de dichos abogados o de ser perjudicado por la falta de ella. *Pueblo v. Mojica Pedroza*, 92 D.P.R. 733 (1965).

No es la práctica judicial más aconsejable el nombrar un abogado de oficio en todos los casos en que el abogado contratado por el acusado no comparece el día del juicio. *Negron Villavicencio v. García, Alcaide*, 92 D.P.R. 179 (1965).

De no comparecer a juicio el abogado contratado por un acusado para defenderle, el tribunal debe-si necesario fuere, haciendo uso de su poder coercitivo-requerirle que preste servicios profesionales satisfactorios a su cliente. *Negron Villavicencio v. García, Alcaide*, 92 D.P.R. 179 (1965).

Un acusado no puede utilizar su derecho a asistencia de abogado-incluyendo el derecho a un tiempo razonable para que el abogado pueda entrevistarse con el acusado y prepararse para el juicio-para obstaculizar el trámite normal de las causas no ejerciendo diligentemente tal derecho. Lo que es tiempo razonable varía de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular. *Pueblo v. Pardo Toro*, 90 D.P.R. 635 (1964); *Pueblo v. Rodríguez Correa*, 88 D.P.R. 653 (1963).

Un acusado no puede tener el dominio sobre los calendarios de los tribunales de justicia. *Pueblo v. Barrera Gonzalez*, 89 D.P.R. 772 (1964); *Romero v. Jones, Alcaide*, 78 D.P.R. 572 (1955).

Habiendo transcurrido cuatro meses entre la designación del abogado defensor y la celebración del juicio, se concluye que el tribunal de instancia no abuso de su discreción al no consentir a la suspensión del juicio contra el acusado por razón de no estar preparado el abogado defensor. *Pueblo v. Barrera Gonzalez*, 89 D.P.R. 772 (1964).

5. Renuncia.

No puede inferirse del mero hecho de que un convicto insolvente no solicitara asistencia de abogado para el trámite apelativo de la sentencia que lo condenaba, que dicho convicto renunciara a tal derecho, cuando aparece claro su deseo de utilizar el derecho de apelación que se le concede estatutariamente y de

proseguir con dicho tramite. Pueblo v. Sánchez Vega, 95 D.P.R. 718 (1968).

Si en etapas previas al juicio un sospechoso o acusado renuncio inteligente y conscientemente esos derechos Constitucionales de permanecer en silencio y a no inculparse y tener asistencia de abogado, es cuestion que depende de las circunstancias y los hechos en cada caso. La ausencia de ayuda y consejo legal para una renuncia consciente e inteligente a tales derechos, constituira el factor de mayor importancia en la determinación de la idoneidad de la renuncia misma. Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada, Rivera Escute v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado, Escute v. Delgado, 404 U.S. 824; 92 S. Ct. 50; 30 L. Ed. 2d 52 (1971), reconsideración denegada, 404 U.S. 987; 92 S. Ct. 443; 30 L. Ed. 2d 371 (1971).

6. Honorarios.

Un abogado de oficio no puede solicitar del acusado o sus familiares una cantidad de dinero para cubrir los gastos de los procedimientos. *In re* García Munoz, 160 D.P.R. 744 (2003).

Cuando la designación como abogado de oficio en un caso complejo puede afectar de manera sustancial e irrazonable la practica privada y la situación economica personal del abogado asi designado, dicho abogado puede plantear la situación al juez administrador, el cual tiene autoridad para ordenar que el Estado le pague a dicho abogado una suma razonable por horas trabajadas, por concepto de honorarios de abogado. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993).

7. Actuaciones subsiguientes.

El derecho Constitucional a estar asistido de abogado no ampara a los confinados que son segregados administrativamente durante el curso de una investigación. Es cuando se centra la investigación en alguno o algunos en particular con miras a obtener de estos manifestaciones inculpatorias, que comienza el **procedimiento** adversativo y se hace imperativo advertirle su derecho a asistencia de abogado y proveerselo. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

Regla 58. ADVERTENCIA SOBRE NOMBRE DEL ACUSADO Y JUICIO EN AUSENCIA.

(a) Al leerse la acusación se advertirá al acusado que si el nombre bajo el cual se procede contra él no es el suyo deberá declarar su verdadero nombre, o que de lo contrario se seguirá la causa bajo el nombre consignado en la acusación. Si el acusado no dijere que tiene otro nombre, el tribunal proseguirá de conformidad, pero si alegare ser otro su verdadero nombre, el tribunal ordenará que se anote éste en el acta de la lectura de la acusación y de ahí en adelante el proceso se sustanciará bajo dicho nombre, haciéndose referencia también al nombre bajo el cual se inició la acusación.

(b) En el acto de lectura de acusación, el tribunal señalará la fecha para el juicio y apercibirá al acusado que de no comparecer, podrá celebrarse el juicio en su ausencia, incluyendo la selección del jurado y todas las otras etapas hasta el veredicto o fallo y el pronunciamiento de la sentencia y que su incomparecencia voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente en estas etapas del proceso.

(Julio 23, 1974, Núm. 138, Parte 1, p. 686, art. 1; Mayo 27, 1980, Núm. 70, p. 185, sec. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 143; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 989.

Enmiendas

-1980, ley 70. Inciso (b): La ley de 1980 añadió "y el pronunciamiento de la sentencia" después de

"veredicto o fallo".

-1974, ley 138. La ley de 1974 enmendó el rubro, redesigno el anterior único párrafo como inciso (a), y añadió un inciso (b).

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 138, Parte 1, p. 686.

Mayo 27, 1980, Núm. 70, p. 185.

Contrarreferencias.

Convicción anterior, absolución o exposición anterior, Véase la sec. 6 de este título.

Regla 59. PLAZO PARA ALEGAR.

Si el acusado lo solicitare al hacérsele la acusación, se le deberá conceder un término razonable, no menor de un (1) día, ni mayor de diez (10) días para contestar la acusación.

(Junio 3, 1980, Núm. 93, p. 270.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 144; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 990; Código modelo, R. 20.

Enmiendas

-1980, ley 93. La ley de 1980 añadió "ni mayor de diez (10) días".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 3, 1980, Núm. 93, p. 271.

Regla 60. OMISIÓN DE LEER LA ACUSACIÓN; IRREGULARIDAD EN EL ACTO DE LA LECTURA.

Si en el acto de la lectura de la acusación se omitiere leer la acusación, o si ocurriere alguna otra irregularidad en este acto, no se afectará por ello la validez de cualquier trámite del proceso si el acusado, por conducto de su abogado o por sí mismo si hubiere renunciado a tener asistencia legal, contestare la acusación o se sometiere a juicio sin objetar dicha omisión o irregularidad.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 52(a); Código modelo, R. 205.

VII. MOCIONES ANTES DEL JUICIO Y ALEGACIÓN

Regla 61. COMO SE RESPONDERA A LA ACUSACIÓN.

Oída la acusación, y a no ser que el tribunal le concediere término para contestar, el acusado responderá a ella inmediatamente mediante alegación, o podrá presentar moción para desestimar o solicitar cualquier remedio apropiado. Si se presentare una moción sin que hubiere alegación, y dicha moción se retirare o fuere desestimada, el acusado responderá entonces mediante alegación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 147, 151, 160 y 162; Fed. R. Crim. P. 12(a), (b)(5); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 997, 1002, 1003 y 1101; Código modelo, R. 207.

Contrarreferencias.

Aplicación de esta regla a una moción para sobreseer la acusación, Véase la sec. 574 de este título.

Regla 62. DEFENSAS Y OBJECIONES; COMO SE PROMOVERAN.

La excepción perentoria y cualquier otra alegación que no fuere la de culpable o no culpable quedan abolidas. Todas las defensas, objeciones y remedios hasta ahora disponibles mediante moción o excepción perentoria, o cualquier otra alegación que no fuere la de culpable o no culpable deberán presentarse mediante moción para desestimar o para solicitar un remedio apropiado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 150 y 151; Fed. R. Crim. P. 12(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1002; Código modelo, R. 209.

ANOTACIONES

1. En general.

La publicación de una nota aclaratoria sobre el error en identificación de una persona no es admisible en evidencia de negligencia en un caso de libelo bajo esta regla, puesto que en este tipo de caso se requiere prueba de ciertos elementos específicos para demostrar negligencia en la publicación. *Pérez v. El Vocero de P.R.*, 149 D.P.R. 427 (1999).

Una vista que se celebra para discutir una moción de supresión de evidencia no es el acto del juicio que se establece para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 117 D.P.R. 283 (1986).

Un acusado no tiene derecho, bajo estas reglas, a formular una excepción perentoria a la acusación, pues tal alegación ha sido sustituida por la moción para desestimar. *Pueblo v. García García*, 98 D.P.R. 827 (1970).

Regla 63. DEFENSAS Y OBJECIONES; CUANDO SE PROMOVERAN; RENUNCIA.

Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período no mayor de veinte (20) días después del acto de lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de no culpable.

La moción incluirá todas las defensas y objeciones de tal índole de que pueda disponer el acusado. La omisión de presentar cualquiera de dichas defensas u objeciones en el término

dispuesto constituirá una renuncia de la misma, pero el tribunal podrá eximir al acusado, por causa justificada, de los efectos de tal renuncia.

Una moción para desestimar basada en lo provisto en la Regla 64(n)(3) ó (4) deberá presentarse antes de ser llamado el caso para juicio.

(Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 1, ef. 60 días después de Julio 5, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 152, 153 y 161; Fed. R. Crim. P. 12(b)(1), (2) y (3); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1003, 1004 y 1012; Código modelo, R. 220.

Enmiendas

-1988, ley 65. La ley de 1988 enmendó esta regla en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Contrarreferencias.

Alegación de no culpable; sus efectos, Véase la Regla 73 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

Tanto a traves de una alegación de culpabilidad como a traves de una alegación de *nolo contendere*, un acusado renuncia a todas las defensas excepto las jurisdiccionales. Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202 (1977).

En ausencia de causa justificada, una vez comienza el juicio un acusado renuncia a la defensa de que debe absolversele por haberse prestado tardiamente la declaración jurada exigida por la sec. 5210 del Titulo 9 del agente que intervino con el demandado por el delito de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976).

Renuncia un acusado a radicar una moción para desestimar una acusación o denuncia, como regla general, si la misma no se presenta al hacer alegación de no culpable o antes de alegar. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975).

Cuando un acusado no presenta prueba de defensa en un caso por la posesión, venta y transportación de drogas narcoticas, en nada puede perjudicarle que durante la selección del jurado, dos de ellos-los cuales fueron luego recusados por la defensa-manifiesten en presencia de los demas jurados que no creian en la defensa de incapacidad mental fundada en la condición de adicto a drogas narcoticas. Pueblo v. Mendez Cabo, 91 D.P.R. 851 (1965).

Un apelante no puede quejarse por primera vez en apelación de prueba cuya admisión el no objeto durante el juicio maxime cuando al presentarse la misma su abogado manifesto que no tenía objeción a su admisión. Pueblo v. Soto Requene, 91 D.P.R. 143 (1964).

No se permitira que un acusado objete, por primera vez en apelación, prueba que debio excluirse de objetarse oportunamente por la defensa durante el juicio. Pueblo v. Soto Requene, 91 D.P.R. 143 (1964).

Regla 64. FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN PARA DESESTIMAR.

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:

- (a) Que la acusación o denuncia no imputa un delito.
- (b) Que el tribunal carece de jurisdicción para conocer del delito imputado.
- (c) Que la acusación o la denuncia no han sido debidamente firmadas o juradas.
- (d) Que el tribunal ha ordenado la presentación de un pliego de especificaciones y no se han suplido las especificaciones ordenadas.
- (e) Que el acusado ha sido convicto, o ha estado expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que se le imputa. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre bajo el cual el acusado fue convicto, expuesto a convicción o absuelto, y la fecha, tribunal y lugar de convicción, exposición o absolución. La moción para desestimar podrá presentarse por cualquier acusado que hubiere sido absuelto por los méritos del caso, no obstante haber existido cualquier defecto en la acusación o denuncia.
- (f) Que la causa, o alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y lugar del fallo anterior.
- (g) Que el acusado ha sido indultado del delito que se le imputa. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre bajo el cual se indultó al acusado, el nombre del Gobernador que lo indultó y la fecha del indulto.
- (h) Que al acusado se le ha concedido por ley inmunidad contra proceso por ese delito. Si la moción se basare en este fundamento, la misma expresará la ley y los hechos a base de los cuales se reclama la inmunidad.
- (i) Que el fiscal carecía de autoridad para presentar la acusación.
- (j) Que uno o más de los cargos de la acusación o la denuncia imputan más de un delito.
- (k) Que existe una indebida acumulación de delitos.
- (l) Que existe una indebida acumulación de acusados.
- (m) Que el delito ha prescrito.
- (n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:

(1) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se hubiere presentado acusación o denuncia contra él, o que ha estado detenido por un total de quince (15) días sin que se hubiere presentado una acusación o denuncia contra él si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a).

(2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación o dentro de los treinta (30) días si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a).

(3) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de sesenta (60) días con posterioridad a la presentación de la acusación o denuncia sin ser sometido a juicio.

(4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.

(5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se le hubiere celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse.

(6) Que no se celebró vista preliminar a la persona dentro de los sesenta (60) días de su arresto en los casos en que deba celebrarse.

(7) Que se celebró una vista de causa probable para arresto o citación luego de los 60 días de la determinación de no causa. [Efectiva el 1 de mayo de 2005]

(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada luego de 60 días de la determinación de no causa en vista preliminar. [Efectiva el 1 de mayo de 2005]

(ñ) Que no se ha notificado al acusado la lista de los nombres y direcciones de los testigos que El Pueblo se propone usar en el juicio.

(o) Que de los hechos expresados en el pliego de especificaciones consta que el delito imputado en la acusación o denuncia no fue cometido, o que el acusado no lo cometió. Se desestimaré la moción si el fiscal supliere otro pliego de especificaciones que obviare dichas objeciones.

(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.

Una moción para desestimar basada en lo provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 63.

(Enmendada en Enero 24, 1967; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 10; Junio 19, 1987, Núm. 31, p. 110, art. 1; Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 2, ef. 60 días después de Julio 5, 1988; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 7, adicionados los incisos (n)(7) y (n)(8), efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 145, 153, 161 y 448; Fed. R. Crim. P. 48(b); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1004, 1012 y 1382; Código modelo, Rs. 210 y 292.

Enmiendas

-2004, ley 317. Inciso (n): La ley de 2004 añadió las cláusulas (7) y (8).

-1988, ley 65. La ley de 1988 añadió el párrafo final.

-1987, ley 31. La Ley de Junio 19, 1987, Núm. 31, le añadió las cláusulas (5) y (6) al inciso (n).

Inciso (n)(1): La Ley de Junio 19, 1987, Núm. 29, añadió "o que ha estado detenido ... Regla 6(a)".

Inciso (n)(2): La Ley de Junio 19, 1987, Núm. 29, añadió "o dentro de los ... Regla 6(a)".

-1967. Inciso (p): La Resolución del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1967, elimino la referencia al "fiscal" en cuanto a la presentación de la acusación o denuncia y dio nueva redacción a este inciso.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

El art. 2 de la Ley de Junio 19, 1987, Núm. 31, p. 110, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación [Junio 19, 1987], pero no aplicara a aquellos procesos penales pendientes al momento de entrar en vigor la misma."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Disposiciones Constitucionales.

Derecho a juicio rapido; detención preventiva antes del juicio no excedera de seis meses, Véase el art. II, sec. 11 de la Constitución, precediendo al Titulo 1.

Contrarreferencias.

Defensas y objeciones, cuando se promoveran; renuncia, Véase la Regla 63 de este apéndice.

Orden desestimando el proceso, cuando impide uno nuevo, Véase la Regla 67 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

2. Convicción, exposición o absolución anterior.

Derecho a juicio rapido

3. -En general.

4. -Dentro de los 120 días.

5. Justa causa.

Demora en la vista preliminar o la acusación

6. - En general.

7. -Renuncia.

8. Causa probable.

9. Errores de forma.

1. En general.

El Tribunal Supremo explica que cuando el Estado se confronta con una desestimación debido a la violación del término consignado en la Regla 64(n)(5) de **Procedimiento Criminal**, éste tiene tres opciones: (1) recurrir de dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones; (2) aceptar el dictamen del foro de instancia y, de tratarse de un caso por delito grave, iniciar otro proceso con la presentación del “proyecto de denuncia” correspondiente para una nueva determinación de causa probable para arresto; o (3) negarse a procesar al ciudadano, de acuerdo con la facultad discrecional que le reconoce nuestro ordenamiento penal al Ministerio Público. No puede ahora simplemente solicitar que se señale el evento procesal pertinente en la misma etapa donde ocurrió la desestimación; por ejemplo, como en el caso objeto de este resumen, si el caso fue desestimado a nivel de vista preliminar, no puede el Estado, luego de la desestimación, solicitar sencillamente que se señale una nueva vista preliminar. 2008 DTS 174 Pueblo V. Camacho Delgado, 2008 TSPR 174

El Estado no puede simplemente solicitar que se señale el evento procesal pertinente en la misma etapa donde ocurrió la desestimación; por ejemplo, como en el caso de auto, si el caso fue desestimado a nivel de vista preliminar luego de la desestimación, no puede solicitar sencillamente que se señale una nueva vista preliminar. 2008 DTS 174 Pueblo V. Camacho Delgado, 2008 TSPR 174

El Tribunal Supremo revoca expresiones previas e incompatibles en *Pueblo v. Ortiz Díaz*, 95 D.P.R. 244 (1967) y en *Pueblo v. Soto Ortiz*, 151 D.P.R. 619 (2001), y deja sin efecto también la Regla 66 de **Procedimiento Criminal** en la medida que dicha regla se utilice de forma incompatible con lo dispuesto en la Opinión. 2008 DTS 174 Pueblo V. Camacho Delgado, 2008 TSPR 174

En la Opinión el Tribunal Supremo, aunque reitera la norma general de que un caso de naturaleza grave puede volverse a presentar luego de una desestimación por violar la Regla 64(n) de **Procedimiento Criminal**, hace una clara e importante distinción en cuanto a los efectos de ese tipo de desestimación (*e.g.*, si es o no “con perjuicio”). La referida distinción depende de si, por un lado, la desestimación fue por violar las normas *procesales* (no constitucionales) que están dispuestas en la Regla 64(n) de **Procedimiento Criminal** y que instrumentan en términos prácticos el derecho a un juicio rápido en nuestra jurisdicción, o por el otro lado, si la desestimación es por violación al derecho *constitucional* a un juicio rápido. 2008 DTS 174 Pueblo V. Camacho Delgado, 2008 TSPR 174

La Regla 64 de **Procedimiento Criminal** esboza los fundamentos para solicitar la desestimación de una acusación o denuncia, entre ellos, cuando la causa en cuestión, o alguna controversia esencial a ésta, es cosa juzgada. 34 L.P.R.A. Ap. II R. 64(f). 2008 DTS 034 Pueblo V. Paonesa Arroyo 2008TSPR034

El Ministerio Público tiene autoridad para solicitar el archivo de una acusación sin que ello sea un impedimento para un nuevo proceso. 2006 DTS 185 (2005) Pueblo v. Gómez, 2005 TSPR 185 (2005); 166 D.P.R. ____ (2005).

La doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia aplica a una impugnación de confiscación en cuanto hubo una desestimación de las denuncias contra la propietaria por incumplimiento con el derecho de juicio rápido; el Procurador podrá presentar los cargos nuevamente, pero no lo hizo. 2004 DTS 84 Suarez v E.L.A. et al., 2004 TSPR 84 (2004); 162 D.P.R. ____ (2004).

La dilación de seis años y medio en radicar la denuncia, por causa de la negligencia inexcusable del Estado en archivar erróneamente el expediente en la oficina de casos archivados, pone a la peticionaria en un estado de indefensión y viola su derecho a debido proceso de ley, ya que los testigos principales están muertos. Pueblo v. Esquilin Maldonado, 152 D.P.R. 257 (2000).

Solamente al cerciorarse el tribunal que una moción debe ser declarada sin lugar, deberá proceder con la vista preliminar. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 D.P.R. 428 (2000).

Constituye una violación al derecho a juicio rapido cuando el Ministerio Público incumple con su obligación de proveer oportunamente a la defensa de un manual solicitado mediante moción de descubrimiento de pruebas. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999).

La denuncia a que alude esta regla se refiere a la primera alegación del Estado en un proceso iniciado en el tribunal de distrito, y esto se considera presentada cuando la denuncia original es remitida por el magistrado, una vez determinada causa probable para el arresto o citación del imputado, a la sala correspondiente del tribunal de distrito, convirtiéndose entonces en el pliego acusatorio o primera alegación del Estado que sirve de base para el juicio. Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842 (1992).

Ante una reclamación de violación del derecho a un juicio rapido, los criterios para evaluar el planteamiento de justa causa para la dilación son: (1) duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente ese derecho y (4) perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114 (1987).

Una moción para desestimar una acusación al amparo de esta regla es un remedio que solo puede concederse a petición del acusado y, de no solicitarlo, se declara renunciado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59 (1967).

Una moción para desestimar la acusación o la denuncia o cualquier cargo de las mismas solo podra basarse en uno o más de los varios fundamentos que enumera esta regla. Suarez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965).

Una moción para desestimar una acusación no puede estar fundada en que al acusado se le privo del derecho a no inculparse y del derecho a asistencia de abogado al no advertirle el juez sentenciador, al disponerse dicho acusado a declarar en un juicio contra otro acusado por los mismos hechos, que tenía derecho a no declarar como testigo y a tener asistencia de abogado antes de declarar. Suarez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965).

2. Convicción, exposición o absolución anterior.

No procede la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en un caso específico de asesinato cuando en la decisión emitida por el Tribunal Tutelar de Menores sobre los mismos hechos no se dilucidaron ni resolvieron clara y directamente hechos necesariamente decisivos en el caso de asesinato, habiéndose concluido unicamente que cierto menor no estaba vinculado a la comisión de los hechos imputados en dicho caso. Pueblo v. Millan Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

Designase como la doctrina de impedimento colateral por sentencia (*collateral estoppel by judgment*) la norma de que una sentencia resulta concluyente entre las mismas partes si versa y conlleva la relitigación en un caso posterior de las cuestiones de hecho esenciales, adjudicadas y determinadas previamente en tal sentencia. Dicha doctrina impide la ventilación de un segundo proceso y es motivo de desestimación, aun cuando se trate de un delito distinto, si dentro de la adjudicación del caso anterior, clara y directamente, se dilucidaron y resolvieron hechos necesariamente decisivos para el segundo. Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977).

Una resolución final y firme del Tribunal de Distrito en un caso por infracción a las [anteriores] secs. 181 a 197 del Título 15 declarando con lugar una moción de supresión de evidencia por ser los hechos que produjeron la evidencia en dicho caso y en otro caso contra los mismos acusados por infracción a las secs. 1247 a 1257 del Título 33-y absolviendo a los acusados, constituye un impedimento colateral por

sentencia (*collateral estoppel by judgment*) en un caso posterior contra dichos acusados por la infracción a las secs. 1247 a 1257 del Título 33 pendiente ante el Tribunal Superior, cuando la ocupación de la evidencia incriminatoria contra los acusados en ambos delitos ocurrió en un solo evento no susceptible de fraccionamiento factico ni juridico. Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977).

Es requisito indispensable para que opere la doctrina de impedimento colateral por sentencia (*collateral estoppel by judgment*) en un segundo caso entre las mismas partes, que la sentencia estableciendo que se determino judicialmente cierta cuestion de hecho-hecho que luego no puede disputarse entre dichas partes-sea de una fecha anterior al momento en que el juez, en el segundo caso, aprecia la prueba presentada y llega a una conclusión contraria o distinta en cuanto a dicho hecho especifico. Pueblo v. Pagan Pagan, 100 D.P.R. 532 (1972).

Dictado un fallo de convicción contra X el 14 de junio de 1968 por guiar un vehículo de motor en estado de embriaguez-caso en que se determino el hecho esencial de que X guiaba el vehículo en cuestion el día 24 de marzo de 1968-no procede la absolución de X solicitada el 2 de agosto de 1968-fecha en que se dicto sentencia contra X a consecuencia del fallo condenatorio dictado en 14 de junio de 1968-a base de que en 27 de junio de 1968 se dicto una sentencia absolutoria a favor de X en un caso ante el Tribunal de Distrito por guiar en forma temeraria el mismo vehículo en igual fecha, donde se adjudico el hecho de que X no guiaba dicho vehículo. Pueblo v. Pagan Pagan, 100 D.P.R. 532 (1972).

La doctrina de impedimento colateral por sentencia puede invocarse en causas criminales. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

No procede que un tribunal considere y adjudique en un **procedimiento criminal** si una controversia habia sido anteriormente litigada y era cosa juzgada cuando el acusado no ha dado cumplimiento a las disposiciones de las Reglas 63 y 64(f). Pueblo v. Pagan Medina, 99 D.P.R. 753 (1971).

Procede declarar con lugar una moción para desestimar una acusación basada en la exposición anterior del acusado por el mismo delito, moción planteada en la segunda vista del caso, cuando en la primera vista el juez, con la oposición expresa del abogado defensor, procedio a disolver el jurado a los diecisiete minutos de haberse este retirado a deliberar por razon de que uno de los jurados espontaneamente informo al juez que estaban divididos en el veredicto a ser rendido, siete para absolver y cinco para condenar. Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970).

No constituye una doble exposición bajo esta regla la celebración de una segunda vista ante otro jurado de una acusación de hurto cuando el tribunal de instancia ante el cual se celebraba la primera vista correctamente: (a) permitio una enmienda sustancial de la acusación luego de desfilir la prueba de la defensa con el fin de eliminar una incongruencia entre las alegaciones y la prueba, de manera que, en vez de imputar el hurto de piezas de un automovil se hiciera constar que el acusado hurto dicho vehículo, y (b) con el consentimiento del peticionario, pospuso el juicio para celebrarlo ante otro jurado de acuerdo con la Regla 38(d). Ortiz Baez v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 261 (1970).

Es nula una segunda sentencia dictada contra un acusado por la Sala B del Tribunal Superior por delitos originados en un mismo hecho delictivo cuando a la fecha de esa segunda sentencia ya la Sala A de dicho tribunal-a la cual le correspondia actuar sobre el asunto, de acuerdo con el sitio donde se cometio el hecho delictivo y la distribución de las competencias judiciales-habia dispuesto de dichos delitos imponiendole una primera sentencia al acusado por los mismos, no siendo necesario para la declaración de tal nulidad que el acusado levante la defensa de anterior exposición antes de leerse la acusación o antes de celebrarse el juicio. Baez Montalvo v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 609 (1964).

Cuando una corte comete error de derecho al considerar sustancial una divergencia entre las alegaciones

en una acusación que imputa un delito y la prueba ofrecida en el caso y ordena la absolución del acusado- cuando en verdad dicha divergencia era inmaterial o insustancial, habiendo podido condenarse legalmente al acusado en dicho **procedimiento**-el veredicto absolutorio ordenado por el juez al jurado constituye un impedimento a un segundo proceso contra el mismo acusado por el mismo delito. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964).

Bajo las disposiciones de esta regla, un acusado puede solicitar la desestimación de la acusación contra el radicada por el fundamento, entre otros, de que ha sido ya convicto o ha estado expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que se le imputa, irrespectivamente de que dicha absolución anterior haya sido o no por variación o divergencia entre la acusación y la prueba. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964).

No fue sustancial una divergencia entre la acusación radicada contra el acusado y la prueba ofrecida en el caso, por lo que el veredicto de absolución que el juez de instancia ordeno al jurado que emitiera constituye un impedimento absoluto contra un segundo proceso por el mismo delito contra el mismo acusado. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964).

La diferencia en el número de la escritura era una variación insustancial entre la alegación y la prueba en el primer juicio seguido por violación de la sec. 461 del Título 33; y con independencia de si el tribunal actuo o no correctamente al negarse a aceptar la enmienda propuesta por el fiscal en cuanto al número de la escritura, lo cierto es que el acusado estuvo expuesto a ser convicto por los mismos hechos que se le imputan en esta segunda acusación, por lo que procede la petición de desestimación por el interesada. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964).

Derecho a juicio rápido

3. -En general.

La Regla 64(n) habilita la desestimación de una acusación o denuncia por motivo de violaciones al derecho a un juicio rápido. 2008 DTS 034 Pueblo V. Paonesa Arroyo 2008TSPR034

Aun cuando no fue [el acusado] quien solicitó la posposición, éste tampoco se opuso a la misma, ni reclamó su derecho a un juicio rápido. Incluso, tampoco solicitó la desestimación de la acusación bajo la Regla 64(n) de **Procedimiento Criminal** sino que presentó un recurso de *habeas corpus* bajo el fundamento que el juicio no había comenzado con la juramentación preliminar del jurado. 2008 DTS 034 Pueblo V. Paonesa Arroyo 2008TSPR034

La Regla 67, Ap. II, de este título permite al Ministerio Público presentar nuevos cargos por los mismos hechos, constitutivos de delito grave, imputados al acusado en un proceso anterior, pero desestimados por violación a los términos de rápido enjuiciamiento; el derecho a juicio rápido no se extiende al período que transcurre entre la primera desestimación de una denuncia y la nueva presentación de cargos. Pueblo v. Carrion Rivera, 159 D.P.R.633 (2003).

El término dentro del cual el Ministerio Fiscal debe presentar la acusación comienza al momento del arresto o detención del imputado. Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).

El término para la celebración de la vista preliminar es el mismo, por ser simultáneo, que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación. Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).

De determinarse que se viola el derecho a juicio rápido de un acusado, procede la desestimación de la denuncia sin que se celebre vista preliminar, ello sin perjuicio de que al amparo de la Regla 67 de **Procedimiento Criminal** el Ministerio Público inicie un nuevo proceso. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150

D.P.R. 428 (2000).

El término para celebrar la vista preliminar es de sesenta días, contados desde el arresto del acusado o su citación para responder del delito imputado. Este término solo podrá extenderse por justa causa, por demora imputable al acusado o consentida por este. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Contra la norma que impone como razonable un término máximo de sesenta días para la celebración de una vista preliminar en alzada, el fiscal puede oponer válida justificación. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

El término de sesenta días para la segunda o subsiguientes vistas comenzará a computarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Los cuatro criterios a examinarse en conjunto y las circunstancias relevantes para evaluar las reclamaciones de violaciones al derecho a juicio rápido son: (1) duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente ese derecho, y (4) perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. Ramos Alvarez, 118 D.P.R. 782 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), ratificada, Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Como regla general, el derecho a juicio rápido cobra vigencia desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder, y se extiende hasta el acto de dictar sentencia en determinado plazo, lo cual es renunciable. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), ratificada, Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980); Jimenez Roman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

La congestión de casos ante los tribunales, por sí solo, no constituye justa causa para excusar la infracción al derecho a juicio rápido. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), ratificada, Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980); Jimenez Roman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

Cualquier suspensión o aplazamiento del juicio debe ser justificado y lo más breve posible. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986), ratificada, Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987); Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980); Jimenez Roman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

Resulta tardío el planteamiento por primera vez en el trámite del archivo de la demanda al amparo de esta regla, aduciendo violación del derecho a juicio rápido, derecho que el acusado pudo y debió reclamar a tiempo y en forma efectiva en el tribunal inferior. Pueblo v. Cordero Rodríguez, 110 D.P.R. 638 (1981).

A los fines de proteger su derecho a un juicio rápido, la única obligación que la ley impone a un acusado consiste en presentar objeciones cuando su juicio ha sido fijado para una fecha posterior al periodo establecido por ley para la celebración del juicio y entonces proceder a presentar una moción de desestimación una vez dicho periodo haya expirado. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977).

Un acusado viene obligado a informar a un tribunal su cambio de domicilio en protección de su derecho a juicio rápido en todas las etapas del **procedimiento**. De esa manera, el Tribunal puede cumplimentar en tiempo las citaciones a él dirigidas. Marquez Quiñones v. Tribunal de Distrito, 105 D.P.R. 203 (1976).

Aun cuando un tribunal puede como excepción permitir por causa justificada la presentación de una moción para desestimar una acusación o denuncia fuera de término dentro de un periodo posterior razonable, dicho tribunal debe considerar que el acusado ha renunciado a presentar dicha moción cuando este no justifica la tardanza para tal radicación, la cual efectúa tras dejar transcurrir un irrazonable periodo

de 18 meses después de registrarse alegación de no culpabilidad y solicitud de juicio por jurado. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 454 (1975).

Procede declarar sin lugar una moción para desestimar una acusación basada en la dilación habida entre la fecha en que se le compro a un acusado cierta cantidad de heroína por un agente encubierto y aquella en que dicho agente presto declaración jurada, juramento la denuncia y se arresto al acusado cuando, descargado adecuadamente por el acusado el peso inicial de la prueba de perjuicios a su defensa, el Ministerio Público justifica cumplidamente dicha demora al establecer que no se arresto a ninguna persona para no perjudicar una investigación general en proceso, ya que el agente encubierto continuaba su labor como tal. *Pueblo v. Padilla Arroyo*, 104 D.P.R. 103 (1975).

La renuncia de un acusado a un juicio rapido necesariamente no tiene que tener las salvaguardas exigidas para otras garantías Constitucionales. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 103 D.P.R. 732 (1975).

No constituye una renuncia a ser juzgado posteriormente conforme a las normas vigentes sobre el derecho a juicio rapido, el hecho de que un acusado solicite se posponga un senalamiento para ver su caso. *Pueblo v. Arcelay Galan*, 102 D.P.R. 409 (1974).

Procede declarar sin lugar una moción para desestimar una acusación fundamentada en las disposiciones del inciso (n)(2) de esta regla cuando la misma se hizo verbalmente, el mismo dia del juicio y cerca de dos años y medio después del acto de lectura de la acusación, maxime cuando el record revela hasta la saciedad que el acusado renuncio expresa e implicitamente su derecho a un juicio rapido, y las multiples suspensiones que provoco el acusado-tanto para la celebración de la vista preliminar como para la vista del juicio-constituyen justa causa para la demora habida. *Rabell Martínez v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 796 (1973).

Aun cuando un acusado renuncie afirmativamente a su derecho a juicio rapido al allanarse a que se suspenda la vista de su caso o al solicitar suspensiones del mismo, por ello no renuncia, sin embargo, a ser juzgado más tarde dentro de un término razonable. *Pueblo v. Carrion Roque*, 99 D.P.R. 362 (1970).

De ser responsable un acusado en gran medida de las multiples suspensiones de su juicio, ello equivale a haber consentido a la demora en la celebración de dicho juicio. *Leon v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 305 (1970).

No es irrazonable a la luz de la larga cadena de suspensiones motivadas por el acusado, una demora de 126 dias entre el quinto y sexto senalamiento del juicio en este caso. *Leon v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 305 (1970).

La demora en procesar a un acusado no le es perjudicial cuando se trata del trafico ilegal de drogas, cuya persecución tiene que obedecer a ciertos planes determinados, maxime cuando el delito por el cual podia procesarse no habia prescrito. *Pueblo v. Riscard*, 95 D.P.R. 405 (1967).

El punto de partida para determinar si se violo el derecho de un acusado a un juicio rapido-si no se le enjuicio dentro de determinado periodo de tiempo-no es la fecha en que un agente encubierto observo la comisión del delito por el acusado, excepto en aquellas situaciones extraordinarias que se senalan en los casos de *Pueblo v. Seda*, 82 D.P.R. 719 (1961); *Pueblo v. Tribunal Superior*, 81 D.P.R. 455 (1959) y *Martínez v. Tribunal Superior*, 81 D.P.R. 945 (1960). *Marrero v. Alcaide, Carcel de Distrito*, 92 D.P.R. 751 (1965).

4. -Dentro de los 120 dias.

Es de aplicación a los juicios *de novo* celebrados en el Tribunal Superior el término de 120 dias

establecido en el inciso (n)(4) de esta regla debiendo computarse el término a partir de la fecha en que los autos quedan radicados en dicho tribunal. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977).

Renuncia voluntariamente y con pleno conocimiento de causa a su derecho a un juicio rapido aquel acusado que no se opone a un senalamiento de su juicio *de novo* hecho con su consentimiento en cierta fecha-tres semanas antes de vencer el término de 120 dias a partir de la fecha en que los autos quedaron radicados en el Tribunal Superior-para celebrar dicho juicio en una fecha posterior a la expiración de dicho término, maxime cuando en dos ocasiones anteriores dicho acusado no presento objeción alguna a ninguno de los senalamientos hechos antes de expirar el término de 120 dias, para fechas posteriores a la expiración de dicho término. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977).

No derrota el derecho del Estado a que se le celebre juicio a un acusado la estratagema de un abogado criminalista de, al percatarse de que un nuevo senalamiento para juicio viola el plazo de 120 dias establecido en el inciso (n)(4) de esta regla-que garantiza un juicio rapido-guarda silencio para luego invocar dicha violación para beneficio de su cliente una vez vencido dicho plazo. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977).

Bajo las disposiciones del inciso (n)(4) de esta regla, un tribunal no viene obligado a celebrar un nuevo juicio al acusado dentro de los 120 dias a partir de la orden concediendo un nuevo juicio al no ponerse de acuerdo el jurado en el primer juicio celebrado. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

El hecho de que pueda radicarse una nueva acusación en caso de delitos graves bajo las disposiciones de la Regla 67-una vez declarada con lugar una moción para desestimar por algunos de los fundamentos relacionados en el inciso (n)-demuestra que el término de 120 dias establecido en esta regla no es el unico factor determinante de si se le ha violado el derecho a juicio rapido que le reconoce la Constitución de Puerto Rico a un acusado. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

Violan el derecho Constitucional de un acusado a un juicio rapido, repetidas dilaciones de más de 120 dias entre uno y otro senalamiento para la celebración de un juicio, cuando el acusado no consiente a tales demoras y no hay en el record explicación alguna y mucho menos justificación para tales dilaciones. García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27 (1975).

Procede desestimar una acusación cuando la justa causa a que hace referencia el inciso (n) de esta regla para la demora en la celebración del correspondiente juicio, ni se aduce ante el Tribunal Supremo ni este la encuentra al examinar los autos del caso. García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27 (1975).

No se vulnera el derecho de un acusado a un juicio rapido cuando se senala la vista del juicio, con la conformidad expresa del abogado del acusado, fuera del término de 120 dias establecido por esta regla. Pueblo v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 732 (1975).

No procede desestimar una acusación contra un acusado-aun cuando haya transcurrido un periodo de 7 meses y 18 dias entre la fecha en que se presento la acusación y la fecha en que se celebrego el correspondiente juicio-cuando se concluye que el acusado clara y expresamente renuncio a su derecho a solicitar la desestimación de dicha acusación por el fundamento de no habersele sometido a juicio dentro de los 120 dias siguientes a la presentación de la acusación. Pueblo v. Delgado Terron, 100 D.P.R. 153 (1971).

Suspendida la celebración de un juicio a petición de un acusado, la desestimación de la acusación por demoras posteriores cae dentro de la discreción de la corte sentenciadora, constituyendo el deber de dicha corte en tales casos el senalarlo para juicio dentro de un tiempo razonable que, dependiendo de las circunstancias, puede o no ser de 120 dias. Leon v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 305 (1970).

Un acusado tiene el derecho de ser sometido a juicio dentro de los 120 días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento. Jimenez Roman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

Una actuación de un acusado solicitando la posposición de la vista de su caso señalada dentro de 120 días a partir de la radicación de la acusación le priva de poder exigir la celebración del juicio dentro de los próximos 120 días a partir de la fecha en que se solicito la suspensión, si la congestión del calendario impide el señalamiento. Jimenez Roman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

5. Justa causa.

La determinación de lo que constituye justa causa bajo la Regla 64(n) de las de **Procedimiento Criminal**, (sic), es por necesidad un problema de definición a realizarse caso a caso", y a la luz de la totalidad de las circunstancias. 2004 DTS 013 (2004) Pueblo V. Guzmán Meléndez, 2004 T.S.P.R. 013 (2004)

Hubo justa causa para la dilación en la celebración de las vistas preliminares de los imputados, por lo que no se configuro una violación del derecho a juicio rapido. 2001 DTS 167 (2001) Pueblo v. Valdes et al., 2001 T.S.P.R. 167 (2001); 155 D.P.R. 781 (2001).

El término para la celebración de la vista preliminar y la presentación de la acusación se puede interrumpir por justa causa or causa imputable al acusado. 2000 DTS 150 (2000) Pueblo v. Cartagena Fuentes, 2000 T.S.P.R. 150 (2000); 152 D.P.R. 243 (2000).

El principio constitucional mencionado encuentra asidero estatutario en la Regla 64(n) de **Procedimiento Criminal**, *supra*. Así, su inciso seis (6) autoriza una moción de desestimación cuando no se haya celebrado vista preliminar a la persona dentro de los sesenta (60) días de su arresto, en los casos en que deba celebrarse, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o que ésta se deba a solicitud del imputado o acusado o contara con su consentimiento. Dicha desestimación no es óbice, sin embargo, para que se presente nuevamente denuncia por los mismos hechos, si éstos constituyen delito grave, a tenor con la Regla 67 de **Procedimiento Criminal**, 34 L.P.R.A. Ap. II. 2000 DTS 108 (2000) Pueblo V Soto Ortiz 2000 T.S.P.R. 108 (2000)

En todos los casos de vista preliminar en alzada el término solo podra ser extendido por justa causa o por demora imputable al acusado o consentida por este. Queda excluida como justa causa aquella demora intencional y opresiva. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

Presentada una moción de desestimación bajo el inciso (n) de esta regla, el Ministerio Público debe, en buena practica, explicar por escrito la razon de la tardanza a que se aluda en la moción de la defensa, viniendo esta obligada a exponer en dicha moción de desestimación basada en fundamento renunciabile los hechos en que se apoya la misma y, de radicarse tardiamente, las razones que impidieron su formulación antes de alegar. Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178 (1976).

De solicitarlo el fiscal, un tribunal debe brindarle la oportunidad de ofrecer prueba que explique la tardanza del agente encubierto en un caso de drogas en prestar la declaración jurada que requiere la sec. 2523 del Titulo 24. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975).

Es sobre el fiscal que recae el peso de demostrar que existe justa causa para la demora en celebrar el juicio de un acusado. Tal peso no puede descargarse con simples generalidades o conclusiones. Pueblo v. Arcelay Galan, 102 D.P.R. 409 (1974).

Constituye justa causa para la suspensión de un juicio la ausencia de un testigo de cargo esencial, más el fiscal viene obligado a poner en condiciones al tribunal de pasar juicio sobre la alegada esencialidad con la debida pormenorización. *Pueblo v. Arcelay Galan*, 102 D.P.R. 409 (1974).

No procede la suspensión de un caso **criminal** solicitada por un fiscal a base de que la perjudicada no estaba disponible para prestar testimonio-lo que obliga a la desestimación de la causa-cuando el fiscal falla en probar de modo afirmativo, mediante los pasos prescritos en *Pueblo v. Carrion Roque*, 99 D.P.R. 362 (1970), que la denuncia era tan solo sostenible, con razonables posibilidades de éxito, por el testimonio de la perjudicada ausente y descansa fundamentalmente en la inferencia de que siendo la ausente la propia perjudicada, ello de por sí constituía prueba suficiente de la esencialidad del testigo. *Pueblo v. Arcelay Galan*, 102 D.P.R. 409 (1974).

Procede desestimar un caso **criminal** contra un acusado en que se le imputa en un solo cargo la alteración de la paz en sus dos modalidades cuando el fiscal, al solicitar la suspensión del juicio por razón de que la perjudicada no estaba disponible para prestar testimonio, fallo en demostrar convincentemente las razones para insistir en que testificase la perjudicada cuando los elementos del delito imputado eran presuntamente probables con el testimonio de otro testigo. *Pueblo v. Arcelay Galan*, 102 D.P.R. 409 (1974).

El peso de demostrar justa causa para no someter a un acusado a juicio dentro del término de 120 días a partir de la presentación de la acusación recae sobre el Ministerio Público, no siendo suficiente para descargarlo meras alegaciones, generalidades o conclusiones. *Pueblo v. Carrion Roque*, 99 D.P.R. 362 (1970).

Constituye justa causa para la demora en la celebración de un juicio a un acusado la ausencia de un testigo de cargo esencial, siempre y cuando se trate de un testigo realmente esencial, que el Ministerio Público haya sido diligente en obtener la comparecencia del testigo y que pueda conseguirse al testigo en la fecha para la cual se suspende el juicio. *Pueblo v. Carrion Roque*, 99 D.P.R. 362 (1970).

No constituye justa causa para sucesivas suspensiones de un juicio **criminal** con la oposición del acusado-por lo que procede declarar con lugar una moción para desestimar la acusación presentada a tenor con las disposiciones del inciso (n)(4) de esta regla-alegaciones del fiscal al efecto de que no le era posible obtener la comparecencia a juicio de un testigo de cargo esencial sin el cual no podía probar las alegaciones contenidas en la acusación cuando, al celebrarse el juicio más de 120 días después de la última suspensión consentida por el acusado, el fiscal informa al tribunal, a pesar de la ausencia del alegado testigo esencial, sin que en el record aparezca constancia alguna de que cambio hubo en las circunstancias del caso, si hubo alguno, ni que otro testigo o pruebas se desarrollaron mediante investigaciones posteriores que alteraron la condición de esencialidad del testigo ausente. *Pueblo v. Carrion Roque*, 99 D.P.R. 362 (1970).

Demora en la vista preliminar o la acusación

6. - En general.

Procede el archivo de una causa **criminal** por razón de no haberse celebrado la correspondiente vista preliminar dentro de los sesenta días de haberse arrestado al acusado- *Pueblo v. Opio Opio*, 104 D.P.R. 165 (1975)-no bajo la Regla 247(b) y (d), sino bajo las disposiciones del inciso (n)(2) de esta regla que permite la radicación de nueva acusación en casos de delitos graves. *Pueblo v. Montezuma Martínez*, 105 D.P.R. 710 (1977).

Un tribunal no puede archivar definitivamente una causa grave contra un acusado por razón de no habersele celebrado la vista preliminar dentro de los 60 días a partir de su arresto. *Pueblo v. Montezuma Martínez*, 105 D.P.R. 710 (1977).

Archivada una causa por un delito grave por razón de no haberse celebrado la correspondiente vista preliminar dentro de los 60 días de haberse arrestado al acusado bajo las disposiciones del inciso (n)(2) de esta regla, la nueva vista preliminar debe señalarse lo más pronto posible. *Pueblo v. Montezuma Martínez*, 105 D.P.R. 710 (1977).

Transcurridos los primeros 60 días a partir de haberse arrestado a un acusado de un delito grave sin haberse celebrado la correspondiente vista preliminar, lo que da lugar al archivo de la causa bajo el inciso (n)(2) de esta regla, más permite la radicación por el Estado de una nueva acusación, procede el archivo definitivo de la causa de ocurrir otra dilación excesiva e injustificada que vulnere el derecho a juicio rápido del sospechoso. *Pueblo v. Montezuma Martínez*, 105 D.P.R. 710 (1977).

No procede declarar con lugar, bajo las disposiciones del inciso (n)(2) de esta regla, una moción para desestimar una acusación por un delito grave radicada 71 días después del arresto del acusado en ausencia de circunstancias extraordinarias y excepcionales demostrativas de abuso del término para la celebración de la vista preliminar. *Pueblo v. Garrick*, 105 D.P.R. 178 (1976).

Contraviene el derecho a juicio rápido aquella demora sin justa causa en los procedimientos anteriores a la acusación. *Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez*, 105 D.P.R. 173 (1976).

No constituye un término jurisdiccional el periodo de 60 días establecido en el inciso (n)(2) de esta regla- el derecho de un acusado a que se presente acusación contra él dentro de los 60 días de su arresto a no ser que se demuestre justa causa para la demora-sino que constituye una garantía del derecho a juicio rápido que el acusado puede renunciar expresa o implícitamente. *Rabell Martínez v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 796 (1973).

Radicada una acusación dentro de 60 días del arresto del acusado, una enmienda a la misma para alegar otro delito que se desprende de la evidencia ofrecida en la vista preliminar no da lugar a la desestimación de la misma porque la acusación enmendada se radicará más de 60 días después de dicho arresto. *Pueblo v. Nevarez Virella*, 101 D.P.R. 11 (1973).

Presentada una denuncia en el Tribunal de Distrito imputando al acusado el delito menos grave de haber violado el art. 82 de la Ley de Espiritus y Bebidas Alcohólicas de 1936 dentro del término de 60 días a partir de la citación del acusado-cuando era el Tribunal Superior el que tenía competencia sobre dicho delito menos grave por disposición del art. 86(B) de dicha ley-procede declarar sin lugar una moción de desestimación de la acusación radicada por el fiscal al trasladarse el caso al Tribunal Superior, fundada en que, para la fecha de la radicación de la acusación, habían transcurrido más de 60 días entre la fecha de la citación del acusado y la de la presentación de la acusación. *Pueblo v. De Jesus Gomez*, 100 D.P.R. 629 (1972).

Permitida por un tribunal una enmienda a acusaciones imputando a una persona poseer material relacionado con el juego de la bolita-enmienda que subsana una omisión en ellas de un elemento esencial del delito imputado-dicha actuación no lesiona el derecho del acusado a alegar la prescripción del delito imputado, pues de haberse radicado nuevas acusaciones, este no podía atacarlas bajo la Regla 64(n). *Pueblo v. Gonzalez*, 97 D.P.R. 541 (1969).

Procede desestimar una acusación por infracción a la sec. 5202 del Título 9, radicada el 28 de septiembre de 1965, cuando el acusado fue arrestado el 19 de junio de 1965 para responder de dicha infracción-por haber transcurrido más de 60 días de haber sido arrestado el acusado-cuando no concurre justa causa que justifique la demora en la radicación de dicha acusación. *Davila Vives v. Tribunal Superior*, 93 D.P.R. 776 (1966).

No es necesario resolver si una segunda acusación es o no una enmienda a una primera radicada dentro del término de sesenta días en que el acusado estuvo *held to answer*, cuando el acusado no establece mediante prueba de que fuera arrestado o citado cuando se radica la primera acusación para responder del delito a que dicha acusación se contrae. *Vizcarra Castellón v. Pueblo*, 92 D.P.R. 156 (1965).

7. -Renuncia.

El mero fallo por el imputado de objetar no es suficiente para renunciar el derecho a juicio rápido; la renuncia tiene que ser hecha de manera expresa. *Pueblo v. Cartagena Fuentes*, 152 D.P.R. 243 (2000).

Renuncia a los términos que en esta regla aplican la garantía Constitucional de un juicio rápido, aquel acusado que se ausenta de la dirección residencial por el informada sin notificar al tribunal el cambio de dirección. *Márquez Quiñones v. Tribunal de Distrito*, 105 D.P.R. 203 (1976).

Aun en ausencia de explicación para la demora de 11 días en la presentación de una acusación, un acusado renuncia a las defensas basadas en el inciso (n)(2) y (3) de esta regla cuando presenta la correspondiente moción de desestimación más de un mes después de la lectura de la acusación, maxime cuando no se ha aducido circunstancia alguna que pueda servir de apoyo para que el Tribunal Supremo exima al acusado bajo la Regla 63 de los efectos de su renuncia. *Pueblo v. Garrick*, 105 D.P.R. 178 (1976).

Renuncia un acusado a su defensa bajo del inciso (n)(2) de esta regla al formular su moción de desestimación cerca de dos años y medio después del acto de lectura de la acusación. *Pueblo v. Garrick*, 105 D.P.R. 178 (1976).

La no objeción por el acusado a un señalamiento del juicio para una fecha más allá de los 120 días que señala esta regla no constituye una renuncia a su derecho Constitucional a un juicio rápido. (*Pueblo v. Arcelay Galán*, 102 D.P.R. 409 (1974), seguido.) *García v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 27 (1975).

Las renunciaciones a los derechos Constitucionales fundamentales deben ser expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa. *García v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 27 (1975).

Un acusado renuncia a su derecho a juicio rápido cuando su caso se señala para celebrarse en una fecha en que caía fuera de los 120 días de la última suspensión del caso por justa causa-señalamiento hecho el 12 de septiembre de 1967 (cuando el acusado se opuso a la suspensión del caso), fecha que caía dentro de los 120 días desde la última suspensión por justa causa-cuando dicho acusado no objeta el nuevo señalamiento ni hizo solicitud alguna para que se adelantara el mismo. *Pueblo v. Martínez Vega*, 98 D.P.R. 946 (1970).

8. Causa probable.

Una dilación menor de dos meses es insuficiente para no considerar en sus méritos la moción de desestimación bajo el inciso (p) de esta regla, cuando ya se ha señalado la moción para vista y fue discutida por el Ministerio Público sin argumentar que el acusado renunció al derecho a presentar tal moción por su radicación tardía. *Pueblo v. Pérez Suarez*, 116 D.P.R. 807 (1986).

Constituye un abuso de discreción acceder a una moción de desestimación al amparo del inciso (p) de esta regla presentada más de seis meses después de haberse hecho alegación, pues dicho término, ausentes circunstancias excepcionales, no es razonable. *Pueblo v. Mena Peraza*, 113 D.P.R. 275 (1982).

Una moción para desestimar bajo el inciso (p) de esta regla es un remedio que solo puede concederse a petición del acusado mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal puede permitirla por causa justificada dentro de un periodo posterior razonable. El promoverla tardíamente se interpretara como una renuncia al planteamiento. *Pueblo v. Mena Peraza*, 113 D.P.R. 275 (1982).

Solo procede declarar con lugar una moción para desestimar una acusación o denuncia basada en el inciso (p) de esta regla cuando existe una ausencia total de prueba que demuestre la existencia de causa probable para creer que el acusado cometió el delito que se le imputa. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 454 (1975).

Un tribunal no puede determinar-en la consideración de una moción para desestimar una acusación o denuncia bajo el inciso (p) de esta regla-la credibilidad del testimonio de un agente encubierto cuando ni vio ni oyó declarar a dicho agente, y dicho testimonio no era ni inverosímil ni increíble, no pudiendo calificarse dicho testimonio de estereotipado ni adoleciendo el mismo de falsedad transparente, habiendo servido de base dicho testimonio para que dos magistrados distintos, uno del Tribunal de Distrito y otro del Tribunal Superior, determinaran causa probable para acusar al sospechoso de cometer cierto delito. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 454 (1975).

Un tribunal puede en el ejercicio de su discreción-una vez radicada una moción para desestimar una acusación o denuncia basada en el inciso (p) de esta regla-senalar una vista para entender y recibir prueba o puede rechazarla de plano si de su faz y de las constancias en el expediente del caso no resulta meritoria en cuanto al extremo de ausencia total de prueba. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 D.P.R. 454 (1975).

No puede prosperar una moción para desestimar una acusación fundamentada en que un tribunal carece de jurisdicción porque en la determinación de causa probable no se pasó prueba sobre todos los elementos del delito cuando la misma es tardía por haberse formulado verbalmente el mismo día del juicio, máxime cuando el acusado no presentó prueba para destruir la presunción legal de corrección de la determinación de causa probable del juez instructor, probando que existían errores fundamentales al hacer dicha determinación. *Rabell Martínez v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 796 (1973).

Procede declarar con lugar una moción para desestimar una acusación bajo las disposiciones del inciso (p) de esta regla cuando la determinación de causa probable por un magistrado no se ha hecho con arreglo a la ley y a derecho por existir una ausencia total de prueba que demuestre que existe causa probable para creer que el acusado cometió el delito que se le imputa. *Vazquez Rosado v. Tribunal Superior*, 100 D.P.R. 592 (1972).

Aun cuando un magistrado viene obligado a oír la prueba de un acusado a los efectos de sustanciar su moción para desestimar la acusación contra el radicada a base de lo estatuido en el inciso (p) de esta regla, esto no quiere decir que en la vista de la moción para desestimar se entre a considerar la corrección del juicio hecho por el juez instructor respecto a la existencia de causa probable, excepto cuando haya carencia absoluta de prueba tendiente a demostrar que existe tal causa probable para creer que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió. *Vazquez Rosado v. Tribunal Superior*, 100 D.P.R. 592 (1972).

A los efectos de una válida determinación de causa probable para una acusación imputando a una persona el conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, es necesario que en la correspondiente vista preliminar se presenten testigos que tengan conocimiento personal de los dos elementos esenciales de dicho delito, a saber, la conducción del vehículo y el estado de embriaguez del acusado al momento de conducirlo. *Martínez Cortes v. Tribunal Superior*, 98 D.P.R. 652 (1970).

Procede la desestimación de una acusación por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando en la vista preliminar el juez instructor determina causa probable contra el acusado a base unicamente del testimonio de un policía de uno de los elementos del delito imputado, esto es, la conducción del vehículo. *Martínez Cortes v. Tribunal Superior*, 98 D.P.R. 652 (1970).

No constituye fundamento para desestimar una acusación por un delito menos grave para cuyo conocimiento se confirió competencia original al Tribunal Superior, el hecho de que el fiscal omita acompañar la correspondiente acusación con la denuncia original, la determinación de causa probable por un magistrado y la orden de arresto por este expedida. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 95 D.P.R. 580 (1967).

Veanse también las anotaciones bajo la Regla 6 de este apéndice.

9. Errores de forma.

No constituye fundamento para declarar con lugar una moción para desestimar una denuncia un error de forma en la misma-el aparecer en el epígrafe el nombre de A como denunciante (quien no aparecía como testigo de cargo) cuando dicha denuncia fue firmada ante un juez de paz por un agente de rentas internas B-cuando la denuncia contenía suficiente exposición de hechos, fechas y personas para dejar claramente establecido su propósito en ley, y la firma del denunciante y su carácter como tal constan en el documento, con mayor razón cuando dicho documento radicado ante el juez de paz está acompañado de una declaración jurada del denunciante relatando los hechos delictivos. *Pueblo v. Nevarez Virella*, 101 D.P.R. 11 (1973).

El hecho de que se cometan dos delitos, o se viole una ley mediante dos modalidades distintas, y que se acuse a una persona por solamente un delito o por solamente una de las modalidades comprendidas en la ley, no invalida la acusación correspondiente. *Pueblo v. Cedeno*, 95 D.P.R. 369 (1967).

Procede archivar una denuncia imputando a los acusados dos delitos definidos en el Código Penal cuando uno y otro delito están constituidos por elementos diferentes, requieren distinta prueba y las palabras usadas en dicha denuncia no indican al sentido común la imputación de un solo delito. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 94 D.P.R. 392 (1967).

Es prematura una moción para desestimar dos acusaciones fundamentada en que al acusado se le concedió inmunidad por los hechos que se le imputan-por haber declarado el 26 de agosto de 1963 en un juicio anterior contra otra persona acusada y condenada por los mismos hechos a el imputados-cuando en el record no existe alegación de culpable o no culpable, y no hay seguridad de que El Pueblo utilizara en el correspondiente juicio contra el acusado, y como evidencia adversa a este, la declaración por el prestada el 26 de agosto de 1963. *Suarez Sánchez v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 507 (1965).

Un acusado que no excepcione la acusación en debida forma y en tiempo oportuno ante el tribunal de instancia no puede suscitar en apelación la cuestión de que la misma adolece del defecto de duplicidad. *Pueblo v. Ramos García*, 92 D.P.R. 396 (1965); *Pueblo v. Adorno*, 81 D.P.R. 518 (1959).

Cuando un estatuto prescribe como delictivas dos o más actuaciones o transacciones que resultan separadas y distintas, enumerándolas en la disyuntiva-o sea, estableciendo una alternativa mediante el término de relación disyuntiva "o", que obliga a optar por una de ellas-se puede presentar una acusación por todas conjuntamente y el acusado puede ser declarado culpable por cualquiera de ellas. *Pueblo v. Ramos García*, 92 D.P.R. 396 (1965).

La declaración de un testigo cuyo nombre no aparecía al dorso de la acusación y quien había estado en sala durante el juicio no es un motivo de revocación de una sentencia, cuando dicho testigo no declaró

sobre los hechos en el caso, habiendo comparecido a los fines de identificar la evidencia material a los efectos de su admisión en el caso. Pueblo v. Aquino Aquino, 90 D.P.R. 450 (1964).

Regla 65. MOCIONES ANTES DEL JUICIO; SU FORMA, CONTENIDO Y RESOLUCION.

Cualquier moción antes del juicio deberá presentarse por escrito y estar firmada por el acusado o por su abogado, pero el tribunal por causa justificada podrá permitir que se formule oralmente. Deberá exponer detalladamente los fundamentos de las defensas u objeciones a la acusación. El tribunal desestimará de plano sin necesidad de vista toda moción que no cumpla con los requisitos establecidos en esta regla.

Las mociones planteando defensas u objeciones a la acusación o denuncia deberán presentarse en el Tribunal de Primera Instancia dentro de los diez (10) días siguientes al acto de lectura de acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de no culpable. En el Tribunal de Distrito estas mociones se presentarán, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo menos veinte (20) días antes del juicio. Estas mociones deberán notificarse al fiscal, simultáneamente, quien contestará dentro del término no mayor de veinte (20) días de haber sido notificado. El tribunal resolverá las mociones por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo justa causa o a no ser que ordenare su posposición para ser consideradas en la vista del caso en su fondo. Todas las cuestiones de hecho o de derecho que surjan de dichas mociones deberán ser juzgadas por el tribunal. (Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 3, ef. 60 días después de Julio 5, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 154 y 155; Fed. R. Crim. P. 12(b)(3) y (4); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1005 y 1006; Código modelo, Rs. 211, 215 y 216.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1988, ley 65. La ley de 1988 enmendó esta regla en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Regla 66. MOCIONES ANTES DEL JUICIO; **PROCEDIMIENTO SI EL DEFECTO ALEGADO NO IMPIDIERE TRÁMITES ULTERIORES.**

Si la moción se basare en defectos de la acusación, denuncia o pliego de especificaciones que pudieren subsanarse mediante enmienda, el tribunal ordenará se haga la enmienda, y denegará la moción. Si el tribunal declarare con lugar una moción basada en defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, podrá también ordenar que se mantenga al acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un término específico, sujeto a la

presentación de una nueva acusación o denuncia. Nada de lo aquí expresado afectará las disposiciones sobre los términos de prescripción.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 147, 148 y 157; Fed. R. Crim. P. 12(b)(5); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 997, 998 y 1008; Código modelo, R. 218.

Contrarreferencias.

Aplicación de esta regla a una moción para sobreseer la acusación, Véase la sec. 574 de este título.

ANOTACIONES

1. En general.

El Tribunal Supremo revoca expresiones previas e incompatibles en *Pueblo v. Ortiz Díaz*, 95 D.P.R. 244 (1967) y en *Pueblo v. Soto Ortiz*, 151 D.P.R. 619 (2001), y deja sin efecto también la Regla 66 de **Procedimiento Criminal** en la medida que dicha regla se utilice de forma incompatible con lo dispuesto en la Opinión. 2008 DTS 174 Pueblo V. Camacho Delgado, 2008 TSPR 174

Recalcamos, además, que la mejor práctica a seguir por los tribunales de primera instancia es que se haga uso de la Regla 66 de **Procedimiento Criminal**, *supra*, y se delimite el término específico en que permanecerá bajo custodia o que subsistirá la fianza prestada para dar lugar a que se presenten los cargos nuevamente. 2000 DTS 108 (2000) Pueblo V Soto Ortiz 2000 T.S.P.R. 108 (2000)

No es revocable una resolución de un tribunal negándose a conceder una especificación de particulares solicitada por el acusado a menos que se demuestre un claro abuso de discreción por parte del tribunal. *Pueblo v. Bernard Rivera*, 96 D.P.R. 574 (1968); *Pueblo v. Cruz Ortega*, 95 D.P.R. 129 (1967).

Decretado el archivo de una acusación por el delito contra natura sin perjuicio, y ordenada la radicación nuevamente de la acusación-la cual no contenía cargos distintos o adicionales a los que se hacían en la acusación original ni incluía a otros acusados-es innecesario e inoficioso que el tribunal vuelva a los procedimientos preliminares de determinación de causa probable antes de que se radique nuevamente dicha acusación. *Pueblo v. Ortiz Díaz*, 95 D.P.R. 244 (1967).

Regla 67. ORDEN DESESTIMANDO EL PROCESO; CUANDO IMPIDE UNO NUEVO.

Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratándose de un delito menos grave (misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno de los fundamentos relacionados en la Regla 64(n).

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 149, 157, 169 y 452; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 999, 1008, 1023 y 1387; Código modelo, R. 219.

Contrarreferencias.

Aplicación de esta regla a una moción para sobreseer la acusación, Véase la sec. 574 de este título.

ANOTACIONES

1. En general.

El Ministerio Público tiene autoridad para solicitar el archivo de una acusación sin que ello sea un impedimento para un nuevo proceso. 2005 DTS 185 (2005) Pueblo v. Gómez, 2005 TSPR 185 (2005); 166 D.P.R. __ (2005).

La doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia aplica a una impugnación de confiscación en cuanto hubo una desestimación de las denuncias contra la propietaria por incumplimiento con el derecho de juicio rápido; el Procurador podrá presentar los cargos nuevamente, pero no lo hizo. 2004 DTS 84 Suarez v. E.L.A. *et al*, 2004 TSPR 84 (2004); 162 D.P.R. __ (2004).

Esta regla permite al Ministerio Público presentar nuevos cargos por los mismos hechos, constitutivos de delito grave, imputados al acusado en un proceso anterior, pero desestimados por violación a los términos de rápido enjuiciamiento; el derecho a juicio rápido no se extiende al período que transcurre entre la primera desestimación de una denuncia y la nueva presentación de cargos. Pueblo v. Carrión Rivera, 159 D.P.R. 633 (2003).

Cuando un magistrado desestima una denuncia por delito grave al amparo de la Regla 64 de **Procedimiento Criminal**, y no hace determinación alguna con relación a lo dispuesto por la Regla 66 del mismo, la fianza que presta el imputado en su primer arresto subsiste y lo cubre ante procedimientos posteriores sobre el mismo delito, según esa regla. 2000 DTS 108 (2000) Pueblo V Soto Ortiz 2000 T.S.P.R. 108 (2000); 151 D.P.R. 619 (2000).

Regla 68. ALEGACIONES.

El acusado hará alegación de culpable o no culpable. La alegación se formulará verbalmente en sesión pública por el acusado o su abogado. Se anotará en las minutas del tribunal, pero la omisión de anotarla no afectará su validez en la tramitación del proceso.

Cuando la acusación imputare un delito en grado de reincidencia o subsiguiente o delincuencia habitual, el acusado podrá, al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

Regla 68. ALEGACIONES.

El acusado hará alegación de culpable o no culpable. La alegación se formulará verbalmente en sesión pública por el acusado o su abogado. Se anotará en las minutas del tribunal, pero la omisión de anotarla no afectará su validez en la tramitación de proceso.

Cuando la acusación imputare un delito en algún grado de reincidencia, el acusado podrá al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. [2004, ley 317, Efectiva el 1 de mayo de 2005]
(Enmendada en Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 8, efectiva el 1 de mayo de 2005)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 162 a 164 y 233(2); Fed. R. Crim. P. 11; Código Enj. **Criminal** de

California, secs. 1016, 1018 y 1093(1); Código modelo, Rs. 221 y 222.

Enmiendas

-2004, ley 317. Segundo párrafo: La ley de 2004 añadió "algun" antes de "grado" y suprimio "o subsiguiente o delincuencia habitual" después de "reincidencia" en este párrafo.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

ANOTACIONES

1. En general.

No constituye error que justifique la revocación de dos sentencias por el delito de robo cometido en la penitenciaría estatal por dos confinados en la persona de otro confinado el hecho de que, aceptada por los acusados la alegación de delito subsiguiente hecha en las acusaciones y dado cumplimiento a las disposiciones de esta regla, el juez permita preguntas del fiscal-preguntas que también hizo el abogado defensor-que hicieron llegar al conocimiento del jurado que los acusados eran reincidentes. *Pueblo v. Cosme Pérez*, 99 D.P.R. 587 (1971).

Procede revocar una sentencia condenando a un acusado por portar una pistola cargada, en grado subsiguiente cuando, siendo la prueba de cargo poco confiable, el fiscal, en forma impropia y pese a la oposición de la defensa, trae ante la consideración del jurado la convicción anterior de este por igual delito, hecho que jamás estuvo en controversia. *Pueblo v. Hernández Pérez*, 94 D.P.R. 616 (1967).

Veanse anotaciones bajo la Regla 48 de este apéndice.

Regla 69. ALEGACIONES; PRESENCIA DEL ACUSADO; NEGATIVA DE ALEGAR.

Excepto cuando la acusación fuere contra una corporación, no se admitirá una alegación de culpable por un delito grave (felony) a no ser que el acusado estuviere presente y formule la alegación en persona. Una corporación podrá comparecer a alegar por conducto de su abogado. Cuando un acusado se negare a presentar alegación alguna o cuando una corporación dejare de comparecer se registrará alegación de no culpable.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 28, 164 y 178; Fed. R. Crim. P. 11; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1018 y 1024; Código modelo, R. 223.

ANOTACIONES

1. En general.

La negativa del acusado a contestar la acusación no puede levantarse en apelación como error para revocar. *Pueblo v. Rodríguez*, 91 D.P.R. 157 (1964).

Regla 70. ALEGACIÓN DE CULPABILIDAD; DEBER DEL TRIBUNAL.

El Tribunal no aceptará la alegación de culpabilidad sin determinar primeramente que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación.

El Tribunal, previo a aceptar una alegación de culpabilidad en casos de delito grave deberá, además, efectuar, haciéndolo constar en el registro, la siguiente advertencia al imputado:

"Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, por este medio queda advertido que una convicción por el delito del cual se le acusa puede traer como consecuencia la deportación, la exclusión de entrada a los Estados Unidos o la denegación de naturalización conforme a las leyes de los Estados Unidos."

De ser solicitado, el Tribunal concederá al imputado un tiempo adicional para considerar si la alegación de culpabilidad es la acción adecuada a la luz de la advertencia descrita en esta Regla. (Enmendada en el 2003, ley 70)

Notas importantes:

Enmienda

-2003, ley 70 - Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 70 de 1 de enero de 2003. Esta tiene jurisprudencia importante de Puerto Rico y los Estados Unidos referente a las alegaciones preacordadas.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 11; Código modelo, R. 244.

Enmiendas

-2003, ley 70. La ley de 2003 añadió los segundo y tercer párrafos.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Enero 1, 2003, Núm. 5.

Contrarreferencias.

Utilización de equipo de grabación en cinta videomagnetofónica, Véase el Ap. XIX del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

Los incisos (b)(4) y (b)(5) de la sec. 5204 del Título 9, en cuanto eximen al fiscal de alegar la reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez, violan la cláusula del debido proceso de ley tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal. Pueblo v. Montero, 169 D.P.R. -; 2006 TSPR 158 (2006).

No se cumple con el requisito de adecuada notificación de los cargos presentados en contra del acusado, cuando se permite que el fiscal no alegue la condición de reincidente en la denuncia o acusación. Pueblo v. Montero, 169 D.P.R. -; 2006 TSPR 158 (2006).

Salvo la inadmisibilidad de la alegación de *nolo contendere* en procesos ulteriores, no existe diferencia sustantiva entre dicha alegación y la alegación de culpabilidad. Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202 (1977).

Todos los derechos de índole Constitucional o estatutarios son renunciables por un acusado, más cuando se trata de la total abdicación de los mismos, esto es, registrar una alegación de culpabilidad, la renuncia por un acusado debe ser expresa, personal, voluntaria e inteligente. Igual norma se impone cuando el acusado renuncia a su derecho a juicio por jurado. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976).

Los dos propositos de esta regla son: (a) el ayudar al juez que interviene en el caso en su determinación de que la alegación de culpabilidad de un acusado es en realidad voluntaria, como lo requiere la

Constitución, y (b) el que consten en record al momento de hacer la alegación de culpabilidad todos los factores que determinan que fue voluntaria y consciente de sus consecuencias. *Díaz Díaz v. Alcaide*, 101 D.P.R. 846 (1973).

Antes de aceptar una declaración de culpabilidad hecha por un acusado, un juez debe cerciorarse de que el acusado esta consciente de cual es el delito y los hechos que se le imputan; aperebir al acusado de su derecho a que su caso se vea ante jurado, informandole que es el Estado el que tiene que establecer los hechos que se le imputan más allá de duda razonable, teniendo el derecho a no declarar y a que se le citen testigos para su defensa; informarle de la pena que el delito por el cual esta procesado conlleva, haciendole saber el minimo y el maximo, que si se le imputan dos o más cargos, las penas pueden imponersele concurrente o consecutivamente, y que si comete un delito posteriormente, la pena por este delito es más onerosa por ser reincidente, asegurandose dicho magistrado que la declaración de culpabilidad sea voluntaria y consciente de sus consecuencias y que no hubieren mediado promesas de clase alguna. *Díaz Díaz v. Alcaide*, 101 D.P.R. 846 (1973).

No se intervendra con la discreción de la corte inferior al no permitir que un acusado retire su alegación de culpabilidad a menos que se demuestre que la alegación de culpabilidad se hizo: (a) por incomprensión de la ley y los hechos; (b) por una falsa representación del abogado defensor o del fiscal o cualquier otra autoridad; (c) cuando surge alguna duda de la culpabilidad del acusado; (d) que el acusado tiene alguna defensa meritoria que merezca ser considerada por el jurado o por el juez, o (e) que se cumplen mejor los fines de la justicia sometiendo el caso a la consideración del juez o jurado para su fallo. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

Regla 71. ALEGACIÓN DE CULPABILIDAD; NEGATIVA DEL TRIBUNAL A ADMITIRLA; PERMISO PARA CAMBIARLA.

El tribunal podrá negarse a admitir una alegación de culpable y podrá ordenar que se anote alegación de no culpable. El tribunal podrá, además, en cualquier momento antes de dictar sentencia, permitir que la alegación de culpable se retire y que se sustituya por la alegación de no culpable o, previo el consentimiento del fiscal, por la de culpable de un delito inferior al imputado pero incluido en éste, o de un grado inferior del delito imputado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 164; Fed. R. Crim. P. 11 y 32(d); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1018; Código modelo, Rs. 225 y 230.

ANOTACIONES

1. En general.

El Ministerio Fiscal tiene la carga de la prueba sobre las advertencias específicas y detalladas que se le hicieron al sospechoso y sobre las circunstancias imperantes en el momento en que este hizo la admisión o confesión, para que el tribunal pueda determinar si la renuncia al derecho a no inculparse fue hecha en forma voluntaria, consciente e inteligente. *Pueblo v. Ruiz Bosch*, 127 D.P.R. 762 (1991).

No se intervendra con la discreción de la corte inferior al no permitir que un acusado retire su alegación de culpabilidad a menos que se demuestre que la alegación de culpabilidad se hizo: (a) por incomprensión de la ley y los hechos; (b) por una falsa representación del abogado defensor o del fiscal o cualquier otra autoridad; (c) cuando surge alguna duda de la culpabilidad del acusado; (d) que el acusado tiene alguna defensa meritoria que merezca ser considerada por el jurado o por el juez, o (e) que se cumplen mejor los fines de la justicia sometiendo el caso a la consideración del juez o jurado para su fallo. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

Regla 72. ALEGACIONES PREACORDADAS.

En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones preacordadas entre la defensa del imputado y el representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente **procedimiento**:

(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción:

(a) Solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pesen sobre él;

(b) eliminar alegación de reincidencia o delincuencia habitual; [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(b) eliminar alegación de reincidencia en cualquiera de sus grados; [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(c) recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o

(d) acordar que determinada sentencia específica es la que dispone adecuadamente del caso.

El tribunal no participará en estas conversaciones.

(2) De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles al tribunal en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello. Dicho acuerdo se hará constar en récord. Si el imputado se refiere a alguno de los cursos de acción especificados en las cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de esta regla, el tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y considerar el informe presentencia. Si el curso de acción acordado fuere del tipo especificado en la cláusula (c) de dicho inciso el tribunal advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no tendrá derecho a retirar su alegación.

(3) Si la alegación preacordada es aceptada por el tribunal, éste informará al imputado que la misma se incorporará y se hará formar parte de la sentencia.

(4) Si la alegación preacordada es rechazada por el tribunal, éste así lo informará a las partes y advertirá al imputado personalmente en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello, que el tribunal no está obligado por el acuerdo, y brindará al imputado la oportunidad de retirar su alegación. Le advertirá, además, que si persiste en su alegación de culpabilidad, la determinación final del caso podrá serle menos favorable que la acordada entre su abogado y el fiscal. De este trámite se tomará constancia en el récord.

(5) La notificación al tribunal sobre una alegación precordada se hará antes del juicio, preferiblemente en el acto de lectura de la acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, si las circunstancias lo ameritaren, permitirlo en cualquier otro momento.

(6) La existencia de una alegación precordada, sus términos o condiciones, y los detalles y conversaciones conducentes a la misma no serán admisibles contra el imputado en ningún **procedimiento criminal**, civil o administrativo si la alegación precordada hubiere sido rechazada por el tribunal o invalidada en algún recurso posterior o retirada válidamente por el imputado. Lo anterior será admisible por excepción en un **procedimiento criminal** por perjurio contra el imputado basado en manifestaciones hechas por él bajo juramento.

(7) Al decidir sobre la aceptación de una alegación precordada el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado aquella información, datos y documentos que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea conveniente.

El tribunal, previo a aceptar una alegación precordada deberá, haciéndolo constar en el registro, efectuar la siguiente advertencia al imputado:

"Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, se le advierte que una convicción por el delito por el cual se le acusa puede traer como consecuencia la deportación, la exclusión de admisión a los Estados Unidos o la denegación de naturalización conforme a las leyes de los Estados Unidos."

De ser solicitado, el tribunal concederá al imputado un tiempo adicional para considerar si la alegación precordada es la acción adecuada a la luz de la advertencia descrita en esta regla.

No podrá acogerse al sistema de alegaciones precordadas ninguna persona a quien se le impute la violación a los incisos (a) y (b) de la sec. 2405 ó la sec. 2411a del Título 24, parte de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

(Julio 13, 1988, Núm. 85, p. 381, art. 1; Septiembre 2, 2000, Núm. 337, art. 1; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 9, enmienda inciso (b), efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo al nuevo Código Penal de P.R.)

HISTORIAL

Derogación.

La Regla 72 original de **Procedimiento Criminal**, que procedía del art. 237 del Código Enj. **Criminal**, 1902, y del Código modelo, R. 226, fue derogada por la Ley de Junio 28, 1985, Núm. 37, p. 145, la cual, a su vez, añadió una nueva regla con el mismo número 72, cuyo texto se consigna.

Enmiendas

-2004, ley 317. Inciso (1)(b): La ley de 2004 sustituyó "o delincuencia habitual" con "en cualquiera de sus grados" después de "reincidencia" en este inciso.

-2000, ley 337. Inciso (7): La ley de 2000 añadió lo segundo al cuarto párrafos a este inciso.

-1988, ley 85. La ley de 1988 añadió el párrafo final.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase **Leyes de Puerto Rico de:**

Junio 28, 1985, Núm. 37, p. 145.

Septiembre 2, 2000, Núm. 337.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Presunción de inocencia y duda razonable, Véase la Regla 110 de este apéndice.

ANOTACIONES**1. En general.**

La exigencia de “pleno conocimiento” de las consecuencias directas de la declaración de culpabilidad de la Regla 72 de las Reglas de **Procedimiento Criminal**, es corolario del debido proceso de ley pues tal declaración supone una renuncia de derechos constitucionales. 2007 DTS 008 Rivera Beltrán v. Junta De Libertad 2007 TSPR 008

Son los fiscales adscritos al Departamento de Justicia quienes tienen la función de procesar a todos los delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad y en representación del E.L.A., lo cual significa que el poder judicial no tiene inherencia alguna en la decisión original que hace el poder ejecutivo sobre si procede o no acusar a determinada persona en relación con hechos posiblemente delictivos. Pueblo v. Cintrón Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999).

El tribunal de instancia siempre mantiene el poder de rechazar una alegación precordada por las partes, pero dicha facultad no es irrestricta. Pueblo v. Cintrón Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999).

Constituye abuso de discreción por parte del tribunal de instancia rechazar una alegación precordada sin cerciorarse de que existe base suficiente en los hechos para sostener que el acusado sería culpable del delito por el cual hace alegación de culpabilidad si tales hechos se probaran más allá de duda razonable en un juicio plenario. Pueblo v. Cintrón Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999).

En la alegación precordada el acuerdo de voluntades entre el imputado y el Estado depende de la aprobación final del tribunal; hasta entonces no existe bilateralidad entre las obligaciones de las partes, pues el imputado queda libre de retirar su alegación precordada antes de que el tribunal apruebe el acuerdo. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).

Al hacer alegación de culpabilidad el acusado renuncia a varios derechos Constitucionales, pero si la alegación precordada se retira con anterioridad a que el acusado haga alegación de culpabilidad, no esta envuelta renuncia a derecho Constitucional alguno. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).

Se retira una alegación precordada si se pretende deshacer el acuerdo antes de que el imputado haga alegación y la misma sea aceptada por el tribunal; se incumple con la alegación precordada si se pretende deshacer el acuerdo una vez el acusado ha hecho alegación de culpabilidad y la misma ha sido aceptada por el tribunal. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).

Tanto el fiscal como el acusado pueden retirar su consentimiento a un acuerdo de alegación precordada con anterioridad a que el mismo sea aprobado por el tribunal y el acusado haga alegación de culpabilidad o realizado cualquier otro acto en detrimento de sus derechos. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).

Ni el Estado ni el acusado están obligados a iniciar conversaciones sobre alegaciones preacordadas (*plea bargaining*). El tribunal no debe participar en tales conversaciones. Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985).

Los jueces de instancia pueden exigir a los abogados de los acusados, en la etapa del acto de lectura de la acusación, que expongan su deseo de entrar en conversaciones de alegaciones preacordadas con el Ministerio Público. De este modo, el tribunal podrá señalar la vista en su fondo para fecha posterior y conceder a las partes tiempo suficiente para implantar un acuerdo con la autorización del Secretario de Justicia. Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985).

Se excede en su discreción un tribunal al ordenar la comparecencia del Secretario de Justicia y del Fiscal Especial General, so pena de desacato, para que muestren causa por la cual no debe accederse a una solicitud del acusado para hacer alegación por un delito menor al imputado. No corresponde al tribunal evaluar la sabiduría de una directriz del Departamento de Justicia que exige previa consulta con el Departamento para que el fiscal pueda acceder a una alegación por delito menor. Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985).

En ausencia de coincidencia de criterio entre una alegación propuesta por el acusado y el parecer del Ministerio Público en consulta con el Secretario de Justicia, el tribunal debe exigir que se ventile el caso en su fondo. Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 D.P.R. 382 (1985).

La negociación sobre alegaciones de culpabilidad debe constar en el record del caso. La práctica de negar para el record que el acusado ha recibido una promesa del fiscal de archivarle algún cargo o solicitar del juez que sea benigno en la imposición de la pena a cambio de una alegación de culpabilidad ha sido severamente criticada. Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984).

Regla 73. ALEGACIÓN DE NO CULPABLE; SUS EFECTOS.

La alegación de no culpable constituye una negación de todas las alegaciones esenciales de la acusación o denuncia. Sujeto a lo dispuesto por las Reglas 63 y 64, dicha alegación permitirá la presentación en evidencia de todos los hechos tendentes a establecer una defensa.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 165 y 166; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1019 y 1020; Código modelo, Rs. 233 y 234.

ANOTACIONES

1. En general.

El acusado que invoque las defensas de coartada o locura solo tiene que anunciar el nombre de sus testigos. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

No procede que un tribunal considere la defensa de entrampamiento levantada por un acusado, una vez este niega los hechos imputadosle en la correspondiente acusación sosteniendo que el fiscal no logra conectarlo con los mismos. Pueblo v. Flores Coris, 99 D.P.R. 880 (1971); Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969).

Una alegación de inocencia tiene el efecto de controvertir toda la prueba de cargo presentada. Pueblo v. Rodríguez Sierra, 95 D.P.R. 196 (1967).

Regla 74. ALEGACIÓN DE NO CULPABLE; NOTIFICACIÓN DE DEFENSA DE INCAPACIDAD MENTAL O COARTADA.

Cuando el acusado hiciere alegación de no culpable e intentare establecer la defensa de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputándole, o cuando su defensa fuera la de coartada, deberá presentar en el Tribunal de Primera Instancia un aviso al efecto, con notificación al fiscal, dentro de los veinte (20) días siguientes al acto de la lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de no culpable. En casos por delitos menos graves a los cuales no aplique el derecho a juicio por jurado el aviso con notificación al fiscal se presentará por lo menos veinte (20) días antes del juicio.

El acusado que desee establecer la defensa de incapacidad mental deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información:

- (a) Los testigos con los que se propone establecer la defensa de incapacidad mental.
- (b) La dirección de dichos testigos.
- (c) Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopiados.
- (d) Hospital u hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las fechas en que lo recibió.
- (e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado en relación a su incapacidad mental.

El acusado que desee establecer la defensa de coartada deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información:

- (a) Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.
- (b) Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio.
- (c) Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio.
- (d) Informar qué documentos, escritos, fotografías o papeles se propone utilizar el acusado para establecer su defensa de coartada, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopiados.

El Ministerio Público tendrá la obligación recíproca de informar al acusado el nombre y dirección de los testigos o los documentos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada o incapacidad mental.

En ambos casos, si el acusado o el Ministerio Público no cumplen con dicho aviso o no suplen la información requerida, no tendrán derecho a ofrecer tal evidencia. El tribunal podrá, sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare la existencia de causa justificada para haber omitido la presentación del aviso o información. En tales casos el Tribunal

podrá decretar la posposición del juicio o proveer cualquier otro remedio apropiado. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(Mayo 29, 1984, Núm. 30, p. 70; Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 4, ef. 60 días después de Julio 5, 1988; 2002, ley 298; 2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005.)

REGLA 74. ALEGACIÓN DE NO CULPABLE; NOTIFICACIÓN DEFENSA DE INCAPACIDAD MENTAL O COARTADA

Cuando el acusado hiciere alegación de no culpable e intentare establecer la defensa de trastorno mental transitorio o de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputándole, o cuando su defensa fuera la de coartada, deberá presentar en el Tribunal de Primera Instancia un aviso al efecto, con notificación al fiscal, dentro de los veinte (20) días siguientes al acto de la lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de veinte (20) días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de no culpable. En casos por delitos menos graves a los cuales no aplique el derecho a juicio por jurado el aviso con notificación al fiscal se presentará por lo menos veinte (20) días antes del juicio.

El acusado que desee establecer la defensa de incapacidad mental o de trastorno mental transitorio deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información:

- (a) Los testigos con los que se propone establecer la defensa de incapacidad mental o trastorno mental transitorio.
- (b) La dirección de dichos testigos.
- (c) Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopados.
- (d) Hospital u hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las fechas en que lo recibió.
- (e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado en relación a su incapacidad mental o condición de trastorno mental transitorio.

El acusado que desee establecer la defensa de coartada deberá suministrar al Ministerio Público, al momento de plantearla, la siguiente información:

- (a) Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.
- (b) Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio.
- (c) Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio.

(d) Informar qué documentos, escritos, fotografías o papeles se propone utilizar el acusado para establecer su defensa de coartada, supliendo copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales documentos, autorizando a que los mismos sean fotocopados.

El Ministerio Público tendrá la obligación reciproca de informar al acusado el nombre y dirección de los testigos o los documentos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada, trastorno mental transitorio o incapacidad mental.

En ambos casos, si el acusado o el Ministerio Público no cumplen con dicho aviso o no suplen la información requerida, no tendrán derecho a ofrecer tal evidencia. El tribunal podrá, sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare la existencia de causa justificada para haber omitido la presentación del aviso o información. En tales casos el Tribunal podrá decretar la posposición del juicio o proveer cualquier otro remedio apropiado.

(Enmendada en Mayo 29, 1984, Núm. 30, p. 70; Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 4, ef. 60 días después de Julio 5, 1988; 2002, ley 298; septiembre 15, 2004, Núm 317, art. 10, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1016; Código modelo, R. 235.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Titulo 4.

Enmiendas

-2004, ley 317. Primer párrafo: La ley de 2004 añadió "transitorio o de incapacidad mental" después de "mental" en la primera oración de este párrafo.

La ley de 2004 añadió "o de trastorno mental transitorio" después de "mental" en el segundo párrafo y en el inciso (a) de esta regla.

Inciso (e): La ley de 2004 añadió "o condición de trastorno mental transitorio" después de "mental" en este inciso.

La ley de 2004 añadió "trastorno mental transitorio" después de "coartada" en el penultimo párrafo.

-2002, ley 298. La ley de 2002 redesigno el anterior segundo párrafo como el quinto, enmendandolo en terminos generales, y los tercer a quinto párrafos como los segundo a cuarto de esta sección.

Primer párrafo: La ley de 2002 sustituyo "En el Tribunal de Distrito" con "En casos por delitos menos graves a los cuales no aplique el derecho a juicio por jurado" en la última oración de este párrafo.

Segundo párrafo: La ley de 2002 sustituyo "si este asi lo solicite" con "al momento de plantearla" en la primera oración y, en el inciso (c), añadió "supliendo copia del mismo" después de "defensa" y "autorizando a que los mismos sean fotocopados" después de "tales documentos".

Tercer párrafo: La ley de 2002 sustituyo "si este asi lo solicita" con "al momento de plantearla" en la primera oración y, en el inciso (d), sustituyo "informando en poder de quien se encuentran" con "supliendo copia de... sean fotocopados".

Quinto párrafo: La ley de 2002 enmendó este párrafo en terminos generales.

-1988, ley 65. La ley de 1988 enmendó el primer párrafo de esta regla en terminos generales y añadió un nuevo segundo párrafo.

-1984, ley 30. La ley de 1984 introdujo cambios menores de redacción en el primer y unico párrafo original, y añadió los párrafos segundo a cuarto.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 29, 1984, Núm. 30, p. 70.

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Diciembre 25, 2002, Núm. 298.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Alegación de no culpable; sus efectos, Véase la Regla 73 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.
3. Interpretación con otras leyes.
4. Coartada.
5. Locura.

1. En general.

El tribunal de instancia debe determinar si el acusado es indigente, y le debe designar un profesional de la salud para que lo examine, asesore y ayude en presentar prueba sobre insanidad mental. Pueblo v. Encarnacion, 150 D.P.R. 489 (2000).

Un acusado que reclama el derecho a presentar la defensa de insanidad mental y que alega que no puede contratar los servicios de un perito psiquiatrico por carecer de fondos, no puede ser penalizado por su situación economica y tiene derecho, al igual que cualquier otro imputado de delito, a tener una adecuada defensa. Pueblo v. Encarnacion, 150 D.P.R. 489 (2000).

El Estado unicamente puede hacer uso de, y presentar en evidencia, prueba obtenida como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de esta regla cuando el imputado de delito efectivamente presenta la defensa de coartada durante el proceso. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

Una vez el imputado de delito retira o informa que no va a presentar la defensa de coartada que anteriormente habia anunciado o notificado, el fiscal esta impedido de presentar en evidencia cualquier prueba que el imputado le hubiera suministrado en relación con dicha notificación. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

El proposito evidente de esta regla es poner al Ministerio Público en condiciones de confrontarse con una defensa de coartada o locura. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973).

2. Constitucionalidad.

Esta regla no viola el privilegio de un acusado a no incriminarse, ni lesiona el debido **procedimiento** de ley ni el derecho de un acusado a un juicio justo. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973).

3. Interpretación con otras leyes.

Las disposiciones de esta regla no violan ni el art. 40 de la Ley de Evidencia-privilegio sobre comunicaciones entre medico y paciente-ni la sec. 11 de este titulo que impide al fiscal interrogar los testigos del acusado excepto en el acto de celebrarse el juicio público. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965).

4. Coartada.

Un acusado que reclama el derecho a presentar la defensa de insanidad mental y que alega que no puede contratar los servicios de un perito psiquiátrico por carecer de fondos, no puede ser penalizado por su situación económica y tiene derecho, al igual que cualquier otro imputado de delito, a tener una adecuada defensa. *Pueblo v. Encarnacion*, 150 D.P.R. 489 (2000).

Los jueces tienen facultad para dar a la prueba de coartada el valor probatorio que estimen necesario. (Reiterando el criterio expuesto en *Pueblo v. De Jesus Rivera*, 113 D.P.R. 817 (1983).) *Pueblo v. Ramos Miranda*, 140 D.P.R. 547 (1996).

Para que prospere la defensa de coartada hay que probar que el acusado no se encontraba en el lugar del crimen en la fecha y hora en que se supone se cometió el delito. (Reiterando el criterio expuesto en *Pueblo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 133 (1973).) *Pueblo v. Ramos Miranda*, 140 D.P.R. 547 (1996).

El mero hecho de que el Ministerio Público no presentara prueba de refutación respecto a la prueba de coartada presentada por la defensa no obliga al tribunal de instancia a darle crédito a dicha prueba. *Pueblo v. De Jesus Rivera*, 113 D.P.R. 817 (1983); *Pueblo v. Acosta Acosta*, 107 D.P.R. 68 (1978).

Consiste la defensa de coartada, esencialmente, en la alegación del hecho de que el acusado no se encontraba en el lugar del crimen que se le imputa en la fecha y hora en que se supone se cometió. *Pueblo v. Millan Meléndez*, 110 D.P.R. 171 (1980); *Pueblo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 133 (1973).

Notificado el fiscal de la intención del acusado de valerse de la defensa de coartada en el correspondiente juicio, y habiendo suministrado este los nombres y direcciones de los testigos y el lugar, fecha y hora en que se alega se encontraba al momento de la comisión del delito que se le imputa, es obligación del Ministerio Público informarle al acusado el nombre y dirección de los testigos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada en el acto del juicio. *Pueblo v. Acosta Acosta*, 107 D.P.R. 68 (1978); *Pueblo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 133 (1973).

Son elementos esenciales de la defensa de coartada a ser establecidos por el acusado el lugar, la fecha y hora en que se encontraba dicho acusado al momento en que se supone se cometió el delito por el cual se le acusa. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 133 (1973).

Notificado el fiscal por un acusado que intenta establecer la defensa de coartada en el correspondiente juicio, es deber del acusado-de solicitarlo dicho funcionario-el suministrar al Ministerio Público la siguiente información: (a) sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito; (b) desde que hora se encontraba el acusado en ese sitio; (c) hasta que hora estuvo el acusado en ese sitio, y (d) que documentos, escritos o papeles se propone utilizar el acusado para establecer su defensa de coartada, informando en poder de quien se encuentran tales documentos, escritos o papeles. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 133 (1973).

Probada por el acusado su defensa de coartada la misma crea una duda razonable en cuanto a la culpabilidad del acusado que amerita revocar la sentencia contra el dictada. *Pueblo v. Vélez Feliciano*, 100 D.P.R. 813 (1972).

Un fiscal no tiene autoridad para citar bajo apercibimiento de desacato al tribunal y tomarle declaraciones juradas a los testigos anunciados por el acusado para sustanciar su defensa de coartada. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 98 (1970).

No error al negarse a suspender la vista del caso para que el acusado gestionara la presencia de un testigo con el cual intentaba probar su teoría-la defensa de coartada-ya que: (a) aun cuando el acusado conocía

esa prueba, no hizo gestiones antes del juicio para que se citara al testigo que interesaba; (b) fue durante la presentación de la prueba de defensa que solicito la citación del testigo; (c) el tribunal de instancia ordeno la citación de dicho testigo, pero no pudo diligenciarse la citación porque dicho testigo ya no era agente de la Policía y se hallaba prestando servicio militar; (d) el testimonio de dicho testigo no tenderia a establecer la supuesta defensa de coartada, y (e) aparte de que la prueba del acusado no establecia dicha defensa, este no observo el cumplimiento de lo dispuesto en esta regla para sustanciar dicha defensa. Pueblo v. Roman Nieves, 92 D.P.R. 703 (1965).

Veanse también las anotaciones bajo la Regla 137 de este apéndice.

5. Locura.

Un acusado que reclama el derecho a presentar la defensa de insanidad mental y que alega que no puede contratar los servicios de un perito psiquiatrico por carecer de fondos, no puede ser penalizado por su situación economica y tiene derecho, al igual que cualquier otro imputado de delito, a tener una adecuada defensa. Pueblo v. Encarnacion, 150 D.P.R. 489 (2000).

La ley presume la cordura del acusado, por lo que el fiscal no esta obligado a presentar prueba sobre su capacidad mental para delinquir. No obstante, tal presunción queda rebatida con la presentación de prueba suficiente que establezca duda razonable sobre la cordura del acusado al momento de los hechos. Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

El mero hecho de que la defensa presente prueba pericial para rebatir la presunción de sanidad mental del acusado no impone al Ministerio Fiscal la obligación absoluta de también presentar prueba pericial para refutar la de la defensa. Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

El estado eximente de locura excluye el arrebató de la pasión, sea cual fuere el desorden intelectual que produzca, pues no cabe confundir sin grave quebrantamiento de la justicia y la moral, la situación del que tiene anuladas sus facultades mentales por causas extranas a su voluntad con la del que se deja influir por estímulos que en su origen le es dado vencer y que la razón puede y debe refrenar. Para la apreciación del estado de locura no basta la existencia de cualquier anomalía o alteración de las facultades mentales o de excentricidades y conducta rara, siendo preciso que se declare probada la completa enajenación en el momento de ejecución del hecho procesable. (*Pueblo v. López Rivera*, 109 D.P.R. 160 (1979), seguido.) Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

El hecho de que los peritos esten de acuerdo en que un acusado, al momento de su evaluación psiquiatrica padecia de un desorden de personalidad paranoide no quiere decir que el acusado no comprendiera la criminalidad de su acto al momento de cometer el delito. Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

La doctrina de imputabilidad aminorada en casos en que la defensa plantea insanidad mental (según establecida en *Pueblo v. López Rivera*, 109 D.P.R. 160 (1979)) puede producirse cuando el acto criminoso del acusado responde a una reacción esquizoide y paranoide que limita el discernimiento y nubla la conciencia del acto, sin llegar al grado de eximente total por razón de inimputabilidad. Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

El Tribunal Supremo no intervendra con la evaluación de la prueba que hace el jurado en caso en que el acusado levanta la defensa de locura, en ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Montes Vega, 118 D.P.R. 164 (1986).

La defensa afirmativa de locura del sospechoso al realizar los alegados hechos delictivos puede plantearse en ocasión de la vista preliminar, más queda incólume también el principio que es suficiente en esta etapa de los procedimientos que el juez determine la existencia o no de causa probable, no teniendo el juez que

adjudicar finalmente si dicha defensa afirmativa prevaleciera o no eventualmente, fuera de toda duda, en la vista en su fondo de estos casos. Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765 (1974).

Notificado al fiscal un escrito al amparo de esta regla en que se anuncia que el acusado alegara la defensa de locura al momento de cometer el alegado delito, el tribunal viene obligado, a solicitud de dicho funcionario, a ordenar a la defensa que suministre al Ministerio Público la siguiente información: (a) el nombre y dirección de los testigos, incluyendo los peritos, que se dispone a utilizar la defensa para establecer la defensa de locura, excluyendo el testimonio del acusado, y (b) la prueba documental que se dispone a utilizar el acusado para sustanciar tal defensa. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965).

La actuación de un acusado al hacer uso de esta regla y notificar voluntariamente al fiscal de que intenta valerse de la defensa de locura como eximente de su responsabilidad **criminal** constituye una renuncia limitada de cualquier derecho a no inculparse que pudiera concebiblemente estar envuelto en su caso. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965).

Regla 75. OMISIÓN DE ALEGAR; SU EFECTO.

El hecho de que el acusado dejare de formular alegación alguna no afectará la validez de ningún trámite de la causa si el acusado se sometiere a juicio sin formular alegación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 236.

VIII. INHIBICIÓN DEL JUEZ Y TRASLADO DEL CASO

Regla 76. INHIBICION; FUNDAMENTOS.

En cualquier proceso **criminal**, El Pueblo o la defensa podrán solicitar la inhibición del juez por cualquiera de los siguientes motivos:

- (a) Que el juez haya sido fiscal o abogado de la defensa en el caso.
- (b) Que el juez sea testigo esencial en el caso.
- (c) Que el juez haya presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior.
- (d) Que el juez tenga interés en el resultado del caso.
- (e) Que el juez tenga relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, con la víctima del delito imputado, o con el abogado defensor o el fiscal.
- (f) Que el juez tenga opinión formada o prejuicio a favor o en contra de cualquiera de las partes, o haya prejuzgado el caso.
- (g) Que el juez haya actuado como magistrado a los fines de expedir la orden de arresto o de citación o a los fines de determinar causa probable en la vista preliminar.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 250.

Contrarreferencias.

Inhibición, en general, veanse las Reglas 79 a 81 de este apéndice.

Inhibición o recusación de juez, Véase la Regla 63 de **Procedimiento** Civil, Ap. III del Título 32.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Retroactividad.

1. En general.

El mero hecho de que el juez haya tenido contacto previo con la prueba no la incapacita para ver el caso en los meritos. Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992).

El debido proceso de ley requiere la revocación de una convicción cuando el juez que preside el proceso es la misma persona que lo había investigado previamente, lo que compromete su imparcialidad aunque fuera en apariencia. Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986).

Un juez no viene obligado a inhibirse para ver un caso en los meritos por haber tenido un mero contacto previo con la prueba. Para que prospere una moción de inhibición bajo el inciso (f) de esta regla, el acusado tiene que demostrar afirmativa y específicamente en que consiste el prejuicio y parcialidad del magistrado, no siendo suficiente meras alegaciones y conjeturas. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

El mero contacto previo que tenga un juez con la prueba a desfilarse en el juicio-como fundamento para pedir su inhibición-tiene menor importancia cuando el caso se ve ante jurado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

No constituye causa para solicitar la inhibición de un juez en un caso **criminal** el parentesco de dicho magistrado, dentro del sexto grado de consanguinidad, con el abogado del perjudicado, en una acción civil separada contra el acusado, maxime cuando dicho acusado no solicitó la inhibición del juez en el tribunal de instancia y, además, dicho planteamiento había sido rechazado por el Tribunal Supremo anteriormente por ser irrelevante e inmaterial a la luz del inciso (e) de esta regla. Pueblo v. Gonzalez Barreto, 106 D.P.R. 152 (1977).

En esta jurisdicción no priva la doctrina de que el contacto del juez con la prueba que puede causar una violación del debido proceso de ley o la inhibición del juez en este tipo de litigio tiene que ser de origen estrictamente extrajudicial. Pueblo v. Martes Olan, 103 D.P.R. 351 (1975).

En ausencia de prueba por parte de un apelante de que el grado de contacto o relación previa con la prueba del juez que presidió el juicio causara erosión de la imparcialidad y objetividad que deben gobernar todo juicio justo, el juez puede presidir un caso contra el apelante aun cuando dicho juez haya juzgado con anterioridad a otros coacusados del mismo delito. Pueblo v. Martes Olan, 103 D.P.R. 351 (1975).

2. Retroactividad.

No es procedente aplicar ahora al pie de la letra esta regla a sentencias dictadas hace diez años, cuando no existían todas las causas de inhibición que contiene la misma, porque la Regla 2 que dispone que regiran el **procedimiento** en los procesos iniciados en o con posterioridad a la fecha en que entraron en vigor,

hace la salvedad de que se aplicaran a los procesos penales pendientes solo cuando su aplicación fuera practicable. Domenech Cerezo v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 892 (1964).

Conforme al estado de derecho vigente en el año 1954, un juez que determino causa probable contra un acusado en ciertos delitos que se le imputaban no estaba incapacitado para luego ver los casos en su fondo y dictar sentencia. Domenech Cerezo v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 892 (1964).

Las disposiciones de esta regla no se aplican a un recurso de habeas corpus en que se impugnan por el convicto sentencias dictadas en 1954, a base de que el juez que presidio la vista de los casos y dicto sentencia contra el convicto habia sido el mismo que hallo causa probable al sometersele dichos casos. Domenech Cerezo v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 892 (1964).

Regla 77. MOCIÓN DE INHIBICION; FORMA Y REQUISITO.

La moción de inhibición del juez se hará por escrito y bajo juramento y especificará los motivos en que se funda.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 251.

Regla 78. MOCIÓN DE INHIBICION; CUANDO SE PRESENTARA.

La moción de inhibición deberá presentarse por lo menos veinte (20) días antes del juicio, pero si los fundamentos de tal moción no fueren conocidos por el peticionario con veinte (20) días de antelación al juicio, deberá presentarse tan pronto como fuere posible.
(Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 5, ef. 60 días después de Julio 5, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 253.

Enmiendas

-1988, ley 65. La ley de 1988 aumento de 5 a 20 dias el término de antelación.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Contrarreferencias.

Inhibicion; fundamentos, Véase la Regla 76(d), (e) y (f) de este apéndice.

Regla 79. MOCIÓN DE INHIBICION; DEBER DEL JUEZ.

Cuando se presentare una moción de inhibición fundada en los incisos (d) y (f) de la Regla 76, el juez impugnado no conocerá de la misma, y dicha moción será vista ante otro juez.

Regla 80. INHIBICIÓN A INSTANCIA PROPIA.

Nada de lo dispuesto en estas reglas impedirá a un juez inhibirse a instancia propia por los motivos señalados en la Regla 76 o por cualquier otra causa justificada.

Regla 81. TRASLADO; FUNDAMENTOS.

A solicitud de El Pueblo o del acusado, un tribunal ante el cual se hallare pendiente una causa **criminal** podrá trasladarla a otra sala por los siguientes fundamentos:

- (a) Cuando por cualquier razón que no sea una de las enumeradas en la Regla 76 no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial en el distrito donde está pendiente la causa.
- (b) Cuando por razón de desorden público que exista en el distrito no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial para el acusado y El Pueblo con seguridad y rapidez.
- (c) Cuando la vida del acusado o de algún testigo pueda ponerse en peligro si se juzgare la causa en tal distrito.
- (d) Cuando en dicho distrito no pueda obtenerse un jurado para el juicio del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 171; Fed. R. Crim. P. 21(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1033; Código modelo, R. 255.

ANOTACIONES

1. En general.

El promovente de una moción de traslado tiene que presentar prueba de hechos específicos que evidencien el supuesto perjuicio; meras creencias, opiniones o conclusiones no bastan. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 D.P.R. 792 (1995).

Los factores a ser considerados por el tribunal al evaluar una moción de traslado son: (1) el tamaño de la comunidad; (2) la naturaleza y alcance de la publicidad del caso; (3) la identidad, reputación y posición en la comunidad tanto del acusado como de la víctima; (4) la gravedad de las ofensas, y (5) la dificultad en obtener un panel de jurados. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 D.P.R. 792 (1995).

Lo determinante al considerarse una moción al amparo de esta regla es el mandato de rango Constitucional de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 D.P.R. 606 (1988).

La influencia y las relaciones de un acusado en determinado distrito pueden ser tan numerosas y tan arraigadas que sería prácticamente imposible para el pueblo obtener un jurado que le pueda conceder al Gobierno un juicio justo e imparcial libre de tal influencia. Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 D.P.R. 606 (1988).

No impide la cláusula Constitucional que garantiza el derecho a juicio por jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito el traslado de ciertos casos a otros distritos. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

No comete error un tribunal al trasladar el juicio de un caso **criminal** a un área metropolitana populosa para contrarrestar los posibles efectos adversos de la publicidad, garantizando en esa forma al acusado que se le celebrara un juicio imparcial. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

Regla 82. MOCIÓN DE TRASLADO; COMO Y CUANDO SE PRESENTARA.

La moción de traslado se hará por escrito, expresará los fundamentos en que se basa y deberá apoyarse en declaración jurada. Dicha moción y la declaración jurada se presentarán en el

tribunal y se notificarán a la parte contraria o a su abogado con no menos de veinte (20) días de antelación al juicio, si los fundamentos para la misma fueren entonces conocidos. Se señalará para discutirse antes del juicio si los fundamentos para tal moción no fueren conocidos por el peticionario con no menos de veinte (20) días de antelación al juicio, la moción deberá presentarse y notificarse tan pronto como fuere posible, pero nunca después de ser llamado el caso para juicio, y deberá demostrar que la misma no pudo presentarse antes. En tal caso el juicio podrá posponerse hasta la resolución de dicha moción.

(Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 6, ef. 60 días después de Julio 5, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 172; Fed. R. Crim. P. 22; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1034; Código modelo, Rs. 256, 257 y 259.

Enmiendas

-1988, ley 65. La ley de 1988 aumento de 5 a 20 dias el término de antelación.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Regla 83. MOCIÓN DE TRASLADO; RESOLUCION.

Al resolver la moción de traslado, el tribunal considerará los hechos alegados en ella y la declaración jurada que se acompañe, cualesquiera otras declaraciones juradas que se presenten y la evidencia admitida en la vista de dicha moción. Si el tribunal concediere el traslado, dictará una orden trasladando la causa a la sala de la misma sección que fuere la propia o a la sala más convenientemente situada, donde pueda celebrarse un juicio justo e imparcial.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 173; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1035; Código modelo, R. 260.

Regla 84. TRASLADO; ORDEN.

La orden de traslado deberá consignarse en acta y el secretario remitirá inmediatamente a la sala a la cual se trasladare la causa, copias certificadas de la orden de traslado, del expediente y de todas las actuaciones, incluyendo las fianzas garantizando la comparecencia del acusado y de los testigos, si las hubiere.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 174; Fed. R. Crim. P. 21(c); Código Enj. **Criminal** de California, art. 1036; Código modelo, R. 262.

Regla 85. TRASLADO; ACUSADO BAJO CUSTODIA.

Si el acusado se encontrare bajo custodia, la orden dispondrá su traslado, e inmediatamente el alcaide de la cárcel en que estuviere lo pondrá bajo la custodia del alcaide de la cárcel del distrito al que pasare la causa.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 175; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1037; Código modelo, R. 261.

Regla 86. TRASLADO; COMPARECENCIA DE TESTIGOS.

Cuando una causa se trasladare a otro tribunal, los testigos que hubieren prestado fianza para comparecer al juicio deberán, luego de ser notificados de dicho traslado, comparecer ante la sala a la cual se trasladó la causa en la fecha para la cual se les citare. Su ausencia será suficiente causa para la confiscación de la fianza.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 263.

Regla 87. TRASLADO; SI SON VARIOS ACUSADOS.

Si hubiere varios acusados y se dictare una orden trasladando la causa a solicitud de uno o varios, pero no de todos ellos, el juicio de los acusados que no solicitaren el traslado se celebrará ante la sala que dictó la orden de traslado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 264.

Regla 88. TRASLADO; TRAMITE EN EL TRIBUNAL AL CUAL SE TRASLADA.

La sala a la cual se trasladare la causa procederá a juzgar el caso y dictar sentencia al igual que si se hubiere iniciado la causa ante ella. Si fuere necesario para dicha sala tener ante sí las alegaciones originales u otros documentos, la sala de donde procediere la causa deberá en cualquier momento, a petición del fiscal o del acusado, ordenar su envío por el secretario, reteniendo copia certificada de los mismos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 176; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1038; Código modelo, R. 265.

IX. PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES AL JUICIO

Regla 89. ACUMULACIÓN DE CAUSAS.

El tribunal podrá ordenar que dos o más acusaciones o denuncias sean vistas conjuntamente si los delitos y los acusados, si hubiere más de uno, pudieron haber sido unidos en una sola acusación o denuncia. El proceso se seguirá como si se tratase de una sola acusación o denuncia. Si se radicare denuncia ante el Tribunal de Distrito por la comisión de un delito menos grave que esté relacionado con algún delito grave por haber surgido del mismo acto o transacción, o de dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí o que constituyeren parte de un plan común, el acusado o el fiscal podrán solicitar del Tribunal de Primera Instancia y este emitirá una orden para que se eleven los autos del caso para ante el Tribunal de Primera Instancia. La solicitud del acusado deberá radicarse en el Tribunal de Distrito antes de que haya comenzado el juicio en el Tribunal de Primera Instancia. El **procedimiento** en el Tribunal de Primera Instancia se

continuará teniendo como base la denuncia radicada en el Tribunal de Distrito y el juicio se ventilará por tribunal de derecho.

(Mayo 20, 1970, Núm. 28, p. 60; Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98, art. 11, ef. 60 días después de Junio 19, 1987.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 13.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1987, ley 29. La ley de 1987, en el segundo párrafo, añadió "o el fiscal" después de "el acusado", corrigió la concordancia, suprimió "dirigida al tribunal en el cual se radica la denuncia" después de "una orden".

-1970, ley 28. La ley de 1970 añadió el segundo párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 29, p. 98.

Contrarreferencias.

Casos en que en una misma acusación o denuncia se podran imputar dos o más delitos, Véase la Regla 37 de este apéndice.

Causas de acumulación o separacion; como y cuando se presentara la solicitud, Véase la Regla 93 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

En la interpretación de esta regla y la Regla 37(b), ambas reglas deben ser consideradas conjuntamente. Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971).

Un tribunal no puede ordenar una vista conjunta de varios casos contra distintas personas por hechos que no tienen relación alguna entre si. Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971).

Presentadas acusaciones separadas contra dos acusados por los mismos delitos, el tribunal tiene facultad discrecional para que las acusaciones se vean conjuntamente conforme a lo dispuesto en esta regla.

Pueblo v. Mendez Nadal, 97 D.P.R. 482 (1969).

Regla 90. JUICIO POR SEPARADO; FUNDAMENTOS.

Si se demostrare que un acusado o El Pueblo han de perjudicarse por haberse unido varios delitos o acusados en una acusación o denuncia, o por la celebración del juicio conjuntamente, el tribunal podrá ordenar el juicio por separado de delitos o de acusados, o conceder cualquier otro remedio que en justicia proceda.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 238; Fed. R. Crim. P. 14; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1098;

Código modelo, R. 312.

Contrarreferencias.

Causas de acumulación o separación; como y cuando se presentara la solicitud, Véase la Regla 93 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

Procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que dilucide si las manifestaciones de [un acusado] son prueba de referencia inadmisibles en contra de [un co-acusado] y si, de serlas, si su admisión en juicio conjunto —aun mediando instrucciones limitativas al jurado— configura un grado de perjuicio significativo que justifique la separación de un juicio conforme a la Regla 90 de **Procedimiento Criminal**. 2007 DTS 161 (2007) Pueblo v. Virkler 2007 TSPR 161 (2007)

A partir de la aprobación de la Regla 91 cesó la facultad discrecional que tenían los tribunales para conceder juicio por separado a un acusado cuando otro coacusado había hecho declaraciones, admisiones o confesiones que afectaban adversamente a aquel. Pueblo v. Méndez Nadal, 97 D.P.R. 482 (1969).

Presentadas acusaciones separadas contra dos acusados por los mismos delitos, el tribunal tiene facultad discrecional para que las acusaciones se vean conjuntamente conforme a lo dispuesto en la Regla 89. Pueblo v. Méndez Nadal, 97 D.P.R. 482 (1969).

Formuladas dos acusaciones por homicidio involuntario contra un conductor de un vehículo de motor por haber causado la muerte de dos personas en un solo accidente al conducir dicho vehículo en forma ilegal, este puede solicitar el juicio por separado de cada uno de los delitos imputadosle. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966).

Regla 91. JUICIO POR SEPARADO; ADMISIONES POR UN COACUSADO.

A solicitud de un coacusado el tribunal ordenará la celebración de un juicio por separado cuando se acuse a varias personas y una de ellas hubiere hecho declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que afectaren adversamente a dicho coacusado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio.

Esta regla no será aplicable a juicios por el delito de conspiración.

HISTORIAL

Contrarreferencias.

Causas de acumulación o separación; como y cuando se presentara la solicitud, Véase la Regla 93 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Declaración extrajudicial.

1. En general.

En Reyes v. Tribunal Superior, ante, caso en el cual resolvimos conforme al contenido de la Regla 91 de **Procedimiento Criminal** --la cual había sido recién adoptada por este Tribunal y

remitida a la Asamblea Legislativa-- intimamos que la declaración, confesión o admisión del coacusado debe hacer referencia al acusado que solicita la separación. Expusimos entonces que: "debe ser norma de los tribunales de instancia examinar la declaración [del coacusado] que intenta presentar el fiscal y determinar si la alusión que en ella se hace al otro acusado le afectaría adversamente". 2007 DTS 161 (2007) Pueblo v. Virkler 2007 TSPR 161 (2007)

Se resolvió que las declaraciones, admisiones o confesiones que justifican un juicio por separado, bajo la Regla 91 de **Procedimiento Criminal**, son aquellas que incriminan directamente al acusado que solicita la separación; situación que, repetimos, es tan perjudicial que, en realidad, no puede ser "salvada" por una instrucción al jurado. 2007 DTS 161 (2007) Pueblo v. Virkler 2007 TSPR 161 (2007)

No procede la separación de los procedimientos judiciales contra el apelante por conspiración, por la alegada existencia de declaraciones de coacusados inadmisibles contra el apelante si el Ministerio Público no utiliza las declaraciones en el proceso judicial; la presentación de declaraciones posteriores efectuadas mientras la conspiración estaba vigente, era suficiente para satisfacer el requisito de corroboración contra el apelante. Pueblo v. Melia León, 143 D.P.R. 708 (1997).

2. Declaración extrajudicial.

Una declaración extrajudicial de un coacusado incriminando a otro no es prueba legalmente competente ni admisible para determinar la culpabilidad del otro coacusado. Pueblo v. Rodríguez Matos, 98 D.P.R. 152 (1969).

A partir de la aprobación de la Regla 91 cesó la facultad discrecional que tenían los tribunales para conceder juicio por separado a un acusado cuando otro coacusado había hecho declaraciones, admisiones o confesiones que afectaban adversamente a aquel. Pueblo v. Méndez Nadal, 97 D.P.R. 482 (1969).

Véase también las anotaciones bajo la Regla 151.1 de este apéndice.

Regla 92. JUICIO POR SEPARADO; DELITO DE CONSPIRACION.

Cuando fueren acusadas conjuntamente varias personas por el delito de conspiración, el tribunal a solicitud de una de ellas ordenará para ésta la celebración de un juicio por separado si demostrare que alguno de los otros conspiradores, después de realizado o fracasado el objetivo para el cual se tramó la alegada conspiración, hizo declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que han de afectar adversamente a la persona que solicitare el juicio por separado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio.

HISTORIAL

Contrarreferencias.

Causas de acumulación o separación; como y cuando se presentara la solicitud, Véase la Regla 93 de este apéndice.

Conspiración, veanse las secs. 4523 y 4524 del Título 33.

Regla 93. ACUMULACIÓN O SEPARACION; COMO Y CUANDO SE PRESENTARA LA SOLICITUD.

La solicitud para la acumulación o separación de causas bajo las Reglas 89 a 92 deberá presentarse por escrito, con no menos de veinte (20) días de antelación al juicio y expresará las razones en que se funda. Deberá notificarse a la otra parte. Por causa justificada, el tribunal podrá permitir que dicha solicitud se presente en cualquier momento antes de ser llamado el caso para juicio.

(Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 7, ef. 60 días después de Julio 5, 1988.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1988, ley 65. La ley de 1988 aumentó el término de antelación a 20 días.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

Regla 94. DEPOSICIONES.

(a) Fundamentos; testigo bajo arresto. Por circunstancias excepcionales y en interés de la justicia, el tribunal podrá ordenar en cualquier momento después de haberse presentado la denuncia o acusación, a moción de cualquiera de las partes con notificación a las demás partes, que el testimonio del testigo de la parte solicitante se tome por deposición, ya sea por medio de la estenografía, taquigrafía o cualquier otro medio de grabación diferente a éstos y que cualesquiera libros, papeles, documentos u objetos no privilegiados que se designen en dicha moción se presenten en el momento y lugar en que deba tomarse la deposición.

Si el testigo estuviese bajo arresto por no haber prestado fianza para comparecer a un juicio o a una vista, el tribunal, a solicitud escrita del testigo arrestado notificada a las partes, podrá ordenar que se tome su deposición. Luego de ser suscrita la deposición, el tribunal podrá poner en libertad al testigo.

(b) Notificación. La parte a cuya instancia se vaya a tomar una deposición notificará con diez (10) días de anticipación a cada otra parte, el día, hora y lugar de la toma de deposición y especificará el nombre y dirección de cada una de las personas a ser examinadas. A moción de cualquier parte notificada, el tribunal podrá, por justa causa, extender o acortar la fecha fijada o cambiar el lugar señalado para la toma de la deposición.

Una parte que ha sido notificada de la toma de una deposición podrá solicitar al tribunal la posposición de la misma mediante moción apoyada en declaración jurada en la cual se especifiquen los motivos para solicitar la posposición. De ser la moción de posposición declarada con lugar, el tribunal señalará en la misma orden el día, hora y sitio para la toma de deposición. La posposición así concedida no será mayor de diez (10) días.

El acusado tendrá derecho a estar presente en el acto de la toma de deposición y a estar asistido por abogado. Si estuviese bajo custodia, se le notificará al oficial a su cargo de la fecha, hora y lugar de la toma de deposición y dicho oficial lo conducirá al mismo, a menos que el acusado renuncie por escrito a su derecho a estar presente en cuyo caso la toma de deposición se celebrará en su ausencia. Si el acusado estuviese en libertad, en adición a notificársele la fecha, hora y lugar de la toma de deposición, se le deberá advertir que de no comparecer al acto de la

toma de deposición, ésta se celebrará en su ausencia. Dicha ausencia será considerada como una renuncia a su derecho a estar presente, a no ser que medie justa causa para ella.

(c) Pago de gastos. Cuando el acusado fuere insolvente, o la deposición sea tomada a instancia del Ministerio Fiscal, el tribunal ordenará que el Estado sufrague los gastos de la toma de deposición, incluyendo los de viaje y hospedaje del acusado y su abogado. La solicitud del acusado a estos efectos se hará bajo juramento detallando las razones para el requerimiento del pago de gastos y la condición económica de dicho acusado.

(d) Forma de tomarlas. Toda deposición se tomará en la forma prescrita para la toma de deposiciones en las Reglas de **Procedimiento** Civil. El tribunal, a petición de cualquier parte podrá ordenar que una deposición se tome mediante interrogatorio por escrito de la manera prevista en las acciones civiles o por cualquier medio diferente al de la estenografía o taquigrafía. En este último caso, la orden del tribunal dispondrá la manera en que habrá de tomarse o grabarse la deposición, así como el costo, la custodia y la disposición de la misma proveyendo para que dicho testimonio sea grabado y preservado en forma correcta y confiable. La solicitud de cualquiera de las partes para tomar deposición por determinado medio constituirá una renuncia de su objeción a la toma y uso de la deposición tomada por el medio solicitado.

Con anterioridad a la toma de deposición, el Ministerio Fiscal pondrá a disposición del acusado o su abogado para su examen y uso en el acto de la toma de deposición, cualquier declaración que haya prestado el testigo deponente que esté en posesión de El Pueblo y a la cual tuviese derecho el acusado en el juicio.

(e) Uso. Una deposición podrá ser usada como prueba total o parcialmente durante el juicio o durante la vista, si previamente se demostrare: que el testigo deponente ha fallecido; o que el deponente está fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a menos que resultare que la ausencia fuere procurada por la parte que ofrece la deposición; o que el testigo está imposibilitado de asistir al juicio o prestar su declaración debido a enfermedad; o que la parte que ofreciere la deposición no ha podido conseguir la comparecencia del testigo mediante su citación u otros medios razonables. Cualquier parte podrá utilizar cualquier deposición con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del deponente como testigo.

Si una parte sólo ofreciere una porción de la deposición, cualquier parte contraria en el caso podrá requerirla para que ofrezca todo lo de la misma que fuere pertinente a la porción ya ofrecida, y cualquier parte podrá ofrecer cualesquiera otras porciones de la deposición.

Las objeciones sobre la admisión como evidencia del todo o parte de una deposición se harán como se provea en las acciones civiles.

(f) Deposiciones por estipulación. Nada de lo dispuesto en esta regla impedirá la toma de deposiciones oralmente, por interrogatorios escritos o por cualquier medio diferente a la estenografía o taquigrafía, que acuerden las partes, previo consentimiento del tribunal.
(Junio 4, 1983, Núm. 80, p. 185.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 414 a 438; Fed. R. Crim. P. 15; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1335 a 1362.

Enmiendas

-1983, ley 80. La ley de 1983 enmendó esta regla en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1983, Núm. 80, p. 185.

Contrarreferencias.

Toma de deposiciones, veanse las Reglas 23 a 29 de **Procedimiento** Civil, Ap. III del Título 32.

ANOTACIONES

1. En general.

La equiparación entre El Pueblo y la defensa con relación a los medios de descubrimiento de prueba en el proceso penal es cuestion a ser determinada por las leyes y no mediante decisión judicial. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

En Puerto Rico, a falta de una enmienda a esta regla que permita al fiscal tomar la deposición de un testigo esencial que no estara disponible para el juicio, hay remedio en la Regla 64 de Evidencia, Ap. IV del Título 32. Pueblo v. Ruiz Lebron, 111 D.P.R. 435 (1981).

Cuando el abogado defensor, en ausencia de su representado ejercicio su derecho a contrainterrogar, el acusado renuncio a su derecho de estar presente en el acto de toma de deposicion. Pueblo v. Ruiz Lebron, 111 D.P.R. 435 (1981).

Regla 95. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DEL MINISTERIO FISCAL EN FAVOR DEL ACUSADO.

(a) Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de haberse presentado la acusación o denuncia, y dentro del término prescrito para someterla, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal que permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que está en posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal:

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal tenga del acusado.

(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, en la vista preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los récords de convicciones criminales previas de éstos.

(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal.

(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado, que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado.

- (5) El récord de convicciones criminales previas del acusado.
- (6) Cualquier informe preparado por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra el acusado que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado. El descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las siguientes condiciones:
- (A) Que los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación;
- (B) que no afecte la seguridad del Estado ni las labores investigativas de sus agentes policíacos, y
- (C) que la correspondiente moción del acusado sea presentada con suficiente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni se produzcan molestias indebidas a los funcionarios del Estado.
- (b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su poder.
- (c) El Ministerio Fiscal deberá informar al tribunal si el material o la información solicitada no se encuentra en su posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie o controle, que la ponga a la disposición del acusado.
- (d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de la defensa los escritos de investigación legal, informes, memorandos, correspondencia u otros documentos internos que contengan opiniones, teorías o conclusiones del Ministerio Fiscal.

HISTORIAL

Derogación.

La Regla 95 original de **Procedimiento Criminal**, que procedía de la Regla Federal 16, fue derogada por la Ley de Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287, art. 1, efectivo 90 días después de Julio 1, 1988, la cual, a su vez, adiciono una nueva regla con el mismo número 95, cuyo texto se consigna.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287.

Contrarreferencias.

Policía de Puerto Rico, véanse las secs. 3101 a 3139 del Título 25.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Discreción judicial.
3. Documentos específicos.

1. En general.

TAerrió al concluir que para obtener un descubrimiento de prueba y una vista evidenciaria sobre procesamiento selectivo es necesario establecer un caso *prima facie*, pues, en la etapa inicial en que se encuentra su reclamo, el *quantum* de prueba necesario es “alguna prueba” tendente a establecer los elementos de la defensa de procesamiento selectivo. 2008 DTS 123 Pueblo v. Martínez Acosta, 2008 TSPR 123

La verdad debe siempre prevalecer, sea ésta cual fuere. La verdad puede ser dura, y, en ocasiones, hasta amarga, pero nunca es injusta. Es por ello que el norte de todo **procedimiento criminal**, siempre, debe ser el descubrimiento de la verdad. 2008 DTS 011 Pueblo v. Miro Castañeda, 2008 TSPR 011, Opinión de conformidad de Resolución no ha lugar.

Somos del criterio que resulta procedente denegar la solicitud de certiorari presentada por el Estado en el presente caso, la cual, a nuestro juicio, constituye un intento de impedir que aflore la verdad mediante la utilización de tecnicismos legales, impidiendo de esa forma que se haga justicia en el caso. 2008 DTS 011 Pueblo v. Miro Castañeda, 2008 TSPR 011, Opinión de conformidad de Resolución no ha lugar.

En Pueblo v. Pillot Rentas, res. 20 de diciembre de 2006, 169 D.P.R. ____ (2006), 2006 T.S.P.R. 189, indicamos que “las notas de la investigación que realiz[a] el agente ... constituyen material sujeto a ser descubierto bajo la ... Regla 95 de **Procedimiento Criminal**.” 2007 DTS 085 Pueblo v. En Interés del Menor A.L.G., 2007 TSPR 085

La grabación magnetofónica del testimonio vertido en la vista preliminar no constituye producto de la labor del abogado “work product” exenta del descubrimiento de prueba porque no contiene pensamientos privilegiados, teorías legales, impresiones mentales, ni estrategias de la defensa. Sentencia, 2006 DTS 19, (2006) Pueblo v. Aguayo Huestas, 2006, TSPR 19, (2006)

El foro intermedio apelativo denegó la solicitud de expedición del auto de Certiorari, por entender que “el Estado no tiene interés legítimo en interponer obstáculos para que se conozca la verdad”. Concluyó que las declaraciones juradas en cuestión son pertinentes, no fueron refutadas por el Ministerio Público y la entrega de copias de las mismas es consona con el balance de intereses de auscultar la verdad. 2004 DTS 015, (2004) Pueblo v. Casanova 2004 TSPR 015, (2004)

El derecho a descubrimiento de prueba es uno consustancial con el derecho de todo acusado a defenderse en un proceso **criminal** en su contra. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999).

Para que el Ministerio Público venga obligado a descubrir para beneficio del acusado cualquier libro o documento, basta con que se de una de las siguientes circunstancias: (1) que el material solicitado sea relevante para preparar la defensa del acusado; (2) que el Ministerio Público se proponga utilizarlo en el juicio, o (3) que el mismo haya sido obtenido del acusado o le perteneciera. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999).

El derecho al descubrimiento de prueba es consustancial al derecho de todo acusado a defenderse en un proceso **criminal** en su contra, pero esta regla establece límites a esta prerrogativa a fin de desalentar las expediciones de pesca. Pueblo v. Echevarria Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

Evidencia exculpatória es toda aquella que resulta favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo. Pueblo v. Echevarria Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

Excepto limitadas excepciones, la norma general con relación al descubrimiento de prueba en el proceso penal es la dispuesta en esta regla. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

Con anterioridad al juicio, el derecho del imputado a interrogar o entrevistar los testigos de cargo esta circunscrito a solo la voluntad de los testigos. Durante el juicio, ese derecho esta limitado a que el fiscal los anuncie y no los presente. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

El descubrimiento de prueba por el acusado, aun cuando tiene una fuente estatutaria en esta regla, tiene, en circunstancias propias, una base más amplia en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

El concepto de pertinencia, aplicado a una solicitud de descubrimiento de prueba por el acusado, y la obligación del fiscal de revelar dicha prueba ante la solicitud de la defensa, son consustanciales con el eminente interés en asegurar que toda evidencia significativa que tienda a establecer inocencia sea presentada al juzgador de los hechos. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

El descubrimiento de prueba en el proceso **criminal** debe enancharse hasta donde permita la competencia entre el interés del acusado en su defensa y la confidencialidad de determinados documentos y expedientes, moderada por una discreción judicial que habra de decidir si la utilidad que para la defensa representa esa prueba supera los intereses del Estado y de terceras personas a cuya protección va dirigida la norma de secretividad. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

En todo enjuiciamiento **criminal**, el fiscal viene obligado a producir y entregar a la defensa los informes y documentos que el tribunal ordene independientemente de si estos se encuentran en su posesión o bajo su control. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

El descubrimiento de prueba por el acusado-que rebasa el texto de esta regla y busca apoyo en el debido **procedimiento** de ley-no es recurso a invocarse livianamente ni es patente de corso que en forma indiscriminada permite la intrusión en los archivos de fiscalia o que facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con su caso. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

Tiene derecho la defensa a examinar cualquier escrito de un testigo de cargo, o de un testigo presentado por la defensa que hubiere sido renunciado por el fiscal, sobre el asunto que es objeto de su testimonio, que este disponible en el momento en que declare y que no tenga caracter privilegiado, no importa que no fuese hecho bajo juramento o que no este en posesión del Ministerio Público. Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977).

Renunciado el uso de un testigo por un fiscal, dicho funcionario solo viene obligado a entregar a la defensa la declaración jurada del testigo, no estando obligado a servirle un resumen aparte en cuanto a lo dicho por el testigo, no consignado en la declaración. Pueblo v. Martínez Valentin, 102 D.P.R. 492 (1974).

Renunciado el uso de un testigo por el fiscal, y entregada por este a la defensa la unica declaración jurada de dicho testigo, dicho funcionario no tiene que informarle al abogado defensor que dicho testigo le habia participado verbalmente un cambio en su declaración jurada, siendo responsabilidad del abogado defensor-quien alego la coartada como unica defensa-entrevistar y someter a un minucioso examen al testigo antes de utilizarlo a los fines de escudrinar el recuerdo del testigo sobre particulares en relación a la fecha en que este vio al acusado, descubriendo cualquier contradicción sobre este extremo que pudiera existir entre lo expresado en la declaración jurada del testigo y su testimonio posterior en corte. Pueblo v. Martínez Valentin, 102 D.P.R. 492 (1974).

Esta regla no prohíbe-como lo hace la Regla 16 de **Procedimiento Criminal** federal, tal cual fue enmendada en 1966-el descubrimiento de prueba permitiendo a un acusado la inspección de determinados informes preparados por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra el. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

Interesado un acusado en conocer la prueba documental y la objetiva con que cuenta el fiscal para probar un caso en su contra, dicho acusado debe recurrir al remedio establecido en esta regla. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

Dictadas las correspondientes ordenes para la producción de documentos a solicitud de la defensa, compete a esta realizar las diligencias pertinentes para asegurar el uso oportuno de los documentos por ella solicitados. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

2. Discreción judicial.

No es absoluto el derecho de un acusado al descubrimiento de prueba, descansando el mismo en la sana discreción del tribunal. Entre los elementos a considerar por el juez al establecer el balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado, figuran la confidencialidad de lo solicitado y la pertinencia para el acusado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

La negativa de un juez a suministrar a la defensa durante el juicio ciertos documentos confidenciales de la Policía de Puerto Rico no constituye un error revocable cuando el acusado no demuestra que el juez abuso de su discreción o el perjuicio que le causo la negativa del magistrado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Es discrecional de un tribunal-no un derecho absoluto del acusado-el expedir una orden a un fiscal bajo esta regla que permita a un acusado la inspección de determinados informes preparados por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra el. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

En la determinación de si debe ordenar al fiscal descubrir prueba en su posesión, en el ejercicio de su discreción, un tribunal debe establecer un justo balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado, tomando en consideración: (a) si los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; (b) su importancia para la seguridad del Estado o la confidencialidad de la labor investigativa, y (c) la razonabilidad de la petición, tomando en cuenta sus propositos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni hostigación o molestias indebidas a los funcionarios del Estado. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

Procede dictar un tribunal una orden al fiscal bajo las disposiciones de esta regla para que permita a un acusado la inspección de determinados informes preparados por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra el, cuando la pertinencia de lo solicitado por el acusado es incuestionable y el fiscal no alega ni ofrece prueba de que la revelación de los informes solicitados por el acusado afectaría la seguridad del Estado o las labores investigativas de sus agentes policíacos, y la correspondiente moción del acusado fue presentada con suficiente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio y nada hay en los autos demostrativo de propositos dilatorios u opresivos para con la otra parte. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).

3. Documentos específicos.

Tanto el contrato de informante retribuida ... como el expediente policiaco constituyen prueba que confronta la evidencia del Estado y sirve para impugnar su credibilidad y contradecirla. De haber estado sujeta a la adjudicación del Tribunal de Primera Instancia, esta prueba hubiera razonablemente socavado la confianza en la única evidencia que sostenía la acusación del Estado, el testimonio de [la informante], testimonio que además requiere un trato particular y cauteloso. 2008 DTS 124 Revoca y concede nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez Colón, 2008 TSPR 124

El hecho de que las notas de la investigación policíaca no puedan ser descubiertas en etapa de vista preliminar al amparo de la Regla 95 de **Procedimiento Criminal**, no implica que, si un testigo las empleó para refrescar su memoria, tampoco pueda exigirse su presentación bajo la referida Regla 49. No obstante, la aplicación de dicha Regla en la etapa de los procedimientos aquí en cuestión, no se ajusta de ordinario al propósito limitado de la vista preliminar según lo hemos esbozado reiteradamente en nuestra jurisprudencia. 2006 DTS 189 Pueblo v. Pillot Rentas, 2006 T.S.P.R. 189

El imputado de un delito grave no tiene derecho de obtener copia de las declaraciones juradas de los testigos que fueron examinados durante la vista de causa probable para el arresto antes de que los testigos se sienten a declarar en vista preliminar o en el juicio. 2001 DTS 172 (2001) Pueblo v. Rodríguez López, 2001 T.S.P.R. 172 (2001); 155 D.P.R. 894 (2001).

Un acusado que solicite el descubrimiento de ciertos documentos policíacos- tales como los informes de un agente encubierto sobre delito, arresto, labor diaria, gastos, dietas y millaje, hoja de trabajo y asignaciones- debe hacer alguna demostración prima facie convincente de la pertinencia de esa prueba y de la legitimidad de su petición que la excluya de la calificación de alegación simplemente dilatoria, onerosa y hostigante. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

Por razones de orden público, un informe del inspector o inspectores del Negociado de Contribuciones sobre Ingresos, como tal, no está sujeto a ser inspeccionado por un acusado bajo esta regla como un documento o papel obtenido por El Pueblo, de otra persona. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 746 (1968).

Un acusado, de violar la Ley de Contribuciones sobre Ingresos aun cuando no tiene derecho a inspeccionar un informe del inspector del Negociado de Contribuciones sobre Ingresos en relación a su caso, puede obtener toda la información necesaria para la preparación de su defensa. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 746 (1968).

Regla 95A. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DEL ACUSADO EN FAVOR DEL MINISTERIO FISCAL.

(a) Previa moción del Ministerio Fiscal luego de que el acusado haya solicitado el descubrimiento de prueba bajo las cláusulas (3) y (4) del inciso (a) de la Regla 95, y dentro del término prescrito para someterla, el tribunal ordenará al acusado que permita al Ministerio Fiscal inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que esté en posesión, custodia o control del acusado y que pretenda presentar como prueba en el juicio:

(1) Cualquier libro, papel, documento, fotografía u objetos tangibles.

(2) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de pruebas científicas o experimentos realizados en relación con el caso en particular.

(b) Esta regla no autoriza inspeccionar, copiar o fotocopiar récords, correspondencia, escritos o memorandos que sean producto de la labor del acusado o del abogado del acusado en la investigación, estudio y preparación de su defensa, ni de cualquier comunicación hecha por el acusado, como tampoco de aquellas declaraciones hechas por el acusado, por los testigos o posibles testigos de la defensa o de El Pueblo para el acusado o para los agentes o abogados del acusado.

(Adicionada en Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287, art. 2, ef. 90 días después de Julio 1, 1988.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287.

Regla 95B. NORMAS QUE REGIRAN EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

(a) Deber continuo de informar. Si antes o durante el juicio, una parte descubre prueba o material adicional al que fue previamente requerido u ordenado, que está sujeto a descubrimiento bajo las Reglas 95 y 95A, dicha parte deberá notificar prontamente de la existencia de esa evidencia o material adicional a la otra parte, al abogado de dicha parte o al tribunal.

(b) Término para concluir el descubrimiento de prueba. El descubrimiento de prueba previsto en las Reglas 95 y 95A deberá haberse completado en un plazo no mayor de diez (10) días antes del juicio.

(c) Ordenes protectoras. Mediante moción de cualquiera de las partes que esté debidamente fundamentada, el tribunal podrá ordenar que el descubrimiento o inspección sea dirigido, restringido, aplazado o condicionado, así como emitir cualquier orden que estime necesaria. Si el tribunal emite una orden protectora que afecte un escrito, el texto completo del escrito de la parte deberá ser sellado y preservado en el récord del tribunal para que esté disponible al tribunal apelativo en caso de certiorari o apelación.

(d) Tiempo, lugar y forma del descubrimiento de prueba ordenado por el tribunal. La orden del tribunal autorizando el descubrimiento de prueba deberá especificar la fecha, lugar y forma en que se hará la inspección, copia o fotocopia y podrá establecer los términos y condiciones que el tribunal considere justos y necesarios.

(e) Efectos de negarse a cumplir la orden del tribunal. Si en cualquier momento durante el **procedimiento** se trae a la atención del tribunal que una parte no ha cumplido con la orden, el tribunal podrá ordenar a dicha parte que permita el descubrimiento o inspección del material o de la información, prohibir que dicha parte presente la prueba no descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas órdenes o remedios que estime necesarios de acuerdo a las circunstancias.

(Adicionada en Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287, art. 3, ef. 90 días después de Julio 1, 1988.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Julio 1, 1988, Núm. 58, p. 287.

ANOTACIONES

1. General

El Tribunal Supremo en el caso de autos revocó al foro apelativo, el cual había resuelto que el imputado no tenía derecho a un descubrimiento de prueba ni a una vista evidenciaria sobre su defensa de procesamiento selectivo, debido a que, mediante la prueba presentada, éste no estableció un caso prima facie de procesamiento selectivo. El Tribunal Supremo, por el contrario, concluyó que la prueba que presentó el imputado -candidato a la alcaldía de Sabana Grande por el PIP y Presidente del Comité Municipal de dicho partido político- claramente demuestra que el reclamo del imputado no es frívolo y que existe la posibilidad de que en el encausamiento de éste hayan mediado motivaciones discriminatorias por razón de afiliación política o, incluso, por rechazo al mensaje político que éste pretendía anunciar. 2008 DTS 123 Pueblo V. Martinez Acosta, 2008 TSPR 123

Regla 95.1. LA CONFERENCIA CON ANTELACIÓN AL JUICIO.

(a) En el Tribunal de Primera Instancia. En cualquier momento, después de la celebración del acto de la lectura de la acusación, el tribunal, a solicitud de una de las partes o por iniciativa propia, podrá disponer la celebración de una o más conferencias con el propósito de considerar cualesquiera asuntos susceptibles de resolverse o estipularse con antelación al juicio. Al terminar la conferencia, el tribunal preparará un acta consignando los acuerdos obtenidos y dictámenes emitidos. El acta se radicará en autos una vez sea aceptada y firmada por el acusado, su abogado defensor y el fiscal. Ninguna admisión del acusado o de su abogado en la conferencia será usada en contra del acusado a menos que éste, mediante escrito firmado por él y su abogado, así lo autoricen y acepten.

(b) En el Tribunal de Distrito. Radicada la denuncia correspondiente en el Tribunal de Distrito, siempre y cuando El Pueblo esté representado por un fiscal, podrá celebrarse una conferencia con antelación al juicio siguiéndose el **procedimiento** establecido en esta regla.

(c) Presencia del acusado. Toda conferencia deberá celebrarse con la presencia del acusado y su abogado o con la sola representación legal del primero, siempre y cuando el acusado expresamente lo autorice mediante un escrito al efecto que se radicará en autos.

(d) Cuándo se celebrará. La conferencia con antelación al juicio se celebrará en cámara por lo menos diez (10) días con anterioridad a la celebración del juicio, excepto que por circunstancias excepcionales, o mediante solicitud de parte, el tribunal podrá autorizar su celebración en cualquier momento antes del juicio.

(e) Efectos de los acuerdos. Las estipulaciones y otros acuerdos a que lleguen las partes constituirán la ley entre las partes y registrarán los procedimientos posteriores del caso específico objeto de la conferencia.

(f) Juez podrá presidir el juicio. El juez que presidió la conferencia podrá entender y presidir la vista del caso en su fondo.

(Adicionada en Junio 26, 1974, Núm. 88, Parte 1, p. 334, ef. 90 días después de Junio 26, 1974.)

HISTORIAL

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 26, 1974, Núm. 88, Parte 1, p. 334.

X. SELECCIÓN DE LA LISTA DE JURADOS

Reglas 96 a 108 Derogadas

Ley Núm. 281 de 27 de septiembre de 2003

Nota importante:

Enmienda-

-2003, ley 27- Véase la Ley Núm. 281 de 27 de septiembre de 2003, Ley para la Administración del Servicio de Jurado de Puerto Rico

HISTORIAL

Derogación.

Estas reglas, que fueron finalmente adoptadas por el Tribunal Supremo en Febrero 5, 1963 y sometidas a la Asamblea Legislativa al comienzo de la Tercera Sesión Ordinaria de 1963, regulaban los Jurados.

Antes de su derogación, la Regla 96 había sido enmendada por las Leyes de Agosto 5, 1975, Núm. 15 y Julio 9, 1986, Núm. 87; las Reglas 97 y 98 por Junio 20, 1970, Núm. 15; la Regla 100 por Junio 26, 1963, Núm. 87 y Junio 20, 1970, Núm. 15; las Reglas 103 y 106 por Junio 20, 1970, Núm. 15.

Disposiciones similares vigentes, veanse las secs. 1735 a 1735l de este título.

Regla 96 anterior derogada- Anotaciones

1. En general.

Una persona que tiene 70 años, 10 meses y cinco días de edad puede actuar como jurado en un juicio cuando el tribunal de instancia determina que dicho jurado no estaba senil ni decrepito y, por el contrario, lucía completamente alerta, fuerte y en todas sus facultades, tanto físicas como mentales, maxime cuando no se demuestra que se haya ocasionado perjuicio alguno al acusado. *Pueblo v. Laboy*, 110 D.P.R. 164 (1980).

Es un requisito esencial del derecho a juicio por jurado el que se seleccionen sus miembros de un grupo representativo de la comunidad. *Pueblo v. Laboy*, 110 D.P.R. 164 (1980).

El derecho a juicio por jurado conferido por la Enmienda VI de la Constitución federal implica que los miembros seleccionados para integrarlo constituyan una muestra suficientemente representativa de la comunidad. *United States v. Marcano*, 508 F. Supp. 462 (1980).

La Ley Num. 15 de 5 de agosto de 1975 no hace obligatoria la inclusión de personas entre los 18 y 21 años de edad en un panel de jurados. Esto es, sus disposiciones son preceptivas más no conminatorias. *Pueblo v. Dones Arroyo*, 106 D.P.R. 303 (1977).

Regla 102 anterior derogada- Anotaciones

1. En general.

No se viola el derecho Constitucional de un acusado a juicio por jurado cuando este no demuestra que la utilización de jurados que habian extendido su término de servicio voluntariamente tuviera el efecto de discriminar contra o excluir a determinadas clases de personas y, por tanto, disminuir la posibilidad de obtener un jurado representativo de la comunidad. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

Regla 104 anterior derogada- Anotaciones

1. En general.

No da lugar a la revocación de una sentencia en un caso **criminal** la inobservancia de los preceptos directivos para la selección de la lista de jurados, contenidos en esta regla, a no ser que se demuestre que dicha inobservancia se hizo aviesamente y con el proposito de perjudicar al acusado, o fraudulentamente. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

Regla 108 anterior derogada- Anotaciones

1. En general.

Ante una alegación de que dos de los miembros del jurado recibieron amenazas anonimas, es correcto que el tribunal excuse a esas dos personas luego de examinar a cada uno de los jurados, negandose a disolver todo el cuerpo cuando no se ha demostrado que los jurados envueltos comunicaran a sus companaros lo sucedido. En este caso el perjuicio pareciera ser exclusivamente hipotetico. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

XI. JUICIO

Regla 109. TÉRMINO PARA PREPARARSE PARA JUICIO.

(a) Suspensiones aplicables al Ministerio Fiscal y a la Defensa Después de formular su alegación el acusado tendrá derecho a por lo menos 20 días para prepararse para el juicio.

(b) Toda moción de suspensión, transferencia de vista o estipulación de suspensión antes del juicio se hará por escrito, por lo menos con cinco (5) días de anterioridad a la fecha del señalamiento. En la misma se expondrá lo siguiente:

(1) Los fundamentos para tal solicitud.

(2) No menos de tres (3) fechas disponibles del solicitante para la ventilación de la vista, de ésta suspenderse. Las fechas disponibles a ser consignadas deberán estar comprendidas dentro del período del calendario judicial, en el cual el tribunal en cuestión está señalando para vista.

Una moción de suspensión que no cumpla con lo previamente dispuesto será declarada sin lugar de plano. Sólo podrá formularse una solicitud de suspensión verbalmente el día de la vista fundada en circunstancias extraordinarias no anticipables y fuera del control de las partes o sus abogados.

Si de la faz de la solicitud escrita o de la solicitud verbal surgiere causa justificada para la suspensión, el juez inmediatamente emitirá una resolución escrita en donde expresará los fundamentos para la concesión de la suspensión, transferencia o aprobación de estipulación de

suspensión y en la misma señalará nuevamente la vista para la fecha más cercana disponible. Copia de dicha resolución será enviada al Juez Administrador.

Toda moción de suspensión o transferencia, o estipulación de suspensión hecha antes de la vista será resuelta o aprobada por el Juez Administrador, excepto cuando éste trasladare el asunto para su determinación al juez que hubiere de entender o estuviere entendiendo en el caso. (Julio 23, 1974, Núm. 207, Parte 2, p. 120, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 182; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1049; Código modelo, R. 237.

Enmiendas

-1974, ley 207. La ley de 1974 redesigno el anterior unico párrafo de esta regla como inciso (a), y añadió un inciso (b).

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 207, Parte 2, p. 120.

Contrarreferencias.

Suspensiones y transferencias de vistas, Véase la Regla 17 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, Ap. II-B del Título 4.

Término razonable para el abogado, Véase la Regla 57 de este apéndice.

Regla 110. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE.

En todo proceso **criminal**, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad sólo podrá condenársele del grado inferior o delito de menor gravedad.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 236 y 237; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1096 y 1097.

Disposiciones Constitucionales.

Presunción de inocencia, Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Presunción de inocencia.

1. En general.

Se deja sin efecto la convicción de la peticionaria por negligencia en conducir cuando el Ministerio Público no presenta evidencia suficiente de su negligencia. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 D.P.R. 443 (2000).

La duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad de la conciencia del juzgador de hechos sobre la culpabilidad del acusado una vez desfilada la totalidad de la prueba de El Pueblo. Pueblo v. Torres

Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991); Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

La determinación que ha hecho el juzgador de los hechos en instancia, a los efectos de que la culpabilidad del imputado de delito ha quedado establecida más allá de duda razonable, es revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. Caban Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

Duda razonable es una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en el caso. No debe ser, pues, una duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).

Procede absolver a un acusado del delito imputadole cuando en la mente del juez sentenciador existen dudas en cuanto a cual era la versión verdadera de lo acontecido en un caso **criminal**. Pueblo v. Rodríguez Gonzalez, 102 D.P.R. 571 (1974).

No procede dictar una sentencia contra un acusado por el delito de tentativa de hurto mayor de un aire acondicionado instalado en un automovil cuando de la prueba presentada por el fiscal es difícil inferir, para considerarlo como un hecho probado, fuera de duda razonable, que el valor de dicho aire acondicionado fuera de \$100.00 o más. Pueblo v. Rodríguez Amor, 102 D.P.R. 158 (1974).

De existir duda sobre el grado del delito cometido por un acusado, debe condenarsele por el delito en su grado inferior. Pueblo v. Rodríguez Amor, 102 D.P.R. 158 (1974).

La duda que justifica la absolución de un acusado no solo debe ser razonable, sino que debe surgir de una serena, justa e imparcial consideración de toda la evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación. Pueblo v. Malave Sánchez, 95 D.P.R. 395 (1967).

El testimonio flaco y descarnado de un agente encubierto-unico testigo de cargo para probar el delito imputado-frente al testimonio contradictorio, vago e impreciso del acusado, y la ausencia de una declaración más explícita de dicho agente, unido al hecho del largo periodo transcurrido entre la alegada comisión de la ofensa y la presentación de la declaración jurada del agente a los fines de la determinación de causa probable, da lugar a que surja una duda razonable de la culpabilidad del acusado en este caso. Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966).

Discrepancias en cuanto a pequeños detalles no esenciales en la declaración de testigos no justifican el que surja una duda razonable sobre la culpabilidad de un acusado. Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 D.P.R. 753 (1965).

Si bien es cierto que para que se cometa el delito de conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes debe probarse el estado de embriaguez del acusado en el momento de conducir el vehículo, ello no significa que la prueba del estado posterior de embriaguez del acusado sea siempre insuficiente para establecer más allá de duda razonable su estado de embriaguez al momento de conducir el vehículo. Pueblo v. Pérez Escobar, 91 D.P.R. 10 (1964).

El *corpus delicti* no tiene que establecerlo el fiscal más allá de duda razonable mediante prueba independiente de las admisiones y confesión del acusado. Pueblo v. Castro Cruz, 90 D.P.R. 206 (1964).

Si de la evidencia presentada no resultan probadas, más allá de toda duda razonable, ni la penetración ilegal ni la intención específica de cometer hurto o ratería o cualquier delito grave, no cabe condenar a una persona por el delito de escalamiento por el mero hecho de haber sido vista dentro de un establecimiento. Pueblo v. Laboy Díaz, 90 D.P.R. 187 (1964).

2. Presunción de inocencia.

Todo acusado de delito público tiene derecho a que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en juicio público, justo e imparcial. *Pueblo v. Torres Rivera*, 129 D.P.R. 331 (1991).

Regla 111. DERECHO A JUICIO POR JURADO Y SU RENUNCIA.

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal de Primera Instancia y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado. Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a juicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo.

El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación. Si la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el juicio, es discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público.

(Julio 9, 1986, Núm. 86, p. 281, ef. 30 días después de Julio 9, 1986.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 178 y 264; Fed R. Crim. P. 23(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1042; Código modelo, R. 266.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como "Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1986, ley 86. La ley de 1986 enmendó esta regla en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 9, 1986, Núm. 86, p. 282.

Ley anterior.

La Ley de Enero 12, 1901, p. 1, secs. 1 a 4, ef. Abril 1, 1901, disponía:

"Sección 1.- El derecho a ser juzgado por un jurado queda por la presente establecido en Puerto Rico, y se le confiere a los tribunales de distrito jurisdicción para otorgar el juicio por jurados.

"Sección 2.- Si una persona es acusada por el fiscal o por el Gran Jurado de un delito que aparezca como castigo pena capital o dos o más años de privación de libertad en cualquier establecimiento penal de la Isla, podrá exigir que le juzgue un jurado tan solo en el tribunal del distrito competente, lo que se concederá bajo las siguientes condiciones.

"Sección 3.- Toda persona así acusada, si opta por someterse a un jurado, anunciara su opción al tribunal, por conducto de su abogado o manifestándola personalmente; dicha opción tendrá lugar por lo menos dos días antes del fijado para la vista de la causa por el delito de que se le acusa; y si no se hiciese antes de ese término se considerara a dicha persona como si hubiese renunciado a su derecho a juicio por jurados, en cuyo caso será juzgada por el tribunal.

"Sección 4.- Si una persona, así acusada, ha optado por someterse a un jurado, el secretario del tribunal

tomara nota de ello en el diario de sesiones o libro de actas de dicho tribunal, y el jurado se designara por sorteo en la forma prescrita por la ley."

Contrarreferencias.

Delitos graves y menos graves, Véase la sec. 3044 del Título 33.

Utilización de equipo de grabación en cinta videomagnetofónica, Véase el Ap. XIX del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Ley aplicable.
3. Renuncia.
4. Restitución del derecho.

1. En general.

Dentro de este esquema le corresponde al jurado, como encomienda principal, ser el juzgador de los hechos. ... Ello implica que el jurado tendrá la última palabra no sólo en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino que, además, será el que determine —en caso de entender que el acusado incurrió en responsabilidad en relación con los hechos que se le imputan-- el delito específico, o el grado del mismo, por el cual éste debe responderle a la sociedad. 2007 DTS 103 Pueblo v. Negrón Ayala 2007 TSPR 103

La Constitución de Puerto Rico dispone que toda persona que sea acusada por la comisión de un delito grave tiene derecho a juicio por un Jurado. De igual forma reza la Regla 111, de las de **Procedimiento Criminal**, la cual reconoce el derecho a ser juzgado por sus pares a todo acusado de delito grave. 2007 DTS 103 Pueblo v. Negrón Ayala 2007 TSPR 103

Para determinar si, en casos como el presente, la prueba justificaba impartir la instrucción sobre homicidio debemos, en primer lugar, examinar la misma para ver si en la actuación del acusado, al momento de matar a la joven, hubo elementos de malicia y/o deliberación, característicos del delito de asesinato, y, en segundo término, para determinar si, independientemente del hecho de la existencia de malicia y premeditación, se presentó prueba que justificaba, o hacia mandatoria, la instrucción al jurado sobre el delito de homicidio voluntario. 2007 DTS 103 Pueblo v. Negrón Ayala 2007 TSPR 103

Aun cuando existen momentos distintos para el “comienzo” del juicio para efectos de la cláusula de doble exposición y el de la renuncia al derecho a juicio por jurado bajo la Regla 111 de **Procedimiento Criminal**, este Tribunal nunca se ha expresado en torno al momento en que comienza el juicio para efectos de la cláusula constitucional sobre detención preventiva. 2008 DTS 034 Pueblo v. Paonesa Arroyo 2008 TSPR 034

En vista de todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que en el contexto de la cláusula constitucional sobre detención preventiva, el juicio “comienza” con la juramentación preliminar del jurado bajo la Regla 119 de **Procedimiento Criminal**. 2008 DTS 034 Pueblo V. Paonesa Arroyo 2008 TSPR 034

La selección de una acusación en lugar de una denuncia como la primera alegación en un **procedimiento** penal por un delito menos grave no es razón para activar el derecho estatutario a juicio por jurado; especialmente cuando la sección de la regla en la cual supuestamente se fundamenta el derecho alegado ya es anacrónica. 2006 DTS 127 Pueblo v Agudo, 2006 TSPR 127 (2006); 168 D.P.R.____ (2006).

Limitar el servicio de jurado a solamente algunos grupos de la comunidad especiales o excluir segmentos particulares que desempeñan papeles importantes en la comunidad contraviene el concepto Constitucional de un juicio por jurado. *Pueblo v. Sánchez Pérez*, 122 D.P.R. 606 (1988).

Es frívolo un apuntamiento en apelación a los efectos de que un acusado de conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez tiene derecho a un juicio ante un jurado. *Pueblo v. Forti Velázquez*, 105 D.P.R. 4 (1976).

Es suficiente para invocar su derecho a un juicio rápido una moción de desestimación de una denuncia o acusación radicada por un acusado basada en la violación de dicho derecho, no constituyendo una renuncia a tal derecho la no objeción por el acusado del señalamiento efectuado posteriormente. (*Pueblo v. Martínez Vega*, 98 D.P.R. 946 (1970), *parcialmente revocada*.) *Pueblo v. Arcelay Galán*, 102 D.P.R. 409 (1974).

El delito de homicidio involuntario es un delito menos grave en que el acusado tiene derecho a un juicio por jurado. *Pueblo v. Martínez Vega*, 98 D.P.R. 946 (1970).

No tiene derecho a juicio por jurado bajo las disposiciones de esta regla aquella persona que es acusada por una infracción a la sec. 414 del Título 25. *Pueblo v. Rivera Alvira*, 97 D.P.R. 89 (1969).

Un juez no tiene facultad para negarle a un acusado su derecho Constitucional a un juicio por jurado a base de interpretar las actuaciones de dicho acusado. *Pueblo v. Rodríguez Sierra*, 95 D.P.R. 196 (1967).

La negativa a conceder juicio por jurado en casos por violación a la sec. 1250 del Título 33-que constituye un delito menos grave-no es inconstitucional porque se prive al acusado de la igual protección de las leyes y del debido proceso de ley garantizados tanto por la Constitución de Puerto Rico como por la Constitución federal. *Pueblo v. Matías Castro*, 90 D.P.R. 528 (1964).

En el ejercicio de su facultad para crear delitos, y sujeto a la disposición Constitucional que concede el derecho a juicio por jurado en los delitos graves, al fijar la pena y los tribunales que han de conocer de los procesos que por esos delitos se sigan, el Poder Legislativo puede disponer validamente, de crearlo ajustado a la política pública y objetivos del estatuto por el aprobado, que los juicios sean por tribunal de derecho y no por jurado. *Pueblo v. Matías Castro*, 90 D.P.R. 528 (1964).

Es valida la disposición de las secs. 1247 et seq. del Título 33 que provee que todas las infracciones a la misma deberán enjuiciarse ante tribunal de derecho-aun los casos menos graves antes de la Constitución del Estado Libre Asociado-ya que dicha disposición no es incongruente con el asunto general de que trata la ley, o con su título. *Pueblo v. Colón Rivera*, 90 D.P.R. 183 (1964).

Cuando se demuestra que el acusado no renuncio expresa y personalmente a ser juzgado por jurado se debe concluir que el acusado tenía derecho a que el jurado-y no el juez-determinara si era o no culpable de una infracción a una ordenanza municipal, por lo que procede revocar su convicción y concederle un nuevo juicio por el delito imputado. *Pueblo v. López Rivera*, 89 D.P.R. 791 (1964).

2. Ley aplicable.

Las normas federales que establecen el derecho a juicio por jurado para procesos criminales en los estados de la Unión se aplican también a los de Puerto Rico. *Justiniano Matos v. Gaspar Rodríguez*, 440 F. Supp. 673 (1976).

El caso de *Duncan v. Louisiana*, 391 U.S. 145; 88 S. Ct. 1444; 20 L. Ed. 2d 491 (1968), de regir sus doctrinas en esta jurisdicción, no se aplica a casos por delitos menos graves en que el juicio, convicción y

sentencia ocurrieron antes del 20 de mayo de 1968, fecha en que se resolvió dicho caso. *Pueblo v. Alvarez Mauras*, 100 D.P.R. 620 (1972); *Pueblo v. Rivera Alvira*, 97 D.P.R. 89 (1969).

El caso de *Baldwin v. New York*, 399 U.S. 66; 90 S. Ct. 1886; 26 L. Ed. 2d 437 (1970), de regir sus doctrinas en esta jurisdicción, no se aplica a casos por delitos menos graves en que el juicio, convicción y sentencia ocurrieron antes del 22 de junio de 1970, fecha en que se resolvió dicho caso. *Pueblo v. Martínez Nevarez*, 99 D.P.R. 283 (1970).

No se aplicara retroactivamente la doctrina sentada en *Pueblo v. Juarbe de la Rosa*, 95 D.P.R. 753 (1968), a los efectos de que, antes de aceptar la renuncia de un acusado en su derecho a juicio por jurado, un juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de advertirle de las consecuencias de ello. *Pueblo v. Delgado Martínez*, 96 D.P.R. 720 (1968).

3. Renuncia.

Una vez comenzado el juicio, el acusado no tiene derecho Constitucional a renunciar al jurado. *Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar*, 121 D.P.R. 454 (1988).

De ordinario la renuncia al juicio por jurado no se lleva a efecto antes del comienzo de la vista de supresión. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 117 D.P.R. 283 (1986).

No existe un derecho Constitucional a renunciar al jurado. Pueden concebiblemente surgir circunstancias, sin embargo, en que la no concesión de un juicio por tribunal de derecho entrane la violación del derecho a un juicio imparcial. *Pueblo v. Borrero Robles*, 113 D.P.R. 387 (1982).

Una vez que haya comenzado el juicio, el juez goza de discreción para permitir o no que el proceso continúe ante tribunal de derecho. *Pueblo v. Borrero Robles*, 113 D.P.R. 387 (1982).

A los fines de determinar el momento en que un juez goza de discreción para permitir o no que un juicio continúe ante tribunal de derecho, la frase "comienzo del juicio" significa que se ha movido la maquinaria de la justicia en la fecha señalada para la celebración del proceso, sin que sea necesario aguardar a la desinsaculación y juramentación final de todos los jurados para afirmar que se ha iniciado el juicio. Basta con que se haya tomado el juramento preliminar que ordena la Regla 119. *Pueblo v. Borrero Robles*, 113 D.P.R. 387 (1982).

Ante una solicitud de un acusado para renunciar al jurado ya comenzado el juicio, el tribunal tomara en consideración los siguientes factores: los posibles trastornos a la administración de la justicia, la tardanza en formular las posibles motivaciones de la defensa, el peso de las razones que la defensa debiera aducir para justificar su petición, las contenciones del Ministerio Público sobre el particular, y muy especialmente, la existencia o no de condiciones que puedan amenazar el derecho a un juicio imparcial. *Pueblo v. Borrero Robles*, 113 D.P.R. 387 (1982).

Tiene facultad el Tribunal Supremo para determinar si se ha ejercido razonablemente la discreción del juez de primera instancia al denegar un juicio por jurado después de una renuncia válida del mismo. *Pueblo v. Torres Cruz*, 105 D.P.R. 914 (1977).

No comete error un tribunal al no permitir a un acusado renunciar al jurado y someter el caso por tribunal de derecho cuando ya había desfilado toda la prueba. *Pueblo v. Pérez Santaliz*, 105 D.P.R. 10 (1976).

En su misión de decidir si un acusado ha renunciado inteligente y espontáneamente a su derecho Constitucional a juicio por jurado, el mejor criterio que puede tener el juez ante quien tal derecho se renuncia es la expresión del abogado del acusado en corte abierta junto a su defendido, al efecto de que ha

consultado y ponderado con su cliente, en línea con los mejores intereses de la defensa, la alternativa de ir a juicio por jurado o por tribunal de derecho. Pueblo v. Candelaria, 103 D.P.R. 552 (1975); Pueblo v. De Jesus Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973).

Es valida la renuncia de un acusado a que su juicio se celebre ante jurado cuando el juez de instancia se cercioro de que dicha renuncia era libre y voluntaria y expresamente le pregunto al acusado si sus abogados le habian explicado la diferencia entre un juicio por jurado y un juicio por tribunal de derecho y las consecuencias de la renuncia, habiendo el acusado contestado "Si, señor.", maxime cuando su representación legal no hizo constar que eso no era cierto sino por el contrario admitio, a preguntas del juez de instancia, que habia explicado al apelante acusado todo lo relativo al derecho a juicio por jurado. Pueblo v. Acevedo Colón, 103 D.P.R. 501 (1975); Pueblo v. De Jesus Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Lozada Espinosa v. Rodríguez, 97 D.P.R. 130 (1969).

Un acusado renuncia expresa e inteligentemente a que su caso sea visto ante jurado cuando su abogado le informa al juez que le ha explicado a su cliente la significación de esa renuncia, tras lo cual dicho magistrado interroga al acusado para cerciorarse de que lo que le manifesto el abogado era cierto. Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974).

Antes de aceptar un juez la renuncia de un acusado a ser juzgado por un jurado, el magistrado no tiene que expresarle a dicho acusado las advertencias que debe hacerle cuando se trata de aceptarle una declaración de culpabilidad. Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974).

Una renuncia a un derecho Constitucional fundamental debe ser expresa y no presunta, asi como voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa. Pueblo v. Arcelay Galan, 102 D.P.R. 409 (1974).

Renunciado validamente ante un juez el derecho a que un juicio por un delito *felony* se vea ante jurado, tras lo cual el abogado del acusado solicito y le fue concedida la posposición de la celebración del juicio, al celebrarse luego este ante un magistrado-a quien el mismo abogado defensor expreso que se habia previamente renunciado al jurado en corte abierta-sin solicitar la restitución del derecho renunciado, y en ausencia de actuaciones por el tribunal que en modo alguno enervaran o anularan dicha renuncia previa, el acusado no tiene derecho a que se repitan las formalidades y exigencias anejas a la renuncia al jurado. Pueblo v. Robledo Torres, 101 D.P.R. 753 (1973).

En ausencia de una alegación por los acusados de que su abogado incumplio su obligación de ilustrarlos e informarles sobre la naturaleza, operación y adaptación a los hechos de sus casos de los metodos de juzgar-por jurado o por tribunal de derecho-y examinada la alocución del juez de instancia en el acto formal de renuncia, se concluye que fue valida y libre la renuncia de los acusados a ser juzgados por un jurado. Pueblo v. De Jesus Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973).

Si del record surgen elementos de juicio suficientes que hayan dado base a la sala sentenciadora para concluir que la renuncia al jurado por un acusado fue inteligente, voluntaria y plenamente comprendida, no es indispensable que el juez venga obligado a investigar la edad, educacion, sanidad mental y otros antecedentes del acusado. Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).

Aunque hoy en dia es necesario que un acusado de un delito grave renuncie expresa y personalmente su derecho Constitucional a juicio por jurado, no hubo perjuicio Constitucional por el hecho de que, al tiempo del procesamiento del acusado en junio de 1960 bajo la acusación de escalamiento en primer grado, un abogado defensor en Puerto Rico podia renunciar al juicio por jurado a nombre de su cliente; el requisito fundamental es simplemente que la renuncia sea hecha voluntaria e inteligentemente y, en el caso de autos, no hay nada en el record que sugiera lo contrario. Gonzalez v. Delgado, 345 F. Supp. 1327

(1972).

No es de aplicación a un juicio **criminal** celebrado en el mes de diciembre del año 1963, la doctrina del caso *Pueblo v. Juarbe de la Rosa*, 95 D.P.R. 753 (1968), a los efectos de que, antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a juicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias de ello. *Lozada Espinosa v. Rodríguez*, 97 D.P.R. 130 (1969).

Estas reglas no exigen el consentimiento del fiscal para que un acusado renuncie validamente a su derecho Constitucional a juicio por jurado. *Lozada Espinosa v. Rodríguez*, 97 D.P.R. 130 (1969).

Al aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a juicio por jurado, y en ausencia de circunstancias que lo justifiquen, un tribunal no está obligado a investigar la edad del acusado, su educación y experiencia **criminal**. *Pueblo v. Llanos Virella*, 97 D.P.R. 95 (1969).

Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a que su caso se vea ante un jurado un juez viene obligado a advertirle previamente a dicho acusado lo que significa la renuncia del derecho a juicio por jurado. *Pueblo v. Delgado Martínez*, 96 D.P.R. 720 (1968); *Pueblo v. Juarbe de la Rosa*, 95 D.P.R. 753 (1968).

Procede revocar una sentencia en un caso grave visto por tribunal de derecho y ordenar un nuevo juicio cuando el record del caso no contiene elemento alguno que permita a la sala sentenciadora determinar por sí misma si había inteligencia, espontaneidad, voluntariedad y entendimiento en la actitud de los acusados al renunciar al jurado. *Pueblo v. Juarbe de la Rosa*, 95 D.P.R. 753 (1968).

Cuando de la transcripción de la evidencia resulta que un acusado convicto por delito subsiguiente de robo solicitó juicio por jurado en el acto de lectura de la acusación, pero también aparece que el día del juicio el juez hizo constar en presencia del abogado defensor y del propio acusado que este renunciaba a su derecho a juicio por jurado, sin que ninguno de ellos objetara nada y, asimismo, cuando para esa fecha-9 de diciembre de 1948-un abogado podía renunciar al jurado a nombre del acusado, no es nula la sentencia dictada. *Pueblo v. Caban Rosa*, 92 D.P.R. 866 (1965).

Un acusado puede validamente renunciar al jurado, a repreguntar a los testigos de cargo y presentar prueba de defensa, sometiendo su caso al tribunal por el sumario fiscal, sin que por ello queden viciados de nulidad los procedimientos, si lo hace voluntariamente y con pleno conocimiento del alcance y consecuencias de su actuación. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

Constituye error que justifica la revocación de una sentencia dictada en un caso **criminal**, el que el juez de instancia ordene al acusado que renuncie a su derecho a que su caso se vea ante jurado. *Pueblo v. Torres Ortiz*, 89 D.P.R. 823 (1964); *Pueblo v. Díaz Martínez*, 87 D.P.R. 691 (1963).

En tanto en cuanto establece que un acusado debe renunciar expresa y personalmente al derecho a juicio por jurado, esta regla será tomada en consideración en apelación en todo lo más que ella favorezca al acusado, aun cuando el caso hubiere estado en trámite de apelación al momento de la aprobación de la misma. *Pueblo v. López Rivera*, 89 D.P.R. 791 (1964).

Corresponde al jurado determinar-y no al juez que interviene en el caso-la inocencia o culpabilidad de un acusado ante el Tribunal Superior mediante acusación de la infracción de una ordenanza municipal-delito menos grave para conocer del cual el Tribunal de Distrito tenía también competencia-cuando el fiscal solicita-ya constituido el jurado-incluir el enjuiciamiento de dicho delito menos grave en el mismo proceso en que se incluirían dos delitos graves contra el mismo acusado, maxime cuando el acusado no

manifesto afirmativamente su intención de renunciar a tal derecho y por el contrario invoco en varias ocasiones su derecho a que el jurado, y no el juez, decidiera sobre si el habia cometido o no alguna infracción a dicha ordenanza. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

Cuando del record se desprende que un acusado entendió las consecuencias de renunciar a un juicio por jurado y de someter su caso por el record del juicio anterior-habiendo sido advertido expresamente de su derecho a contrainterrogar a los testigos-este no puede levantar como errores en apelación el hecho de que no tuvo oportunidad de contrainterrogar y que la sala sentenciadora no pudo ejercer su función de credibilidad al oír a los testigos. Pueblo v. Tua, 89 D.P.R. 424 (1963).

4. Restitución del derecho.

Radicada prontamente una moción para retirar una renuncia valida a juicio por jurado, sin que cause trastornos a la administración de justicia y de buena fe-esto es, sin la intención de alargar los procedimientos-un tribunal debe, de ordinario, ejercer su discreción y declarar con lugar dicha moción. Pueblo v. Torres Cruz, 105 D.P.R. 914 (1977); Pueblo v. Salaman Sebastian, 101 D.P.R. 903 (1974).

Un tribunal puede, en el uso de su discreción, restituirle a un acusado, bajo determinadas condiciones, su derecho a juicio por jurado aun luego de renunciarlo validamente. Pueblo v. Salaman Sebastian, 101 D.P.R. 903 (1974).

A los efectos de declarar con lugar una moción para retirar una renuncia valida a juicio por jurado luego del tribunal permitir una enmienda del fiscal a la acusación radicada y ordenar una nueva lectura de la acusación, no es decisivo que la enmienda aprobada por el tribunal sea sustancial o insustancial, siempre que la moción del acusado cumpla con los necesarios requisitos de prontitud, buena fe y ausencia de obstrucción a la justicia. Pueblo v. Salaman Sebastian, 101 D.P.R. 903 (1974).

Renunciado validamente por un acusado su derecho a juicio por jurado, si este es pospuesto y luego se comienza ante otro juez a quien se le solicita juicio por jurado, ordenando dicho magistrado la insaculación del jurado y procediendose a llamar doce personas y examinandose a cinco de ellas, ello equivale a una restitución del derecho previamente renunciado por el acusado, siendo necesario que este ultimo renuncie en forma libre, personal e inteligentemente a dicho derecho antes de que el juez sentenciador ordene que el caso sea visto por tribunal de derecho, al descubrir la renuncia previa hecha por el acusado a su derecho a juicio por jurado. Pueblo v. Salaman Sebastian, 101 D.P.R. 903 (1974).

Constituye un error que justifica la revocación de la sentencia dictada en un **procedimiento criminal**, el someter a un acusado a juicio por tribunal de derecho bajo la eficacia de su anterior renuncia del derecho a juicio por jurado-renuncia hecha ante otro magistrado siete meses antes del comienzo del juicio-luego de haber dicho acusado solicitado juicio por jurado y ordenar el juez sentenciador la insaculación del jurado-*voir dire* que fue interrumpido por el juez al descubrir la renuncia anterior del acusado a dicho derecho-no habiendo el acusado renunciado en el juicio al derecho a juicio por jurado en forma personal, libre e inteligente. Pueblo v. Salaman Sebastian, 101 D.P.R. 903 (1974).

Regla 112. JURADO; NÚMERO QUE LO COMPONE; VEREDICTO.

El jurado estará compuesto por doce (12) vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve (9).

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 184 y 185; Fed. R. Crim. P. 23(f).

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.

1. En general.

La razón práctica para que se cambiara la norma de veredicto unánime por el de mayoría de no menos de nueve fue evitar que el aislado proceder de un solo miembro abortara la unanimidad y anulara el esfuerzo y la labor colectiva del panel. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982).

Un acusado puede renunciar a su derecho de ser juzgado por un jurado compuesto por doce personas y, en su lugar, acceder a que lo juzgue un jurado compuesto por un número menor de personas. Pueblo v. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1981).

La renuncia de un acusado de su derecho a que lo juzgue un jurado compuesto por un número de doce personas, y que en su lugar lo juzgue un jurado compuesto por un número menor de personas, al igual que la renuncia total a su derecho a juicio por jurado, requiere que esta sea hecha inteligentemente, o con conciencia de lo que la renuncia implica en sus consecuencias y que además, sea hecha expresa y personalmente. Pueblo v. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1981).

Cuando un acusado mientras se celebraba su juicio renuncio, mediante una estipulación entre su abogado y el fiscal, a que lo juzgara un jurado compuesto por doce personas, sin que el tribunal de instancia le explicara al acusado las consecuencias de su decisión y la renuncia a su derecho a juicio por jurado compuesto por doce personas no es válida. Pueblo v. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1981).

2. Constitucionalidad.

No vulnera los derechos de un acusado en una corte estatal-bajo las disposiciones de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos, según extendidas a los estados bajo la XVI-el hecho de que un jurado este compuesto por menos de 12 miembros. Pueblo v. Baez Cintron, 102 D.P.R. 30 (1974).

La Constitución federal no exige que el veredicto de culpabilidad sea unanime; por tanto no puede exigirse a los tribunales del Estado Libre Asociado ese requisito, cuando la Constitución de Puerto Rico y las reglas de esa jurisdicción disponen y permiten la convicción por veredicto no unanime. Torres v. Delgado, 391 F. Supp. 379 (1974), confirmada, 510 F.2d 1182 (1975).

No constituye una violación al debido **procedimiento** de ley garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el hecho de que el veredicto de un jurado declarando culpable a un acusado no sea por unanimidad y si por una mayoría de no menos de nueve votos. Pueblo v. Santiago Padilla, 100 D.P.R. 782 (1972); Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971).

No es nulo e ineficaz un veredicto por el hecho de que el mismo no hubiere sido rendido por unanimidad. Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295 (1971); Pueblo v. Merced Jiménez, 100 D.P.R. 270 (1971).

Regla 113. RECUSACION; GENERAL O INDIVIDUAL.

El Pueblo o el acusado podrán recusar a todo el grupo de jurados seleccionados de acuerdo con estas reglas, o a cualquier jurado individual. La recusación a todo el jurado se denominará recusación general y la recusación a un jurado, recusación individual.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 207, 208 y 211; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1055; Código modelo, R. 267.

ANOTACIONES

1. En general.

Es renunciable el derecho de un acusado a impugnar el panel de jurados que ha de juzgarle. A dicho derecho se renuncia si no se ejercita adecuadamente. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

Regla 114. RECUSACIÓN GENERAL; FUNDAMENTOS.

La recusación general podrá fundarse en que los procedimientos para la selección del jurado se hubieren desviado considerablemente de las prácticas prescritas por estas reglas, o en que se hubiere omitido citar, intencionalmente, a uno o más de los jurados sorteados.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 212; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1059; Código modelo, R. 268.

ANOTACIONES

1. En general.

Procede declarar sin lugar una moción de impugnación del panel de jurados cuando el acusado deja de establecer un caso prima facie de discrimen en la selección de los jurados, limitándose dicho acusado a alegar generalizaciones no apoyadas por prueba específica. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

El hecho de que un panel general de jurados no sea representativo de la comunidad no es suficiente para establecer que el proceso de selección de los jurados es discriminatorio. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

Regla 115. RECUSACIÓN GENERAL; CUANDO SE HARA.

La recusación general se hará antes de que los jurados presten juramento para ser examinados en cuanto a su capacidad para actuar como tales, pero el tribunal podrá por causa justificada permitir la recusación en cualquier momento antes de que todos los miembros del jurado presten el juramento definitivo para actuar en la causa.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 213; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1060; Código modelo, R. 269.

ANOTACIONES

1. En general.

No procede que un tribunal considere una moción de impugnación de un panel de jurados en que se alega una mera irregularidad, hecha el mismo día señalado para el comienzo del juicio y carente de fundamentos y hechos que la apoyen. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

Regla 116. RECUSACIÓN GENERAL; FORMA Y CONTENIDO.

La recusación general deberá presentarse por escrito y expondrá claramente los hechos en que se fundare. No obstante, por causa justificada, el tribunal podrá permitir que se haga oralmente. La recusación general siempre se hará constar en las minutas del tribunal.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 213; Código Enj. **Criminal**, sec. 1060; Código modelo, R. 271.

Regla 117. RECUSACIÓN GENERAL; RESOLUCION.

El tribunal podrá oír prueba sobre las cuestiones de hecho promovidas por la recusación general. Si el tribunal sostuviere la recusación excusará inmediatamente a todo el jurado y ordenará el sorteo de un nuevo jurado, o en caso necesario la preparación de una nueva lista definitiva de acuerdo con el **procedimiento** prescrito en estas reglas.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 214 a 218; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1065; Código modelo, Rs. 273 y 274.

Regla 118. RECUSACIÓN INDIVIDUAL; CUANDO SE HARA.

La recusación individual podrá ser perentoria o motivada. Sólo podrá hacerse antes de que el jurado preste juramento para juzgar la causa, pero el tribunal podrá por justa causa permitir la recusación después de dicho juramento y antes de presentarse prueba.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 220 y 221; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1067 y 1068; Código modelo, R. 278.

Regla 119. JURADOS; JURAMENTO PRELIMINAR Y EXAMEN.

(a) Los jurados deberán prestar juramento, individual o colectivamente según dispusiere el tribunal, de contestar veraz y fielmente todas las preguntas que se les hicieren en relación con su capacidad para actuar como jurado.

(b) El tribunal examinará y formulará al jurado las preguntas pertinentes a su capacidad para actuar. El tribunal permitirá a las partes efectuar un examen adicional a los jurados potenciales. (Junio 26, 1974, Núm. 89, Parte 1, p. 336.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 219 y 221; Fed. R. Crim. P. 24(a); Código modelo, R. 275.

Enmiendas

-1974, ley 89. La ley de 1974 enmendó esta regla en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 26, 1974, Núm. 89, Parte 1, p. 336.

Regla 120. RECUSACIONES INDIVIDUALES; ORDEN.

El orden de las recusaciones a los jurados individuales será el siguiente:

- (a) Motivadas de la defensa.
- (b) Motivadas del fiscal.
- (c) Perentorias del fiscal.
- (d) Perentorias de la defensa.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 229 a 231; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1086 y 1088; Código modelo, R. 276.

Regla 121. RECUSACIÓN MOTIVADA; FUNDAMENTOS.

La recusación motivada de un jurado podrá hacerse por cualquiera de los siguientes fundamentos:

- (a) Que no es elegible para actuar como tal.
- (b) Que tiene parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, su abogado, el fiscal, con la persona que se alega agraviada o con aquélla cuya denuncia motivó la causa.
- (c) Que tiene con el acusado o con la persona que se alega agraviada relaciones de tutor y pupilo, de abogado y cliente, de patrono y empleado, o de propietario e inquilino; que es parte contraria al acusado en una causa civil, o que lo ha acusado o ha sido acusado por él en un proceso **criminal**.
- (d) Que ha actuado en un jurado que ha juzgado a otra persona por los mismos hechos que motivan la acusación, o ha pertenecido a otro jurado que juzgó la misma causa, o que tiene conocimiento personal de hechos esenciales en la causa.
- (e) Que no puede juzgar la causa con completa imparcialidad. No será motivo de incapacidad para actuar como miembro del jurado el hecho de que la persona haya formado o expresado su opinión acerca del asunto o causa que haya de someterse a la deliberación de aquél, si dicha opinión se funda en rumores públicos, manifestaciones de la prensa, o en la notoriedad del caso, siempre que a juicio del tribunal, previa la declaración que bajo juramento o en otra forma preste, la persona esté en aptitud, no obstante dicha opinión, de actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto que a ella haya de someterse.
(Mayo 27, 1980, Núm. 61, p. 167.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 224 a 227; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1072 a 1074; Código modelo, R. 277.

Enmiendas

-1980, ley 61. Inciso (b): La ley de 1980 añadió "su abogado, el fiscal," después de "con el acusado".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 61, p. 168.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Actuaciones previas.

1. En general.

No abusa de su discreción un tribunal que deniega una recusación motivada basada meramente en expresiones de un candidato a jurado que demuestran su desconocimiento de un principio legal. Pueblo v. Jimenez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985).

En procedimientos de desinsaculación del jurado, el tribunal tiene discreción para impedir que los abogados sometan a los candidatos a una extensa discusión sobre cuestiones de derecho. Pueblo v. Jimenez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985).

Los tribunales de instancia deberán instruir en forma sucinta, general y colectiva a los candidatos sobre los principios básicos pertinentes de derecho vigentes e indagar sobre la disposición de los mismos a acatar y aplicar dichos principios. Pueblo v. Jimenez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985).

Los foros de instancia deberán evitar la formulación de preguntas repetitivas e innecesarias sobre principios básicos de derecho a los candidatos a jurado. Pueblo v. Jimenez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985).

Dependen en gran parte de la discreción del tribunal sentenciador tanto la concesión como la denegación de recusaciones motivadas en un **procedimiento criminal**. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970).

Tanto el fiscal como la defensa tienen pleno derecho a interrogar a un jurado para fundamentar una recusación motivada bajo esta regla, con debida atención a la presunción de inocencia y a los peligros que entranan preguntas sutilmente encaminadas a influir en el ánimo de los otros jurados. Pueblo v. Cruz Negron, 104 D.P.R. 881 (1976).

El que el fiscal no exponga al jurado la teoría de El Pueblo al iniciar el juicio es una cuestión que no puede suscitarse como error por vez primera en apelación, excepto cuando el acusado pueda demostrar que la omisión del fiscal de exponer la teoría de su caso perjudica sus derechos sustanciales. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

2. Actuaciones previas.

No existe perjuicio para el acusado por el mero hecho de que el panel del jurado haya sido seleccionado de entre jurados que habían servido en un caso en que se había presentado evidencia relacionada al segundo caso, ausente prueba de que alguno de los jurados efectivamente hubiere participado en un caso anterior referente a la misma transacción. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

En ausencia de prueba específica de perjuicio contra un acusado, una persona no queda incapacitada para actuar como jurado en un segundo caso contra un acusado por el hecho de que dicha persona hubiera actuado en igual capacidad en un caso anterior por otros hechos contra dicho acusado. Pueblo v. Rodríguez Gonzalez, 101 D.P.R. 1 (1973).

No viola el derecho de un acusado a un juicio imparcial el hecho de que un miembro de un jurado hubiera intervenido como tal en otro caso anterior por otros hechos contra dicho acusado, máxime cuando el abogado defensor tuvo la oportunidad de recusar al jurado en el segundo caso por haber sido el mismo

letrado que represento al acusado en ambos casos. Pueblo v. Rodríguez Gonzalez, 101 D.P.R. 1 (1973).

Un acusado no queda privado de su derecho Constitucional a un juicio justo por razon de que, mientras un presunto jurado era examinado en cuanto a su idoneidad-quien fue luego perentoriamente recusado por la defensa-este manifesto "Yo he sido jurado en un caso de drogas contra este señor.", cuando el juez sentenciador transmite una adecuada instrucción al jurado al efecto de que no debía tomar en consideración dicha manifestacion, la cual instrucción curo cualquier perjuicio que dicha manifestación pudo haberle causado al acusado. Pueblo v. Rodríguez Gonzalez, 101 D.P.R. 1 (1973).

Si al proponerse un juez sentenciador a disolver un jurado-por haber planteado el fiscal que uno de los jurados habia formado parte del jurado que habia intervenido contra otros dos coacusados juzgados separadamente por el mismo delito-la defensa no accede a que se disuelva el jurado, y a preguntas de dicho juez, renuncia a cualquier planteamiento con motivo de esos hechos, el acusado no puede luego en apelación alegar que no tuvo un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Santos Colón, 92 D.P.R. 323 (1965).

Regla 122. RECUSACIÓN MOTIVADA; EXENCIÓN DEL SERVICIO.

Hallarse exento del servicio de jurado no constituirá motivo de recusación y sí un privilegio de la persona exenta.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 228.

Regla 123. RECUSACIONES PERENTORIAS; NÚMERO.

En todo caso por un delito que apareje necesariamente la pena de noventa y nueve (99) años de reclusión o separación de la sociedad, el acusado y El Pueblo tendrán derecho a diez recusaciones perentorias cada uno. En todos los demás casos el acusado y El Pueblo tendrán derecho a siete recusaciones perentorias cada uno. Formulada recusación perentoria contra un jurado, éste deberá ser excluido y no podrá actuar en la causa.
(Mayo 27, 1980, Núm. 60, p. 166; 2002, ley 280.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 223; Fed. R. Crim. P. 24(b); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1070; Código modelo, R. 282.

Enmiendas

-2002, ley 280. La ley de 2002 sustituyo "la pena de reclusión perpetua" con "la pena de noventa y nueve (99) años de reclusión o separación de la sociedad" en la primera oración y "cinco (5) recusaciones perentorias" con "siete (7) recusaciones perentorias" en la segunda oración de esta regla.

-1980, ley 60. La ley de 1980 establecio el derecho a 10 recusaciones perentorias en vez de 15 para el acusado y para El Pueblo en casos de delito en vez de 8 que apareje pena de reclusión perpetua, y en todos los demas casos a 5 recusaciones perentorias para el acusado en vez de 3 y para El Pueblo cada uno en vez de 3.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 60, p. 166.

Diciembre 19, 2002, Núm. 280.

Contrarreferencias.

Recusaciones perentorias; varios acusados, Véase la Regla 124 de este apéndice.

ANOTACIONES**1. En general.**

No comete error el juez que opta por juramentar diez jurados y pospone el juramento de los dos restantes para el día siguiente, cuando el apelante, instado por el tribunal para que utilizara su reserva de catorce recusaciones perentorias contra los diez ya cualificados, solamente utilizó una. *Pueblo v. Romero Rodríguez*, 112 D.P.R. 437 (1982).

Regla 124. RECUSACIONES PERENTORIAS; VARIOS ACUSADOS.

Cuando varios acusados fueren sometidos a juicio conjuntamente, podrán formular colectivamente el número de recusaciones perentorias especificado en la Regla 123, y además cada acusado podrá formular separadamente dos (2) recusaciones perentorias adicionales.

En tal caso el fiscal también tendrá derecho a un número de recusaciones perentorias adicionales igual al total de recusaciones adicionales que esta regla fija para todos los acusados.

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 209; Fed. R. Crim. P. 24(b); Código modelo, R. 283.

Regla 125. JURADOS; JURAMENTO DEFINITIVO.

El juez o el secretario del tribunal tomará el siguiente juramento oral a los jurados que han sido seleccionados para actuar en el juicio:

"Vosotros y cada uno de vosotros, ¿juráis solemnemente desempeñar bien y fielmente vuestro cargo, juzgando con rectitud la causa que pende ante este tribunal y emitiendo un veredicto imparcial de conformidad con la prueba producida? Así os ayude Dios."

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 233; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1093; Código modelo, R. 286.

Regla 126. JURADOS SUPLENTE; REQUISITOS; RECUSACION; JURAMENTO.

Cuando el tribunal lo creyere conveniente podrá ordenar, inmediatamente después de haber prestado juramento el jurado, que se llame a uno o más jurados suplentes. Los jurados suplentes deberán llenar los mismos requisitos que los jurados que hubieren prestado juramento, y quedarán sujetos a iguales exámenes y recusaciones. Tanto el fiscal como la defensa tendrán derecho a una recusación perentoria contra tales jurados suplentes. Dichos jurados suplentes prestarán igual juramento que los ya seleccionados para actuar en el caso, y serán considerados para todos los fines como miembros del jurado hasta tanto se les excuse por el tribunal.

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 231(a), adicionado por la Ley de Abril 30, 1940, Núm. 99, p. 651; Fed. R. Crim. P. 24(c); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1089; Código modelo, R. 285.

Regla 127. JURADOS SUPLENTE; CUANDO ACTUARAN.

Si en cualquier momento antes de haberse sometido finalmente el caso al jurado, uno de los jurados regulares muriese, o se enfermase en tal forma que quedase imposibilitado para cumplir sus deberes, o tuviese que ser relevado por causa suficiente, el tribunal ordenará su sustitución por el jurado suplente, si hubiere uno solo. Si hubiere más de uno se sorteará el sustituto. Al someterse el caso al jurado el tribunal excusará a los jurados suplentes que no se hubieren utilizado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 231(a), adicionado por la Ley de Abril 30, 1940, Núm. 99, p. 651; Fed. R. Crim. P. 24(c); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1089; Código modelo, R. 285.

Contrarreferencias.

Procedimiento cuando se enferma un jurado, Véase la Regla 144 de este apéndice.

Regla 128. JUICIO; ORDEN DE LA PRUEBA.

El secretario leerá la acusación al jurado, informándole las alegaciones hechas por el acusado. Si en la acusación se mencionare alguna convicción anterior confesada por el acusado, el secretario omitirá todo lo relacionado con dicha convicción. El fiscal iniciará el juicio expresando oralmente ante el jurado o el tribunal, según el caso, la naturaleza del delito que intenta probar, las circunstancias en que se cometió el hecho, los medios de prueba de que pretende valerse para justificar la acusación o denuncia, y ofrecerá y practicará las pruebas que tenga en apoyo de dicha acusación o denuncia. Luego el acusado expondrá en forma concisa los medios de defensa de que intenta valerse y practicará las pruebas que tenga en su apoyo. El fiscal y el acusado podrán entonces, en ese orden, presentar sólo prueba en refutación de las originalmente aducidas, a menos que el tribunal, por razones que estimare buenas y en pro de la justicia, les permitiere ofrecer evidencia sobre el caso original.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 233(3), (4), (5); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1093.

ANOTACIONES

1. En general.

El juez que preside la vista en un juicio por jurado tiene amplia discreción para dirigir la etapa de los informes y argumentación de las partes ante el jurado y puede permitir a la defensa o al fiscal que argumenten en sus informes sobre la ley aplicable al caso siempre que tal exposición de la ley sea correcta y no tienda a confundir al jurado. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

Ventilado un caso **criminal** ante tribunal de derecho, no ante un jurado, el discurso de apertura por la defensa haciendo una exposición concisa de los medios de defensa del acusado no constituye un derecho de este. De ventilarse ante jurado el caso, dicho discurso no constituye un requisito de estricto cumplimiento cuando no se ha demostrado perjuicio sustancial al acusado. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976).

De no ser invocado en el tribunal de instancia, no procede levantar en apelación por primera vez un supuesto error de que al acusado se le violó su derecho al debido **procedimiento** de ley al no permitirle a la defensa pronunciar su discurso de apertura. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976).

Un juez que oye y ve a los testigos y a quien se le señalan contradicciones en el testimonio de un testigo de El Pueblo relacionadas con prueba sobre eventos ocurridos con posterioridad a la transacción delictiva, debe sopesar tal impugnación frente a toda la prueba que desfiló en el proceso. Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974).

Un fiscal tiene derecho a presentar durante el juicio contra un acusado la misma prueba documental y prueba objetiva que ofreció durante la vista preliminar, o prueba adicional o prueba distinta de igual naturaleza. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

En esta jurisdicción no rige como regla absoluta el principio de que cuando la prueba para dos o más cargos criminales consiste en el testimonio de un solo testigo, el veredicto o fallo tiene que ser mandatoriamente igual para todos los cargos. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

No se comete error por un juez sentenciador al ordenar la eliminación de parte del testimonio de un testigo al efecto de que el perjudicado en un caso de hurto mayor le había dicho que le faltaba un dinero y que no estaba seguro si la acusada lo había tomado cuando, aparte de que no se sentaron las bases para impugnar el testimonio directo del perjudicado, la acusada no se quejó de la actuación del juez, ni el incidente reviste tal importancia fundamental como para considerarlo aun cuando no hubo objeción o protesta de la acusada. Pueblo v. De Leon Claudio, 99 D.P.R. 266 (1970).

La exposición de la teoría del caso al jurado por un fiscal no tiene ningún valor probatorio. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969); Pueblo v. Calderon Rodríguez, 97 D.P.R. 261 (1969).

Un fiscal actúa de buena fe al exponer su teoría al jurado al referirse a prueba que está en su poder en una declaración jurada prestada por un testigo durante la investigación original del caso, aun cuando en una vista preliminar celebrada más de un año antes del juicio, el testigo se negara a declarar, ya que ello no es indicio alguno de que se supiera de antemano que durante el juicio dicho testigo iba a hacer lo mismo. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969).

Un fiscal, al exponer su teoría al jurado, no debe hacer alusión a un hecho que el jurado no podía considerar para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Pueblo v. Calderon Rodríguez, 97 D.P.R. 261 (1969).

El que el fiscal no exponga al jurado la teoría de El Pueblo al iniciar el juicio es una cuestión que no puede suscitarse como error por vez primera en apelación, excepto cuando el acusado pueda demostrar que la omisión del fiscal de exponer la teoría de su caso perjudicó sus derechos sustanciales. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Siendo la regla general que los acusados en procesos criminales no pueden ser juzgados nada más que por el delito imputado en la acusación, no es admisible prueba sobre otros delitos por ellos cometidos. Pueblo v. Pimentel Camacho, 89 D.P.R. 135 (1963).

Regla 129. TESTIGOS; EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN.

Mientras se estuviere examinando a uno de los testigos, el tribunal podrá excluir a todos los demás que no hubieren sido examinados. Podrá asimismo ordenar que los testigos permanezcan separados y se les impida conversar entre sí hasta que se les examine.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 233(7) y 266.

Regla 130. RECLUSOS; COMPARECENCIA.

Cuando fuere necesario que una persona recluida en la penitenciaría o en una cárcel comparezca ante un tribunal como testigo de cualquiera de las partes o para cualquier otro fin, el tribunal podrá librar la orden necesaria con ese objeto, la cual será diligenciada por el alguacil.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 413, 424 y 533.

ANOTACIONES

1. En general.

En ausencia de prueba de que la defensa llamara la atención del tribunal oportunamente de que el acusado era traído al tribunal esposado y era bajado junto a otros presos frente a la entrada del tribunal, a la vista de jurados que esperaban para entrar a la sala del tribunal, y no habiéndose probado que el jurado que entendió en el caso viese efectivamente al acusado en las condiciones que alega, un convicto no puede levantar en apelación dicho alegado error como razón para revocar la sentencia dictada. *Pueblo v. Dones Arroyo*, 106 D.P.R. 303 (1977).

Un tribunal puede autorizar medidas restrictivas de la libertad de acción del acusado durante el juicio y que estén a la vista del jurado (esposas, grilletes) tomando en consideración hechos tales como convicciones anteriores del acusado y la naturaleza del delito que se le imputa. (*Pueblo v. Rodríguez García*, 85 D.P.R. 467 (1962), *seguido*.) *Pueblo v. Dones Arroyo*, 106 D.P.R. 303 (1977).

Regla 131. TESTIGOS; EVIDENCIA; JUICIO PÚBLICO; EXCLUSIÓN DEL PÚBLICO.

Excepto lo que en contrario se disponga por ley y por estas reglas, en todos los juicios el testimonio de los testigos será oral y en sesión pública y la admisibilidad de evidencia y la competencia y privilegios de los testigos se regirán por las disposiciones de la Ley de Evidencia de Puerto Rico.

En los procesos por delitos de incesto, violación, sodomía, seducción, actos lascivos o impúdicos y exposiciones deshonestas o por la tentativa de cualquiera de éstos, el tribunal podrá excluir al público de la sala durante el tiempo que dure la declaración de la persona perjudicada admitiendo sólo a aquellas personas que tengan un interés legítimo en el caso, tales como los funcionarios del tribunal, abogados de las partes y familiares. Previo a la orden de exclusión el tribunal celebrará una vista en privado para determinar si la persona perjudicada necesita de esta protección durante su testimonio.

(Junio 22, 1978, Núm. 65, p. 214.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 233(1); Fed. R. Crim. P. 26.

Referencias en el texto.

La Ley de Evidencia de Puerto Rico, mencionada en el texto, fue derogada casi en su totalidad por la Regla 84 de Evidencia de 1979, Ap. IV del Título 32.

Disposiciones similares vigentes provisionalmente, Véase la Regla 84(B) de la Ley de Evidencia.

Enmiendas

-1978, ley 65. La ley de 1978 añadió el segundo párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 22, 1978, Núm. 65, p. 214.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Intervención del juez.
3. Preguntas del jurado.

1. En general.

Habiendo tenido el tribunal de instancia amplia oportunidad de cerciorarse de si el testigo tenía o no capacidad para percibir los hechos, recordarlos y luego narrarlos inteligiblemente, el no permitir a la defensa que se hiciese una pregunta al respecto de haber utilizado la defensa de locura en otro juicio-en el que, por ser dicha pregunta objetada y no permitida por superflua e inocua-no constituye error. Pueblo v. Torres Figueroa, 126 D.P.R. 721 (1990).

Existiendo elementos de la identificación del acusado el jurado pudo escuchar la declaración de las victimas de otro delito de robo cometido después del asesinato sin que se causara perjuicio indebido al acusado. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990).

Cuando en el juicio el fiscal no presenta a declarar a uno de los testigos de cargo la defensa esta en libertad de entrevistarlos y puede optar por presentarlo como su testigo. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Aparte de la entrevista voluntaria fuera de los procedimientos ante el tribunal y la presentación del testigo de cargo renunciado en el juicio por el Ministerio Público, no se le ha reconocido derecho absoluto al imputado a poder interrogar a los testigos de cargo antes del juicio en su fondo. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Meras inconsistencias en el testimonio de un testigo no obligan al juzgador a descartarlo. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

El privilegio de identidad del informante esta reconocido en Puerto Rico por la Regla 32 de Evidencia, Ap. IV del Título 32. Pueblo v. Turner Goodman, 113 D.P.R. 243 (1982).

Es facultad del fiscal solicitar protección para un testigo de cargo antes o después de declarar, pero debe evitarse que el jurado tenga conocimiento de su solicitud y por ello pudiera quedar mal impresionado contra el acusado. En caso de que así ocurriera, el magistrado que preside el caso debiera dar instrucciones al jurado al efecto de borrar cualquier mala impresion. Pueblo v. Rios Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

No es absoluto el derecho de un acusado a preguntar a un testigo su direccion, quedando a discreción del tribunal el excluir preguntas que tiendan a hostigar, molestar o humillar al testigo. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Un tribunal en el uso de su discreción, tiene el derecho a declarar improcedente la pregunta de la defensa inquiriendo de un testigo su dirección cuando puede inferirse que podría peligrar la seguridad personal del testigo si se descubre su residencia actual. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Se denomina *memory test* el suministrar a un testigo de cargo un examen a ser conducido por la defensa, consistente en escribir en un pedazo de papel lo que la testigo alegaba haber escuchado en una de las conversaciones sostenidas por el acusado y los coconspiradores, y sobre las cuales ya habia declarado. La

idea era darle lectura al escrito, seguir repreguntando a la testigo y transcurrido un término razonable, preguntar a la testigo que repitiera el escrito al que se dio lectura y que era la misma conversación que ella alegaba haber escuchando más de un año atrás. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Un juez esta justificado en no permitir un *memory test* durante la celebración de un juicio **criminal** cuando el extenso contrainterrogatorio llevado a efecto dio amplia oportunidad al acusado para probar la memoria de la testigo. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

No constituye error revocable el que un juez no permita en repregunta el examen de una testigo respecto a cierto extremo cuando dicha testigo no declaro sobre el particular en el examen directo. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Aun cuando la credibilidad de un testigo se pone en juego cuando este se contradice, es al jurado o al juez de instancia a quien le corresponde resolver el valor de su testimonio restante. Pueblo v. Cruz Negron, 104 D.P.R. 881 (1976).

No justifica la revocación de una sentencia dictada en un **procedimiento criminal** el error cometido por el tribunal sentenciador al decretar inadmisibles los registros oficiales de asistencia de la escuela a donde asistia la hija del acusado-privando a este de presentar evidencia corroborativa en su descargo-cuando dicho error no perjudico al acusado ya que la prueba ofrecida en evidencia no era verdaderamente esencial y, aunque dandole entero credito al testimonio de la testigo, el jurado tenía amplia base en la prueba para declarar culpable al acusado. Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975).

Es deber de abogados, jueces y fiscales el velar que el interrogatorio oral de los testigos-tanto en los casos civiles como en los criminales-se conduzca de tal forma que los hechos relevantes salgan a la luz lo más clara y ordenadamente posible. Pueblo v. Pacheco Baquero, 103 D.P.R. 95 (1974).

En esta jurisdicción no rige como regla absoluta el principio de que cuando la prueba para dos o más cargos criminales consiste en el testimonio de un solo testigo, el veredicto o fallo tiene que ser mandatoriamente igual para todos los cargos. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

En ausencia en el record de una petición por parte de la defensa solicitando una orden del tribunal para obligar la comparecencia de un fiscal con una alegada declaración por el tomada, inculpatoria de un agente encubierto, testigo de cargo en el caso, en la que se suponía que dicho agente admitio haber aceptado un soborno, no se reexaminara la vigente norma que regula la impugnación de credibilidad de un testigo dentro de la interpretación que se ha dado a las secs. 1664, 1678 y 2150 del Título 32. Pueblo v. Concepción Díaz, 101 D.P.R. 279 (1973).

No se comete error por un juez sentenciador al ordenar la eliminación de parte del testimonio de un testigo al efecto de que el perjudicado en un caso de hurto mayor le habia dicho que le faltaba un dinero y que no estaba seguro si la acusada lo habia tomado cuando, aparte de que no se sentaron las bases para impugnar el testimonio directo del perjudicado, la acusada no se quejo de la actuación del juez, ni el incidente reviste tal importancia fundamental como para considerarlo en apelación aun cuando no hubo objeción o protesta de la acusada. Pueblo v. De Leon Claudio, 99 D.P.R. 266 (1970).

Un fiscal no viene obligado a presentar como testigo de cargo al confidente que intervino en los actos delictivos cuando de la prueba surge que este estaba preso en los Estados Unidos, maxime cuando la defensa nunca solicito que se trajera como testigo. Pueblo v. Torres García, 93 D.P.R. 157 (1966); Pueblo v. Flores Berty, 92 D.P.R. 577 (1965).

Cuando la defensa tiene la oportunidad de llamar a declarar como sus testigos a los testigos que el fiscal

no utilizo poniéndolos a su disposición, esta luego no puede alegar que se coarto el derecho del acusado a confrontarse con los testigos de cargo que el fiscal no utilizo. Pueblo v. Pinto Medina, 90 D.P.R. 585 (1964).

En un caso de asesinato en primer grado, después de admitida la confesión del acusado-de la que surge el plan o designio comun de varios coacusados de robar al occiso-son admisibles en evidencia las actuaciones de cada uno de los conjurados conforme a ese plan y los actos que al acusado le correspondio ejecutar, así como las actuaciones y manifestaciones de los partícipes en el crimen durante el curso y en ayuda de su comisión que se hubieran revelado en el juicio. Pueblo v. Rodríguez Marrero, 90 D.P.R. 487 (1964).

Enterado un acusado de que se le acusa junto con otras personas de dar muerte a un ciudadano de acuerdo con un designio o plan comun al ser acusado originalmente de asesinato en primer grado junto con otras personas, si dicho acusado pide y obtiene un juicio por separado, en el mismo es admisible prueba para establecer los hechos ocurridos durante el curso y en ayuda de la conspiración a que hacia referencia la acusación original, sin que sea necesario que el fiscal, al formularle la acusación por separado, alegue en la misma el designio o plan comun del acusado y sus coacusados alegado en la acusación original. Pueblo v. Rodríguez Marrero, 90 D.P.R. 487 (1964).

2. Intervención del juez.

Un juez puede hacer preguntas para aclarar la prueba. Pueblo v. Pacheco Baquero, 103 D.P.R. 95 (1974).

En esta jurisdicción no impera la norma de que las intervenciones razonables del juez son perjudiciales al acusado. Pueblo v. Pacheco Baquero, 103 D.P.R. 95 (1974).

Un juez que oye y ve a los testigos y a quien se le señalan contradicciones en el testimonio de un testigo de El Pueblo relacionadas con prueba sobre eventos ocurridos con posterioridad a la transacción delictiva, debe sopesar tal impugnación frente a toda la prueba que desfilo en el proceso. Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974).

Un acusado no queda privado de un juicio imparcial por la intervención del juez que preside el caso en el contrainterrogatorio de los testigos de cargo cuando la intervención de dicho magistrado fue con los propositos de aclarar preguntas confusas del abogado defensor que ni el mismo magistrado entendia, evitando que las contestaciones fueran al jurado en forma confusa, hacer posible que los testigos de cargo contestaran las preguntas formuladasle, detener la repetición de preguntas sobre hechos ya contestados, evitando dicho magistrado con su intervención que el juicio se prolongara más de lo que innecesariamente se prolongo. Pueblo v. Moctezuma Velázquez, 100 D.P.R. 228 (1971).

Un juez no priva a un acusado de un juicio justo e imparcial cuando las preguntas que hace a los testigos no iban dirigidas a sostener la acusación ni a impugnar o contradecir a dichos testigos, sino que las mismas tenían por objeto aclarar ciertos hechos que no surgian con toda claridad de sus testimonios. Pueblo v. Laureano Figueroa, 97 D.P.R. 354 (1969).

3. Preguntas del jurado.

En raras ocasiones un tribunal debiera permitir una pregunta de un jurado durante el examen de testigos más, de permitirla, el juez de instancia debe motu proprio evitar el desenfreno de la participación forense por los jurados. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

De permitir un juez una pregunta del jurado a un testigo para aclarar particulares de su testimonio, dicho magistrado debe estar atento al desarrollo de ese interrogatorio y cortar su vuelo a tiempo, si resulta que nada hay que aclarar, o si el intento de aclaración se torna en encuesta inquisitorial. Pueblo v. Martin

Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

De estimar un juez que una pregunta de un jurado a un testigo es pertinente puede asumir la iniciativa de la aclaración que interesa el jurado, más con la medida que su alto oficio reclama, cuidándose de sustituir, en vez de complementar, la labor del fiscal o del defensor. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Las razones para que un juez, como regla general, no permita a un miembro del jurado asumir el rol de examinar testigos-cuestión vital que afecta la legalidad intrínseca del proceso **criminal** y que requiere una supervisión por el juez que no puede ser abdicada o transferida-se explican en la opinión. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Un tribunal debe desalentar los interrogatorios de testigos por el jurado. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Ofende la imparcialidad de su encomienda como juez de hechos aquel jurado que cae en el vicio de perseguir una contestación de un testigo que coincida con su guardada opinión sobre el objeto de su pregunta y aun sin quererlo toma una posición de antagonismo o simpatía hacia el testigo o el acusado. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Regla 131.1. TESTIMONIO DE VÍCTIMA O TESTIGO MENOR DE EDAD O MAYORES DE 18 AÑOS QUE PADEZCAN INCAPACIDAD O RETRASO MENTAL MEDIANTE EL SISTEMA TELEVISIVO DE CIRCUITO CERRADO DE UNA O DOS VÍAS.

En determinadas condiciones y circunstancias el interrogatorio de la víctima o testigo menor de edad, podrá llevarse a cabo según el **procedimiento** aquí establecido. Disponiéndose, que para efectos de esta regla y las Reglas 131.2 y 131.3, el término menor significa toda persona que no haya cumplido dieciocho (18) años de edad y toda persona mayor de dieciocho (18) años que padezca incapacidad o retraso mental que haya sido determinado judicialmente con anterioridad o establecido mediante prueba pericial o por estipulaciones de las partes.

(1) Condiciones. El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud del ministerio público, o del testigo o víctima menor de edad, podrá ordenar que la víctima o testigo que sea menor de edad testifique fuera de sala durante el proceso mediante la utilización del sistema televisivo de circuito cerrado de una o dos vías, si concurren las siguientes condiciones:

- (a) El testimonio del menor es prestado por éste durante el proceso judicial;
- (b) el juez ha determinado previamente durante el proceso que debido a la presencia del acusado existe la probabilidad de que el menor, aunque competente para declarar, sufra disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente, y
- (c) al momento de declarar [que] el menor esté bajo juramento o afirmación con las debidas advertencias.

(2) Personas que pueden estar presentes en el lugar donde preste testimonio el menor. Sólo se permitirá la presencia de las personas que se enumeran a continuación, en el lugar donde testifique el menor:

- (a) El fiscal a cargo del caso.
- (b) El abogado de la defensa.
- (c) Los operadores del equipo de circuito cerrado.
- (d) Cualquier persona de apoyo, según se define este término en la Regla 131.3, que determine el tribunal.

Durante el testimonio del menor mediante el sistema de circuito cerrado de una o dos vías, el juez, el acusado, el jurado y el público permanecerán en sala. Al acusado y al juez se les permitirá comunicarse con las personas presentes en el lugar donde presta testimonio el menor, mediante la utilización de equipo electrónico apropiado para esos propósitos. El acusado podrá observar y escuchar simultáneamente al menor mientras éste testifica, sin que el menor pueda observarlo a él, salvo cuando se autorice el sistema de dos vías. Sólo podrán interrogar al menor durante su testimonio: el fiscal a cargo del caso, el abogado de la defensa y el juez.

(3) Determinación de necesidad. Para determinar si existe la probabilidad de que el menor sufra disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente de tener que testificar frente al acusado, el juez podrá observar e interrogar al menor dentro o fuera del tribunal, así también podrá escuchar testimonio de los padres, encargados, custodios, tutor o defensor judicial del menor y cualquier otra persona, a discreción del juez, que contribuya al bienestar del menor, incluyendo a la persona o personas que hayan intervenido con el menor en un ambiente terapéutico por la naturaleza del delito cometido:

(a) El acusado, el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso tendrán derecho a estar presentes cuando el juez escuche testimonio para determinar si autoriza que la víctima menor de edad testifique fuera de la sala donde se ventila el proceso, mediante el sistema de circuito cerrado de una o dos vías.

(b) Si el juez decide observar o interrogar al menor perjudicado para hacer la determinación acorde con la cláusula (a) de este inciso, estarán presentes el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso.

(4) Aplicabilidad. Las disposiciones contenidas en esta regla no son aplicables cuando el acusado comparece por derecho propio (pro se).

(5) Identificación del acusado. Para la identificación del acusado por la víctima se requerirá la presencia de ambos en sala, después que el menor haya testificado.

(Adicionada en Marzo 16, 1995, Núm. 31, art. 1; Agosto 15, 1998, Núm. 247, art. 1, ef. 30 días después de Agosto 15, 1998.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1998, ley 247. La ley de 1998 redesigno la anterior Regla 131A como Regla 131.1 e introdujo en el rubro las enmiendas correlativas al texto.

Primer párrafo: La ley de 1998 añadió al testigo menor de edad en la primera oración, y a los testigos

mayores de 18 de incapacidad mental en el Disponiéndose.

Inciso (1): La ley de 1998 enmendó el primer párrafo de este inciso en terminos generales.

Inciso (2): La ley de 1998 enmendó la cláusula (d) en terminos generales, y añadió la referencia a dos vias en el segundo párrafo de este inciso.

Inciso (5): La ley de 1998 añadió "después que el menor haya testificado".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Marzo 16, 1995, Núm. 31.

Agosto 15, 1998, Núm. 247.

Regla 131.2. GRABACIÓN DE DEPOSICIÓN EN CINTA VIDEO MAGNETOFONICA.

En todo **procedimiento** de delito cometido contra un menor o en que el menor sea testigo, el ministerio público, el defensor judicial del menor, los padres, el tutor legal o custodio del menor podrán solicitar al tribunal, antes del juicio en su fondo, que ordene que se tome el testimonio del menor mediante deposición y que la misma se grabe y preserve en cualquier sistema de grabación confiable de acuerdo a las siguientes reglas:

(1) El tribunal evaluará la solicitud y hará una determinación preliminar respecto a la disponibilidad del menor para testificar en corte abierta y en presencia del acusado, el juez y el jurado, tomando en consideración las siguientes circunstancias:

(a) Que el menor sufre de temor o intimidación.

(b) Que mediante testimonio pericial se ha establecido que el testimonio en corte abierta ocasionará un trauma emocional al menor.

(c) Que el menor padece de alguna incapacidad mental o alguna enfermedad o impedimento. En caso de personas mayores de dieciocho (18) años, la incapacidad o el impedimento deberá haber sido determinado judicialmente con anterioridad, o deberá establecerse mediante prueba pericial o por estipulación de las partes.

(d) Que se ha demostrado que el acusado o su abogado [ha] incurrido en conducta tal que impide al menor continuar prestando su testimonio.

Cuando el tribunal determine la imposibilidad de que el menor testifique en corte abierta por cualquiera de las circunstancias enumeradas, ordenará que se tome y grabe la deposición del testimonio del menor en cinta video magnetofónica. Si la determinación preliminar de inhabilidad para testificar estuviere basada en lo dispuesto en la cláusula (a) de este inciso y la evidencia demuestra que el menor es incapaz de testificar ante la presencia física del acusado, el tribunal podrá ordenar que el acusado, incluyendo un acusado que haya asumido su propia defensa (pro se), sea excluido del lugar donde se realiza la deposición. En este caso se proveerá para la instalación de un sistema televisivo de circuito cerrado de una o dos vías, que permita al acusado observar al menor y comunicarse con su representante legal en privado y mientras se toma la deposición.

(2) El juez presidirá la deposición del menor, quien declarará bajo juramento o afirmación luego de las debidas advertencias, y adjudicará todo planteamiento u objeción que se levante durante la toma de la misma. Sólo podrán estar presentes durante la deposición las siguientes personas:

(a) El ministerio público.

(b) El abogado de la defensa.

(c) El abogado del menor o su encargado legal.

(d) Los operadores del equipo de grabación.

(e) El acusado, salvo que sea descualificado conforme lo dispuesto en el inciso (1)(a) de esta regla.

(f) Alguna otra persona de apoyo, según se define este término en la Regla 131.3, cuya presencia contribuye para el bienestar del menor, según lo determine el tribunal.

(g) Funcionarios del tribunal responsables de la seguridad.

Se garantizarán al acusado sus derechos Constitucionales, incluyendo el derecho de representación legal, de carearse con los testigos de cargo y el derecho a contrainterrogar al menor.

(3) Se llevará un récord completo del examen del menor, incluyendo la imagen y voces de todas las personas que participaron en dicho examen, el cual será preservado en cualquier sistema de grabación confiable, además de ser reproducido en grabadora de sonido de doble cinta magnetofónica u otro medio de grabación digitalizado. La grabación será entregada al secretario del tribunal en que se ventila el caso y estará disponible para examen por las partes durante horas laborables.

(4) Si al comenzar el juicio el tribunal determina que el menor está inhabilitado para testificar por alguna de las circunstancias establecidas en esta regla, el tribunal podrá admitir en evidencia la grabación de la deposición tomada al menor en sustitución de su testimonio en corte abierta. El tribunal basará su determinación en esta regla y en los hallazgos que haga constar para récord.

(5) Cualquiera de las partes, al ser notificada del descubrimiento de nueva evidencia una vez que se ha grabado la deposición, y antes o durante la celebración del juicio, podrá solicitar al tribunal, previa determinación de justa causa, la toma de una deposición adicional a ser grabada en cualquier sistema de grabación confiable. El testimonio del menor se limitará a los asuntos autorizados por el juez en la orden.

(6) En todo lo relacionado a la toma de una deposición grabada en cinta video magnetofónica u otro medio de grabación digitalizado bajo esta regla, el tribunal podrá emitir una orden protectora que garantice el derecho a la intimidad del menor.

(7) La cinta video magnetofónica utilizada u otro medio de grabación digitalizado utilizado para la toma de la deposición bajo esta regla será destruida a los cinco (5) años de haberse emitido sentencia en el caso, salvo que esté pendiente la apelación de la sentencia. La cinta formará parte del récord y permanecerá bajo custodia del tribunal hasta el momento de su destrucción. (Adicionada en Agosto 15, 1998, Núm. 247, art. 2, ef. 30 días después de Agosto 15, 1998.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Agosto 15, 1998, Núm. 247.

Regla 131.3. TESTIGOS MENORES DE EDAD; ASISTENCIA DURANTE EL TESTIMONIO.

En cualquier **procedimiento** bajo estas reglas, en específico las Reglas 131.1 y 131.2, el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud del ministerio público, del defensor judicial, o los padres, el tutor o encargado de un menor que sea testigo en un **procedimiento criminal**, podrá autorizar que se brinde asistencia al menor conforme lo siguiente:

(1) Persona de apoyo. El menor tendrá derecho a estar acompañado por una persona de apoyo, quien podrá ser un familiar o conocido del menor, o el profesional o el personal técnico que ha intervenido o brindado asistencia al menor en las diferentes etapas del proceso. El tribunal podrá autorizar que la persona de apoyo permanezca al lado del menor, incluyendo acciones tales como sentarlo en la falda o darle las manos. Mientras el menor preste testimonio, la persona de apoyo no podrá dirigirse al menor, ni hacer movimiento sugestivo alguno, como tampoco comunicarse con el jurado mediante gestos ni por ningún otro medio.

En los casos de juicio por jurado, el tribunal deberá impartir instrucciones especiales para aclarar las funciones de la persona de apoyo, enfatizando en el hecho de que su presencia tiene el propósito de facilitar la declaración del menor y no el de protegerlo físicamente del acusado ni de influir a favor de su credibilidad.

(2) Medios para facilitar la prestación de testimonio. El tribunal podrá autorizar el uso en sala de muñecos anatómicamente correctos, maniqués, muñecos comunes, dibujos o cualquier otro medio demostrativo que considere apropiado con el fin de ayudar al menor a prestar su testimonio.

A solicitud del ministerio público, de cualquiera de las personas enumeradas en el inciso (1) de esta regla, o a instancia propia, el tribunal dará prioridad al caso en que un menor es llamado a testificar, tanto en el calendario como en el orden del día, con el propósito de reducir el tiempo que el menor estará expuesto al proceso. Si el tribunal tuviese que continuar los procedimientos en una fecha posterior deberá tomar en consideración la edad del menor y cualquier efecto adverso que tal posposición pudiera tener. El tribunal deberá hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, por escrito, cuando opte por posponer la vista del caso. (Adicionada en Agosto 15, 1998, Núm. 247, art. 3, ef. 30 días después de Agosto 15, 1998.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Agosto 15, 1998, Núm. 247.

Regla 132. SUSPENSIÓN DE SESION; ADVERTENCIA AL JURADO.

Cada vez que suspenda la sesión, el tribunal deberá advertir a los jurados, ya se les permitiere separarse, o ya quedaren a cargo de funcionarios del tribunal, que es su deber no conversar entre sí ni con otra persona, acerca de ningún particular relacionado con el proceso, ni formar o expresar juicio alguno sobre el mismo, hasta que la causa hubiere sido sometida definitivamente a su deliberación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 261; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1122; Código modelo, R. 319.

ANOTACIONES

1. En general.

Es el proposito de las advertencias o instrucciones al jurado contenidas en esta regla el asegurarle a un acusado un juicio justo e imparcial ante jurados que no tengan sus mentes prevenidas. *Pueblo v. Díaz Díaz*, 102 D.P.R. 535 (1974).

No procede revocar una sentencia por el fundamento de haber omitido el juez las advertencias a que se refiere esta regla, o por haber sido hechas en forma incompleta, cuando el acusado no advirtió oportunamente al tribunal del incumplimiento con la regla y el tribunal lo hubiese desoido, o se demostrare que tal incumplimiento causó perjuicio al acusado. *Pueblo v. Díaz Díaz*, 102 D.P.R. 535 (1974).

Un juez viene obligado a transmitirle al jurado la admonición a que hace referencia esta regla, cada vez que se decreta un receso o que se suspenda la sesión hasta otro día. (*Pueblo v. Goitia*, 41 D.P.R. 941 (1931), *parcialmente revocada*.) *Pueblo v. Díaz Díaz*, 102 D.P.R. 535 (1974).

No constituye motivo para revocar una sentencia **criminal** el hecho de que un juez omita hacer a los miembros de un jurado las advertencias, a menos que se demuestre que el acusado sufrió algún perjuicio. *Pueblo v. Marrero Laffosse*, 95 D.P.R. 186 (1967).

Regla 133. JURADOS; CONOCIMIENTO PERSONAL DE HECHOS.

Si uno de los jurados tuviere conocimiento personal de cualquier hecho controvertido en una causa, deberá así declararlo en sala durante el juicio. Si retirado el jurado para deliberar, uno de los miembros manifestare constarle algún hecho que pudiera servir de prueba en la causa, el jurado deberá regresar al tribunal. En cualquiera de estos casos el que hubiere hecho la manifestación deberá prestar juramento y ser examinado como testigo en presencia de las partes y continuará actuando como jurado a menos que el juez determinare que de permitirlo no habría una consideración imparcial de la causa por el jurado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 259; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1120.

ANOTACIONES

1. En general.

No implica la descualificación automática de un miembro del jurado el que este tenga conocimiento personal de algunos hechos controvertidos en el **procedimiento criminal** en que el interviene; tal situación meramente requiere que el asunto se haga saber en el juicio y que se interroge al jurado para que el juez determine si dicho jurado podía actuar imparcialmente. Pueblo v. Gonzalez Olivero, 100 D.P.R. 737 (1972).

No se revocara una sentencia por razon de que el juez sentenciador se nego a disolver el jurado al determinarse que uno de sus miembros tenía conocimiento personal de algunos hechos controvertidos en la causa en que intervino, a menos que el acusado demuestre el perjuicio que le causo el supuesto error. Pueblo v. Gonzalez Olivero, 100 D.P.R. 737 (1972).

Revelado por un jurado que el tiene conocimiento personal de algunos hechos controvertidos en la causa en que interviene, la defensa puede, con el objeto de evitar cualquier perjuicio al acusado, o recusar motivadamente a dicho jurado bajo las disposiciones de la Regla 118 o pedir la sustitución de dicho jurado por un jurado suplente bajo las disposiciones de la Regla 127, ambos remedios menos drásticos que el solicitar la disolución del jurado. Pueblo v. Gonzalez Olivero, 100 D.P.R. 737 (1972).

Regla 134. JURADO; INSPECCIÓN OCULAR.

Cuando en la opinión del tribunal fuere conveniente que el jurado examine el lugar en que fue cometido el delito, o en que hubiere ocurrido cualquier otro hecho esencial, podrá ordenar que se conduzca al jurado bajo la custodia de un alguacil al expresado sitio, el cual le será señalado por la persona designada por el tribunal para tal propósito y dicho alguacil prestará juramento de que no permitirá que ninguna persona, incluso él mismo, hable o se comuniquen con el jurado acerca de ningún asunto relacionado con el juicio, y que regresará al tribunal con el jurado, sin dilación innecesaria. Al celebrarse una inspección ocular el juez siempre deberá trasladarse con el jurado al sitio de los sucesos.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 258; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1119; Código modelo, R. 319.

ANOTACIONES

1. En general.

Es discrecional del tribunal acceder a una solicitud de inspección ocular de la defensa. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983); Pueblo v. Pagan Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

No constituye abuso de discreción del tribunal de instancia el denegar una inspección ocular solicitada por la defensa, cuando su valor probatorio nada anade al proceso y en cambio resulta una dilación inconveniente e innecesaria. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

No incurre en error el tribunal que deniega una solicitud de inspección ocular cuando las circunstancias han variado drásticamente y existen serias dudas sobre la efectividad de esa prueba para orientar al jurado. Pueblo v. Rios Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

El proposito de una inspección ocular es auxiliar al jurado o al juez a apreciar correctamente la prueba que haya desfilado o que se proponga desfilarse. Pueblo v. Pagan Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Un tribunal, al ejercer su discreción sobre si debe ordenar una inspección ocular del sitio en que fue cometido un delito, debe considerar lo siguiente: (a) que el lugar a ser examinado se halle sustancialmente

en las mismas condiciones que cuando se cometio el delito, y (b) la necesidad real, la pertinencia y esfuerzo que la inspección ocular implica. Pueblo v. Pagan Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Aunque una inspección ocular sea pertinente como medio de prueba, su valor probatorio puede ser de poca significación y, por ende, improcedente, en relación con cualesquiera de los siguientes factores: (a) peligro de causar perjuicio indebido; (b) probabilidad de confusión; (c) desorientación del jurado; (d) dilación de los procedimientos, o (e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Un acusado no tiene derecho a que el juez sentenciador realice una inspección ocular-cuestión que va dirigida a la discreción del tribunal-cuando su abogado se limita a hacer referencia de paso a dicha inspección más no reitera su petición de que se realice tal inspección. Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964).

Regla 135. ABSOLUCIÓN PERENTORIA.

Queda abolida la moción para que se ordene un veredicto absolutorio. El tribunal a instancia propia o a instancia de un acusado decretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denuncia luego de practicada la prueba de una o de ambas partes si la misma fuere insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos.

De presentarse una moción de absolución perentoria, luego de practicada toda la prueba, el tribunal podrá reservarse su resolución, someter el caso al jurado y resolver la moción, bien antes del veredicto o después del veredicto o de disolverse el jurado sin rendir veredicto. Si el tribunal declarare sin lugar la moción antes de rendirse un veredicto de culpabilidad o de disolverse el jurado sin veredicto, la moción podrá reproducirse dentro del término jurisdiccional de los cinco (5) días de rendido el veredicto o disuelto el jurado, siempre que no se hubiere dictado sentencia. (Agosto 31, 2000, Núm. 270, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 240 y 257; Fed. R. Crim. P. 29; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1118; Código modelo, R. 321.

Enmiendas

-2000, ley 270. Segundo párrafo: La ley de 2000 sustituyo "de los tres (3) días" con "del término jurisdiccional de los cinco (5) días" en la segunda oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Agosto 31, 2000, Núm. 270.

ANOTACIONES

1. En general.

Esta regla es esencialmente igual a la Regla 29 federal, excepto que esta le concede al acusado un término de 7 días para reproducir su solicitud de absolución perentoria, luego de que el jurado haya emitido su veredicto. Pueblo v. Vargas de Jesus, 146 D.P.R. 702 (1998).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que una moción de absolución perentoria, presentada luego de transcurrido el plazo estatuido para ello, priva de jurisdicción al tribunal de instancia para entender en ella. Pueblo v. Vargas de Jesus, 146 D.P.R. 702 (1998).

Un acusado no tiene facultad para renovar su solicitud de absolución pasado el término estatuido en esta regla. *Pueblo v. Vargas de Jesus*, 146 D.P.R. 702 (1998).

Le corresponde al Tribunal de Instancia considerar una moción de absolución perentoria y adjudicar si la prueba es suficiente en derecho para proceder a someterla al Jurado, y que sea este ultimo el que decida sobre el peso que deba darsele. *Pueblo v. Colón, Castillo*, 140 D.P.R. 564 (1996).

No erro el tribunal de instancia al declarar sin lugar una moción de absolución perentoria del acusado, aun cuando fueran inadmisibles el *deck* o envoltura de heroína ocupado en la inmediata presencia del acusado y el correspondiente informe del quimico del Gobierno sobre el contenido de dicho *deck*. *Pueblo v. Figueroa Castro*, 102 D.P.R. 279 (1974).

Regla 136. JUICIO; INFORMES AL JURADO.

Terminada la prueba, las partes harán sus informes comenzando con el del fiscal, quien podrá además cerrar brevemente el debate, limitándose a rectificar el informe del acusado. El tribunal podrá en el ejercicio de su sana discreción limitar la duración y el número de los informes.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 233(6) y 266; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1093(5).

ANOTACIONES

1. En general.
2. Renuncia del derecho.
3. Amicus curiae.

1. En general.

En su exposición teorica el fiscal puede trazar ampliamente los hechos que, de buena fe, espera probar y las inferencias legítimas que surjan de esos hechos y aun si expone hechos que no sean luego objeto de prueba porque tales hechos sean en si irrelevantes o porque no presento evidencia de clase alguna o presento evidencia inadmisible o incompetente para sostener esos hechos, tales declaraciones del fiscal no constituyen error, si actua de buena fe. *Pueblo v. Delgado Ramirez*, 128 D.P.R. 721 (1991).

Durante sus informes finales al jurado, el fiscal y el abogado defensor tienen amplia libertad para hacer conclusiones, inferencias, deducciones y argumentos derivados de la prueba presentada y admitida, aun cuando los mismos sean improbables, ilógicos, erróneos o absurdos. *Pueblo v. Suarez Fernández*, 116 D.P.R. 842 (1986); *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

Tiene derecho el fiscal en el curso de su informe al jurado a hacer sus propias deducciones e inferencias sobre la prueba, en consideración del derecho aplicable. Sin embargo, no es buena practica que lea al jurado y de su propia interpretación de determinada disposición de ley. *Pueblo v. Najul Baez*, 111 D.P.R. 417 (1981).

En su informe al jurado, un fiscal puede hacer inferencias o deducciones derivadas de la prueba presentada, siempre y cuando estas no trasciendan los límites de la norma establecida en *Pueblo v. Fournier*, 80 D.P.R. 390 (1958). *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981); *Pueblo v. Rivera*, 98 D.P.R. 163 (1969).

No constituye una irregularidad en un **procedimiento criminal** que justifique la revocación de la sentencia dictada, el que el juez que preside el tribunal no le conceda al acusado la oportunidad de informar oralmente el caso ventilándose ante el antes de dictar su fallo, como prometio dicho magistrado al

acusado, cuando los intereses de este no fueron perjudicados, maxime cuando el procesado tuvo amplia oportunidad de informar su caso por escrito y de hacer una exposición minuciosa y detenida de una prueba sumamente extensa, pudiendo también comentar la prueba después del fallo y antes de la sentencia. Pueblo v. Meléndez Maldonado, 109 D.P.R. 109 (1979).

Un juez que preside la vista de un caso **criminal** tiene amplia discreción para dirigir los informes al jurado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Una manifestación impropia de un fiscal mientras hace su informe al jurado no constituye un error que conlleve la revocación de la sentencia a menos que el apelante demuestre que el veredicto fue influenciado por la conducta impropia de dicho funcionario. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Tanto el fiscal como el defensor, en sus informes al jurado, pueden comentar la evidencia presentada y pueden expresar inferencias y deducciones. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975).

La exposición de la teoría del caso al jurado por el abogado defensor no tiene ningún valor probatorio. Pueblo v. Merced Jimenez, 100 D.P.R. 270 (1971).

En un proceso por asesinato en primer grado el fiscal puede argumentar en su informe al jurado respecto a la actitud asumida por el acusado después de haber herido de muerte a un ser humano. Pueblo v. Moctezuma Velázquez, 100 D.P.R. 228 (1971).

Un comentario permisible del fiscal en un proceso **criminal**, pero hecho en el momento inoportuno, no lesiona los derechos del acusado. Pueblo v. Moctezuma Velázquez, 100 D.P.R. 228 (1971).

Es ilícito hacer referencia ante el jurado a prueba no admitida durante el juicio, siendo ello perjudicial al acusado a menos que se cure por advertencia o instrucción del juez al jurado. Dicha actuación bajo determinadas circunstancias no puede ser subsanada por instrucciones. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

2. Renuncia del derecho.

El derecho Constitucional a dirigirse oralmente al jurado o al juez al terminar la prueba de cargo es renunciable. Pueblo v. Castro Muñoz, 118 D.P.R. 625 (1987).

El acusado tiene derecho Constitucional a dirigirse oralmente al jurado o al juez ante el cual se ventila su caso al concluir la prueba y antes de emitirse el fallo, derecho que es renunciable. Pueblo v. Meléndez Maldonado, 109 D.P.R. 109 (1979).

No es requisito indispensable para la validez de la renuncia de un acusado a su derecho Constitucional a dirigirse oralmente al jurado o tribunal de derecho, el que dicha renuncia la haga personalmente, pudiendo hacerla su abogado defensor. Pueblo v. Meléndez Maldonado, 109 D.P.R. 109 (1979).

3. Amicus curiae.

Veanse las anotaciones bajo la anterior Regla 43 del derogado Reglamento del Tribunal Supremo, Ap. I-A del Título 4.

Regla 137. JUICIO; INSTRUCCIONES.

Terminados los informes, el tribunal deberá instruir al jurado haciendo un resumen de la evidencia y exponiendo todas las cuestiones de derecho necesarias para la información del jurado. Por estipulación de las partes, hecha inmediatamente antes de empezar las instrucciones y

aprobada por el tribunal, se podrá omitir hacer el resumen de la evidencia. Todas las instrucciones serán verbales a menos que las partes consintieren otra cosa. Cualquiera de las partes podrá presentar al tribunal una petición escrita de que se den determinadas instrucciones, al terminar el desfile de la prueba, o anteriormente si el tribunal razonablemente así lo ordena. Deberá servirse copia de dicha petición a la parte contraria. El tribunal podrá aceptar o rechazar cualquiera o todas dichas peticiones, anotando debidamente su decisión en cada una, e informará a las partes de su decisión antes de que éstas informen al jurado. Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquier porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que plantear su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud. Se le proveerá oportunidad para formular éstas fuera de la presencia del jurado. El tribunal procederá entonces a resolver la cuestión, haciendo constar su resolución en el expediente o transmitiendo cualquier instrucción adicional que estimare pertinente. Al terminar las instrucciones el tribunal nombrará al presidente del jurado y ordenará que el jurado se retire a deliberar. En sus deliberaciones y veredicto el jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponga el tribunal en sus instrucciones.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 233(8) y 266; Fed. R. Crim. P. 30; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1083(6) y 1127; Código modelo, Rs. 324 y 325.

Disposiciones especiales.

La Resolución del Tribunal Supremo de Mayo 7, 1976, dispone:

"Visto y examinado el Informe del Comité Especial sobre Instrucciones al Jurado de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, el Tribunal aprueba su uso.

"La utilización por los jueces del Tribunal Superior de Puerto Rico del Libro de Instrucciones es discrecional. No obstante tendrá carácter persuasivo y sus preceptos gozarán de una presunción de corrección, sin perjuicio de la autonomía del juez de instancia para modificarlos adaptando dichas instrucciones a los hechos y peculiares circunstancias del caso según proceda en derecho y sin menoscabo de la facultad de este Tribunal de pasar juicio definitivo sobre las mismas de modo general o en casos específicos.

"En armonía con lo dispuesto en la Regla 137 de **Procedimiento Criminal** de 1963, una vez advertidos el Ministerio Fiscal y la Defensa que el Tribunal de Instancia impartirá determinadas instrucciones del Libro, estos, en ausencia del Jurado y con anterioridad a su transmisión deberán formular las objeciones y propuestas que estimen pertinentes, de forma y manera que el Tribunal resuelva los meritos de tales reparos antes de impartirlas. Se tendrán por renunciadas las objeciones, reparos y propuestas de modificación a las instrucciones que no se formulen en ese momento.

"A los fines de un recurso de apelación no será necesario la transcripción de aquellas instrucciones leídas del Libro, siendo suficiente la certificación del taquígrafo o del Secretario de sala al efecto de que fueron transmitidas y la referencia a las páginas correspondientes. Cuando el Tribunal se aparte en cualquier forma del texto de las instrucciones del Libro, llamará la atención anticipadamente al taquígrafo o Secretario de sala de modo que se tome record del contenido de la instrucción así enmendada o modificada."

Contrarreferencias.

Utilización de equipo de grabación en cinta videomagnetofonica, Véase el Ap. XIX del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.
3. Ley aplicable.
4. Errores perjudiciales.
5. Errores no perjudiciales.
6. Falta de objecion.
7. Delitos sexuales.

1. En general.

Las instrucciones en el Manual de Instrucciones al Jurado gozan de presunción de corrección, pero su utilización es discrecional, y su caracter persuasivo le permite al juez modificar su texto para ajustarlo a las particularidades del caso. Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 D.P.R. 18 (1995).

Para que el Jurado pueda desempeñar y llevar a cabo la función de rendir veredicto, los miembros del mismo deben ser instruidos adecuadamente sobre el derecho aplicable por el magistrado que preside el proceso. Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722 (1994).

Las instrucciones impartidas al Jurado deben incluir no solo los elementos del delito o delitos imputados sino también los elementos de delitos inferiores al imputado o comprendidos dentro de este. Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722 (1994).

El acusado tiene derecho a que su teoria sea presentada al Jurado mediante instrucciones apropiadas, aunque la prueba de defensa sea debil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722 (1994).

Mientras haya alguna prueba que tienda a indicar la posibilidad de un homicidio el juez viene obligado a transmitirle al jurado las instrucciones pertinentes sobre el referido delito y es al jurado a quien le corresponde aquilatar dicha prueba y determinar el delito por el cual debe responder el acusado. Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992).

El proposito de las instrucciones al jurado es ilustrar y familiarizar a ese cuerpo con normas basicas de derecho, y deben ser claras, consistentes, precisas y logicas. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

La repetición innecesaria de las instrucciones puede producir confusión en la mente de los oyentes. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

El tribunal debe instruir apropiadamente al jurado sobre todas las cuestiones sometidas ante su consideración y debe ofrecerle las instrucciones sobre posibles veredictos a la luz de la prueba admitida en el juicio. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

Resulta tardio un planteamiento hecho por la defensa a los efectos de que el tribunal habia dado al jurado unicamente parte de las instrucciones solicitadas por el acusado cuando tal planteamiento se hace después de haberse retirado dicho jurado a deliberar y mucho más tardio cuando se hace después de haber traído el jurado su veredicto. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

El jurado determina no solo si el imputado es culpable o inocente sino también el delito, o grado del

mismo, por el cual este debe responder y debe ser instruido adecuadamente sobre el derecho aplicable por el magistrado que preside el proceso. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989).

Los jueces de instancia deberán determinar la procedencia de transmitir al jurado instrucciones sobre homicidio voluntario en procesos contra acusados por asesinato cuando dichos acusados han sorprendido a la víctima escalando su hogar. Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270 (1988).

Unas instrucciones especiales y oportunas al jurado, en union a la evidencia posteriormente presentada, pueden evitar el efecto perjudicial de admisión errónea de evidencia. Pueblo v. Suarez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986).

Al transmitir sus instrucciones al jurado, un juez tiene la obligación de que las mismas sean precisas, claras y ajustadas a los hechos. Pueblo v. Ortiz Martínez , 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Paris Medina, 101 D.P.R. 253 (1973).

Se ajustan a derecho las instrucciones al jurado que le ilustran sobre todos los aspectos legales del caso. Pueblo v. Ortiz Martínez , 116 D.P.R. 139 (1985).

Los tribunales no deben impartir al jurado instrucciones especiales solicitadas por una parte, que si bien aluden a ciertos principios jurídicamente aceptables, contienen normas de derecho erróneas que tendrían el efecto de confundir al jurado sobre el derecho aplicable. Pueblo v. Ortiz Martínez , 116 D.P.R. 139 (1985).

Para poder evaluar la suficiencia de unas instrucciones al jurado en el tribunal de instancia es necesario considerar la totalidad de las mismas en conjunto y no por partes aisladas. Pueblo v. Najul Bez, 114 D.P.R. 493 (1983); Pueblo v. Ortiz Gonzalez, 111 D.P.R. 408 (1981); Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64 (1969); Pueblo v. Acevedo Gonzalez, 95 D.P.R. 355 (1967); Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964); Pueblo v. Barrera Gonzalez, 89 D.P.R. 772 (1964).

A los fines de instruir al jurado sobre la necesidad de corroboración de una admisión o confesión que sirva de base a una condena, el Tribunal Supremo ha adoptado una instrucción estandar. Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463 (1982).

Una instrucción al jurado que por inadvertencia del juez fue dada aparte, al final del proceso, no da base para especular que el jurado se inclinara a la última palabra y descartara el resto de la prueba. Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437 (1982).

Es improcedente una instrucción especial al jurado solicitada por el acusado respecto al delito de aborto, la cual no hace mención alguna del requisito de determinación terapéutica previa que requiere la sec. 4010 del Título 33. Pueblo v. Najul Baez, 111 D.P.R. 417 (1981).

Es válida una instrucción al jurado que constituya una exposición correcta del derecho aun cuando la misma no siga fielmente el texto de la ley. Pueblo v. Ortiz Gonzalez, 111 D.P.R. 408 (1981).

La instrucción sobre defensa propia que aparece en el Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico no presupone que sea el acusado quien tiene que presentar prueba de defensa propia, sino que meramente ordena al jurado que considere la prueba de defensa propia, bien surja esta de la prueba de defensa o la de cargo, conjuntamente con toda la prueba presentada. Pueblo v. Ortiz Gonzalez, 111 D.P.R. 408 (1981).

Se presumen correctas las instrucciones del Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de

Puerto Rico, las cuales no pueden ser impugnadas en ausencia de una demostración real de que, en efecto, la instrucción es errónea. Pueblo v. Ortiz Gonzalez, 111 D.P.R. 408 (1981).

Aunque la utilización del Libro de Instrucciones al Jurado no es mandatoria, existe un interés eminente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en lograr el menor grado de error posible en las instrucciones que se transmitan al jurado y la mayor uniformidad en la administración de la justicia **criminal**. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

Los tribunales de primera instancia deben basar sus instrucciones al jurado en las del Libro de Instrucciones al Jurado, a no ser que existan otras circunstancias que justifiquen apartarse de ellas. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

Aun cuando por regla general la prohibición Constitucional del Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado-el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra-se aplica cuando el acusado no se sienta a declarar, dicho derecho se ha extendido a los casos en que el acusado se sienta a declarar retrotrayendo sus efectos a la etapa de la investigación policiaca y de la vista preliminar celebrada en el caso. Pueblo v. Gonzalez Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

El derecho de un acusado de permanecer callado en el juicio, así como también en la investigación del delito por el cual luego se le acusa, no puede utilizarse en su contra, como una admisión de culpabilidad ni para impugnar su credibilidad. Pueblo v. Gonzalez Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

Si la prueba en un caso lo justifica, las instrucciones al jurado deben cubrir, no solo los elementos inferiores del delito imputado o comprendido dentro de este, sino también los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acusado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable pueden estar presentes en las deliberaciones del jurado, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Gonzalez Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

Constituye buena práctica que debieran seguir los tribunales de instancia el que las instrucciones al jurado no sean innecesariamente largas ni repetitivas, sino que se ajusten a la letra de la ley y a las instrucciones que contiene el Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico y que su lenguaje sea claro y directo. Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369 (1980).

Un tribunal no viene obligado a transmitir una instrucción solicitada por la defensa que, además de ser incompleta, es contraria a la prueba desfilada. Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481 (1978).

Un juez no deberá transmitir al jurado instrucciones sobre un supuesto poder para absolver aun cuando la prueba sostenga la culpabilidad de los acusados. Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975); Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574 (1974); Pueblo v. Baez Cintron, 102 D.P.R. 30 (1974).

Un veredicto es válido aun cuando las instrucciones dadas al jurado no hayan sido aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975).

En sus instrucciones al jurado sobre duda razonable es suficiente que el juez transmita una instrucción general a ese efecto, no teniendo dicho magistrado que instruir al jurado que este debe encontrar culpable al acusado más allá de duda razonable en cada uno de los elementos del delito imputado. Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975).

Bajo una acusación de incesto, no procede que el juez sentenciador transmita instrucciones sobre el delito de acoso y agresión grave cuando el acusado niega los hechos que le fueron imputados. Pueblo v. Claudio Serrano, 102 D.P.R. 726 (1974).

No se exige prueba de corroboración del testimonio de un informante pagado cuando su testimonio no sea básicamente increíble o de otro modo insustancial. Pueblo v. Colón Obregon, 102 D.P.R. 369 (1974).

Un tribunal, a partir del 14 de mayo de 1973, debe abstenerse de calificar como omisión el derecho de un acusado a no declarar, en los casos en que este ejercite ese derecho y no declare. Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404 (1973).

Un tribunal viene obligado a instruir al jurado sobre el derecho Constitucional de un acusado a guardar silencio, así como sobre el hecho de que el ejercicio por el acusado del mismo no tiene el alcance de insinuar que el está aceptando culpabilidad en el caso. Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404 (1973).

Es el propósito de las instrucciones transmitidas a un jurado-además de explicarle cuál es la ley en lo que se refiere al delito que se imputa-el informarle que reglas deben seguir en su función de adjudicar los hechos. Pueblo v. Paris Medina, 101 D.P.R. 253 (1973).

Es correcta una instrucción al jurado a los efectos de que deberían encontrar culpable o inocente al acusado de los tres cargos que se le imputaban-poseer, transportar y vender heroína-cuando la forma como ocurrió la transacción ilegal que dio margen a la radicación de la acusación imputándole los tres cargos justifican tal instrucción y la prueba no justificaba absolverlos en uno o dos y condenarlo en los restantes cargos. Pueblo v. Paris Medina, 101 D.P.R. 253 (1973).

Un tribunal-a partir del 1ro. de mayo de 1973-no puede transmitir una instrucción al jurado a los efectos de que "Todo testigo se presume que dice la verdad.", independientemente de que se presente o no prueba por la defensa. Pueblo v. Paris Medina, 101 D.P.R. 253 (1973).

Un abogado defensor puede renunciar válidamente a nombre del acusado el derecho de este a que el juez haga al jurado un resumen de la prueba sin que sea necesario que el acusado renuncie personalmente a dicho derecho. Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295 (1971); Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

El propósito fundamental de las instrucciones del juez-las que deben ser claras, precisas, consistentes y lógicas-es iluminar al jurado en la aplicación de los principios de derecho a los hechos del caso en que interviene. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

Un juez viene obligado-como jurisperito que es-a actuar en forma consistente y lógica, tanto en la adjudicación de un veredicto como en las instrucciones transmitidas al jurado. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

Un juez no viene obligado a transmitir instrucciones solicitadas por la defensa cuando la prueba presentada no da base para que dichas instrucciones sean transmitidas. Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689 (1971).

Las instrucciones transmitidas al jurado, leídas en su totalidad, son correctas y las omisiones en que incurrió el juez al transmitir las no causaron perjuicio sustancial al acusado. Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689 (1971).

Un acusado no puede plantear en apelación un supuesto error cometido por el juez sentenciador al transmitir una instrucción específica cuando no objeta la misma en el tribunal de instancia ni solicita instrucción especial alguna. Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969).

El hecho de que un acusado no solicite instrucciones específicas que puedan salvar errores que lesionen sus derechos sustanciales no implica que las renunciase y que no pueda apuntar la cuestión en apelación. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

Una instrucción especial solicitada al juez sentenciador no tiene que estar escrita a máquina, siendo suficiente que este manuscrita. Pueblo v. Rivera Marquez, 96 D.P.R. 758 (1968).

Un tribunal tiene la obligación de instruir al jurado no solo sobre los elementos del delito imputado, sino también de los elementos de delitos inferiores al imputado o comprendidos dentro del mismo, cuando la prueba así lo justifique, así como de las defensas levantadas por el acusado. Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625 (1968).

Un acusado tiene derecho, una vez introduce prueba sobre su buena reputación, a que el juez instruya al jurado: (a) que el propósito de esa prueba es crear duda razonable; (b) que dicha prueba debe ser considerada, independientemente de que el efecto del resto de la otra prueba con respecto al caso sea claro o dudoso, y (c) que cuando dicha prueba sea considerada conjuntamente con el resto de la prueba, si surge una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, este tiene derecho a ser absuelto. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

No tiene que ser sometida por escrito al juez sentenciador una solicitud de la defensa para que se transmita una instrucción adicional al jurado, pudiendo solicitarse esta verbalmente. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

A petición de parte, un tribunal debe instruir al jurado sobre toda cuestión pertinente sobre la que exista en autos alguna prueba que lo justifique. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

A menos que una instrucción adicional solicitada haya sido cubierta previamente en las instrucciones transmitidas al jurado, y aun cuando no se presente en forma adecuada, un tribunal viene obligado a incluir en las instrucciones que imparta la sustancia de esta, siempre y cuando lo solicitado sea propio y pertinente. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

Solicitada una instrucción adicional por la defensa o impugnadas las instrucciones por esta, el juez sentenciador está obligado a darle a esta una oportunidad fuera de la presencia del jurado para que fundamente su solicitud o impugnación, pues denegar de plano dicha oportunidad constituye un error de dicho juez. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

Al instruir al jurado, es recomendable que un juez sentenciador se limite a expresar al hacer referencia a que el acusado no tiene que declarar que el acusado no está obligado a declarar o que al acusado le asiste el derecho a no declarar. Pueblo v. Quiñones Torres, 95 D.P.R. 659 (1968).

Como excepción, se examinarán las instrucciones transmitidas por el juez al jurado para determinar si ellas contienen algún error que de lugar a la revocación de la sentencia, aun cuando la defensa no objete las mismas ni solicite instrucciones adicionales, al preguntarle el juez sentenciador si interesa que se transmita alguna al jurado. Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965).

Siempre y cuando la prueba lo justifique, un juez debe incluir en sus instrucciones al jurado todos los puntos de derecho que bajo cualquier teoría razonable puedan estar envueltos en las deliberaciones del jurado. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Instrucciones deficientes que no perjudican derechos sustanciales del acusado no dan lugar a la revocación de una sentencia. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Si un jurado solicita se le informe si el juez consideraría una recomendación de lenidad o clemencia, el juez debe impartir una instrucción a los efectos de que la imposición de la pena es una potestad que compete exclusivamente al tribunal y que la única función del jurado es determinar sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. *Pueblo v. Rosario Centeno*, 90 D.P.R. 874 (1964).

La practica de leer en forma indiscriminada del Libro o Manual de Instrucciones al Jurado no debe ser favorecida por los jueces de primera instancia, y en todo caso solo deben transmitirse aquellas instrucciones que se justifiquen en virtud de la prueba admitida. *Pueblo v. Martínez Díaz*, 90 D.P.R. 467 (1964).

2. Constitucionalidad.

El Art. V, Sec. 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado no requiere que las instrucciones al jurado sean aprobadas por la Asamblea Legislativa. *Pueblo v. Villalongo Torres*, 102 D.P.R. 574 (1974); *Pueblo v. Sánchez Torres*, 102 D.P.R. 499 (1974).

3. Ley aplicable.

Instrucciones al Jurado según las Interpretaciones del Código Penal, Art. 109, Homicidio Negligente con la modalidad agravada haber ocasionado la muerte al conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes y el Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. La frase “bajo los efectos de bebidas embriagantes” se asocia con una disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales causadas por la presencia de alcohol en el cuerpo. Es decir, se refiere esencialmente a un estado en el que las capacidades físicas, motoras y mentales de un individuo están afectadas por la presencia de alcohol en su cuerpo, al extremo que su funcionamiento se torna distorsionado o perturbado. Nada impide que al momento de determinar si la acusada estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, el Jurado considere el dominio que ésta tenía sobre sí misma, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, su estado anímico, así como cualquier otro factor que refleje el estado de sus facultades físicas y mentales. 2007 DTS 188 *Pueblo v. Figueroa Pomales* 2007 TSPR 188

De ser objetada por el fiscal la presentación de evidencia sobre una posible coartada del acusado el tribunal no viene obligado a dar instrucciones al jurado sobre la misma. *Pueblo v. Millán Meléndez*, 110 D.P.R. 171 (1980).

La doctrina de que un tribunal no debe impartir instrucciones al jurado sobre el derecho del acusado a guardar silencio a menos que dicho acusado así lo solicite no rige en esta jurisdicción. *Pueblo v. Romero Cuesta*, 101 D.P.R. 404 (1973).

No es errónea una instrucción transmitida por el juez al jurado que esta en armonía con las disposiciones del art. 21 de la Ley de Evidencia máxime cuando el acusado no impugna la legalidad de esta disposición estatutaria, no explica como y por que puede sostenerse su impugnación a dicha instrucción ante los términos claros de la referida disposición, y ni siquiera hace referencia a la misma. *Pueblo v. Nazario Nieves*, 100 D.P.R. 232 (1971).

No es retroactiva la nueva doctrina sobre la defensa de coartada de un acusado establecida en *Pueblo v. Moreu Pérez*, 96 D.P.R. 60 (1968). *Pueblo v. Cruz Jimenez*, 99 D.P.R. 565 (1971).

A partir del 16 de mayo de 1968 un juez no puede instruir al jurado a los efectos de que constituye una admisión implícita de la comisión del delito imputado, el hecho de que el jurado no de crédito al testimonio sobre coartada prestado por los testigos del acusado. *Pueblo v. Cruz Jimenez*, 99 D.P.R. 565 (1971).

No es de aplicación a un **procedimiento criminal** celebrado en junio de 1966 la norma de derecho establecida en *Pueblo v. Natal Rojas*, 93 D.P.R. 844 (1967). *Pueblo v. Medina Ocasio*, 98 D.P.R. 302 (1970).

4. Errores perjudiciales.

Comete error un tribunal que se niega a impartir una instrucción al jurado sobre la necesidad de que toda admisión o confesión sobre la cual fundar una condena debe ser corroborada. *Pueblo v. Morales Rivera*, 112 D.P.R. 463 (1982).

Cuando el tribunal de instancia instruye al jurado al efecto de que la admisión de ciertas denuncias y sentencias de convicciones previas de un acusado se hace con el proposito de impugnar el testimonio de un testigo que declara sobre el buen caracter del acusado, y luego resulta que tal evidencia era inadmisibile para ese fin y que el unico proposito de esa evidencia era llevar a conocimiento del jurado que el acusado habia cometido un delito similar a aquel por el cual se le juzgaba, tal error no es subsanable por la mencionada instrucción. *Pueblo v. Carrion Rivera*, 111 D.P.R. 825 (1981).

Constituye una intervención impermisible de un juez en el ambito de la función adjudicativa de los hechos en un caso **criminal** el expresar criterio alguno sobre la credibilidad de los testigos. *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

Vulnera un tribunal la garantia fundamental de un juicio justo a que tiene derecho un acusado-justificando la revocación de la sentencia dictada y la celebración de un nuevo juicio-al denegar las instrucciones de homicidio voluntario solicitadas por la defensa cuando esta habia presentado prueba sobre dicho delito como parte de su teoria de defensa. *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

Constituye un error perjudicial que viola la garantia fundamental de un juicio justo, si la prueba lo justifica, la omisión de dar instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, instrucciones solicitadas oportunamente por la defensa, obligando a la revocación de la sentencia dictada contra un apelante por el delito de asesinato en primer grado y a la celebración de un nuevo juicio. *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

Un acusado tiene derecho, una vez presenta prueba sobre su buena reputacion, a que el juez instruya al jurado de que (a) dicha prueba de reputación debe ser considerada independientemente de que el efecto del resto de la prueba presentada en el caso sea dudoso o claro respecto a su culpabilidad o inocencia, y (b) la prueba de buena reputación puede establecer, por si sola, duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. *Pueblo v. Velázquez Caraballo*, 110 D.P.R. 369 (1980).

Constituye un error grave de derecho que justifica la revocación de una sentencia el que un juez transmita al jurado una instrucción cualificando o designando como "confesión" el testimonio de un acusado sin que en ley lo sea. *Pueblo v. Sulman*, 103 D.P.R. 429 (1975).

Un juez no viene obligado a transmitir al jurado instrucciones sobre la admisión en evidencia de una declaración jurada del acusado cuando la defensa no presento prueba en presencia del jurado relativa al peso o credibilidad de la confesión y sobre las circunstancias bajo las cuales fue esta obtenida, maxime cuando el acusado no solicito una instrucción especial sobre dicho extremo. *Pueblo v. Nieves Ramos*, 101 D.P.R. 531 (1973).

Prueba debil y escasa sobre la conclusión de un testigo en cuanto a la buena reputación de un acusado-testimonio que no contiene hechos en que pueda fundamentarse dicha conclusion-no constituye el tipo de prueba sobre la buena reputación de un acusado que pueda justificar unas instrucciones al efecto de que el

proposito de dicha prueba es crear una duda razonable de la comisión del delito por dicho acusado, maxime cuando la propia declaración del acusado establecio en terminos definitivos su culpabilidad. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973).

Constituye un error perjudicial para el acusado-lo que justifica el revocar una sentencia y ordenar un nuevo juicio-el que el juez sentenciador no siga y aplique la norma establecida en *Pueblo v. Moreu Pérez*, 96 D.P.R. 60 (1968), con respecto a instrucciones sobre la defensa de coartada. Pueblo v. Delgado Meléndez, 101 D.P.R. 79 (1973).

Procede revocar una sentencia por la negativa de un juez sentenciador a transmitir en su totalidad instrucciones solicitadas por la defensa solo cuando la instrucción solicitada es correcta, el punto no haya sido cubierto en otras instrucciones, y lo omitido por el juez en cuanto a la instrucción solicitada se refiera a un punto vital de manera que esa negativa del magistrado prive al acusado seriamente de una defensa efectiva. Pueblo v. Saenz Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972).

Se revisara en alzada una instrucción que constituye un error fundamental que afecta los derechos basicos de un acusado, aun cuando la defensa no objete oportunamente dicha instrucción en el tribunal de instancia ni solicite una instrucción adicional que subsane la instrucción erronea transmitida por el juez sentenciador. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Procede la revocación de una sentencia **criminal** cuando el juez sentenciador, al resumir sus instrucciones al jurado en cuanto a los posibles veredictos que este podia rendir, excluye la muy importante y simple alternativa de no culpable. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Una instrucción a un jurado sobre los posibles veredictos que puede rendir transmitida al final de las instrucciones y por via de resumen, y en la cual se excluye el fundamental y simple veredicto de no culpable, tiene el efecto de negarle al jurado la facultad absoluta que tiene de apreciar toda la prueba y no creer la prueba de cargo y, en tal virtud, de impedir al jurado que pueda rendir un veredicto de no culpable, constituyendo dicha instrucción erronea una violación de los derechos fundamentales del acusado. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Acusada una persona de los delitos de poseer, transportar y vender marihuana-delitos que se trataron de establecer, no mediante prueba separada y distinta en apoyo de cada cargo, sino mediante el testimonio de un agente encubierto, unico testigo del fiscal-son erroneas, y justifican la revocación de la sentencia, instrucciones del juez al jurado mediante las cuales le indica que puede traer un veredicto absolutorio en todos los cargos o condenarlo en algunos y absolverlo en otros. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

Aun cuando, como regla general, un veredicto inconsistente es valido, el mismo no puede prevalecer cuando es el resultado directo de instrucciones impartidas al jurado que no responden a la prueba desfilada. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

Instrucciones inconsistentes con la prueba desfilada en un caso **criminal**-base de veredictos inconsistentes traídos por un jurado-constituyen un error que amerita la revocación de la sentencia condenatoria dictada. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971).

Instrucciones de un juez al jurado que coaccionen a este para que rinda un veredicto justifican la revocación de la sentencia dictada. Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970).

Es ilicito hacer referencia ante el jurado a prueba no admitida durante el juicio, siendo ello perjudicial al acusado a menos que se cure por advertencia o instrucción del juez al jurado. Dicha actuación, bajo

determinadas circunstancias, no puede ser subsanada por instrucciones. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

A partir del 16 de enero de 1967-fecha en que se decidió *Pueblo v. Natal Rojas*, 93 D.P.R. 844 (1967)-es errónea en principio una instrucción transmitida, luego de declarar el acusado, la cual, después de expresar que el jurado debe tomar en consideración dicho testimonio como el de cualquier otro testigo, añade que el mismo debe ser considerado teniendo, desde luego, en cuenta el interés que todo acusado tiene en su propia causa. Pueblo v. Rivera Marquez, 96 D.P.R. 758 (1968); Pueblo v. Vélez Santiago, 95 D.P.R. 619 (1967); Pueblo v. Natal Rojas, 93 D.P.R. 844 (1967).

Constituye un error perjudicial que amerita la revocación de una sentencia la negativa a dar instrucciones específicas solicitadas por la defensa únicamente cuando: (a) la instrucción propuesta es correcta; (b) no se ha cubierto sustancialmente en las instrucciones especiales o generales, y (c) se refiere a un punto vital del caso de forma que esa negativa privaría al acusado seriamente de una defensa efectiva. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

Un tribunal no está autorizado a denegar una instrucción solicitada por la defensa basada en su prueba, no importa lo increíble que esta parezca. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

Existiendo prueba de defensa en un **procedimiento criminal** por robo a los efectos de que el acusado solo cometió el delito de acometimiento y agresión, constituye un error perjudicial del juez sentenciador que justifica la revocación de la sentencia por robo dictada el que dicho juez rehuse transmitir al jurado una instrucción adicional sobre dicho delito de acometimiento y agresión. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

Debidamente admitida en evidencia como parte del *res gestae* el testimonio de un policía reproduciendo en el juicio las manifestaciones del perjudicado en la comisión de un delito contra natura-manifestaciones que establecían todos los elementos necesarios del delito-si dicho perjudicado negara la veracidad de las manifestaciones por el hechas al policía, constituye una instrucción errónea del juez sentenciador que justifica la revocación de la sentencia dictada-error que no fue subsanado por el juez posteriormente-el expresarle al jurado que la culpabilidad del acusado quedaba probada si el testimonio del policía le merecía entero crédito. Pueblo v. Dueno Maysonet, 94 D.P.R. 706 (1967).

Es errónea una instrucción al jurado a los efectos de que en el delito de ataque para cometer violación, la declaración de la mujer agraviada no necesita ser corroborada. Pueblo v. Arroyo Agosto, 93 D.P.R. 445 (1966).

Constituye un error perjudicial que justifica la revocación de una sentencia por homicidio voluntario el no instruir el juez al jurado sobre los elementos del delito de homicidio involuntario, cuando la prueba de cargo creída por el jurado para demostrar la forma en que se cometió la agresión por el acusado no excluía la comisión de un acto ilegal que no fuera delito grave. Pueblo v. Oliveras Martínez, 93 D.P.R. 53 (1966).

Incorre en un grave error de derecho que amerita la revocación de la sentencia el que un juez transmita una instrucción a los efectos de que el testimonio de un testigo de cargo, relatando lo que el acusado le informó acerca del paradero de la perjudicada, era una admisión del delito de violación que se le imputaba, y al mismo tiempo dichas manifestaciones constituían la prueba de corroboración requerida al testimonio de dicha perjudicada, sin que en ley dicho testimonio constituya ni una admisión del delito por el acusado ni prueba de la corroboración del testimonio de la perjudicada. Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 D.P.R. 894 (1965); Pueblo v. Crespo Guerrero, 90 D.P.R. 217 (1964).

Instruir al jurado que una declaración jurada del acusado constituye una confesión o admisión de culpabilidad del delito imputadole constituye un grave error que da lugar a la revocación de la sentencia dictada, cuando en la alegada confesión el acusado no admite uno de los elementos esenciales del delito imputadole. Pueblo v. Guido Maya, 90 D.P.R. 821 (1964).

Incurrir en un grave error de derecho que amerita la revocación de la sentencia el que un juez, al transmitir una instrucción, denomine erróneamente como confesión una declaración jurada de un acusado admitida en evidencia con la conformidad de la defensa y, solicitada por la defensa una instrucción al jurado en el sentido de que dicha declaración no era una confesión, el juez de instancia deniega dicha solicitud. Pueblo v. Guido Maya, 90 D.P.R. 821 (1964).

En un proceso por asesinato un juez no debe por ser error, en términos generales, transmitir una instrucción al jurado a los efectos de que el Estado no viene obligado a ofrecer prueba de la malicia del acusado. Pueblo v. Crespo Guerrero, 90 D.P.R. 217 (1964).

Cuando un jurado que interviene en un **procedimiento** en que simultáneamente se está considerando la culpabilidad o inocencia de un acusado de delito menos grave-la infracción de cierta ordenanza municipal-y dos delitos graves-posesión de drogas-en que corresponde a dicho jurado determinar si se realizaron o no hechos que infringían la ordenanza y declarar al acusado culpable o inocente de ese delito, y en que los elementos de hecho que son ingredientes del incidente sobre admisibilidad de la evidencia ocupada al acusado son también elementos de hecho de defensa, compete al jurado determinar en última instancia-bajo la instrucción pertinente del juez que preside el caso-si toma o no en consideración la evidencia admitida, siendo errónea bajo estas circunstancias una instrucción del juez al efecto de que el jurado no podía prescindir de considerar dicha evidencia. Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964).

5. Errores no perjudiciales.

Habiendo la defensa estipulado sobre la admisibilidad en evidencia de convicciones previas de un acusado del delito de fuga de una institución correccional, no constituye error perjudicial el hecho de que se impartieran instrucciones al jurado con respecto a dichas convicciones anteriores. Pueblo v. Medina Lugo, 126 D.P.R. 734 (1990).

El uso de la palabra "inducir" por el juez antes de instruir al jurado sobre el delito de homicidio, en un caso de asesinato en el primer grado, no constituye error perjudicial si del análisis de las instrucciones *in toto* acerca de los elementos del asesinato y del homicidio no resulta que las mismas fueran incorrectas. Pueblo v. Cepeda Rivera, 125 D.P.R. 132 (1990).

No se revocará una sentencia de convicción por alegado error del tribunal en una instrucción al jurado, aunque la instrucción fuera innecesaria y errónea, si no resultó perjudicial. Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730 (1987).

Por haberse agravado el acto ilegal, que se inició con un impulso momentáneo, irreflexivo y precipitado, con la infortunada muerte accidental del agredido, el delito finalmente cometido resultó ser el de homicidio involuntario, por lo cual no es obligatorio dar instrucciones al jurado sobre un posible veredicto de agresión (*Pueblo v. Figueroa*, 80 D.P.R. 328 (1958), *seguido*). Pueblo v. Dieppa Beauchamp, 115 D.P.R. 248 (1984).

Siendo suficiente la prueba sobre la identificación del acusado, la ausencia de corroboración de la confesión o admisión hecha por el acusado no constituyó error perjudicial. Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463 (1982).

De no demostrar un acusado el perjuicio que la omisión de instrucciones pudiere haberle ocasionado, no

procedera la revocación de la sentencia dictada a base de tal omisión, con mayor razón cuando no aparece de la exposición narrativa de la prueba que el apelante solicitara instrucciones al respecto, a pesar de la oportunidad que le ofreció el tribunal de instancia. *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

No constituyen una violación al derecho de un acusado de permanecer en silencio los comentarios de un fiscal sobre el silencio del acusado que se refieren a una etapa anterior a la investigación policiaca, cuando aun el acusado no se consideraba sospechoso de haber cometido un delito. *Pueblo v. Gonzalez Colón*, 110 D.P.R. 812 (1981).

Cuando toda la prueba que tuvo ante sí el jurado claramente justifica la inferencia de malicia premeditada, son correctas las instrucciones al jurado sobre asesinato, y no resulta necesario dar instrucciones sobre homicidio. *Pueblo v. Castro García*, 110 D.P.R. 644 (1981).

En ausencia de prueba de que cierta droga consumida por el acusado momentos antes de los hechos lo intoxicó de tal forma que hubiese inhibido sus facultades mentales de manera que no fuese responsable de sus actos, no constituye error del tribunal el no dar instrucciones al jurado sobre intoxicación por drogas a los fines de determinar el motivo o intención con que el acusado cometió el delito de asesinato. *Pueblo v. Otero Alejandro*, 110 D.P.R. 34 (1980).

No constituye error del tribunal de instancia el no haber dado instrucciones al jurado sobre intoxicación del acusado por drogas cuando la teoría de dicho acusado consistió en la defensa de coartada y el jurado no la creyó. *Pueblo v. Otero Alejandro*, 110 D.P.R. 34 (1980).

Es renunciable por un abogado de la defensa el derecho de un acusado a efectuar su informe o resumen de la evidencia, luego de terminada la presentación de la prueba, sin la exigencia de que dicha renuncia sea hecha por el acusado personalmente. *Pueblo v. Torres Nieves*, 105 D.P.R. 340 (1976).

Denegada por el juez una instrucción especial sobre el posible delito de homicidio involuntario estatuido en la sec. 4005 del Título 33-bajo una acusación por causar la muerte a un ser humano al conducir con imprudencia crasa o temeraria un vehículo de motor-si el jurado trae un veredicto por delito de homicidio involuntario y el juez lo acepta, dicha aceptación-que pone fin al proceso deliberativo del jurado-constituye una reconsideración implícita de su resolución denegatoria de la instrucción especial y equivale a sostener la facultad estimativa del jurado en la adjudicación del grado o clase de negligencia en que incurrió el acusado. *Pueblo v. Hernández Olmo*, 105 D.P.R. 237 (1976).

Aun cuando al transmitir sus instrucciones al jurado un juez de instancia no debe indicarle que debe tomar en consideración el testimonio del acusado como el de cualquier otro testigo, teniendo en cuenta, por supuesto, el interés que todo acusado tiene en su propio caso, tal instrucción no justifica la revocación de una sentencia dictada cuando, vistas las circunstancias del caso, esta no fue perjudicial al acusado. *Pueblo v. Sulman*, 103 D.P.R. 429 (1975).

Admitidos por un acusado en su testimonio ante el tribunal los hechos y elementos esenciales de un delito de homicidio voluntario-lo que en derecho participa propiamente de la naturaleza de una confesión judicial-no comete error un juez al calificar de confesión el testimonio del acusado al transmitir sus instrucciones al jurado. (*Pueblo v. Crespo Guerrero*, 90 D.P.R. 217 (1964), *distinguido*.) *Pueblo v. Sulman*, 103 D.P.R. 429 (1975).

En ausencia de señalamiento de omisiones sobre hechos materiales o importantes por parte de un apelante, los que hubiesen variado el veredicto de culpabilidad rendido, no comete ningún error perjudicial el juez sentenciador al omitir transmitir instrucciones especiales solicitadas sobre impugnación de testigos por omisiones cometidas. *Pueblo v. Ortiz Rodríguez*, 103 D.P.R. 368 (1975).

La regla de derecho establecida en *Pueblo v. Paris Medina*, 101 D.P.R. 253 (1973)-de que un juez no debe transmitir una instrucción al jurado de que "Todo testigo se presume que dice la verdad."-no es de aplicación a un juicio celebrado los días 21 y 22 de octubre de 1971. *Pueblo v. Villalongo Torres*, 102 D.P.R. 574 (1974).

No comete error un juez al negarse a transmitir instrucciones al jurado advirtiéndole que el testimonio de un policía que no compareció a juicio, al no presentarlo el fiscal a declarar, debe presumirse como evidencia adversa al caso de *El Pueblo de Puerto Rico*, cuando el testimonio del policía ciertamente no hubiera tratado sobre hechos esenciales del caso, su intervención ciertamente no tenía relación con el hecho delictivo, y el testimonio que hubiera podido prestar dicho policía hubiera constituido prueba acumulativa de la declaración al respecto del mismo acusado. *Pueblo v. Díaz Díaz*, 102 D.P.R. 535 (1974).

Instrucciones al jurado a los efectos de que el testimonio de informantes adictos o a sueldo, especialmente cuando es contingente su pago, deben escudrinarse para determinar su confiabilidad, serán transmitidas por el juez únicamente cuando la defensa expresamente lo solicita. Su omisión, de no requerirse expresamente la transmisión de dichas instrucciones, no constituye error revocable. *Pueblo v. Colón Obregon*, 102 D.P.R. 369 (1974).

Renunciado por ambas partes en un **procedimiento criminal** que el juez hiciera un resumen de la prueba desfilada, en apelación un acusado está impedido de señalar como error para revocar la sentencia dictada el que el magistrado no hiciera un resumen de la prueba. *Pueblo v. Girau*, 102 D.P.R. 176 (1974).

No es errónea una instrucción al jurado a los efectos de que la huida de un acusado del sitio de los hechos delictivos debe ponderarse por el jurado como indicio o detalle evidenciario de posible culpabilidad-correspondiendo al juzgador de los hechos así tomarlo o descartarlo según resulte del proceso deliberativo en que se consideren todas las circunstancias que integran el caso sometido para decisión-cuando en el caso se presente prueba de que los acusados huyeron luego de realizado el asalto y no hay prueba que en forma alguna explique o justifique su huida. *Pueblo v. Baez Cintrón*, 102 D.P.R. 30 (1974).

No constituye un error que justifique la revocación de una sentencia-por no afectar los derechos fundamentales del acusado-el hecho de que las instrucciones sobre defensa propia no se hubieran transmitido hasta que las mismas fueron solicitadas por la defensa. *Pueblo v. Nieves Ramos*, 101 D.P.R. 531 (1973).

No lesiona derechos fundamentales de un acusado una instrucción transmitida por el juez sentenciador al jurado en la cual califica con el vocablo de "omisión" el hecho del acusado no declarar en el juicio. *Pueblo v. Rodríguez Martínez*, 101 D.P.R. 503 (1973); *Pueblo v. Romero Cuesta*, 101 D.P.R. 404 (1973).

No justifica la revocación de una sentencia una instrucción al jurado a los efectos de que "Todo testigo se presume que dice la verdad.", cuando en el caso en que se transmitió dicha instrucción declararon varios testigos de la defensa y el acusado no objetó la instrucción que impugnó. *Pueblo v. Paris Medina*, 101 D.P.R. 253 (1973).

En un caso por violaciones a la Ley de Narcóticos, un juez no viene obligado a instruir al jurado sobre la diferencia entre un arresto legal y un arresto ilegal-esto es, si existía o no motivo fundado para arrestar al acusado-cuando la prueba demuestra que los agentes del orden público vieron al acusado traspasar a otros unos sobres de los que se usan en el tráfico de heroína-lo que dio motivo razonable para el arresto de dicho acusado-no siendo en modo alguno conflictiva la prueba sobre esta cuestión. *Pueblo v. Hoffman Pérez*, 100 D.P.R. 556 (1972).

No procede la revocación de una sentencia dictada en un procedimiento criminal basada en que una instrucción al jurado pudo ser insuficiente-posible insuficiencia que fue subsanada por el juez sentenciador en sus instrucciones subsiguientes-cuando cualquier posible insuficiencia en la instrucción era insustancial, de modo que no podía causar perjuicio a los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Hoffman Pérez, 100 D.P.R. 556 (1972).

En un caso por violación a la Ley de Narcóticos, un juez no viene obligado a impartir al jurado instrucción alguna sobre la corroboración del testimonio de los testigos de cargo. Pueblo v. Hoffman Pérez, 100 D.P.R. 556 (1972).

No comete error un juez sentenciador al negarse a transmitirle al jurado instrucciones sobre defensa propia cuando en el caso no hay prueba que justifique tal instrucción. Pueblo v. Merced Jimenez, 100 D.P.R. 270 (1971).

Aun cuando no había base en la prueba en el caso de autos para que el juez sentenciador instruyera al jurado de que "La ley no favorece la locura repentina producida por cualquier impresión, sin que en realidad exista alguna indicación anterior o posterior de ese estado de locura en el sujeto, ni afecta la cuestión el hecho de que el acusado fuera recluido en un manicomio.", dicho juez no cometió error al transmitir dicha instrucción-la que se impugna por primera vez en apelación-cuando tal expresión aislada, no comentada como posible defensa, no pudo confundir al jurado ya que la misma se encuentra dentro de extensas, bien razonadas y apropiadas instrucciones sobre la locura como eximente de responsabilidad. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

Un juez sentenciador no viene obligado a instruir al jurado que, para determinar si la confesión del acusado fue o no voluntaria, debía tomar en consideración el hecho de que al acusado no se le advirtió de su derecho a asistencia de abogado cuando hizo la confesión al fiscal investigador, cuando la prueba sobre la voluntariedad de dicha confesión demuestra la ausencia de los factores presentes en los casos de *Clewis v. Texas*, 386 U.S. 707; 87 S. Ct. 1338; 18 L. Ed. 2d 423 (1966) y *Davis v. North Carolina*, 384 U.S. 737; 86 S. Ct. 1761; 16 L. Ed. 2d 895 (1966), factores que justificaron concluir en dichos casos que la confesión prestada por los acusados fue involuntaria y que la ausencia de abogado constituyó un factor adicional en apoyo del carácter de involuntariedad de la confesión prestada en cada caso. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

Un tribunal no comete error al negarse a transmitir una instrucción al jurado a los efectos de que aunque el acusado no fuera criminalmente irresponsable de acuerdo con la doctrina de *Right and Wrong*, sin embargo la dolencia mental que sufría el acusado apelante cuando cometió el delito constituía un atenuante para reducir el delito de asesinato en primer grado a uno de asesinato en segundo grado, cuando la prueba no justifica tal instrucción, maxime cuando el acusado no solicitó dicha instrucción al juez sentenciador cuando este término de dar sus instrucciones al jurado y pregunto si el fiscal o la defensa tenía objeciones que hacer u otras instrucciones que solicitar-a lo que la defensa contestó que no tenía-y dicho acusado no aduce en su alegato razones ni cita jurisprudencia alguna en apoyo de su tesis ni presenta un análisis de la prueba que pudiera fundamentar su apuntamiento. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

Es ausencia de una demostración por parte de un acusado de que la omisión del resumen de la prueba al jurado por parte del juez-omisión producto de una estipulación entre las partes-le ha ocasionado algún perjuicio que justifica la revocación de la sentencia, se aceptara como válida la renuncia a tal derecho del acusado hecha por el abogado defensor a nombre de este. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

No comete error un juez al instruir al jurado que por acuerdo de las partes no le haria un resumen de la prueba, maxime cuando la defensa no solicito que el tribunal de instancia hiciera tal resumen, ni objeto ni solicito instrucción alguna con respecto a la renuncia que hizo a dicho resumen al finalizar sus instrucciones el juez sentenciador. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

Es correcta una instrucción al jurado en un caso de asesinato en primer grado a los efectos de que para que quede debidamente establecida la defensa propia es necesario que la persona que invoca a su favor el beneficio de la defensa propia no haya tenido culpa en la lucha a la cual fue llevada y de la cual resulto muerta otra persona. Pueblo v. Moctezuma Velázquez, 100 D.P.R. 228 (1971).

Un juez no viene obligado en un caso de violación a impartir instrucciones al jurado sobre el delito de acometimiento y agresión grave cuando el acusado no presento evidencia alguna para controvertir la prueba del Ministerio Público, la que establecio plenamente todos los elementos del delito imputado. Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

Examinadas las instrucciones detalladas del juez al jurado sobre la fuga o huida de las acusadas del lugar de los hechos, tomadas en conjunto con las demas explicaciones que dio el juez sobre duda razonable y sobre la naturaleza del delito imputado, dichas instrucciones detalladas no fueron erroneas. Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971).

Aun cuando sea improcedente el que un juez sentenciador transmita al jurado instrucciones sobre la fuga del acusado de la escena del crimen en un caso especifico, dicha actuación judicial no amerita la revocación de la sentencia dictada cuando a la luz de la abrumadora prueba de la culpabilidad del acusado, el haberla transmitido no tuvo efecto decisivo en el veredicto de culpabilidad rendido. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970).

Instruido correctamente el jurado en cuanto a que corresponde a sus miembros dirimir todo conflicto en las pruebas presentadas en el caso-en que el acusado levanto la defensa de coartada y ademas trato de establecer que la perjudicada no estaba, como ella afirmo, en el sitio en que se cometio contra ella el delito de violación tecnica-el juez sentenciador no viene obligado a instruir al jurado que, de creer que la perjudicada no estaba en el sitio de los hechos sino en la escuela, sus miembros deberian absolver al acusado. Pueblo v. Gautier Oliveras, 99 D.P.R. 138 (1970).

No es impropio que un juez sentenciador lea la acusación al jurado varias veces durante el juicio y en el curso de las instrucciones, no viniendo obligado el juez a instruir al jurado que la acusación no constituye prueba, pero de solicitar la defensa tal instrucción especifica, el juez sentenciador debe transmitirla. Pueblo v. Alvarez de Jesus, 99 D.P.R. 124 (1970).

Una instrucción alegadamente erronea del juez al jurado no justifica la revocación de la sentencia dictada cuando la misma no perjudica derechos sustanciales del acusado, maxime cuando la defensa renuncio a dicho planteamiento ya que, al invitar el juez a las partes a hacer cualquier planteamiento con respecto a las instrucciones, la defensa no levanto entonces, como no planteo antes, objeción alguna al comentario equivocado incluido en la instrucción con respecto a dicho acusado, ni pidio instrucciones para corregirlo. Pueblo v. García, 98 D.P.R. 855 (1970).

No es contraria a la presunción de inocencia del acusado una instrucción del juez al jurado a los efectos de que se presume que todo testigo dice la verdad, pero que dicha presunción puede ser controvertida o descartada por la forma de declarar, el caracter del testimonio o por otra evidencia que afecte la veracidad, honradez e integridad o los motivos del declarante. Pueblo v. Martínez Guerra, 98 D.P.R. 682 (1970).

No perjudica a un acusado una instrucción de un juez sentenciador al jurado en la que expresa que una de las formas de impugnar un testigo es mediante prueba por convicción de delito grave cuando inmediatamente dicho juez aclara que ello no quiere decir que por el hecho en si de que una persona haya estado en presidio, su testimonio tenga que ser descartado, quedando siempre a la consideración del jurado la determinación del grado de veracidad que pueda merecerle el testigo. Pueblo v. Martínez Guerra, 98 D.P.R. 682 (1970).

No constituye un comentario del juez sobre el silencio del acusado el hecho de que al impartir sus instrucciones al jurado exprese que el acusado tiene derecho a declarar o no, maxime cuando dicho juez anade que el hecho de no declarar no debe considerarse como circunstancia incriminatoria, pues el fiscal tiene la obligación de establecer la culpabilidad fuera de duda razonable. Pueblo v. Martínez Guerra, 98 D.P.R. 682 (1970).

Es innecesario transmitir una instrucción con referencia al testimonio de determinados testigos de cargo en particular, cuando el juez transmitio instrucciones amplias y precisas sobre la credibilidad de los testigos sobre duda razonable y los posibles veredictos que podia rendir el jurado. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969).

La prueba dio margen a que el juez sentenciador transmitiera la instrucción sobre la huida del acusado de la escena de los hechos en la forma en que lo hizo, y dejo al jurado la determinación, fuera de toda duda razonable, de si la manera en que el acusado se ausento del sitio de los hechos constituyo una fuga. Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969).

No perjudica los derechos de un acusado una instrucción del juez sentenciador sobre la prueba de su buena reputación presentada por el primero cuando de su lenguaje el jurado podia inferir que dicha prueba, considerada con el resto de la evidencia, podia crear una duda razonable y que la misma podia ser considerada, inependientemente de si el efecto del resto de la prueba admitida era claro o dudoso. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

Presentada prueba de la buena reputación del acusado, este tiene derecho a que el juez instruya al jurado de que el proposito de dicha prueba es crear una duda razonable en la mente de los jurados en cuanto a la comisión del delito por el acusado. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

Un juez no esta obligado a transmitir al jurado, una vez el acusado ocupa la silla testifical, una instrucción a los efectos de que dicho testimonio debe tomarse en consideración como el de cualquier otro testigo. Pueblo v. Arroyo Ramirez, 96 D.P.R. 576 (1968).

No comete error un tribunal al negarse a transmitir una instrucción especial solicitada por la defensa cuando las instrucciones generales impartidas al jurado cubren sustancialmente el punto objeto de dicha instrucción especial. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

No esta obligado un tribunal a explicar en sus instrucciones al jurado en un caso de hurto de un automovil la forma en que el acusado advino dueno del vehículo hurtado cuando, aparte de ser tardio dicho planteamiento en apelación, el mismo resulta insustancial ya que el juez sentenciador hizo referencia a esta cuestion en su resumen del testimonio del apelante. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

Al transmitir sus instrucciones al jurado, un tribunal no esta obligado a explicar las motivaciones que tuvo el fiscal para ofrecer inmunidad a un complice del acusado, testigo del fiscal, bajo las disposiciones de las secs. 1476 a 1479 de este titulo. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

Un juez sentenciador no invade el terreno reservado al jurado comunicandole a este conclusiones de

hecho cuando, al finalizar sus instrucciones-una vez fue establecido por prueba incontrovertida que ciertos sobrecitos ocupados a unas personas acusadas de una infracción a la sec. 974z del Título 24 contenían heroína (nombre por el cual denominaba el abogado defensor la evidencia presentada por el fiscal)-se dirige al jurado advirtiéndole, en relación con la evidencia objetiva: "... ya que se ha establecido que si es heroína y por lo tanto al bregar tengan cuidado no se impregnen las manos de la misma porque podría tener efectos nocivos en ustedes, ...". Pueblo v. Erausquin Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

No constituye un comentario del juez sobre el silencio del acusado el hecho de que al impartir sus instrucciones al jurado exprese que "Igualmente, todo acusado tiene derecho a declarar o no, según el lo crea conveniente.", máxime cuando dicho magistrado explicó claramente al jurado que el hecho de que el acusado no declarara "... no ha de considerarse como circunstancia que lo incrimine, pues el fiscal está en la obligación de establecer su culpabilidad más allá de una duda razonable, prescindiendo de tal omisión". Pueblo v. Quiñones Torres, 95 D.P.R. 659 (1968).

No comete error un juez de instancia al instruir al jurado que, en la determinación de si el acusado es o no culpable de los hechos que se le imputan, se abstengan de considerar la prueba presentada por el propio acusado de sus convicciones anteriores por infracciones a la Ley de Drogas. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967).

Acusadas dos personas en una misma acusación por los mismos delitos, no constituye error del juez de instancia el instruir al jurado en el sentido de que no era necesario que se estableciese que el acusado actuó de común acuerdo con la otra persona que aparecía acusada en el pliego acusatorio. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967).

Establecido por la evidencia en un **procedimiento criminal** que un testigo era un agente especial del Gobierno dedicado a perseguir el tráfico ilegal de drogas, no comete error el juez de instancia al instruir al jurado que dicho testigo no era un cómplice del acusado y que su testimonio no tenía que ser corroborado. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967).

No conlleva la revocación de las sentencias dictadas la omisión del juez en transmitir al jurado instrucciones sobre la confesión y admisiones del acusado cuando: (a) este no se opone a la admisión en evidencia de la confesión y las admisiones, ni levanta cuestión alguna sobre su voluntariedad; (b) cuando el juez pregunta al acusado, en más de una ocasión, si tenía instrucciones que deseaba se le transmitieran al jurado, y este contesta en la negativa; (c) el acusado no excepciona las instrucciones, y (d) el acusado admite en la silla testifical que había hecho la confesión y admisiones. Pueblo v. Gonzalez Torres, 95 D.P.R. 155 (1967).

En un caso de violación en que la acusación alega la incapacidad mental de la perjudicada para consentir al acto sexual, no procede que el juez sentenciador transmita al jurado una instrucción al efecto de que, si la mujer, impulsada por una pasión sexual o animal fuerte aun cuando este loca, idiota o imbecil, se somete al acto sexual sin resistencia, no se puede concluir que dicho acto fue cometido en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Pueblo v. García Pomales, 94 D.P.R. 224 (1967).

Es correcta una instrucción en un **procedimiento criminal** a los efectos de que puede ser rechazada la presunción de veracidad que acompaña a todo testigo, entre otras razones, considerando evidencia de manifestaciones o actos contradictorios anteriores del testigo sobre los cuales se ha presentado y admitido prueba en el juicio. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

Establecido mediante prueba en un caso de abuso de confianza que la cantidad sustraída fraudulentamente excedía de \$3,000, no habiendo impugnado la defensa partida específica alguna, no constituye error el que el juez sentenciador no instruya al jurado en cuanto al grado del delito cuando la cantidad sustraída es

exactamente cien dolares. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

No es necesario que un juez trasmita al jurado una instrucción sobre el efecto legal del silencio del acusado cuando durante el juicio no surge situación alguna que justifique tal instrucción. Pueblo v. Torres Rodríguez, 93 D.P.R. 766 (1966).

No constituye error perjudicial que justifique la revocación de una sentencia el no transmitir al jurado una instrucción al efecto de que este debe mirar con cautela el testimonio prestado por la parte perjudicada para sustanciar una acusación contra el acusado por el delito de impudicia-infracción a la modalidad prevista en el segundo párrafo de la sec. 966 del Título 33-cuando, como en este caso, (a) el testimonio de la parte perjudicada ha sido corroborado por prueba directa o circunstancial, o (b) cuando en la apreciación del tribunal de apelación, el resultado no hubiese sido distinto debido a que la prueba es convincente, esta huerfana de contradicciones sustanciales y no es inherentemente improbable. Pueblo v. Serrano Olivo, 93 D.P.R. 745 (1966).

Al ventilarse una acusación por el delito de impudicia, el juez no viene obligado a transmitir al jurado instrucciones sobre el delito de acometimiento y agresión grave cuando la prueba no lo justifique. Pueblo v. Serrano Olivo, 93 D.P.R. 745 (1966).

No hay error al negar una instrucción en cierto lenguaje específico solicitada por la defensa cuando las instrucciones transmitidas por el juez son más completas y expresan el mismo concepto que la sugerida por la defensa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966).

El juez que preside la vista de una causa **criminal** no incurre en error al denegar en alta voz y en presencia del jurado una instrucción solicitada por la defensa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966).

No constituye error revocable el que, al transmitir las instrucciones al jurado, el juez que preside la vista exprese que, de las dos teorías contradictorias expuestas, la de cargo esta sostenida por la prueba del fiscal cuando, objetada dicha instrucción por la defensa, dicho juez aclara lo que en verdad quiso decir, y en esta forma subsana cualquier perjuicio que pudo ocasionarle al acusado la primera instrucción que transmitiera al jurado. Pueblo v. Torres García, 93 D.P.R. 157 (1966).

Cuando un acusado de poseer y vender heroína niega que tuviera nada que ver con los hechos que dieron base a la acusación, este no queda perjudicado por una solicitud al jurado del juez que presidio la vista a los efectos de que "Yo voy a suplicarles a los Sres. del Jurado que tengan cuidado como manejan estos sobres, que no se pierda ninguno y que no se contaminen las manos.". Pueblo v. Torres García, 93 D.P.R. 157 (1966).

Aun cuando sea errónea en un proceso por asesinato una instrucción a los efectos de que "en un proceso por asesinato El Pueblo no viene obligado a ofrecer prueba de malicia", ello no justifica la revocación de la sentencia cuando las circunstancias del caso son tales que dicho error no produjo un dano irreparable al acusado, maxime cuando la prueba en el caso estableció como cuestión de realidad el elemento de la malicia tácita del acusado. Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965); Pueblo v. Crespo Guerrero, 90 D.P.R. 217 (1964).

Aunque pueda haber un error en una instrucción al jurado en cuanto al uso de la conjunción "no" al referirse al concepto de la presunción de inocencia-"Es deber de ustedes, más bien obligación de ustedes, presumir inocente al acusado hasta que el Estado no le pruebe su culpabilidad ..." -dicho error no justifica la revocación de la sentencia cuando el texto completo de la instrucción llevo al jurado un concepto claro y correcto de la ley en cuanto a la presunción de inocencia del acusado. Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965).

Un apelante no puede objetar en un caso de asesinato una instrucción al jurado sobre homicidio involuntario cuando los hechos no la justifican, maxime cuando dicha instrucción lo que hizo fue favorecer al acusado. Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965).

En un proceso por violación, ante jurado, el juez no tiene que transmitir una instrucción a los efectos de que tenía que corroborarse el acto carnal cuando las instrucciones transmitidas al jurado cubren tanto el caracter de la resistencia que debe oponer la mujer ofendida como la necesidad de que se corrobore su testimonio. Pueblo v. Baez Ramos, 91 D.P.R. 765 (1965).

Establecido en un caso de asesinato-cometido en un establecimiento o negocio localizado en la finca del acusado-de que este tenía una licencia para tener y poseer un arma en su finca expedida por el Jefe de la Policía, el tribunal de instancia no viene obligado a transmitir instrucciones sobre el alcance y extensión de dicha licencia cuando el negocio en que ocurrió la muerte del occiso estaba arrendado a una tercera persona, maxime cuando la propia prueba del acusado no justifica tal instrucción al jurado sobre portación incidental de un arma. Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759 (1965).

Un tribunal no viene obligado a transmitir instrucciones solicitadas sobre la condición alcoholica del acusado en el momento de la comisión de los hechos cuando en la prueba nada hay que demuestre que dicho acusado se encontraba en estado de embriaguez al cometer el delito, embriaguez que le incapacitara para formar o concebir el proposito, la intención o la malicia que son elementos del delito. Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759 (1965).

La instrucción dada al jurado al efecto de que el apelante ha ocupado el sitio de los testigos y por lo tanto su testimonio debe tomarse en consideración como el de cualquier otro testigo, teniendo desde luego en cuenta el interés que todo acusado tiene en su propia causa, no tiene el efecto de desvirtuar y desacreditar tanto la defensa de coartada como la presunción de inocencia del apelante al extremo de anular por completo la presunción de inocencia de este, y se ajusta a la ley. Pueblo v. Cestau Moreno, 91 D.P.R. 755 (1965).

No es necesario que un juez de instancia transmita instrucciones al jurado sobre los delitos de ataque para cometer homicidio y sobre acometimiento y agresión grave cuando la única defensa aducida por el acusado es la coartada-en que el acusado niega ser el agresor del perjudicado-y el tribunal transmite instrucciones correctas sobre dicha defensa, maxime cuando la defensa no hizo objeción alguna a las instrucciones del tribunal ni solicitó instrucciones específicas sobre los aspectos de que se queja en apelación. Pueblo v. Cestau Moreno, 91 D.P.R. 755 (1965).

No se justifica en apelación el planteamiento de falta de asistencia de abogado en un juicio por el delito de robo a base del hecho de que la defensa renunciara a que se dieran instrucciones orales cuando no se demuestra que ello perjudicara al acusado, ni a base del hecho de que no se solicitaron instrucciones especiales sobre los delitos menores incluidos en el de robo, cuando de acuerdo con la prueba no procedía dictar estas últimas instrucciones. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Un juez sentenciador no tiene que transmitir al jurado instrucciones sobre arresto ilegal e inadmisibilidad de la evidencia ocupada al apelante cuando se trata de evidencia que fue arrojada al suelo por el acusado y recogida por la Policía. Pueblo v. Saura Gomez, 90 D.P.R. 801 (1964).

Examinadas en conjunto las instrucciones al jurado se concluye que las mismas fueron suficientes para dejar debidamente instruido al jurado respecto a la necesidad de prueba de corroboración sobre el acto carnal y el uso de amenazas, fuerza o violencia en la consumación del delito por parte del acusado. Pueblo v. Abreu Mojica, 90 D.P.R. 760 (1964).

Cuando al hacer el análisis de la prueba el juez sentenciador pone en boca de un testigo manifestaciones que este nunca hizo, dicho error no es de tal naturaleza que amerite la revocación de la sentencia dictada, cuando dicho juez, al terminar dicho análisis, pregunta si el fiscal y la defensa tienen alguna duda sobre lo expresado por el, para proceder a corregir dicho análisis, y tanto la defensa como el fiscal expresan su conformidad con el análisis hecho de la prueba por el juez sentenciador. Pueblo v. Rodríguez Esmurria, 90 D.P.R. 532 (1964).

Un juez no viene obligado a instruir al jurado que debe pesar con mucha cautela la declaración de un testigo que es complice del acusado. Pueblo v. Rodríguez Esmurria, 90 D.P.R. 532 (1964).

Examinadas las instrucciones del juez al jurado se concluye que el tribunal sentenciador instruyo ampliamente al jurado sobre la doctrina de que cuando un testigo hubiere faltado a la verdad en una parte de su declaración, debiera ponerse en duda en cuanto a las otras. Pueblo v. Rodríguez Esmurria, 90 D.P.R. 532 (1964).

En correcta una instrucción al jurado en un caso de asesinato en primer grado a los efectos de que, si el jurado entendía que el acusado era culpable pero tuviere duda sobre la calificación del delito en que debían declararle culpable-asesinato en primer grado, en segundo grado u homicidio voluntario-procedía declarar al acusado culpable del delito menor. Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964).

Examinadas las amplias, claras y abarcadoras instrucciones del juez al jurado en este caso, y especialmente las extensas instrucciones sobre la confesión escrita voluntaria del acusado presentada en evidencia, el juez no cometió error sustancial que justifique la revocación de la sentencia al omitir instruir al jurado al efecto de que El Pueblo tenía el peso de la prueba a los fines de establecer la voluntariedad de la confesión. Pueblo v. Martínez Rivera, 90 D.P.R. 163 (1964).

6. Falta de objeción.

En ausencia de objeción por la defensa a las instrucciones generales finales impartidas por el juez al jurado, se presume su corrección. Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632 (1985).

Salvo que se lesionen derechos fundamentales de un acusado, no podrá invocarse como error cualquier porción u omisión en las instrucciones al jurado, si no medio la correspondiente objeción o se solicitó la instrucción adicional antes de retirarse el jurado a deliberar, con clara exposición de los motivos para la impugnación o solicitud. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

Renuncia a plantear en apelación errores en las instrucciones transmitidas al jurado que no lesionan sus derechos fundamentales aquel apelante que no plantea dichos errores ante el tribunal de instancia. Pueblo v. Ortiz Gonzalez, 111 D.P.R. 408 (1981); Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369 (1980); Pueblo v. De Leon Claudio, 99 D.P.R. 266 (1970); Pueblo v. Alvarez de Jesus, 99 D.P.R. 124 (1970).

Se presumirá que las instrucciones impartidas a un jurado fueron adecuadas ante una impugnación del apelante de que no lo fueron, cuando este no las eleva con los autos del caso. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

No procede señalar como error en apelación cualquier porción de las instrucciones u omisión en las mismas cuando el apelante no hizo objeción a las instrucciones ni solicitó instrucciones especiales o adicionales durante la celebración del juicio y, por el contrario, su abogado expuso al terminar el juez de impartir sus instrucciones que no tenía objeción alguna que formular, comentando "Ha sido todo perfecto.", maxime cuando las instrucciones impartidas se ajustan a derecho. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974).

Un acusado no puede plantear en apelación que el juez de instancia erro al impartir las instrucciones al jurado cuando no ha dado cumplimiento a las disposiciones de esta regla, maxime cuando al concluir el magistrado sus instrucciones, pregunto a las partes si tenian alguna instrucción adicional que deseaban impartir al jurado, y el fiscal y la defensa contestaron que ninguna, habiendo expresado ambas partes, a preguntas del magistrado, ademas, que estaban satisfechas con las instrucciones impartidas. Pueblo v. Girau, 102 D.P.R. 176 (1974).

Un apelante no podra impugnar las instrucciones transmitidas al jurado u omisión en las mismas a menos que plantear su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar. La ausencia de tal solicitud u objeción constituye una renuncia al planteamiento en apelación siempre que no se hayan lesionado derechos fundamentales del apelante. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973).

Es tardio un planteamiento en apelación impugnando las instrucciones del juez al jurado cuando la defensa no objeta dichas instrucciones ni se solicitan instrucciones adicionales. (*Pueblo v. Torres Rolon*, 99 D.P.R. 970 (1971) y *Pueblo v. Del Valle*, 91 D.P.R. 174 (1964), seguidos.) Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404 (1973).

Es tardio un planteamiento hecho por la defensa al juez de instancia en un caso **criminal** a los efectos de que este habia dado al jurado solo parte de unas instrucciones especiales solicitadas por el acusado, cuando tal planteamiento se hace después de haberse retirado dicho jurado a deliberar. Pueblo v. Saenz Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972).

Es tardio un planteamiento en apelación impugnando las instrucciones del juez al jurado sobre el delito de alteración de la paz pública cuando la defensa no objeto dichas instrucciones ni solicito instrucciones adicionales cuando el magistrado solicito de las partes si se deseaban instrucciones especiales o si se deseaba hacer cualquier otro planteamiento, maxime cuando dichas instrucciones fueron suficientes. Pueblo v. Torres Rolon, 99 D.P.R. 970 (1971).

La omisión del abogado de un acusado de reproducir una solicitud de instrucción especial al juez sentenciador al momento de este impartir las instrucciones generales al jurado segun le ordenara dicho magistrado, asi como el no pedir dicho abogado dicha instrucción especial en momentos en que el magistrado pregunto a las partes si tenian alguna solicitud de instrucciones, justifican la omisión de transmitir dicha instrucción especial. Pueblo v. Torres Alvarado, 98 D.P.R. 178 (1969).

Un acusado no puede plantear en apelación un supuesto error cometido por el juez sentenciador al transmitir una instrucción especifica cuando no objeta la misma en el tribunal de instancia ni solicita instrucción especial alguna. Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969).

Un acusado renuncia a plantear en apelación instrucciones supuestamente erroneas que no afectan sus derechos sustanciales al no objetarlas en el tribunal sentenciador. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

Un apelante no puede quejarse en apelación de instrucciones supuestamente erroneas cuando las mismas no le son perjudiciales y ademas, no objeto las mismas en momento alguno ni solicito aclaración alguna de dichas instrucciones. Pueblo v. Acevedo Gonzalez, 95 D.P.R. 355 (1967); Pueblo v. Iturrino De Jesus, 90 D.P.R. 706 (1964); Pueblo v. Pinto Medina, 90 D.P.R. 585 (1964).

Una supuesta instrucción erronea al jurado no excepcionada por la defensa durante el juicio no puede servir de base para revocar en apelación la sentencia dictada. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852

(1967).

El no objetar el acusado la suficiencia de unas instrucciones del juez al jurado en cuanto a que un acusado puede o no declarar es por si solo suficiente para desestimar el error señalado a los efectos de que el juez dejo de dar instrucciones sobre la prohibición de comentar el silencio del acusado o de tomarlo en su contra. Pueblo v. Torres Rodríguez, 93 D.P.R. 766 (1966).

Un acusado renuncia a levantar en apelación errores en las instrucciones transmitidas cuando no hace objeción alguna a las mismas en el momento oportuno-en el momento que el juez resumia la teoria del fiscal-maxime cuando no solicita instrucciones especiales del juez, y al ser preguntado por este si tiene alguna excepción a las instrucciones del tribunal, la defensa manifiesta que no tiene ninguna. Pueblo v. Gonzalez de Demora, 92 D.P.R. 75 (1965).

Cuando la defensa no solicita instrucciones especiales al terminar el magistrado de dar sus instrucciones y este preguntar si el acusado interesaba solicitar dicho tipo de instrucciones, esta no puede luego en apelación alegar como error la omisión de tales instrucciones. Pueblo v. Martínez Santiago, 91 D.P.R. 879 (1965).

El acusado debe solicitar las instrucciones especiales o excepcionar las transmitidas para que pueda levantar con exito en apelación el error en la omisión de las instrucciones especiales o que las transmitidas fueron erroneas, a menos que tal error haya lesionado sus derechos sustanciales. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Un acusado renuncia a cualesquiera errores en las instrucciones transmitidas al jurado cuando al terminar de dictarlas, la corte pregunta al abogado defensor si desea alguna instrucción especial, y este contesta que no y no hace objecion, ni aun de caracter general, a ninguna de las instrucciones transmitidas. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

7. Delitos sexuales.

La instrucción al jurado referente al delito de actos lascivos, en cuanto a que el testimonio de la víctima debe mirarse con sospecha, se encuentra en estado de obsolescencia. Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 D.P.R. 18 (1995).

La instrucción de evaluar "con cautela" el testimonio de victimas de actos lascivos, mujeres, hombres, menores o incapaces, crea un desbalance entre los derechos de la víctima y los multiples derechos del acusado en el juicio. Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 D.P.R. 18 (1995).

Regla 138. JURADO; CUSTODIA.

Durante el transcurso del juicio, y antes de someterse la causa al jurado, el tribunal podrá permitir que los jurados se separen, o disponer que queden bajo la custodia del alguacil, quien prestará juramento de mantenerlos juntos hasta la próxima sesión del tribunal, y de no consentir que nadie, incluso él mismo, les hable o se comuniquen con ellos, acerca de ningún particular relacionado con el juicio, y de regresar con ellos al tribunal en la próxima sesión. Así mismo durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea necesario, tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que, en su sana discreción, ordene que el jurado quede bajo la custodia del alguacil.

(Mayo 27, 1980, Núm. 62, p. 169.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 260; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1121.

Enmiendas

-1980, ley 62. La ley de 1980 añadió la oración final.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Mayo 27, 1980, Núm. 62, p. 169.

Contrarreferencias.

Reglas de conducta para los alguaciles, Véase el Ap. VI del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

El veredicto rendido en un proceso **criminal** no puede ser alterado por razón de indebida presión o influencia al jurado a menos que haya prueba prima facie de que ese extraño elemento pervirtió la decisión de la mayoría. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982).

El privilegio del secreto en el cuarto de deliberaciones del jurado debe ceder si se demuestra prima facie que en dicho recinto ha ocurrido alguna anomalía que afecte seriamente la realización de la justicia, a fin de que pueda llegarse al esclarecimiento de la verdad. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982).

Compete al acusado rebatir la presunción de que el jurado basó su veredicto en la prueba y no en hechos extraños o bajo indebida influencia o presión. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982).

No constituye motivo de revocación de la sentencia **criminal** que el juez sentenciador no le permitiera a la defensa preguntar a los jurados el efecto adverso que pudo haber tenido cierta información aparecida en el periódico con relación al delito imputado cuando, de haberse cometido un error por dicha negativa, este no fue perjudicial al acusado. Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981).

No constituye error revocable el que un magistrado, ante los continuos reclamos de la defensa de que artículos de periódicos estaban prejuiciando la mente del jurado en contra del acusado, ordene que aquel quede incomunicado por entender que la pureza de los procedimientos hacía necesario dicho secuestro, informándole al jurado que dicha decisión se había tomado a iniciativa del tribunal y no a solicitud de la defensa o del fiscal. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

No se considerará en apelación una alegación de un acusado a los efectos de que se le privó de su derecho a juicio justo e imparcial al negarse el tribunal a interrogar a los miembros del jurado respecto a si habían leído noticias relativas al acusado publicadas durante el juicio y el efecto de tales noticias en su ánimo cuando el apelante no eleva con los autos del caso las publicaciones a que hace referencia. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

Un tribunal no puede mantener a los miembros de un jurado libres de contaminación de las informaciones periodísticas que se publican sobre el juicio en que interviene. Lo importante en el proceso es que el veredicto responda a la prueba desfilada. Pueblo v. Pérez Santalíz, 105 D.P.R. 10 (1976).

Un tribunal tiene facultad para, sin el consentimiento del acusado o del fiscal, permitir que los miembros del jurado se separen durante el transcurso del juicio. Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574 (1974).

Es lesivo a la integridad del proceso el que un jurado sea puesto o tenido bajo la vigilancia de agentes

informadores al servicio particular de cualquiera de las partes en un procedimiento criminal y para beneficio de estas, y las violaciones de tal norma no deben ser ignoradas o permitidas por los jueces de instancia. *Pinero Agosto v. Tribunal Superior*, 94 D.P.R. 204 (1967).

Regla 139. JURADO; DELIBERACION; JURAMENTO DEL ALGUACIL.

Al retirarse el jurado a deliberar, el alguacil deberá prestar juramento, de:

- (a) Mantener a los jurados juntos en el sitio destinado por el tribunal para sus deliberaciones.
- (b) No permitir a persona alguna que se comuniquen en absoluto con el jurado o con cualquiera de sus miembros.
- (c) No comunicarse él mismo con el jurado o cualquiera de sus miembros acerca de ningún particular relacionado con el proceso.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. Criminal, 1902, art. 267; Código Enj. Criminal de California, sec. 1128; Código modelo, R. 327.

Contrarreferencias.

Habitación o local, y comida y alojamiento para el jurado, veanse las secs. 781 y 782 de este título.

Regla 140. JURADO; DELIBERACION; USO DE EVIDENCIA.

Al retirarse a deliberar, el jurado deberá llevarse consigo todo objeto o escrito admitido en evidencia, excepto las deposiciones.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. Criminal, 1902, art. 274; Código Enj. Criminal de California, sec. 1137; Código modelo, R. 330.

ANOTACIONES

- 1. En general.
- 2. Funciones del juez y del jurado.

1. En general.

Una vez se ha alertado a un tribunal sobre la posible infracción, aunque sea por inadvertencia o negligencia, del deber del secretario de sala de hacerle llegar al jurado solamente aquellos documentos u objetos admitidos en evidencia y referidos por el tribunal, corresponde a este, no al acusado, iniciar una pesquisa e interrogar al respecto al propio funcionario del tribunal. *Pueblo v. Mangual Hernández*, 111 D.P.R. 136 (1981).

Asumiendo que la transcripción parcial del testimonio de la esposa de un acusado prestado con anterioridad en otro proceso contra el caiga dentro de la prohibición de esta regla, y ello constituyera error, el mismo no da lugar a la revocación de las sentencias apeladas cuando, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, el mismo no perjudica los derechos sustanciales de dicho acusado. *Pueblo v. García García*, 98 D.P.R. 827 (1970).

No constituye un error que justifique la revocación de una sentencia criminal el que un juez sentenciador

permita al jurado llevar consigo al salon de deliberaciones la confesión del acusado cuando la prueba en el caso fue sencilla y corta, la defensa no presento prueba para contradecir la de cargo, y, ademas de dicha confesión, el jurado tuvo ante si prueba adicional-el testimonio de varios testigos-sobre el hecho fundamental contenido en la confesión. Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970).

Una declaración jurada de un testigo de cargo usada por la defensa para impugnarla no tiene que pasar al jurado cuando la misma, aunque se marco para identificación, no fue ofrecida en evidencia. Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64 (1969).

No constituye base para la revocación de una sentencia dictada el que el juez sentenciador ordene-contral objeción de la defensa-que pase al jurado cuando este se retira a deliberar, una carta de la acusada que contiene manifestaciones inculpativas cuando el contenido de dicha carta ha llegado al jurado por las manifestaciones hechas por la acusada a dos testigos de cargo, y la propia acusada, al declarar, admitio que habia firmado dicha carta, maxime en ausencia de una demostración de que la actuación del juez sentenciador fuera perjudicial a la acusada. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

No es un error perjudicial que justifica la revocación de la sentencia el que el juez sentenciador entregue al jurado dos confesiones escritas del acusado cuando este testifico ampliamente sobre los mismos extremos contenidos en sus confesiones y, ademas, hubo prueba abundante y suficiente de hechos a base de los cuales estaba el jurado en condiciones justificadas de rendir un veredicto de culpabilidad. Pueblo v. Cortes Muñiz, 93 D.P.R. 781 (1966).

Esta regla prohíbe que vaya al jurado la confesión del acusado, y ciertamente el permitir que la declaración de la acusada fuera al jurado, aun con el solo proposito de impugnar lo manifestado en el juicio por ella, no puede tomarse como pretexto para no cumplir con la misma. Pueblo v. Vega Roman, 92 D.P.R. 677 (1965).

Leida a un jurado una declaración prestada por la acusada, en donde admitia la comisión del delito que se le imputo-el entregarle el juez de instancia dicha declaración al jurado y permitir que este la tuviere consigo durante sus deliberaciones constituye un error que da lugar a la revocación de la sentencia dictada y la concesión de un nuevo juicio. Pueblo v. Vega Roman, 92 D.P.R. 677 (1965).

No constituye una excepción a la regla de que un tribunal no debe permitir que vaya al jurado una declaración escrita de una acusada admitiendo la comisión del delito que se le imputo, luego de esta haber sido leida a los señores del jurado, el hecho de que el fiscal alegue que presenta en evidencia dicha declaración-la cual tuvo el jurado en su poder durante sus deliberaciones-con el proposito de impugnar el testimonio de la acusada. Pueblo v. Vega Roman, 92 D.P.R. 677 (1965).

El hecho de que un juez sentenciador permita al jurado llevar consigo para sus deliberaciones la declaración escrita del acusado, no es un error que conlleva la revocación de la sentencia apelada cuando-independientemente de que al celebrarse el juicio no se habia resuelto el caso de *Pueblo v. Ramos Cruz*, 84 D.P.R. 563 (1962)-el error apuntado no perjudica los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Castro Cruz, 90 D.P.R. 206 (1964); Pueblo v. Hernández Rodríguez, 89 D.P.R. 770 (1964).

El error de un juez al permitir que pase al jurado el documento que contiene la confesión escrita hecha por el acusado no conlleva la revocación automática de la sentencia condenatoria dictada. Dicho error da lugar a la revocación de la sentencia únicamente cuando se establece que el mismo lesiono los derechos fundamentales del acusado. Pueblo v. Hernández Rodríguez, 89 D.P.R. 770 (1964).

Cuando en un caso **criminal** ante jurado el acusado no presenta teoria de defensa ni prueba alguna a su favor-descansando el jurado en la prueba de El Pueblo-la sentencia dictada contra el acusado no se

revocara porque el juez de instancia erroneamente permita que pase al jurado la confesión escrita del acusado, a menos que se demuestre que dicho error perjudico los derechos fundamentales de este. Pueblo v. Hernández Rodríguez, 89 D.P.R. 770 (1964).

2. Funciones del juez y del jurado.

Los jueces de instancia y los jurados son quienes estan en mejor posición de aquilatar la prueba; por ello su apreciación merece gran respeto y deferencia. En ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión no se interviendra con dicha apreciación de la prueba. Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

Corresponde al jurado el hacer determinaciones de hecho, dirimiendo los conflictos en la prueba y determinando a que testigos cree total o parcialmente. Pueblo v. Gonzalez Colón, 110 D.P.R. 812 (1981); Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977); Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699 (1968).

Es la función de un jurado la de escuchar la prueba que presenten el fiscal y la defensa y pasar juicio sobre la misma con una conciencia limpia y siguiendo las instrucciones relativas al derecho aplicable que recibe del juez, más no debe ensombrear su objetividad entrando al campo de lucha entre acusado y defensor que es el juicio **criminal**. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Dirimidas por un jurado las contradicciones del testimonio de un testigo de cargo, a quien se le dio credito, no se interviendra con su determinación. Pueblo v. Garay, 105 D.P.R. 86 (1976).

El perito del Ministerio Fiscal no usurpo a traves de su testimonio la función o campo reservado al jurado. Pueblo v. Lebron López, 96 D.P.R. 274 (1968).

Un jurado no incide en la apreciación de la prueba presentada cuando la de cargo no fue rebatida y la de la defensa solo consistio de un testigo de reputación cuya credibilidad fue impugnada. Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968).

Corresponde al jurado, y no al juez, el pesar, justipreciar, interpretar, hacer inferencias y deducciones, y darle sentido-a la luz de los hechos que sirvieron de fondo-a la declaración de un testigo de cargo sobre manifestaciones que el acusado le hiciera en relación con el crimen imputadole-manifestaciones admisibles en su contra-y constituye error perjudicial el que el juez transmita al jurado su propia conclusión sobre el testimonio de dicho testigo-como un hecho producto de su propia justipreciación de esa prueba. Pueblo v. Crespo Guerrero, 90 D.P.R. 217 (1964).

Corresponde al jurado-como unico juzgador de los hechos en un caso-el considerar el testimonio de un testigo de cargo sobre manifestaciones que a el le hiciera el acusado en relación al crimen que a este ultimo se le imputaba, libre de todo comentario, conclusion, adjetivación o criterio de parte del juez, debiendo dicho cuerpo justipreciar dicho testimonio y derivar del mismo las inferencias y conclusiones apropiadas. Pueblo v. Crespo Guerrero, 90 D.P.R. 217 (1964).

Veanse también las anotaciones bajo la [34ap LPRA sec. 1171], nota 4 de este titulo.

Regla 141. JURADO; DELIBERACION; REGRESO A SALA A SU SOLICITUD.

Después que el jurado se hubiere retirado a deliberar, si se suscitare cualquier desacuerdo o duda entre los miembros con respecto a la prueba testifical, o desearan ser informados acerca de algún punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir al oficial encargado de ellos que los conduzca al tribunal. Una vez en él, la información solicitada les será dada previa notificación al fiscal y al acusado o su abogado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 275; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1138; Código modelo, R. 331.

ANOTACIONES

1. En general.

Solicitado por el presidente de un jurado que por la taquigrafa de record se procediera a la lectura del testimonio directo del perito medico en cuanto al examen medico de la perjudicada en un caso de violación, a lo cual accedió el juez sentenciador, no comete error dicho magistrado al denegar la solicitud de la defensa de que se leyera también el contrainterrogatorio de dicho testigo de cargo cuando dicho contrainterrogatorio no impugno en forma alguna dicho testimonio directo. Pueblo v. Rodríguez Martínez, 101 D.P.R. 503 (1973).

En ausencia de prueba de que el jurado estaba prejuiciado contra el acusado como resultado de la publicidad dadale a su caso, el hecho aislado de la publicidad no constituye demostración de tal prejuicio. Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897 (1969).

Es sobre el acusado que recae el peso de la prueba para establecer afirmativamente que la publicidad dadale a su caso le ha privado de su derecho a ser juzgado por un jurado imparcial. Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897 (1969).

Si de la apreciación en conjunto de todas las expresiones emitidas por el tribunal se desprende que se limito a explicar correctamente al jurado que el juez podía considerar una recomendación de clemencia, aunque no estaba constrenido a seguirla, y nunca manifesto que lo obligaba, no puede decirse que el jurado actuo inducido o motivado por la convicción firme de que su recomendación seria indefectiblemente atendida. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

Regla 142. JURADO; DELIBERACION; REGRESO A SALA A INSTANCIAS DEL TRIBUNAL.

Después de haberse retirado el jurado a deliberar, el tribunal podrá ordenarle que vuelva a la sala de sesiones con el fin de corregir cualquier instrucción errónea o para darle instrucciones adicionales. Tales instrucciones le serán dadas solamente después de haberse notificado al fiscal, al acusado o a su abogado de la decisión del tribunal de corregir o ampliar sus instrucciones al jurado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 332.

ANOTACIONES

1. En general.

Depende de la sana discreción del juez sentenciador el tiempo durante el cual un jurado debe permanecer deliberando. Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897 (1969).

Regla 143. JURADO; DELIBERACION; TRIBUNAL CONSTITUIDO.

Mientras el jurado estuviere deliberando, el tribunal se considerará que continúa constituido a los efectos de entender en cualquier incidente relacionado con la causa sometida al jurado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 279; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1142; Código modelo, R. 334.

Regla 144. JURADO; DISOLUCION.

El tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos:

- (a) Si antes de retirarse el jurado a deliberar, se hiciere imposible la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad o muerte de uno de los miembros del jurado, a menos que el tribunal resolviera tomarle juramento a otro miembro del jurado en sustitución del primero y empezar el juicio de nuevo.
- (b) Si después de retirarse el jurado a deliberar, se hiciere imposible la continuación del proceso a consecuencia de la enfermedad o muerte de un miembro del jurado o sobreviniere cualquier otra circunstancia que les impidiera permanecer reunidos.
- (c) Si la deliberación se prolongare por un lapso de tiempo que el tribunal estimare suficiente para concluir de una manera clara y evidente no haber posibilidad de que el jurado pudiera llegar a un acuerdo.
- (d) Si se hubiere cometido algún error o se hubiere incurrido en alguna irregularidad durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiera al jurado rendir un veredicto justo e imparcial.
- (e) Por cualquier otra causa si las partes consintieren en ello.

En todos los casos en que el jurado fuere disuelto según lo provisto en esta regla, la causa podrá ser juzgada nuevamente.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 262, 276 a 278 y 303; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1123, 1139 y 1141; Código modelo, R. 357.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Nuevo juicio.

1. En general.

La discreción del juez de instancia al disolver un jurado por aparente irregularidad merece deferencia por el tribunal apelativo. Es el juez de instancia quien esta en mejor condición para hacer una evaluación inteligente de la situación que motiva la disolución del jurado. *Pueblo v. Guzmán Camacho*, 116 D.P.R. 34 (1984); *Pueblo v. Arteaga Torres*, 93 D.P.R. 148 (1966).

Un juez no debe disolver un jurado apenas ha comenzado a deliberar. En los casos en que se amerite, el magistrado debe instruir al jurado para que continúe deliberando y trate de llegar a un veredicto, y solo debe disolverlo cuando se convenza de que es imposible para el jurado ponerse de acuerdo. *Pueblo v. Reyes Herrans*, 105 D.P.R. 658 (1977).

No comete error de derecho un juez al no disolver el jurado por no haber llegado este en cuatro ocasiones a un acuerdo cuando dicho jurado deliberó por menos de siete horas en un día-aun sin descontar el tiempo que estuvo cenando-maxime cuando un testigo principal de cargo estaba próximo a ausentarse del país para siempre-lo que con toda posibilidad entraba en el archivo del caso-y este último hecho no surge como elemento coactivo en las reiteradas ordenes del juez para continuar las deliberaciones. *Pueblo v. Vélez Díaz*, 105 D.P.R. 386 (1976).

Un juez superior tiene amplia discreción para resolver si hay posibilidad de que el jurado llegue a un acuerdo. *Pueblo v. Vélez Díaz*, 105 D.P.R. 386 (1976).

De existir base razonable para la actuación de un juez negándose a disolver un jurado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no intervendrá con su determinación. *Pueblo v. Vélez Díaz*, 105 D.P.R. 386 (1976).

No procede declarar con lugar una moción de *mistrial* basada en que los derechos del acusado fueron afectados en forma adversa al llevar el fiscal al jurado, mediante el contrainterrogatorio, el conocimiento de convicciones anteriores del acusado-quien anteriormente había aceptado las alegaciones sobre delitos subsiguientes contenidas en la acusación original-cuando fue dicho acusado, en una contestación no responsiva a una pregunta del fiscal, quien trajo a colación en la prueba la cuestión de sus expedientes criminales anteriores, maxime cuando dicho acusado no objetó la pregunta del fiscal sobre convicción anterior, no solicitó la eliminación de la contestación a la misma ni solicitó del juez que transmitiera instrucciones especiales al jurado para salvaguardar sus derechos. *Pueblo v. Elías Villuendas*, 101 D.P.R. 323 (1973).

Disolver un jurado sin tener el juez autorización legal para ello equivale a una absolución del acusado. *Lugo v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 244 (1970).

Los incidentes durante el juicio señalados por el acusado no justificaban la disolución del jurado a base de que existió una inferencia perjudicial al acusado derivada del resultado del juicio anterior a que este fue sometido-incidentes en los cuales intervino oportunamente el juez transmitiendo las adecuadas instrucciones para evitar cualquier concebible perjuicio al acusado-maxime cuando la defensa había mencionado el juicio anterior en varias ocasiones y no se aludió expresamente al fallo recaído. *Pueblo v. Quiñones Ramos*, 99 D.P.R. 1 (1970).

No constituye un error que justifique el que el juez sentenciador proceda a disolver el jurado el hecho de que el fiscal en la exposición de su teoría al jurado expresara que "Ante ustedes desfilará prueba de que el testigo, o que el agente Gerardo Mendoza murió violentamente el 19 de febrero ..." cuando el propósito del fiscal fue explicar al jurado la razón por la cual dicho testigo no compareció a declarar, a pesar de que aparecía como testigo al dorso de la acusación, maxime cuando el juez sentenciador inmediatamente instruyó al jurado que no tomara en cuenta, en forma alguna, la expresión que hizo el fiscal en cuanto a como fue que ocurrió la muerte de dicho testigo, instrucción que repitió en sus instrucciones finales. *Pueblo v. López Camacho*, 98 D.P.R. 700 (1970).

No procede ordenar la disolución de un jurado por el fundamento de que el juez sentenciador le informó a dicho cuerpo que decretaba un receso hasta el próximo día porque el testigo de cargo que estaba siendo examinado había sufrido un ataque de histeria, maxime cuando quien llevó al conocimiento del jurado que el testigo sufría un *shock* fue la propia defensa. *Pueblo v. Ortiz Vazquez*, 98 D.P.R. 171 (1969).

No procede disolver un jurado, luego del fiscal hacer alusión durante la exposición de su teoría del caso a un hecho que el jurado no podía considerar para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, cuando el juez de instancia interviene prontamente e instruye al jurado que no debe tomar en

consideración las manifestaciones del fiscal, maxime cuando el acusado no demuestra que sufriera un dano positivo o que se hayan perjudicado sus derechos sustanciales ni menos que no haya tenido un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Calderon Rodríguez, 97 D.P.R. 261 (1969).

No abusa de su discreción un tribunal al permitir que en presencia del jurado se realice un experimento cuando el mismo solo se celebros para los efectos de demostrar la forma más simple y sencilla en que se pudieron haber unido ciertos elementos cuyos restos fueron hallados en el carro de la víctima en este caso. Pueblo v. Lebron López, 96 D.P.R. 274 (1968).

No abusa de su discreción un juez sentenciador al negarse a decretar la suspensión de la vista de un caso para la defensa tratar de conseguir alguna prueba para impugnar el testimonio de un agente encubierto, cuando el abogado defensor no puede indicarle al tribunal que prueba iba a traer ni puede asegurarle a dicho juez que iba a traer dicho tipo de prueba. Pueblo v. Robles Rivera, 95 D.P.R. 587 (1967).

En ausencia de una demostración de que un juez sentenciador abusara de su discreción, no se alterara la negativa del magistrado a celebrar una inspección ocular, maxime cuando el juez sentenciador conocía el sitio donde ocurrieron los hechos. Pueblo v. Robles Rivera, 95 D.P.R. 587 (1967).

No procede declarar con lugar una moción de la defensa para la disolución del jurado cuando en la prueba no hay suficiente base para concluir que se violaron las Reglas 132 y 133. Pueblo v. Malave Sánchez, 95 D.P.R. 395 (1967).

Cae dentro de la sana discreción del juez juzgador en un **procedimiento criminal**, al plantearsele por el Ministerio Público una solicitud para la disolución del jurado que entiende en un caso, el determinar, de un lado, la garantía de la integridad del proceso y la justicia e imparcialidad del fallo para una y otra parte, y del otro, la garantía Constitucional que acompaña a todo individuo de no ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, luego de la debida sustanciación por métodos judiciales de los hechos y el establecer aquellos que sean ciertos. Pinero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204 (1967).

Impugnada por el Ministerio Público la competencia de dos jurados para dictar un fallo justo e imparcial una vez ha comenzado el juicio, si la posición que asume la defensa puede razonablemente hacer creer al juez juzgador que no hacía falta sustanciar con prueba las imputaciones del fiscal contra un jurado específico, dicho juez puede ordenar la sustitución de dicho jurado sin sustanciar mediante métodos judiciales las imputaciones del fiscal a dicho jurado. Pinero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204 (1967).

Disuelto un jurado por el juez sentenciador a petición del Ministerio Público, la cuestión a resolver en apelación es si, tomando en conjunto todos los hechos y circunstancias que se alega justifican la disolución del jurado-inclusive entre ellos una imputación no sostenida del fiscal contra uno de los jurados que permanecía sirviendo y el efecto en ese jurado-asi como la repercusión pública que esa y las demás imputaciones del fiscal tuvieron en la prensa en forma destacada, asi como todas las demás eventuales consecuencias de esos hechos en el proceso, dicho juez tuvo o no base racional en el record para actuar disolviendo el jurado en evitación, a su mejor entender, de un extravío de la justicia. Pinero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204 (1967).

Al resolver una moción del fiscal para la disolución del jurado en un caso **criminal**, el juez juzgador debe resolver dicha moción con sentido realista a la luz de sus particulares circunstancias y hechos. Pinero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204 (1967).

Presentada por el Ministerio Público una moción para la disolución del jurado en un caso **criminal**, el juez

juzgador esta en mejor condición que el Tribunal Supremo de determinar el efecto que sobre la integridad o pureza de la justicia puedan tener determinados acontecimientos señalados por el fiscal. *Pinero Agosto v. Tribunal Superior*, 94 D.P.R. 204 (1967).

Declarada con lugar una solicitud del Ministerio Público disolviendo un jurado, el Tribunal Supremo no sustituirá su propio criterio por el del juez juzgador cuando existe base racional en el record para su actuación, y la diferencia de criterio entre su juicio y el del tribunal ad quem sería una diferencia solo de grado en la apreciación de los factores que justifican la decisión del juez juzgador. *Pinero Agosto v. Tribunal Superior*, 94 D.P.R. 204 (1967).

Un juicio puede discontinuarse y disolverse el jurado sin el consentimiento del acusado o aun ante su objeción, sin que por ese solo hecho un segundo enjuiciamiento por el mismo delito quede al margen de la garantía Constitucional contenida en el art. II, sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando ocurran circunstancias en que los fines de una justicia sustancial no puedan lograrse y exista una manifiesta necesidad de así hacerlo, de modo que no se derroten los mejores fines de la justicia. *Pueblo v. Arteaga Torres*, 93 D.P.R. 148 (1966).

La discontinuación de un juicio debe ser producto de una sana y juiciosa discreción, debiendo en tribunal ejercer dicha facultad con la mayor cautela, y ante una necesidad manifiesta de así hacerlo. *Pueblo v. Arteaga Torres*, 93 D.P.R. 148 (1966).

La actuación de un juez disolviendo un jurado antes de que rinda veredicto por la razón de que inadvertidamente le había pasado una acusación en que estaban incluidos los delitos subsiguientes cometidos por dicho acusado-actuación que en el ejercicio de su sana discreción creyó danina al apelante- no es una acción caprichosa, injustificada o innecesaria que constituya una violación al precepto Constitucional que prohíbe a una persona ser puesta en riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito. *Pueblo v. Arteaga Torres*, 93 D.P.R. 148 (1966).

2. Nuevo juicio.

De ordinario, cuando se decreta un *mistrial* a petición de la defensa ello equivale a una renuncia al derecho Constitucional del acusado a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. *Pueblo v. Suarez Fernández*, 116 D.P.R. 842 (1986).

Si se decreta un *mistrial* como resultado de una conducta intencional del fiscal para obligar a la defensa a solicitarlo, surge un impedimento para un nuevo proceso bajo la cláusula Constitucional de doble exposición. *Pueblo v. Suarez Fernández*, 116 D.P.R. 842 (1986).

Para que pueda validamente someterse al acusado a un segundo juicio, la disolución del jurado debe ser por error o irregularidad grave, perjudicial, sustancial e insubsanable. *Pueblo v. Guzmán Camacho*, 116 D.P.R. 34 (1984).

El asesinato del fiscal, representante del Ministerio Público, para los días en que se celebra el juicio constituye justa causa para disolver el jurado sin impedimento de un nuevo juicio bajo la cláusula Constitucional de doble exposición. *Pueblo v. Guzmán Camacho*, 116 D.P.R. 34 (1984).

Celebrado un juicio sin que el jurado se pueda poner de acuerdo, procede la celebración de un segundo juicio, pero si en el segundo tampoco el jurado puede ponerse de acuerdo, no procede la celebración de un tercer juicio. *Pueblo v. Contreras López*, 105 D.P.R. 390 (1976).

En esta jurisdicción no rige la doctrina a los efectos de que si un jurado no se puede poner de acuerdo en el primer juicio, no procede la celebración de un segundo juicio. *Pueblo v. Contreras López*, 105 D.P.R.

390 (1976).

Un tribunal tiene el deber de proteger a un acusado contra la eventualidad de que el Estado continúe celebrándole juicios en su contra por tiempo indefinido-con las molestias y contratiempos que ello conlleva-sometiéndole al riesgo de que en alguna ocasión un jurado pueda rendir un veredicto condenatorio sin que la prueba razonablemente lo justifique. *Plard Fagundo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 444 (1973).

La disolución de un jurado por no poderse poner de acuerdo, como regla general, no impide la celebración de otro juicio. *Plard Fagundo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 444 (1973).

Solo podrá celebrarse un segundo y último juicio contra un acusado por un mismo delito cuando el jurado no pueda ponerse de acuerdo en el primero. *Plard Fagundo v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 444 (1973).

No puede procesarse por segunda vez a un acusado por el mismo delito cuando el juez disuelve el jurado en el primer caso, a menos que el acusado hubiere consentido a la disolución, o que la misma procediese por concurrir las circunstancias que se enumeran bajo esta regla. *Lugo v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 244 (1970).

El segundo juicio por jurado celebrado después que el primer jurado fue disuelto por el tribunal a tenor del inciso (d) de esta regla por haber pasado inadvertidamente al jurado una acusación en que estaban incluidos delitos subsiguientes-disolución favorable al acusado-no viola el derecho establecido por el art. II, sec. 11 de la Constitución de no ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. *Pueblo v. Arteaga Torres*, 93 D.P.R. 148 (1966).

Regla 145. JURADO; VEREDICTO; SU RENDICION.

Después que el jurado se hubiere puesto de acuerdo sobre el veredicto, regresará a la sala de sesiones bajo la custodia del alguacil, y el presidente de dicho jurado entregará el veredicto por escrito al secretario de la sala para que éste lo entregue al tribunal. El tribunal preguntará al presidente del jurado si dicho veredicto es el veredicto del jurado y cuántos jurados votaron en favor del mismo. Si el presidente del jurado respondiere en la afirmativa, y el veredicto rendido fuere conforme a ley, el mismo será aceptado por el tribunal y leído por el secretario.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 280 y 291; Fed. R. Crim. P. 31(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1147; Código modelo, R. 335.

Contrarreferencias.

Promesa de un jurado, Véase la sec. 4441 del Título 33.

Reglas de conducta y eficiencia de alguaciles, Véase Ap. VI del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

No se alterará el veredicto unánime del jurado cuando la prueba desfilada en el tribunal de instancia sea robusta, contundente, convincente, este ausente de cualquier contradicción sobre los hechos esenciales del caso y sostenga fuera de toda duda razonable la convicción del apelante. *Pueblo v. Castro Muñoz*, 118 D.P.R. 625 (1987).

De ordinario, no constituye error que de lugar a la revocación de una convicción el mero hecho de que el

jurado que intervenga en un proceso **criminal** en particular emita, respecto a diferentes pliegos acusatorios, veredictos que no guardan la más absoluta consistencia logica entre si. Pueblo v. Caban Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).

El Tribunal Supremo no debe intervenir con la función aquilatadora de credibilidad realizada por el jurado en un juicio **criminal**. Pueblo v. Suarez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986).

No puede atacarse el veredicto de un jurado bajo la premisa de prejuicio implícito, sino que debe demostrarse la existencia de prejuicio real. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 D.P.R. 154 (1982).

En esta jurisdicción corresponde al jurado, no al tribunal, rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según aquilate la prueba y determine los hechos. Pueblo v. Gonzalez Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

Es nulo un segundo veredicto contra un acusado por infracción de la sec. 4006 del Título 33 cuando el jurado había dictado un primer veredicto de culpabilidad contra dicho acusado por el delito de homicidio involuntario y dicho primer veredicto había sido aceptado por el juez. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

Un juez crea un estado de derecho irreversible en un caso **criminal** cuando recibe un veredicto, se entera de su contenido, lo pasa a la secretaria de sala para su lectura y dicta fallo de convicción, terminando el magistrado de esa manera el juicio. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

Aceptado por un juez un veredicto, ello pone punto final a la intervención del jurado en el proceso y cierra la función deliberativa del jurado. Dicha aceptación excluye ulterior riesgo para el acusado. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

Denegada por el juez una instrucción especial sobre el posible delito de homicidio involuntario estatuido en la sec. 4005 del Título 33-bajo una acusación por causar la muerte a un ser humano al conducir con imprudencia crasa o temeraria un vehículo de motor-si el jurado trae un veredicto por delito de homicidio involuntario y el juez lo acepta, dicha aceptación-que pone fin al proceso deliberativo del jurado-constituye una reconsideración implícita de su resolución denegatoria de la instrucción especial y equivale a sostener la facultad estimativa del jurado en la adjudicación del grado o clase de negligencia en que incurrió el acusado. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

No se requiere en esta jurisdicción que el veredicto de un jurado sea rendido por unanimidad. Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897 (1969).

Aun cuando, como regla general, es nulo un veredicto rendido por un jurado cuando han existido comunicaciones privadas entre los miembros del jurado y terceras personas o testigos o con el oficial a cargo del jurado, dicha norma no es aplicable cuando las circunstancias demuestran que la comunicación entre un jurado y el juez sentenciador se refería a un asunto personal de aquel, que nada tenía que ver con ningún aspecto del caso, de manera que no pudo perjudicar al acusado. Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 D.P.R. 897 (1969).

Al rendir su veredicto, un jurado no está obligado por ley a llenar un formulario determinado, siendo dicho veredicto suficiente si el presidente de dicho cuerpo entrega el veredicto por escrito. Pueblo v. Arroyo Ramirez, 96 D.P.R. 576 (1968).

Es válido un veredicto de culpabilidad de un jurado-estando nueve de sus miembros conformes con el mismo-aun cuando uno de sus miembros se abstenga de votar. Pueblo v. Calder, 96 D.P.R. 128 (1968).

Solicitada la comprobación de un veredicto, dicha solicitud queda cumplida al preguntar el juez sentenciador a cada jurado si le constaba que concurrieron por lo menos nueve de ellos para condenar, respondiendo en la afirmativa todos los jurados. Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60 (1968).

El veredicto debe ser la expresión verdadera de la opinión de los miembros del jurado, por mayoría, libre de coerción o influencias extrañas, sin que medie error o sorpresa. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

El hecho de que el juez sentenciador no preguntara específicamente cuantos jurados concurrían en los respectivos veredictos, limitándose a preguntar el resultado de la votación en terminos de tanto por ciento del número total, no anula los veredictos dictados contra el acusado, vistas las instrucciones del magistrado al jurado, maxime cuando la defensa no levanto objeción alguna sobre el particular en el tribunal inferior, levantando la cuestión por primera vez en apelación. Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23 (1963).

Veanse también las anotaciones bajo la Sec. 11, Art. II de la Constitución.

Regla 146. JURADO; VEREDICTO; FORMA.

El veredicto declarará al acusado "culpable" o "no culpable" o "no culpable por razón de locura". No será necesario conformarlo estrictamente a esta terminología pero la intención del jurado deberá constar claramente. Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con distintos grados o a un delito con otros delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor, el veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado.

Si el jurado tuviere que determinar la condición de subsiguiente del delito imputado y el veredicto fuere de culpabilidad, el mismo expresará además si la alegación sobre convicción anterior es o no cierta.

En todo caso el veredicto expresará el número de los miembros del jurado que concurrieron.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 283 a 285; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1151, 1157 y 1158; Código modelo, Rs. 338 y 339.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.

1. En general.

Acusado un sospechoso de los delitos de robo, violación y asesinato en primer grado por ciertos hechos ilegales ocurridos, no son inconsistentes los veredictos rendidos por el jurado en el correspondiente proceso al absolver al acusado del delito de robo y declararlo culpable de cometer los delitos de violación y asesinato en primer grado. Pueblo v. Millan Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

De ser clara la intención de un jurado, no es necesario que este conforme el veredicto a la terminología usada en esta regla. Pueblo v. Martínez Rios, 109 D.P.R. 303 (1979).

Es valido un veredicto que expresa solamente que el acusado es inocente o culpable, si el sospechoso fue debidamente notificado de la acusación y se le permitio hacer una defensa en el juicio que satisface los requisitos del debido **procedimiento** de ley. Pueblo v. Martínez Rios, 109 D.P.R. 303 (1979).

No es necesario que un veredicto exprese con precisión tecnica la correspondiente infracción de la ley si expresa claramente que el jurado encontro al acusado culpable del delito imputadole por el fiscal. Pueblo v. Martínez Rios, 109 D.P.R. 303 (1979).

Es suficiente un veredicto que exprese, cuando proceda, que se declara al acusado culpable del delito imputado, no siendo necesario para su validez usar expresiones más tecnicas. Pueblo v. Martínez Rios, 109 D.P.R. 303 (1979).

Es valido un veredicto rendido aun cuando en el mismo no se exprese la disposición legal por cuya violación se declara culpable al acusado y no escriba en letras el número de jurados que voto a favor de la culpabilidad del acusado, maxime cuando el tribunal motu proprio solicito al **presidente del jurado**, en corte abierta, que escribiese el número en letras y las partes no objetaron este **procedimiento** para corregir dicho error de forma. Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969).

Un veredicto rendido no es el resultado de coacción o intimidación del jurado por parte del juez sentenciador por el hecho de que dicho magistrado en reiteradas ocasiones le pidiera al jurado que hiciera un esfuerzo para llegar a un veredicto, cuando el juez le aclaro-una vez este le informara que estaba 8 a 4 sin expresar si era para condenar o absolver-que el veredicto a rendirse debia ser el resultado de una ponderación serena de la prueba presentada y admitida y que el factor tiempo que los jurados tomaran para discutir no debia influir en sus animos. Pueblo v. Erasquin Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

Bajo una acusación de agresión para cometer asesinato, un jurado puede traer, en lugar de un veredicto totalmente absolutorio o condenatorio de ese delito, un veredicto de agresión para cometer homicidio o de acometimiento y agresión grave. Pueblo v. Cruz Collazo, 95 D.P.R. 651 (1968).

No es final un veredicto hasta tanto sea aceptado por el tribunal sentenciador. Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R. 597 (1967).

Un tribunal no viene obligado a aceptar un veredicto de hurto menor cuando dicho veredicto no se ajusta a la prueba y a la ley. Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R. 597 (1967).

Sentenciado un acusado de un delito en grado subsiguiente se dejara sin efecto la sentencia dictada y se devolviera el caso para que se dicte otra ajustandose a las penas prescritas para el delito imputado en la acusación, sin considerar la alegación de subsiguiente. Pueblo v. Soto Rios, 95 D.P.R. 483 (1967).

No es propio en ley que pasen a un jurado las alegaciones de la comisión de otros delitos contenidas en la acusación para demostrar reincidencia cuando, por haberse aceptado el hecho, no hay controversia alguna ante el jurado sobre el particular. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

Cuando tanto bajo la teoria del fiscal como bajo la teoria de la defensa, asi como de acuerdo con la prueba de ambas partes, en un caso de robo solo procede un veredicto de culpable o no culpable de dicho delito, el juez sentenciador no viene obligado a transmitir al jurado instrucciones sobre ninguno de los delitos menores comprendidos dentro del delito de robo. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Un veredicto debe ser la expresión verdadera de la opinion de los miembros del jurado, adoptada por mayoría, libre de coerción o influencias extranas, sin que medie error o sorpresa. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

Se examinan las expresiones del juez sentenciador y del presidente del jurado en este caso-después que la causa le había sido sometida al jurado y durante el curso de sus deliberaciones-para concluir que el jurado entendió perfectamente que su misión era juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado, independientemente de cualquier clemencia que pudiera ejercer el juez al imponer la pena. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

Un veredicto de "culpable del delito de ataque para cometer asesinato" demuestra que el jurado entendió que el acusado no tuvo motivos fundados para creer que se encontraba en inminente peligro de muerte o de recibir grave dano corporal, o que su actuación respondió a una legítima defensa de morada. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

Cuando un veredicto es claro y sus palabras no dejan lugar a dudas respecto a la intención del jurado, cualquier expresión adicional sobre la existencia de circunstancias atenuantes, o con una recomendación de clemencia, no puede considerarse como elemento integrante del veredicto. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

Un tribunal puede considerar o hacer caso omiso de una recomendación de clemencia, o de cualquier otra recomendación, que haga el jurado. Pueblo v. Rosario Centeno, 90 D.P.R. 874 (1964).

El veredicto de homicidio voluntario en este caso no es nulo por ser alegadamente contrario a la prueba a la cual dio crédito el jurado. Pueblo v. Iturrino De Jesus, 90 D.P.R. 706 (1964).

2. Constitucionalidad.

No constituye una violación del debido **procedimiento** de ley garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el hecho de que el veredicto condenatorio de un acusado no sea por unanimidad sino por una mayoría de no menos de nueve votos. Pueblo v. Martínez Ríos, 109 D.P.R. 303 (1979); Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974); Pueblo v. Girau, 102 D.P.R. 176 (1974); Pueblo v. Concepción Díaz, 101 D.P.R. 279 (1973).

Regla 147. JURADO; VEREDICTO; CONVICCIÓN POR UN DELITO INFERIOR.

El acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa; o de cualquier grado inferior del delito que se le imputa; o de tentativa de cometer el delito que se le imputa o cualquier otro delito necesariamente comprendido en él, o de cualquier grado que el mismo tenga, si tal tentativa constituye, por sí misma, un delito.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 286; Fed. R. Crim. P. 31(c); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1159; Código modelo, R. 348.

ANOTACIONES

1. En general.

En un caso donde algunos de los elementos del delito por el cual se acusa también constituyen un delito menor, el acusado, si la evidencia lo justifica, tiene derecho a una instrucción que permita un veredicto por un delito menor. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976); Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 D.P.R. 17 (1973).

La necesidad de instrucciones al jurado referentes a la posibilidad de veredictos por delitos inferiores

necesariamente comprendidos en el delito mayor imputado unicamente surge cuando la prueba en el caso lo justifica. Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

Bajo una acusación por ataque para cometer asesinato, un jurado puede traer un veredicto de acometimiento y agresión grave. Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970).

Un jurado puede declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa. Pueblo v. Colón Rosa, 96 D.P.R. 601 (1968).

Tanto en el delito de acometimiento y agresión grave como en el delito de agresión con intención de cometer asesinato, la intención de infligir dano corporal son elementos subjetivos mentales que se deducen de todos los hechos probados y circunstancias en que se perpetra la agresión. Pueblo v. Colón Rosa, 96 D.P.R. 601 (1968).

Un juez no viola las disposiciones de esta regla cuando es improcedente en un caso de robo transmitir instrucciones sobre otros delitos menores incluidos en el delito de robo. Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964).

Regla 148. JURADO; VEREDICTO; RECONSIDERACIÓN ANTE UNA ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY.

Si al rendirse un veredicto de culpabilidad el tribunal considerare que el jurado se ha equivocado en la aplicación de la ley, el juez que lo presida podrá explicar al jurado sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el veredicto. Si después de esto se rindiere el mismo veredicto, éste será aceptado por el tribunal. Nada de lo aquí dispuesto será aplicable a un veredicto absolutorio el cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 288 y 289; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1161; Código modelo, R. 350.

ANOTACIONES

1. En general.

En casos de coacusados juzgados conjuntamente no es obligatoria la consistencia de los veredictos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

Antes que un veredicto sea aceptado, un juez, al amparo de esta regla y la 149 tiene facultad para ordenar al jurado que reconsidere un veredicto erroneo producto de una equivocación del jurado al aplicar la ley o un veredicto defectuoso que no permita entender con razonable claridad la decisión del jurado respecto a culpar o absolver. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

Regla 149. JURADO; RECONSIDERACIÓN DE VEREDICTO DEFECTUOSO.

Si el veredicto fuere tan defectuoso que el tribunal no pudiese determinar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser convicto de acuerdo con la acusación, o no pudiese determinar en qué cargo o cargos el jurado quiso absolver o condenar al acusado, el tribunal podrá instruir al jurado para que reconsidere dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el jurado persistiere en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el tribunal dictará un fallo absolutorio.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 288; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1161; Código modelo, R. 352.

ANOTACIONES

1. En general.

Antes de que el veredicto sea aceptado, el juez puede ordenar al jurado que reconsidere un veredicto erróneo o defectuoso. Cuando no se trata de un veredicto defectuoso ni erróneo es improcedente enviar al jurado a deliberar por segunda vez; una vez se acepta el veredicto se ha finalizado el proceso judicial. Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 D.P.R. 1064 (1993).

Antes que un veredicto sea aceptado, un juez, al amparo de esta regla y la 148 tiene facultad para ordenar al jurado que reconsidere un veredicto erróneo producto de una equivocación del jurado al aplicar la ley o un veredicto defectuoso que no permita entender con razonable claridad la decisión del jurado respecto a culpar o absolver. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237 (1976).

Es válido un veredicto en el cual, aunque se expresaba el grado, se omitió especificar el nombre del delito del cual fue declarado culpable el acusado, una vez el presidente del jurado-por indicaciones del juez a los efectos de que debía completarse el veredicto por haber un error clerical en el mismo-subsana el formulario de veredicto en sala, intercalando el nombre de dicho delito, máxime cuando una vez hecha la inserción correspondiente de dicho formulario, el juez de instancia inquiere si el veredicto representaba el acuerdo de la mayoría del jurado y este último contesta en la afirmativa. Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964).

Regla 150. JURADO; VEREDICTO PARCIAL.

El jurado podrá rendir un veredicto o tantos veredictos como fueren necesarios respecto a uno o más de los cargos de la acusación o a uno o más de los acusados incluidos en la misma, sobre cuya culpabilidad o inocencia estuviere de acuerdo. Si el jurado no pudiere llegar a ningún acuerdo respecto a cualquier cargo o acusado, el tribunal podrá ordenar un nuevo juicio en cuanto a dicho cargo o a dicho acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 287; Fed. R. Crim. P. 31(b); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1160; Código modelo, Rs. 347 y 349.

ANOTACIONES

1. En general.

El hecho de que un jurado se incline a favorecer a un imputado de delito en cuanto a algunos de los cargos, y rinda veredictos de culpabilidad por un delito menor incluido o de inocencia no anula el veredicto rendido por el delito mayor ni la reducción de este al nivel de los demás. Pueblo v. Gomez Nazario, 121 D.P.R. 66 (1988).

En un proceso **criminal** donde se ventilan conjuntamente contra el acusado cuatro acusaciones por homicidio involuntario perpetrado por medio de un automóvil, la inconsistencia de los veredictos rendidos-exonerando el jurado al acusado en tres casos y declarándolo culpable en uno-no invalida el veredicto de culpabilidad dictado contra el acusado. Pueblo v. Cortes Calero, 99 D.P.R. 679 (1971).

Ventiladas conjuntamente acusaciones distintas ante un jurado y ante un tribunal de derecho, cada uno de

ellos es un juzgador independiente del otro sobre el delito o los delitos particulares que estan bajo su jurisdicción, no teniendo que existir una perfecta correspondencia entre los veredictos del jurado y los fallos del tribunal de derecho. Pueblo v. Feliciano Rivera, 99 D.P.R. 589 (1971).

El Estado no viene obligado a demostrar consistencia logica entre los veredictos de culpabilidad de un jurado en cuanto a unos cargos y los de no culpabilidad en cuanto a otros, de una misma acusación o de acusaciones distintas que se le someten conjuntamente. Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302 (1970).

Regla 151. JURADO; COMPROBACIÓN DEL VEREDICTO RENDIDO.

Cuando el jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o a instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado en cuanto a cada miembro del jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinare que el veredicto no fue rendido, al menos, por nueve miembros del jurado, se le podrá ordenar al mismo retirarse a continuar sus deliberaciones o podrá ser disuelto.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 291; Fed. R. Crim. P. 31(d).

ANOTACIONES

1. En general.

El proposito de esta regla es garantizarle al acusado que el veredicto anunciado es el verdadero acuerdo del jurado y que ninguno de los jurados ha sido coaccionado. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971).

Un tribunal tiene discreción en cuanto a la forma de hacer la comprobación de un veredicto rendido por un jurado. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971).

La comprobación del veredicto rendido autoriza a la parte interesada a inquirir de cada uno de los jurados si el veredicto rendido representa el sentir del jurado, más esta regla no autoriza a que se divulgue como voto cada uno de los jurados. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971).

Es esta jurisdicción, donde el veredicto se rinde por mayoría, es de suma importancia mantener en secreto como voto cada miembro de un jurado. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971).

Regla 151.1. JUICIO; CONFESIÓN DEL ACUSADO.

En los juicios por jurado, todas las cuestiones de hecho y de derecho referentes a una confesión del acusado serán oídas y resueltas exclusivamente por el juez, en ausencia del jurado, debiendo el juez admitir en evidencia o rechazar dicha confesión. Esta disposición no tendrá el efecto de impedir que el acusado presente al jurado, y que la parte contraria la refute, evidencia pertinente relativa al peso o credibilidad de la confesión, y a las circunstancias bajo las cuales la confesión fue obtenida.

(Adicionada en Junio 30, 1964, ef. 60 días después de Mayo 31, 1965.)

Notas Importantes

ANOTACIONES

1. En general.
2. Admisibilidad en evidencia.

1. En general.

Hecha declaración de culpabilidad por un acusado, las alegaciones contenidas en un simple pliego acusatorio se convierten en hechos incontrovertidos ya probados, los cuales el juzgador no puede ignorar. *Pueblo v. Felicier Villalongo*, 105 D.P.R. 600 (1977).

La renuncia del sospechoso a los derechos que la ley le concede fue inteligente y voluntaria y basada en el conocimiento de todos sus derechos Constitucionales, teniendo dicho sospechoso, aun sin saber leer y escribir, la capacidad necesaria para entender plenamente el alcance de las advertencias que se hicieron y sobre el significado y probables consecuencias de su confesión. *Pueblo v. Nieves Ramos*, 101 D.P.R. 531 (1973).

Manifestaciones voluntarias de un sospechoso hechas a parientes, amigos o conocidos no tienen que estar precedidas de advertencia legal alguna para ser admisibles en evidencia contra el en el juicio que se le celebre. *Pueblo v. Rodríguez Martínez*, 100 D.P.R. 805 (1972).

El Estado no puede obviar la norma de derecho establecida en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), utilizando o haciendo intervenir a una persona particular en el interrogatorio de un sospechoso en una etapa critica de la investigación del delito cometido. *Pueblo v. Colón Mejias*, 99 D.P.R. 14 (1970).

Es necesario hacer las advertencias requeridas a un sospechoso para garantizar sus derechos contra la autoincriminación y de asistencia de abogado, una vez se ha colocado a este bajo arresto, aunque no se encuentre en un cuartel de la Policía, si esta efectivamente restringido en su libertad. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 97 D.P.R. 199 (1969).

El concepto "custodia policiaca"-a los efectos de la doctrina elaborada en *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964), y *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436; 86 S. Ct. 1602; 16 L. Ed. 2d 694; 10 A.L.R.3d 974 (1966), que fuera adoptada en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965)-se define para incluir no solo la detención en el cuartel del sospechoso, sino también cualquier otra detencion-aunque no sea por la comisión del delito de que se le sospecha y por el cual posteriormente se procesa-incluyendo la detención en el propio hogar del acusado, al interrogarsele mientras este se encuentra incomunicado. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 97 D.P.R. 199 (1969).

En Puerto Rico, para el 14 de agosto de 1962, no se habia establecido el requisito de informar a todo acusado de su derecho a asistencia de abogado en etapas anteriores al proceso. El no hacer tal advertencia, para dicha fecha, era solo uno de muchos factores a considerarse por el jurado al pasar sobre la voluntariedad de una confesión. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

Se entiende por "interrogatorio bajo custodia" aquel iniciado por oficiales encargados de hacer cumplir la ley después que una persona es puesta bajo custodia o en alguna otra forma privada de su libertad de accion. *Pueblo v. Beltran Santiago*, 97 D.P.R. 92 (1969).

No es perjudicial a un acusado el hecho de que una moción de inhibición se discuta el mismo dia del juicio en presencia del jurado prospectivo, cuando dicha moción se radico en el momento mismo de ser llamado el caso para juicio y la defensa no utilizo los remedios para impedir que el jurado prospectivo estuviera presente en la discusión de dicha moción. *Pueblo v. Maldonado Dipini*, 96 D.P.R. 897 (1969).

La defensa de falta de asistencia de abogado para el acusado en la etapa investigativa del delito por el cual se le acusa, o la ausencia de la advertencia al acusado de ese derecho, no estaba disponible a un acusado cuyo juicio se le celebro en el año 1954. *Rodríguez Munoz v. Jefe Penitenciaria*, 94 D.P.R. 201 (1967).

A partir del 13 de junio de 1966-fecha en que se resolvió el caso de *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436; 86 S. Ct. 1602; 16 L. Ed. 2d 694; 10 A.L.R.3d 974 (1966)-es necesario en esta jurisdicción que, durante el proceso investigativo de un delito, a un sospechoso no solo se le informe de su derecho a consultar con abogado antes de declarar y a tener asistencia de abogado durante el interrogatorio, sino que, además, es necesario que se le informe de su derecho a ser provisto de asistencia de abogado en caso de que no este en condiciones de contratar o procurarse los servicios de un letrado. *Pueblo v. Guadalupe Rosa*, 94 D.P.R. 190 (1967).

La defensa de que al acusado no se le advirtiera, antes de que declarara en el proceso investigativo del delito por el cual se le acusa, de su derecho a que el Estado le proveyera de asistencia legal, no puede ser levantada por un acusado cuyo juicio se celebró con anterioridad al 13 de junio de 1966. *Pueblo v. Guadalupe Rosa*, 94 D.P.R. 190 (1967).

Al determinar si se ha violado o no el derecho de un acusado a no inculparse, lo importante no es que surjan del documento que contiene la confesión del acusado las garantías ofrecidasle para evitar que se inculpe sino, más bien, si en verdad y como cuestión de realidad, la confesión quedó rodeada de todas dichas garantías y, como consecuencia, fue hecha voluntariamente por el acusado con el conocimiento pleno de todos sus derechos Constitucionales. *Pueblo v. Guadalupe Rosa*, 94 D.P.R. 190 (1967).

La doctrina establecida en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964), esta disponible solamente para personas cuyos juicios empezaron después del 22 de junio de 1964-fecha de esa decisión-y las normas establecidas en el caso de *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436; 86 S. Ct. 1602; 16 L. Ed. 2d 694; 10 A.L.R.3d 974 (1966), las cuales se habían establecido previamente en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), están disponibles solamente para personas cuyos juicios no se habían comenzado el 26 de octubre de 1965, día en que se resolvió el citado caso de *Rivera Escute*. *Pueblo v. Adorno Lorenzana*, 93 D.P.R. 788 (1966), certiorari denegado, *Lorenzana v. Puerto Rico*, 386 U.S. 1040; 87 S. Ct. 1499; 18 L. Ed. 2d 609 (1967), reconsideración denegada, 387 U.S. 949; 87 S. Ct. 2082; 18 L. Ed. 2d 1341 (1967).

Constituye un grave error de derecho de tal naturaleza perjudicial al acusado que justifique la revocación de la sentencia contra el dictada, el que un juez trasmita una instrucción a los efectos de que el testimonio de un testigo de cargo relativo a las manifestaciones del acusado sobre el delito por el cual se le juzgaba era una confesión oral de dicho acusado, cuando en ley dichas manifestaciones no constituían una confesión. *Pueblo v. Meléndez Santiago*, 93 D.P.R. 770 (1966).

No constituye una confesión oral de haber cometido el delito de asesinato en primer grado, el admitir el acusado que ha dado muerte a dos personas, ya que dicha admisión no implica que se admita que esas muertes se ocasionaron con malicia, deliberación y premeditación. *Pueblo v. Meléndez Santiago*, 93 D.P.R. 770 (1966).

Corresponde al juez y no al jurado resolver la controversia de hecho respecto a la voluntariedad de la confesión del acusado, dentro de las exigencias Constitucionales del debido proceso de ley. *Pueblo v. Figueroa García*, 91 D.P.R. 729 (1965).

En derecho penal, una confesión es una admisión o manifestación por una persona acusada de un crimen al efecto de que es culpable del mismo; esto es, una confesión es un reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado. *Pueblo v. Guido Maya*, 90 D.P.R. 821 (1964).

Un jurado dirime en contra del acusado el conflicto de la prueba sobre si su confesión fue o no voluntaria-cuando la única prueba de cargo es el establecimiento del *corpus delicti* y la confesión del acusado-al

declararlo culpable del delito imputadole. Pueblo v. Martínez Rivera, 90 D.P.R. 163 (1964).

No constituye error revocable el hecho de que el juez de instancia permita que se lea al jurado en parte una confesión escrita, en la cual el acusado hace referencia a manifestaciones que hiciera en el cuartel de la Policía-habiendo el juez anteriormente negado la admisión en evidencia de la confesión oral hecha por el acusado en el cuartel sobre los mismos extremos-cuando: (a) las manifestaciones forman parte de la confesión escrita del acusado admitida como una confesión voluntaria; (b) el propio acusado fue quien llevo a conocimiento del jurado el hecho de que el había aceptado en el cuartel de la Policía la comisión del delito imputadole, y (c) el juez en sus instrucciones al jurado limito el alcance de esa evidencia a los fines de determinar si la confesión escrita había sido coercitivamente. Pueblo v. Martínez Rivera, 90 D.P.R. 163 (1964).

Cuando un juez-en ausencia del jurado-llega a la conclusión de que es contradictoria la prueba ofrecida por el fiscal y la defensa en cuanto a la voluntariedad de una confesión escrita del acusado, su deber es someter la cuestión a los jueces de los hechos. Pueblo v. Couret Martínez, 89 D.P.R. 57 (1963).

Examinadas las dos declaraciones juradas prestadas por el acusado-la primera firmada por el y admitida sin oposición de la defensa y la segunda sin firma, y la cual no fue admitida por el tribunal sentenciador, (a) el contenido de la segunda declaración, traído al record por vía de admisión del acusado, a través del testimonio de un teniente de la Policía-por lo cual alega el acusado que fue obligado a incriminarse mediante su propio testimonio-no se aparta esencialmente de lo expresado por dicho acusado en su primera declaración, por lo que no se cometió el error apuntado; (b) el acusado no fue víctima de coacción psicológica por los hechos que ocurrieron antes de que se manifestara la segunda vez; (c) no se conculcaron los derechos Constitucionales del apelante, y (d) su condena, considerando el record en su integridad, fue el resultado de un proceso justo. Pueblo v. Figueroa Munoz, 88 D.P.R. 663 (1963).

2. Admisibilidad en evidencia.

Es admisible en evidencia una declaración jurada prestada por un sospechoso que no sabe leer ni escribir-y quien no tuvo asistencia de abogado al momento de prestarla-cuando el fiscal le advirtió sus derechos Constitucionales a mantenerse en silencio, a no incriminarse y a tener asistencia de abogado, tras lo cual dicho funcionario le informo que, en caso de no tener dinero para pagar a un abogado, el Estado se lo proveería. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973).

Es admisible en evidencia una confesión prestada por un sospechoso luego del fiscal advertirle de todos sus derechos Constitucionales, aunque no sea cada uno por separado, ni el sospechoso renuncie por separado a cada uno de dichos derechos. Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531 (1973).

Es admisible en evidencia una confesión extrajudicial de un acusado obtenida después que el fiscal le hizo las advertencias legales necesarias, de haberle conseguido un abogado un sábado por la tarde y, ante la insistencia del acusado de confesar, haberle procurado una conferencia con un segundo abogado, abogados que informaron al acusado dichos derechos y, luego de haber sido así informado, este haber insistido en declarar. Pueblo v. Rodríguez Martínez, 100 D.P.R. 805 (1972).

Es admisible en evidencia en un juicio celebrado con anterioridad al 26 de octubre de 1965-fecha en que se resolvió el caso de *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965)-una confesión voluntaria por escrito de un acusado hecha ante el fiscal en su oficina durante la etapa investigativa del delito, luego de recibir las advertencias de rigor-acusado que con anterioridad había confesado verbalmente, libre y espontáneamente, la comisión del delito a un policía inmediatamente después de ser este consumado-aun cuando a dicho acusado no se le hubiera advertido en momento alguno durante el proceso de investigación que tenía derecho a estar representado por abogado en esa etapa de los procedimientos. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232 (1971).

Las doctrinas establecidas en *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965), en cuanto a la admisibilidad en evidencia en un juicio **criminal** de la confesión de un acusado o sospechoso o las admisiones que le perjudiquen sustancialmente, obtenidas de el bajo custodia de la Policía u otra autoridad competente mientras se le interroga con el fin de obtener manifestaciones incriminatorias, rigen en esta jurisdicción a partir del 26 de octubre de 1965, fecha en que se resolvió dicho caso. Pueblo v. Vergara Vazquez, 99 D.P.R. 318 (1970).

Es admisible en evidencia en un juicio **criminal** celebrado el 6 de abril de 1965-a los efectos de establecer la corroboración del testimonio de la perjudicada en un caso de violación técnica-una declaración jurada prestada por el acusado ante el fiscal temprano en la mañana siguiente a los hechos delictivos cuando a dicho acusado se le hicieron todas las advertencias exigidas a dicha fecha en la etapa investigativa del delito, maxime cuando en ningún momento se cuestionó la espontaneidad de dicha declaración prestada por el acusado, ni se alegó que la misma estuviere en alguna forma viciada por engaño o coacción física o mental ejercida sobre el acusado, ni se probó que la falta de advertencia ni la ausencia de un abogado en la etapa investigativa del delito impidió un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Vergara Vazquez, 99 D.P.R. 318 (1970).

No son admisibles en evidencia en un proceso **criminal** las admisiones incriminatorias de un sospechoso hechas a una persona particular-el perjudicado en el caso-mientras dicho sospechoso estaba detenido en un cuartel de la Policía bajo la custodia e influencia de esta por cinco horas, cuando horas antes, y en el mismo cuartel, dicho sospechoso, sin que antes se le hubiera advertido de sus derechos Constitucionales a guardar silencio y no incriminarse y a estar asistido de abogado, le había confesado a dos policías que lo interrogaban la comisión del crimen, confesión que luego fue hecha y jurada ante el fiscal, quien no presentó dicho documento como parte de la prueba de cargo. Pueblo v. Colón Mejias, 99 D.P.R. 14 (1970).

Es admisible en evidencia en un **procedimiento criminal** una declaración jurada del acusado-que prácticamente equivale a confesar haber cometido el delito imputado-le prestada voluntariamente a requerimiento de un notario, la cual no fue prestada por dicho acusado mientras se encontraba privado de su libertad, bajo arresto o en alguna forma bajo la custodia de la autoridad policiaca ni mientras se le interrogaba para obtener manifestaciones incriminatorias con el propósito de enjuiciarse por la comisión de un delito. Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970).

Una manifestación incriminatoria hecha por un acusado sin estar asistido de abogado y sin que se le hicieran las advertencias legales pertinentes en cuanto a su derecho a permanecer en silencio no constituye fundamento para revocar una sentencia condenatoria cuando dicha manifestación no fue admitida en evidencia. Pueblo v. Torres Alvarado, 98 D.P.R. 178 (1969).

Es admisible en evidencia una declaración prestada por un acusado mientras se encontraba bajo custodia policiaca-declaración conteniendo manifestaciones exculpatorias que constituyan prueba circunstancial admisible de hechos reveladores de la conducta incriminatoria (*consciousness of guilt*) de dicho acusado-cuando: (a) aparece que se le hicieron las advertencias relativas a su derecho a no declarar y a que, en caso de hacerlo, sus manifestaciones podrían utilizarse en su contra, y (b) habiéndose celebrado el juicio en octubre de 1963, no eran necesarias las advertencias requeridas por *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965) y *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964), maxime cuando tampoco se impugna el carácter voluntario de la declaración, y hay ausencia total de intimaciones de coacción física y psicológica. Pueblo v. Rodríguez Matos, 98 D.P.R. 152 (1969).

El simple hecho, por sí solo, de que un acusado se encontraba bajo custodia al momento de prestar una declaración no hace inadmisibles en evidencia dicho documento. Pueblo v. Rodríguez Matos, 98 D.P.R.

152 (1969).

Son admisibles en evidencia-sin que previamente el policía le advierta de su derecho a no declarar y a tener ayuda de abogado-las manifestaciones hechas por un sospechoso al ser interrogado inicialmente en las investigaciones rutinarias de infracciones de tránsito que lleve a cabo la Policía en el lugar de los hechos, cuando el agente solo se orienta para descubrir la identidad del sospechoso. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 97 D.P.R. 199 (1969) distinguido de *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964); *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436; 86 S. Ct. 1602; 10 Ohio Misc. 9; 36 Ohio Op. 2d 237; 16 L. Ed. 2d 694; 10 A.L.R. 3d 974 (1966); *Pueblo v. Cruz Morales*, 96 D.P.R. 666 (1968).

Es voluntaria una confesión oral de un sospechoso hecha el 14 de agosto de 1962-y por lo tanto admisible en evidencia-cuando este la presta mientras estaba arrestado legalmente-ya que había causa probable para detenerlo por el delito de incendio malicioso, pues antes del arresto la Policía había relacionado al apelante con el incendio en cuestión-y no hubo demora indebida en llevar a dicho sospechoso ante un magistrado, habiendo el sospechoso ratificado dicha confesión por escrito ante un magistrado luego de recibir las advertencias que en dicha fecha se exigían por ley. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

Siendo legal el arresto de un sospechoso cuando la Policía tiene fundadas sospechas de que ha cometido el delito del cual luego se le acusa, es admisible en evidencia una confesión oral voluntaria y espontánea hecha por dicho sospechoso al momento de su arresto admitiendo el delito que luego se le imputara. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

La confesión oral del acusado a miembros de la Policía luego de su arresto legal-no obtenida durante el término de una demora habida entre su arresto y el momento en que se le llevo ante un juez de paz para ponerla por escrito-fue voluntaria y espontánea y, por lo tanto, admisible en evidencia. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 97 D.P.R. 133 (1969).

Es admisible en evidencia una admisión de una persona a un policía-a los efectos de que era el conductor de un automóvil encontrado volcado y caído en una cuneta-sin necesidad de que a la primera se le hiciera advertencia contra la autoincriminación cuando dicha persona no se encontraba bajo arresto o bajo la custodia del policía u otra autoridad competente, ni se le interrogaba con el fin de obtener de él manifestaciones incriminatorias. *Pueblo v. Beltrán Santiago*, 97 D.P.R. 92 (1969).

No constituye base para revocar una sentencia el hecho de que se admita en evidencia en un juicio celebrado los días 10 y 11 de agosto de 1965, una declaración prestada por el acusado el 12 de septiembre de 1962 en la cual no se le advirtió en forma específica a dicho acusado de su derecho a asistencia de abogado y de su derecho a no incriminarse, cuando consideradas todas las circunstancias en que la declaración fue prestada, aparece una ausencia total de toda coacción para obligarlo a declarar, la entera voluntariedad de la misma y que dicho acusado tuvo alguna advertencia de su derecho a no incriminarse antes de firmar dicha declaración. *Pueblo v. Álvarez Solares*, 95 D.P.R. 789 (1968).

La declaración extrajudicial de un niño mayor de 16 y menor de 18 años de edad prestada ante un fiscal es válida y admisible en evidencia en el correspondiente **procedimiento criminal** celebrado al ser juzgado como mayor de edad, aun cuando este no fuera advertido que de prestar dicha declaración esta podría utilizarse en su contra si el Tribunal de Menores luego renunciaba a su jurisdicción para juzgarlo. *Pueblo v. Figueroa González*, 95 D.P.R. 98 (1967).

Con anterioridad al 13 de junio de 1966, en esta jurisdicción un acusado o sospechoso no tenía derecho, antes de confesar, a que el fiscal le advirtiera de la obligación del Estado de proporcionarle asistencia legal-cuando dicho acusado o sospechoso no dispusiera de medios para contratarla-por lo que una

confesión prestada por un acusado o sospechoso con anterioridad a esa fecha es admisible en evidencia aunque dicho funcionario no le hubiera hecho tal advertencia al acusado o sospechoso. Pueblo v. De Jesus Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967).

Es voluntaria, y por tanto admisible en evidencia, la confesión de un menor de edad que no es un tierno, inmaduro e ignorante adolescente, sino una persona que, de acuerdo con los hechos, tenía pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos. Pueblo v. De Jesus Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967).

Es admisible en evidencia la confesión obtenida de un acusado mientras es interrogado sin estar representado por abogado y mientras se encuentra detenido en una etapa acusatoria y privado de su libertad en forma significativa, cuando el juicio a dicho acusado se le celebros con anterioridad al 26 de octubre de 1965. Pueblo v. Lastra Saez, 93 D.P.R. 876 (1966); Pueblo v. Adorno Lorenzana, 93 D.P.R. 788 (1966), certiorari denegado, Lorenzana v. Puerto Rico, 386 U.S. 1040; 87 S. Ct. 1499; 18 L. Ed. 2d 609 (1967), reconsideración denegada, 387 U.S. 949; 87 S. Ct. 2082; 18 L. Ed. 2d 1341 (1967).

Es admisible en evidencia una confesión del acusado cuando este no establece que su confesión fue inducida por la confrontación con el dinero y prendas obtenidas de él por la Policía de Puerto Rico a través de registros ilegales de sus pertenencias y de su residencia. Pueblo v. Lastra Saez, 93 D.P.R. 876 (1966).

Es admisible en evidencia la confesión escrita del acusado hecha ante el fiscal, no obstante su declaración durante el juicio sobre el carácter involuntario de su confesión, si de la faz del propio documento surge que el apelante declaró "previas las advertencias de ley que me han sido hechas, ...", y si no alego ni intento probar que el fiscal al momento de tomar por escrito su confesión no le hiciera tales advertencias. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

Constituye error que da lugar a la revocación de la sentencia dictada por un juez actuando sin jurado, el admitir este en evidencia una vez el fiscal declaró sobre su voluntariedad la confesión escrita prestada por el acusado ante dicho fiscal, sobre la objeción del abogado de la defensa, y sin considerar como motivo de impugnación suficiente del carácter voluntario de la confesión las amenazas que pudiera haber recibido el acusado de parte de un detective con anterioridad al acto de comparecer y admitir los hechos ante el fiscal. Pueblo v. Ayala Ortega, 90 D.P.R. 172 (1964).

Regla 152. JUICIO; CONSPIRACION; ACTOS MANIFIESTOS.

En un proceso de conspiración, siempre que para la comisión del delito se requiriere un acto manifiesto (overt act) no podrá declararse convicto al acusado a menos que uno o varios de tales actos hubieren sido expresamente alegados en la acusación o denuncia y se probare uno de ellos, pero podrán probarse otros actos manifiestos que no fueren los alegados.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 246; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1104.

Contrarreferencias.

Conspiración y convenio, veanse las secs. 4523 y 4524 del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.

La prueba practicada en relación con el acusado y su adquisición de una onza de una sustancia controlada, así como todos los actos anteriores, concomitantes y posteriores a dicha transacción, es insuficiente para

sostener una condena por conspiración para vender ocho onzas de la misma sustancia a un precio mayor que el que pago el acusado, llevada a efecto con diferente comprador en diferente lugar y en oportunidad ulterior, y de la cual conspiración el acusado no tenía conocimiento alguno. *United States v. Hernández*, 625 F.2d 2 (1980).

Para establecer la existencia de conspiración para poseer una sustancia controlada con intención de distribuirla, no basta probar el hecho de su venta o un simple encuentro para consumir dicha transacción ilegal, sino que es necesario demostrar la existencia de un acuerdo previo entre las partes. *United States v. Izzi*, 613 F.2d 1205 (1980), certiorari denegado, *Santos v. United States*, 446 U.S. 940; 100 S. Ct. 2162; 64 L. Ed. 2d 793 (1980).

En un proceso **criminal** por conspiración, el acto ostensible requerido para obtener una convicción no tiene que demostrar necesariamente el delito sustantivo alegado en la acusación como objetivo de la conspiración-ni siquiera un acto que en si sea de naturaleza delictiva-siendo la función de dicho acto ostensible simplemente demostrar que la conspiración esta en marcha y que no es un mero proyecto que exista solo en la mente de los conspiradores, ni tampoco un hecho consumado cuya existencia ya término. *Reynolds v. Jefe Penitenciaria*, 91 D.P.R. 303 (1964).

Regla 153. JUICIO; PROCESO POR BIGAMIA; PRUEBA DE LOS MATRIMONIOS.

En un proceso por el delito de bigamia, no será necesario probar ninguno de los matrimonios por medio de las constancias del registro, copias certificadas o cualesquiera otros documentos oficiales relativos a dichos matrimonios, los cuales podrán probarse mediante cualquier prueba admisible para establecer el hecho del matrimonio. La prueba del lugar y fecha en que se contrajo el segundo matrimonio, acompañada de prueba fehaciente de que los contrayentes han vivido juntos en Puerto Rico después de efectuado dicho matrimonio, será suficiente para sostener la acusación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 248; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1106.

Contrarreferencias.

Bigamia, Véase la [33 LPRA sec. 4141] del Título 33.

Regla 154. JUICIO; PRUEBA DE CORROBORACIÓN.

En un proceso por el delito de promover o intentar la promoción de un aborto o por contribuir o ayudar en su perpetración, por seducir con engaño o corromper por medio del halago o por inducir o engañar a una mujer soltera menor de veintiún (21) años, hasta entonces reputada por casta, a entrar en alguna casa de lenocinio o en cualquier otra parte con el objeto de prostituirla o contribuir y ayudar a ese fin, o de que tenga contacto carnal ilícito con cualquier hombre, o en un proceso por el delito de seducción bajo promesa de matrimonio, no podrá declararse convicto al acusado por la sola declaración de la mujer agraviada, a menos que tal declaración se corrobore con alguna prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión de delito. Esta corroboración no será suficiente si sólo probare la perpetración del delito o la circunstancia del mismo.

(Julio 23, 1974, Núm. 209, Parte 2, p. 124; Noviembre 11, 1994, Núm. 123, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 250; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1108.

Enmiendas

-1994, ley 123. La ley de 1994 suprimio el segundo párrafo de esta regla.

-1974, ley 209. La ley de 1974, en el primero párrafo, suprimio "o por el delito de violación o tentativa de cometerlo" después de "bajo promesa de matrimonio", y la palabra "otra" antes de "prueba que por si misma", y añadió el segundo párrafo.

Vigencia.

La sec. 2 de Ley de Julio 23, 1974, Núm. 209, Parte 2, p. 124, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación y se aplicara a hechos o eventos ocurridos después de su vigencia."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 209, Parte 2, p. 124.

Noviembre 11, 1994, Núm. 123.

Contrarreferencias.

Violación, corrupción, seducción, abortos, veanse las [33 LPRA secs. 1051 y 4061 a 4064] del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Constitucionalidad.

1. En general.

El requisito de relacionar al acusado con la comisión del delito exigido por esta regla antes de su enmienda de 1974, nunca se extendió para incluir la identificación del acusado por el testigo de corroboración. *Pueblo v. Vega Santiago*, 107 D.P.R. 685 (1978).

A los fines del delito de violación, en nuestro medio la expresión "abusar de una mujer" tiene connotación y sentido de imposición del hombre sobre la mujer para gozarla sin su consentimiento. *Pueblo v. Vega Santiago*, 107 D.P.R. 685 (1978).

Exigida prueba de corroboración como elemento esencial de un delito, un tribunal no debe anadir elementos de prueba a dicho requisito de corroboración que no son parte del texto de la ley. *Pueblo v. Vega Santiago*, 107 D.P.R. 685 (1978).

Fue la intención de la nueva versión de esta regla eliminar el requisito de corroboración en casos de violación excepto en aquellos casos en que pudiera establecerse que hubo relaciones amorosas o parecidas que pudieran dar base para que la mujer le imputara al hombre, ya fuera por despecho, celos o algo por el estilo que la animaran a utilizar el proceso judicial como venganza. La regla no exige que el acusado sea un completo y total desconocido para la perjudicada. *Pueblo v. Pagan Rivera*, 105 D.P.R. 493 (1976).

Bajo las disposiciones de la nueva versión de esta regla, el tipo de relación que hace necesaria la corroboración en un caso de violación no es la relación familiar, el trato frecuente por circunstancias especiales sino la relación íntima, amorosa, que puede dar margen al despecho, ante la inconstancia y el engaño del hombre. *Pueblo v. Pagan Rivera*, 105 D.P.R. 493 (1976).

A los fines de requerir del Estado la corroboración del testimonio de la perjudicada en un caso de violación-bajo las disposiciones de la nueva versión de esta regla-el nexo familiar existente entre la perjudicada y el acusado no cae ni puede contarse entre las relaciones amistosas, o amorosas, o íntimas o de igual naturaleza entre el acusado y la perjudicada a que alude esta regla y que exige al Estado presentar prueba de corroboración. Pueblo v. Pagan Rivera, 105 D.P.R. 493 (1976).

A los fines de la prueba de corroboración del testimonio de una perjudicada en la comisión de un delito en un caso en que dicha prueba sea necesaria, basta que el testigo de corroboración reproduzca la expresión que oyo decir a dicha perjudicada, en el caso de autos, "trato de abusar de mi". Pueblo v. Quiñones Abreu, 103 D.P.R. 626 (1975).

Es admisible en evidencia en un caso por el delito de violación a los fines de corroborar el testimonio de la perjudicada la declaración de una hermana de esta a quien la perjudicada, en su casa, le comunico lo sucedido con el acusado apenas transcurridos quince minutos desde que se separo de dicho acusado, aun cuando con anterioridad a dicha conversacion, dicha perjudicada hubiera visto la misma noche en la carretera al acompañante del acusado, así como a su madre con quien no hablo al llegar a su casa. Pueblo v. Acevedo Colón, 103 D.P.R. 501 (1975).

No es un cómplice cuyo testimonio tiene que ser corroborado un testigo del Estado que coopere hasta cierto punto en una transacción ilegal, aunque pueda castigarse por otra ofensa, si no se prueban los elementos constituyentes del delito sobre el cual declara. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

En ausencia de una indicación en contrario en el record, debe presumirse que la descripción de una persona acusada del delito de violación no se aparta sustancialmente de la dada por la víctima al testigo de corroboración al hacerle una manifestación espontánea sobre como sucedieron los hechos delictivos. Pueblo v. Medina Jimenez, 102 D.P.R. 320 (1974).

En la determinación de un tribunal sobre si aplica o no la doctrina de *res gestae*, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y las manifestaciones que se consideran parte del *res gestae* no es el factor decisivo. Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

No constituye un error que de lugar a la revocación de una sentencia en un caso de violación una instrucción transmitida mediante la cual el juez no le indica al jurado que la prueba de corroboración es suficiente, sino que seria suficiente prueba de corroboración "de ser creida por ustedes más allá de duda razonable". Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

Es al juez, no al jurado-por ser una cuestion de derecho-a quien corresponde determinar si existe o no evidencia de corroboración para relacionar al acusado con los elementos esenciales del delito de violación. Pueblo v. Figueroa Figueroa, 100 D.P.R. 213 (1971).

Constituye prueba corroborativa de la declaración de una agraviada en un caso de aborto el testimonio de su concubino al efecto de que el sabia que la cita de la agraviada con el acusado era a los fines de un aborto y que el la llevo y pago la cuenta por dicho aborto, no obstante ser el concubino un cómplice del acusado en la realización del delito. Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971).

Son admisibles en evidencia como parte del *res gestae* en un caso de violación técnica el testimonio de un testigo de cargo el cual reproduce las manifestaciones hechas por la perjudicada, una incapacitada mental, poco después de los hechos delictivos, mecánicamente, sin coacción o presión alguna, manifestaciones que no fueron el producto de una reflexión calculada con el proposito de perjudicar al acusado. Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689 (1971).

Contradicciones entre los testimonios de dos hermanas testigos de cargo y sus anteriores declaraciones sobre extremos no esenciales para probar el delito de violación técnica no obligan al jurado por tal motivo a descartar y no dar crédito al resto del testimonio de las referidas dos hermanas. Pueblo v. Gautier Oliveras, 99 D.P.R. 138 (1970).

La prueba en este caso y la presentada por el fiscal-los testimonios de un policía y un detective sobre lo que les relato la perjudicada-es insuficiente, por no formar parte del *res gestae*, para corroborar la declaración de la mujer agraviada, y ni dicha prueba ni el testimonio de la mujer agraviada relacionaron al acusado con la comisión del delito de violación del que se le acuso. Pueblo v. Bonilla Vazquez, 98 D.P.R. 834 (1970).

Esta regla no requiere la corroboración del testimonio de la mujer agraviada en un **procedimiento** por el delito de incesto. Pueblo v. Firpi Negro, 96 D.P.R. 215 (1968).

Un tribunal no viene obligado a dictaminar sobre la cuestión de la corroboración del testimonio de una perjudicada en el delito de incesto cuando la prueba en el caso demuestra que ella nunca consintió a la relación incestuosa. Pueblo v. Firpi Negro, 96 D.P.R. 215 (1968).

Existe corroboración del testimonio de la perjudicada en un **procedimiento** por violación cuando, habiendo admitido el propio acusado en su declaración haber tenido relaciones sexuales con aquella, existen declaraciones de testigos de cargo que corroboran la afirmación de dicha perjudicada de que dicho acto lo realizó el acusado mediante el uso de la fuerza y la violencia para vencer la oposición de ella. Pueblo v. Echevarria Rivera, 96 D.P.R. 159 (1968).

En el delito contra natura, la declaración de la perjudicada no tiene que ser corroborada. Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60 (1968).

Discrepancias entre los testimonios de la perjudicada y la testigo que ofreció la prueba de corroboración necesaria en un **procedimiento** de violación no obligan al jurado a rechazar todo el testimonio de la perjudicada, y en particular su relación de los actos delictivos realizados por el acusado en su persona. Pueblo v. Díaz Ríos, 95 D.P.R. 361 (1967).

Se concluye que la declaración de la perjudicada fue corroborada con prueba independiente, tal como lo requiere esta disposición. Pueblo v. Díaz Ríos, 95 D.P.R. 361 (1967).

Si bien es cierto que el tiempo transcurrido entre los hechos y las manifestaciones de la persona perjudicada es un elemento de los que son considerados en casos de violación para admitir dichas manifestaciones como parte del *res gestae*, también es cierto que ese factor tiempo no es por sí solo determinante de si unas manifestaciones de esa naturaleza son admisibles o no. Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609 (1967).

No pudiendo imputarse a la perjudicada en este caso de violación-niña de siete años no cumplidos-motivaciones fundadas en el desamor o inconstancia del acusado, y consideradas todas las circunstancias que revela la transcripción de evidencia, sus manifestaciones espontáneas a dos policías sobre lo que le ocurriera con el acusado, hechas dos días después de los hechos, son admisibles en evidencia como prueba de corroboración del testimonio de dicha perjudicada. Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609 (1967).

En los casos de violación técnica, el requisito de la corroboración del testimonio de la perjudicada obedece al fin de proteger al acusado de imputaciones infundadas y que pueden ser hijas de la reacción

femenina ante el desamor e inconstancia del hombre. Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609 (1967).

La extensión del tiempo entre los hechos y las manifestaciones de una persona perjudicada en un caso de violación, que ha de determinar si dichas manifestaciones son admisibles o no como parte del *res gestae*, dependerá de las circunstancias de cada caso. Pueblo v. Pérez Morales, 94 D.P.R. 609 (1967).

El testimonio de la abuela de la perjudicada en cuanto a las manifestaciones que le hiciera esta última en relación a los hechos delictivos realizados por el acusado con ella-única prueba ofrecida por el fiscal para corroborar la declaración de la perjudicada conectando al acusado con la comisión del delito-no fueron manifestaciones espontáneas, admisibles en evidencia en dicho caso como parte del *res gestae*. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

En los procesos por el delito de violación no puede declararse convicto al acusado por la sola declaración de la mujer agraviada, a menos que tal declaración se corrobore con alguna otra prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión del delito. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

Procede revocar una sentencia condenando a un acusado por el delito de violación cuando la única prueba para corroborar la declaración de la mujer agraviada consiste de manifestaciones de la perjudicada a una tercera persona que las reproduce en juicio, manifestaciones que eran inadmisibles en evidencia por no ser parte del *res gestae*. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

El tiempo transcurrido entre la ocurrencia de una violación y las manifestaciones de la perjudicada a una tercera persona sobre el perjuicio ocasionado por el acusado no es el factor decisivo para determinar la aplicación de la doctrina de *res gestae* y admitir tales manifestaciones como prueba de corroboración de la comisión del delito por el acusado. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

Aun cuando las manifestaciones de la perjudicada relatando a un tercero lo que la persona acusada de violación le hiciera no fueren contemporáneas con los hechos que las motivaron, dichas manifestaciones son admisibles en evidencia bajo la doctrina de *res gestae* cuando el juez llega a la conclusión-tomando en consideración las circunstancias que impedian a la perjudicada hacer una queja contemporánea con la realización por el acusado de los hechos delictivos-de que las mismas fueron espontáneas. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

Al determinar la aplicación de la doctrina de *res gestae*, el juzgador deberá atenerse a las circunstancias particulares de cada caso. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967).

Tanto en el delito de tentativa de violación incluido en la sec. 96 del Título 33, como en el de ataque para cometer violación, la declaración de la mujer agraviada debe ser corroborada en la medida exigida por esta regla, y por tanto constituye error instruir al jurado que en el delito de ataque para cometer violación la declaración de la mujer agraviada no necesita ser corroborada. Pueblo v. Arroyo Agosto, 93 D.P.R. 445 (1966).

Teniendo discreción para variar el orden de la prueba, siempre que no se perjudiquen los derechos sustanciales del acusado, la corte sentenciadora puede permitir la presentación de prueba de corroboración del delito de violación y luego el testimonio de la perjudicada, máxime cuando esta es una sordomuda que necesita de un intérprete para testificar. Pueblo v. Abreu Mojica, 90 D.P.R. 760 (1964).

En un juicio por violación de una sordomuda no constituye error el que la testigo de corroboración fuera quien interpretara a la perjudicada si era la persona de su familia que mejor capacitada estaba para interpretarla. Pueblo v. Abreu Mojica, 90 D.P.R. 760 (1964).

Ni el parentesco de un interprete con la perjudicada ni su interés como testigo en el caso de esta por ser su hermana ni el hecho de que esta fuera la testigo de corroboración del delito de violación cometido son motivos de incapacidad para desempeñar las funciones de tal interprete cuando queda demostrado en el juicio que dicha interprete era la persona de la familia de la agraviada capacitada para interpretar los gestos y senales que esta última usaba para exteriorizar a otros sus ideas, sentimientos y emociones, pudiendo dicha interprete entender el significado de las senas y gestos de dicha perjudicada. Pueblo v. Abreu Mojica, 90 D.P.R. 760 (1964).

2. Constitucionalidad.

Viola la prohibición Constitucional que prohíbe el discrimen por razón de sexo-bajo el análisis de riguroso escrutinio judicial-lo dispuesto en esta regla requiriendo que el testimonio de la mujer perjudicada, en un proceso por el delito de violación o tentativa de cometerlo, sea corroborado cuando de la prueba surja la existencia de relaciones amistosas, o amorosas o intimas o de igual naturaleza, con el acusado. Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

Impugnada la Constitucionalidad de una disposición legal por discriminar por razón de sexo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aplicara la formula de rigurosa o estricta supervisión judicial para concluir la existencia o ausencia de una discriminación. Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

Impugnada judicialmente una clasificación legislativa por ser discriminatoria por razón de sexo, bajo el análisis de escrutinio judicial estricto, el Estado viene obligado a probar que la clasificación tiene un propósito apremiante de beneficio al interés común, que no hay otras alternativas menos drásticas y que la clasificación es necesaria. Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

Regla 154.1. JUICIO; PRUEBA DE CONDUCTA PREVIA.

En cualquier **procedimiento** por el delito de violación o su tentativa no se admitirá evidencia de la conducta previa o historial sexual de la perjudicada o evidencia de opinión o reputación acerca de esa conducta o historial sexual para atacar su credibilidad o para establecer su consentimiento, a menos que existan circunstancias especiales que indiquen que dicha evidencia es relevante y que su naturaleza infamatoria o perjudicial no tendrá un peso mayor que su valor probatorio.

Si el acusado se propone ofrecer evidencia de la conducta o historial sexual de la perjudicada o evidencia de opinión o reputación acerca de esa conducta o historial sexual, bajo la excepción de circunstancias especiales, deberá seguir el siguiente **procedimiento**:

(a) El acusado presentará una moción por escrito y bajo juramento al tribunal y al Ministerio Público indicando la evidencia que se propone ofrecer y su relevancia para atacar la credibilidad o para establecer el consentimiento de la perjudicada. La moción deberá presentarse cinco (5) días antes del juicio, a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción.

(b) Si el tribunal determina que dicha evidencia es satisfactoria, ordenará una vista en privado y en ausencia del jurado. En dicha vista se permitirá el interrogatorio a la perjudicada en relación con la evidencia propuesta por el acusado.

(c) Al terminar la vista, si el tribunal determina que la evidencia que se propone ofrecer el acusado es relevante y que su naturaleza infamatoria o perjudicial no tendrá un peso mayor que su valor probatorio, dictará una orden indicando la evidencia que puede ser presentada por el

acuerdo y la naturaleza de las preguntas permitidas. El acusado entonces podrá ofrecer evidencia de acuerdo con la orden del tribunal.

(Adicionada en Febrero 1, 1979, Núm. 6, p. 12.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Febrero 1, 1979, Núm. 6, p. 12.

ANOTACIONES

1. En general.

El hecho de que la víctima del delito de violación faltara a la verdad al responder a preguntas irrelevantes acerca del hecho de encontrarse embarazada, pues este era intrascendente a los efectos de la calificación del delito y no hubiese sido fundamento para un fallo absolutorio en caso de nuevo juicio, no justifica el remedio de habeas corpus, no empece la alegación del acusado de que el jurado hubiese tenido dudas acerca del carácter de la víctima de haber sabido que esta se encontraba embarazada por un hombre que no era ni su marido ni el acusado. Cruz-Sánchez v. Rivera-Cordero, 835 F.2d 947 (1987).

Regla 155. JUICIO; CORROBORACIÓN EN CASOS DE FRAUDE.

En un proceso por el delito de haberse obtenido la firma de una persona en un documento mediante engaño o superchería y con la intención de defraudarla, o por tales medios haberse obtenido de una persona dinero, bienes muebles o cualesquiera otras cosas de valor, no podrá declararse convicto al acusado cuando dicho engaño o superchería se hubiere hecho de palabra, sin mediar prenda o escrito falso, a menos que dicho engaño o superchería constare por escrito en alguna forma bajo la firma o con la letra del acusado, o pudiese probarse con la declaración de dos (2) testigos, o la de un solo testigo acompañada de circunstancias corroborantes. Esta regla no se aplicará a un proceso por falsa representación o por suplantación de otra persona para contraer matrimonio o para recibir dinero o bienes mediante usurpación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 252; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1110.

Contrarreferencias.

Impostura, Véase la [33 LPRA sec. 4309] del Título 33.

Regla 156. JUICIO; TESTIMONIO DEL COAUTOR.

El testimonio de un coautor será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos efectos.

[2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(Julio 23, 1974, Núm. 208, Parte 2, p. 122.)

REGLA 156. JUICIO; TESTIMONIO DEL COAUTOR Y COOPERADOR

El testimonio de un coautor o del cooperador será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos efectos. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(Julio 23, 1974, Núm. 208, Parte 2, p. 122; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 11, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 253; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1111.

Codificación.

Se substituyó en el rubro "complice" con "coautor" para conformarlo al texto enmendado.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 añadió "y cooperador" al rubro y "o del cooperador" después de "un coautor" en la primera oración de esta regla.

-1974, ley 208. La ley de 1974 enmendó esta regla en terminos generales.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

El art. 2 de la Ley de Julio 23, 1974, Núm. 208, Parte 2, p. 122, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación y se aplicara a hechos o eventos ocurridos después de su vigencia."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 208, Parte 2, p. 122.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Eliminación del término "complice" de entre los responsables criminalmente de delitos por participacion, veanse las [33 LPRA secs. 3171 et seq.] del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Testimonio del complice o coautor.
3. Menores.

1. En general.

Complice es aquel que con pleno conocimiento y voluntariamente, sin que medie coaccion, de su libre albedrio e intencionalmente, participa en alguna forma en la comisión de un delito, pudiendo, por tanto, procesarse por el mismo. Pueblo v. Stevenson Colón, 113 D.P.R. 634 (1982); Pueblo v. Mills, 96 D.P.R. 637 (1968); Pueblo v. Morales Morales, 93 D.P.R. 369 (1966); Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102 (1966); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183 (1964).

La negativa a acceder a la moción del acusado de que el jurado decidiera si el testigo fundamental de El Pueblo era o no complice no viola la Constitución federal. Lugo v. Munoz, 682 F.2d 7 (1982).

No es un complice cuyo testimonio requiera corroboración aquel testigo de cargo quien no esta sujeto a proceso por igual delito que el imputadole al acusado. Pueblo v. Candelaria, 103 D.P.R. 552 (1975).

La mera presencia de un testigo del Estado durante la comisión de un escalamiento no basta para justificar una condena del testigo por dicho delito. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974); Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102 (1966).

Es sobre la defensa que recae el peso de la prueba para establecer que una persona es un complice. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

En ausencia de fallo arbitrario y desprovisto de base en la prueba, no se interviendra en apelación en la determinación de hechos del tribunal de instancia sobre la condición de complice de determinado testigo. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

Un fiscal no viene obligado a corroborar el testimonio de un testigo de cargo-a quien no se le hizo oferta alguna de inmunidad por parte del Ministerio Público-cuando dicho testigo no fue complice en la comisión del acto delictivo. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

En la interpretación de la regla de la corroboración del testimonio del complice un tribunal debe aplicar criterios rigurosos. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

No es un complice cuyo testimonio debe ser corroborado aquel testigo del Estado: (a) que no esta sujeto a encausamiento por el mismo delito que el acusado; (b) que habiendose enterado de que va a cometerse un delito, no de cuenta de ello; (c) cuando la prueba no es determinante de la participación activa del testigo en la concepción y ejecución del plan del delito. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

Un fiscal no tiene que corroborar el testimonio de la unica testigo de cargo en un caso de hurto mayor cuando esta no es complice del acusado. Pueblo v. Arroyo Nunez, 99 D.P.R. 842 (1971).

No es complice en la comisión de un delito una persona que no tiene intención **criminal** en la realización del mismo, aun cuando, enterada de que se habia cometido el delito, no da cuenta de ello sino hasta tres o cuatro días después de haberse enterado. Pueblo v. Mills, 96 D.P.R. 637 (1968).

Constituye una cuestion de derecho a ser determinada por un tribunal la determinación de si un testigo es o no un coautor o complice, siendo competencia del jurado el considerar si se corrobora su testimonio. Pueblo v. Lebron López, 96 D.P.R. 274 (1968).

En un **procedimiento criminal** por hurto no es necesaria la corroboración del testimonio de la principal testigo de cargo. Pueblo v. Vazquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968).

No es un complice cuyo testimonio deba ser corroborado aquel que, aun cuando estaba en compania del acusado en ocasión de este cometer varios delitos, no esta sujeto a ser encausado por uno o más de los delitos imputados a dicho acusado por no haber tomado participación alguna en la comisión de los mismos. Pueblo v. Rosado Cancel, 95 D.P.R. 557 (1967).

"Complice" es aquel que, sabiendo que se ha cometido un crimen grave, lo ocultare a las autoridades, o albergase y protegiese a una persona acusada o convicta de dicho delito. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967).

Una persona que no es complice en la comisión de un delito y que no puede ser acusada criminalmente no puede presumirse que actuaba, al declarar, bajo promesa de inmunidad o con la esperanza de recibir un trato mejor que el acusado. Pueblo v. López Rivera, 94 D.P.R. 579 (1967).

La frase "sujeto a ser encausado" a los efectos de determinar quien es un complice-usada en *Pueblo v. Rodríguez Hernández*, 91 D.P.R. 183 (1964)-no puede interpretarse literalmente. El encausamiento que puede dar base a que un testigo de cargo se constituya en complice necesariamente debe ser aquel que tiene un fundamento mayor que la mera sospecha del Ministerio Público. Pueblo v. Morales Morales, 93

D.P.R. 369 (1966).

La participación pasiva de una persona en actos delictivos en forma alguna lo releva de su responsabilidad **criminal**. Pueblo v. Morales Morales, 93 D.P.R. 369 (1966).

Si de la prueba resulta que el coacusado desconocía la intención del apelante de cometer el escalamiento, que desconocía el hecho realizado y que no recibió parte del botín, ni el haberle prestado servicio de transportación ni el haber sido acusado del mismo delito lo convierten en cómplice y, por tanto, su declaración no tiene que ser corroborada. Pueblo v. Morales Morales, 93 D.P.R. 369 (1966).

El acusar a una persona de un delito conjuntamente con otra no la convierte ipso facto en cómplice. Pueblo v. Morales Morales, 93 D.P.R. 369 (1966).

No es un cómplice aquel testigo de cargo que no tiene pleno conocimiento de las actuaciones ilícitas del acusado, no participando en las mismas voluntaria, libre e intencionalmente, ni en los frutos de dichas actuaciones. Pueblo v. Morales Morales, 93 D.P.R. 369 (1966).

Un testigo que participa en la comisión de un delito en contra de su voluntad-debido a las amenazas de muerte que le hiciera el acusado-no es un cómplice. Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102 (1966).

La tendencia actual es a descartar el requisito de corroboración del testimonio de un cómplice ya que cualquier peligro de dicha declaración para el acusado puede eliminarse mediante instrucciones adecuadas a los efectos de que la misma debe considerarse con cautela, dejando al juez o jurado juzgar en cada caso el crédito que le merezca la mencionada declaración. Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727 (1961).

2. Testimonio del cómplice o coautor.

El testimonio o confesión de un coautor que se esgrime contra el acusado no requiere corroboración, y el testimonio de un coautor, creído más allá de duda razonable, es suficiente para sostener la convicción del acusado. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

Aun cuando la prueba de corroboración del testimonio de un cómplice debe levantar algo más que una mera sospecha contra el acusado, no es necesario que esta vaya tan lejos como para establecer por sí misma, y sin la ayuda del testimonio del cómplice, que el acusado cometió el delito que se le imputa. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968); Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183 (1964).

No constituye error que justifique la revocación de una sentencia el no transmitir el juez al jurado una instrucción al efecto de que este debe mirar con cautela el testimonio prestado por un cómplice convicto de delito grave para sustanciar una acusación por el delito de hurto contra el acusado. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

La prueba sobre corroboración del testimonio de un cómplice, para que sea suficiente para una convicción, no tiene que ser robusta ni directa, bastando tan solo que la misma tienda a relacionar al acusado con el delito imputado, máxime si el testimonio del acusado se ha producido en el tribunal y este hizo ciertas admisiones. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

La prueba de corroboración del testimonio de un cómplice requerida para la convicción del acusado participa de las siguientes características: (a) no es necesaria que sea corroborante en cuanto a cada hecho testificado por él; (b) será suficiente si no requiere interpretación profunda y la dirección de ese testimonio tiende a relacionar al acusado con la comisión del delito de manera que satisfaga al jurado de

que el complice esta diciendo la verdad; (c) debe tender a implicar al acusado y, por lo tanto, debe relacionarlo con algun hecho que sea un elemento esencial del delito, y (d) no es esencial que dicha evidencia corroborativa sea suficiente por si misma para establecer cada elemento del delito. Pueblo v. Negron Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968).

La sola declaración de un complice no corroborada por alguna otra prueba que por si misma y, sin tomar en consideración la declaración del complice, tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito no es suficiente para justificar la convicción del acusado. Pueblo v. García Delgado, 93 D.P.R. 797 (1966).

La regla que exige la corroboración del testimonio de un complice obedece a la circunstancia de que su declaración debe tomarse con cautela, ya que la misma puede estar fundada en una posible promesa o esperanza de que se le conceda inmunidad o un mejor trato, al sancionar su participación en la comisión de un delito. Munoz Sullivan v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 632 (1964).

3. Menores.

No comete error un juez al no transmitir al jurado una instrucción sobre el caracter de complice de un testigo y la necesidad de corroborar su testimonio cuando dicho alegado complice es un menor de 18 años, razon por la cual tampoco se justifica transmitir una instrucción de cautela al jurado al analizar el testimonio del alegado complice. (*Pueblo v. Montalvo Acevedo*, 83 D.P.R. 727 (1961), *seguido*.) Pueblo v. Baez Cintron, 102 D.P.R. 30 (1974).

No es complice-por no poder incurrir en un delito, y por lo tanto no poder ser enjuiciado criminalmente en un tribunal ordinario-una persona que a la fecha de la comisión de un delito es menor de 16 años. Pueblo v. López Rivera, 94 D.P.R. 579 (1967).

Siendo el coacusado del apelante menor de 18 años, no podia ser enjuiciado por el delito de escalamiento, y por tanto su declaración que sirvio para condenar no tenía que ser corroborada por no tener el caracter de complice o coautor. Munoz Sullivan v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 632 (1964).

El testimonio de un joven de 16 años no tiene que ser corroborado a los fines de la convicción de un adulto que conjuntamente con el participo en la comisión de un escalamiento en primer grado. Munoz Sullivan v. Jefe Penitenciaria, 90 D.P.R. 632 (1964).

Regla 157. JUICIO; ASESINATO; PESO DE LA PRUEBA.

En un proceso por asesinato, una vez probado que la muerte fue causada por el acusado, recaerá sobre éste la obligación de probar que han mediado circunstancias atenuantes o circunstancias que excusen o justifiquen el hecho de la muerte, a menos que la propia prueba de El Pueblo tienda a demostrar que el delito cometido es un homicidio o que el acusado tenía justificación o excusa para haber cometido el hecho.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 247; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1105.

ANOTACIONES

1. En general.

Aunque esta regla dispone que el acusado tiene la obligación de probar las circunstancias mediadoras que excusen o justifiquen el hecho de la muerte por el causada, una vez se prueba que el causo la muerte, sin embargo dicha regla no puede afectar la presunción de inocencia del acusado, aun probada la muerte

ilegal. Pueblo v. De Jesus Santana, 100 D.P.R. 791 (1972).

Probado en el **procedimiento criminal** correspondiente que el acusado causo ilegalmente la muerte del interfecto, esta regla no impone a dicho acusado la obligación de establecer con prueba preponderante los elementos justificantes o eximentes del delito imputadole. La unica prueba requerida del acusado es aquella que levante una duda razonable de su culpabilidad. (*Pueblo v. Tua*, 84 D.P.R. 39 (1961), *seguido*.) Pueblo v. De Jesus Santana, 100 D.P.R. 791 (1972).

Regla 158. JUICIO; LOTERIAS; PRUEBA NECESARIA.

En un proceso por infracción de cualquiera de las disposiciones de las secs. 1211 et seq. del Título 33 no será necesario probar la existencia de ninguna administración de la lotería por la cual se suponga hayan sido emitidos los billetes, ni probar el hecho real y efectivo de la firma de tales billetes o acciones, o de tales supuestos billetes o acciones de cualesquiera supuestas loterías, o que el billete, acción o cupón fuera firmado o emitido por la autoridad de algún director o por alguna persona con poder para actuar como tal director. En todos los casos, la presentación de prueba sobre la venta, el tráfico o el acto de ordenar billetes o alguna acción o interés sobre los mismos, o sobre cualquier documento que pretenda ser un billete, acción o interés en el mismo, será suficiente para probar que dicha acción fue firmada y emitida de conformidad con el propósito anunciado en la misma.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 251; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1107.

Regla 159. PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE DISTRITO.

(a) Asistencia de abogado. Al llamarse un caso para juicio, si el acusado compareciere sin abogado, el tribunal deberá informarle de su derecho a tener asistencia de abogado, y si el acusado no pudiere obtener los servicios de un abogado, el tribunal le nombrará un abogado que lo represente, a no ser que el acusado renunciare a su derecho a tener asistencia de abogado. El abogado que se le nombre por el tribunal prestará sus servicios sin costo alguno para el acusado. El tribunal deberá concederle al abogado un término razonable para preparar la defensa del acusado.

(b) Juicio. Al comenzar el juicio se dará lectura a la denuncia y el acusado formulará su alegación. Si el acusado hiciere alegación de "no culpable" el fiscal correspondiente si lo hubiere o en su defecto el tribunal procederá al examen bajo juramento de los testigos de cargo, finalizado el cual, el acusado practicará la prueba de su defensa. En este mismo orden podrá presentarse posteriormente la correspondiente prueba de refutación, aunque dicho orden podrá ser variado por el tribunal de acuerdo con su sana discreción. Terminado el período de prueba e informado el caso por las partes, si así lo desearan, el tribunal pronunciará el fallo que correspondiere y dictará sentencia de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas.

(Junio 26, 1974, Núm. 90, Parte 1, p. 338.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 29; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 987.

Enmiendas

-1974, ley 90. La ley de 1974, en la primera oración del inciso (b), añadió "el fiscal correspondiente si lo hubiere o en su defecto" después de "no culpable".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 26, 1974, Núm. 90, Parte 1, p. 338.

ANOTACIONES

1. En general.

Un abogado de oficio no puede solicitar del acusado o sus familiares una cantidad de dinero para cubrir los gastos de los procedimientos. *In re* García Muñoz, 160 D.P.R. 744 (2003).

Unos peticionarios, que fueron acusados de violar la ley local sobre armas, un delito menos grave, y cuyos casos fueron señalados para juicio en el Tribunal de Distrito del Estado Libre Asociado del que tenían derecho a apelar al Tribunal Superior y a apelar o a solicitar revisión por *certiorari* en el Tribunal Supremo, no tenían derecho a un entredicho basados en que si fueran juzgados sus derechos resultarían violados porque las reglas permiten que el juez que preside el tribunal actúe como juez y como fiscal, y los peticionarios no tenían derecho a juicio por jurado toda vez que no habían agotado todos los remedios adecuados en los tribunales locales. *Rodríguez Rivera v. Maiz*, 331 F. Supp. 713 (1971).

Si los peticionarios, acusados de un delito menos grave en **procedimiento criminal** iniciado por el Estado Libre Asociado, tenían remedios adecuados en las cortes locales que no habían sido agotados, no tenían derecho a un remedio declarativo por un tribunal federal de tres jueces basados en que sus derechos civiles serían violados si se permitiera la continuación del **procedimiento criminal** porque el **procedimiento criminal** de la corte de distrito permitía que el juez actuara como juez y como fiscal, y porque no tenían derecho a ser juzgados por jurado. *Rodríguez Rivera v. Maiz*, 331 F. Supp. 713 (1971).

El sistema de juez fiscal del Tribunal de Distrito de Puerto Rico viola el debido proceso de ley si resulta apreciablemente injusto. *Figueroa Ruiz v. Delgado*, 359 F.2d 718 (1966).

El debido proceso de la ley federal es de aplicación tanto en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como en los distintos estados de los Estados Unidos. *Figueroa Ruiz v. Delgado*, 359 F.2d 718 (1966).

A partir del convenio a tenor con la L.P. 600 del 81er. Congreso, la interpretación y aplicación de la garantía del debido proceso de la Constitución del Estado Libre Asociado es prerrogativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. *Figueroa Ruiz v. Delgado*, 359 F.2d 718 (1966).

No constituye un sistema inquisitorial incapaz de producir un fallo justo e imparcial el **procedimiento** judicial seguido en un juicio **criminal** ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, ni el mismo convierte al juez de distrito en un juez fiscal, ni constituye dicho **procedimiento** una monstruosidad jurídica que nos une a la Edad Media. *Pueblo v. Baranco*, 92 D.P.R. 558 (1965).

XII. EL FALLO Y LA SENTENCIA

Regla 160. FALLO; DEFINICION; CUANDO DEBERA PRONUNCIARSE.

El término "fallo" significa el pronunciamiento hecho por el tribunal condenando o absolviendo al acusado.

Después de una alegación de culpabilidad o de la rendición de un veredicto, el tribunal pronunciará inmediatamente su fallo de conformidad con dicha alegación o el veredicto rendido. Cuando el juicio no hubiere sido por jurado, el tribunal podrá reservarse el fallo por un término que no excederá de dos (2) días, después de haberse sometido la causa.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 309; Fed. R. Crim. P. 32(b); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1191; Código modelo, Rs. 375 y 378.

ANOTACIONES

1. En general.

En un **procedimiento criminal** el fallo es el pronunciamiento hecho por el tribunal condenando o absolviendo a un acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).

En un **procedimiento criminal** la sentencia es el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).

Regla 161. FALLO; ESPECIFICACIÓN DEL GRADO DEL DELITO.

En todo fallo de culpabilidad por delitos clasificados en grados, el tribunal especificará el grado del delito por el cual se condena al acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 310; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1192.

Contrarreferencias.

Sentencias determinadas, Véase la Regla 178 de este apéndice.

Regla 162. SENTENCIA; DEFINICION; CUANDO DEBERA DICTARSE.

El término "sentencia" significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado.

El tribunal al tiempo de imponer sentencia deberá explicar verbalmente o por escrito las razones para la imposición de la sentencia.

Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en casos de delitos graves (felonies) el tribunal señalará una fecha para dictar sentencia que será por lo menos tres (3) días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves (misdemeanors) el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta cualquier moción de nuevo juicio o moción para que no se dicte sentencia o antes de dar debida consideración al informe presentencia que se requiere de acuerdo con la Regla 162.1.

Las reglas de evidencia no se aplicarán en la fase de sentencia, excepto lo concerniente a privilegios, según lo contenido en las Reglas 23 a 35 de Evidencia de Puerto Rico, Ap. IV del Título 32.

(Julio 23, 1974, Núm. 172, Parte 2, p. 11, art. 1; Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1, ef. 9 meses después de Julio 4, 1980.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 24(4) y 309; Fed. R. Crim. P. 32(a); Código Enj. **Criminal** de

California, sec. 1191; Código modelo, Rs. 382 y 396.

Enmiendas

-1980, ley 103. La ley de 1980 añadió los párrafos segundo y último, y en el presente párrafo tercero añadió "o antes de dar debida consideración... Regla 162.1".

-1974, ley 172. La ley de 1974 añadió la frase respecto al informe presentencia.

Vigencia.

La sec. 3 de la Ley de Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] comenzara a regir a la fecha de vigencia de la ley que establece la Sentencia Determinada en Puerto Rico [sec. 1044 de este título]."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

ANOTACIONES

1. En general.

Esta regla no impone un plazo fijo máximo para dictar sentencia en casos de delito grave. *Pueblo v. Kuilan Santos*, 113 D.P.R. 831 (1983).

El hecho de que un convicto este cumpliendo una condena en una jurisdicción no torna irrazonable la demora resultante de la imposición posterior de una sentencia en otro foro. *Pueblo v. Kuilan Santos*, 113 D.P.R. 831 (1983).

Es parte del derecho a un juicio rápido que reconoce el art. II, sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico el derecho del acusado a que se pronuncie sentencia dentro de un periodo razonable. *Pueblo v. Aponte Vazquez*, 105 D.P.R. 901 (1977).

Los términos que establece esta regla dentro de los cuales un tribunal debe dictar sentencia, aunque deben observarse, no marcan el límite extremo del derecho a juicio rápido. *Pueblo v. Aponte Vazquez*, 105 D.P.R. 901 (1977).

Una dilación de catorce días transcurridos entre la fecha en que un acusado de un delito *misdemeanor* fue convicto y el pronunciamiento de la correspondiente sentencia no viola el derecho a juicio rápido del apelante. *Pueblo v. Aponte Vazquez*, 105 D.P.R. 901 (1977).

Es renunciable el derecho de un acusado convicto a que se dicte la correspondiente sentencia dentro de los términos que establece esta regla. *Pueblo v. Aponte Vazquez*, 105 D.P.R. 901 (1977).

Renunciado por un acusado convicto de un delito *misdemeanor* su derecho a que la sentencia se dicte dentro del término fijado por esta regla, lo que ampara al acusado es su derecho Constitucional más amplio, sin que ello signifique que, de no poder dictarse sentencia el día posterior acordado, quede obligado el tribunal a hacerlo al día siguiente. *Pueblo v. Aponte Vazquez*, 105 D.P.R. 901 (1977).

Bajo las disposiciones de estas reglas, el término "sentencia" significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 94 D.P.R. 220 (1967); *Pueblo v. García Robles*, 93 D.P.R. 762 (1966).

Estas reglas conceden el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo contra las sentencias definidas en esta regla y no contra resoluciones de otra naturaleza. *Pueblo v. García Robles*, 93 D.P.R.

762 (1966).

Como regla general una sentencia dictada en un proceso **criminal** no es admisible a los fines de establecer responsabilidad en el pleito civil derivado de los mismos hechos. Viuda de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964).

Regla 162.1. INFORME PRESENTENCIA.

(a) El tribunal, antes de dictar sentencia en los siguientes casos, deberá tener ante sí un informe que le haya sido rendido, después de haberse practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona convicta y del efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima y su familia la comisión del delito, que le permita emitir una decisión racional de sentencia:

(1) En todos los delitos graves, excepto asesinato en primer grado. Este informe presentencia será preparado por el Programa de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(1) En todos los delitos graves, excepto de primer grado. Este informe presentencia será preparado por el Programa de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

En el mismo se incluirá la declaración que haya prestado voluntariamente la víctima sobre el efecto económico, emocional y físico que ha causado en ella y su familia la comisión del delito, la cual irá unida al informe sobre el historial del acusado.

En caso de que la víctima o su representante no puedan ser localizados, o no estén dispuestos a cooperar en la preparación del informe, ello debe hacerse constar en el mismo. El representante de la víctima puede ser su cónyuge o un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, o cualquier otra persona que el tribunal, a su discreción, determine que puede ser representante de la víctima.

(2) En los delitos menos graves. El tribunal utilizará en los delitos menos graves como informe presentencia el Formulario Corto de Información requerido por la Regla 162.2, excepto cuando las circunstancias particulares del caso ameriten información más amplia, en que podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es necesaria, alguna evaluación adicional a la Administración de Corrección.

(b) La víctima o su representante, según se define en el inciso (a) de esta regla, podrá someter una declaración sobre el efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima y su familia la comisión del delito, antes de que el tribunal dicte sentencia en los casos de delitos graves o menos graves en una o ambas de las siguientes formas:

(1) Presentando una declaración oral en la vista que celebre el tribunal para el pronunciamiento de sentencia. En caso de que haya varias víctimas el tribunal puede limitar el número de declaraciones, consolidando las mismas de la manera más adecuada.

(2) Sometiendo una declaración jurada al Programa de Libertad a Prueba o Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección, la cual será incluida en el informe presentencia según se dispone en el inciso (a) de esta regla.

Los informes presentencia se tramitarán en el plazo más breve posible y de no estar disponible el informe dentro de los términos que establece la Regla 162, el tribunal pospondrá el acto de dictar sentencia a fin de recibir dicho informe.

Nada de lo dispuesto en esta regla se entenderá que limita la facultad del tribunal para enmendar su sentencia conforme a lo dispuesto en estas reglas.

El tribunal dará acceso a los informes presentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al Ministerio Fiscal, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.

Sólo se mantendrá como confidencial aquella información que hubiere sido prestada por la víctima o por personas particulares a quienes se les hubiere ofrecido dicha garantía.

(c) En el informe presentencia, según dispuesto en los incisos anteriores, se hará constar en un folio separado la dirección residencial o postal de la víctima si ésta así lo desea. Dicha información será de carácter confidencial y se requerirá con el propósito de que la Administración de Corrección mantenga informada a la víctima sobre el desarrollo del cumplimiento de la sentencia de su ofensor y le garantice su derecho a ser oída en aquellos procedimientos en que así se disponga mediante legislación.

(Adicionada en Julio 23, 1974, Núm. 172, Parte 2, p. 11, art. 2; Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1; Junio 19, 1987, Núm. 37, p. 140, art. 1; Diciembre 22, 1994, Núm. 151, art. 1; septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 12, enmienda el inciso (a)(1), efectivo el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo al nuevo Código Penal de P.R.)

HISTORIAL

Enmiendas

-2004, ley 317. Inciso (a)(1): La ley de 2004 enmendó este inciso en terminos generales.

-1994, ley 151. Inciso (c): La ley de 1994 añadió este inciso.

-1987, ley 37. Inciso (a): La ley de 1987 designo el párrafo inicial como inciso (a) y le añadió "y del efecto economico ... del delito"; los anteriores incisos (1) y (2) pasaron a ser cláusulas, y en la cláusula (1) añadió los párrafos segundo y tercero.

Inciso (b): La ley de 1987 añadió este inciso con sus cláusulas (1) y (2) precediendo al párrafo que comienza "Los informes presentencia".

-1980, ley 103. Inciso (1): La ley de 1980 enmendó el segundo párrafo en terminos generales.

Inciso (2): La ley de 1980 sustituyo "la evaluación hecha por el Centro de Clasificacion, Diagnostico y Tratamiento de la Administración de Corrección" con "alguna evaluación adicional a la Administración de Corrección" al final de la primera oración, y convirtio la segunda oración en párrafo separado.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Véase la nota bajo la Regla 162 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

Junio 19, 1987, Núm. 37, p. 140.

Diciembre 22, 1994, Núm. 151.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Administración de Corrección, veanse las [4 LPRA secs. 1101 et seq.] del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

El derecho estatutario de un acusado a solicitar que se rinda un informe presentencia no es absoluto e irrenunciable. Por el contrario, es renunciable si no se plantea en alguna de las etapas del juicio. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).

Un convicto, a tenor con esta regla, tiene el derecho de acceso a las razones que mediaron para la negativa de suspenderle los efectos de la sentencia expuesta y permitirsele demostrar ser acreedor a esa gracia. Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982).

No existe contradicción entre la sec. 3283 del Título 33 y esta regla sobre informes presentencia. Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982).

El proposito de esta regla es armonizar el derecho de acceso de las partes al informe y garantizar la confidencialidad de las fuentes de información a quienes se les ha ofrecido tal garantía. Pueblo v. Bou Nevarez, 111 D.P.R. 179 (1981).

El derecho del acusado y su abogado a obtener acceso al informe presentencia es un derecho reconocido por las secs. 7 y 11 del art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aun cuando tal derecho no es de aplicación instantanea. Pueblo v. Bou Nevarez, 111 D.P.R. 179 (1981).

Postpuesta en diversas ocasiones la vigencia de la sec. 3283 del Título 33 y de esta regla-que requieren la preparación de un informe presentencia en determinados casos-el hecho de que en un particular momento no se hubiese postpuesto la vigencia de una u otra disposición de ley no es fundamento suficiente para reclamar que todos los individuos sentenciados en Puerto Rico durante esos intervalos sean resentenciados. Pueblo v. Bou Nevarez, 111 D.P.R. 179 (1981).

Regla 162.2. FORMULARIO CORTO DE INFORMACIÓN; NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

(a) En toda sala del tribunal deberá haber disponible un Formulario Corto de Información en el que se consignará información, entre otros, sobre los siguientes criterios orientados a permitir al magistrado hacer un juicio racional al dictar sentencia:

(1) Empleo y fuentes de ingreso.

(2) Lugar de residencia y tiempo en ella.

(3) Relaciones en la comunidad y lazos familiares.

(4) Referencias personales.

(5) Estado de salud mental y física.

(6) Récord **criminal** previo.

(7) El efecto económico, emocional y físico que ha causado en la víctima de delito y su familia la comisión del delito.

(8) Cualquier otro extremo que pueda afectar la determinación final de la sentencia.

(b) Se aplicarán las siguientes normas y procedimientos en relación al Formulario Corto de Información que se menciona en la Regla 162.1:

(1) La información que se consigne en el formulario será suplida voluntariamente.

(2) La negativa a dar la información sólo constituirá sin embargo, un factor que, entre otros, considerará el magistrado para determinar la sentencia a imponer.

(3) El magistrado no podrá tomar en cuenta la información en el formulario hasta el momento inmediatamente anterior a dicha sentencia.

(4) Al momento de considerar la información en el formulario, el magistrado deberá leer al acusado el contenido de éste para cerciorarse de que la información que fue dada por el acusado es la misma vertida en el formulario.

(5) En todo caso en que se requiera por estas reglas que el magistrado consigne sus razones en el formulario al hacer su determinación sobre la sentencia, una copia del formulario se unirá al expediente del caso.

(6) De encontrar el tribunal, luego de verificada la información en el formulario por el personal que designen para ello que la totalidad o parte de ésta es falsa, motu proprio o a petición del Ministerio Fiscal podrá variar las condiciones de la sentencia.

(7) El Formulario Corto de Información deberá ser cumplimentado por el tribunal una vez éste haya hecho una determinación de causa probable.

(Adicionada en Julio 23, 1974, Núm. 239, Parte 2, p. 246, art. 1; Junio 19, 1987, Núm. 37, p. 140, art. 2, ef. 60 días después de Junio 19, 1987.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1987, ley 37. Inciso (a): La ley de 1987 sustituyo "de" con "del" antes de "tribunal" en el párrafo inicial; añadió una nueva cláusula (7) y redesignó la anterior (7) como (8).

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 37, p. 140.

Regla 162.3. NOTIFICACIÓN; OBJECIONES.

Una vez rendidos los informes presentencia, el tribunal notificará prontamente ese hecho a las partes quienes podrán objetarlos dentro del término de diez (10) días, a contar desde su notificación.

Se especificará qué partes del informe se pretende controvertir mediante la presentación de prueba. Si los informes fueren objetados, el tribunal celebrará una vista.

(Adicionada en Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 2, ef. 9 meses después de Junio 4, 1980.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1987, ley 103. Inciso (a): La ley de 1987 sustituyo "de" con "del" antes de "tribunal" en el párrafo inicial; añadió una nueva cláusula (7) y redesigno la anterior (7) como (8).

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 19, 1987, Núm. 37, p. 140.

Regla 162.4. SENTENCIA; PRUEBA SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES.

Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere que existe controversia real sobre un hecho material que requiriere la presentación de prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo posible, en la cual:

(a) El fiscal podrá presentar prueba de circunstancias agravantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia rigurosa o el que no se deban suspender los efectos de la sentencia o, en caso contrario, que se impongan condiciones estrictas.

(b) El acusado podrá presentar prueba de circunstancias atenuantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia benigna o que se suspendan los efectos de la misma.

(Adicionada en Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 2, ef. 9 meses después de Junio 4, 1980.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

ANOTACIONES

1. En general.

No es necesario celebrar la vista previa a la sentencia que permite esta regla cuando las partes no la solicitan y no existe controversia real sobre un hecho material que requiera la presentación de prueba. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).

Esta regla requiere que los tribunales de instancia al tiempo de imponer la sentencia expliquen verbalmente o por escrito las razones para su imposición. No obstante, no explicar las razones para la imposición de la sentencia no justifica su revocación, maxime cuando se plantea por primera vez en apelación la omisión consentida. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).

Regla 162.5. INFORMES PRESENTENCIA; CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES; CONSOLIDACIÓN DE VISTAS.

Si una parte presentare una moción bajo la Regla 162.1 y ella o la otra parte presentare otra moción bajo la Regla 162.4 ó en la misma moción acumulare reclamos bajo ambas reglas, el tribunal, a menos que no fuere factible, considerará ambos asuntos en una misma vista. (Adicionada en Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 2, ef. 9 meses después de Junio 4, 1980.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

Regla 163. FALLO Y SENTENCIA; SITIO Y FORMA DE DICTARLOS.

Tanto el fallo como la sentencia se dictarán en sesión pública del tribunal y se harán constar en el registro de causas criminales y en las minutas del tribunal, si las hubiere, dentro de los dos (2) días siguientes al día de haberse pronunciado o dictado. El juez que presidiere el tribunal firmará la sentencia y el secretario la unirá a los autos de la causa. El secretario del tribunal remitirá inmediatamente copia certificada de la sentencia al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Fiscal de Distrito. (Diciembre 13, 1994, Núm. 128, art. 1, ef. 90 días después de Diciembre 13, 1994.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 32(a) y (b); Código modelo, Rs. 379, 381, 384 y 398.

Enmiendas

-1994, ley 128. La ley de 1994 añadió la última oración respecto a la remisión de copia certificada de la sentencia al Superintendente de la Policía y al Fiscal de Distrito.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Diciembre 13, 1994, Núm. 128.

Contrarreferencias.

Superintendente de la Policía, Véase la [25 LPRA sec. 3104] del Título 25.

Regla 164. FALLO ABSOLUTORIO; CONSECUENCIAS.

Si el fallo fuere absolutorio y el acusado se encontrare bajo custodia, se le pondrá inmediatamente en libertad, a menos que por otras causas pendientes deba continuar detenido, y si estuviere bajo fianza, se decretará la cancelación o la devolución de la misma, según proceda.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 292; Código modelo, R. 380.

ANOTACIONES

1. En general.

Procede la absolución del acusado si, tras la celebración de una vista sobre supresión de evidencia, se determina que no hubo motivos fundados para intervenir con el mismo. Pueblo v. Martínez Torres, 126

D.P.R. 561 (1990).

Cuando el fallo ha sido obtenido mediante fraude o colusion, por excepción puede el Ministerio Público apelar una absolución del acusado en los meritos. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Un tribunal no tiene autoridad en ley para emitir un fallo absolutorio en la vista para la discusión de una moción de supresión de evidencia, ya que dicho fallo solo puede ser emitido en el contexto de un juicio. Cualquier pronunciamiento a esos efectos dentro de una vista de supresión es un acto *ultra vires*, nulo y revisable, por constituir una cuestión de derecho ante el foro apelativo. Procede la devolución del caso al foro de instancia para la celebración del acto del juicio sin que se violente la garantía Constitucional sobre doble exposición. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Regla 165. FALLO Y SENTENCIA; COMPARECENCIA DEL ACUSADO.

Cuando la presencia del acusado fuere necesaria, el tribunal podrá ordenarle a cualquier funcionario que tuviere bajo su custodia al acusado que lo traiga ante el tribunal a oír el fallo o la sentencia que deba pronunciar o imponerle. Si el acusado estuviere bajo fianza y no compareciere a oír el fallo o la sentencia, el tribunal, además de la confiscación de la fianza, podrá ordenar el arresto del acusado.

Si el fallo fuere condenatorio y el acusado se encontrare bajo fianza, el tribunal decretará inmediatamente la cancelación de la fianza y ordenará la encarcelación del acusado hasta que se dicte sentencia en aquellos casos que por disposición expresa de ley a éste no puedan suspenderse los efectos de la sentencia.

(Marzo 30, 1984, Núm. 6, p. 18.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 312 y 313; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1193; Código modelo, Rs. 385 y 386.

Enmiendas

-1984, ley 6. La ley de 1984 añadió el segundo párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Marzo 30, 1984, Núm. 6, p. 18.

Regla 166. SENTENCIA; ADVERTENCIAS ANTES DE DICTARSE.

En casos de delitos graves (felonies), al comparecer el acusado a oír la sentencia, el tribunal le informará de la naturaleza del cargo contenido en la acusación y del pronunciamiento del fallo, y le preguntará si existe alguna causa legal por la cual no deba procederse a dictar sentencia. Si no existiere tal causa legal, el tribunal dictará sentencia. Si el acusado no estuviere representado por abogado, el tribunal le informará de su derecho a apelar y, a solicitud del acusado, el secretario preparará y presentará un escrito de apelación cumpliendo con los requisitos que exigen estas reglas.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 318 y 319; Fed. R. Crim. P. 32(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1200; Código modelo, R. 389.

ANOTACIONES

1. En general.

La omisión del juez de instancia de dictar sentencia sin antes efectuar la alocución que dispone esta regla no da lugar a la revocación de la sentencia, a menos que el acusado demuestre que podía aducir alguna de las causas reconocidas por la ley para que la sentencia no fuera dictada, ya que de otro modo no se estaría demostrando que perjuicios le hubiera ocasionado esta omisión. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

No constituye un motivo para revocar una sentencia dictada en un **procedimiento criminal** el hecho de que del record aparezca afirmativamente la omisión del juez sentenciador de inquirir del convicto personalmente-no de su abogado-si tenía algo que manifestar antes de que le impusiera la sentencia, requiriendo dicha omisión únicamente el que se deje sin efecto la sentencia dictada para proceder a sentenciar nuevamente al convicto previa la necesaria alocucion, en caso en que dicho error sea perjudicial al convicto. Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967).

Regla 167. SENTENCIA; OMISIÓN DE ADVERTENCIA.

Si el tribunal hubiere dictado sentencia sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 166, deberá dejar la misma sin efecto y proceder de acuerdo con lo que en dicha regla se establece.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 318; Código modelo, R. 390.

Regla 168. SENTENCIA; CAUSAS POR LAS CUALES NO DEBERA DICTARSE.

El acusado podrá solicitar, y demostrar en el caso que proceda, que no debe dictarse sentencia en su contra, únicamente por las siguientes causas:

- (a) Que ha desarrollado una incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o haberse pronunciado el fallo.
- (b) Que le ha sido concedido el indulto por el delito juzgado en la causa en que ha de ser sentenciado.
- (c) Que no es él la persona contra quien se rindió el veredicto o se pronunció el fallo.
- (d) Que no se ha cumplido con las disposiciones de la Regla 162.
- (e) Que el delito del cual se le declaró culpable estaba prescrito.

Regla 169. SENTENCIA; INCAPACIDAD MENTAL COMO CAUSA POR LA CUAL NO DEBERA DICTARSE.

Cuando se alegare la incapacidad mental como causa para que no se dicte sentencia, se seguirá el **procedimiento** dispuesto en la Regla 240.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 391.

ANOTACIONES

1. En general.

No existe impedimento alguno para que un juez, en el ejercicio de su sana discreción, dicte la correspondiente sentencia a un convicto-quien alego en el acto de alocución estar pensionado por incapacidad mental-cuando este no solicito que no se dictara sentencia y mucho menos demostro haber desarrollado alguna incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o pronunciado el fallo, maxime cuando dicho convicto no hizo planteamiento alguno sobre su incapacidad mental durante el juicio ni en la correspondiente apelación de la sentencia. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

A los fines de las Reglas 169 y 240, el término "incapacidad mental del acusado"-que justifica el no dictar sentencia contra un convicto-significa, no aquella incapacidad mental que justifica la existencia de una pensión en las Fuerzas Armadas, sino si el acusado, en el momento en que es llamado para dictarle sentencia, es incapaz de comprender la naturaleza y proposito de los procedimientos y de participar en el acto de imposición de sentencia con plena consciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impidan que se dicte sentencia. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

Dictaminado por un tribunal de peritos que un acusado estaba en condiciones de ser procesado-quien, primeramente, habia sido declarado no procesable por otro tribunal de peritos-salvo demostración en contrario, se presume que continuaba en esas condiciones al momento de ser llamado para escuchar sus sentencias. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

La ausencia de alocución no da lugar a la revocación de una sentencia, sino a la imposición de una nueva sentencia, más no procede devolver la causa al tribunal de instancia cuando el convicto no puede aducir ninguna de las causas a que se refiere esta regla. Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

Denominase "alocucion" (*allocutus*) en el **procedimiento criminal**, la practica del juez sentenciador-la cual tuvo su origen en el derecho consuetudinario ingles-de inquirir del convicto las razones que pueda tener para que no se le dicte sentencia. Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967).

No procede devolver sentencias criminales al tribunal de instancia para dejarlas sin efecto por la omisión del juez sentenciador de inquirir del convicto si tenía algo que manifestar antes de que se le impusieran las sentencias, y proceder a sentenciar nuevamente al convicto previa la necesaria alocucion, cuando dicho convicto no puede aducir ninguna de las causas para que no se dicten sentencias enumeradas en esta regla, ni circunstancias atenuantes a los fines de la imposición de la pena-por tratarse de la convicción de un delito que apareja la pena mandatoria de reclusión perpetua-no habiendosele causado ningun perjuicio al convicto a virtud de las sentencias originalmente dictadas. Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967).

Regla 170. SENTENCIA; PRUEBA SOBRE CAUSAS PARA QUE NO SE DICTE.

Cuando se alegare como causa para que no se dicte sentencia que el acusado no es la persona contra la cual se rindió veredicto o se pronunció el fallo, o que el acusado fue indultado del delito por el cual será sentenciado, el tribunal, si fuere necesario, pospondrá el acto de dictar la sentencia a fin de recibir la prueba pertinente sobre tal hecho. Si dicha prueba justificare la causa alegada, el acusado será puesto en libertad inmediatamente, a menos que deba continuar detenido para responder por otros delitos. Cuando se alegare la causa de prescripción del delito del cual se declaró culpable al acusado, una vez comprobada dicha prescripción, el tribunal ordenará el sobreseimiento de la acusación y la inmediata libertad del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1201(1); Código modelo, R. 392.

Regla 171. SENTENCIA; PRUEBA SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES.

El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.

(a) Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes:

(1) Hechos relacionados con la comisión del delito incluyendo entre otros:

(A) El acusado fue un participante pasivo durante la comisión del delito.

(B) La víctima provocó el incidente.

(C) El delito fue cometido bajo circunstancias poco usuales.

(D) El acusado participó en la comisión del delito bajo coacción o su conducta es parcialmente excusable por alguna otra razón que no constituye una defensa de las alegadas afirmativamente.

(E) El acusado no sentía ninguna predisposición, sino que fue inducido por otros a participar en la comisión del delito.

(F) El acusado trató de evitar el daño **criminal** causado a la persona o a la propiedad, o la cantidad apropiada fue mínima o se le hicieron amenazas.

(G) El acusado creyó que tenía un derecho o una reclamación sobre la propiedad objeto del delito, o debido a otras razones equivocadas creyó que su conducta era legal.

(H) El acusado fue motivado por el deseo de proveer las necesidades básicas a su familia o a sí mismo.

(I) El resultado delictivo que [fue] producido por negligencia del acusado.

(2) Hechos relacionados con la persona del acusado, incluyendo entre otros:

(A) El acusado no tiene antecedentes.

(B) Edad y condiciones físicas del acusado.

(C) El acusado adolecía de una condición mental o física que significativamente reducía su culpabilidad.

(D) El acusado aceptó su responsabilidad en las etapas preliminares del proceso **criminal**.

(E) El acusado no cualificaba para una sentencia suspendida.

(F) El acusado restituyó a la víctima por el daño causado.

(G) La conducta y reputación del acusado en su comunidad es satisfactoria.

(b) Se podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguientes:

(1) Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona de la persona del acusado, incluyendo entre otros:

(A) El delito fue de violencia, se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un rechazo a las normas de la decencia.

(B) El acusado utilizó un arma en la comisión del delito.

(C) La víctima era particularmente vulnerable ya fuese por minoridad o incapacidad mental o física.

(D) El delito envolvió más de una víctima.

(E) El acusado indujo a otros a participar en la comisión del delito u ocupó una posición de líder o dominante entre los demás participantes.

(F) El acusado utilizó a un menor como coparticipante.

(G) El acusado amenazó a los testigos, ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a cometer perjurio o en cualquier otro modo obstaculizó el proceso judicial.

(H) El acusado es miembro de un grupo, organización o empresa **criminal** organizada.

(I) El delito evidencia unos designios criminales planificados.

(J) El acusado recibió pago por la comisión del delito.

(K) El acusado mintió durante el juicio estando bajo juramento, cuando no se le ha procesado por perjurio.

(L) El delito envuelve la apropiación de una gran cantidad de dinero.

(M) El acusado tiene un historial delictivo.

(N) El acusado haya utilizado en la comisión de un delito un uniforme que lo identifique como un oficial de seguridad pública, sea estatal, municipal o federal, o asociado con un empleado o funcionario de una agencia, departamento o dependencia gubernamental de las antes descritas.

(O) La víctima del delito es una persona de sesenta (60) años o más de edad.

(P) El delito se cometió o se consumó en una institución, albergue u hogar de cuidado para personas de sesenta (60) años o más de edad, según definido en el Artículo 3 de la Ley Núm. 94 del 22 de junio de 1977, según enmendada.

(Q) El delito se cometió dentro de un edificio, dependencia pública o sus anexos perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas y los tribunales de justicia.

No obstante, en todo caso se considerará como circunstancia agravante que la persona haya cometido el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra o libertad provisional bajo fianza o condicionada.

(R) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico y/o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas.

Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el acusado posee una creencia particular, ni probar que el acusado meramente pertenece a alguna organización particular.

(S) El delito se cometió dentro de cualquier edificio o terreno de una escuela elemental, intermedia o secundaria, colegio público o privado, centros infante- maternos, pre-escolares, de horario extendido para niños de edad escolar y Head Start, a tenor con lo establecido en la Ley Núm. 30 de 16 de mayo de 1972. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1; Mayo 12, 1986, Núm. 23, p. 58, sec. 1; Noviembre 14, 1995, Núm. 220, art. 1; Julio 18, 1998, Núm. 142, sec. 1; Agosto 30, 2000, Núm. 236, sec. 1; 2002, Núm. 46 adiciona inciso (r): 2002, Núm. 210 adiciona inciso (s); Septiembre 15, 2004, Núm. 317, arts. 13 y 20, vigente hasta el 30 de abril de 2005; 16 de septiembre de 2004, Núm. 328, art. 1, apartados (b)(1)(o) y (p)).

Regla 171. SENTENCIA; PRUEBA SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES

El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.

Se considerarán como circunstancias atenuantes o agravantes las previstas en los Artículos 71 y 72 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para la fijación de la pena, se observarán las reglas establecidas en el Artículo 74 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes.

(Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1; Mayo 12, 1986, Núm. 23, p. 58, sec. 1; Noviembre 14, 1995, Núm. 220, art. 1; Julio 18, 1998, Núm. 142, sec. 1; Agosto 30, 2000, Núm. 236, sec. 1; 2002, Núm. 46 adiciona inciso (r): 2002, Núm. 210 adiciona inciso (s); Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 13 y 20,

enmendado en terminos generales, efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo con el nuevo Código Penal de P.R.).

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 320 y 321; Código modelo, R. 397.

Referencias en el texto.

La referencia al Artículo 3 de la Ley Num. 94 del 22 de junio de 1997 en el inciso (b)(1)(P) se consigna tal como aparece en el texto de la ley.

Codificación.

Tal como se aprobo, el inciso (b) solo tiene una cláusula.

Los párrafos introductorios a circunstancias atenuantes y agravantes se designaron como incisos (a) y (b), respectivamente, y sus cláusulas en arabigo y párrafos en mayúscula, para mayor claridad y para conformar al estilo de L.P.R.A.

Enmiendas

-2004, ley 328. Inciso (b)(1): La Ley de Septiembre 16, 2004, Núm. 328 sustituyo "y" con "con la víctima o" en esta cláusula.

Inciso (b)(1)(O) y (P): La Ley de Septiembre 16, 2004, Núm. 328 añadió "de edad" después de "más" en estos párrafos.

-2005, ley 317. La Ley de Septiembre 15, 2004, Núm. 317 suprimio el anterior texto de esta regla y lo sustituyo con los presentes tres párrafos.

-2002, ley 46. Inciso (b)(1)(S): La Ley de Agosto 29, 2002 añadió este párrafo.

Inciso (b)(1): La Ley de Marzo 4, 2002 sustituyo "la persona de la persona del acusado" con "la persona del acusado" y añadió el párrafo (R) de esta cláusula.

-2000, ley 236 . Inciso (b)(1): La ley de 2000 añadió el párrafo (Q).

-1998, ley 142. Inciso (b): La ley de 1998 sustituyo la conjunción "y" con "o" en la unica cláusula (1) y añadió los párrafos (O) y (P).

-1995, ley 220. Inciso (b): La ley de 1995 añadió el párrafo (N) a la cláusula (1).

-1986, ley 23. Inciso (a)(1)(D): La ley de 1986 añadió "que" después de "razon".

Inciso (b): La ley de añadió el último párrafo.

-1980, ley 103. La ley de 1980 añadió los incisos (a) y (b).

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

Noviembre 14, 1995, Núm. 220.

Julio 18, 1998, Núm. 142.

Agosto 30, 2000, Núm. 236.

Marzo 4, 2002, Núm. 46.

Agosto 28, 2002, Núm. 210.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Septiembre 16, 2004, Núm. 328.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Interpretación con otras leyes.

1. En general.

Para sentenciar validamente por un delito con circunstancias agravantes debe haberse presentado prueba sobre las circunstancias agravantes de que se trate. No puede considerarse como prueba la información del oficial probatorio en el informe presentencia. Pueblo v. Gonzalez Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985).

La disposición de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, que prohíbe los castigos crueles e inusitados, requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, no arbitrarias; requiere en fin, la imposición de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985).

Aunque normalmente el Tribunal Supremo no interviene con el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, en ocasiones puede intervenir para moderar la pena, bajo los corolarios de la prohibición Constitucional contra castigos crueles e inusitados. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985).

Los tribunales deben velar por que no se impongan castigos crueles e inusitados. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985).

El establecimiento de un método para ponderar los criterios relativos a las circunstancias agravantes y atenuantes es función que corresponde al proceso legislativo, y no al Poder Judicial. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985).

Esta regla provee una vista sobre circunstancias atenuantes, a los fines de la imposición de la pena. Ello presupone que la solicitud debe hacerse antes de que aquella se dicte; pero eso no significa que una vez dictada la sentencia el juez esta impedido de considerar circunstancias atenuantes, con el proposito de ejercer la facultad de reconsideración que, por otro lado, le confiere la Regla 185(a). Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984).

Es improcedente y debe ser desestimada una solicitud de reducción de sentencia, basada en las disposiciones de esta regla, radicada por un acusado después de dictada dicha sentencia. Rosa v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 670 (1974).

El **procedimiento** establecido por esta regla no es una substitución indirecta para disponer de una alegación de delito subsiguiente que, al ser negada por el acusado, debe ir a la consideración del jurado. Pueblo v. Quiñones Torres, 95 D.P.R. 659 (1968).

No comete error un juez sentenciador al oír prueba sobre la alegación del fiscal de delitos subsiguientes negada por el acusado dentro del **procedimiento** establecido en esta regla, luego de haber sido convicto el acusado por un jurado, cuando la defensa acepto el pliego de delitos anteriormente cometidos por el acusado, maxime cuando dicho juez impuso una sentencia al acusado como si no existiera el carácter de subsiguiente. Pueblo v. Quiñones Torres, 95 D.P.R. 659 (1968).

2. Interpretación con otras leyes.

Esta regla debe verse en armonía con la [33 LPRA sec. 3284] del Titulo 33. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987); Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985).

Regla 172. SENTENCIA; PRISIÓN SUBSIDIARIA.

Cuando el tribunal dictare sentencia condenando al acusado al pago de una multa, si éste dejare de satisfacerla inmediatamente, será encarcelado por falta de dicho pago y permanecerá en reclusión un día por cada dólar que dejare de satisfacer, sin que esta prisión subsidiaria pueda exceder de noventa (90) días.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 54, 322 y 329; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1215; Código modelo, R. 399.

ANOTACIONES

1. Apelación.

El Tribunal Superior carece de jurisdicción para considerar en apelación una sentencia en un caso **criminal** dictada en el Tribunal de Distrito cuando, condenado el acusado a pagar una multa o cumplir un término de carcel, dicho acusado satisface la multa que le fue impuesta. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 582 (1965).

Regla 173. SENTENCIA; MULTA; GRAVAMEN.

Una sentencia condenando al acusado al pago de una multa constituirá un gravamen, similar al de una sentencia dictada en una acción civil condenando al pago de una cantidad, siempre que se anotare en el Libro de Sentencias del Registro de la Propiedad.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 325; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1206; Código modelo, R. 400.

Regla 174. SENTENCIA; TRABAJOS FORZADOS.

En una sentencia de convicción por delito grave (felony) o menos grave (misdemeanor) que conlleve privación de la libertad, el tribunal determinará la reclusión en una institución adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia.
(Diciembre 10, 1999, Núm. 334, sec. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 324.

Enmiendas

-1999, ley 334. La ley de 1999 eliminó la imposición de trabajos forzados y enmendó esta regla correlativamente.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Diciembre 10, 1999, Núm. 334.

ANOTACIONES

1. En general.

La posibilidad que contempla el recurrente de sufrir prisión en un establecimiento penitenciario o trabajos forzados, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, no puede ser considerada como parte de la sanción para un determinado delito; antes bien son parte del sistema para la mejor administración del régimen

penitenciario y de rehabilitación de convictos, y por consiguiente, no constituye motivo para conceder al preso derecho a juicio por jurado en un caso de conducción de un automóvil con imprudencia temeraria. Justiniano Matos v. Gaspar Rodríguez, 440 F. Supp. 673 (1976).

Bajo las leyes de Puerto Rico, el hecho de conducir un auto con imprudencia temeraria no constituye una ofensa de tal magnitud que requiera juicio por jurado, teniendo en consideración que la sanción máxima imponible es de seis meses de arresto, \$500 de multa o ambas. Justiniano Matos v. Gaspar Rodríguez, 440 F. Supp. 673 (1976).

Regla 175. SENTENCIA; REQUISITOS PARA SU EJECUCION.

Cuando se hubiere dictado sentencia, se entregará inmediatamente al funcionario que deba ejecutarla una copia certificada de la misma, la cual será suficiente para su ejecución, sin que fuere necesaria ninguna otra orden o autorización para justificar o pedir tal ejecución.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 327; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1217; Código modelo, R. 405.

Contrarreferencias.

Registro de la sentencia condenatoria, Véase la [34ap LPRA sec. 969] de este título.

Regla 176. SENTENCIA; MULTA; PAGO DE DAÑOS; COMO EJECUTARLA.

Si la sentencia dictada impusiere el pago de una multa o el pago de daños según dispuesto en la sec. 1872a del Título 9, podrá procederse a su ejecución en igual forma que si se tratare de una sentencia dictada en un pleito civil ordenando el pago de una cantidad.

(Noviembre 28, 1989, Núm. 5, p. 610, art. 2.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 328; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1214; Código modelo, R. 406.

Referencias en el texto.

La Sección 16-102A de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, anterior [9 LPRA sec. 1872a del Título 9], fue derogada por el art. 28.02 de la Ley de Enero 7, 2000, Núm. 22.

Disposiciones similares vigentes, Véase la [9 LPRA sec. 5684] del Título 9.

Enmienda

-1989, ley 5. La ley de 1989 añadió la referencia al pago de daños en el rubro y en el texto.

Regla 177. SENTENCIA A PRISION; CUMPLIMIENTO.

Si la sentencia fuere por condena a prisión, el acusado será trasladado sin demora al cuidado del funcionario correspondiente y será detenido por éste hasta que la sentencia se hubiere cumplido. Lo mismo se hará si la sentencia fuere para el pago de una multa y prisión subsidiaria, cuando la multa no fuere satisfecha. Si después de haber empezado a cumplir la sentencia subsidiaria por falta del citado pago, el confinado deseara satisfacer la multa, se le abonará un dólar por cada día de reclusión que hubiere sufrido por tal falta de pago.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 54 y 329; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1215; Código modelo, R. 405.

Regla 178. SENTENCIAS DETERMINADAS Y A PRUEBA.

El tribunal dictará sentencias determinadas y sentencias a prueba de conformidad con las leyes especiales sobre la materia.

(Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1, ef. 9 meses después de Junio 4, 1980; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 14 y 20, vigente hasta el 30 de abril de 2005.)

Regla 178. CLASES DE SENTENCIAS

El tribunal dictará sentencias de conformidad con el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con las leyes especiales sobre la materia.

(Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1, ef. 9 meses después de Junio 4, 1980; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 14 y 20, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Abril 10, 1946, Núm. 295, p. 759, art. 1.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 suprimió "determinadas y sentencias a prueba" después de "sentencias" y añadió "el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con" antes de "las leyes".

-1980, ley 103. La ley de 1980 sustituyó "indeterminadas" con "determinadas" en el rubro y en el texto de esta regla.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Véase la nota bajo la Regla 162 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

ANOTACIONES

1. En general.

Reconsiderada una sentencia en un **procedimiento criminal**, el juez sentenciador puede dejarla igual o modificarla. De modificarla, puede reducirla o aumentarla, siempre y cuando, desde luego, dicha sentencia caiga dentro de los límites del mínimo y del máximo que dispone la ley para el delito en cuestión. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).

Toda sentencia dictada en **procedimiento criminal** cuyo término este dentro del mínimo y el máximo dispuestos por la ley es, en cuanto a ese particular, válida. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).

Regla 179. SENTENCIAS CONSECUTIVAS O CONCURRENTES.

Cuando una persona fuere convicta de un delito, el tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá determinar si el término de prisión impuesto habrá de cumplirse consecutiva o concurrentemente con cualquiera o cualesquiera otros términos de prisión. Si el tribunal omitiere

hacer dicha determinación, el término de prisión impuesto se cumplirá concurrentemente con cualesquiera otros que el tribunal impusiere como parte de su sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubieren sido impuestos a la persona convicta.

En casos donde exista un concurso ideal, concurso real, o delito continuado, se sentenciará conforme lo disponen los Artículos 78, 79 y 80 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(Enmendada en Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 15, adicionado el segundo párrafo, efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo al Nuevo Código Penal de P.R.)

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Mayo 12, 1943, Núm. 108, p. 305, secs. 2 y 5.

Enmiendas

-2004, ley 317. La ley de 2004 añadió el segundo párrafo de esta regla.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

ANOTACIONES

1. En general.

Para efectos de si las sentencias se imponen concurrentes o consecutivas, son las fechas en que se cometieron los delitos graves y si el acusado estaba en libertad bajo palabra o fianza lo que interesa. Pueblo v. Valentin Rivera, 119 D.P.R. 281 (1987).

Si al momento de dictarse una sentencia de reclusión no hay otra sentencia de reclusión anterior, nada tiene que proveer el tribunal sobre cumplimiento consecutivo o concurrente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Para que sea aplicable la disposición de que una sentencia no puede cumplirse concurrentemente con otra si el delito se cometió mientras el acusado estaba en libertad bajo fianza en espera de ser procesado por la comisión de un delito grave, tiene que existir una sentencia previa de reclusión. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Una sentencia dictada por un nuevo delito, cometido en libertad bajo fianza, debe ser consecutiva con cualquier sentencia por delito grave que se haya dictado previamente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

No constituye un castigo cruel e inusitado el sentenciar a un acusado a cumplir consecutivamente varias penas de prisión, tomando en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos y el hecho de que las penas decretadas caen dentro de los límites fijados por un estatuto valido. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983).

No es de aplicación la doctrina de *Duncan v. Louisiana*, 391 U.S. 145; 88 S. Ct. 1444; 20 L. Ed. 2d 491 (1968), en un juicio por un delito menos grave celebrado antes del 20 de mayo de 1968 donde a la acusada se le condeno a cumplir concurrentemente dos sentencias de seis meses de cárcel. Pueblo v. Cruz

Morales, 96 D.P.R. 666 (1968).

Descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador la determinación del modo concurrente o consecutivo de cumplir el acusado los términos de prisión. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966).

Si un acusado es sentenciado a cumplir seis sentencias de uno a dos años de presidio en cada caso, disponiéndose que los términos mínimos se cumplirían concurrentemente, y los máximos en forma consecutiva, dicho condenado debe extinguir en forma consecutiva un total de doce años de presidio. Oliveras Sepulveda v. Jefe Penitenciaria, 91 D.P.R. 604 (1964).

Regla 180. TERMINOS QUE NO PODRAN CUMPLIRSE CONCURRENTEMENTE.

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que deban imponerse en los siguientes casos:

(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere bajo apelación de otra causa o causas o mientras estuviere en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia condenatoria.

(b) Cuando el reo estuviere recluso o tuviere que ser recluso por sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier multa impuéstale.

(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere recluso en una institución penal o cumpliendo cualquier sentencia.

(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de liberación condicional en la cual se le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal.

(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave.

(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o menos grave, según se tipifican en la [33 LPRA sec. 4248] del Título 33.

(Junio 4, 1980, Núm. 106, p. 367; Julio 2, 1987, Núm. 87, p. 362, art. 2.)

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Mayo 12, 1943, Núm. 108, p. 305, sec. 3.

Enmiendas

-1987, ley 87. Inciso (f): La ley de 1987 añadió este inciso.

-1980, ley 106. Inciso (e): La ley de 1980 añadió este inciso.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 106, p. 367.

Julio 2, 1987, Núm. 87, p. 362.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Libertad bajo palabra.

1. En general.

El acusado, quien se encontró en libertad condicional bajo fianza, alegadamente cometió delitos nuevos y el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al acoger la solicitud de enmienda a la sentencia dictada toda vez que era errónea porque no dispuso que se habría de cumplir la sentencia consecutivamente con la sentencia en el caso que dio lugar a la fianza. 2005 DTS 106 (2005) Pueblo v. García, 2005 TSPR 106; 165 D.P.R. ____ (2005).

Las sentencias dictadas en distintos casos, en una misma fecha y acto, no afectan el mandato de imposición de prisión consecutiva de esta regla. Pueblo v. Valentin Rivera, 119 D.P.R. 281 (1987).

Si al momento de dictarse una sentencia de reclusión no hay otra sentencia de reclusión anterior, nada tiene que proveer el tribunal sobre cumplimiento consecutivo o concurrente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Para que sea aplicable la disposición de que una sentencia no puede cumplirse concurrentemente con otra si el delito se cometió mientras el acusado estaba en libertad bajo fianza en espera de ser procesado por la comisión de un delito grave, tiene que existir una sentencia previa de reclusión. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Esta regla no tiene el alcance de imprimir carácter de consecutivo al cumplimiento de la primera de dos sentencias impuestas a un reo solo porque este cometió el segundo delito mientras se hallaba en libertad bajo fianza. La segunda es la única sentencia que puede ser consecutiva a la primera. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Cuando se impone una sentencia de reclusión en el foro federal posterior a una sentencia de reclusión en el foro estatal, compete exclusivamente al foro federal determinar si la sentencia federal ha de ser cumplida concurrente o consecutivamente con la sentencia estatal y, si el juez sentenciador deja de manifestar como se cumplirá la sentencia, se entiende que esta será cumplida concurrentemente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

2. Libertad bajo palabra.

La Junta de Libertad Bajo Palabra no puede utilizar el tiempo cumplido por un confinado en una sentencia de otra jurisdicción (consecutiva a una local) para calcular el tiempo mínimo que este debe cumplir antes de poder ser acreedor al beneficio de la libertad bajo prueba. Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. -; 2006 TSPR 45 (2006).

Cuando una persona comete delitos mientras disfruta de libertad bajo palabra, y luego comete nuevos delitos mientras esta en libertad bajo fianza, procede imponérsele sentencias que sean cumplidas consecutivamente. Pueblo v. Valentín Rivera, 119 D.P.R. 281 (1987).

Regla 181. INFORME SOBRE CONFINADO CITADO PARA JUICIO.

Cuando una persona estuviere cumpliendo sentencia y fuere citada para comparecer a juicio ante cualquier tribunal, el director o encargado de la institución penal donde estuviere confinada dicha persona enviará al juez del tribunal que requiere la comparecencia, un certificado con copia describiendo los pormenores de dicha prisión y especificando la forma en que extingue condena dicha persona. Si la persona estuviere aguardando la vista o apelación de su caso, se especificará el tiempo que ha permanecido en tal estado, el delito y la orden de detención. En todo caso se

enviará una relación de los antecedentes penales que tuviere dicha persona expresando el número de la causa, el delito, la penalidad impuesta, el tribunal sentenciador, la fecha de la sentencia, la fecha en que empezó a cumplirla, y la gracia ejecutiva recibida o la forma y fecha en que extinguió la penalidad. Si la persona tuviere causa en apelación o existiere mandamiento de prisión en su contra, hubiere o no prestado fianza, se informará en la misma forma dispuesta anteriormente en esta regla.

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Mayo 12, 1943, Núm. 108, p. 305, sec. 4.

Regla 182. TÉRMINO QUE EL ACUSADO HA PERMANECIDO PRIVADO DE LIBERTAD.

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de cometer cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad.

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Abril 10, 1946, Núm. 293, p. 753, sec. 1.

Contrarreferencias.

Rebaja por buena conducta, Véase la [4 LPRA sec. 1161] del Título 4.

Regla 183. TÉRMINO DE RECLUSIÓN EN ESPERA DEL RESULTADO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA.

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona mientras estuviere pendiente un recurso de apelación incoado contra la sentencia se descontará totalmente del término de prisión que deba cumplir dicha persona como consecuencia de dicha sentencia al ser ésta confirmada o modificada.

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Abril 10, 1946, Núm. 293, p. 753, sec. 2.

Regla 184. SENTENCIA POSTERIORMENTE ANULADA O REVOCADA.

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona en cumplimiento de una sentencia que fuere posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de prisión que deba cumplir dicha persona en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la imposición de la sentencia anulada o revocada.

HISTORIAL

Procedencia.

Ley de Abril 10, 1946, Núm. 293, p. 753, sec. 3.

Regla 185. CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA.

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido dictada, siempre que

la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari.

(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, órdenes u otros documentos de los autos y errores en el expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha notificación.

(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con los requisitos de la [33 LPRA sec. 4732] del Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación, [4 LPRA secs. 1611 a 1616] del Título 4. (Enmendada en Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 16, añade el inciso (c)).

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 35 y 36.

Enmiendas

-2004, ley . Inciso (c): La ley de 2004 añadió este inciso.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Anulación o corrección de sentencias, Véase la Regla 192.1 de este apéndice.

Habeas corpus, veanse las [34ap LPRA secs. 1741 y 1742] de este título.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Ley anterior.
3. Funcionario de institución penal.

1. En general.

En virtud de la Regla 185 de las Reglas de **Procedimiento Criminal**, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 185, se descontará totalmente del término de prisión que deba cumplir la peticionaria bajo la sentencia que se le impondrá, el tiempo que hasta ahora ha cumplido bajo la sentencia que le fuera impuesta originalmente. 2007 DTS 138 (2007) Pueblo V. Ramos Rivas, 2007 T.S.P.R. 138 (2007)

El acusado, quien se encontró en libertad condicional bajo fianza, alegadamente cometió delitos nuevos y el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al acoger la solicitud de enmienda a la sentencia dictada toda vez que era errónea porque no dispuso que se habría de cumplir la sentencia consecutivamente con la sentencia en el caso que dio lugar a la fianza. 2005 DTS 106 (2005) Pueblo v. García, 2005 TSPR 106 (2005); 165 D.P.R. ____ (2005)

No puede extenderse el periodo probatorio cuando han transcurrido más de 10 meses desde que venció el

periodo originalmente fijado. 2000 DTS 20 (2000) Pueblo v. Martínez Lugo, 2000 TSPR 20 (2000); 150 D.P.R. 238 (2000).

Es valida una sentencia dictada por un juez distinto al que presidio el juicio y emitió el fallo de culpabilidad. Pueblo v. Nadal Mejias, 137 D.P.R. 432 (1994).

Un juez debe ser sustituido únicamente si concurren las razones que dispone esta regla para declarar a un juez inhábil: muerte, enfermedad, haber cesado en el cargo u otra inhabilidad que no le permita concluir un **procedimiento**. Pueblo v. Nadal Mejias, 137 D.P.R. 432 (1994).

La intención del legislador en esta regla fue la de ampliar el ámbito de su aplicación para permitir la sustitución no solo para los procedimientos posteriores al juicio, sino incluso para continuar con un juicio ya comenzado por otro juez. Pueblo v. Nadal Mejias, 137 D.P.R. 432 (1994).

Como regla general una sentencia valida no se puede modificar. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

Esta regla faculta a un tribunal a corregir en cualquier momento una sentencia ilegal. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964).

Si al momento de dictarse una sentencia de reclusión no hay otra sentencia de reclusión anterior, nada tiene que proveer el tribunal sobre cumplimiento consecutivo o concurrente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Una sentencia dictada por un nuevo delito, cometido en libertad bajo fianza, debe ser consecutiva con cualquier sentencia por delito grave que se haya dictado previamente. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986).

Cuando un convicto es sentenciado a una pena menor que el mínimo requerido por ley, se puede corregir la sentencia en cualquier momento a tenor con esta regla que así lo permite; El Pueblo debe hacer el planteamiento ante el tribunal sentenciador y no dentro de un recurso de apelación interpuesto por el convicto. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).

Bajo esta regla, por causa justificada y en bien de la justicia, un tribunal luego de dictar sentencia condenatoria y si conserva jurisdicción, en virtud de una solicitud de reconsideración dentro de los noventa (90) días de haberse dictado la sentencia, puede alterar el modo en que habrá de cumplirse; la alternativa de suspensión de la misma, como remedio judicial, esta accesible si todavía existe jurisdicción. Pueblo v. Cubero Colón, 116 D.P.R. 682 (1985).

Puede alterarse una sentencia valida aun después de que el convicto haya empezado a extinguirla, si con ello se beneficia al confinado. Por autorización legislativa explicita o implícita los tribunales pueden alterar una sentencia valida para reducirla aun cuando se haya comenzado a extinguir. Pueblo v. Cubero Colón, 116 D.P.R. 682 (1985).

Esta regla establece el término de noventa (90) días, a partir de que se haya dictado sentencia, para presentar la moción de rebaja de sentencia. Presentada la moción dentro del término de noventa (90) días, el tribunal conserva jurisdicción para resolverla aun después de transcurrido dicho término. Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984).

El hecho de que la prueba en un caso establezca un delito mayor que aquel por el cual el acusado fue convicto-fundado en una interpretación equivocada de la ley-no da lugar a la revocación del fallo

condenatorio, ya que no se incurre en un error perjudicial al acusado. Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980).

Esta regla no impide la modificación de la sentencia dictada. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

Un tribunal, en su amplia supervisión de la libertad de un convicto bajo el régimen de libertad a prueba, tiene facultad para modificar el término original de la sentencia cuando a su juicio resultare ser condición impropia e innecesaria a los fines de la rehabilitación del convicto. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

Una interpretación literal de reglas no es impedimento para corregir un castigo a todas luces desproporcionado y exagerado. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

Considerando el término de una sentencia en probatoria como principal efecto y condición de esta, y hallándose el probando bajo custodia legal del tribunal este tiene poder en cualquier tiempo para modificar la duración de dicho término, atemperándolo al grado o etapa de rehabilitación del sentenciado, como lo tiene para modificar cualquier otra condición de la libertad en probatoria. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

La rebaja de una sentencia en probatoria, en lo que respecta al tratamiento judicial de la adicción a drogas, no constituye una intervención con el criterio original del juez que la impuso, sino un reajuste y adaptación al propósito legislativo vigente en el nuevo estatuto sobre drogas. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

Un tribunal tiene facultad continua para reducir los términos de una sentencia exclusivamente en casos en los que la Ley de Sustancias Controladas, secs. 2101 et seq. del Título 24, concede la alternativa de libertad bajo régimen probatorio, más dicha facultad no implica la rebaja automática de dicho tipo de sentencia, debiendo el juez usar su discreción con criterios selectivos en circunstancias que apelen a su sentido básico de justicia ante los meritos del caso y a la luz de los principios de individuación de la pena y reforma del edicto. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976).

En el ejercicio de su discreción bajo esta regla, un tribunal debe, en determinadas circunstancias celebrar una vista para oír al convicto sobre la prueba de atenuantes de que pueda disponer para sostener una solicitud de reducción de sentencia. Rosa v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 670 (1974).

Un veredicto de culpabilidad sostenido por amplia prueba, aparte del testimonio de un testigo "X", no será alterado, aun cuando se senale una insinuación totalmente desprovista de prueba a los efectos de que "X" declare a cambio de promesas de ser favorecido por el fiscal en los casos que sobre este pendían por narcóticos. Pueblo v. Martínez Valentín, 102 D.P.R. 492 (1974).

Reconsiderada una sentencia en un **procedimiento criminal**, el juez sentenciador puede dejarla igual o modificarla. De modificarla, puede reducirla o aumentarla, siempre y cuando, desde luego, dicha sentencia caiga dentro de los límites del mínimo y del máximo que dispone la ley para el delito en cuestión. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).

Toda sentencia dictada en **procedimiento criminal** cuyo término este dentro del mínimo y el máximo dispuestos por la ley es, en cuanto a ese particular, válida. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).

No es válida-y procede su reducción a seis meses-una sentencia condenando a un convicto de un delito

menos grave a cumplir una pena de ocho meses de cárcel. Pueblo v. Bell Pound, 101 D.P.R. 41 (1973).

No constituye un error fundamental el que un juez designe con un nombre equivocado el delito por el cual se sentencia al acusado cuando ello no le ocasione perjuicio alguno. Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971).

Un juez sentenciador tiene autoridad para reconsiderar una sentencia dictada en un caso **criminal** e imponer una pena mayor cuando el acusado esta todavia bajo custodia judicial y el aumento de la pena no se debió a actuaciones posteriores al momento de dictarse la primera sentencia, sino al hecho que el fiscal le aclaro al juez-al manifestar el acusado no haber sido convicto anteriormente de delito alguno-que dicho acusado tenía en su contra una sentencia por escalamiento. Pueblo v. Sánchez Delgado, 99 D.P.R. 260 (1970).

Comete error un juez al sentenciar a una acusada por el delito de hurto mayor subsiguiente cuando la acusación radicada fue por un delito de hurto mayor sin incluirse alegación alguna de subsiguiente, dicha alegación fue hecha cuando ya el jurado se había retirado a deliberar, la acusada negó la alegación de convicción anterior y no existe constancia alguna en los autos de que dicha prueba fuera presentada ante el juez sentenciador. En tal caso procede en apelación rebajar la sentencia. Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R. 597 (1967).

Un tribunal, al considerar una moción para corregir una sentencia errónea, no esta autorizado a dejar sin efecto o alterar el fallo valido y legal anteriormente pronunciado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).

Dictada una sentencia errónea en un **procedimiento criminal**, el fiscal tiene autoridad para solicitar su corrección. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).

Transcurridos más de 90 días de haber sido dictada una sentencia en un **procedimiento criminal**, el tribunal de instancia no tiene facultad para rebajar la sentencia dictada. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967).

Declarados culpables dos coacusados, uno de escalamiento en segundo grado y el otro de escalamiento en primer grado-bajo una acusación de escalamiento en primer grado-el error del jurado al declarar al primer coacusado culpable del delito en segundo grado no anula el veredicto de culpable de escalamiento en primer grado rendido contra el segundo coacusado, si este ultimo se rindió conforme a derecho y estuvo racionalmente justificado por los hechos, circunstancias y eventos que surgieron de la evidencia. Cabrera Ramírez v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 718 (1965).

Tratándose de una sentencia valida y habiendo transcurrido los términos señalados en esta regla, no pueden los tribunales modificar la sentencia que se comenzó a cumplir, no quedando otra vía que solicitar la clemencia ejecutiva si hubiere meritos para ello. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964).

Una vez que un reo ha comenzado a cumplir una sentencia valida, esta no puede ser modificada en forma alguna. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964).

Tanto bajo el derecho anterior a la aprobación de estas reglas como bajo las disposiciones de las mismas, un tribunal de primera instancia no puede modificar a los quince años de haber sido dictadas dos sentencias ordenando que se cumplieran consecutivamente, y disponer que estas se cumplan concurrentemente. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964).

El hecho que un tribunal se equivoque al dictar sentencia contra un acusado no puede servir de base para

que este escape de castigo. *González de Jesús v. Jefe Penitenciaria*, 90 D.P.R. 31 (1964).

Una sentencia errónea puede ser corregida por los tribunales, y si un juez impone una penalidad de 10 a 12 años por creer que se trataba de un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado, y planteado el asunto por el acusado encuentra que se trataba de un delito de escalamiento en primer grado y corrige la sentencia errónea y dicta una correcta, bajando el mínimo de 10 años a 6 y subiendo el máximo de 12 a 14, la sentencia corregida es válida porque esta dentro de los límites mínimo y máximo dispuestos por la ley. *González de Jesús v. Jefe Penitenciaria*, 90 D.P.R. 31 (1964).

La facultad de un juez para reconsiderar una sentencia impuesta válidamente esta restringida por las siguientes normas: (a) el sentenciado debe encontrarse todavía bajo custodia judicial; (b) la sentencia original debe contener algún error en el nombre del sentenciado, en la pena impuesta o en la aplicación de la ley a los hechos del caso, y (c) deben existir ciertas circunstancias que justifiquen la mitigación o la agravación de la sentencia. *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

Un juez había impuesto una sentencia válida y luego de sentenciado el acusado se había dado a la fuga, después que fue apresado, el juez reconsideró su primera sentencia e impuso una más onerosa, habiéndose resuelto que podía hacerlo. *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

Si la sentencia original es válida, posteriormente no se puede aumentar si se ha empezado a extinguir. *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

Una sentencia dictada contrario a lo que dispone la ley es nula e inexistente-pudiendo ser eliminada aun cuando haya sido ejecutada parcialmente-y el juez puede en cualquier momento corregir el error para ajustar la sentencia a lo ordenado por la ley. *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

La mera declaración posterior de un testigo en la cual se retracta del testimonio que prestó en el acto del juicio no es suficiente para dejar sin efecto una sentencia condenatoria dictada en una causa **criminal** y lograr una nueva oportunidad a los fines de dilucidar la responsabilidad **criminal** del acusado. *Pueblo v. Cadiz Colón*, 83 D.P.R. 827 (1961).

Para poder anular una sentencia condenatoria dictada en una causa **criminal** a base de que se ha obtenido mediante fraude, es necesario que, entre otras cosas, se alegue y se pruebe que la evidencia del fraude no pudo ser descubierta mediante diligencia razonable antes de dictarse la sentencia. *Pueblo v. Cadiz Colón*, 83 D.P.R. 827 (1961).

Sujeto a ciertas limitaciones reconocidas las cortes tienen poder para dejar sin efecto sus sentencias cuando estas se han obtenido mediante fraude. *Pueblo v. Cadiz Colón*, 83 D.P.R. 827 (1961).

Una segunda exposición por sentencia se produce cuando la sentencia en reconsideración se dicta después que el sentenciado ha pasado de la custodia judicial a la custodia ejecutiva para cumplir la sentencia impuestale. *Santiago v. Jones*, 74 D.P.R. 617 (1953), aclarado, *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

El juez sentenciador puede dejar sin efecto una sentencia menor e imponer en reconsideración una sentencia mayor mientras el sentenciado se encuentra bajo custodia judicial. *Santiago v. Jones*, 74 D.P.R. 617 (1953), aclarado, *Pueblo v. Lozano Díaz*, 88 D.P.R. 834 (1963).

La agravación en reconsideración de cualquier sentencia originalmente menor no viola el debido **procedimiento** de ley. La autoridad del juez sentenciador para reconsiderar una sentencia no forma parte de ningún derecho Constitucional del acusado, siempre que dicho juez se mantenga dentro de los límites

de imposición fijados por el estatuto. Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617 (1953), aclarado, Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834 (1963).

Cuando un sentenciado adopta en presencia del mismo juez sentenciador una conducta tumultuosa, de abierto desafío a la autoridad judicial, creando una situación de confusión y de desorden en el tribunal, dicho juez está justificado, ante esa provocación inusitada, a reconsiderar su sentencia anterior e imponerle una mayor. Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617 (1953), aclarado, Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834 (1963).

2. Ley anterior.

Sentenciado un acusado por el delito de violación bajo las disposiciones del Código Penal de 1937, vigente al pronunciarse dicha sentencia-penalidad que no tenía límite máximo-un tribunal no viene obligado a reducir la sentencia a un límite máximo de 25 años de presidio-máximo de la sentencia dispuesto por el Código Penal de 1974-cuando a la fecha de dictarse la sentencia no estaba en vigor el Código Penal de 1974. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

El tercer párrafo de la sec. 3004 del Título 33-autorizando en ciertos casos la reducción de una sentencia impuesta bajo las disposiciones del Código Penal de 1937-no le es de aplicación a un convicto cumpliendo condena cuando la sentencia apelada se dictó antes de la fecha de vigencia del Código Penal de 1974. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

3. Funcionario de institución penal.

El superintendente o el funcionario correspondiente de una institución penal no debe trazar legalmente directrices, ni esbozar **procedimiento** o pauta alguna al surgir dudas sobre los términos de una sentencia, pues descansa en los tribunales la facultad para corregir e intervenir en sentencias ilegales, nulas, erróneas o defectuosas. Op. Sec. Just. Num. 14 de 1977.

Cuando el superintendente o el funcionario correspondiente de una institución penal considera que se han cometido errores en la imposición de sentencias, la mejor práctica es que se comunique dentro del plazo más breve con el Administrador de la Administración de Corrección, el cual se encargará de realizar las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes a fin de que se tramiten las mociones pertinentes a la luz de las disposiciones de esta regla. Op. Sec. Just. Num. 14 de 1977.

El superintendente o el funcionario correspondiente de una institución penal procederá a variar los términos de la sentencia en la copia certificada de la misma que se le ha entregado únicamente cuando reciba una orden de un tribunal competente enmendando o reconsiderando los términos de la sentencia original. Op. Sec. Just. Num. 14 de 1977.

Regla 186. INHABILIDAD DEL JUEZ.

(a) Durante el juicio. Si después de comenzado el juicio, y antes del veredicto o fallo, el juez ante quien fuera juzgado el acusado estuviere impedido de continuar con el juicio por razón de muerte, enfermedad u otra inhabilidad o por haber cesado en el cargo, cualquier otro juez de igual categoría en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, siempre y cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a partir de su nombramiento, que se ha familiarizado con el expediente y récord del caso. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido dictada, siempre que

la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(b) Después del veredicto o fallo de culpabilidad. Si por razón de haber cesado en el cargo, muerte, enfermedad u otra inhabilidad, el juez ante quien fuera juzgado el acusado estuviere impedido de desempeñar los deberes del tribunal después del veredicto o fallo de culpabilidad, cualquier otro juez en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes.

(c) Casos por jurado y tribunal de derecho. La sustitución a que se refiere el inciso (a) de esta regla sólo podrá ser efectuada en aquellos casos que se estuvieren ventilando ante jurado. Por estipulación de las partes, podrá haber sustitución del juez antes de mediar fallo, en aquellos casos que se estén ventilando por tribunal de derecho. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con los requisitos del Artículo 104 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(d) Nombramiento del juez sustituto. El juez sustituto deberá ser nombrado por el juez administrador del tribunal al cual pertenecía el primer juez, o en su defecto por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de dos (2) días de recibir notificación de inhabilidad del juez.

(e) Autoridad del juez sustituto. El juez sustituto mantendrá el mismo poder, autoridad y jurisdicción en el caso como si hubiese comenzado ante él mismo.

(f) Deber del secretario. En aquellos tribunales en donde hay asignado un solo juez, el secretario del tribunal, inmediatamente que conociere de la inhabilidad del juez deberá:

(1) Notificar inmediatamente al Administrador de los Tribunales, y al Juez Presidente del Tribunal Supremo.

(2) Citar a las partes para un señalamiento que en ningún caso podrá ser menor de 10 días ni mayor de 15 días.

(g) Nuevo juicio.

(1) Si el juez sustituto quedare convencido de que no puede continuar desempeñando los deberes del anterior juez podrá discrecionalmente conceder un nuevo juicio.

(2) La imposibilidad no atribuible al acusado de cumplir con los trámites dispuestos en esta regla será motivo para conceder un nuevo juicio.

(Julio 23, 1974, Núm. 145, Parte 1, p. 712; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 16, enmienda los incisos (a) y (c), efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo con el Nuevo Código Penal de P.R.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 25.

Propósito.

La Ley de Julio 23, 1974, Núm. 145, p. 712, tiene la siguiente Exposición de motivos:

"El propósito de esta legislación es enmendar y ampliar la Regla 186 de **Procedimiento Criminal** de Puerto Rico. En la actualidad sus disposiciones autorizan la sustitución de un Juez en proceso **criminal** únicamente después del veredicto o fallo de culpabilidad sin especificarse el método que habrá de seguirse cuando ocurra la inhabilidad del Juez. La regla vigente es limitativa y no cubre aquellos casos en que la inhabilitación del Juez ocurre después de comenzado el juicio pero antes de mediar veredicto o fallo.

"No existiendo razones jurídicas o prácticas para la limitación antes expuesta, es necesario ampliar el ámbito de la regla para permitir la sustitución en etapas previas al veredicto o fallo y delinear claramente el **procedimiento** a seguirse."

Enmiendas

-1974, ley 145. La ley de 1974 enmendó esta regla en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 145, p. 712.

ANOTACIONES

1. En general.

El debido proceso de ley requiere la revocación de una convicción cuando el juez que preside el proceso es la misma persona que lo había investigado previamente, lo que compromete su imparcialidad aunque fuera en apariencia. Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986).

XIII. NUEVO JUICIO

Regla 187. NUEVO JUICIO; CONCESION.

Luego de dictado un fallo de culpabilidad el tribunal podrá conceder un nuevo juicio, bien a instancia propia con el consentimiento del acusado o a solicitud de éste.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 303; Fed. R. Crim. P. 33; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1191; Código modelo, R. 361.

Regla 188. NUEVO JUICIO; FUNDAMENTOS.

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los siguientes fundamentos:

(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y la que no pudo el acusado con razonable diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al solicitar nuevo juicio por este

fundamento, el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de los testigos que la aducirán.

(b) Que el veredicto se determinó por suerte o por cualquier otro medio que no fuere expresión verdadera de la opinión del jurado.

(c) Que el veredicto o fallo es contrario a derecho o a la prueba.

(d) Que medió cualquiera de las siguientes circunstancias y como consecuencia se perjudicaron los derechos sustanciales del acusado:

(1) Que el acusado no estuvo presente en cualquier etapa del proceso, salvo lo dispuesto en la Regla 243.

(2) Que el jurado recibió evidencia fuera de sesión, excepto la que resulte de una inspección ocular.

(3) Que los miembros del jurado, después de retirarse a deliberar, se separaron sin el consentimiento del tribunal, o que algún jurado incurrió en conducta impropia, la cual impidió una consideración imparcial y justa del caso.

(4) Que el fiscal incurrió en conducta impropia.

(5) Que el tribunal erró al resolver cualquier cuestión de derecho surgida en el curso del juicio, o instruyó erróneamente al jurado sobre cualquier aspecto legal del caso o se negó erróneamente a dar al jurado una instrucción solicitada por el acusado.

(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa según se dispone en las Reglas 208 y 209.

(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no fuere responsable el acusado, éste no hubiere tenido un juicio justo e imparcial.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 303; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1181; Código modelo, Rs. 364 y 365.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Contrarreferencias.

Derechos del acusado en general, Véase la sec. 11 de este título.

Derechos sustanciales del acusado, veanse las Reglas 2, 36 y 38 de este apéndice.

Procedimiento para formalizar la apelación, Véase la Regla 194 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Nuevas pruebas.
3. Presencia del acusado.
4. Falta de transcripción.
5. Conducta del jurado.
6. Conducta del fiscal.

1. En general.

Entre los fundamentos para que un tribunal ordene la celebración de un nuevo juicio, ya sea a instancia propia con el consentimiento del acusado o a solicitud de éste, se encuentra el de conocimiento de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que de haber estado disponibles hubiesen alterado el resultado del proceso anterior. Las Reglas de **Procedimiento Criminal** proveen dos mecanismos para la concesión de un nuevo juicio por este fundamento. La regla 188 puede ser invocada a estos efectos en moción fundamentada y por escrito presentado ante el tribunal de instancia antes de que se dicte sentencia. Por otro lado, la regla 192 permite presentar esta moción después de dictada la sentencia, con la única condición de que sea dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o elementos de prueba. 2007 DTS 065 Pueblo v. Díaz Morales 2007 TSPR 065, Opinión de Conformidad.

El tribunal apelativo solo revocara una sentencia y ordenara un nuevo juicio cuando se haya cometido un error Constitucional al suprimir evidencia favorable a la defensa. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

Corresponde al juez sentenciador dirimir los conflictos sobre la credibilidad entre la versión de un testigo en el juicio y la versión ofrecida por la nueva prueba en la vista sobre la moción de nuevo juicio. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

Descansa en la discreción del tribunal sentenciador la concesión de un nuevo juicio, actuación que no se alterara a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso de esa discreción. Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107 (1984); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Constituye error que amerita la concesión de un nuevo juicio el que se le entregue al jurado para que lleve al salon de deliberaciones copias de sentencias sobre convicciones previas del acusado. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

El tribunal de instancia anulo indebidamente las ordenes libradas por el Senado del Estado Libre Asociado para tener acceso a documentos en poder del Secretario de Justicia relacionados con la muerte a tiros de dos supuestos terroristas, ya que no se justifico que dicho acceso y conocimiento podria tener el más minimo efecto de perjudicar el derecho a un juicio imparcial de los acusados en una causa de violación de derechos civiles por dichas muertes. *In re* San Juan Star Company, 662 F.2d 108 (1981).

Dentro de un **procedimiento** de habeas corpus, un juez no puede considerar y resolver la justificación o ausencia de ella en la demora de un agente encubierto en someter al fiscal bajo juramento los hechos resultantes de su investigación, cuando presta su declaración antes de prescribir el delito. Rabell v. Alcaldes Carceles de P.R., 104 D.P.R. 96 (1975).

Especulaciones traídas por un acusado mediante prueba de referencia-que el jurado recibio prueba fuera

de sala-no pueden servir de base a un tribunal para ejercitar su discreción y conceder un nuevo juicio. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975).

No procede declarar con lugar una moción de nuevo juicio bajo las disposiciones de esta regla cuando el acusado no demuestra ante el tribunal de instancia haber hecho diligencia alguna para preparar la relación del caso, ni que ello fuera imposible. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

No tiene derecho a un segundo día en corte aquel convicto a quien se le celebre un juicio justo donde ninguno de sus derechos fundamentales fueron vulnerados. Pueblo v. Martínez Valentin, 102 D.P.R. 492 (1974).

Denegada una moción de nuevo juicio por el juez sentenciador, no se interviendra en apelación con dicha determinación a menos que se demuestre por el apelante un claro e inequivoco abuso de discreción por parte del magistrado. Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

No es confiable una declaración jurada prestada por un agente encubierto cinco meses después de haber ocurrido los hechos delictivos imputados al acusado cuando las razones que ofrece dicho agente para su tardanza en revelar la transacción de compraventa de drogas entre el y el acusado es de una falsedad transparente por aducir excusas inverosímiles y falaces para no haber suministrado la declaración jurada en un breve plazo, lo que matiza todo su testimonio en juicio de falto de credibilidad, maxime cuando dicho agente encubierto conoce la practica correcta en casos de esta indole. Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973).

Una orden denegando una moción de nuevo juicio no es apelable, sino revisable solamente mediante *certiorari* a ser librado a discreción del Tribunal Supremo. Pueblo v. Saenz Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972).

Una moción de nuevo juicio va dirigida a la sana discreción de un tribunal, excepto cuando se presente evidencia que sustancie alguna de las razones que para conceder nuevo juicio establece esta regla. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

Procede declarar sin lugar una moción de nuevo juicio cuando el acusado falla en rebatir la presunción de que el jurado baso su veredicto en la prueba presentada. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970).

Bajo una acusación de asesinato en primer grado-delito que requiere la intención especifica de matar, deliberadamente-no constituye error perjudicial el dejar el juez de instruir al jurado sobre el efecto de la embriaguez del acusado al momento de cometer el delito, cuando este es convicto de asesinato en segundo grado-delito en el cual solo se requiere malicia premeditada. Pueblo v. Rivera Marquez, 96 D.P.R. 758 (1968).

Suponiendo, sin resolverlo, que constituye un error el permitir a un fiscal interrogar a un testigo de reputación del acusado, sobre las objeciones de la defensa, sobre supuestas coacciones que dicho testigo desplegaba frente a los testigos de cargo en el cuarto de los testigos, el mismo no es perjudicial al acusado cuando este utiliza otros testigos de reputación y, por su parte, el fiscal no presenta prueba sobre la mala reputación del acusado. Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699 (1968).

No constituye error la negativa de un tribunal de instancia a permitir que se le pregunte al perjudicado en un caso de ataque para cometer homicidio sobre el estado mental del acusado, maxime cuando dicho acusado logra el proposito que perseguia cuando el tribunal permitio al perjudicado declarar que veia en el acusado a una persona docil y normal. Pueblo v. López Ramos, 96 D.P.R. 699 (1968).

No constituye error de un tribunal sentenciador el permitirle al jurado, luego de ser excusado que, bajo el mismo juramento prestado originalmente, introduzca una enmienda de forma al documento donde aparece el veredicto de culpabilidad del acusado, maxime cuando el veredicto escrito original, aun sin enmienda alguna, era valido por revelar la verdadera intención del jurado. Pueblo v. Arroyo Ramirez, 96 D.P.R. 576 (1968).

No comete error un tribunal al reservarse la resolución de una moción de absolución perentoria cuando tal actuación no resulta perjudicial al acusado, máxime cuando dicha moción no procedía en derecho. Pueblo v. Lebron López, 96 D.P.R. 274 (1968).

Constituye un error perjudicial al acusado el que un juez sentenciador no instruya al jurado sobre todo delito que este incluido en el imputado y que la evidencia de la defensa tienda a probar. Pueblo v. Tufino Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968).

No todo error de juicio o de estrategia en el juicio o concepto erroneo con respecto al derecho aplicable cometido por un abogado defensor priva al acusado de su derecho Constitucional de una representación legal que le provea un juicio justo. Molina v. Jefe Penitenciaria, 96 D.P.R. 191 (1968).

No constituye un error perjudicial al acusado el dejar el juez sentenciador de preguntarle al jurado la razon por la cual solicita regresar a la sala del tribunal desde el salon de deliberaciones. Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60 (1968).

En ausencia de una demostración de que del record en un caso **criminal** se desprende que el tribunal sentenciador incurriera en error al dar credito al testimonio de un agente encubierto, no se interviendra en la apreciación que de la prueba haya hecho dicho tribunal. Pueblo v. Robles Rivera, 95 D.P.R. 587 (1967).

Meros errores o equivocaciones del abogado defensor no justifican que se deje sin efecto una sentencia, a menos que se trate de una situación que haya convertido el proceso en una farsa o negación palmaria de la justicia. Pueblo v. Marrero Laffosse, 95 D.P.R. 186 (1967).

No comete error un tribunal al ordenar a la defensa que devuelva al fiscal las declaraciones juradas de los testigos de cargo que se le habian facilitado. Pueblo v. Marrero Laffosse, 95 D.P.R. 186 (1967).

No queda privado un acusado de su derecho a un juicio justo y rapido cuando la dilación habida entre la comisión del delito imputadole y su arresto queda explicada y justificada por el tipo y método de la investigación usada-el uso de un agente encubierto-maxime cuando la prueba de defensa no establece que el acusado sufriese una posición de indefensión debido al tiempo transcurrido entre la comisión de dicho delito y su arresto. Pueblo v. Cruz Ortega, 95 D.P.R. 129 (1967).

Permitida por un juez una enmienda a una acusación y a una especificación de particulares solicitada por el fiscal luego de haber desfilado la prueba de cargo-por haber una incongruencia entre la prueba y dichos documentos-tras lo cual disolvió el jurado-en esa ocasión la defensa se opuso a dicha disolución y también a la continuación del juicio que se estaba celebrando-al senalarse el nuevo juicio ordenado, no comete error el juez al declarar sin lugar una moción de exposición anterior alegando que el acusado estaba siendo expuesto al riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Rios Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 117 (1967).

Un incidente en que el juez de instancia dio un malletazo y amonesto al padre del acusado por desacatar las ordenes del tribunal mientras declaraba no fue de tal gravedad que convirtiera el **procedimiento criminal** en injusto y parcial. Pueblo v. Figueroa Gonzalez, 95 D.P.R. 98 (1967).

No comete error un tribunal al negarse a archivar un caso **criminal** por el fundamento de que el fiscal que entendia en el caso no le entrego a la defensa una declaración jurada prestada durante la investigación preliminar del delito ante otro fiscal por un policía, testigo de cargo, cuando el fiscal que vio el caso presento prueba y establecio que dicha declaración se habia extraviado, maxime cuando de haberse eliminado dicho testimonio, siempre hubiera quedado prueba suficiente para declarar culpable al acusado. Pueblo v. Olmo Estrada, 94 D.P.R. 375 (1967).

Un término de cuatro meses transcurridos entre una alegada violación a las secs. 1247 et seq. del Titulo 33 y la presentación de la correspondiente acusación no es un término irrazonable ni opresivo para el acusado, como tampoco perjudico, la preparación de su defensa de coartada. Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967).

La debida asistencia legal le garantiza a un acusado un juicio justo e imparcial, más no puede garantizarle que sera declarado inocente si es culpable. Torres Martínez v. Jefe Penitenciaria, 93 D.P.R. 391 (1966).

Se examina cierto comentario del juez en frente al jurado en relación al unico testigo de la defensa-al decretarse un receso-para concluir que el mismo no afecto la credibilidad que dicho testigo debia merecer al jurado, por lo que no se le causo perjuicio alguno al acusado ni se le privo a este de un juicio justo. Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182 (1966).

La razon para la existencia de la norma de evitar que pase al jurado una acusación con la alegación de haberse cometido otros delitos, cuando esta se ha aceptado, es que no debe juzgarse a una persona sino por el delito especifico que se le imputa-excepto en los casos permisibles por via de excepción para determinados fines y propositos-y que de permitirse que el jurado se informe de la comisión de otros delitos que no estan siendo juzgados puede producir un veredicto que no sea el producto enteramente de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

El derecho valioso de un acusado a que su juicio se termine por el tribunal debe quedar subordinado al interés público en juicios justos que terminen en fallos justos. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

Incorre en error un tribunal al admitir en evidencia la declaración de un testigo sobre manifestaciones que hiciera la víctima relacionada con los hechos del caso, cuando el proposito de la declaración es probar tales hechos, cuando no existe prueba que demuestre que dichas manifestaciones de la víctima se hicieron en contemplación de muerte, que fueron contemporaneas al suceso o que fueron hechas espontaneamente, mientras el manifestante se encontraba en un estado de excitación nerviosa. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

Admitido un *dying declaration* como cuestion de derecho por el juez que preside la vista, el hecho de que dicho magistrado someta al jurado la prueba sobre la condición de la víctima al hacer ciertas manifestaciones a un testigo-para determinar si fueron hechas en contemplación de su muerte-no perjudica al acusado, sino que lo beneficia, al ofrecersele la oportunidad a este de demostrar ante el jurado que la víctima al hacer dichas manifestaciones no estaba in articulo mortis. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

Constituye un error que da lugar a la revocación de una sentencia condenando al acusado por violación tecnica, el que el juez de instancia impida a la defensa-al esta insistir en contrainterrogar a la perjudicada para que expresara que ella entendia por relaciones sexuales-ahondar en el contrainterrogatorio de dicha perjudicada para determinar si en verdad se habia consumado el acto carnal entre esta y el acusado. Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 D.P.R. 894 (1965).

Un juez de distrito que, como cuestión de hecho, se convierte en un fiscal en el juicio que preside con el único fin y propósito de obtener la convicción del acusado-ignorando su deber de imparcialidad como juzgador-estará sujeto a acción correctiva y a la revocación de su fallo. Pueblo v. Baranco, 92 D.P.R. 558 (1965).

El derecho inherente de un juez a interrogar los testigos que ante el comparecen-al cumplir con su función de juzgar-no solo constituye una de sus prerrogativas, sino un deber en su misión de juzgar y aclarar la verdad. Pueblo v. Baranco, 92 D.P.R. 558 (1965).

Es improcedente la concesión de un nuevo juicio por el fundamento de que el tribunal sentenciador privó al acusado de un juicio justo e imparcial al negarse a trasladar su caso a otra sala si el apelante no hizo planteamiento alguno durante el juicio en relación con el incidente de las esposas, en la vista de la moción de nuevo juicio quedo demostrado que ninguno de los jurados que lo juzgo se entero siquiera de dicho incidente, y en el record hay ausencia total de que tal incidente causara perjuicio sustancial al acusado. Pueblo v. López Varela, 92 D.P.R. 378 (1965).

Es improcedente plantear en apelación que el acusado no tuvo un juicio justo e imparcial por la circunstancia de que uno de los miembros del jurado formo parte de otro jurado anterior que intervino en el caso contra otros dos acusados por el propio hecho, si planteada la cuestión por el propio fiscal, y proponiéndose el juez disolver el jurado, es la propia defensa quien se opone a tal disolución, y a instancias del juez renuncia expresamente a levantar esa cuestión. Pueblo v. Santos Colón, 92 D.P.R. 323 (1965).

El Estado será obligado a divulgar el nombre y la dirección de un confidente-participante por un tribunal de justicia cuando hacerlo sea necesario para garantizarle la oportunidad de tener un juicio justo. Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965).

Un acusado no puede alegar que el tribunal inferior había cometido error al negarse a suspender la vista del caso, cuando en ningún momento la defensa solicitó la suspensión de la vista y en ningún momento le fue negada. Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964).

Es válido un veredicto en el cual, aunque se expresaba el grado, se omitió especificar el nombre del delito del cual fue declarado culpable el acusado, una vez el presidente del jurado-por indicaciones del juez a los efectos de que debía completarse el veredicto por haber un error clerical en el mismo-subsana el formulario de veredicto en sala, insertando el nombre de dicho delito, maxime cuando una vez hecha la inserción correspondiente en dicho formulario, el juez de instancia inquiriere si el veredicto representaba el acuerdo de la mayoría del jurado y este último contesta en la afirmativa. Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R. 467 (1964).

Cuando un tribunal de instancia indebidamente impide que vaya al jurado prueba de defensa por un error de derecho, procede que se revoque la sentencia dictada y se conceda un nuevo juicio al acusado. Pueblo v. Rosado Alvarado, 89 D.P.R. 875 (1964).

2. Nuevas pruebas.

La moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nueva prueba procede cuando la misma: (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del juicio; (2) no es meramente acumulativa; (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio; (4) es creíble, y (5) probablemente produzca un resultado diferente. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

Procede denegar una moción de nuevo juicio fundada en nueva prueba cuando los peticionarios no

indican específicamente en que consistiera esa nueva prueba. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodovar, 121 D.P.R. 454 (1988).

Si el descubrimiento de nueva prueba no es suficiente por si solo para derrotar la determinación de culpabilidad, no procede la moción de nuevo juicio basada en dicho descubrimiento. A menos que se demuestre inequívoco abuso de discreción del tribunal de instancia no se intervendra con su decisión. Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107 (1984).

No procede declarar con lugar una moción de nuevo juicio en una causa **criminal** fundada en el descubrimiento del testimonio de un testigo de defensa cuando dicho testigo declaro en la vista preliminar del caso y el acusado tuvo oportunidad de presentarlo como su testigo durante el juicio. Pueblo v. Gonzalez Barreto, 106 D.P.R. 152 (1977).

No comete error un juez al denegar una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas-la que va dirigida a la discreción del tribunal-si la prueba pudo ser obtenida y presentada en el juicio por el acusado mediante el ejercicio de una diligencia razonable, maxime cuando el juez no le dio credito al testimonio del nuevo testigo de la defensa que declaro en la vista de dicha moción, habiendo hecho constar dicho juez, al resolver la moción de nuevo juicio "No creo que su testimonio como testigo de defensa hubiese cambiado el veredicto a que arribara el jurado en estos casos". Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574 (1974).

No se requiere un nuevo juicio cada vez que un repaso de los archivos de fiscalia después del juicio descubre evidencia que, si bien pudo ser de utilidad a la defensa, con toda probabilidad no hubiera cambiado el veredicto. Pueblo v. Martínez Valentin, 102 D.P.R. 492 (1974).

Comete error un tribunal al declarar con lugar una moción de nuevo juicio fundamentada en esta regla-prueba recientemente descubierta-cuando la misma no expresa cuales fueron las diligencias que practicara el acusado para descubrir las nuevas pruebas encontradas después de la celebración del juicio ni el acusado acompaña dicha moción con la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de los testigos que la aduciran. Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 700 (1972).

No comete error un tribunal al declarar sin lugar una moción de nuevo juicio, radicada antes de dictarse sentencia, basada en que no se le dio oportunidad al acusado de presentar pruebas sobre manifestaciones de algunos jurados al deliberar sobre el veredicto en cuanto a extremos no cubiertos por la prueba y que eran perjudiciales al acusado, la cual no fue acompañada de declaraciones juradas en apoyo de sus contenciones-moción que, antes de ser resuelta, fue complementada por cierta moción informativa no jurada, en la cual expresaba que su solicitud de nuevo juicio descansaba en el testimonio oral de una jurado y una estenotipista del tribunal, las cuales se alego se negaban a testificar-cuando en la vista de dicha moción de nuevo juicio el acusado no presenta prueba alguna, y el tribunal resolvio que el planteamiento del acusado era improcedente y, por lo tanto, era innecesario citar a dichos testigos. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

Fundamentada una moción de nuevo juicio en hechos que no constan en el record, el acusado viene obligado a establecerlos en la vista de la moción mediante evidencia competente, recurriendo, si fuese necesario, a la citación de testigos bajo la Regla 235. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

Un tribunal no comete error al denegar una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas cuando tal prueba pudo ser obtenida y presentada en el juicio por el acusado mediante el ejercicio de una diligencia razonable. Pueblo v. Arroyo Nunez, 99 D.P.R. 842 (1971); Pueblo v. Asencio Trinidad, 95 D.P.R. 473 (1967).

Una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nuevas pruebas va dirigida a la discreción del tribunal sentenciador, y su actuación no sera alterada en apelación a menos que se demuestre un claro e inequivoco abuso de discreción. Pueblo v. Vazquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968); Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964).

Una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nuevas pruebas bajo las disposiciones de esta regla solo prosperara si dichas nuevas pruebas no se pudieron descubrir antes del juicio, a pesar de haberse empleado la mayor actividad razonable. Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964).

Un tribunal no incurre en un abuso de discreción al denegar una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas cuando tal prueba, de haberse admitido, no hubiese cambiado el veredicto de culpabilidad rendido. Pueblo v. Vazquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968).

Un tribunal debe declarar sin lugar una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de alegada nueva prueba-la cual va dirigida a la sana discreción del tribunal-cuando esta es prueba acumulativa para la defensa e impugnatoria de la aducida durante el juicio por el Estado. Pueblo v. Gonzalez de Demora, 92 D.P.R. 75 (1965).

3. Presencia del acusado.

Un tribunal esta autorizado a conceder un nuevo juicio cuando el acusado no estuvo presente en cualquier etapa del proceso, salvo cuando su ausencia es voluntaria segun lo dispone la Regla 243. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969).

4. Falta de transcripción.

A los fines de obtener un acusado un nuevo juicio bajo las disposiciones de esta regla, no basta que no pueda obtenerse la transcripción de las pruebas siendo necesario, ademas, demostrar la imposibilidad de preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa segun se dispone en las Reglas 208 y 209. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

5. Conducta del jurado.

No existe ningun término en ley para la celebración de un nuevo juicio a un acusado cuando el primer jurado fue disuelto por no poder llegar a un veredicto, más el mismo debe celebrarse dentro de un término razonable. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

En la determinación de si se ha o no violado el derecho Constitucional de un acusado a un segundo juicio rapido, lo importante es que la demora en celebrar el juicio no sea irrazonable. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

Procede revocar una sentencia **criminal**-por vulnerar los principios Constitucionales de debido proceso de ley e imparcialidad-cuando un jurado no actua con la objetividad y ecuanimidad que demanda su alto ministerio, al someter a casi todos los testigos a acucioso interrogatorio, abriendo y explorando areas de información con total menosprecio de la relevancia o admisibilidad de la evidencia, valiendose para interrogar de listas de preguntas preparadas de antemano, interrumpiendo y argumentando con testigos y con el propio tribunal, solicitando y obteniendo la producción de evidencia documental que ni el fiscal ni la defensa habian estimado necesaria y pidiendo y logrando el retorno a la silla de los testigos del principal testigo de cargo y unico presencial de los hechos, cuando ya habia sido excusado y no se hallaba bajo las reglas del tribunal y ya oida y admitida prueba originada por otros testimonios, llegando dicho jurado al extremo de que, en dos ocasiones en que el fiscal no considero necesario utilizar su turno de preguntas, saltaron a la valla los juzgadores con las suyas. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

Examinada la prueba en el caso de autos-convicción por el delito de asesinato en primer grado-la sentencia condenatoria dictada debe revocarse y concederse un nuevo juicio por razon de la anomala intervencion de los jurados en el juicio que desnaturalizo el proceso judicial en perjuicio de la imparcialidad a que tenia derecho el acusado. Pueblo v. Martin Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

No constituye un error que justifique la revocación de una sentencia y la concesión de un nuevo juicio el hecho de que un miembro de un jurado, durante el juicio, haga una gestion personal impropia en busca de informacion sobre el acusado cuando este ultimo no ofrece prueba o indicio alguno de informacion solicitada por y transmitida al miembro del jurado en cuestion que en forma alguna le fuese perjudicial. Pueblo v. Martínez Brito, 99 D.P.R. 493 (1970).

Para que prospere una mocion de nuevo juicio basada en que los miembros del jurado se separaron una vez que les fue sometido el caso para su deliberacion, esta debe presentarse al tribunal sentenciador antes de que este dicte sentencia. Pueblo v. Meléndez Burgos, 90 D.P.R. 792 (1964).

6. Conducta del fiscal.

No quedan perjudicados los derechos sustanciales de un acusado por el hecho de que, durante los informes al jurado, el fiscal en una ocasion tildara de "asesino" al acusado cuando el juez sentenciador inmediatamente amonesto al fiscal advirtiendole que no deberia hacer referencia en adelante al apelante en esa forma. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969).

Procede revocar una sentencia cuando un fiscal insistentemente trata de introducir en evidencia prueba que fue debidamente rechazada por el juez sentenciador bajo las disposiciones de la sec. 1734 del Titulo 32-el testimonio de la esposa del acusado-y finalmente dicho funcionario comenta ante el jurado dicha prueba inadmisibile, en ausencia de una instruccion del juez que evite que el jurado infiera-de la última tentativa del fiscal de ofrecer el testimonio de la esposa y de que le era imposible traerla como testigo debido a disposiciones de ley-que ese testimonio era importante, corroboraba el testimonio de las perjudicadas y tendia a confirmar la culpabilidad del esposo acusado. Pueblo v. Santiago Gonzalez, 97 D.P.R. 99 (1969).

Aun cuando observaciones de un fiscal investigador relativas a ciertos hechos relacionados con el delito imputadole al acusado pudieran considerarse inadmisibles por razon de un allanamiento irrazonable, un tribunal no comete error al admitirlas cuando ellas constituian solo evidencia de unos elementos corroborativos, pero no decisivos en la determinación de la culpabilidad del apelante, ante un record en que el jurado tuvo prueba directa, independientemente de dichas observaciones, de la ocurrencia del accidente en que se causo una muerte, asi como del vehículo y la persona que lo causo, maxime cuando en su declaracion dicho fiscal no dijo al jurado que la residencia por el visitada donde estaba el vehículo homicida era la del acusado. Pueblo v. Alvarez Solares, 95 D.P.R. 789 (1968).

Constituye un **procedimiento** altamente impropio por parte del fiscal en un caso de hurto mayor que violenta el derecho de la acusada a un juicio imparcial y justo-error que da lugar a la revocación de la sentencia dictada-el que dicho funcionario trate de establecer mediante su interrogatorio a la acusada, que esta habia cometido hurtos anteriormente, especificamente, el hurto de las sortijas de matrimonio que usaba mientras declaraba en el caso. Pueblo v. Vega Román, 92 D.P.R. 677 (1965).

No se considerara un alegado error al denegar una mocion de nuevo juicio basada en la alegada conducta impropia del fiscal cuando el mismo solo constituye un planteamiento vago hecho por la defensa, quien no objeto las palabras del fiscal a su debido tiempo, no las llevo al record, ni solicito que el juez declarara un *mistrial* ni la disolucion del jurado, maxime cuando el comentario del fiscal durante su informe al jurado, del cual se queja la acusada, no fue decisivo ni perjudico sustancialmente a la apelante. Pueblo v.

Gonzalez de Demora, 92 D.P.R. 75 (1965).

La confesión extraída por el fiscal estando el acusado en estado semiconsciente, encontrándose gravemente herido y sufriendo grandes dolores físicos creo tal situación de fundamental injusticia que vicio el juicio posteriormente celebrado en que se utilizó dicha confesión. Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731 (1964).

Se examina la acusación, la confesión del acusado y la prueba en este caso para concluir que la enmienda a la acusación solicitada por el fiscal para conformarla con la prueba de cargo-la cual autorizo el tribunal a quo-no perjudico los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Rodríguez Marrero, 90 D.P.R. 487 (1964).

Regla 189. NUEVO JUICIO; CUANDO SE PRESENTARA LA MOCIÓN.

La moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de que se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare en lo dispuesto en el inciso (e) de la Regla 188 deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o incapacidad del taquígrafo o de la pérdida o destrucción de sus notas, y cuando se fundare en lo dispuesto en la Regla 192 deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 304; Fed. R. Crim. P. 33; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1182; Código modelo, R. 362.

ANOTACIONES

1. En general.

Entre los fundamentos para que un tribunal ordene la celebración de un nuevo juicio, ya sea a instancia propia con el consentimiento del acusado o a solicitud de éste, se encuentra el de conocimiento de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que de haber estado disponibles hubiesen alterado el resultado del proceso anterior. Las Reglas de **Procedimiento Criminal** proveen dos mecanismos para la concesión de un nuevo juicio por este fundamento. La regla 188 puede ser invocada a estos efectos en moción fundamentada y por escrito presentado ante el tribunal de instancia antes de que se dicte sentencia. Por otro lado, la regla 192 permite presentar esta moción después de dictada la sentencia, con la única condición de que sea dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o elementos de prueba. 2007 DTS 065 Pueblo v. Díaz Morales 2007 TSPR 065, Opinión de Conformidad.

Como regla general, una moción de nuevo juicio debe presentarse antes de que se dicte sentencia. Pueblo v. Matos Rodríguez, 91 D.P.R. 635 (1965).

Regla 190. NUEVO JUICIO; MOCIÓN; REQUISITOS; NOTIFICACIÓN.

La moción solicitando nuevo juicio se presentará por escrito, deberá expresar todos los fundamentos en que se base y se notificará al fiscal.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 363.

Regla 191. NUEVO JUICIO; EFECTOS.

Al concederse un nuevo juicio, éste deberá celebrarse por un delito que no será mayor en grado, o que no podrá ser de mayor gravedad que aquél del cual fue convicto el acusado en el juicio anterior. En el nuevo juicio no podrá utilizarse el veredicto o fallo anterior o hacerse referencia a él, ni como prueba ni como argumento, ni podrá alegarse como fundamento para desestimar la acusación bajo el inciso (e) de la Regla 64.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 302; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1180; Código modelo, R. 368.

Disposiciones Constitucionales.

La Sec. 11 del Art. 11 de la Constitución, precediendo al Título 1, dispone en parte: "Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito."

Contrarreferencias.

Exposición anterior, Véase la sec. 6 de este título.

Regla 192. NUEVO JUICIO; CONOCIMIENTO DE NUEVOS HECHOS.

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado.

HISTORIAL

Contrarreferencias.

Procedimiento para formalizar la apelación, Véase la Regla 194 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Asistencia de abogado.

1. En general.

Tanto el contrato de informante retribuida ... como el expediente policiaco constituyen prueba que confronta la evidencia del Estado y sirve para impugnar su credibilidad y contradecirla. De haber estado sujeta a la adjudicación del Tribunal de Primera Instancia, esta prueba hubiera razonablemente socavado la confianza en la única evidencia que sostenía la acusación del Estado, el testimonio de [la informante], testimonio que además requiere un trato particular y cauteloso. 2008 DTS 124 Revoca y concede nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez Colón, 2008 TSPR 124

Entre los fundamentos para que un tribunal ordene la celebración de un nuevo juicio, ya sea a instancia propia con el consentimiento del acusado o a solicitud de éste, se encuentra el de conocimiento de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que de haber estado disponibles hubiesen alterado el resultado del proceso anterior. Las Reglas de **Procedimiento Criminal** proveen dos mecanismos para la concesión de un nuevo juicio por este fundamento. La regla 188 puede ser invocada a estos efectos en moción fundamentada y por escrito presentado ante el tribunal de instancia antes de que se dicte sentencia. Por

otro lado, la regla 192 permite presentar esta moción después de dictada la sentencia, con la única condición de que sea dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o elementos de prueba. 2007 DTS 065 Pueblo v. Díaz Morales 2007 TSPR 065, Opinión de Conformidad.

Por tener como objetivo lograr la revocación de convicciones y sentencias finales y firmes, la Regla 192.1 debe ser vista por los tribunales como una de naturaleza excepcional. Así, las mociones a su amparo deben ser examinadas con un gran cuidado, desplegándose en todo momento un juicioso y responsable ejercicio de discreción. 2007 DTS 002 Pueblo v. Román Martir, 2007 TSPR 002

En el contexto de las Reglas de **Procedimiento Criminal**, la Regla 192 se diferencia de la Regla 192.1 en que busca la rescisión de una sentencia por razón del descubrimiento de nuevos hechos, **no de errores de derecho**. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995), 95 JTS 115. Se distingue de un recurso de apelación en que **no se fundamenta en errores de derecho o en la apreciación incorrecta de errores de hecho**, sino que introduce al proceso elementos fácticos completamente nuevos, que no constaban en los autos del tribunal sentenciador y que, de ordinario, no hayan lugar en la revisión de una sentencia. De buscarse la rectificación de una apreciación errónea de la prueba, el **procedimiento** correcto es la apelación. 2000 DTS 169 (2000) Pueblo v. Marcano Parrilla, 2000 T.S.P.R. 169 (2000); 152 D.P.R. 557 (2000).

Bajo esta regla, la prueba requerida para conceder un nuevo juicio después de dictada la sentencia debe ser tal que deje clara la inocencia del convicto al punto que la continuación de su encarcelamiento ofenda el sentido de justicia. Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557 (2000).

Aunque en el ordenamiento jurídico nada se dispone que aplique específicamente al testimonio retractado, no parece haber decisiones federales en las cuales la retractación de un testimonio judicial por una víctima haya sido considerada base suficiente para conceder nuevo juicio. Pueblo v. Chevere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995).

En las jurisdicciones estatales norteamericanas prevalece al igual que en Puerto Rico la norma general de que retractarse es inconfiable, sospechoso y no base suficiente para conceder nuevo juicio. Pueblo v. Chevere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995).

En casos donde la víctima de un delito sexual, y principal testigo de cargo, se retracta posteriormente de su testimonio judicial, los tribunales de diversas jurisdicciones han denegado la solicitud de nuevo juicio, sobre todo cuando dicho testigo repudia su retracción y retoma su versión original. Pueblo v. Chevere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995).

Solo en escasas situaciones donde se han visto dudas sobre la veracidad de lo declarado por el testigo es que se ha considerado conceder nuevo juicio. Pueblo v. Chevere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995).

2. Asistencia de abogado.

Una moción de nuevo juicio no constituye una etapa crítica del proceso **criminal** para la cual haya que proveerle al acusado asistencia de abogado; trece años después de ser condenado, el peticionario no estuvo en una etapa crucial del proceso **criminal** con sus garantías Constitucionales. 2006 DTS 78 (2006) Pueblo v. Rivera, 2006 TSPR 78 (2006); 167 D.P.R. ____ (2006).

XIII-A. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA CONVICCIÓN

REGLA 192.1 **PROCEDIMIENTO POSTERIOR A SENTENCIA; ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR Y EL TRIBUNAL DE DISTRITO. (34 L.P.R.A. Ap. II R 192.1)**

(a) *Quiénes pueden pedirlo.* Cualquier persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (a) la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, o (c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.

La moción para dichos fines podrá ser presentada en cualquier momento. En la moción deberán incluirse todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se considerará que los fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente presentarse en la moción original.

(b) *Notificación y vista.* A menos que la moción y los autos del caso concluyentemente demuestren que la persona no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que se notifique con copia de la moción, si se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Superior, al fiscal de la sala correspondiente, y si se trata de una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la sala del Tribunal Superior a la cual puedan apelarse las sentencias de dicho Tribunal de Distrito. El tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si no la tuviere, señalará prontamente la vista de dicha moción, se asegurará de que el peticionario ha incluido todos los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las cuestiones en controversia y formulará determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con respecto a la misma.

Si el Tribunal determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal violación de los derechos Constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, según proceda.

El tribunal podrá considerar y resolver dicha moción sin la presencia del solicitante en la vista, a menos que se plantee alguna cuestión de hecho que requiera su presencia.

El tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar otra moción presentada por el mismo confinado para solicitar el mismo remedio.

La resolución dictada por el Tribunal de Distrito será apelable ante el Tribunal Superior correspondiente el cual deberá celebrar una nueva vista. La resolución dictada por el Tribunal Superior en estos casos, en procedimientos originales o en apelación del Tribunal de Distrito, será revisable por el Tribunal Supremo mediante *certiorari*.

(Adicionada en Marzo 9, 1967; Junio 2, 1967, Núm. 99, p. 338, ef. 60 días después de Mayo 15, 1967.)

HISTORIAL

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Enmiendas

-1967, ley 99. La ley de 1967, Núm. 99, enmendó esta regla en terminos generales.

Vigencia.

El art. 2 de la Ley de Junio 2, 1967, Núm. 99, p. 338, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] entrara en vigor cuando entren en vigor las **Reglas de Procedimiento Criminal** para el Tribunal General de Justicia (Enmiendas) [60 días después de 15 de mayo de 1967], adoptadas por el Tribunal Supremo el 9 de marzo de 1967 y remitidas a la Asamblea Legislativa en esa misma fecha [Véase la sec. 6 del art. V de la Constitución]."

Disposiciones especiales.

Formulario de la Moción bajo la Regla 192.1.

Informes de la Comisión de Derechos Civiles.

Esta regla debe revisarse para que su aplicación sea lo más amplia y liberal posible y para armonizar adecuadamente este mecanismo procesal a las disposiciones legales vigentes sobre **procedimiento criminal**, particularmente el habeas corpus y el *coram nobis*. 1 Der. Civ. 619, n. 38 (1968-CDC-012).

No basta con que se haya establecido un remedio especial con posterioridad la convicción; precisa también revisar el **procedimiento criminal** a fin de eliminar en lo posible las practicas que puedan dar margen a planteamientos Constitucionales, y no debe esperarse al **procedimiento** extraordinario del remedio posterior a la convicción para proveerle al acusado la protección Constitucional que se le nego en el juicio en primera instancia o en el periodo de apelación ordinario. 1 Der. Civ. 619, n. 39 (1968-CDC-012).

Los procesos criminales en los tribunales de distrito deben ventilarse con la participación compulsoria de fiscales, salvo en los casos menos graves que constituyen faltas de transito, pues no solo se evitarian los reparos Constitucionales sino también se daria realce y prestigio al Tribunal de Distrito. 1 Der. Civ. 619, n. 30 (1968-CDC-012).

Contrarreferencias.

Corrección de sentencia, Véase la Regla 185 de este apéndice.

Habeas corpus, veanse las secs. 1741 y 1742 de este titulo.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Agotamiento de remedios.
3. Coram nobis.

1. En general.

El principio de especialidad exige que la pena en reincidencia impuesta a la peticionaria fuera la provista en la Ley de Sustancias Controladas y no la del Código Penal de 1974. La Regla 192.1 de **Procedimiento Criminal**, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, autoriza al tribunal que impuso la sentencia a anularla, dejarla sin efecto, o corregirla, cuando la misma fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cuando la sentencia impuesta excede la pena prescrita por ley. 2007 DTS 138 (2007) Pueblo V. Ramos Rivas, 2007TSPR138 (2007)

En el contexto de las Reglas de **Procedimiento Criminal**, la Regla 192 se diferencia de la Regla 192.1 en que busca la rescisión de una sentencia por razón del descubrimiento de nuevos hechos, **no de errores de derecho**. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995), 95 JTS 115. Se

distingue de un recurso de apelación en que **no se fundamenta en errores de derecho o en la apreciación incorrecta de errores de hecho**, sino que introduce al proceso elementos fácticos completamente nuevos, que no constaban en los autos del tribunal sentenciador y que, de ordinario, no hayan lugar en la revisión de una sentencia. De buscarse la rectificación de una apreciación errónea de la prueba, el **procedimiento** correcto es la apelación. 2000 DTS 169 (2000) Pueblo v. Marcano Parrilla, 2000 T.S.P.R. 169 (2000); 152 D.P.R. 557 (2000).

Esta regla constituye un mecanismo procesal apropiado para que un convicto de delito plantee la alegada privación de su derecho a tener una adecuada representación en la etapa apelativa. La determinación que en relación con la misma haga el foro de instancia, luego de escuchar y admitir la prueba que al respecto sea presentada por las partes, debiera ser una fundada en prueba convincente y satisfactoria. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993).

Un fallo absolutorio predicado exclusivamente en la errónea decisión de una cuestión de derecho no impide su revisión por *certiorari* y la devolución al tribunal de instancia para la continuación del juicio. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976).

Planteada la insuficiencia de la acusación por un acusado después de presentada toda la prueba en el juicio y cerrados los informes al jurado, de prosperar dicha moción, dicho acusado esta sujeto a un segundo juicio a base de una acusación enmendada. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976).

No procede que un tribunal considere bajo las disposiciones de esta regla, una petición para anular sentencias cuando el peticionario no se halla detenido en virtud de alguna de las sentencias cuya validez ataca, sentencias que ya fueron cumplidas por el. Correa Negron v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

Una moción para anular sentencias dictadas y ya cumplidas-no una moción bajo esta regla, ni un auto de habeas corpus ni un auto de *coram nobis*-es el vehículo apropiado para solicitar la anulación y eliminación del record penal de un acusado de varias sentencias dictadas por las antiguas Corte Municipal y Corte de Distrito de Mayaguez. Dicha moción debe ser notificada al fiscal de distrito. Correa Negron v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

La presunción de regularidad acompaña a todas las sentencias de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sujetas a ataque colateral por una petición de habeas corpus, y el acusado que solicita fianza pendiente la apelación tiene la carga de probar que el tribunal del estado procedió de manera arbitraria al denegar su solicitud de fianza, violando así los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado. Natal v. People of Puerto Rico, 424 F. Supp. 1082 (1975).

Es el *certiorari* el recurso apropiado para revisar las sentencias dictadas bajo las disposiciones de esta regla. U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974).

Considerada una supuesta apelación como una solicitud de *certiorari*, el alegato del supuesto apelante se considerara como los fundamentos de su petición. U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974).

Declarada la invalidez de una sentencia por desacato **criminal**, un tribunal, bajo las disposiciones de esta regla, tiene autoridad para resentenciar al encausado bajo las disposiciones de la ley correcta, entre otras alternativas, dictando una nueva sentencia. U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974).

Impugnada la validez de una sentencia por desacato **criminal** mediante un recurso de habeas corpus y anulada la misma, el tribunal viene obligado a dictar una nueva sentencia correcta, teniendo jurisdicción no solo para resentenciar sino para aumentar la pena. U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974).

Un juez sentenciador no viene obligado a celebrar una vista para considerar una moción radicada por un convicto y sentenciado al amparo de las disposiciones de esta regla cuando dicha moción y los autos del caso concluyentemente demuestran que dicho convicto no tiene derecho a remedio alguno. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

2. Agotamiento de remedios.

Actuaron incorrectamente los foros de instancia y de apelación al resolver que carecían de jurisdicción para atender un recurso de habeas corpus cuando no existía una determinación de la legalidad de la encarcelación del peticionario en un recurso de habeas corpus anterior y existían circunstancias excepcionales por no haber usado los remedios ordinarios post sentencia. 2006 DTS 45 (2006) Quiles v. Del Valle, 2006 TSPR 45 (2006); 167 D.P.R. ____ (2006).

La moción del peticionario a tenor con estas reglas, alegando detención ilegal, fue presentada incorrectamente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico; por consiguiente, la orden denegando dicha moción por elección de jurisdicción incorrecta no constituyó un agotamiento de los remedios estatales que permitieran al peticionario mantener una petición de habeas corpus ante las cortes federales. Cruz Sánchez v. Rivera Cordero, 728 F.2d 1531 (1984).

Un puertorriqueño detenido, que solicita un habeas corpus federal, no ha agotado todos los remedios estatales disponibles y la petición no será considerada por la corte federal si el detenido no ha apelado al Tribunal Supremo de Puerto Rico la denegación de su petición de habeas corpus por el Tribunal Superior. Donovan v. Delgado, 339 F. Supp. 446 (1971); García v. Ramirez, 337 F. Supp. 39 (1971).

3. Coram nobis.

El *coram nobis* es un recurso proveniente del *common law* mediante el cual se puede dejar sin efecto, o modificar, una sentencia dictada en un **procedimiento criminal** a base de hechos que no surgen de los autos, que existían antes de dictarse la sentencia, que hubiesen afectado la sentencia si el tribunal hubiese conocido la totalidad de los hechos y que no eran conocidos por la parte promovente, ni podían ser descubiertos por el promovente mediante el ejercicio de razonable diligencia. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993).

Designase como auto de *coram nobis* aquel dirigido a un tribunal que dictó una sentencia para que la deje sin efecto o la modifique, a base de hechos que no surgen de los autos que existían antes de dictarse la sentencia y que no eran conocidos por la parte promovente ni por el tribunal ni podían ser descubiertos por el promovente mediante el ejercicio de razonables diligencias. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

No procede el recurso de *coram nobis* para revisar un ataque a una sentencia basado en falta de jurisdicción del tribunal que la dictó, por ser una cuestión de derecho. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

El recurso de *coram nobis* o *coram vobis*-el cual procede del *common law*-se aplica tanto en casos civiles como criminales. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

No es apelable una resolución que niega de plano el auto de *coram nobis*. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

XIV. APELACIONES

Regla 193. APELACIÓN AL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES.

Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos el acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un recurso de certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional.

(Octubre 24, 1968; Junio 26, 1974, Núm. 91, Parte 1, p. 339, art. 1; Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 1; Enero 6, 1998, Núm. 5, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 345 a 347 y 349; Fed. R. Crim. P. 37(b); Código modelo, Rs. 422 y 429; Ley de Mayo 28, 1904, p. 17, art. 1; Ley de Mayo 4, 1949, Núm. 172, p. 547, art. 1.

Enmiendas

-1998, ley 5. La ley de 1998 sustituyo "Tribunal Supremo" en el rubro con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" para corresponder con el texto enmendado en 1995.

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyo "Tribunal Superior" con "Tribunal de Primera Instancia"; "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" y la frase final de la segunda oración, "a ser librado..." con "en cuyo caso...", y añadió la última oración.

-1974, ley 91. La Ley de Junio 26, 1974, elimino las disposiciones referentes al juicio *de novo*. Sin embargo, la Ley de Julio 19, 1974, Núm. 1, Parte 2, p. 635, dispone:

"No obstante las disposiciones de la Ley Num. 91 de 26 de junio de 1974, que enmendó las Reglas 193, 216 y 217 de **Procedimiento Criminal** de Puerto Rico, segun enmendadas, todo convicto en un **procedimiento criminal** en el cual no hubiere participado un fiscal tendra derecho a juicio *de novo*, bajo las disposiciones de dichas Reglas 193, 216 y 217 segun regian antes de enmendarse por la Ley Num. 91 antes mencionada."

-1968. La resolución de 1968 añadió las referencias a juicios *de novo* y suprimio la referencia a la sentencia condenatoria final dictada en el Tribunal Superior.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 26, 1974, Núm. 91, Parte 1, p. 339.

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Enero 6, 1998, Núm. 5.

Salvedad.

El art. 23 de la Ley de Diciembre 25, 1995, Núm. 251, dispone:

"Si cualquier parte, artículo, párrafo o cláusula de esta Ley fuere declarada inConstitucional por un tribunal con jurisdicción, tal dictamen no afectara ni invalidara el resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inConstitucionalidad quedara limitado a la parte, artículo, párrafo o cláusula de esta Ley que hubiere sido declarada inConstitucional."

Disposiciones especiales.

La Resolución de Septiembre 7, 1978, dispone:

"Consideradas las pertinentes disposiciones de ley, el Tribunal entiende que no es necesario jurar las peticiones de *certiorari* ni cancelar sellos de rentas internas al radicarse dicho recurso."

Contrarreferencias.

Apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal de Primera Instancia, Véase el Ap. III-A del Título 4.

Competencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Véase la sec. 24y del Título 4.

Competencia del Tribunal de Primera Instancia, Véase la sec. 25d del Título 4.

Competencia del Tribunal Supremo, Véase la sec. 24s del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

2. Apelación improcedente.

1. En general.

Mientras exista una determinación de culpabilidad y el acusado este sometido a la jurisdicción del tribunal o el caso no se haya sobreesido, el recurso apropiado para cuestionar el dictamen de culpabilidad sera la apelación interpuesta oportunamente a tenor con la Ley de la Judicatura y las Reglas 193 y 194 de **Procedimiento Criminal**. 2000 DTS 041 (2000) Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 2000 TSPR 41 (2000); 150 D.P.R. 519 (2000).

Los jueces de instancia y los jurados normalmente estan en mejores condiciones de aquilatar la prueba oral porque tienen la ventaja de ver y escuchar directamente a los testigos y por ello sus determinaciones sobre credibilidad merecen gran respeto. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

No habiendose justificado que el tribunal de instancia hubiera cometido un claro abuso de discreción al imponer una pena que bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como castigo cruel e inusitado, no procede revisar la imposición de dicha pena en apelación. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991).

En ausencia de pasion, prejuicio o error manifiesto, el Tribunal Supremo no intervendra con el veredicto de culpabilidad emitido por el juzgador de los hechos. Pueblo v. Reyes Moran, 123 D.P.R. 786 (1989).

No se intervendra con la apreciación de la prueba y la apreciación de credibilidad del jurado en recurso de apelación de convicción, a menos que hubiere error manifiesto, pasion, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730 (1987); Pueblo v. Millan Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. Ledee Ramirez, 102 D.P.R. 679 (1974).

No se intervendra con la apreciación y adjudicación de credibilidad que en relación con la prueba testifical haya realizado el juzgador de los hechos en instancia, excepto en casos en que un analisis integral de dicha prueba cause insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca su sentido basico de justicia. Pueblo v. Caban Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Morales Suarez, 117 D.P.R. 497 (1986).

La responsabilidad de demostrar que procede la intervención con el fallo o veredicto condenatorio emitido en instancia recae, de manera principal, sobre el apelante. Pueblo v. Caban Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Najul Baez, 111 D.P.R. 417 (1981).

Es revisable como cuestion de derecho la determinación de si se ha probado la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo v. Pagan Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, más no es absoluto. Una apreciación erronea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora del Tribunal Supremo. Viuda de Morales v. De Jesus Toro, 107 D.P.R. 826 (1978).

No tiene jurisdicción el Tribunal Supremo para entender en un recurso de apelación entablado en un caso **criminal** por violación a las secs. 257 et seq. del Título 10, cuando el acusado hizo una alegación de *nolo contendere* ante el tribunal de instancia. En este caso, solo procede revisar la sentencia dictada mediante una solicitud de *certiorari* bajo esta regla. Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202 (1977).

Ante una alegación de culpabilidad hecha por un acusado, solamente procede el recurso de *certiorari* a ser librado discrecionalmente por el Tribunal Supremo a los fines limitados de examinar las defensas dirigidas a atacar la suficiencia de la acusación y la jurisdicción del tribunal. Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202 (1977).

La prescripción de un delito no es una defensa de caracter jurisdiccional, y por ende no es susceptible de ser levantada en apelación mediante el *certiorari* establecido en esta regla. Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202 (1977).

Contra sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal Superior, la apelación al Tribunal Supremo que autoriza esta regla se da unicamente al acusado, no al Estado. Pueblo v. Dominguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

Como quiera que el caso del peticionario aun estaba pendiente en apelación ante los tribunales del estado, el tribunal federal de tres jueces no tenía jurisdicción para conocer de la petición en que solicito que se prohibiera al Tribunal Supremo de Puerto Rico que aplicara las reglas de **procedimiento criminal** y la regla del propio Tribunal Supremo respecto de la transcripción de evidencia y la concesión de tiempo para su preparacion, y que se ordenara a dicho Tribunal que no considerara la apelación del peticionario excepto a base de la totalidad de la transcripción de la evidencia; el término "procesos criminales pendientes", a los efectos de la doctrina "Younger", incluye la etapa de la apelación. Dones-Arroyo v. Trias-Monge, 430 F. Supp. 315 (1976).

Unicamente debe apelarse una sentencia condenando a un acusado cuando se tiene la convicción de que se ha cometido un error que amerite la revocación de la sentencia. Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975); Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974).

No comete error un tribunal al resolver que en una apelación no se planteaba una cuestion sustancial cuando la unica base del recurso consiste en alegar que el veredicto del jurado no era valido por haberse producido por mayoría y no por unanimidad. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

El tribunal de instancia tuvo amplia base para hallar culpable de homicidio voluntario al apelante, existiendo en la prueba los fundamentos indispensables para probar los diferentes elementos del delito. Pueblo v. Rosario Villafane, 102 D.P.R. 528 (1974).

Una apelación se da contra la sentencia dictada y no contra sus fundamentos. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).

Unos peticionarios, que fueron acusados de violar la ley local sobre armas, un delito menos grave, y cuyos casos fueron señalados para juicio en el Tribunal de Distrito del Estado Libre Asociado del que tenían derecho a apelar al Tribunal Superior y a apelar o a solicitar revisión por *certiorari* en el Tribunal Supremo, no tenían derecho a un entredicho sobre la base de que si fueran juzgados sus derechos resultarían violados porque las reglas permiten que el juez que preside el tribunal actue como juez y como fiscal, y los peticionarios no tenían derecho a juicio por jurado toda vez que no habían agotado todos los remedios adecuados en los tribunales locales. Rodríguez Rivera v. Maiz, 331 F. Supp. 713 (1971).

Resuelto por el tribunal de instancia un conflicto entre los testimonios de peritos de las partes en un pleito en cuanto a la causa de danos ocasionados, no se justifica que se alteren sus conclusiones en apelación, ya que las mismas tienen sobrado sosten en la prueba desfilada. *Barrientos v. Gobierno de la Capital*, 97 D.P.R. 552 (1969), certiorari denegado, *American Surety Co. v. Barrientos*, 400 U.S. 866; 91 S. Ct. 103; 27 L. Ed. 2d 104 (1970).

No se interviene en apelación en el ejercicio de la sana discreción del juez sentenciador al apreciar la prueba, ni se constituye en tribunal de primera instancia para sustituir su criterio por el de dicho juez sentenciador. *Pueblo v. Ortega Otero*, 97 D.P.R. 477 (1969).

Aun cuando la norma general es que no se interviene con la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia en ausencia de que se demuestre que actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, se revocará una sentencia cuando las circunstancias en el caso muevan a concluir que dicha apreciación fue errónea. *Pueblo v. Santos Cornier*, 97 D.P.R. 193 (1969).

La prueba no solo es insuficiente en cuanto a identificar al acusado como la persona que hizo unos disparos en un cafetín sino que más bien dicha prueba tendió a demostrar que otra persona, no el acusado, fue el que hizo los disparos en cuestión. *Pueblo v. Ayala Ortiz*, 97 D.P.R. 168 (1969).

Un acusado no está impedido de señalar en apelación la omisión o la negativa del juez sentenciador a instruir al jurado sobre todo delito que este incluyó en el imputado y que la evidencia tienda a probar, aun cuando el acusado no solicite la instrucción en la forma adecuada, o no la solicite en forma alguna. *Pueblo v. Tufino Cruz*, 96 D.P.R. 225 (1968).

Es obligación de un abogado designado para asistir a un apelante en el trámite apelativo-aun cuando entienda que el recurso carece de méritos-señalar al Tribunal Supremo aquellos puntos que pueden ser objeto de consideración y discusión. *Pueblo v. Sánchez Vega*, 95 D.P.R. 718 (1968).

Aun cuando un error no haya sido señalado por el apelante en su alegato, en bien de la justicia se proceda a su corrección. *Pueblo v. Soto Ríos*, 95 D.P.R. 483 (1967).

Cuando un fiscal no ofrece en evidencia las declaraciones del acusado ni de uno de sus testigos durante la tramitación del juicio, en apelación no puede solicitarse la aplicación al caso de la doctrina establecida en los casos de *Escobedo v. Illinois*, 375 U.S. 902; 84 S. Ct. 203; 11 L. Ed. 2d 143 (1963); *White v. Maryland*, 373 U.S. 59; 83 S. Ct. 1050; 10 L. Ed. 2d 193 (1962), y *People v. Anderson*, 394 P.2d 945; 40 Cal. Rptr. 257 (1964). *Pueblo v. Matos Pretto*, 93 D.P.R. 113 (1966).

Un acusado que al apelar unas sentencias solicita del tribunal sentenciador que se ordene la transcripción del record en su caso con la excepción del informe del fiscal no puede alegar en apelación que el proceso y las sentencias dictadas contra él son nulas e ineficaces porque el taquígrafo no tomó el informe del fiscal al jurado según orden del juez sentenciador. *Pueblo v. Matos Pretto*, 93 D.P.R. 113 (1966).

Pagada la multa impuesta por una sentencia y apelada esta posteriormente, es procedente admitir una moción para desestimar porque el pago de la multa produce la falta de jurisdicción del tribunal recurrido. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 582 (1965).

Al considerar en apelación las sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito, el Tribunal Superior está sujeto a las mismas limitaciones que tradicionalmente se han impuesto respecto a la apreciación de prueba oral que hace el tribunal recurrido. *Mercado v. Hull Dobbs Corp.*, 90 D.P.R. 864 (1964).

Las determinaciones de hecho de un tribunal de origen no deben ser descartadas arbitrariamente ni

sustituidas por el criterio del tribunal de apelación, a menos que carecieran de base suficiente en la prueba presentada. *Mercado v. Hull Dobbs Corp.*, 90 D.P.R. 864 (1964).

Con la discreción de la corte inferior para permitir antes de dictar sentencia que el acusado retire su alegación de culpabilidad y la sustituya por otra de inocente no se interviendra en apelación, a menos que se demuestre que el tribunal incurrió en abuso de esa discreción. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

Para mover a su favor la discreción de un tribunal sentenciador a los fines de declarar con lugar una moción del acusado solicitando se deje sin efecto una estipulación que hicieran el abogado defensor y el fiscal para someter el caso contra dicho acusado por el sumario del fiscal fundamentada dicha moción en que su teoría de defensa era la de la defensa propia, el acusado debe acompañar algún indicio de prueba, ya mediante declaraciones o en cualquier otra forma. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

No se interviendra con la discreción de la corte inferior al rehusar dejar sin efecto una estipulación que hicieran el abogado defensor y el fiscal para someter el caso contra el acusado por el sumario del fiscal, cuando dicho acusado aceptó el fallo condenatorio y la sentencia que se le impuso, y no fue hasta que se solicitó por el fiscal se modificara dicha sentencia que dicho acusado solicitó se dejara sin efecto la misma. *Betancourt Rojas v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 747 (1964).

2. Apelación improcedente.

Un acusado no puede plantear como error por primera vez en apelación una anomalía durante el juicio que él considere perjudicial a sus derechos cuando, en vez de plantear la misma al tribunal sentenciador, permanece callado durante el juicio y hace dicho planteamiento después de rendido un veredicto de culpabilidad. *Pueblo v. Maldonado Dipini*, 96 D.P.R. 897 (1969).

No pueden levantarse por primera vez en apelación reparos a la admisibilidad en evidencia de la declaración de un policía-la que contiene, según la defensa, admisiones orales del acusado-cuando su admisibilidad no fue objetada por la defensa en ningún momento durante el juicio. *Pueblo v. Cosme Vargas*, 96 D.P.R. 836 (1969).

No procede señalar en apelación errores del juez sentenciador al hacer el resumen de la prueba al jurado cuando el acusado no presentó objeciones a dicho resumen en el tribunal de instancia, máxime cuando el resumen de la prueba es correcto. *Pueblo v. López Ramos*, 96 D.P.R. 699 (1968).

Es frívolo un señalamiento de error en apelación a los efectos de que el fiscal no probó la alegación de convicción anterior del acusado cuando el record demuestra que él aceptó tal alegación. *Pueblo v. Colón Baez*, 96 D.P.R. 632 (1968).

Es tardío un planteamiento en apelación por parte de la defensa a los efectos de que el juez de instancia no transmitió una instrucción específica al jurado cuando, luego de terminar el juez sus instrucciones, preguntó a las partes si tenían algún reparo que hacer a las mismas o si entendían que debían darse instrucciones adicionales, y la defensa específicamente contestó en la negativa. *Pueblo v. Arroyo Ramirez*, 96 D.P.R. 576 (1968).

Renuncia un apelante a cualquier error en las instrucciones transmitidas al jurado-excepto a aquellos errores que lesionen sus derechos fundamentales-cuando al terminar de dictarlas, el juez sentenciador pregunta a las partes si tenían alguna instrucción que someter a la consideración del tribunal por escrito, y ambas partes contestan en la negativa, máxime cuando tampoco se adujo objeción alguna a las instrucciones dictadas. *Pueblo v. López Jimenez*, 96 D.P.R. 132 (1968).

No procede considerar en apelación alegadas violaciones a las doctrinas señaladas en los casos de *Rivera Escute v. Jefe Penitenciaria*, 92 D.P.R. 765 (1965) y *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478; 84 S. Ct. 1758; 12 L. Ed. 2d 977 (1964), cuando el record del caso no sostiene la alegación de que el juez sentenciador admitiera durante el juicio manifestaciones del acusado en la etapa crítica de la investigación sin las debidas garantías Constitucionales. *Pueblo v. Malave Sánchez*, 95 D.P.R. 395 (1967).

Una resolución en virtud de la cual un tribunal revoca ordenes concediendo al acusado el beneficio de unas sentencias suspendidas no es una sentencia contra la cual puede interponerse recurso de apelación. *Pueblo v. García Robles*, 93 D.P.R. 762 (1966).

Un planteamiento de la defensa que se hace por primera vez en apelación, y el cual no aduce nada sustancial contra la sentencia, debe considerarse renunciado. *Pueblo v. Mendez Cabo*, 91 D.P.R. 851 (1965).

Carece de merito un señalamiento de error en apelación sobre la legitimidad del veredicto dictado cuando la representación legal del acusado no hizo en el tribunal de instancia planteamiento alguno sobre dicha legitimidad del veredicto. *Pueblo v. Mendez Cabo*, 91 D.P.R. 851 (1965).

Una resolución denegatoria de un nuevo juicio no es apelable por no tratarse de una sentencia final en un caso **criminal** y solamente es revisable por *certiorari*. *Pueblo v. Matos Rodríguez*, 91 D.P.R. 635 (1965).

Sostenidas por el tribunal de instancia las objeciones de la defensa a preguntas del fiscal a un testigo de reputación sobre acusaciones contra el acusado, el apelante no puede levantar en apelación el que el tribunal permitiera hacer tales preguntas al fiscal, maxime cuando el testimonio del testigo de reputación fue beneficioso al acusado y si se considera que dichas preguntas eran admisibles, ya que iban dirigidas a aducir prueba de delitos anteriores del acusado para desvirtuar lo que en el interrogatorio directo este había dicho sobre la buena reputación del apelante. *Pueblo v. Iturrino De Jesús*, 90 D.P.R. 706 (1964).

Cuando un acusado no le llama la atención al tribunal de instancia para que de aplicación a la doctrina de un caso resuelto por el Tribunal Supremo a la fecha del juicio, luego no puede quejarse de ello por primera vez en apelación. *Pueblo v. Martínez Díaz*, 90 D.P.R. 467 (1964).

Regla 194. PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR EL RECURSO.

La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, pero si dentro del indicado período de treinta (30) días se presentare una moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que se notificare al acusado la orden del tribunal denegando la moción de nuevo juicio.

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la sentencia dentro del término improrrogable de quince (15) días desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la moción de reconsideración.

Si el escrito de apelación o de certiorari es presentado en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación, las copias reglamentarias de tal escrito, debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación. Si el recurso fuere presentado en la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, será responsabilidad del apelante o peticionario notificar a la secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación o de certiorari, una copia de tal escrito, debidamente sellada con la fecha y hora de su presentación.

El apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al Procurador General la presentación del escrito de apelación o de certiorari dentro del término para presentar tales recursos. Tal notificación se hará en la forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone en la Regla 195.

En el escrito de apelación se consignarán breve y concisamente los errores en que se fundamenta la misma. El escrito de certiorari contendrá una relación fiel y concisa de los hechos del caso así como señalamientos y discusión de los errores que a juicio del peticionario cometió el Tribunal de Primera Instancia.

(Junio 23, 1978, Núm. 77, p. 269, art. 1; Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 2; Enero 6, 1998, Núm. 5, art. 2.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 349 a 351; Fed. R. Crim. P. 37(a); Código modelo, Rs. 431 y 432.

Enmiendas

-1998, ley 5. La ley de 1998 sustituyó "la apelación" en el rubro con "el recurso", y "apelar" con "presentar tales recursos" al final de la primera oración del cuarto párrafo.

-1995, ley 251. La ley de 1995 enmendó esta regla en terminos generales y añadió los nuevos segundo y tercer párrafos.

-1978, ley 77. La ley de 1978 enmendó el segundo párrafo en terminos generales y añadió el tercer párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 23, 1978, Núm. 77, p. 269.

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Enero 6, 1998, Núm. 5.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Asistencia de abogado.
3. Derogación.

1. En general.

Un foro apelativo erro al desestimar por falta de jurisdicción la apelación de una sentencia **criminal** cuando dicho foro recibió la notificación fuera del término de 48 horas que dispone esta regla y la Regla 24 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones porque la fecha del deposito en el correo se considerara como la fecha de entrega en la secretaria del tribunal apelativo. Pueblo v. Santana, 168 D.P.R. -; 2006

TSPR 86 (2006).

El Tribunal de Circuito de Apelaciones puede, en su deber de velar por su jurisdicción, solicitar que acredite haber cumplido con las notificaciones al Procurador General, Fiscal de Distrito y la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284 (2000).

El Tribunal de Circuito de Apelaciones erro en rechazar la apelación, a pesar de que el peticionario incluyo en su escrito de reconsideración copia de todos los documentos necesarios para acreditar la apelación. Pueblo v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284 (2000).

Mientras exista una determinación de culpabilidad y el acusado este sometido a la jurisdicción del tribunal o el caso no se haya sobreseido, el recurso apropiado para cuestionar el dictamen de culpabilidad sera la apelación interpuesta oportunamente a tenor con la Ley de la Judicatura y las Reglas 193 y 194 de **Procedimiento Criminal**. Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 D.P.R. 519 (2000).

Los terminos para apelar sentencias, sean penales o civiles, y para recurrir de sentencias dictadas en causas civiles son fijados por ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo. Por tanto, un término jurisdiccional no puede ser prorrogado por el tribunal apelativo, pues tal acción seria en exceso de la autoridad que le confiere la ley. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511 (1984).

En las apelaciones de casos criminales no es requisito cancelar arancel alguno a tenor con la sec. 1476 del Titulo 32, que los establece exclusivamente para casos civiles. Pueblo v. Negron Candelaria, 112 D.P.R. 32 (1982).

Aun cuando el término de cuarenta y ocho horas a que se refiere el segundo párrafo de esta regla no constituye un término de indole jurisdiccional, si constituye uno del más estricto cumplimiento, no debiendo el tribunal apelativo permitir desviación alguna de dicho plazo, so pena de desestimación del recurso apelativo, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad. Pueblo v. Rivera Rivera, 110 D.P.R. 544 (1980); Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536 (1980).

Procede desestimar una apelación **criminal** cuando el apelante no radica en o remite por correo certificado copia del escrito de apelación a la secretaria del tribunal de apelación dentro de las 48 horas siguientes a la radicación del escrito en el tribunal sentenciador, en violación de esta regla, excepto cuando la tardanza habida en radicar o remitir por correo certificado dicha copia se justifique detenidamente y en forma cabal. Pueblo v. Rivera Rivera, 110 D.P.R. 544 (1980).

No es el proposito de la Ley Num. 77 de 23 de junio de 1978, que enmendó esta regla, el de erigir otra barrera jurisdiccional más, sino el de permitir al tribunal tomar las medidas necesarias para acelerar debidamente el tramite apelativo, el cual se dilataba a veces por ausencia de control, esto es, establecer una norma de riguroso cumplimiento para vitalizar la función supervisora de los tribunales de apelación. Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536 (1980).

Un recurso de apelación no es una expedición de pesca en el mar de la transcripción de las pruebas. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Carece de autoridad un tribunal sentenciador para decretar una llamada "reinstalacion" de una apelación cuando, como cuestion de hecho, esta nunca se formalizo. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974).

No sustituye el requisito de esta regla de que la apelación se formalice presentando un escrito de apelación en la secretaria de la sala del tribunal que dicto la sentencia, dentro de los veinte días siguientes

a la fecha en que la sentencia fue dictada, una expresión del acusado emitida luego de la alocución y antes de pronunciarse sentencia a los efectos de que: "Yo lo que quiero que por lo menos se haga una apelación." Dicha alegada apelación tampoco encuentra base en las disposiciones de la Regla 166 ni en la Regla 12.2 de Administración del Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974).

Cuando una persona reclusa en una institución penal es sentenciada, y oportunamente y con la debida diligencia prepara el escrito apelando de la sentencia y lo entrega de acuerdo con la Regla 195 a los funcionarios de la institución con tiempo para ser enviado y recibido por el secretario de la corte sentenciadora antes de vencer el término para apelar, y dichos funcionarios dejan de darle curso, la entrega a ellos del escrito de apelación equivale a una radicación del mismo dentro del término concedido por ley para iniciar el recurso. Pueblo v. Hernández Castro, 90 D.P.R. 336 (1964).

2. Asistencia de abogado.

Constituye una violación al derecho del acusado a tener una adecuada representación legal cuando este ha manifestado su interés en apelar y su abogado no perfecciona dicho recurso sin que medie una explicación adecuada para su omisión; ello independientemente de que el abogado haya sido contratado por el acusado o designado por el tribunal. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993).

3. Derogación.

Por estar los terminos contenidos en las Reglas 194 y 216b de **Procedimiento Criminal** en conflicto y ser contrarios al esquema y propositos de la Ley de la Judicatura de 1994, se concluye que al aprobarse esta última, quedaron implícitamente derogadas dichas Reglas 194 y 216(b) en relación a los terminos que disponian para recurrir en apelación de sentencias condenatorias dictadas por los Jueces Superiores y de Distrito, respectivamente. Pueblo v. Cortes Rivera, 142 D.P.R. 305 (1997).

Regla 195. PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA APELACIÓN DE RECLUSOS.

Cuando el apelante se encontrare recluso en una institución penal y apelare por propio derecho, la apelación se formalizará entregando el escrito de apelación, dentro del término para apelar, a la autoridad que le tiene bajo custodia. Dicha autoridad vendrá obligada a presentar inmediatamente el escrito de apelación en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia y copia del mismo en el tribunal de apelación. Al recibir el escrito de apelación, el secretario del tribunal sentenciador lo notificará al fiscal.

(Junio 23, 1978, Núm. 77, p. 269, art. 1, ef. 30 días después de Junio 23, 1978.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 349.

Enmiendas

-1978, ley 77. La ley de 1978 añadió "y copia del mismo en el tribunal de apelación" en la segunda oración y "sentenciador" en la tercera oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 23, 1978, Núm. 77, p. 269.

ANOTACIONES

1. En general.

Cuando un recluso en una institución penal es sentenciado, y oportunamente y con la debida diligencia prepara el escrito de apelación y lo entrega a los funcionarios de la institución con tiempo para ser enviado y recibido por el secretario de la corte sentenciadora antes de vencer el término para apelar, y dichos funcionarios dejan de darle curso, tal entrega equivale a una radicación del escrito de apelación dentro del término concedido por ley para iniciar el recurso. Pueblo v. Hernández Castro, 90 D.P.R. 336 (1964).

Es improcedente una resolución desestimando una apelación interpuesta por un recluso cuando se demuestra que este había notificado "constructivamente" al fiscal de distrito al haber hecho entrega a las autoridades del penal de su escrito de apelación. Pueblo v. Hernández Castro, 90 D.P.R. 336 (1964).

Regla 196. CONTENIDO DEL ESCRITO DE APELACIÓN.

El escrito de apelación especificará el nombre o nombres de los acusados apelantes; designará la sentencia de la cual se apela, y especificará que la apelación se establece para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Especificará además el circuito al que corresponde la apelación e indicará si los apelantes se encuentran en libertad bajo fianza, en probatoria o reclusos en una institución penal. Se identificará en el escrito cualquier otro recurso sobre el mismo caso que se encuentre pendiente a la fecha de radicación. El escrito contendrá un señalamiento breve y conciso de los errores en que se fundamenta la apelación. En ningún caso se variará el título de una causa por razón de la apelación establecida.
(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 3, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 346 y 350; Fed. R. Crim. P. 37(a); Código modelo, Rs. 431, 435 y 457.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 enmendó esta regla en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.

El apelante en un recurso de apelación de un caso **criminal** no esta obligado a incluir copia de la sentencia dictada al presentar el escrito de apelación. Pueblo v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284 (2000).

El Tribunal de Circuito de Apelaciones erro en rechazar la apelación, a pesar de que el peticionario incluyo en su escrito de reconsideración copia de todos los documentos necesarios para acreditar la apelación. Pueblo v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284 (2000).

Regla 197. SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE SENTENCIA CONDENATORIA; ORDEN DE LIBERTAD A PRUEBA.

(a) Suspensión de la ejecución de sentencia. Una apelación de una sentencia condenatoria, o la presentación de una solicitud de certiorari, suspenderá la ejecución de la sentencia una vez se cumpla con la prestación de fianza.

Una apelación, o la presentación de una solicitud de *certiorari*, no suspenderá los efectos de una sentencia condenatoria cuando no se admita la prestación de fianza en apelación o una ley especial disponga que no se suspenderá.

(b) **Sentencia probatoria.** Una apelación de una sentencia condenatoria, o la presentación de una solicitud de *certiorari*, no suspenderá los efectos de una orden disponiendo que el acusado quede en libertad a prueba. Mientras se sustancia la apelación o el recurso de *certiorari*, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 4, ef. Mayo 1, 1996; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 17 y 20, vigente hasta el 30 de abril de 2005.)

Regla 197. SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE SENTENCIA CONDENATORIA; ORDEN DE LIBERTAD A PRUEBA

(a) **Suspensión de la ejecución de sentencia.** Una apelación de una sentencia condenatoria, o la presentación de una solicitud de *certiorari*, suspenderá la ejecución de la sentencia una vez se cumpla con la prestación de fianza.

(b) **Sentencia de libertad a prueba.** Una apelación de una sentencia condenatoria, o la presentación de una solicitud de *certiorari*, no suspenderá los efectos de una orden disponiendo que el acusado quede en libertad a prueba. Mientras se sustancia la apelación o el recurso de *certiorari*, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 4, ef. Mayo 1, 1996; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 17 y 20, efectiva el 1 de mayo de 2005.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 38; Código modelo, Rs. 436, 443 y 444; Ley de Marzo 12, 1903, p. 43, sec. 4.

Enmiendas

-2004, ley 317. Inciso (b): La ley de 2004 sustituyó "probatoria" con "de libertad a prueba" después de "Sentencia" en este inciso.

-1995, ley 251. Inciso (a): La ley de 1995 suprimió las referencias al Tribunal Supremo y añadió la disposición sobre fianza en el primer párrafo, y añadió el segundo párrafo.

Inciso (b): La ley de 1995 suprimió la referencia al Tribunal Supremo y añadió las referencias al *certiorari*.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Sistema de libertad a prueba, veanse las [34ap LPRA secs. 1026 et seq.] de este título.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Sentencia probatoria y libertad a prueba.

1. En general.

La concesión del beneficio de sentencia suspendida es discrecional, el disfrute siendo privilegio y no un derecho. *Pueblo v. Torres Rivera*, 137 D.P.R. 630 (1994).

Una suspensión de sentencia no tiene obligatoriamente que decretarse al momento de su imposición. *Pueblo v. Cubero Colón*, 116 D.P.R. 682 (1985).

El beneficio de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho, razón por la cual el tribunal goza de discreción para conceder la suspensión de los efectos de una sentencia y prescribir las condiciones que considere necesarias para dicha suspensión. *Pueblo v. Gonzalez Olivencia*, 116 D.P.R. 614 (1985).

La oportuna presentación del escrito de apelación suspende la ejecución de una sentencia dictada en un caso **criminal**. *Arana Rodríguez v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 145 (1965).

Interpuesto el oportuno escrito de apelación contra una sentencia condenando al acusado por guiar un vehículo de motor en un camino público mientras se encontraba en estado de embriaguez en la que también se decreto la suspensión de la licencia de conductor del acusado por un término de dos años, el tribunal, una vez lo solicite el acusado, debe devolverle dicha licencia hasta tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto. *Arana Rodríguez v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 145 (1965).

La suspensión de la licencia de conductor es parte de la penalidad provista por la sec. 1042 del Título 9 para los declarados incurso en el delito de manejar en estado de embriaguez, y puede ser incautada conforme a la sec. 1642 de dicho título; pero apelada una sentencia por ese delito, el apelante tiene derecho a que se le devuelva la licencia durante el tiempo en que se tramita la apelación. *Arana Rodríguez v. Tribunal Superior*, 92 D.P.R. 145 (1965).

Una apelación ante el Tribunal Supremo de una sentencia condenatoria suspende la ejecución de la misma. *Pueblo v. Matos Rodríguez*, 91 D.P.R. 635 (1965).

2. Sentencia probatoria y libertad a prueba.

Las garantías procesales a que tiene derecho el convicto que goza de libertad bajo palabra antes de que se le revoque dicho beneficio no tienen que equipararse totalmente con las que son ofrecidas a todo acusado en un encausamiento **criminal**, ya que el **procedimiento** de revocación de la libertad bajo palabra pertenece a una etapa posterior. *Maldonado Elias v. Gonzalez Rivera*, 118 D.P.R. 260 (1987).

Para salvaguardarle al convicto que goza de libertad condicionada las garantías Constitucionales mínimas en el **procedimiento** de revocación de libertad a prueba se requiere: una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el liberado ha violado las condiciones de la libertad bajo palabra y una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la libertad bajo palabra será revocada. *Maldonado Elias v. Gonzalez Rivera*, 118 D.P.R. 260 (1987).

El **procedimiento** para la revocación de la sentencia suspendida o probatoria se configuro en *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985), con arreglo a unas directrices que fijan el contenido mínimo de la garantía Constitucional que salvaguarda el interés libertario del probando cobijado por el

manto del debido proceso de ley. Maldonado Elias v. Gonzalez Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987).

No tener la oportunidad de la vista inicial que concede el **procedimiento** para la revocación de la libertad bajo palabra no es error perjudicial, pues el tramite posterior puede subsanar el error procesal. Maldonado Elias v. Gonzalez Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987).

De acuerdo con el esquema de justicia **criminal** vigente, el tribunal sentenciador puede revocar la libertad a prueba en cualquier momento si fuese incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con el proposito de rehabilitacion. La convicción posterior por un nuevo delito implica perdida automática de los beneficios de la sentencia suspendida. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

El mecanismo de libertad a prueba conocido como sentencia suspendida o probatoria le da la oportunidad al convicto beneficiado de cumplir su sentencia en libertad sin ser ingresado en una institución penal, sujeto a las condiciones que imponga el tribunal y a su custodia legal hasta la expiración del periodo fijado en su sentencia. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Al revocar los beneficios de una sentencia suspendida, el tribunal sentenciador puede ordenar la reclusión del probando por el tiempo completo original de la sentencia. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

La libertad conferida a un convicto mediante el beneficio de sentencia suspendida no goza de la magnitud ni grado de la que disfruta un ciudadano comun, pues la libertad del probando esta limitada por el cumplimiento de las condiciones fijadas al concedersele esa gracia. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Aunque un tribunal en el ejercicio de su amplia discreción, bajo los terminos de ley, puede conceder la libertad a prueba, tal discreción no es absoluta y menos puede ser arbitrario al revocarla. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

El tramite de revocación de una sentencia suspendida no puede igualarse al **procedimiento criminal** presentencia. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Una vez el Estado concede al convicto los beneficios de una sentencia suspendida no puede cancelar este derecho con abstracción total de las normas Constitucionales basicas aplicables en la etapa post sentencia. No puede privarse a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con los requisitos minimos del debido proceso de ley que corresponden a este momento. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos dispone que un probando tiene derecho a dos vistas cuando se le quiere revocar la probatoria, una preliminar al momento de su detención y arresto para determinar si existe causa probable de que haya violado su probatoria, y otra, un tanto más abarcadora, antes de la determinación de revocación final. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Para revocar la libertad a prueba el tribunal tiene que tener motivo justificado y dar al convicto la oportunidad de ser oido. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Al momento de determinarse si un acusado puede cumplir la pena bajo el regimen de sentencia suspendida, el debido proceso de ley le reconoce el derecho a conocer el informe preparado por el oficial probatorio y la oportunidad de ser oido. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Existe un **procedimiento** estatutario para la revocación de la libertad bajo palabra que incluye las garantias

Constitucionales minimas tales como notificación y vista. A diferencia del regimen de sentencia suspendida que es administrado por los tribunales, este es administrado por la Junta de Libertad bajo Palabra. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

Hasta tanto la Asamblea Legislativa actue afirmativamente para reglamentar el tramite relativo a una revocación de sentencia suspendida debera observarse el tramite contenido en la opinion como exigencia del debido proceso de ley que requiere la Constitución. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

En lo relativo al tramite para revocar una probatoria existe un interés libertario que no puede ser afectado en violación al principio Constitucional del debido proceso de ley. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

La vista inicial y la vista final en el tramite de la revocación de la sentencia suspendida no pueden ventilarse ante el mismo juez que sentencio originalmente al probando. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

La revocación de los beneficios de una sentencia suspendida es una resentencia que debe ser dictada por el juez que originalmente sentencio al convicto. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

En el tramite de revocación de sentencia suspendida, la vista sumaria inicial y la vista final deben dilucidarse ante jueces distintos. No existe impedimento legal alguno para que, como norma general, la vista final sea ventilada ante el mismo juez. *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 D.P.R. 717 (1985).

Convicto un acusado del delito de homicidio involuntario al arrollar con su vehículo de motor a un peaton y sentenciado a dos años de carcel-suspendiendosele, ademas, el uso de su licencia de conducir por el término de un año a ser contado desde que cumplierse la sentencia de carcel segun lo requiere la ley-sentencia que fue suspendida concediendosele libertad a prueba con la condición de que no maneja-se vehículos de motor durante el periodo de libertad a prueba, la interposición de un recurso de apelación no afecta o suspende la condición que se impuso para concederle al convicto la sentencia probatoria. *Bon Matos v. Tribunal Superior*, 103 D.P.R. 653 (1975).

Regla 198. FIANZA EN APELACIÓN.

Después de convicto un acusado, excepto en el caso de delitos que aparezcan pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, si éste entablare recurso de apelación o de certiorari para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, se admitirá fianza:

- (a) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo solamente el pago de multa.
- (b) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo cárcel en delitos menos graves (misdemeanors).
- (c) A discreción del tribunal sentenciador, o del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en todos los demás casos. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso entablado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído. Salvo situaciones de

verdadera urgencia o cuando ello resultare impráctico, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal de Circuito de Apelaciones, acompañada de copias de la solicitud hecha al tribunal sentenciador, sellada con la fecha y hora de su presentación, y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución.

El Tribunal Supremo podrá, en el ejercicio de su discreción, admitir fianza en recursos de certiorari ante sí cuando la misma haya sido negada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al Procurador General oportunidad de ser oído. Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impráctico, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al Tribunal de Circuito de Apelaciones y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal Supremo, acompañada de copias de la solicitud hecha al Tribunal de Circuito de Apelaciones, sellada con la fecha y hora de su presentación, y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución.

(Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354, sec. 1; Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 5, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 374; Fed. R. Crim. P. 38(b) y (c); Código modelo, Rs. 438, 440 y 443.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó las referencias al Tribunal Supremo con las del Tribunal de Circuito de Apelaciones en el primer párrafo y el inciso (c); en el inciso (c) suprimió las referencias a los jueces y añadió la frase "sellada con la fecha . . . presentación . . . " en las primera y cuarta oraciones, y en la cuarta oración suprimió "cerificadas"; y añadió el último párrafo.

-1980, ley 103. La ley de 1980 sustituyó "de un delito que no apareje pena de reclusión perpetua, si el acusado" con "excepto en el caso de delitos que aparejen pena de reclusión de noventa y nueve (99) años si este", en el primer párrafo.

Vigencia.

Véase la nota bajo la Regla 162 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 4, 1980, Núm. 103, p. 354.

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Discreción del tribunal.

1. En general.

Aunque no existe un derecho Constitucional a la fianza en apelación, una vez el Estado la otorga, no

puede denegarse dicha fianza arbitrariamente. *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Esta regla no exige como imperativo de ley que los tribunales de instancia celebren una vista antes de denegar una solicitud de fianza en apelación. *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Lo unico que exige esta regla es que se conceda oportunidad al fiscal de ser oído antes de que se conceda una fianza en apelación. *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Presentada una solicitud de fianza que cumple con los requisitos de esta regla, el tribunal sentenciador viene obligado a celebrar una vista con la intervención del fiscal-quien podrá presentar la prueba que estime necesaria, especialmente sobre el aspecto de la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado-para conocer los meritos de la solicitud. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Una solicitud de fianza de un convicto que ha apelado la sentencia contra el dictada puede presentarse, en primera instancia, ante el Tribunal Supremo o ante el tribunal sentenciador. De negarla este último, el convicto tiene derecho a recurrir en revisión. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Aun cuando esta regla no establece un término máximo dentro del cual un convicto podrá solicitar en alzada la revisión de un dictamen del tribunal sentenciador denegando su solicitud de fianza para permanecer en libertad mientras se tramita su apelación, dicho convicto deberá solicitar revisión de dicha providencia judicial dentro de un término razonable, considerando las circunstancias del caso. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Para que se pueda ejercer jurisdicción revisora sobre un dictamen del tribunal sentenciador negándose a admitir fianza en apelación deberán cumplirse estrictamente los requisitos de esta regla. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

La jurisdicción original del Tribunal Supremo para entender en una solicitud de fianza presentada por un convicto con el objeto de permanecer en libertad mientras se tramita su apelación esta constreñida a situaciones de verdadera urgencia o cuando resultare impracticable presentar la solicitud al tribunal sentenciador. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Es requisito esencial de una solicitud de fianza radicada por un convicto el exponer los fundamentos en que se basa para establecer la sustancialidad de su recurso de apelación. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Denegada por un tribunal sentenciador una solicitud de fianza presentada por un convicto-decisión que debe ser tomada una vez concluida la correspondiente vista sin dilación innecesaria-el dictamen escrito del juez deberá ser explícito en su exposición, haciendo las determinaciones de hechos que la prueba desfilada durante la vista amerite y exponiendo los fundamentos por los cuales, a su juicio, la apelación carece de sustancialidad o que la protección de la sociedad impide que el acusado permanezca en el seno de la comunidad, según fuere el caso. Dicho dictamen deberá ser notificado prontamente al acusado y al fiscal. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v.*

Otero de Ramos, 118 D.P.R. 175 (1986).

El peticionario que presento un escrito titulado "Moción a Manera de Solicitud de Auto de Habeas Corpus, Mandamus o para Fianza Pendiente Apelación" y que posteriormente presento otro escrito requiriendo que su escrito original fuera considerado como una acción de derechos civiles, estaba atacando la validez del hecho de su prisión y, por tanto, la moción del peticionario sera considerada como una solicitud de auto de habeas corpus; en consecuencia, los jueces del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado que denegaron la solicitud de fianza pendiente apelación de una convicción por drogas narcoticas fueron incluidos indebidamente como acusados, y la solicitud sera desestimada en cuanto a ellos. Aldarondo v. Supreme Court of Puerto Rico, 369 F. Supp. 1173 (1974).

Los principios de cortesía requieren que la corte de distrito federal se abstenga de decidir en cuanto a las alegaciones del peticionario, en el sentido de que el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado actuó indebidamente al denegar su solicitud de fianza pendiente la apelación de su convicción, hasta que dicho Tribunal Supremo resuelva la solicitud que le presento el peticionario para que explicara las razones que tuvo para denegarle la fianza. Aldarondo v. Supreme Court of Puerto Rico, 369 F. Supp. 1173 (1974).

Si los tribunales del Estado Libre Asociado no expusieron cuestiones de hecho especificas en relación con la denegación de fianza pendiente la apelación de los peticionarios, quienes fueron convictos por violación de la ley de explosivos y conspiración, aun cuando las medidas restrictivas de la corte federal de distrito dieron a los tribunales del Estado Libre Asociado amplia oportunidad de hacerlo, la libertad bajo fianza de los peticionarios sera ordenada, suspendiendose la ejecución de la orden durante 20 dias para permitir al tribunal del Estado Libre Asociado celebrar una vista y bien fijar una fianza razonable o apoyar su denegación en cuestiones de hecho que permitan a la corte revisora determinar si la denegación fue arbitraria. Rivera v. Concepcion, 355 F. Supp. 662 (1972).

Si la contención de los peticionarios de un habeas corpus sobre denegación arbitraria de fianza pendiente la apelación, o la denegación sin razon alguna, en violación del debido proceso de la Constitución federal no fue planteada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y si el motivo de denegación de la apelación consistente en que tomara tres años más en adición a los dos ya transcurridos para obtener la transcripción del record para la apelación fue simplemente mencionado en mociones al Tribunal Superior, los peticionarios no han agotado debidamente los remedios disponibles en las cortes locales. Rivera v. Concepcion, 355 F. Supp. 662 (1972).

Cuando la ley concede el derecho a prestar fianza bajo ciertas circunstancias, una denegación arbitraria de ese derecho viola la Constitución federal. Maldonado v. Delgado, 345 F. Supp. 993 (1972).

El convicto dejo de exponer adecuadamente sus razones al Tribunal Supremo de Puerto Rico y, por tanto, no podia obtener un auto de habeas corpus de una corte federal sobre la base de que la denegación de la fianza lo privo de su derecho a un debido proceso. Maldonado v. Delgado, 345 F. Supp. 993 (1972).

Es necesario que la denegación de una fianza en apelación este acompañada de las determinaciones de hecho en apoyo de dicha denegación. Maldonado v. Delgado, 345 F. Supp. 993 (1972).

No existe un derecho Constitucional federal a prestar fianza en apelación, y el Estado Libre Asociado puede denegar toda fianza a los apelantes. Maldonado v. Delgado, 345 F. Supp. 993 (1972).

2. Discreción del tribunal.

No es absoluta la discreción de un tribunal para conceder fianza en apelación a un convicto. Pueblo v. Díaz Díaz, 105 D.P.R. 170 (1976).

Abusa de su discreción un tribunal al conceder a un convicto fianza en apelación cuando, visto el historial antisocial y de menosprecio a la ley del convicto y la naturaleza de los delitos por los cuales fue convicto, dicha conducta constituye un peligro para la sociedad, independientemente de que el recurso de apelación pueda plantear una cuestión sustancial. *Pueblo v. Díaz Díaz*, 105 D.P.R. 170 (1976).

En el ejercicio de su discreción para la concesión de fianza a un convicto-inciso (c) de esta regla-un tribunal no admitirá dicha fianza si el recurso no plantea una cuestión sustancial, independientemente de cual sea la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes del acusado, como tampoco la admitirá si la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado mueven al tribunal a concluir que el acusado constituye un peligro para la sociedad, independientemente de que el recurso pueda plantear una cuestión sustancial. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Las decisiones de las cortes federales, excepción hecha del Tribunal Supremo en casos apropiados, no son obligatorias para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

Los conceptos "cuestión sustancial", "naturaleza del delito", "carácter y antecedentes penales del acusado" y "protección de la sociedad" del inciso (c) de esta regla pueden resumirse, para fines de la concesión de fianza en apelación, en dos consideraciones: sustancialidad de las cuestiones planteadas y la persona del acusado desde el punto de vista de su peligrosidad. Al resolver sobre ellas la decisión tiene que depender en cada caso de sus particulares hechos. *Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 1 (1974), revocado en parte, *López Rodríguez v. Otero de Ramos*, 118 D.P.R. 175 (1986).

El tribunal que decide si se concede o deniega la prestación de fianza en apelación ha de expresar la base de su decisión. *Rivera v. Concepcion*, 355 F. Supp. 662 (1972).

Aunque la fijación de fianza en apelación es una cuestión que cae dentro de la sana discreción del tribunal sentenciador, tal discreción debe responder al criterio de la sustancialidad de las cuestiones planteadas o la naturaleza del delito. *Pueblo v. Martínez Padro*, 91 D.P.R. 536 (1964).

La concesión de fianza en apelación no debe considerarse por el tribunal sentenciador como una mera cuestión de rutina. *Pueblo v. Martínez Padro*, 91 D.P.R. 536 (1964).

Regla 199. EXPEDIENTE DE APELACIÓN; DOCUMENTOS ORIGINALES.

Salvo lo que más adelante se dispone, las apelaciones se ventilarán con vista de los documentos originales que obren en autos y de la exposición o transcripción de la prueba oral, los que constituirán el expediente de apelación.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 6, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 356; Fed. R. Crim. P. 39; Código modelo, Rs. 446 a 449.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 añadió "exposición o" antes de "transcripción".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.

Objetada una pregunta a un testigo, como norma general, la parte que lo presenta debe hacer constar en el record, con toda la amplitud posible, lo que el testigo, a quien no se ha permitido contestar, hubiera declarado; u obtener que se haga un record completo de la evidencia que trata de elucidarse por medio de la pregunta objetada, con el fin de que se pueda determinar si la prueba, de haber sido creída por la corte inferior, hubiera justificado un resultado distinto del caso. *Pueblo v. López Rivera*, 102 D.P.R. 359 (1974).

No conlleva la anulación de una sentencia la negativa del juez a no permitir que fuera al record evidencia ofrecida y no admitida, cuando ello no impide al Tribunal Supremo pasar juicio sobre la admisibilidad de la evidencia ofrecida. *Pueblo v. López Rivera*, 102 D.P.R. 359 (1974).

En ausencia de la correspondiente transcripción de la evidencia, no se puede determinar en un caso específico si es nula la sentencia condenatoria de un acusado por violar las disposiciones de las [25 LPRA secs. 410 et seq.] del Título 25. *Pueblo v. Rivera Alvira*, 97 D.P.R. 89 (1969).

Regla 200. PRUEBA ORAL; DESIGNACION.

(a) Cuando el apelante o peticionario estime que para resolver una apelación o un recurso de certiorari es necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, someterá una de las siguientes, o una combinación de ellas:

(1) Exposición estipulada.

(2) Exposición narrativa.

(3) Transcripción.

La exposición narrativa procederá solamente en ausencia de una exposición estipulada. La transcripción procederá solamente cuando la parte que la interese demuestre al Tribunal de Circuito de Apelaciones que no es posible preparar una exposición narrativa o estipulada, o que la exposición narrativa aprobada no expone adecuadamente la prueba oral, a pesar de las objeciones o enmiendas presentadas oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá ordenar como excepción, por iniciativa propia y en el ejercicio de su discreción, que se prepare una exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral o de una porción de ésta.

(b) La exposición de la prueba presentará la manera en que surgieron y cómo fueron resueltas por el Tribunal de Primera Instancia las controversias pertinentes a la apelación o certiorari. La exposición deberá incluir un relato de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia que sea pertinente para sustanciar los errores señalados en apelación o recurso de certiorari.

(c) La parte apelante o peticionaria deberá, dentro de los diez (10) días de haberse notificado el escrito de apelación o la expedición del auto de certiorari, citar al fiscal a una reunión para preparar una exposición estipulada.

(d) La exposición estipulada de la prueba oral será presentada al Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la apelación o a la notificación de la expedición del auto de certiorari. De no lograrse una estipulación sobre la exposición de la prueba oral, la parte apelante o peticionaria deberá informar tal desacuerdo al Tribunal de Circuito de Apelaciones, no más tarde de treinta (30) días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto de certiorari.

(e) La exposición narrativa deberá ser presentada en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia en el término de veinte (20) días contados a partir de la fecha en que se notifique el desacuerdo para preparar una exposición estipulada. En ningún caso se presentará la exposición narrativa luego de transcurridos cincuenta (50) días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto de certiorari, a menos que el Tribunal de Circuito de Apelaciones prorrogue dicho término.

El mismo día que presente la exposición narrativa, la parte apelante o peticionaria notificará ese hecho, con copia de la exposición narrativa sometida, al fiscal, al Procurador General y al Tribunal de Circuito de Apelaciones. El fiscal deberá presentar sus objeciones a la exposición narrativa o proponer enmiendas dentro de los diez (10) días siguientes. Las objeciones o enmiendas serán presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia y serán notificadas el mismo día al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

(f) Transcurridos los plazos dispuestos en el inciso anterior, la exposición narrativa, con las objeciones y enmiendas propuestas, quedará sometida para aprobación por el Tribunal de Primera Instancia. Transcurridos treinta (30) días de sometida sin que el Tribunal de Primera Instancia la haya aprobado, y siempre que no se hubieren presentado objeciones o enmiendas conforme al inciso anterior, se entenderá aprobada la exposición narrativa. De someterse objeciones o enmiendas, será necesaria la aprobación expresa de la exposición narrativa. Cuando medie la aprobación expresa de la exposición narrativa, el secretario del Tribunal de Primera Instancia la notificará, mediante el envío de una copia oficial, al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

(g) Los términos dispuestos en esta regla podrán ser prorrogados mediante moción debidamente fundamentada y por justa causa. La parte apelante o peticionaria será responsable de cumplir con los plazos y procedimientos dispuestos en esta regla y de notificar al Tribunal de Circuito de Apelaciones cualquier incumplimiento o inconveniente relacionado. Su omisión de cumplir con esa responsabilidad impedirá que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere cualquier señalamiento de error del Tribunal de Primera Instancia en la evaluación de la prueba oral y podrá conllevar que se desestime el recurso.

(h) A los fines de facilitar la preparación de una exposición narrativa de la prueba, los abogados podrán utilizar las grabaciones efectuadas con sus propias grabadoras, según se autorice por las reglas que apruebe el Tribunal Supremo.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 7, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 356.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó el anterior unico párrafo con el presente texto.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. Deberes del abogado.

No cesa la responsabilidad de un abogado para con su cliente y para con el sistema judicial por el hecho de que haya cesado en su obligación de continuar representando al cliente. Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 105 D.P.R. 30 (1976).

Es reprehensible la actuación de un abogado defensor ante el Tribunal Supremo al recargar indebidamente el trámite judicial solicitando y obteniendo una transcripción total de la prueba que era evidentemente fútil. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976).

No cumple con su deber aquel abogado que hace transcribir todas las notas taquigraficas de un juicio cuando solo necesita la transcripción de un incidente específico, con mayor razón, cuando es el mismo abogado que represento al apelante en el tribunal de instancia. Pueblo v. Rodríguez Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974).

Regla 201. PRUEBA ORAL; TRANSCRIPCION.

(a) El apelante o peticionario, o el Procurador General, podrán solicitar únicamente de conformidad con lo dispuesto en la Regla 200, que el tribunal ordene la preparación de una transcripción de la prueba oral o porción de ésta.

(b) A esos efectos, la parte proponente presentará una moción ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones no más tarde de treinta (30) días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto de certiorari. En esa moción, la parte proponente expresará las razones por las cuales considera que la transcripción es indispensable. Si el proponente es el apelante o peticionario, deberá demostrar además porqué no es posible presentar una exposición estipulada o una exposición narrativa.

En todo caso, el proponente identificará en la moción las porciones pertinentes del récord ante el Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del testimonio y los nombres de los testigos.

(c) Ordenada la transcripción, su proponente deberá solicitar al Tribunal de Primera Instancia la regrabación de los procedimientos. La moción a esos efectos será presentada dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la orden del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con la moción, su proponente acompañará los aranceles correspondientes, de conformidad con las reglas que apruebe el Tribunal Supremo.

(d) La regrabación se efectuará conforme a los términos y procedimientos que se establezcan en las reglas que a esos efectos apruebe el Tribunal Supremo. Concluida la regrabación, el secretario del Tribunal de Primera Instancia la entregará a la parte proponente y notificará de ellos a las demás partes y al Tribunal de Circuito de Apelaciones. En los casos en que proceda

preparar una transcripción de oficio conforme a lo dispuesto en el inciso (f) de esta regla, se actuará según se dispongan en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo.

(e) La transcripción de la prueba oral autorizada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones será realizada por la parte que la solicite, a su costo, salvo lo que se dispone en el inciso (f) de esta regla, y dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la entrega de la regrabación. Para ello, deberá utilizar un transcriptor privado autorizado por las reglas que apruebe el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(f) Cuando la parte proponente de la transcripción sea indigente o se trate del pueblo de Puerto Rico, o cuando sea imposible la regrabación de los procedimientos, la transcripción será preparada de oficio por los funcionarios del Tribunal de Primera Instancia, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en esta regla y en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De ser necesario, el Juez Presidente del Tribunal Supremo podrá autorizar la contratación de transcriptores privados autorizados para realizar estas transcripciones de oficio en uno o más casos, conforme a los parámetros que se establezcan en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo.

(g) Con toda transcripción se incluirá un índice en el que se indicarán los nombres y las páginas en que aparezcan las declaraciones de cada uno de los testigos. Además, la transcripción deberá estar certificada por el transcriptor autorizado como una relación fiel y correcta de la regrabación transcrita.

(h) Las transcripciones se preparación [sic] y prepararán en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del plazo ordenado por ese tribunal. Será obligación de la parte proponente suministrar copias de la transcripción de la prueba oral a todas las demás partes dentro del mismo plazo. Este plazo será prorrogable sólo por justa causa y mediante moción debidamente fundamentada. Si el transcriptor no cumple con el plazo ordenado será deber de la parte proponente informárselo cuanto antes, de forma diligente y expedita, al Tribunal de Circuito de Apelaciones y buscar otras alternativas para preparar la transcripción dentro del plazo que ordene el tribunal.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 8, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 39; Código modelo, Rs. 448 a 450.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó el anterior único párrafo con el presente texto.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Contrarreferencias.

Reglas para la grabación y duplicación en cinta videomagnetofonica, Véase el Ap. XIX del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

No constituye fuente estatutaria para sostener la existencia de un derecho irrestricto a una transcripción de evidencia, la sec. 1489 del Título 32. Pueblo v. Casiano Vélez, 105 D.P.R. 33 (1976).

Una apelación **criminal**-bajo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos-no implica de jure la obtención de la transcripción de evidencia. Pueblo v. Casiano Vélez, 105 D.P.R. 33 (1976).

Para el perfeccionamiento de una apelación, no es imprescindible el transcribir las pruebas. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Regla 202. Derogada.

Ley de Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 9, ef. Mayo 1, 1996.

HISTORIAL

Derogación.

Esta regla, proveniente de las Reglas de **Procedimiento Criminal** de 1963, disponía sobre la obligación del apelante a presentar un señalamiento de fundamentos en caso de no incluir la transcripción total de la prueba oral.

Regla 203. EXPEDIENTE DE APELACIÓN; REMISION.

Después de haberse presentado el escrito de apelación, y dentro de los términos prescritos en la Regla 210, el secretario del tribunal apelado remitirá al Tribunal de Circuito de Apelaciones todos los documentos originales del proceso objeto de la apelación, excepto aquellos cuya omisión se hubiere convenido por las partes mediante estipulación escrita unida a los autos. El secretario del tribunal apelado unirá a dichos documentos una certificación que los identifique adecuadamente.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 10, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 39; Código modelo, R. 449.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" y suprimió, al final de la primera oración la referencia a la prueba oral.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Regla 204. MOCIÓN PRELIMINAR EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES; DOCUMENTOS.

Si con anterioridad a la fecha en que el expediente de apelación fuere remitido al Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Pueblo interesare presentar una moción para desestimar o cualquiera de las partes presentare una moción solicitando cualquier orden, acompañará con la moción copias de los documentos que obren en el expediente original del Tribunal de Primera Instancia que fueran necesarios para que el Tribunal de Circuito de Apelaciones pueda resolver la moción. (Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 11, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" en el rubro y en el texto; "el fiscal" con "el Pueblo", y la frase final, "el secretario . . . para esos fines" con "acompañara . . . resolver la moción".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Regla 205. ESCRITOS Y DOCUMENTOS ORIGINALES; PREPARACION.

Los escritos y documentos originales se unirán en uno o más volúmenes y las páginas se numerarán consecutivamente. Se preparará un índice completo independientemente o como parte de la certificación de identificación a que se refiere la Regla 203.

Regla 206. EXPEDIENTE DE APELACIÓN; CORRECCIÓN.

No será necesaria la aprobación del expediente de apelación por el tribunal apelado. Pero si surgiere alguna discrepancia respecto a si el expediente refleja fielmente lo ocurrido en el tribunal apelado, la cuestión se someterá a dicho tribunal, el cual resolverá la controversia y conformará el expediente a la verdad. Si por error o accidente se omitiere o se relacionare equivocadamente alguna porción del expediente, de importancia para cualquiera de las partes, éstas mediante estipulación, o el tribunal apelado, antes o después de enviarse el expediente al Tribunal de Circuito de Apelaciones, o el propio Tribunal de Circuito de Apelaciones, a solicitud de parte o a instancia propia, podrá ordenar que se cubra la omisión o que se corrija la aserción errónea y si fuera necesario que se certifique o se envíe por el secretario del tribunal apelado un expediente suplementario. Cualquier otra cuestión relacionada con el contenido y la forma del expediente deberá plantearse al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 12, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 362.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" a través del texto, y suprimio la frase "excepto en los casos a que se refieren las Reglas 208 y 209" en la primera oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Regla 207. EXPEDIENTE DE APELACIÓN; VARIAS APELACIONES.

Cuando hubiere más de una apelación de la sentencia, interpuestas por dos o más apelantes, se preparará un solo expediente de apelación que contendrá toda la materia señalada o estipulada por las partes, sin duplicación.

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 425.

Reglas 208 y 209. Derogadas. (34 L.P.R.A. Ap. II R 208y 209)

Por la Ley Núm. 251 del 25 de diciembre de 1995 efectiva el 1 de mayo de 1996.

HISTORIAL

Derogación.

La Regla 208, que procedía del art. 356 del Código de Enjuiciamiento **Criminal** de 1902, disponía sobre la preparación de una relación de prueba en el caso de que no se hubiese tomado notas taquigraficas.

La Regla 209 disponía sobre la preparación de una exposición del caso por las partes.

ANOTACIONES

Regla 208 Anotaciones

1. En general.

Un tribunal de instancia no debe permitir que en un legajo de apelación consten tres exposiciones narrativas de la prueba-una preparada por el fiscal, otra por el juez de instancia y una tercera por el abogado de la defensa-viniendo obligado el juez sentenciador a dar cumplimiento a la Regla 15 del Ap. I-A de Título 4 y a esta regla así como a las disposiciones analogas que privan en el caso de otros recursos. Pueblo v. Alvarez, 107 D.P.R. 693 (1978).

En apelación, el Ministerio Fiscal no puede valerse de sus propias omisiones en la exposición narrativa de la prueba cuando tuvo la oportunidad de incluir en la misma todos los elementos de prueba desfilada en el juicio que sostuvieran el fallo condenatorio. Pueblo v. Barreto Gonzalez, 107 D.P.R. 536 (1978).

Es responsabilidad indeclinable del Ministerio Fiscal velar por que la exposición narrativa de la prueba-radicada en el Tribunal Supremo conforme a esta regla en armonia con la Regla 15(d) del Ap. I-A de Título 4-refleje fielmente la sustancia de las declaraciones de los testigos y todas las incidencias ocurridas en el juicio. Pueblo v. Vega Cruz, 105 D.P.R. 1 (1976).

No cumple los fines de la justicia un sistema judicial bajo el cual un taquígrafo se tarda cinco años y un mes para transcribir un record taquigrafico que consta de unicamente 77 paginas. Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 847 (1976).

Como norma general, si la transcripción de la prueba oral en un caso conllevará un término irrazonable, y como consecuencia una dilación indebida en la adjudicación de los meritos de la apelación, el apelante deberá prescindir de la transcripción y someter el caso por exposición narrativa de la prueba conforme a esta regla. Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 847 (1976).

Comoquiera que el caso del peticionario aun estaba pendiente en apelación ante los tribunales del Estado, el tribunal federal de tres jueces no tenía jurisdicción para conocer de la petición en que solicito que se prohibiera al Tribunal Supremo de Puerto Rico que aplicara las reglas de **procedimiento criminal** y la regla del propio Tribunal Supremo respecto de la transcripción de evidencia y la concesión de tiempo para su preparación, y que se le ordenara que no considerara la apelación del peticionario excepto a base de la totalidad de la transcripción de la evidencia; el término "procesos criminales pendientes", a los efectos de la doctrina *Younger*, incluye la etapa de la apelación. Dones-Arroyo v. Trias-Monge, 430 F. Supp. 315 (1976).

Renuncia a su derecho a que el taquígrafo del tribunal tome notas taquigraficas de los informes del fiscal y del abogado defensor aquel acusado que no solicita expresamente tal cosa del juez que preside el tribunal. Pueblo v. Arroyo Nunez, 99 D.P.R. 842 (1971).

Una exposición del caso para ser usada en apelación-ante la imposibilidad de poder obtenerse la

correspondiente transcripción taquigrafica-utilizando como unica fuente para ello la investigación del fiscal, la cual no contiene las instrucciones transmitidas por el juez al jurado por no poder estas ser reproducidas-exposición que contiene todo lo que puede ser perjudicial al acusado y nada de lo que pueda serle beneficioso-no es la exposición o relación de la prueba y de los procedimientos que contempla esta regla. Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607 (1966).

Regla 209 Anotaciones

1. En general.

La diligente preparación y oportuna certificación de una exposición narrativa de la prueba forma parte de la responsabilidad post sentencia del abogado. *In re Cruz Gonzalez*, 123 D.P.R. 108 (1989).

Regla 210. EXPEDIENTE DE APELACIÓN; ARCHIVO; PRORROGAS.

El expediente de apelación provisto en las Reglas 199, 203, 205, 206 y 207 deberá archivarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la presentación del escrito de apelación, excepto que cuando hubiere más de una apelación interpuesta contra la sentencia por dos o más acusados apelantes, el tribunal apelado podrá fijar el término para dicho archivo, que en ningún caso será menor del término antes expresado. En todos los casos, el tribunal apelado, en el ejercicio de su discreción, con o sin moción o notificación al efecto, podrá prorrogar el término para el archivo del expediente de apelación por un período no mayor de sesenta (60) días adicionales. Cualquier prórroga ulterior sólo podrá concederse por causa justificada, la cual se hará constar en la orden concediendo la prórroga. Copia de esa orden deberá ser notificada al Tribunal de Circuito de Apelaciones. (Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 14, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 37(a)(2) y 39(c).

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Reglas 199 a 209" con "Reglas 199, 203, 205, 206 y 207" en la primera oración, "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" a través del texto, y la frase "después de la celebración de una vista y determinación por dicho tribunal de la existencia de" con la palabra "por" en la penúltima oración; y añadió la última oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Contrarreferencias.

Expediente de apelación, remisión, Véase la Regla 203 de este apéndice.

Regla 211. FACULTADES DE LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN.

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de Circuito de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes.

Queda reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.

(Derogado la anterior Reglas 211 y Adicionada en Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 16, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Derogación.

La Ley de Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 15, derogó la anterior Regla 211, que disponía sobre transcripción de prueba oral en casos de un apelante insolvente. Asimismo en su art. 16, promulgó una nueva Regla 211.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Regla 212. DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN O CERTIORARI.

La parte apelada podrá solicitar, mediante moción, la desestimación de una apelación o recursos de certiorari por los siguientes fundamentos:

- (a) Que el Tribunal de Circuito de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar la apelación o certiorari ;
- (b) que no se ha perfeccionado la apelación o certiorari de acuerdo con la ley y reglas aplicables;
- (c) que no se ha proseguido con la debida diligencia, o
- (d) que el recurso es frívolo o ha sido presentado para demorar los procedimientos.
(Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 17, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 39(a); Código modelo, R. 452.

Enmiendas

-1995, ley 251. Párrafo inicial: La ley de 1995 añadió "o recursos de *certiorari*" después de "apelación".

Inciso (a): La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" y añadió "o *certiorari*" después de "apelación".

Inciso (b): La ley de 1995 añadió "o *certiorari*" después de "apelación", e "y reglas aplicables" después de "ley".

Inciso (d): La ley de 1995 añadió la frase "o ha sido presentado para demorar los procedimientos".

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.

Es suficiente causa para desestimar una apelación **criminal** el hecho de que el apelante se fugue de la cárcel después de su convicción y condena, convirtiéndose en un profugo de la justicia. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 110 D.P.R. 544 (1980).

Un fugitivo, al menos mientras continua su condición de tal, renuncia a su derecho a que una corte de apelación considere sus planteamientos. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 110 D.P.R. 544 (1980).

Procede desestimar un recurso de apelación en un caso **criminal** si: (a) el alegato del apelante no se presentare dentro del término de 30 días; (b) el tribunal careciere de jurisdicción-como seria el caso si el escrito de apelación se presentare después de vencido el término de 20 días a partir de la fecha en que la sentencia fue dictada o no se notificare al fiscal dentro de ese término; (c) la apelación no se perfeccionase; (d) no se prosiguiera con la debida diligencia, o (e) el recurso resultare ser frívolo. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

Regla 213. DISPOSICIÓN DEL CASO EN APELACIÓN.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá revocar, confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrida o podrá reducir el grado del delito o la pena impuesta, o podrá, según proceda, absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Podrá también anular, confirmar o modificar cualquiera o todas las diligencias posteriores a la sentencia apelada o recurrida, o que de ésta dependan.

El Tribunal Supremo poseerá las mismas facultades en los recursos de certiorari ante sí. (Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 18, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 364; Fed. R. Crim. P. 39; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1260; Código modelo, Rs. 458, 459 y 461.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Supremo" con "Tribunal de Circuito de Apelaciones" y añadió "o recurrida" dos veces después de "sentencia apelada" en el primer párrafo, y añadió el segundo párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.

Los jueces de instancia y los jurados normalmente estan en mejores condiciones de aquilatar la prueba oral porque tienen la ventaja de ver y escuchar directamente a los testigos y por ello sus determinaciones sobre credibilidad merecen gran respeto. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

La negativa, ocultación o supresión por el Ministerio Público de evidencia impugnatoria de la credibilidad de un testigo principal de cargo, relevante y favorable al acusado, constituye un error Constitucional que acarrea la revocación de la convicción. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991).

El fallecimiento del imputado o convicto anula el tramite apelativo y todos los procedimientos relativos a la acusación desde su origen, por extinción de la acción penal. Pueblo v. Morales Díaz, 120 D.P.R. 249 (1987).

El tribunal apelativo puede considerar el error de haberse admitido prueba de hechos distintos de aquellos por los que se juzga, independientemente de que hubiese mediado oportunamente una objeción. Pueblo v. Carrion Rivera, 111 D.P.R. 825 (1981).

En la apreciación de prueba documental el Tribunal Supremo se halla en las mismas condiciones que el tribunal sentenciador. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Procede la revocación de una condena y la absolución del acusado cuando la condena esta basada en prueba inverosímil y físicamente imposible. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

El criterio para determinar si un error en materia de evidencia acarrea revocación es determinar si, de no haberse cometido el error, el resultado probablemente hubiera sido distinto. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).

El Tribunal Supremo no interviendra con la apreciación de la prueba hecha por el jurado cuando, examinada esta, se concluye que la misma es suficiente para establecer la comisión de los delitos imputados. Pueblo v. Díaz Rios, 107 D.P.R. 140 (1978).

Dictada sentencia contra un acusado por un delito indebidamente calificado por el fiscal y el juez sentenciador como escalamiento en primer grado, cuando en verdad el delito imputado y probado es el de hurto mayor, el Tribunal Supremo modificara dicha sentencia sustituyendo la designación del delito de escalamiento en primer grado que en ella aparece por el de hurto mayor. Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971).

Regla 214. REMISIÓN DEL MANDATO Y DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE APELACIÓN.

Treinta (30) días después de haberse archivado en autos la notificación de la sentencia dictada en apelación o certiorari , se devolverá al Tribunal de Primera Instancia todo el expediente de apelación unido al mandato, a menos que se hubiere concedido o esté pendiente de resolución una solicitud de reconsideración o una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo, o a menos que de otro modo se ordenare por el Tribunal de Circuito de Apelaciones o por el Tribunal Supremo. Después de haberse remitido el mandato, el Tribunal de Primera Instancia librára todas las demás órdenes que sean necesarias para la ejecución de la sentencia. (Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 19, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 añadió las referencias al *certiorari* y al Tribunal de Circuito de Apelaciones; sustituyo las referencias al Tribunal Superior con las del Tribunal de Primera Instancia; y aumento de 10 a 30 dias el término de apelación.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.

Desestimadas en apelación ciertas acusaciones al revocarse una providencia judicial adversa a unos acusados, la falta de remisión del correspondiente mandato del tribunal no puede alcanzar actuaciones que no se realizaron dentro del caso que fue objeto de revision. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969).

Archivadas por el Tribunal Supremo ciertas acusaciones, el correspondiente mandato no tiene el efecto de privar a El Pueblo de realizar una actuación separada e independiente que la propia ley le autoriza. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969).

Regla 215. AUTO DE CERTIFICACION.

En casos criminales el auto de certificación se tramitará de acuerdo con el **procedimiento** dispuesto en las Reglas de **Procedimiento** Civil para el Tribunal General de Justicia.

HISTORIAL

Contrarreferencias.

Reglas de **Procedimiento** Civil, Véase el Ap. III del Título 32.

Regla 216. RECONSIDERACIÓN.

La parte adversamente afectada por una resolución final o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá, dentro del término improrrogable de quince (15) días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la resolución o sentencia, presentar una moción de reconsideración. El término para recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. (Derogada la Regla 216 anterior y Adicionada en Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 21, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Derogación.

La Ley de Diciembre 25, Núm. 251, art. 20, derogó la anterior Regla 216 y en su art. 21 promulgo una nueva Regla 216.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Derogación.

1. En general.

Un Juez de Distrito tiene facultad para reevaluar la sentencia emitida, así como el fallo de culpabilidad, a través de una moción de reconsideración. Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996).

2. Derogación.

Por estar los términos contenidos en las Reglas 194 y 216b de **Procedimiento Criminal** en conflicto y ser contrarios al esquema y propósitos de la Ley de la Judicatura de 1994, se concluye que al aprobarse esta última, quedaron implícitamente derogadas dichas Reglas 194 y 216(b) en relación a los términos que disponían para recurrir en apelación de sentencias condenatorias dictadas por los Jueces Superiores y de Distrito, respectivamente. Pueblo v. Cortes Rivera, 142 D.P.R. 305 (1997).

Regla 217. REVISIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN; TÉRMINO.

La sentencia dictada en apelación o certiorari, o la resolución final denegando el auto de certiorari dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, podrá ser revisada por el Tribunal Supremo mediante certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún otro modo. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días del archivo en autos de la notificación de la sentencia o de la resolución de una moción de reconsideración en la forma dispuesta en la Regla 216. Este término es jurisdiccional.

(Octubre 24, 1968; Junio 26, 1974, Núm. 91, Parte 1, p. 339, art. 2; Diciembre 25, 1995, Núm. 251, art. 22, ef. Mayo 1, 1996.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código modelo, R. 459.

Enmiendas

-1995, ley 251. La ley de 1995 sustituyó "Tribunal Superior" en la primera oración con "*certiorari* . . . Apelaciones" y añadió la última oración.

-1974, ley 91. La ley de 1974 suprimio las disposiciones referentes al juicio *de novo*.

-1968. La resolución de 1968 exceptuo los juicios *de novo*, cambio la fraseología de la segunda oración en general y añadió la referencia a la Regla 216.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 26, 1974, Núm. 91, Parte 1, p. 339.

Diciembre 25, 1995, Núm. 251.

Disposiciones especiales.

La Ley de Julio 19, 1974, Núm. 1, dispone:

"No obstante las disposiciones de la Ley Num. 91 de 26 de junio de 1974, que enmendó las Reglas 193, 216 y 217 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, segun enmendadas, todo convicto en un procedimiento criminal en el cual no hubiere participado un fiscal tendra derecho a juicio *de novo*, bajo las disposiciones de dichas Reglas 193, 216 y 217 segun regian antes de enmendarse por la Ley Num. 91 antes mencionada."

ANOTACIONES

1. En general.

El término establecido por esta regla para presentar *certiorari* ante el Tribunal Supremo comienza a contarse a partir de la fecha en que la sentencia fuera dictada y notificada a la parte en la forma dispuesta en la Regla 216. Pueblo v. Rivera, 92 D.P.R. 828 (1965).

XV. DISPOSICIONES GENERALES

Regla 218. FIANZA Y CONDICIONES, CUANDO SE REQUIERAN; CRITERIOS DE FIJACION; REVISIÓN DE CUANTIA, O CONDICIONES; EN GENERAL.

(a) **Derecho a fianza; quién la admitirá; imposición de condiciones.** Aquella persona arrestada por cualquier delito que tenga derecho a quedar en libertad bajo fianza o bajo las condiciones impuestas de conformidad con el inciso (c) de esta regla hasta tanto fuera convicta. A los fines de determinar la cuantía de la fianza correspondiente y la imposición de las condiciones que se estimen propias y convenientes, el tribunal deberá contar con el informe de evaluación y recomendaciones que rinda la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 177 de 12 agosto de 1995, según enmendada. Salvo en los casos de toda persona que se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales: Asesinato, Homicidio negligente-cuando se impute una muerte ocasionada al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas; Robo agravado; Incendio agravado; Utilización de un menor para pornografía infantil; Envenenamiento intencional de aguas de uso público; Agresión sexual cuando: (a) la víctima padezca una enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, o incapacidad para comprender la naturaleza del acto en el momento de su

realización; (b) la víctima haya sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e inmediato daño corporal; (c) se le haya anulado o disminuido sustancialmente su conocimiento o sin su conocimiento, su capacidad de consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes, sustancias o medios similares; (d) se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física o psicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas; (e) si el imputado es ascendiente o descendiente de la víctima por consanguinidad hasta el tercer grado; Secuestro, Secuestro agravado y Secuestro de menores; Maltrato intencional de menores, según dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Núm. 177, supra; Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa Criminal Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los Artículos 5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar, el 5.10 sobre Remoción o Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; violaciones a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma, según ésta se define en la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, y las circunstancias dispuestas en el inciso (c) de esta regla, el tribunal podrá disponer que una persona quede en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo custodia de tercero o bajo fianza diferida. La fianza, cuando se requiera en estos casos, podrá ser admitida por cualquier magistrado, excepto en caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, en cuyo caso la fianza que fije el magistrado sólo podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218.

En todos los casos en que se impute la comisión de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, salvo que no autorizará la fianza diferida.

En caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado sólo podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218. Todo imputado que pague su fianza en efectivo, contará con cinco (5) días laborables a partir del momento en que quedó en libertad bajo fianza para presentar una certificación del Departamento de Hacienda que establezca que el fiador es un contribuyente bona fide y que ha reportado ingresos que justifican la fianza que se propone prestar. De no producirse la debida certificación durante el término correspondiente por causas imputables al fiador, se devolverá la fianza prestada, y el tribunal deberá verificar si el imputado de delito tiene otra forma de prestar fianza de las prescritas en estas reglas. Si en el término concedido no se produjera la certificación por causas imputables al Departamento de Hacienda, el término se extenderá hasta que el Departamento de Hacienda la produzca. Este término adicional nunca será mayor de diez (10) días.

En aquellos casos en que el fiador no pueda producir una certificación de contribuyente bona fide, pero demuestre que tiene el dinero para el pago de la fianza, se celebrará una vista en la que el imputado tendrá derecho a ser asistido por un abogado y a ser oído en cuanto a las otras formas que tiene de prestar la fianza fijada.

(b) Fijación de la cuantía de la fianza. En ningún caso se exigirá una fianza excesiva. Para la fijación de la cuantía de la fianza se tomarán en consideración las circunstancias relacionadas con la adecuada garantía de la comparecencia del imputado, incluyendo:

- (1) La naturaleza y circunstancias del delito imputado.
- (2) Los nexos del imputado en la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia, su historial de empleo y sus relaciones familiares.
- (3) El carácter, peligrosidad y condición mental del imputado. A tales efectos, el tribunal podrá valerse del récord de condenas anteriores o de cualquier otra información que le merezca crédito y que sea pertinente al asunto.
- (4) Los recursos económicos del imputado.
- (5) El historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales.
- (6) La evaluación, informes y recomendaciones que haga la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

(c) Imposición de condiciones. Sujeto a lo dispuesto en la Regla 6.1 (a), (b) y (c) podrán imponerse una o más de las siguientes condiciones:

- (1) Quedar bajo la responsabilidad de otra persona de reconocida buena reputación en la comunidad, o bajo la supervisión de un oficial probatorio u otro funcionario que designe el tribunal. El tribunal determinará el grado y manera en que se ejercerá la supervisión y la persona que actúe como custodio vendrá obligada a supervisarle, producirle en corte e informar de cualquier violación a las condiciones impuestas.
- (2) No cometer delito alguno durante el período en que se encuentre en libertad ni relacionarse con personas que planifiquen, intenten cometer o cometan actos delictivos.
- (3) Conservar el empleo o, de estar desempleado, hacer gestiones para obtenerlo.
- (4) Cumplir con determinados requerimientos relacionados a su lugar de vivienda o la realización de viajes.
- (5) Evitar todo contacto con la alegada víctima del crimen o con testigos potenciales.
- (6) No poseer armas de fuego o cualquier otra arma mortífera.
- (7) No consumir bebidas alcohólicas o drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada.
- (8) Someterse a tratamiento médico o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia a drogas o bebidas alcohólicas.

(9) No abandonar su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para preservar su seguridad o la de otros ciudadanos.

(10) Entregar al magistrado u otra persona que éste designe el pasaporte o cualquier otro documento que acredite la residencia o ciudadanía del imputado.

(11) Cuando en la comisión del delito se hubiere utilizado un vehículo alquilado a una empresa acreditada, el magistrado le deberá ordenar al imputado que deposite una garantía legal suficiente a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para cubrir el monto del valor de la tasación del vehículo para la eventualidad de que proceda la confiscación. En los casos en que proceda la confiscación del vehículo, el producto de la garantía será depositado en el fondo especial administrado por la Junta de Confiscaciones según establecido en las [34 secs. 1723 a 1723o] de este título.

(12) Cumplir con cualquier otra condición razonable que imponga el tribunal.

Las condiciones impuestas de conformidad con esta regla no podrán ser tan onerosas que su observancia implique una detención parcial del imputado como si estuviera en una institución penal.

No obstante, en aquellos delitos que menciona el inciso (a) de esta Regla, se establecen las siguientes restricciones:

(1) No se impondrá al imputado una fianza con el beneficio del pago del diez por ciento (10%) en efectivo.

(2) El tribunal, en estos delitos, podrá imponer como condición especial adicional para quedar en libertad bajo fianza, que el imputado se sujete a la supervisión electrónica, bajo la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

(3) No se podrá diferir la fianza.

(13) En aquellos delitos que menciona el inciso (a) de esta Regla el tribunal podrá imponer las siguientes condiciones adicionales.

(a) Quedar bajo la supervisión del programa de supervisión electrónica y bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, los cuales actuarán como custodios y vendrán obligados a supervisarle, producirle en corte e informar de cualquier violación a las condiciones impuestas.

(b) Evitar todo contacto con la alegada víctima del crimen o con testigos potenciales.

(c) No cometer delito alguno durante el período en que se encuentre en libertad ni relacionarse con personas que planifiquen, intenten cometer o cometan actos delictivos.

(d) No poseer armas de fuego o cualquier otra arma que pueda causar la muerte.

(e) No consumir bebidas alcohólicas o drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada.

(d) Revisión de las condiciones o de la fianza o de la determinación de detención preventiva.

(1) Antes de la convicción Una parte puede solicitar la revisión de las condiciones o de la fianza señaladas o la determinación del magistrado en la vista de detención preventiva mediante moción, ante un juez de mayor jerarquía. Si la moción fuere solicitando la ampliación de las condiciones o el aumento de la fianza, el magistrado que hubiere de entender en la misma señalará condiciones encaminadas a garantizar la comparecencia del imputado, incluyendo la citación para notificarle la resolución del tribunal sobre la moción de revisión de las condiciones o de la fianza. Una moción para ampliar o limitar las condiciones o para aumentar o reducir la fianza o para revisar la determinación del magistrado en la vista de detención preventiva se resolverá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su presentación, previa audiencia al fiscal y a la persona imputada, si tuvieren a bien comparecer después de haber sido citados.

Nada de lo dispuesto en esta regla se interpretará como un impedimento para que el fiscal solicite la celebración de una vista de detención preventiva en cualquier momento antes de la convicción de surgir los criterios para ello.

(2) Después de la convicción El tribunal o juez que hubiere impuesto las condiciones o fijado fianza en apelación tendrá facultad para ampliar o limitar las condiciones o aumentar o rebajar la cuantía de la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo ameritaren y previa audiencia al fiscal y al acusado si tuvieren a bien comparecer después de haber sido citados.

(e) Orden de excarcelación. En todo caso en que un magistrado de un tribunal impusiere condiciones o admitiere fianza, sujeto a los procedimientos que en esta regla se establecen, expedirá orden de excarcelación.

(f) Una vez determinada causa probable para el arresto por uno o más delitos graves serios, el magistrado procederá a celebrar la vista de detención preventiva a petición del Ministerio Fiscal, quien deberá establecer con prueba robusta y convincente los siguientes requisitos:

(1) Que el imputado haya sido previamente convicto por delito grave; no se tomará en consideración la convicción de un delito anterior si han transcurrido más de diez (10) años desde que cumplió su sentencia.

(2) Se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios, según se define en el inciso (g) de esta regla.

(3) Que el imputado represente una amenaza para la seguridad de la comunidad.

En la vista el imputado tendrá derecho de estar representado por abogado y si no tuvier[e] los recursos para ello se le proveerá la asistencia legal. Tendrá la oportunidad de testificar, de presentar testigos, de contrainterrogar los testigos que comparezcan a la vista y podrá presentar prueba pertinente. De existir justa causa, y a solicitud de cualquiera de las partes, se podrá transferir la vista para una fecha posterior.

Cuando la transferencia se conceda a solicitud del imputado se celebrará dentro de un término no mayor de cinco (5) días, y cuando la transferencia se conceda a solicitud del Ministerio Fiscal se celebrará dentro de un término no mayor de tres (3) días. Del magistrado declarar ha lugar la

transferencia ordenará la detención del imputado. Una vez concluida la vista y de haberse probado los requisitos previamente establecidos, el magistrado ordenará la detención preventiva hasta que medie un fallo o veredicto. La orden de detención deberá incluir determinaciones de hechos y una exposición sucinta de las razones en que se basa la detención. Dicha detención no podrá exceder de seis (6) meses.

(g) Se consideran delitos graves serios los siguientes:

- Asesinato en todas sus modalidades.
- Robo en todas sus modalidades, incluyendo el robo de vehículo de motor o carjacking.
- Escalamiento agravado.
- Violación en todas sus modalidades.
- Sodomía y actos lascivos o impúdicos cuando la víctima sea menor de 14 años; cuando la víctima haya sido compelida al acto mediante el empleo de la fuerza irresistible o amenaza de grave e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente aptitud para realizarlo, o anulando o disminuyendo sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares; cuando la víctima, por enfermedad o defecto mental temporero o permanente, estuviera incapacitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización.
- Incesto.
- Incendio agravado.
- Secuestro agravado y restricción agravada.
- Sabotaje a servicios públicos esenciales.
- Infracciones a los arts. 5, 8 y 8A de la Ley de Enero 19, 1951, Núm. 17.
- Violaciones a las secs. 561 a 593 del Título 25, Ley de Explosivos que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivo o sustancia que puedan utilizarse para fabricar explosivo o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por las secs. 561 a 593 del Título 25, Ley de Explosivos.
- Estragos.
- Fuga.
- Infracción a las secs. 2401, 2405 y 2408 del Título 24, parte de la Ley de Sustancias Controladas.

- Mutilación.

- Violación a las secs. 971 a 971s del Título 25 concocidas como "Ley del Crimen Organizado".

- Robo de menores.

(h) Para determinar si el imputado constituye amenaza para la sociedad el magistrado deberá tomar en consideración sin que se entienda una limitación una o más de las siguientes circunstancias:

(1) El récord **criminal** de la persona imputada, incluyendo la determinación de si se encuentra bajo fianza, disfrutando del privilegio de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, u otro tipo de libertad condicional pendiente juicio, apelación o programas de desvío del Departamento de Rehabilitación y Corrección, así como el historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales.

(2) El historial social de la persona imputada, incluyendo su carácter y condición mental, sus relaciones familiares, sus nexos en la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia y su historial de empleo.

(3) La naturaleza, seriedad e inminencia del riesgo a la seguridad que entraña la liberación del imputado para cualquier persona o la comunidad. Este aspecto incluirá, sin que se entienda como una limitación, los casos en que exista un serio riesgo de que la persona salga de la jurisdicción; obstruya o intente obstruir la justicia; amenace, lesione o intimide o intente amenazar, lesionar o intimidar, un testigo o ciudadano; o de que intente continuar cualquier actividad **criminal**.

En los casos en que proceda la imposición de las restricciones establecidas en esta sección, el Juez celebrará una vista adversativa en la que se evalúe la peligrosidad del imputado y la gravedad del delito imputado, a los fines de determinar si le puede imponer las condiciones antes enumeradas para garantizar su comparecencia y la seguridad pública. En la vista el juzgador evaluará los siguientes factores: (1) las características y circunstancias del delito imputado; (2) la historia y características del imputado, incluyendo su carácter y condición mental, lazos familiares, empleo, recursos económicos, el tiempo de residencia en la comunidad, lazos con la comunidad, conducta anterior, antecedentes penales, y cumplimiento anterior con previas comparecencias; y (3) el peligro que correría alguna persona, o la comunidad, al quedar libre el imputado.

Durante la vista, el imputado tendrá derecho a estar representado por abogado. La determinación del juez podrá ser revisada mediante *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones.

(Febrero 8, 1966; Julio 23, 1974, Núm. 139, Parte 1, p. 690, art. 1; Julio 20, 1979, Núm. 177, p. 510, art. 1; Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 4; Agosto 13, 1994, Núm. 82, art. 2; Diciembre 24, 1995, Núm. 245, art. 4; Agosto 28, 1996, Núm 167, art. 2; Junio 3, 2004, Núm. 133, art. 6, incisos (a), (b)(6) y (c)(12); Junio 3, 2004, ley 134, art. 2; Diciembre 22, 2009, art. 2, enmienda el inciso (a) y (c) y añade los últimos dos parrafos.)

Notas Importantes

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 137, 139, 371, 373, 374, 376, 377, 381, 382, 387 y 388; Fed. R. Crim. P. 46(a); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 982, 985, 1269, 1269(a), 1270 a 1273, 1277, 1281, 1281(a), 1284, 1289 y 1291; Código modelo, Rs. 70 y 91.

Enmiendas

-2009, ley 190- Incisos (a) y (c) y añade los últimos dos párrafos.

-2004, ley 134- Inciso (a): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134 sustituyó la anterior tercera oración de este inciso con una nueva enmendandola en terminos generales y así redesigno la anterior tercera como cuarta. Inciso (b)(3): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134 enmendó la primera oración de esta cláusula en terminos generales y le añadió la segunda.

Inciso (b)(6): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134 enmendó esta cláusula en terminos generales.

Inciso (c)(12): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134 suprimio la anterior cláusula (12), redesignando la anterior (13) como (12); redesigno el anterior segundo párrafo de este inciso como el segundo de su cláusula (12), le introdujo cambios menores de redacción y le adiciono un tercero referente a las condiciones.

Inciso (c)(13): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 134 añadió esta cláusula.

Inciso (a): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133 adiciono una nueva segunda oración referente a la determinación de la cuantía, redesigno la anterior segunda como tercera, enmendandola en terminos generales, y así redesignando la anterior tercera como cuarta.

Inciso (b)(6): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133 enmendó esta cláusula en terminos generales.

Inciso (c): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133 suprimio la disposición referente a los voluntarios en el Disponiendose del párrafo introductorio de este inciso y lo enmendó en terminos generales.

Inciso (c)(12): La Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133 enmendó esta cláusula en terminos generales.

-2003, ley 133. La ley de 2003 derogó la Ley de Agosto 13, 1994, Núm. 82, que enmendó los incisos (a), (c)(11) y (d), y añadió los incisos (f) a (h) de esta sección.

-1996, ley 167. La ley de 1996 adicionó una nueva cláusula (11) al inciso (c) y redesigno la anterior (11) como (13).

-1995, ley 245. Inciso (a): La ley de 1995 enmendó este inciso en terminos generales.

Inciso (b): La ley de 1995 añadió la cláusula (6).

Inciso (c): La ley de 1995 añadió el "Disponiendose" al párrafo inicial y la cláusula (12).

-1994, ley 82. La ley de 1994 enmendó los incisos (a), (c)(11) y (d) en terminos generales y añadió los incisos (f) a (h).

-1986, ley 39. La ley de 1986 añadió las referencias a condiciones en el rubro; enmendó el inciso (a) en terminos generales; añadió un nuevo inciso (c); redesigno el anterior (c) como (d) y lo enmendó en terminos generales, y redesigno el anterior (d) como (e).

-1979, ley 177. Inciso (c)(1): La ley de 1979 enmendó esta cláusula en terminos generales.

-1974, ley 139. La ley de 1974 enmendó el rubro y los incisos (b) y (c) en terminos generales, e inserto "sujeto a los procedimientos que en esta regla se establecen" después de "admitieren fianza" en el inciso (d).

-1966. Inciso (a): La resolución del Tribunal Supremo de Febrero 8, 1966, añadió en la segunda oración de este inciso "cuando se requiera", y suprimio la expresión en ingles *misdemeanors* que aparecia entre parentesis a continuación de las palabras "delitos menos graves".

Vigencia.

El art. 3 de la Ley de Agosto 13, 1994, Núm. 82, dispone:

"Esta ley [que enmendó esta regla] entrara en vigor una vez se apruebe la enmienda propuesta a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme se dispone en la Resolución Concurrente de la Cámara Num. 32 de 16 de mayo de 1994."

Véase también la nota bajo la Regla 6.1. de este apéndice.

Exposición de motivos.**Véase Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 23, 1974, Núm. 139, Parte 1, p. 690.

Julio 20, 1979, Núm. 177, p. 511.

Agosto 13, 1994, Núm. 82.

Diciembre 24, 1995, Núm. 245.

Agosto 28, 1996, Núm. 167.

Marzo 13, 2003, Núm. 85.

Junio 3, 2004, Núm. 133.

Junio 3, 2004, Núm. 134.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Asignaciones.

El art. 7 de la Ley de Junio 3, 2004, Núm. 133, dispone:

"Se asigna del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año Fiscal 2004-2005, la suma de \$500,000.00 dolares para llevar a cabo la implantación inicial de lo dispuesto por esta Ley [que enmendó esta sección]."

Contrarreferencias.

Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, veanse las secs. 1301 et seq. del Título 4.

Pena de muerte, abolida; Véase la sec. 995 de este título.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Ley anterior.

1. En general.

Las enmiendas a las Reglas 218 a 228 de **Procedimiento Criminal** sin que el legislador prohibiera la practica judicial que autoriza prestar un por ciento en efectivo de la fianza fijada denotan que la referida practica judicial ha sido refrendada por la Asamblea Legislativa. Pueblo v. Morales Vazquez, 129 D.P.R. 379 (1991).

En casos en que los magistrados en el ejercicio de su discreción autoricen la prestación de un por ciento en efectivo de la fianza fijada, el mismo no podra ser menor del diez por ciento. Pueblo v. Morales Vazquez, 129 D.P.R. 379 (1991).

La interpretación judicial de esta regla autorizando un por ciento de la suma total impuesta como fianza para admitir la sustitución de la misma por un deposito en efectivo es una razonable y permisible a la luz de las disposiciones de dicha regla. Pueblo v. Morales Vazquez, 129 D.P.R. 379 (1991).

Cuando se presta un por ciento de la fianza en efectivo, la fianza sigue siendo por la cantidad original senalada, adviniendo responsable el fiador por la totalidad de la fianza originalmente senalada en caso de que el imputado se evada de la jurisdicción, no puede ser localizado y se proceda a la confiscación de dicha fianza. Pueblo v. Morales Vazquez, 129 D.P.R. 379 (1991).

2. Ley anterior.

Esta regla expresamente autoriza a un magistrado para aumentar o reducir la fianza cuando, a su juicio, las circunstancias lo ameriten. Pueblo v. Otero Alejandro, 110 D.P.R. 34 (1980).

Tiene derecho al beneficio de una adecuada fianza que haga viable su derecho a libertad provisional antes del juicio, a tenor con las circunstancias del delito imputado, aquel acusado que se enfrentara a una prueba en su contra consistente principalmente en el testimonio de un agente encubierto quien, por un extendido periodo de dos años, penetra la privacidad e intervino con la libertad del acusado. *Rabell v. Alcaldes Carceles de P.R.*, 104 D.P.R. 96 (1975).

Regla 219. FIANZA; CONDICIONES; REQUISITOS.

(a) Antes de la convicción. Las condiciones impuestas y la fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción garantizarán la comparecencia del acusado ante el magistrado o el tribunal correspondiente y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la comparecencia del acusado a la vista preliminar en los casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada cantidad de dinero.

(b) En apelación. De prestarse la fianza después de haber entablado el acusado recurso de apelación o certiorari el documento de fianza garantizará que el acusado, de confirmarse o modificarse la sentencia, se someterá a la ejecución de la misma y pagará las costas que se le hubieren impuesto y las que se le impusieren como consecuencia de su recurso; que de revocarse la sentencia y devolverse la causa para nuevo juicio, comparecerá ante el tribunal al cual se devolviera y se someterá a todas las órdenes, citaciones y procedimientos de dicho tribunal; que no se ausentará de Puerto Rico sin permiso del tribunal sentenciador, y que en su defecto los fiadores pagarán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada cantidad de dinero. (Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 5.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 375; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1292; Código modelo, Rs. 82 a 84.

Enmiendas

-1986, ley 39. Rubro: La ley de 1986 añadió "Requisitos".

Inciso (a): La ley de 1986 sustituyó "[T]oda fianza prestada" con "[L]as condiciones impuestas y la fianza prestada".

Vigencia.

Véase la nota bajo la Regla 6.1. de este apéndice.

Disposiciones Constitucionales.

Véase la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, precediendo al Título 1.

Contrarreferencias.

Fianza; depósito en lugar de fianza, Véase la Regla 222 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

El contrato de fianza es un acuerdo entre el fiador y el Estado mediante el cual el primero se compromete a garantizar la presencia del imputado de delito ante el tribunal que celebra el proceso en su contra. De no cumplir su compromiso el fiador viene obligado a pagar al Estado la cantidad consignada como fianza. *Pueblo v. Felix Aviles*, 128 D.P.R. 468 (1991).

Cuando una compañía de fianzas presenta su contrato ante el tribunal para la aceptación del mismo por el juez, se compromete a mantener vigente dicha fianza de forma ininterrumpida a través de la duración de todo el proceso penal. *Pueblo v. Felix Aviles*, 128 D.P.R. 468 (1991).

El propósito de la fianza antes de la convicción es asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del juicio. *Pueblo v. Negron Vazquez*, 109 D.P.R. 265 (1979).

Puesto un convicto en libertad a prueba la fianza que aseguraba su comparecencia antes de la convicción queda extinguida y el convicto permanece bajo la custodia legal del tribunal-no del fiador-hasta la expiración del periodo máximo de la sentencia. *Pueblo v. Negron Vázquez*, 109 D.P.R. 265 (1979).

Al amparo del inciso (a) de esta regla la ejecución de la sentencia ocurre cuando el convicto se somete a la misma o cuando se le entrega a la custodia del Estado. La ejecución difiere del cumplimiento en que este ocurre con posterioridad a aquella. *Pueblo v. Negron Vázquez*, 109 D.P.R. 265 (1979).

Aunque la fijación de fianza en apelación es una cuestión que cae dentro de la sana discreción del tribunal sentenciador, tal discreción debe responder al criterio de la sustancialidad de las cuestiones planteadas o la naturaleza del delito. *Pueblo v. Martínez Padro*, 91 D.P.R. 536 (1964).

La concesión de fianza en apelación no debe considerarse por el tribunal sentenciador como una mera cuestión de rutina. *Pueblo v. Martínez Padro*, 91 D.P.R. 536 (1964).

Regla 220. FIANZA; REQUISITOS DE LOS FIADORES.

Toda fianza será suscrita, o reconocida, ante un magistrado o secretario, según corresponda, bien por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico; bien por el Director Ejecutivo del Proyecto de Fianzas Aceleradas (Expedited Bail Project) creado mediante Orden de 28 de abril de 1988 dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso de *Carlos Morales Feliciano, et al. v. Rafael Hernández Colón, et al.*, Caso Civil Núm. 79-4 (PG), al cual se le considerará, para los efectos de esta regla, como una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, incluyendo específicamente, pero sin que ello se entienda como una limitación, la potestad de prestar fianzas documentales o en efectivo, incluyendo el diez por ciento (10%) en efectivo del monto total de la fianza impuesta, cuando el juez o magistrado que imponga la fianza, en el ejercicio de su discreción, estime conveniente o necesario conceder tal beneficio; bien por un fiador residente en Puerto Rico que posea bienes inmuebles en Puerto Rico no exentos de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que pesen sobre dichos bienes, excepto que el magistrado o secretario ante quien se prestare la fianza podrá permitir a más de un fiador que se obliguen separadamente por sumas inferiores siempre que el total de las obligaciones individuales equivalga a dos (2) veces el monto de dicha fianza. Dondequiera que en estas reglas se utilice el término "fiadores" se entenderá que lee "fiador o fiadores".
(Junio 13, 1968, Núm. 84, p. 157; Julio 24, 1993, Núm. 24, sec. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 378, 379, 385 y 389; Fed. R. Crim. P. 46(d); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1278, 1279, 1287 y 1292; Código modelo, Rs. 75, 78 y 86.

Enmiendas

-1993, ley 24. La ley de 1993 añadió "... bien por el Director Ejecutivo del Proyecto de Fianzas

Aceleradas ... estime conveniente o necesario conceder tal beneficio; ..." a esta sección.

-1968, ley 84. La ley de 1968 autorizó la prestación de fianza por un fiador en vez de por dos y añadió la última oración.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 14, 1993, Núm. 24.

ANOTACIONES

1. En general.

Una fianza otorgada por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico con el objeto de servir de fiadora a un acusado de delito debe ser suscrita o reconocida, no ante un notario, sino ante un magistrado o secretario de un tribunal. *Martínez v. Juez Sala Investigaciones*, 100 D.P.R. 314 (1971).

El Comisionado de Seguros está eximido de preparar los formularios para ser usados por las compañías para prestar fianzas en Puerto Rico. Op. Sec. Just. Num. 42 de 1965.

Regla 221. FIANZA; FIADORES; COMPROBACIÓN DE REQUISITOS.

Los fiadores que no fueren compañías autorizadas para prestar fianzas en Puerto Rico, en todo caso justificarán bajo juramento ante el magistrado que admitiere la fianza, que los bienes que se ofrecen en respaldo de la misma reúnen las condiciones que exige la Regla 220. El magistrado examinará a los fiadores bajo juramento, para determinar si la propiedad cumple con lo dispuesto en dicha regla y levantará un acta de la prueba testifical y documental ofrecida.

En el caso de que se admita la fianza con las garantías que se ofrecen, el tribunal expedirá el correspondiente mandamiento, que deberá ser diligenciado por el Ministerio Fiscal, dirigido al registrador de la propiedad a cargo de la sección del registro en que conste inscrita la finca que se ofrece en garantía, para que el gravamen que impone la fianza se inscriba en el registro de la propiedad y, en consecuencia, tenga los mismos efectos de un derecho real de hipoteca, aunque no será necesario tasar la finca o fincas para efectos de la subasta. Este mandamiento identificará la finca que se grave, y contendrá toda aquella otra información que fuere necesaria para lograr una inscripción conforme disponen las secs. 2001 et seq. del Título 30.

El registrador de la propiedad enviará por correo el documento de fianza ya inscrito, o cualquier notificación de defecto que haya señalado. Si surgiere de la nota de inscripción que el bien no satisface las condiciones de la Regla 220, ni sustenta las declaraciones hechas por el fiador bajo juramento, el Ministerio Fiscal solicitará del tribunal la revocación de la fianza y procederá conforme a derecho. Cuando se cancele una fianza, el tribunal deberá, a instancia de parte, emitir un nuevo mandamiento al registro, ordenando que se cancele el gravamen. La inscripción de la fianza se hará por el registrador de la propiedad libre de derecho.

(Julio 9, 1986, Núm. 83, p. 275, art. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 380.

Enmiendas

-1986, ley 83. La ley de 1986 enmendó esta regla en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase **Leyes de Puerto Rico de:**

Julio 9, 1986, Núm. 83, p. 275.

Regla 222. FIANZA; DEPÓSITO EN LUGAR DE FIANZA.

En lugar de fiadores, el acusado podrá depositar el importe de la fianza en efectivo, y el depósito así hecho garantizará el cumplimiento de las condiciones expuestas en la Regla 219 y el pago de las costas y de cualquier multa que se impusiere. El funcionario que admitiere el depósito expedirá certificado del mismo y el acusado será puesto en libertad por el funcionario bajo cuya custodia se hallare, al serle entregada la orden de excarcelación correspondiente.

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 390 y 392; Fed. R. Crim. P. 46(d); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1295 y 1297; Código modelo, R. 87.

Contrarreferencias.

Capacidad mental del acusado, **procedimiento** para determinarla, Véase la Regla 240 de este apéndice.

Fianza; cobro de costas o multa, Véase la Regla 226 de este apéndice.

Regla 223. FIANZA; SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO POR FIANZA Y VICEVERSA.

El depósito podrá ser sustituido por una fianza y viceversa, con la aprobación del tribunal, siempre que no se hubiere violado alguna de las condiciones garantizadas.

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 391; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1296; Código modelo, Rs. 88 y 89.

Regla 224. FIANZA; FIADORES; EXONERACIÓN MEDIANTE ENTREGA DEL ACUSADO.

Siempre que no se hubiere violado alguna de las condiciones de la fianza, cualquier fiador podrá, con el fin de ser exonerado de responsabilidad, entregar al acusado, o el mismo acusado podrá entregarse, al funcionario bajo cuya custodia estaba al prestar fianza, o hubiere estado de no haberse prestado, en la forma siguiente:

(a) Se entregará copia certificada de la fianza, o certificación del depósito, al funcionario correspondiente, quien detendrá al acusado bajo custodia como si se tratase de un mandamiento de arresto, y expedirá un certificado haciendo constar la entrega del acusado.

(b) El funcionario remitirá la copia certificada de la fianza y el certificado de entrega del acusado al tribunal ante el cual estuviere pendiente la causa, y el tribunal, previa notificación al fiscal del distrito, a quien se enviará copia de la fianza y del certificado, podrá ordenar la cancelación de la fianza, o en su caso la devolución del depósito.

HISTORIAL**Procedencia.**

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 393 y 395; Fed. R. Crim. P. 46(g); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1300 y 1302; Código modelo, Rs. 92 y 93.

ANOTACIONES

1. En general.

La responsabilidad de un fiador, que garantiza la comparecencia de un acusado al pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, expira cuando entrega la custodia del acusado a la autoridad competente. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265 (1979).

Regla 225. FIANZA; FIADORES; EXONERACIÓN MEDIANTE ENTREGA; ARRESTO DEL ACUSADO.

Con el objeto de llevar a cabo la entrega del acusado, los fiadores podrán en cualquier momento antes de haber sido finalmente exonerados, y en cualquier lugar dentro del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, arrestarlo ellos mismos, o facultar para ello, por medio de una autorización escrita al dorso de la copia certificada de la fianza, a cualquier persona que tenga la edad y discreción suficientes.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 394; Fed. R. Crim. P. 46(g); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1301; Código modelo, R. 94.

ANOTACIONES

1. Fianza.

La compañía fiadora no "llevo el acusado ante el tribunal", según lo dispuesto por la Regla 227, Ap. II de este título, cuando informo el tribunal que el acusado se encontraba recluido en un presidio fuera de Puerto Rico y que había realizado las gestiones para diligenciar su arresto. 2004 DTS 16 (2004) Pueblo v. Colón Rodríguez, 2004 TSPR 16; 161 D.P.R. __ (2004)

Regla 226. FIANZA; COBRO DE COSTAS O MULTA.

Al expirar el término para apelar de una sentencia en que se hubiere impuesto multa, o multa y costas al acusado, o transcurridos cinco (5) días desde el recibo del mandato confirmando la misma, el tribunal sentenciador, en caso de haberse hecho el depósito a que se refiere la Regla 222 dictará sentencia disponiendo la confiscación del depósito hasta donde fuere necesario para el pago de todas las costas impuestas, incluyendo las de apelación, si algunas, y además podrá ordenar al secretario que aplique la parte que fuere necesaria al pago de la multa impuesta. En caso de haberse prestado fianza, el tribunal sentenciador dictará sentencia condenando a los fiadores al pago de las costas, si éstas no hubieren sido satisfechas.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 49 y 392; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1297; Código modelo, R. 90.

Regla 227. FIANZA; **PROCEDIMIENTO PARA SU CONFISCACION; INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES; DETENCION.**

(a) Fianza; confiscación. Si el acusado dejare de cumplir cualquiera de las condiciones de la fianza, el tribunal al que correspondiere conocer del delito ordenará a los fiadores o al depositante que muestren causa por la cual no deba confiscarse la fianza o el depósito. La orden se notificará personalmente o se remitirá por correo certificado a la dirección que se le conociere a los fiadores o a sus representantes, agentes o apoderados o al depositante. En los casos en que

el fiador tenga un apoderado, agente o representante, la debida notificación a este último surtirá los mismos efectos que si se hiciera al fiador.

Si los fiadores o el depositante explicaren satisfactoriamente el incumplimiento en que se funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin efecto bajo las condiciones que estimare justas.

De no mediar explicación satisfactoria para tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria contra los fiadores o el depositante confiscando el importe de la fianza o depósito pero la misma no será firme y ejecutoria hasta cuarenta (40) días después de haberse notificado. Si dentro de ese período los fiadores llevaran al acusado a presencia del tribunal, éste dejará sin efecto dicha sentencia.

Transcurrido el período antes prescrito y en ausencia de muerte, enfermedad física o mental del fiado sobrevenida antes de la fecha en que sea dictada la sentencia ordenando la confiscación de la fianza, el fiador responderá con su fianza por la incomparecencia del acusado al tribunal.

Convertida en firme y ejecutoria una sentencia confiscando la fianza o el depósito, el secretario del tribunal, sin necesidad de ulterior requerimiento, remitirá inmediatamente copia certificada de dicha sentencia al Secretario de Justicia para que proceda a la ejecución de la misma de acuerdo a la Regla 51 de **Procedimiento** Civil para el Tribunal General de Justicia, Ap. III del Título 32, e igualmente remitirá al Secretario de Hacienda el depósito en su poder.

Disponiéndose, que el tribunal a su discreción podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación en cualquier momento anterior a la ejecución de dicha sentencia, siempre que medien las siguientes circunstancias:

- (1) Que los fiadores hayan producido al acusado ante el tribunal.
- (2) Que el tribunal constate a su satisfacción el hecho anterior.

La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia se hará mediante moción la cual se presentará dentro de un término razonable pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden. Una moción a tales fines no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos.

(b) Incumplimiento de condiciones; detención. Si en lugar de una fianza, o en adición a ésta, el magistrado hubiese establecido alguna condición para la libertad provisional y ésta fuere incumplida, ello constituirá un delito bajo las secs. 2001 et seq. del Título 33. El tribunal al que correspondiese entender en el delito procederá a ordenar la detención del imputado. El tribunal podrá dejar sin efecto la condición impuesta y exigir en su lugar la prestación de una fianza, confiscar la fianza o depósito prestado, sujeto a lo dispuesto en esta regla, requerir que la fianza sea prestada en su totalidad o aumentar el monto de ésta.

(Junio 18, 1965, Núm. 52, p. 101, art. 1; Mayo 26, 1967, Núm. 67, p. 275; Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 6; Julio 1, 1988, Núm. 55, p. 280, art. 1, ef. 90 días después de Julio 1, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 396 a 399; Fed. R. Crim. P. 46(f); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1307; Código modelo, Rs. 103 a 106.

Enmiendas

-1988, ley 55. Inciso (a): La ley de 1988 enmendó este inciso en terminos generales.

-1986, ley 39. Rubro: La ley de 1986 añadió "Incumplimiento de Condiciones; Detencion".

Inciso (a): La ley de 1986 designo el anterior texto de esta regla como inciso (a) y le añadió el rubro.

Inciso (b): La ley de 1986 añadió este inciso.

-1967, ley 67. La ley de 1967 añadió el Disponiendose.

-1965, ley 52. La ley de 1965 enmendó el párrafo tercero en terminos generales.

Vigencia.

Véase la nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 1, 1988, Núm. 55, p. 280.

Contrarreferencias.

Comparecencia del acusado, Véase la Regla 55 de este apéndice.

Hacienda, Secretario de, Véase la sec. 283c del Titulo 3.

Justicia, Secretario de, Véase la sec. 71 del Titulo 3.

ANOTACIONES

1. En general.

La compañía fiadora no "llevo el acusado ante el tribunal", segun lo dispuesto por esta regla, cuando informo el tribunal que el acusado se encontraba recluido en un presidio fuera de Puerto Rico y que habia realizado las gestiones para diligenciar su arresto. Pueblo v. Colón Rodríguez, 161 D.P.R. - (2004); 2004 TSPR 16.

El contrato de fianza es un acuerdo entre el fiador y el estado donde aquel se compromete a garantizar la comparecencia del acusado a todas las etapas del **procedimiento criminal** seguido en su contra; no obstante, la no comparecencia del acusado a alguna de las instancias del proceso, sin que medie razonable justificacion, es causa suficiente para que se decrete la confiscación de la fianza a favor del estado. Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

Esta regla provee la alternativa de que el tribunal, a su discreción, puede dejar sin efecto una sentencia de confiscación previamente emitida, siempre que el fiador produzca al acusado. Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

Cuando un acusado esta encarcelado por delitos distintos a los originalmente imputados, es suficiente que el fiador informe su paradero y diligencie la correspondiente orden de arresto sin llevar al acusado a la presencia del tribunal. Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

Esta regla exige que antes de que el tribunal pueda confiscar sumariamente los dineros correspondientes a las fianzas, la parte afectada puede comparecer y plantear sus objeciones. Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

El **procedimiento** en esta regla en lo concerniente a la orden de mostrar causa antes de proceder a ordenar la confiscación de una fianza es uno de caracter mandatorio. Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

Cuando un acusado es encarcelado por hechos no relacionados con los hechos que dieron lugar a la primera acusación, la agencia fiadora en la primera acusación cumple con el requisito de traer al acusado ante el tribunal con el meramente informar al tribunal del lugar en que el acusado esta preso, y emplazarlo dentro de los 40 dias de la notificación de la sentencia. Pueblo v. Rivera Segarra, 139 D.P.R. 206 (1995).

La violación de las condiciones establecidas para gozar de libertad provisional bajo fianza producen ipso facto la cancelación de ese privilegio y la confiscación de dicha fianza, aunque ello no apareciere de la faz de la poliza. United States v. Chapel, 480 F. Supp. 588 (1979).

Sometese un fiador a la competencia de la sala del Tribunal Superior que senalo, acepto y luego confisco una fianza prestada para la libertad provisional de un acusado cuando dicho fiador no plantea que dicha sala perdio jurisdicción para confiscar dicha fianza al trasladarse la causa principal a otra sala del Tribunal Superior. Ojeda Rios v. Alcaide Carcel, 104 D.P.R. 16 (1975).

En una demanda para la confiscación de una fianza prestada para garantizar la comparecencia de un acusado no es necesario alegar que dicho acusado fue puesto en libertad por virtud de la fianza prestada. E.L.A. v. Compania de Fianzas, 94 D.P.R. 4 (1967).

El hecho de que un acusado debidamente fiado no fuere excarcelado constituye una defensa que debe interponer la fiadora contra una demanda en su contra para la confiscación de la fianza prestada para garantizar la comparecencia juicio de dicho acusado. E.L.A. v. Compania de Fianzas, 94 D.P.R. 4 (1967).

Regla 228. CONDICIONES; FIANZA; ARRESTO DEL ACUSADO.

Se ordenará el arresto del acusado a quien se han impuesto condiciones o que ha prestado fianza o hecho depósito en los siguientes casos:

- (a) Cuando se ha violado cualquiera de las condiciones impuestas o de las condiciones de la fianza o depósito.
- (b) Cuando los fiadores, o cualquiera de ellos, hayan muerto, o carezcan de responsabilidad suficiente, o dejen de residir en Puerto Rico.
- (c) Cuando se hayan impuesto condiciones adicionales o se haya aumentado la cuantía de la fianza.
- (d) Cuando se deje sin efecto la orden permitiendo libertad bajo condiciones o fianza en apelación ante el Tribunal Supremo.

Si la orden decretando el arresto se dictare en condiciones que el acusado tuviere que someterse a nuevas condiciones o tuviere derecho a prestar nueva fianza bajo estas reglas, se fijarán en la orden las nuevas condiciones o el importe de la nueva fianza, en su caso. La orden expresará los fundamentos para el arresto; dispondrá que lo verifique cualquier alguacil, policía u otro funcionario de autoridad a quien hubiere correspondido su custodia de no haberse impuesto condiciones o de no haberse prestado fianza originalmente, hasta tanto fuere legalmente excarcelado.

(Junio 5, 1986, Núm. 39, p. 104, art. 7.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 139 y 400 a 404; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 985 y 1310 a 1314; Código modelo, Rs. 95 y 96.

Enmiendas

-1986, ley 39. La ley de 1986 enmendó esta sección y su rubro para anadir las referencias a condiciones.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Regla 229. ORDEN DE ALLANAMIENTO O REGISTRO Y AGENTE DE RENTAS INTERNAS; DEFINICIONES.

Una orden de allanamiento o registro es el mandamiento expedido a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, firmado por un magistrado y dirigido a un funcionario del orden público, agente de rentas internas, o inspector de contribución sobre ingresos, dentro de las funciones de su cargo, ordenándole proceda a buscar y ocupar determinada propiedad mueble y la traiga al magistrado. El término "agente de rentas internas" tal como se usa en estas reglas, no incluye a los colectores de rentas internas ni a los tasadores, aunque por cualquier ley se les señale a los colectores de rentas internas y tasadores las mismas facultades que tienen los agentes de rentas internas.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 501; Fed. R. Crim. P. 41(a); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1523.

Disposiciones Constitucionales.

Expedición de ordenes autorizando registros y allanamientos; evidencia obtenida en violación de las disposiciones sera inadmisibile en los tribunales, Véase la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, precediendo al Titulo 1.

Contrarreferencias.

Ordenes de allanamiento en relación con juegos prohibidos, Véase la sec. 1248 del Titulo 33. Registros y allanamientos, Véase la sec. 10 del Titulo 1.

ANOTACIONES

1. En general.

La jurisprudencia interpretativa de la garantía Constitucional contra registros y allanamientos irrazonables extiende a registros, allanamientos e incautaciones de índole penal y administrativa, y ha creado una presunción de invalidez cuando se llevan a cabo sin orden judicial previa. Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994).

El registro sin orden judicial de un ciudadano legalmente arrestado y del área de su alcance inmediato es legal y razonable, pues se justifica cuando se hace con el propósito de evitar que la persona utilice armas o intente fugarse, y para ocupar evidencia que el arrestado podría destruir. Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994).

Ante la ausencia de una orden judicial que autorice la intervención, el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar la existencia de circunstancias que hicieron innecesaria la obtención de la orden judicial. La jurisprudencia ha reconocido, entre otras situaciones: (1) cuando la evidencia se encuentre a

plena vista; (2) cuando la evidencia es arrojada o abandonada; (3) cuando la evidencia es obtenida en el transcurso de una persecución; (4) cuando la evidencia es obtenida en un registro administrativo en una actividad altamente reglamentada por el Estado, y (5) cuando ha mediado consentimiento para el registro. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Los valores centrales protegidos por la garantía Constitucional de protección contra registros y allanamientos irrazonables son la intimidad y dignidad del ser humano. Los factores a considerar para determinar si la persona registrada tiene una expectativa razonable de intimidad son: (1) el lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de la intervención policiaca; (3) el objetivo o proposito de la intervención; (4) si la conducta de la persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; (5) la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o visibilidad al lugar registrado; (6) las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

La Constitución reconoce, como parte del derecho a intimidad, la protección sobre la persona, la cual incluye la protección sobre su cuerpo y sus pertenencias, pero se ha entendido que existe un registro cuando se busca en el cuerpo de una persona un objeto, esto independientemente de que dicha intervención sea razonable o no. No hay expectativa de intimidad por parte de una persona cuando se exhiben objetos a plena vista sobre su cuerpo. Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

Denominase "orden de allanamiento o registro" un mandamiento firmado por un magistrado, ordenando buscar y ocupar determinada propiedad mueble, mandamiento en el cual se nombraran o describiran con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas a ocuparse. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971).

Regla 230. ORDEN DE ALLANAMIENTO; FUNDAMENTOS PARA SU EXPEDICION.
Podrá librarse orden de allanamiento o registro para buscar y ocupar propiedad:

- (a) Hurtada, robada, estafada u obtenida mediante extorsión,
- (b) que ha sido, está siendo o se propone ser utilizada como medio para cometer un delito.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 502; Fed. R. Crim. P. 41(b); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1524.

ANOTACIONES

1. En general.

Tratándose de una prenda robada o estafada, es necesario que surja de la declaración o declaraciones juradas el sitio o lugar donde estuviere oculta esa prenda, o el nombre de la persona que se la haya robado o estafado o de cualquier otra persona en cuyo poder se hallare, a fin de que la orden de allanamiento para su búsqueda sea valida. Flores Valentin v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805 (1965).

Regla 231. ORDEN DE ALLANAMIENTO; REQUISITOS PARA LIBRARLA; FORMA Y CONTENIDO.

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la

cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 503 a 507 y 511; Fed. R. Crim. P. 41(c); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1525 a 1528.

Disposiciones Constitucionales.

Véase el Art. II, Sec. 10 de la Constitución, precediendo al Título 1.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Causa probable.
3. Declaración jurada.

1. En general.

Es válida una orden de registro y allanamiento expedida por un magistrado, cuando la misma esté fundada en una declaración que fue juramentada anteriormente ante un fiscal del Departamento de Justicia y no ante el magistrado que expidió dicha orden. Prevalece la norma de Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467. 2007 DTS 093 Pueblo v. Figueroa Agosto, 2007 TSPR 093, Resolución de NO HA LUGAR.

Una orden de allanamiento sera insuficiente de su faz si solo describe de forma general la totalidad de una estructura de ocupación multiple sin hacer referencia específica a la unidad a la cual pretenden ganar acceso los agentes del orden público dentro de dicha estructura. Pueblo v. Pérez Narvaez, 130 D.P.R. 618 (1992).

Si los agentes del orden público no conocían que una estructura era de ocupación multiple, si no hubieran podido descubrirlo mediante una investigación razonable antes del allanamiento y si llevaron a cabo tal hallazgo en el momento de diligenciarse la orden, la misma será completamente valida y suficiente en Derecho. Pueblo v. Pérez Narvaez, 130 D.P.R. 618 (1992).

Para decidir si una confidencia justifica la expedición de una orden de allanamiento se deben considerar los siguientes criterios: (1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el **criminal** en terminos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente o por información proveniente de otras fuentes, y (4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos o en proceso de cometerse. Pueblo v. Pagan, Ortiz, 130 D.P.R. 470 (1992).

El examen específico y personal del declarante bajo esta regla no es un requisito Constitucional. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 (1989).

Es valida una orden de allanamiento donde, en vez de nombrarse los articulos o cosas a ocuparse en el sitio a ser allanado, se expresa que se ordena ocupar todo lo relacionado con el juego ilegal de la bolita. Pueblo v. Soto Zaragoza, 99 D.P.R. 762 (1971).

Para la validez de una orden de allanamiento es esencial que en esta y en la correspondiente declaración jurada que le sirve de fundamento se describa con precisión el local, la casa o el edificio a registrarse, no debiendo estar dicha orden sujeta a interpretación en cuanto a dicho extremo. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 517 (1969).

Validamente autorizada una orden de allanamiento para registrar un apartamento totalmente ocupado por una familia-apartamento que fue descrito con precision, detallandose su número de identificación y planta de la estructura en que estaba situado, el nombre de la estructura, su dirección y el color de pintura de la misma-el hecho de que en la misma se expresara que se ordenaba el registro "del cuarto a la parte izquierda a la entrada del Apto. 108(B)" no justifica concluir que dicha orden limitaba el registro autorizado a un solo cuarto de dicho apartamento. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 517 (1969).

Es nula una orden de allanamiento que confiera discreción a unos agentes de rentas internas para allanar una de dos o varias casas, sin que estas estuviesen todas descritas en dicha orden. Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747 (1965).

Es valida una orden de allanamiento que no concede discreción a unos agentes de rentas internas para allanar una de dos o de varias casas. Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747 (1965).

Un magistrado que esta presente en un cuartel de la Policía y escucha mientras un agente dicta una declaración jurada a su secretaria-declaración a base de la cual el magistrado dicto una orden de registro de un establecimiento comercial-y pasada en limpio dicha declaración revisa la misma determinando que esta contenia hechos suficientes para justificar plenamente la determinación de causa probable para librar la orden de registro, cumple con el requisito prescrito por esta regla que requiere que el magistrado haga un examen del declarante, aun cuando dicho funcionario no le haga pregunta alguna al policía declarante. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

El término "examen" usado en esta regla no significa exclusivamente el hacerle preguntas al declarante. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

Bajo las disposiciones de esta regla que autorizan la expedición de ordenes de allanamiento o registro, los jueces, como regla general, ademas de examinar la declaración jurada que sirve de fundamento a la orden de registro o allanamiento, deben examinar especificamente al declarante. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

El aditamento en una orden de allanamiento para ocupar un revolver, a los efectos de que ademas de dicha arma se buscara cualquier otra prenda o articulo poseido en contravención de la ley, aunque no produce la nulidad integral de la orden de allanamiento, carece de valor legal por contravenir lo dispuesto en la sec. 10 del art. II de la Constitución y en las Reglas 229 y 231. Flores Valentin v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805 (1965).

Si de las declaraciones juradas que dan origen a la orden de allanamiento para ocupar un revolver no surge la plena seguridad de que el mismo se encuentra en el lugar que ha de ser registrado, es improcedente disponer que el mismo se practique en horas de la noche. Flores Valentin v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805 (1965).

Examinada la declaración jurada que sirvio de fundamento para la expedición de una orden de

allanamiento expedida 62 días después de la fecha de dicha declaración, dicha orden es nula por el tiempo transcurrido desde que se observaron los hechos por el deponente y la fecha de dicha orden, maxime cuando no existe afirmación alguna en dicha declaración al efecto de que con posterioridad a la fecha que ella exhibe se observaron actividades relacionadas con la bolita en la residencia que se intentaba registrar. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

Un agente del orden público puede verificar un registro sin necesidad de obtener previamente una orden de allanamiento cuando dicho registro es incidental y contemporaneo a un arresto. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

Un registro o una incautación sin orden de allanamiento que es incidental a un arresto legal ha sido siempre considerado como un derecho limitado del Estado. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

2. Causa probable.

Existe causa probable que justifica la expedición de una orden de allanamiento cuando los hechos aparentes que se desprenden de la correspondiente declaración jurada que le sirve de fundamento son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

Examinada la declaración jurada que sirvió de fundamento para la expedición de una orden de registro, la misma relaciona hechos y circunstancias que justifican ampliamente de por sí la existencia de causa probable de que se estaba cometiendo un delito. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

Es nula una orden de allanamiento cuando de las dos declaraciones juradas en que la misma se apoya-en ninguna de las cuales se expuso o se desprende que un revolver sustraído por tres escaladores, el cual debía ser ocupado por agentes del orden público, se encontraba oculto en sitio alguno-no surge en forma alguna causa probable para librarla. Flores Valentin v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805 (1965).

Para determinar la causa probable juega extraordinaria importancia el tiempo transcurrido desde que se observaron los hechos hasta que se solicita la orden de registro, y si los hechos observados son remotos no puede razonablemente afirmarse que existe causa probable a la fecha en que se solicita la orden. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

No puede establecerse una regla rígida en cuanto al lapso de tiempo que puede transcurrir desde que se observan los hechos y se solicita la orden de registro, pues lo que es razonable en un caso puede ser irrazonable en otro, por lo que cada caso debiera ser considerado de acuerdo con las circunstancias peculiares del mismo. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

Hechos remotos contenidos en una declaración jurada no pueden justificar la expedición de una orden de registro de la morada de un ciudadano, quien tiene el derecho Constitucional fundamental a que se le respete la tranquilidad de su hogar. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

Es innecesario que se pruebe la causa probable para el arresto de la peticionaria en un recurso de habeas corpus cuando, en la contestación del demandado (*return*) se alegan los hechos esenciales para establecer dicha causa probable y en la replica a dicha contestación no se niegan dichos hechos, sino que se ratifican. García Ramos v. Alcaide, Carcel de Mujeres, 90 D.P.R. 160 (1964).

3. Declaración jurada.

Un deponente en una declaración jurada para obtener una orden de allanamiento no tiene la facultad de anular el registro mediante el conocido recurso en el estrato de delincuencia de cambiar la declaración.

Jusino López v. Alcaide Carcel, 103 D.P.R. 719 (1975).

Un tribunal ha de tomar con recelo y gran sospecha la retractación o desmentida por parte de un deponente cuya declaración jurada ha servido de base para obtener una orden de allanamiento. Jusino López v. Alcaide Carcel, 103 D.P.R. 719 (1975).

Un tribunal no viene obligado a interpretar la declaración jurada prestada por el agente del orden público en que se funda la expedición de una orden de allanamiento en forma tecnica y restringida. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

Cumple con la ley y la jurisprudencia una declaración jurada que sirve de fundamento a la expedición de una orden de allanamiento cuando el agente del orden público que la prestara expresa en la misma que las observaciones que hizo y relato son el resultado de labor de vigilancia hacia el patio de la residencia de los sospechosos que luego fueron acusados. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

Es valida una declaración jurada prestada por un agente del orden público cuando esta informa al magistrado que expidió la orden como dicho agente obtuvo la información sobre los hechos que justificaban la expedición de la correspondiente orden de allanamiento. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

Una declaración jurada que ha de servir de fundamento para la expedición de una orden de allanamiento no tiene que contener cuestiones elaboradas y especificas. Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972).

El tribunal no puede adoptar una interpretación tecnica o restringida de la declaración de un agente encubierto en que se fundo la expedición de una orden de allanamiento de una estructura. Pueblo v. Soto Zaragoza, 99 D.P.R. 762 (1971).

Designada correctamente en una orden de allanamiento, asi como en la declaración jurada que le sirve de base, el lugar donde esta ubicada una casa a ser allanada, un error en el resumen de la declaración jurada hecha en el formulario de la orden de allanamiento-en que se indico que el barrio donde ubicaba la casa estaba situado en el municipio de Yabucoa, en vez de el de Las Piedras-no efecta la autoridad que confirió la orden de allanamiento para realizar el registro interesado. Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747 (1965).

El documento que da base para expedir una orden de allanamiento es la declaración jurada requerida, y no el resumen que de ella se hace luego en el formulario de la orden de allanamiento. Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747 (1965).

La suficiencia de la declaración jurada que sirve de base a la expedición de una orden de allanamiento puede impugnarse mediante prueba de que lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso. Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965).

Aunque la ley no prescribe periodo de tiempo determinado dentro del cual deba prestarse una declaración jurada en que se funde la expedición de una orden de registro, dicha declaración, sin embargo, debe exponer hechos tan cercanos a la fecha de su expedición que justifiquen una conclusión de causa probable de que se esta cometiendo un delito en esa fecha. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

Regla 232. ORDEN DE ALLANAMIENTO; DILIGENCIAMIENTO.

La orden de allanamiento o registro sólo podrá ser cumplimentada y devuelta diligenciada dentro de los diez (10) días de la fecha de su libramiento. El funcionario que la cumplimente dará a la persona a quien se le ocupe la propiedad, o en cuya posesión se encuentre, copia de la orden y un

recibo de la propiedad ocupada, o dejará dicha copia y recibo en el sitio donde se ocupare la propiedad. El diligenciamiento irá acompañado de un inventario escrito de la propiedad ocupada, hecho en presencia de la persona que solicitó la orden, y de la persona a quien se le ocupó o en cuya casa o local se ocupó la propiedad, de estar dichas personas presentes, y si alguna de ellas no lo estuviere, en presencia de alguna otra persona que fuere digna de crédito. El inventario será jurado por el diligenciante. A requerimiento de la persona que solicitó el allanamiento o registro, o de la persona a quien le fuere ocupada la propiedad, el magistrado entregará a éstas copia del inventario.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 512, 513, 515 y 516; Fed. R. Crim. P. 41(d); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1534 a 1538.

Contrarreferencias.

Diligenciamiento de las ordenes de allanamiento en los casos de la Ley de Sustancias Controladas, Véase la sec. 2510 del Título 24.

ANOTACIONES

1. En general.

El requisito de devolver la orden de allanamiento diligenciada es un deber ministerial que no invalida un registro efectuado mediante una orden valida expedida a esos efectos. *Martínez Campos v. Banco de Ponce*, 138 D.P.R. 366 (1995); *Pueblo v. Alberti Santiago*, 138 D.P.R. 357 (1995).

Los diez días dispuestos en esta regla para el diligenciamiento de la orden de allanamiento se extienden cuando el ultimo día es festivo o fin de semana. Op. Sec. Just. Num. 5 de 1983.

No empece la extensión al plazo de diez días que dispone esta regla para el diligenciamiento de la orden de allanamiento que por virtud de lo dispuesto en la sec. 72 del Título 1 pueda tener lugar, los funcionarios del orden público deben diligenciar lo más pronto posible las ordenes de allanamiento o registro, con suficiente antelación a la fecha en que expira dicho término. Op. Sec. Just. Num. 5 de 1983.

Realizado un registro legal de acuerdo con la correspondiente orden de allanamiento, si en el curso de dicho registro los funcionarios del orden público descubren articulos no mencionados en la orden que pudieran haberse incautado en un registro incidental a un arresto, dichos funcionarios también pueden incautarse de dichos articulos de acuerdo con la orden dictada. *Pueblo v. Soto Zaragoza*, 99 D.P.R. 762 (1971).

Un agente del orden público que diligencia una orden de allanamiento puede dejar de dar a conocer la autoridad de que esta investido para realizar tal allanamiento antes de proceder al mismo: (a) para evitar aumentar el riesgo o peligro del agente diligenciador de la orden, o (b) evitar la destrucción de la evidencia que se pretende conseguir, o (c) cuando ya las personas a ser registradas esten sobre aviso. *Pueblo v. Bonet Flores*, 96 D.P.R. 685 (1968).

La entrada forzada de un agente del orden público para ejecutar una orden de allanamiento sin previo anuncio de su autoridad para así actuar no puede ser justificada bajo una norma general basada meramente en el tipo de delito o evidencia envuelta, debiendo existir alguna razon adicional que justifique tal actuación. *Pueblo v. Bonet Flores*, 96 D.P.R. 685 (1968).

No es irrazonable el registro de un apartamento por parte de varios agentes de rentas internas provistos

de una orden de allanamiento por el hecho de que estos no dieran cumplimiento al requisito de dar a conocer la autoridad de que estaban revestidos antes de proceder al allanamiento y registro-usando una llave que le suministro el administrador del edificio y violentando la puerta del cuarto de baño del apartamento-cuando existe el peligro de que los sospechosos destruyeran la evidencia que se interesaba adquirir-drogas narcoticas-frustrando así el proposito de la orden del allanamiento. Pueblo v. Bonet Flores, 96 D.P.R. 685 (1968).

No es admisible en evidencia el fruto de un registro ilegal de un paquete así como el fruto obtenido mediante un registro ilegal de la residencia de un acusado. Pueblo v. Lastra Saez, 93 D.P.R. 876 (1966).

No habiendo oposición alguna a la entrada de los agentes de rentas internas en la casa del acusado, existiendo prueba de que la orden de allanamiento le fue entregada y teniendo dicho acusado necesariamente conocimiento del proposito del allanamiento, se cumplieron sustancialmente los requisitos legales para el diligenciamiento de dicha orden, por lo que la evidencia ocupada en dicho registro era admisible en evidencia. Pueblo v. Lugo Figueroa, 93 D.P.R. 548 (1966).

Regla 233. ORDEN DE ALLANAMIENTO; REMISIÓN DE ORDEN DILIGENCIADA.

El magistrado a quien se devolviera diligenciada una orden de allanamiento o registro unirá a la misma copia del diligenciamiento, el inventario, las declaraciones juradas y cualesquiera otros documentos que hubiere en relación con la misma, y la propiedad ocupada, remitiéndolo todo inmediatamente al tribunal que conociere o hubiere de conocer del delito en relación con el cual se expidió la orden de allanamiento o registro.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 514 y 519; Fed. R. Crim. P. 41(f); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1541.

Regla 234. ALLANAMIENTO; MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA.

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:

- (a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
- (b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
- (c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.
- (d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
- (e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.
- (f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.

En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o los fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oír la prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud y celebrará una vista evidenciaria ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada mediando una orden judicial y la parte promovente demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que haga necesario la celebración de la vista; en ausencia de tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin vista previa utilizando como base los escritos presentados por las partes.

El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista evidenciaria con antelación al juicio, y ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada sin previa orden judicial si en la solicitud la parte promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio Público vendrá obligado a refutar la presunción de ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá establecer los elementos que sustentan la excepción correspondiente al requisito de orden judicial previa.

De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiera, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de justa causa para no haberla presentado dentro de dicho término o que el acusado no le constaren los fundamentos para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.

(Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315, art. 8, ef. 60 días después de Julio 5, 1988; Junio 1, 2007, Núm. 44, art. 1, enmienda el último párrafo con los últimos tres párrafos.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 517, 518 y 518-A; Fed. R. Crim. P. 41(e); Ley de Junio 22, 1957, Núm. 91, p. 468.

Enmiendas

-2007, ley 44. – Esta ley enmienda el último párrafo de esta Regla 234 con los últimos tres párrafos.

-1988, ley 65. -La ley de 1988 enmendó el párrafo final en terminos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1988, Núm. 65, p. 315.

ANOTACIONES

1. En general.
2. Registro incidental al arresto.
3. Moción de supresión.
4. Consentimiento.
5. Registro de automovil.
6. Objetos abandonados.
7. Persecución en caliente.

8. Registros tipo inventario.
9. Morada y privacidad.

1. En general.

La facultad de un tribunal para resolver mociones de supresión de evidencia a base de los escritos presentados sin necesidad de celebrar vista evidenciaria no aplica en casos en que la solicitud se basa en la ausencia de orden judicial previa. *Pueblo v. Blase Vazquez*, 148 D.P.R. 618 (1999).

La parte promovente de una moción de supresión, en aquellos casos en que la evidencia obtenida fue producto de una incautación sin orden judicial previa, no tiene que demostrar que existe una controversia sustancial de hechos para que sea obligatoria la celebración de una vista. *Pueblo v. Blase Vázquez*, 148 D.P.R. 618 (1999).

Para que un magistrado expida una orden de registro o allanamiento la causa probable debe basarse en la creencia razonable que el objeto incautable del registro se encuentra en el lugar particular a ser allanado. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

El uso de declaraciones estereotipadas por cualquier tipo de testigo debe ser objeto de escrutinio riguroso para evitar que declaraciones falsas o inexactas vulneren derechos de ciudadanos inocentes. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

No constituye una declaración estereotipada una declaración donde el agente narra hechos específicos que le constaron de propio conocimiento, en los que describe haber observado unas armas de alto calibre, siendo estas objetos incautables. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

La ausencia de una descripción específica de la estructura objeto del registro es un defecto que la invalida y lleva ineludiblemente a la supresión de la evidencia obtenida. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

En aquellos casos en que la configuración física de una estructura sugiere razonablemente que la misma es de ocupación múltiple, los investigadores tienen la obligación de realizar una investigación razonable para determinar si la estructura es de ocupación múltiple. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

Para sostener la validez de un registro de varias subunidades dentro de una estructura de ocupación múltiple, por virtud de una orden que no especifica las unidades a ser registradas por desconocimiento del agente que prestó la declaración jurada, el estado debe demostrar que, luego de una investigación razonable realizada por los agentes, no era posible determinar que la estructura era de ocupación múltiple. *Pueblo v. Camilo Meléndez*, 148 D.P.R. 539 (1999).

Exigirle a los agentes del orden público la obtención de una orden de allanamiento antes de investigar brevemente una conducta sospechosa que ocurre frente a ellos en una zona aledana a su propiedad abierta al público y que no tiene signos evidentes que reflejen una expectativa razonable de intimidad, constituiría una restricción irrazonable del patrullaje preventivo. *Pueblo v. López López*, 129 D.P.R. 287 (1991).

No resulta objetable que la Policía pueda acercarse a un lugar accesible a cualquier persona para averiguar la identidad del dueño de un vehículo que estaba siendo desmantelado en un lugar totalmente visible desde la vía pública. *Pueblo v. López López*, 129 D.P.R. 287 (1991).

Para poder penetrar en la casa de un tercero con el proposito de arrestar a un sospechoso sin una orden de allanamiento previa, los agentes del orden público deben obtener suficiente información para creer que el sospechoso se encuentra en casa del tercero y deben demostrar que, a la luz de las circunstancias, seria irrazonable ir en busca de una orden de allanamiento. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Cuando la incautación se haya efectuado sin una orden de un tribunal, el Estado siempre puede demostrar los hechos particulares del caso que justifiquen la intervención policial. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Una vez establecido que la incautación se realizo sin haberse obtenido el mandamiento judicial, compete al Ministerio Público rebatir la presunción de irrazonabilidad mediante la presentación de prueba sobre las circunstancias especiales que requirieron esa intervención. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Con respecto a las circunstancias apremiantes se requiere que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, los agentes del orden público demuestren que existe urgencia para la acción policial debido a la existencia de circunstancias que impiden la obtención de la orden, y se pueden considerar: el riesgo para la seguridad pública y para la Policía si no se actua con premura; la gravedad del delito imputado al sospechoso; la posibilidad de fuga, y si el sospechoso genera violencia que produzca un claro e inminente peligro a la vida de los agentes. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

La evidencia ocupada en poder del acusado al tiempo de su arresto legal es suficiente para relacionarlo con las sustancias controladas encontradas en el automovil abandonado tras un accidente, y en el avion accidentado. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991).

El abandono por el acusado de un vehículo en la via pública para continuar la huida a pie hace desaparecer toda expectativa de intimidad que pudiera pretenderse sobre dicho vehículo; por consiguiente, el registro de dicho vehículo sin orden judicial previa no es ilegal. Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164 (1990).

La mera alegación de que existe una situación de emergencia, fundada y sin explicar, no es suficiente para hacer admisible una evidencia obtenida mientras la Policía entraba en un predio para atender la supuesta emergencia. Debe haber otras razones o fundamentos; primeramente, por ser esta una excepción al requisito Constitucional que precisa de una orden judicial para efectuar un registro, el peso de la prueba recae en el Estado. En segundo lugar, debe haber una evaluación rigurosa de la razonabilidad de la creencia de la Policía de que realmente existia una emergencia. Pueblo v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988).

Una mera infracción de transito de por si justifica la detención inicial del vehículo, pero no justifica un registro del automovil sin orden judicial. Pueblo v. Malave Gonzalez, 120 D.P.R. 470 (1988).

En ausencia de circunstancias especiales, un registro del interior de un automovil sin orden judicial cuando la Policía lo ha detenido por una violación menor de transito es irrazonable. Pueblo v. Malave Gonzalez, 120 D.P.R. 470 (1988).

Una vista que se celebra para discutir una moción de supresión de evidencia no es el acto del juicio que se establece para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

La decisión de un tribunal de suprimir una evidencia en particular no implica necesariamente el fin del caso. El Ministerio Público puede demostrar el dia del juicio la culpabilidad del acusado más allá de duda

razonable mediante la presentación de evidencia independiente y distinta a la suprimida. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Cuando se hace un registro e incautación sin previa orden judicial, el Estado tiene el peso de probar la existencia de las circunstancias que hacen imperativo proceder con el registro. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

En casos de arresto legal se justifica el registro del area bajo el control y alcance inmediatos del arrestado, pues es necesario: (1) ocupar armas de fuego que pueden estar ocultas en dicha area, las cuales pueden ser utilizadas para agredir a los agentes o para intentar escapar, y (2) ocupar evidencia que pueda ser destruida. Pueblo v. Del Rio, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967).

Esta regla también rige respecto a la supresión de testimonio que de resultar inadmisible obligaria a la desestimación de los cargos y la absolución del acusado. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

Procede que un tribunal entre a considerar los meritos de una moción de supresión de evidencia interpuesta por la defensa al terminar de desfilas la prueba de cargo cuando, por haber surgido de la prueba del fiscal la posible ilegalidad de la obtención de la evidencia, es invocable por la defensa la tercera excepción establecida en la última oración del ultimo párrafo de esta regla. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

Fundamentada una moción de supresión de evidencia en la falsedad del contenido de la declaración jurada que sirvió de base a la correspondiente orden de allanamiento-lo que, de ser cierto, convertiría el allanamiento en ilegal-uno de los elementos a considerar al dirimir el conflicto en la prueba es la correspondencia o ausencia de esta entre los objetos delictivos acusados en la declaración y los que de hecho se ocuparen al ejecutar el allanamiento. Jusino López v. Alcaide Carcel, 103 D.P.R. 719 (1975).

No procede declarar con lugar una moción de supresión de evidencia obtenida mediante orden de allanamiento expedida a base de una declaración jurada de un agente encubierto-quien se hizo pasar como un vendedor de huevos-cuando dicho funcionario tuvo libre acceso al patio de la residencia del acusado, pudiendo dicho agente utilizar los hechos que observo-transacciones de bolita entre un tercero y el acusado-para obtener una orden de allanamiento valida. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 524 (1974).

Es admisible en evidencia un relato hecho por un agente del orden público sobre lo que le manifestara el perjudicado-y no constituye prueba de referencia-cuando dicho testimonio es recibido a los fines de establecer los hechos que llevaron al animo del agente la convicción de que se habia cometido un delito grave, de manera que el tribunal pasara una vez más sobre la existencia de causa probable para los arrestos de los sospechosos y la ocupación de evidencia, ambas cosas realizadas sin mandamiento judicial, ya que dicho testimonio era esencial para la admisión en evidencia de los frutos de dicho registro. Pueblo v. De Jesus Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973).

Un registro ilegal no deja de serlo porque en la persona o lugar en que se efectua se encuentre evidencia delictiva. Pueblo v. Gonzalez Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972).

No constituye un registro ilegal el que un agente del orden público observe a traves de una verja de alambre (*cyclone fence*) lo que estaba sucediendo en el patio de la casa de un sospechoso, asi como lo que

habia sembrado en el mismo, mientras permanecia en el patio de la familia vecina, la cual habia concedido permiso para que dicho agente entrara en su propiedad. *Pueblo v. Bogard*, 100 D.P.R. 565 (1972).

En la determinación de si una actuación de la Policía constituye o no un registro o allanamiento irrazonable o ilegal, un tribunal debe juzgar cada caso a base de sus propios hechos particulares. *Pueblo v. Bogard*, 100 D.P.R. 565 (1972).

No es irrazonable-y por lo tanto no procede la supresión de la evidencia ocupada-un allanamiento practicado en virtud de una orden valida de allanamiento por el hecho de que el agente encubierto de la Policía que prestara la correspondiente declaración hubiera visto al acusado infringir la ley dos dias antes del allanamiento y no procediera a su arresto inmediato. *Pueblo v. Soto Zaragoza*, 99 D.P.R. 762 (1971).

Un tribunal, al determinar la razonabilidad del registro de un sospechoso, viene obligado a examinar todas las circunstancias concurrentes bajo las cuales se realizo el registro. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 98 D.P.R. 675 (1970).

En ausencia de una oposición por parte del acusado a la admisión de evidencia incriminatoria ocupada en el baul de un automovil propiedad del acusado, no es de aplicación la doctrina de *Pueblo v. Sosa Díaz*, 90 D.P.R. 622 (1964). *Pueblo v. Torres Alvarado*, 98 D.P.R. 178 (1969).

No es irrazonable-y por lo tanto no procede la supresión de la evidencia ocupada-un allanamiento practicado en virtud de una orden valida de allanamiento por el hecho de que el agente encubierto de la Policía que prestara la correspondiente declaración hubiera visto al acusado infringir la ley en dos dias distintos y no procediera a su arresto inmediato, maxime cuando dicho agente encubierto juro la declaración y obtuvo la expedición de la correspondiente orden de allanamiento el mismo dia en que el acusado violo la ley por segunda vez. *Pueblo v. Palacios Amador*, 96 D.P.R. 695 (1968).

La protección Constitucional contra registros y allanamientos irrazonables se extiende igualmente al solar y predio que junto a la casa constituyen la unidad de vivienda, asi como a las edificaciones accesorias a esta. *Pueblo v. Alvarez Solares*, 95 D.P.R. 789 (1968).

El documento que da base para expedir la orden de allanamiento es la declaración jurada y no el resumen que de ella se hace luego, y un error en el resumen no hace incorrecta ni la declaración ni la orden. *Pueblo v. Cruz Martínez*, 92 D.P.R. 747 (1965).

El allanamiento de un negocio-residencia es irrazonable, ilegal, invalido e ineficaz-allanamiento en que se ocuparon ciertos articulos, entre ellos, ciertos cigarrillos y picadura de marihuana que dieron motivo a acusaciones por infracciones al art. 29 de la Ley de Narcoticos-cuando el mismo se efectua bajo la autoridad de una orden de allanamiento expedida para ocupar un revolver hurtado y cualquier otra prenda o articulo poseido en contravención de la ley si al momento de realizarse dicho allanamiento la orden ya habia sido definitivamente cumplida y ejecutada mediante la ocupacion, horas antes, de dicho revolver, para cuya busqueda y ocupación exclusivamente se habia solicitado y librado la orden de allanamiento. *Flores Valentin v. Tribunal Superior*, 91 D.P.R. 805 (1965).

Cuando por el examen directo o de repregunta de los testigos de cargo resulta, o en cualquier otra forma es admitido, que los articulos que son ofrecidos por el fiscal en evidencia han sido ilegalmente obtenidos, es el deber de la corte sentenciadora-al objetarse a dicha evidencia-rechazar su admisión, más no procede en estos casos detener los procedimientos en el caso **criminal** para resolver una cuestion colateral. *Pueblo v. Díaz Cintron*, 91 D.P.R. 146 (1964).

No procede citar a un testigo de la defensa para sostener una moción de supresión de evidencia presentada por la defensa durante el transcurso del juicio cuando a esos fines no procede oír prueba aparte de la presentada por el fiscal. *Pueblo v. Díaz Cintron*, 91 D.P.R. 146 (1964).

Los hechos en que se funda una petición de orden de registro deben ser tan cercanos a la fecha de su expedición que justifiquen una conclusión de causa probable en esa fecha, pues el derecho que todo ciudadano tiene a que se le respete la tranquilidad de su hogar es uno demasiado fundamental para que hechos remotos justifiquen su expedición. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 91 D.P.R. 19 (1964).

Es procedente revocar la sentencia condenatoria en un caso por posesión de drogas si la prueba de tal posesión fue el resultado del arresto y registro indebidos del acusado por la supuesta infracción de una ordenanza municipal, pues la validez del arresto y registro depende de la comisión o intento de cometer delito menor en presencia de un agente. *Pueblo v. López Rivera*, 89 D.P.R. 791 (1964).

Arrestado y registrado un acusado por un alegado delito menos grave cometido durante la noche, de ser ilegal el arresto porque se realizó sin previa orden judicial no habiéndose cometido ni intentado cometer ninguna violación de ley en presencia del policía que arrestara al acusado, la evidencia ocupada a dicho acusado-la que dio lugar a la iniciación de un proceso por dos delitos graves, vistos conjuntamente con el delito menos grave, y que condujo a la convicción del acusado por los mismos-no sería admisible para condenar al acusado por dichos dos delitos graves. *Pueblo v. López Rivera*, 89 D.P.R. 791 (1964).

2. Registro incidental al arresto.

Un registro incidental y contemporáneo a un arresto legal no necesariamente está limitado a la persona del arrestado, sino que se extiende al área bajo su control y alcance inmediatos. *Pueblo v. Rivera Rivera*, 117 D.P.R. 283 (1986); *Pueblo v. Del Rio*, 113 D.P.R. 684 (1982); *Pueblo v. Cruz Rivera*, 100 D.P.R. 345 (1971); *Pueblo v. Riscard*, 95 D.P.R. 405 (1967).

No hay allanamiento ilegal cuando un agente de la Policía ha penetrado los linderos de una propiedad en funciones investigativas para conversar con los ocupantes de la residencia, y en el transcurso de esta actividad legítima observa dentro de la residencia a través del umbral la comisión de un delito. El arresto y el registro incidental son válidos, siempre que exista por lo menos uno de los propósitos enumerados en *Pueblos v. Costoso Caballero*, 100 D.P.R. 147 (1971). *Pueblo v. Torres Resto*, 102 D.P.R. 532 (1974).

Es admisible en un **procedimiento criminal** la evidencia obtenida en el registro de un sospechoso de haber cometido un delito, cuando las circunstancias del caso demuestran que el registro fue razonable e incidental a, y contemporáneo con, un arresto legal. *Pueblo v. Nieves Vargas*, 101 D.P.R. 263 (1973).

Es razonable el registro sin orden de allanamiento de una carpeta que portaba en sus manos un sospechoso en un cuartel de la Policía, registro realizado incidentalmente al ser este arrestado legalmente y en la cual aparecieron unas joyas hurtadas que dieron base para la acusación por hurto mayor en el caso de autos-cuando concebiblemente la carpeta podía haber contenido un arma. *Pueblo v. Costoso Caballero*, 100 D.P.R. 147 (1971).

Es irrazonable, ilegal e injustificado un registro sin orden de allanamiento incidental a un arresto legal cuando no existe ninguno de los propósitos que por excepción justifican un registro en esas circunstancias, a saber: ocupar armas que puedan ser usadas por la persona arrestada, evitar una fuga o evitar la destrucción de evidencia. *Pueblo v. Costoso Caballero*, 100 D.P.R. 147 (1971).

Es permisible un registro sin orden de allanamiento efectuado en la persona del arrestado y del área que este a su alcance inmediato. *Pueblo v. Costoso Caballero*, 100 D.P.R. 147 (1971).

No es irrazonable el registro de un sospechoso realizado minutos después de haber sido arrestado legalmente tras de participar en una riña cuando las circunstancias concurrentes con dicho registro eran tales que podían dar motivos fundados a una persona prudente y razonable a sospechar que el detenido podía constituir un peligro para la seguridad de los agentes que lo llevaban bajo arresto en un vehículo de motor y que el registro era necesario para buscar algún objeto o arma que pudiera utilizarse para tales propósitos. Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 675 (1970).

3. Moción de supresión.

No procede la supresión según la Regla 234 de **Procedimiento Criminal**. Cuando el registro se efectúa al amparo de una orden judicial impera una presunción de legitimidad, pues toda determinación judicial se acompaña de una presunción de corrección. En esos casos, el acusado tiene el peso de la prueba para rebatir la legalidad y razonabilidad de la actuación gubernamental. El acusado no ha demostrado mediante preponderancia de la prueba la ilegalidad imputada para rebatir la causa probable que dio lugar al mandamiento judicial autorizando el registro y allanamiento. Sentencia, 2008 DTS 162 Pueblo v. Nieves Hernández 2008 TRPR 162

La moción de supresión cumplió con los requisitos de la regla, y alego hechos específicos demostrativos de la existencia de una controversia sustancial, situación que requería la celebración de una vista evidenciaria; la regla no exige, como tampoco la jurisprudencia, que el promovente de una moción de supresión exponga o alegue, de forma específica y detallada, los hechos particulares que configuran su expectativa de intimidad y la forma en que el Estado se la infringió. Pueblo v. Echevarria Arroyo, 157 D.P.R.158 (2002).

El arresto del recurrido, quien estuvo en posesión de cocaína, no fue ilegal, y el tribunal apelativo erró al ordenar la supresión de la evidencia; el guardia municipal que hizo el arresto no actuó como agente encubierto por el mero hecho de vestir de civil, y así, el guardia no infringió las leyes de las guardias municipales. Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002).

En la vista de moción de supresión de evidencia lo que se decide es la legalidad o razonabilidad del registro efectuado. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356 (1997).

La evidencia ocupada como consecuencia de un registro y allanamiento es inadmisble cuando la declaración jurada prestada por el agente ante el magistrado, que dio lugar a la expedición de la orden, resulto ser falsa. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).

Una orden de registro y allanamiento es nula cuando ha sido expedida a base de una declaración jurada que no contiene la fecha en que el deponente alegadamente observo la comisión del acto delictivo. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).

No procede alegar violación al debido proceso de ley por el hecho de que ante el juez que se ventilo el caso también se discutió una moción de supresión de evidencia ya que esta regla, que gobierna el tramite a seguir en torno a una moción de supresión de evidencia, contempla la posibilidad que se dilucide conjuntamente en la vista en su fondo. Pueblo v. Gonzalez Navarrete, 117 D.P.R. 577 (1986).

Como regla general, la solicitud y vista sobre supresión de evidencia debe hacerse y celebrarse antes del juicio, pero dicha solicitud aun cuando se haya presentado y denegado previamente puede reproducirse en el acto del juicio si de la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

En procedimientos de supresión de evidencia, una vez el acusado establece el hecho de que la evidencia objetada fue ocupada sin orden judicial previa de arresto o registro y allanamiento, le corresponde al Ministerio Público demostrar que el registro y la ocupación fue una intervención legal y razonable de los agentes del Estado. Establecido el hecho de la existencia de una orden de arresto o de registro y allanamiento previa a la ocupación de la evidencia, el peso de la prueba recae en el promovente de la moción de supresión de evidencia, es decir, el acusado. Pueblo v. Vazquez Mendez, 117 D.P.R. 170 (1986).

Esta regla, aunque se aplica a situaciones en que pueda requerirse por primera vez en el acto del juicio la supresión de evidencia obtenida ilegalmente, nada dispone sobre la facultad del acusado de reiterar el planteamiento y exigir que se resuelva *de novo* después de su denegación con anterioridad a la vista de la causa. Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511 (1982).

En Puerto Rico la moción de supresión de prueba puede presentarse en el acto del juicio, aun cuando se haya presentado y denegado previamente, si de la prueba de cargo, el examen directo y la repregunta surge la ilegalidad del registro. Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511 (1982).

Como regla general, los tribunales no favorecen la reconsideración de mociones de supresión de prueba denegadas previamente, salvo en el caso en que existan derechos Constitucionales en juego. Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511 (1982).

Esta regla relativa a la supresión de evidencia por un allanamiento o registro ilegal reconoce tres excepciones a la norma de que la moción se presente por lo menos cinco días antes del juicio, a saber: (1) que no hubiere oportunidad para presentarla; (2) que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o (3) que la ilegalidad de la obtención de la prueba, es decir, su inadmisibilidad, surgiera de la prueba del fiscal. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

Como regla general, una moción sobre supresión de prueba de identificación del acusado-al igual que la moción contemplada en esta regla-debe instarse por lo menos cinco días antes del juicio. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

No procede declarar con lugar en apelación una alegación de haber ocurrido un registro ilegal de un acusado cuando la defensa no hizo la correspondiente moción para la supresión de la evidencia cinco días antes del juicio-segun lo requiere esta regla-ni se dan en el caso de autos las excepciones que la misma establece para el incumplimiento de dicho requisito. Pueblo v. Pérez Cruz, 103 D.P.R. 44 (1974).

Es tardía una moción de supresión de evidencia presentada durante el **procedimiento criminal** contra un acusado cuando, estando este presente durante el allanamiento, no hizo su petición cinco días antes del juicio, ni su moción cae bajo ninguna de las excepciones establecidas por esta regla. Pueblo v. Bonet Flores, 96 D.P.R. 685 (1968).

Un abogado defensor que durante el juicio anuncia que no tiene objeción a la presentación de evidencia obtenida por la Policía al registrar el baul del automovil del acusado sin previa orden de allanamiento tras haberse arrestado legalmente al acusado por no ser un chofer autorizado, no puede plantear por primera vez en apelación la inadmisibilidad de tal evidencia fundamentando dicha objeción en la ilegalidad de dicho registro. Pueblo v. De Jesus Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

El **procedimiento** para impedir que evidencia ilegalmente obtenida sea presentada, como regla general, es mediante moción radicada antes del juicio en la cual se solicite su supresión. Tal regla tiene sus excepciones. Pueblo v. Díaz Cintron, 91 D.P.R. 146 (1964).

Una moción solicitando la supresión de evidencia presentada con anterioridad al día señalado para la vista del caso debe ser declarada con lugar cuando no existía causa probable de que en una morada se estaba cometiendo un delito a la fecha en que se expidió la correspondiente orden de allanamiento de dicha morada. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 91 D.P.R. 19 (1964).

4. Consentimiento.

No se considera consentimiento coercido aquel dado por un sospechoso objeto de registro de su equipaje, después de que agentes de drogas pasaron el mismo por rayos X, mientras el demandado tenía una mano esposada a una silla en un cuarto de detención con la puerta abierta, en donde al demandado le fueron leídos sus derechos procesales y fue interrogado por un agente de drogas por menos de una hora. Aun si el pasar el equipaje por los rayos X era un registro ilegal, el olfato del perro indicando la presencia de drogas en el equipaje del demandado ocurrió antes del registro por rayos X, y suplió una razón legítima independiente para obtener el consentimiento del acusado para el registro. *US v. Navedo-Colón*, 996 F.2d 1337 (1993).

La renuncia de propiedad sobre equipaje hecha por el demandado cuando el mismo fue escogido por el perro olfateador de los agentes de drogas fue suficiente justificación para un registro sin orden hecha por el gobierno en la cual se descubrió cocaína, aún cuando con anterioridad se había llevado a cabo un registro ilegal con rayos X sobre dicho equipaje. *Alejo Jiménez v. Heyliger*, 792 F. Supp. 910 (1992).

La excepción del consentimiento requiere que el dueño, residente o cualquier persona con suficiente control sobre la admisión de visitantes al hogar voluntariamente consienta la entrada de los agentes del orden público. *Pueblo v. Rivera Colón*, 128 D.P.R. 672 (1991).

En ausencia de consentimiento o de circunstancias apremiantes, para poder penetrar en la casa de un tercero con el propósito de arrestar a un sospechoso, se requiere que los agentes obtengan una orden de allanamiento previa, y el registro en casa de tercero que se efectúa con una mera orden de arresto en contra de un sospechoso viola disposiciones Constitucionales. *Pueblo v. Rivera Colón*, 128 D.P.R. 672 (1991).

Un registro por consentimiento será razonable siempre que se mantenga dentro del alcance dicho consentimiento, se ajuste a los propósitos del mismo y se limite a las áreas donde puede razonablemente encontrarse el objeto del registro. *Pueblo v. Narvaez Cruz*, 121 D.P.R. 429 (1988).

Es válido un registro cuando el agente, de buena fe, descansa en la autoridad que razonablemente aparenta tener una tercera persona para permitirlo aunque posteriormente se descubra que no tenía potestad para ello. *Pueblo v. Narvaez Cruz*, 121 D.P.R. 429 (1988).

Cuando un padre de familia autoriza a un policía a entrar a su residencia, quien desde la puerta entreabierta pudo observar que uno de los hijos menores de aquel cometía un delito a plena vista (lo vio manejando cierta envoltura blanca) y una vez dentro, en la sala, le ocupó cierta evidencia delictiva, se concluye que no es aplicable la jurisprudencia que por vía de excepción no permite en situaciones específicas el consentimiento paternal para el registro de ciertas pertenencias del menor o de su habitación, cuando el menor no paga renta por la habitación ni se trata de una situación de posesión exclusiva del lugar registrado por parte del menor. *Pueblo v. Narvaez Cruz*, 121 D.P.R. 429 (1988).

Un padre puede autorizar a la Policía para que entre y registre todas las dependencias de su hogar, incluso aquella parte de la propiedad que el padre o la madre ha designado para el uso de sus hijos, sin que sea necesaria una orden de allanamiento. *Pueblo ex rel. F.J.M.R.*, 111 D.P.R. 501 (1981).

Claro e inequívoco debe ser el consentimiento prestado por una persona bajo arresto para que se registre

su residencia sin la correspondiente orden de allanamiento. Este debe establecerse mediante prueba clara y positiva demostrativa de que no existió coerción de clase alguna, directa o indirecta, para que dicha arrestada prestara tal consentimiento. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 270 (1968).

Son admisibles en evidencia objetos ocupados sin una orden de allanamiento en la residencia de una arrestada cuando esta, luego de negarse a firmar una declaración que presto por razón de no haber tenido la oportunidad de consultar con un abogado, inmediatamente invita a los agentes del orden público a que registren su casa. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 270 (1968).

El acusado indico a un agente de la Policía que lo arresto que guardaba en su residencia mercancía robada. Se deduce del record que, al hacer esta indicación, consintió en que la Policía buscara en su residencia dichos bienes y los ocupara. Pueblo v. De Jesus Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

5. Registro de automóvil.

En muchas ocasiones, la Policía tiene que entrar en vehículos de motor para ayudar a personas en aparente peligro; por ejemplo, cuando se conoce que en el interior se encuentra un individuo en estado inconsciente o desorientado e incoherente. En estas situaciones es razonable entrar en el auto para ofrecer auxilio a las personas e investigar los motivos que provocaron su condición. Pueblo v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988).

En circunstancias especiales, cuando el registro se realiza para ocupar armas que puedan utilizarse por el acusado para agredir a los agentes o para intentar una fuga, o para ocupar evidencia que de otro modo podría ser destruida, el registro minucioso, sin orden de allanamiento, de la persona del arrestado, sus pertenencias y el área a su alcance inmediato es razonable. Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987).

El registro de un automóvil es una intrusión menor en los derechos protegidos por la cláusula Constitucional contra los registros y allanamientos irrazonables, por razón de que una persona tiene menos expectativa de intimidad (*privacy*) en un vehículo de motor, ya que el mismo se destina a la transportación y raras veces sirve de vivienda o depósito de efectos personales. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

Es admisible en un **procedimiento criminal** la evidencia obtenida en el registro del automóvil de una persona que va a ser arrestada cuando las circunstancias del caso demuestran que el registro fue razonable e incidental a, y contemporáneo con, un arresto legal. Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971).

La legalidad de un registro de un vehículo de motor sin orden de allanamiento depende de si el registro es razonable, y esto a su vez depende de los hechos y circunstancias-la atmósfera total-del caso. Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

La regla establecida en *Pueblo v. Sosa Díaz*, 90 D.P.R. 622 (1964), impide el registro de un vehículo sin previamente haberse obtenido un mandamiento judicial a esos fines solo en casos de: (a) una infracción menor de tránsito, y (b) en ausencia de circunstancias especiales. Pueblo v. De Jesus Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

Una mera infracción menor de tránsito no justifica el registro de un automóvil sin una orden de allanamiento, más circunstancias especiales pueden proveer la justificación necesaria, en adición a dicha infracción, para realizar dicho registro. Pueblo v. De Jesus Robles, 92 D.P.R. 345 (1965).

El no detenerse el apelante donde había una señal de "Pare" y tratar de huir cuando iba a ser detenido por la Policía son circunstancias que justifican el registro del vehículo y, por tanto, es admisible la evidencia

incriminatoria consistente en listas que se usan en el juego ilegal de la bolita, encontradas con motivo de dicho registro. Pueblo v. Aguirre Torres, 91 D.P.R. 888 (1965).

Es razonable el registro del vehículo, incidental al arresto del apelante por estar conduciendo sin licencia, y mientras se encontraba en su automovil, por lo que los objetos encontrados, entre ellos el revolver que sirvió para condenarlo, son admisibles en evidencia. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

El registro de un automovil tras haberse arrestado al conductor por guiar en estado de embriaguez, y sin previamente haberse obtenido un mandamiento judicial de registro, no es razonable cuando dicho registro tiene lugar en ausencia del acusado, cuando ya este había sido arrestado y se encontraba bajo custodia policiaca en un lugar distinto y apartado de aquel en que se hallaba el vehículo. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

6. Objetos abandonados.

Objetos hurtados abandonados o arrojados por una persona de los cuales se incauta la Policía son -por no constituir el producto de un registro ilegal- admisibles en evidencia. Pueblo v. Rivera Martínez, 97 D.P.R. 814 (1969); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

7. Persecución en caliente.

La excepción de la persecución en caliente (*hot pursuit*) permite que los agentes entren y registren la residencia de un tercero, cuando tras una persecución inmediata y continua de un sospechoso, este se interne en dicho lugar. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

8. Registros tipo inventario.

Los registros tipo inventario resultan ser necesarios para la eficiente y sana administración de un sistema de justicia **criminal**, y un registro de esta naturaleza, realizado en relación con cualquier clase de propiedad sujeta a incautación y confiscación bajo las leyes pertinentes o que se lleva a cabo en relación con las pertenencias de una persona que ha sido arrestada y va a ser ingresada en una institución penal, efectivamente tiene el resultado positivo de proteger tanto los intereses del ciudadano dueño de dicha propiedad como al Estado. Pueblo v. Rodríguez Roman, 128 D.P.R. 121 (1991).

El Estado tiene la obligación de afirmativamente demostrar que el registro llevado a cabo es uno tipo inventario. Pueblo v. Rodríguez Roman, 128 D.P.R. 121 (1991).

El registro tipo inventario constituye una de las excepciones al mandato Constitucional que requiere la obtención de una orden judicial antes de procederse a la realización de un registro. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991).

En todo caso de registro tipo inventario el Estado debe demostrar que: (1) efectivamente se trata de una situación que procede prima facie la incautación preliminar de la propiedad con el propósito de confiscarla; (2) que existe un **procedimiento** administrativo estableciendo guías respecto a esta clase de situaciones, entre las cuales se incluya la designación de los funcionarios que efectivamente hacen la determinación de confiscar previa a que se efectue el registro, y (3) que la acción de los agentes del Estado se lleva a cabo siguiendo estrictamente el **procedimiento** establecido. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991).

9. Morada y privacidad.

La protección Constitucional se extiende a la zona compuesta por el terreno y las estructuras accesorias que junto a la casa constituyen una unidad de vivienda, pero la Policía puede entrar en áreas del *curtilage* de una residencia que este implícitamente abierto al público, con el propósito de conversar con los

ocupantes de la residencia o procurar alguna persona. Pueblo v. López López, 129 D.P.R. 287 (1991); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Para determinar si una entrada de agentes constituye un registro irrazonable deben considerarse los siguientes criterios: (1) el lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de la intervención policiaca; (3) el objetivo o propósito de la intervención; (4) si la conducta de la persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; (5) la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado; (6) la cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lugar registrado; (7) las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado. Pueblo v. López López, 129 D.P.R. 287 (1991).

Existen cuatro factores para determinar la extensión del *curtilage*: (1) la proximidad de la casa a la zona que se alega compone el *curtilage*. Si la zona esta muy proxima a la casa o residencia, este hecho por si solo hace mucho más probable que el area sea considerada como *curtilage*; (2) si el area se encuentra dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y el uso que se le da a esa zona; (4) las medidas que haya tomado el residente para proteger esta zona de observaciones que pueden hacer los transeuntes que por alli pasan. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Es razonable pensar que la expectativa de intimidad en el interior de una residencia es mayor y aumenta si las ventanas están entreabiertas o cerradas. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

Regla 235. TESTIGOS; QUIEN PODRA EXPEDIR CITACION.

Cualquier magistrado podrá expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí a los fines de la investigación de un delito o de una vista preliminar. Cuando el fiscal, en los casos y bajo las condiciones que estas reglas lo permitan, provea al tribunal el nombre y dirección de imputados o testigos, ello se entenderá como una solicitud de citación, bien para el trámite de determinación de causa, para el acto del juicio o para cualquier **procedimiento** pendiente de vista. En estos casos será deber del tribunal, prontamente, expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida la citación o citaciones correspondientes, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados.

El juez de cualquier tribunal podrá expedir u ordenar al secretario que expida citación para la comparecencia de cualquier testigo a juicio, a la toma de su deposición o a cualquier vista. El secretario del tribunal, a petición del acusado, podrá expedir citaciones libres de costas a esos mismos fines.

Cualquier fiscal podrá igualmente expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí a los fines de la investigación de un delito. Si un testigo no obedeciere su citación, el tribunal a solicitud del fiscal podrá expedir mandamiento para su comparecencia ante dicho funcionario en la fecha y hora que señalare, bajo apercibimiento de desacato.

(Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268, art. 3.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 98 y 407; Fed. R. Crim. P. 17(a), (f); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1327.

Enmienda

-1986, ley 80. -La ley de 1986 añadió las dos últimas oraciones al primer párrafo.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 9, 1986, Núm. 80, p. 268.

ANOTACIONES

1. En general.

Un fiscal no viene obligado por ley a suministrar a la defensa los nombres de los testigos de cargo que el se propone utilizar para probar la sanidad mental de un acusado. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Un fiscal de distrito tiene facultad para expedir citaciones para la comparecencia y examen de testigos a los fines de la investigación de un delito y para hacer obligatoria la comparecencia de testigos por el citados en cualquier investigación, **procedimiento** o proceso **criminal**. Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 98 (1970).

No habiendo desobedecido un testigo la citación que le notificara un fiscal durante el curso de una investigación un tribunal no puede dictar un mandamiento ordenando a dicho testigo, bajo apercibimiento de desacato, a comparecer ante dicho fiscal y producir la evidencia documental solicitada por dicho funcionario. Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 104 (1967).

Es improcedente que un tribunal expida un mandamiento ordenando, bajo apercibimiento de desacato, que un testigo comparezca ante un fiscal para declarar y producir evidencia documental cuando dicho funcionario no puede especificar cuales son los documentos que interesa. Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 104 (1967).

Regla 236. TESTIGOS; DILIGENCIAMIENTO DE CITACION.

La citación podrá ser diligenciada por cualquier persona, pero todo funcionario del orden público tendrá la obligación de diligenciar en su distrito cualquier citación que se le entregue con tal objeto por el acusado o por el Ministerio Público. Quedará diligenciada la citación con mostrar su original al testigo y entregarle copia o enviándosele por correo a su última residencia, con acuse de recibo. La persona que la diligenciar lo hará constar por escrito en la citación o a su dorso, con expresión del tiempo y lugar. En los casos en que la citación se enviare por correo deberá, además, acompañarse el acuse de recibo.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 409; Fed. R. Crim. P. 17(d); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1328.

Regla 237. TESTIGOS; ADELANTO DE GASTOS.

Cuando una persona compareciere en virtud de citación ante un magistrado o tribunal como testigo de El Pueblo o de la defensa y careciere de medios para pagar los gastos que ocasionare su comparecencia, el tribunal podrá, a su discreción, ordenar al secretario que entregue al testigo una suma razonable, que no excederá de las dietas a que tenga derecho y será cargada a cuenta de dichas dietas. La orden del tribunal se hará por escrito, pero podrá dictarse en sala, en el cual caso se hará constar en la minuta.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 410; Fed. R. Crim. P. 17(d); Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1329.

Contrarreferencias.

Costas en causas criminales, Véase la sec. 750 de este título.

Honorarios de testigos y jurados, Véase la sec. 752 de este título.

Regla 238. TESTIGOS; ARRESTO Y FIANZA PARA GARANTIZAR COMPARECENCIA.

Si cualquiera de las partes estableciere, mediante declaración jurada, que existe fundado temor de que algún testigo en una causa **criminal** dejará de comparecer a declarar a menos que se le exija fianza, el magistrado que actúa en la investigación preliminar, o el tribunal con jurisdicción sobre la causa, ordenará al testigo que preste fianza, por la cantidad que estimare suficiente, y de no prestarla ordenará su arresto hasta tanto prestare fianza, o se le tomare una deposición. El documento de fianza cumplirá los requisitos que se fijan en estas reglas a las fianzas para la libertad provisional del acusado, y garantizará la comparecencia del testigo, ante cualquier sala del tribunal en que el juicio o juicios se celebren, o a la vista preliminar, en la fecha para la cual se le citare. De no comparecer el testigo luego de ser citado, se confiscará la fianza siguiendo el **procedimiento** prescrito en los casos de fianza para la libertad provisional del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 40 a 42 y 412; Fed. R. Crim. P. 46(b); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 879, 881 y 1332.

Contrarreferencias.

Citación por un magistrado o funcionario del orden público, Véase la Regla 7 de este apéndice.

Penalidad por desobediencia a citación o negativa a declarar, Véase la sec. 1465 de este título.

ANOTACIONES

1. En general.

Aun cuando un juez puede retener a un testigo en un **procedimiento criminal** mediante los mecanismos de emergencia que brinda esta regla, el magistrado puede optar por ejercer su discreción ordenando la continuación de las deliberaciones si estima que aun existe posibilidad de que el jurado llegue a un acuerdo. Pueblo v. Vélez Díaz, 105 D.P.R. 386 (1976).

Regla 239. CAPACIDAD MENTAL DEL ACUSADO ANTES DE LA SENTENCIA.

Ninguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté mentalmente incapacitada.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 439; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1367.

Regla 240. CAPACIDAD MENTAL DEL ACUSADO; **PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.**

(a) Vista; peritos. En cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere base razonable para creer que el acusado está

mentalmente incapacitado, inmediatamente suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental del acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes.

(b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la prueba el tribunal determinare que el acusado está mentalmente capacitado, continuará el proceso. Si el tribunal determinare lo contrario, podrá ordenar la reclusión del acusado en una institución adecuada. Si luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere base razonable para creer que el estado mental del acusado permite la continuación del proceso, citará a una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo provisto en el inciso (a) de esta regla, y determinará entonces si debe continuar el proceso.

(c) Fiadores; depósito. Si el tribunal ordenare la reclusión del acusado en una institución, según lo dispuesto en el inciso (b) de esta regla, quedarán exonerados sus fiadores, y de haberse verificado un depósito de acuerdo con la Regla 222, será devuelto a la persona que acredite su autoridad para recibirlo.

(d) **Procedimiento** en la vista preliminar. Si el magistrado ante quien hubiere de celebrarse una vista preliminar tuviere base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado, suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los demás documentos en autos, al secretario de la sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente, ante la cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla. Si el tribunal determinare que el acusado está mentalmente capacitado, devolverá el expediente al magistrado o tribunal de origen, con su resolución, y los trámites de la vista preliminar continuarán hasta su terminación. Si el tribunal determinare lo contrario, actuará de conformidad con lo provisto en el inciso (b) de esta regla, sólo que a los efectos de la vista preliminar.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 440 y 442 a 444; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1368 a 1371; Código modelo, R. 307.

Codificación.

"Tribunal Superior" fue sustituido con "Tribunal de Primera Instancia" a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como Ley de la Judicatura de 2003", secs. 24 a 25r del Título 4.

Contrarreferencias.

Capacidad mental del acusado, **procedimiento** para determinarla, Véase la Regla 241 de este apéndice. Sentencia, incapacidad mental como causa por la cual no deba dictarse, Véase la Regla 169 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

Un imputado internado indefinidamente a razón de una determinación judicial no recibe trato igual cuando se recluye en una institución hospitalaria sin que se hubiera determinado que están presentes los señalamientos para que fue internado involuntariamente. 2001 DTS 149 (2001) Ruiz v. Alcaide, 2001

TSPR 149 (2001); 155 D.P.R. 492 (2001).

Cuando un tribunal tiene ante si una persona con retardación mental, no puede limitarse a considerar el coeficiente intelectual para determinar la procesabilidad; también debe enfocarse en el efecto adverso de tal condición sobre los factores relevantes a la procesabilidad. 2001 DTS 83 (2001) Pueblo v. Santiago Torres, 2001 TSPR 83 (2001); 154 D.P.R. 291 (2001).

La determinación de no procesabilidad permanente de un imputado requiere la celebración de una vista más formal. 2001 DTS 83 (2001) Pueblo v. Santiago Torres, 2001 TSPR 83 (2001); 154 D.P.R. 291 (2001).

Esta regla concede inicialmente al tribunal total discreción en la determinación de si existe o no base razonable para creer que el acusado esta mentalmente incapacitado. Sin embargo, de resolver que existe base razonable, la regla instruye mandatoriamente el **procedimiento** a seguir. Pueblo v. Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455 (1986).

Una vez que el tribunal establece que existe duda en cuanto a la capacidad mental del acusado, esta regla exige la intervención de un perito psiquiatra, quien tendra que evaluar al acusado y declarar en la vista de procesabilidad en torno a sus hallazgos. Pueblo v. Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455 (1986).

La incapacidad mental de un acusado esta considerada por la ley por lo menos en dos situaciones distintas: (a) la primera envuelve la incapacidad del acusado al momento de realizar, esto es, de hacer real, de llevar a cabo, los hechos y de donde nace su intención **criminal** y surge su responsabilidad penal y (b) la segunda se da cuando el acusado, ya cometidos los hechos y presentada la acusación o denuncia, va a ser sometido al proceso penal. Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551 (1978).

A los fines de esta regla y la Regla 169, el término "incapacidad mental del acusado" significa, no aquella incapacidad mental que justifica la existencia de una pensión en las Fuerzas Armadas, si no si el acusado, en el momento en que es llamado para dictarle sentencia, es incapaz de comprender la naturaleza y proposito de los procedimientos y de participar en el acto de imposición de sentencia con plena conciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impidan que se dicte sentencia. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

Es un acto discrecional del juez sentenciador la determinación de si hay base razonable para creer que el acusado no esta mentalmente capacitado para escuchar la sentencia a serle impuesta. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973).

Dirimido por un jurado en contra del acusado el conflicto en la prueba pericial ofrecida en cuanto a la sanidad mental del acusado al momento de perpetrar el acto **criminal** por el cual se le acusa, tal apreciación del jurado no es errónea en ausencia de una demostración de que al hacerla se actuó con prejuicio, pasión o parcialidad. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Un fiscal no viene obligado a probar la sanidad mental del acusado en el momento de perpetrar el acto que se le imputa como delito hasta tanto la defensa ofrezca y se reciba evidencia que pueda producir una duda razonable sobre la cordura del acusado. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

No procede la lectura al jurado de un informe de un panel de siquiатras cuando el mismo no había sido admitido en evidencia, máxime si los peritos firmantes del informe estaban disponibles para la defensa y en efecto testificaron a petición de esta. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972).

Rebatida eficazmente por un acusado la presunción de ley de que el estaba en su sano juicio al momento

de cometer los hechos delictivos por los cuales se le acusa, corresponde al fiscal el peso de la prueba para establecer, fuera de duda razonable, la cordura del acusado al momento de cometer dichos hechos. Pueblo v. Colón Morales, 100 D.P.R. 40 (1971).

Regla 241. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD.

Cuando el imputado fuere absuelto por razón de incapacidad mental y tuviera el tribunal base razonable para creer que es necesaria la imposición de la medida de seguridad, iniciará los trámites para hacer la determinación correspondiente siguiendo el procedimiento establecido en esta regla.

(a) Examen psiquiátrico o psicológico. El tribunal designará a petición del Ministerio Fiscal o a iniciativa propia, un psiquiatra o un psicólogo o a ambos para que examinen a la persona y rindan un informe sobre su estado mental. El examen será a los únicos fines de asistir al tribunal en la determinación respecto a la internación de la persona. El examen deberá ser efectuado y un informe rendido al tribunal con copia al Ministerio Fiscal y a la defensa dentro de los treinta (30) días siguientes al fallo o veredicto. Por justa causa el tribunal podrá extender el término, pero nunca por un período en exceso de diez (10) días adicionales.

En adición al informe del psiquiatra y psicólogo deberá rendirse el correspondiente informe social realizado por un oficial probatorio.

(b) Custodia temporera. Mientras se sustancia el procedimiento que dispone esta regla, el tribunal podrá ordenar que la persona quede bajo la custodia de una institución adecuada.

(c) Vista. Si notificadas las partes del informe no se presentaren objeciones a éste dentro del término de cinco (5) días a contar desde su notificación, el tribunal procederá a hacer una determinación basándose en dichos informes. De presentarse objeciones dentro de tal período el tribunal señalará una vista para dentro de los próximos cinco (5) días. A solicitud de parte, los autores de cualesquiera de dichos informes deberán ser llamados a declarar. La parte que objeta el informe tendrá derecho a contrainterrogar a los autores de los informes y a ofrecer cualquier otra prueba pertinente a la controversia.

La persona podrá solicitar ser examinado por profesionales de su elección para que éstos rindan a su vez informes al tribunal. Si el imputado demostrare su indigencia, tales exámenes serán sufragados por el Estado.

Las Reglas de Evidencia serán de aplicación en este procedimiento y la persona tendrá el derecho a estar representada por abogado.

(d) Aplicación de la medida de seguridad. Si el tribunal determinare conforme a la evidencia presentada que la persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que habría de beneficiarse con dicho tratamiento, dictará sentencia imponiendo la medida de seguridad y decretando su internación en una institución adecuada para su tratamiento.

Dicha internación podrá prolongarse por el tiempo realmente requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada.

En estos casos será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar al tribunal trimestralmente sobre la evolución del caso.

Si el tribunal determinare no imponer medida de seguridad, ordenará que la persona sea puesta en libertad, si estuviese internada. [2004, ley 317, vigente hasta el 30 de abril de 2005]

(d) Aplicación de la medida de seguridad. Si el tribunal determinare conforme a la evidencia presentada que la persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que habría de beneficiarse con dicho tratamiento, dictará sentencia imponiendo la medida de seguridad y decretando su internación en una institución adecuada para su tratamiento.

Dicha internación podrá prolongarse por el tiempo realmente requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 91 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [2004, ley 317, efectiva el 1 de mayo de 2005]

(e) Revisión periódica. Anualmente y previa vista en sus méritos el tribunal se pronunciará sobre la continuación, la modificación o la terminación de la medida de seguridad impuesta sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se haya internado.

Si del desarrollo favorable del tratamiento el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación de la persona puede continuar operándose en la libre comunidad con supervisión, podrá concederla.

(f) Informes. A los efectos de la revisión periódica de la medida de seguridad el tribunal deberá tener el informe de un siquiatra o de un psicólogo o de ambos. En cuanto a estos informes, regirán las normas del inciso (c) de esta regla.

(g) Notificación de la continuación, modificación o terminación de la medida de seguridad. Cualquier pronunciamiento del tribunal con relación a la medida de seguridad impuesta deberá ser notificada a las partes e instituciones concernidas.

(h) Récord oficial. Se llevará un récord oficial de todos los procedimientos aquí establecidos para la aplicación, continuación, modificación o terminación de la medida de seguridad.

(Adicionada en Julio 5, 1985, Núm. 61, p. 230; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 18, enmienda inciso (d), efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo al Nuevo Código de Penal de P.R. de 2004.)

HISTORIAL

Derogación.

La Regla 241 original de **Procedimiento Criminal**, que procedía del Código de Enjuiciamiento **Criminal**, 1902, art. 293, y del Código de Enjuiciamiento **Criminal** de California, sec. 1026, fue derogada por la Ley de Julio 5, 1985, Núm. 61, p. 230, la cual, a su vez, adiciono una nueva regla con el mismo número 241, cuyo texto se consigna.

Enmienda

-2004, ley 317. - La ley de 2004 añadió "o trastorno mental transitorio" después de "mental" en el párrafo introductorio.

Inciso (d): La ley de 2004 añadió "sujeto a lo dispuesto... de Puerto Rico" al final del segundo párrafo de este inciso.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 5, 1985, Núm. 61, p. 230.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Reglas de Evidencia, Véase el Ap. IV del Título 32.

ANOTACIONES

1. En general.

La ley presume, por consideraciones de orden público, que toda persona acusada de delito esta en su sano juicio al momento de cometer los hechos, quedando relevado el Ministerio Público de probar la capacidad mental de un acusado. Pueblo v. Colón Morales, 100 D.P.R. 40 (1971).

Regla 242. DESACATO.

(a) **Procedimiento** sumario. El desacato **criminal** podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expondrá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.

(b) **Procedimiento** ordinario. Salvo lo provisto en el inciso (a) de esta regla, en todo caso de desacato **criminal** se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le imputa un desacato **criminal** y expondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. El acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se fundara en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 56, 61 y 411; Fed. R. Crim. P. 42.

Contrarreferencias.

Delito de desacato, veanse las secs. 430 y 517 a 519 del Título 33.

Facultad para castigar por desacato, Véase la sec. 362b del Título 4.

ANOTACIONES

1. En general.

2. Requisitos del mandamiento.

3. **Procedimiento** sumario.

1. En general.

El Artículo 4.008 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. Sec. 25, y la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ante, autorizan a los jueces del tribunal apelativo intermedio a imponer sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su abogado o abogada por la interposición de recursos frívolos, o que se presentan para retrasar los procedimientos, o por conducta constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. 2008 DTS 031 Pueblo v. Rivera Toro 2008 TSPR 031

Se concluye que una jueza violo los Canones de Etica Judicial, por haberse comportada en una manera irreflexiva y con abuso de su autoridad al imponerle a la condenada el castigo de desacato. 2003 DTS 051 (2003) *In re Cruz Aponte*, 2003 TSPR 51 (2003); 159 D.P.R. 170 (2003).

Constituyen las fuentes legales de un tribunal para condenar por desacato las secs. 517 a 519 del Titulo 33, el art. 29 del Código de Enj. Civil, la Regla 40.9 de **Procedimiento** Civil, Ap. III del Titulo 32 y esta regla. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982); Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971).

A tenor con esta regla, si un desacato se funda en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, este debe inhibirse, más ello depende del grado en que este involucrada la persona del juez. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

El desacato directo es el que se comete en presencia de un tribunal. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

Si un desacato es a la propia persona de un juez y no median circunstancias que exijan indefectiblemente que no se posponga la acción judicial para su castigo, no debe emplearse entonces el inciso (a) de esta regla y debe procederse en su lugar bajo el inciso (b). Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

No procede la inhibición de un juez en un **procedimiento** de desacato por desobediencia a una citación por el mero hecho de ser el mismo juez ante quien el desacatante no comparecio y por ser también aquel quien fijo la fianza para la libertad provisional de este. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

Un desacato que no se cometa en presencia del tribunal, aunque sea tan cercanamente que monte a una obstrucción de la justicia, no puede considerarse, a tenor con el inciso (a) de esta regla, como un desacato directo. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

Ausente de los autos originales remitidos al Tribunal Supremo en una apelación de una sentencia condenando al acusado por el delito de desacato en corte abierta la correspondiente orden o mandamiento de prisión, dicha irregularidad queda salvada cuando el propio apelante obtiene autorización del tribunal para unir una copia de dicho documento a los autos. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Es valida una sentencia por desacato **criminal** cometido en corte abierta, dictada al amparo de las secs. 517 a 519 del Titulo 33 y de esta regla, cuando el juez condena a la persona en las postrimerías de una sesión en la mañana y al llamarse el caso de nuevo después del receso del mediodía le lee al convicto su sentencia por desacato sumario y orden de encarcelación condenándolo a treinta días de cárcel. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Es valida una sentencia por desacato en corte abierta dictada contra un abogado que insiste en hablar y seguir hablando no obstante las reiteradas admoniciones del juez de que se sentara, y quien observa una actitud arrogante ante el magistrado, interrumpiéndole cuando quiere expresarse y silenciando su voz

mediante el tono alto y desconsiderado de la suya y su desobediencia obstinada al requerimiento de que se sentara; todo lo cual, en conjunto, produjo un espectáculo en la sala del tribunal de instancia que necesariamente mancillo su dignidad y lesiono el decoro que debe siempre haber en una sala de justicia. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Constituye desacato **criminal** el que una persona debidamente citada por un tribunal para comparecer como testigo en un juicio en forma contumaz y en actitud de desafío indebido a la autoridad del tribunal, intencionalmente interrumpa, impida y obstruya el debido curso de la justicia al desobedecer la orden de citación notificándole. Pueblo v. García Rivera, 103 D.P.R. 547 (1975).

Un testigo acusado de desacato al tribunal por haber cometido perjurio en corte abierta, solo puede ser validamente sentenciado cuando el juez ante quien se vea el caso le informe al testigo que alegadamente ha cometido perjurio-mediante la correspondiente orden-del cargo que se le imputa y dicho magistrado celebre una vista dándole la oportunidad de demostrar que lo por el declarado en el juicio es cierto, incluyendo el derecho a confrontarse con los testigos en su contra. Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974).

El hecho de que no se emplace a una parte incluida como codemandada en una acción no priva de facultad al tribunal de instancia para citarla y condenarla por desacato, si su conducta constituía una obstinada desobediencia u oposición intentada o realizada contra cualquier decreto del tribunal. Torres v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 443 (1967).

El **procedimiento** de desacato estatuido por esta regla es uno de estricta observancia. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 471 (1965).

El incumplimiento de las obligaciones de los padres de alimentar a sus hijos menores impuestas por sentencias de los tribunales puede constituir no solamente desacato civil sino también desacato **criminal** y así ser castigado; pero si el tribunal ha de tratar un caso como de desacato **criminal**, viene obligado a advertirlo así al querellado, de manera que el sepa que podrá ser castigado criminalmente si saliere convicto, y pueda ejercer aquellos derechos y defensas apropiados a una acción **criminal**. Guzmán Vega v. Piñero Piñero, 91 D.P.R. 704 (1965).

2. Requisitos del mandamiento.

La imposición de castigo por desacato en el acto, es decir, cuando se comete el desacato en la inmediata presencia y vista del juez, a que se refieren las secs. 517 a 519 del Título 33, o cuando el juez vio u oyo la conducta constitutiva de desacato cometida en presencia del tribunal a que se refiere esta regla, no tiene que ser simultanea con la redacción por escrito y firma de la orden o mandamiento a que se refieren ambos textos, más dicha orden o mandamiento debe prepararse, firmarse y notificarse al inculcado por desacato sin dilación innecesaria. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

De confirmarse una sentencia por desacato, el tribunal de instancia debe expedir un nuevo mandamiento de encarcelación. Torres v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 443 (1967).

Es innecesario considerar si es nulo un mandamiento de arresto contra una persona convicta de desacato por razón de que dicho mandamiento no contiene la fecha y lugar de la comisión del desacato, cuando el mismo ha quedado sin efecto al ordenar el tribunal ad quem, en auxilio de su jurisdicción, que dicho convicto de estar encarcelado, sea puesto en libertad. Torres v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 443 (1967).

Un mandamiento u orden de encarcelación de una persona por haber cometido un desacato en corte abierta debe contener una relación hecha por el juez de los hechos que constituyan el desacato castigado, así como la fecha y lugar de su comisión y circunstancias del mismo, con especificación de la sentencia

del tribunal. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 471 (1965).

Es nulo un mandamiento de encarcelación expedido por un juez en un **procedimiento** de desacato en corte abierta en que no se expongan las circunstancias que rodearon las expresiones que se alega constituyen desacato, y un documento preparado por el juez sentenciador dos meses después de ocurrido el incidente en que se hace una relación detallada de los actos constitutivos de los supuestos desacatos y de las circunstancias que rodearon los mismos no cura los defectos de que adolece el mandamiento original. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 471 (1965).

3. **Procedimiento sumario.**

No existe precepto alguno que autorice imponer sumariamente sanciones económicas a las partes o a sus abogados, salvo por desacato. Pueblo v. Vega Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988).

El mismo juez en cuya presencia se comete un desacato directo puede castigarlo sumariamente. Pueblo v. Lamberty González, 112 D.P.R. 79 (1982).

Esta regla adopto expresamente el **procedimiento** sumario para castigar el desacato **criminal** que ha estado vigente desde la aprobación de las secs. 517 a 519 del Título 33, no derogadas por la sec. 4621 del propio título. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Un tribunal de justicia tiene facultad inherente para castigar por desacato, lo que incluye el poder actuar en el acto de cometerse el desacato mediante el **procedimiento** sumario reconocido por los ordenamientos procesales. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Ratificar un tribunal en la sesión de la tarde una sentencia dictada verbalmente en la mañana del mismo día condenando a un acusado por desacato en corte abierta no constituye una segunda exposición (*double jeopardy*) del imputado. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

No priva a un acusado de su derecho Constitucional a un juicio imparcial el **procedimiento** sumario por desacato en corte abierta provisto por ley cuando se trata de vindicar de inmediato la dignidad ofendida de un tribunal, estando justificado recurrir, por drástico que parezca, a la sentencia inmediata mediante el referido **procedimiento** sumario. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

De ser aplicable el **procedimiento** sumario para condenar a un acusado por un desacato en corte abierta, un tribunal deberá dar estricto cumplimiento al **procedimiento** prescrito por ley. Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 D.P.R. 647 (1979).

Una orden de desacato sumario debe cumplir tanto con los requisitos establecidos por esta regla como con los establecidos por la sec. 519 del Título 33. Pueblo v. Baiges Chapel, 103 D.P.R. 856 (1975).

El inciso (a) de esta regla no deroga las disposiciones de la sec. 519 del Título 33. Pueblo v. Baiges Chapel, 103 D.P.R. 856 (1975).

Es nula una orden de desacato sumario que se limita a incorporar por referencia la transcripción de todo lo ocurrido en el tribunal, sin especificar dentro de ese todo el acto o los actos constitutivos del desacato y sin cumplir con los otros requisitos que imponen la sec. 519 del Título 33 y esta regla, máxime cuando el único documento firmado por el juez sentenciador fue la sentencia y en ella no se incorporo por referencia la transcripción de los procedimientos. Pueblo v. Baiges Chapel, 103 D.P.R. 856 (1975).

Regla 243. PRESENCIA DEL ACUSADO.

(a) Delitos graves. En todo proceso por delito grave (felony) el acusado deberá estar presente en el acto de la lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, incluyendo la constitución del jurado y la rendición del veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la sentencia. Si el acusado ha comparecido al acto de la lectura de la acusación, y habiendo sido advertido conforme a la Regla 58 y citado para juicio no se presentase, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que recayere fallo o veredicto y el pronunciamiento de la sentencia, siempre que el acusado estuviese representado por abogado. Si en cualquier etapa durante el juicio el acusado no regresare a sala para la continuación del mismo, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá dictar mandamiento ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del acusado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo y el pronunciamiento de la sentencia.

(b) Delitos menos graves. En procesos por delitos menos graves (misdemeanor), siempre que el acusado estuviere representado por abogado, el tribunal podrá proceder a la lectura de la denuncia o acusación, al juicio, al fallo y al pronunciamiento de la sentencia, y podrá recibir una alegación de culpabilidad en ausencia del acusado. Si la presencia del acusado fuere necesaria, el tribunal podrá dictar mandamiento ordenando su asistencia personal. El tribunal podrá proceder en casos de delitos menos graves según dispuesto en la excepción del inciso (a) cuando las circunstancias fueren las allí contempladas.

(c) Corporaciones. Una corporación podrá comparecer representada por abogado para todos los fines.

(d) Conducta del acusado. En procesos por delitos graves o menos graves, si el acusado incurriere en conducta tal que impidiere el desarrollo normal del juicio, el tribunal podrá:

(1) Tramitar un desacato, o

(2) tomar las medidas coercitivas pertinentes, o

(3) ordenar que el acusado sea removido y continuar con el proceso en ausencia.

(Julio 23, 1974, Núm. 138, Parte 1, p. 686, art. 2; Junio 3, 1980, Núm. 94, p. 271, sec. 1.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 29(4), 179, 281 y 311; Fed. R. Crim. P. 43; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1043 y 1148; Código modelo, Rs. 287 y 288.

Enmiendas

-1980, ley 94. -Inciso (a): La ley de 1980 enmendó este inciso en términos generales.

-1974, ley 138. - Inciso (a): La ley de 1974 añadió la excepción después de "pronunciamiento de la sentencia" en la primera oración de este inciso.

Inciso (b): La ley de 1974 añadió la tercera oración.

Inciso (d): La ley de 1974 añadió este inciso.

Vigencia.

La sec. 2 de la Ley de Junio 3, 1980, Núm. 94, p. 271, dispone:

"Esta Ley [que enmendó esta regla] empezara a regir inmediatamente después de su aprobación pero las

disposiciones de esta Ley no seran aplicables a los procesos criminales que estuvieren pendientes ante los tribunales al momento de su vigencia."

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 138, Parte 1, p. 686.

Junio 3, 1980, Núm. 94 p. 271.

Contrarreferencias.

Cuando se leerá la acusación, Véase la Regla 52 de este apéndice.

ANOTACIONES

1. En general.

El derecho del acusado a estar presente en el juicio es parte consubstancial de su derecho Constitucional a un juicio público en que pueda carearse personalmente con los testigos de cargo. Es parte esencial del debido proceso de ley. Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 D.P.R. 868 (1986).

Constituye un principio fundamental incuestionable el derecho de un acusado a estar presente en todas las etapas de su juicio, más el acusado puede renunciar a dicho derecho. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

No fue el proposito de la Ley Num. 138 de 23 de julio de 1974 dispensar la presencia del acusado en la vista de los casos por delitos graves sino autorizar en ciertos casos graves la continuación y celebración de la vista del caso en su fondo, en ausencia de un acusado que fue debidamente citado y apercibido personalmente de las consecuencias que tales incomparecencias le causarían. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

Un tribunal debera considerar que un acusado ha renunciado a su derecho bajo esta regla cuando se ausenta una vez comenzada la vista del caso. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

Demostrado que un acusado esta enterado de los cargos en su contra-al establecerse que compareció a la lectura de la acusación-un tribunal debe considerar que este ha renunciado a su derecho a estar presente en todas las etapas de su juicio cuando no comparece al comenzar la vista del caso en su contra. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

Aun cuando un acusado puede renunciar expresamente a su derecho a estar presente durante la celebración de su juicio, un tribunal no debe fomentar tal practica, siendo preferible la presencia del acusado durante todas las etapas del proceso y solamente debe dispensarse de tal presencia en casos en que se demuestre que resultaría extremadamente gravosa su comparecencia a juicio, que el Estado no la requiera para establecer su caso y que la ausencia del acusado no demorara los procedimientos. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

Un juicio *in absentia* por delito *felony* se detendrá por el tribunal-bajo las disposiciones de esta regla-en el veredicto o el fallo del juez en casos vistos sin jurado. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

Viola el debido proceso de ley de un acusado juzgado *in absentia* por un delito grave-ausencia que no fue explicada-aquel juez que celebra el acto de lectura de sentencia sin oír a dicho acusado. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

No pueden ser anulados los derechos fundamentales del hombre por la mera invocación del ordenamiento procesal moderno cuando el derecho a ser oído en la etapa final del juicio ha sido garantizado por el texto

enmendado de esta regla el cual esta en estricta concordancia con la sec. 7 del art. II de la Constitución. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

Queda establecida la presunta voluntariedad de la ausencia de un acusado de su juicio por un delito grave-bajo las disposiciones de esta regla-y puede el juez celebrar un juicio *in absentia*, una vez queda enterado el tribunal de las infructuosas gestiones del alguacil y del fiador por localizar en la jurisdicción al acusado desaparecido. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

Establecido el hecho de que un acusado, debidamente citado y apercibido de las consecuencias de su evasión, desaparece sin explicación de la jurisdicción donde tiene juicio pendiente, su conducta debe tomarse como renuncia voluntaria a las garantías Constitucionales provistas para quien se enfrenta en juicio a su acusador. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

Juzgado *in absentia* un acusado por un delito *misdemeanor*, el tribunal puede, en determinadas circunstancias, proceder al pronunciamiento de la sentencia sin citarlo ni oirlo. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

Un juez puede ordenar la continuación de un juicio en un caso por delito grave (*felony*) en ausencia del acusado cuando la ausencia de este fue voluntaria, hecho confirmado por las actuaciones posteriores del acusado. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969).

Es renunciable, con ciertas limitaciones, el derecho de un acusado a estar presente durante todas las etapas del juicio en su contra en un proceso por delito grave. Tal renuncia no viola el debido **procedimiento** de ley. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969).

Regla 244. NOTIFICACIONES.

A menos que se disponga en contrario en estas reglas, siempre que se requiera o permita notificar a una parte representada por abogado, la notificación se hará al abogado a no ser que el tribunal ordenare que la parte deberá ser notificada personalmente, y dicha notificación se efectuará de acuerdo con lo dispuesto sobre el particular en las Reglas de **Procedimiento** Civil para el Tribunal General de Justicia, Ap. III del Título 32.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 49(b).

Regla 245. NOTIFICACIÓN DE ORDENES.

Al dictarse una orden en ausencia de cualquier parte que resultare afectada, el secretario la notificará a dicha parte inmediatamente.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 49(c).

Regla 246. TRANSACCIÓN DE DELITOS.

Sólo podrán transigirse delitos menos graves, graves de cuarto o de tercer grado, cuando el imputado o acusado se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le

exija notables prestaciones personales, con el consentimiento del perjudicado y del ministerio público.

En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudicada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causándole, el tribunal podrá en el ejercicio de su discreción y con la participación del fiscal, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseimiento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito.

(Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274, art. 1, ef. 90 días después de Julio 1, 1988; Septiembre 15, 2004, Núm. 317, art. 19, enmienda el primer párrafo, efectiva el 1 de mayo de 2005 para atemperarlo al Nuevo Código penal de P.R. de 2004.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 445 a 447; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1377 a 1379.

Enmiendas

-2004, ley 317. -La ley de 2004 enmienda el primer párrafo de esta regla en términos generales.

-1988, ley 53. - La ley de 1988 añadió las palabras "y con la participación del fiscal" en la primera oración del segundo párrafo.

Vigencia.

Véase nota bajo la Regla 6.1 de este apéndice.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274.

Septiembre 15, 2004, Núm. 317.

Contrarreferencias.

Delitos menos graves, Véase la sec. 3044 del Título 33.

ANOTACIONES

1. En general.

Para que un tribunal acceda a una solicitud de archivo por transacción, no se requiere la anuencia del Ministerio Público, aunque el fiscal debe ser oído, correspondiendo la decisión a la discreción del juez. *Pueblo v. Vázquez*, 120 D.P.R. 369 (1988).

La transacción civil habida entre una parte perjudicada y un acusado de delito menos grave no tiene efectos definitivos que obliguen al archivo de la acusación penal, pues para esto esta regla confiere discreción al juez de instancia que es quien conoce las circunstancias que han distinguido la acción delictiva de que se trata. *Pueblo v. Ramírez Valentín*, 109 D.P.R. 13 (1979).

La discreción que esta regla le reconoce a un juez de instancia para ordenar o denegar el archivo de una acusación penal a base de que la parte perjudicada y el acusado de delito menos grave transigieron la correspondiente reclamación, es para que dicho juzgador pueda determinar si existen circunstancias concurrentes con el delito que reflejen elementos de perversidad, temeridad o conducta tan crasamente

antisocial en el acto delictivo que deban ser corregidos a través de la operación del mecanismo penal. Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13 (1979).

Es inevitable el encausamiento **criminal** de un acusado en aquellos casos por delitos menos graves donde no solo se lesionan particulares intereses privados, sino que, por el contrario, se afectan fundamentales postulados sociales y comunitarios. Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13 (1979).

No es susceptible de ser transigido por razón de la previa compensación a los parientes de la víctima el delito de homicidio involuntario. Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13 (1979).

Regla 247. SOBRESEIMIENTO.

(a) Por el Secretario de Justicia o fiscal. El Secretario de Justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del tribunal, sobreseer una acusación con respecto a todos o algunos de los acusados, y el proceso contra dichos acusados quedará terminado. Excepto según se dispone en el inciso (c) de esta regla, dicho sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio, sin el consentimiento de dichos acusados.

(b) Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso.

(c) Exclusión de acusado para prestar testimonio. En un proceso contra dos o más personas el tribunal podrá en cualquier momento después del comienzo del juicio pero antes que los acusados hubieren comenzado su defensa, ordenar que se excluya del proceso a cualquier acusado, de modo que pueda servir de testigo de El Pueblo de Puerto Rico. Cuando se hubiere incluido a dos o más personas en la misma acusación y el tribunal fuere de opinión que no existen pruebas suficientes contra uno de los acusados, deberá decretar que se le excluya del proceso, antes de terminarse el período de la prueba, de modo que pueda servir de testigo a su compañero.

(d) Efectos. El sobreseimiento decretado de acuerdo con esta regla impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos.

(Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274, art. 2, ef. 90 días después de Julio 1, 1988.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 239 a 241 y 251; Fed. R. Crim. P. 48(a); Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1099 a 1101; Código modelo, R. 295.

Enmiendas

-1988, ley 53. - Inciso (b): La ley de 1988 requirió la participación de fiscal al decretar el sobreseimiento de la denuncia o acusación en la primera oración de este inciso.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274.

Contrarreferencias.

Justicia, Secretario de, Véase la sec. 71 del Título 3.

ANOTACIONES

1. En general.

El Ministerio Público tiene autoridad para solicitar el archivo de una acusación sin que ello sea un impedimento para un nuevo proceso. 2005 DTS 185 (2005) Pueblo v. Gomez, 2005 TSPR 185 (2005); 166 D.P.R. ____ (2005).

El argumento del acusado, que estaba sujeto a responder durante el periodo entre la desestimación de los cargos en su contra y la reinstalación de los cargos nuevamente, y que esta constituyo una dilación irrazonable en violación del derecho a juicio rápido, fue rechazado por el Tribunal Supremo; el derecho a juicio rapido no se extiende al periodo que transcurre entre la primera desestimación de una denuncia y la nueva presentación de cargos. 2003 DTS 098 (2003) Pueblo v. Carrión Rivera, 2003 TSPR 98 (2003); 159 D.P.R.633 (2003).

Transcurrido ese término, el imputado puede solicitar la cancelación de la fianza, y si el Ministerio Público no ha actuado, el tribunal podrá sobreseer la causa a tenor con lo dispuesto en la Regla 247(b) de [Procedimiento Criminal](#). Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, a la pág. 170 (1975); 2000 DTS 108 (2000) Pueblo V Soto Ortiz, 2000 T.S.P.R. 108 (2000).

Para que el tribunal pueda decretar un sobreseimiento de una denuncia por infracción a la Ley de Violencia Domestica deben concurrir: (1) la celebración de una vista en la que participe el Ministerio Público, y (2) que el sobreseimiento sea conveniente para los fines de la justicia. 2000 DTS 072 (2000) Pueblo v. Castellón, 2000 TSPR 72 (2000); 151 D.P.R. 15 (2000).

El tribunal debe considerar lo siguiente en el ejercicio de su discreción bajo esta regla: (1) la evidencia con la que cuenta el Ministerio Público para establecer su caso; (2) la naturaleza del delito; (3) si el acusado esta encarcelado o ha sido convicto en un caso relacionado; (4) el tiempo que el acusado lleva encarcelado; (5) la posibilidad de amenaza u hostigamiento; (6) la probabilidad de que haya evidencia adicional; (7) si el proseguimiento sirve los mejores intereses; (8) el impacto del sobreseimiento sobre la administración de la justicia y los derechos del acusado, y (9) la falta de interés en el caso por la víctima. 2000 DTS 072 (2000) Pueblo v. Castellón, 2000 TSPR 72 (2000); 151 D.P.R. 15 (2000).

No procede decretar automáticamente el sobreseimiento de una denuncia por razón de que la víctima ha manifestado su falta de interés en el caso y cuando el Ministerio Público se opone. 2000 DTS 072 (2000) Pueblo v. Castellón, 2000 TSPR 72 (2000); 151 D.P.R. 15 (2000).

No es conveniente a los fines de la justicia en los casos de violencia domestica decretar automáticamente el sobreseimiento cuando la víctima no tenga interés en el caso. 2000 DTS 072 (2000) Pueblo v. Castellón, 2000 TSPR 72 (2000); 151 D.P.R. 15 (2000).

No procede considerar en apelación una alegación de que a un acusado se le ha vulnerado su derecho a juicio rápido cuando opta por aceptar la disolución del jurado cuando apenas ha deliberado una hora, esto es, cuando teniendo la oportunidad de que su caso se resolviera, se advino a la disolución del jurado sin que este hubiera agotado las oportunidades de rendir un veredicto. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

El inciso (b) de esta regla es adecuado vehículo para decretar, en la etapa de vista preliminar, el sobreseimiento de una denuncia con el fin de proteger a un acusado de la excesiva tardanza en la celebración de la vista preliminar. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

Un sobreseimiento de una denuncia decretado de acuerdo con el inciso (d) de esta regla impide un nuevo proceso sobre los mismos hechos. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

No es valida una sentencia decretando el sobreseimiento de una acusación o denuncia bajo las disposiciones de esta regla cuando el tribunal de instancia no expone en su sentencia las causas del sobreseimiento. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59 (1967).

Solicitada por el Poder Ejecutivo la extradición de un acusado para juzgarlo en esta jurisdicción, un juez del tribunal de instancia no puede, al amparo de esta regla, ordenar-sin perjuicio de que el fiscal reinstale los casos-el archivo y sobreseimiento de las acusaciones que sirven de base a la extradición, máxime cuando cualquier nueva acusación radicada contra dicho acusado estaría prescrita. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59 (1967).

Las disposiciones sobre sobreseimiento de esta regla no tienen aplicación cuando el coacusado consciente y voluntariamente se sienta en la silla de los testigos, o cuando este es acusado o procesado en un juicio separado. Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965).

El no incluir el fiscal a un coacusado en una acusación junto con otros dos coacusados por los mismos hechos delictivos debido al computo erroneo de la edad del primero no constituye la exclusión definitiva de un proceso **criminal**. Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965).

Cuando una persona que participa junto con otras dos en hechos delictivos ocupa la silla testifical como testigo de El Pueblo en un caso por dichos hechos contra uno de los otros dos participantes, y el juez de instancia, al empezar a declarar, no le advierte acerca de su derecho a no inculparse y a tener asistencia de abogado, de acusársele posteriormente por los mismos hechos, el juez de instancia en dicho proceso debe-ante la alegación de la defensa de que la declaración prestada por el acusado en el primer **procedimiento** tiende a inculcarlo-ordenar que dicha declaración no sea utilizada por El Pueblo de Puerto Rico como evidencia en su contra, ni hacerse alusión ni referencia alguna durante el juicio o juicios que se le celebren en su contra en virtud de las acusaciones que se le formularen separadamente por dichos hechos delictivos. Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965).

Regla 247.1. SOBRESEIMIENTO Y EXONERACIÓN DE ACUSACIONES.

El tribunal luego del acusado hacer una alegación de culpabilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo solicite y presentare evidencia de que el acusado ha suscrito un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio, podrá suspender todo **procedimiento** y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acusado el cual no excederá de cinco (5) años. El tribunal apercibirá al acusado que, de abandonar dicho programa será sancionado conforme a lo dispuesto en la sec. 4428 del Título 33.

Como parte de los términos del convenio estará el consentimiento del acusado a que, de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable, la vista sumaria inicial que disponen las secs. 1026 et seq. de este título. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.

En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en las secs. 1026 et seq. de este título.

Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, podrá exonerar a la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público y separado de otros récord, a los fines exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla.

La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera récord de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación al caso sobreseído.

La exoneración y sobreseimiento de que trata esta regla podrán concederse en solamente una ocasión a cualquier persona.

La aceptación por un acusado del sobreseimiento de una causa por el fundamento señalado en esta regla constituirá una renuncia a la desestimación de la acción por los fundamentos relacionados en los incisos (e), (f), (m) y (n) de la Regla 64.

(Adicionada en Febrero 10, 1976, Núm. 3, p. 10, art. 1; Junio 1, 1984, Núm. 45, p. 128, sec. 1; Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274, art. 3; Julio 13, 1988, Núm. 88, p. 392, sec. 3; Enero 17, 1995, Núm. 7, art. 3.)

HISTORIAL

Referencias en el texto.

La referencia al Art. 232 de la Ley de 1974, anterior sec. 4428 del Título 33, fue derogada por la Ley de Junio 18, 2004, Núm. 149, art. 307. Disposiciones similares vigentes Véase la sec. 4860 del Título 33.

Codificación.

La Ley de Julio 13, 1988, Núm. 88, p. 392, introdujo enmiendas a esta regla pero omitió incorporar las introducidas por la Ley de Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274, las que se han insertado por no ser inconsistentes entre sí.

Enmiendas

-1995, ley 7. -La ley de 1995, en el primer párrafo, suprimió la conjunción "o" entre "Puerto Rico" y "privado" en la primera oración, y añadió una segunda oración.

-1988, ley 88. -La Ley de Julio 13, 1988, Núm. 88, añadió un nuevo segundo párrafo y en el anterior tercer párrafo añadió "siguiendo lo dispuesto en las secs. 1026 et seq. de este título".

-1988, ley 53. -La Ley de Julio 1, 1988, Núm. 53, introdujo en el primer párrafo de esta sección cambios gramaticales para aclarar el sentido, y en el tercer párrafo, ahora el cuarto, añadió las palabras "en la cual participara el fiscal".

-1984, ley 45. -La ley de 1984 enmendó esta regla en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Junio 1, 1984, Núm. 45, p. 128.

Julio 1, 1988, Núm. 53, p. 274.

Julio 13, 1988, Núm. 88, p. 392.

Enero 17, 1995, Núm. 7.

Aplicabilidad.

El art. 2 de la Ley de Febrero 10, 1976, Núm. 3, p. 10, dispone:

"Las disposiciones de esta regla serán igualmente aplicables a toda acusación o denuncia contra un acusado que hubiese suscrito con anterioridad a la vigencia de esta ley un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado."

Contrarreferencias.

Justicia, Secretario de, Véase la sec. 71 del Título 3.

Superintendente, Policía de la, Véase la sec. 3104 del Título 25.

ANOTACIONES

1. En general.

La declaración de culpabilidad de [un acusado] no puede ser utilizada en su contra para justificar la acción civil de la confiscación de su vehículo, pues tanto el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas como la Regla 247.1 de **Procedimiento Criminal** prohíben claramente el uso del expediente **criminal** para tales propósitos luego de que el imputado es exonerado a discreción del tribunal tras cumplir exitosamente con las condiciones del mecanismo de desvío. 2008 DTS 137 FORD MOTOR V. ELA 2008 TSPR 137

La vista que requiere que se celebre esta regla con el propósito de sobreseer el **procedimiento** tendrá que ser celebrada con posterioridad a la fecha en que termina el periodo probatorio que el tribunal le impone a la persona que voluntariamente se acoge a los procedimientos que establece la regla. El Estado viene en la obligación de solicitar la celebración, y el tribunal celebrar, la referida vista en un término razonable luego de finalizado el periodo probatorio impuesto. Pueblo v. Moreu Merced, 130 D.P.R. 702 (1992).

No toda anomalía cometida en el proceso de identificación de un acusado mediante rueda de detenidos acarrea la supresión de la evidencia de identificación o la revocación de una sentencia de convicción. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216 (1989).

Regla 248. EXCEPCIONES ABOLIDAS.

Quedan abolidas las excepciones a las resoluciones u órdenes del tribunal en el curso del juicio. Para todos los fines que hasta ahora han sido necesarias las excepciones, será suficiente que una parte, al solicitar una resolución u orden del tribunal, o al éste dictarla, formule sus razones u objeciones al efecto; pero si una de las partes no tuviere oportunidad para objetar cualquier resolución u orden, la omisión no le perjudicará.

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, art. 362; Fed. R. Crim. P. 51; Ley de Mayo 30, 1904, p. 16.

Regla 249. TERMINOS; COMO SE COMPUTARAN.

La computación de cualquier término prescrito o concedido por estas reglas, o por orden del tribunal, o por cualquier estatuto aplicable, se verificará conforme a la Regla 68.1 de **Procedimiento** Civil, Ap. III del Título 32.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 45(a).

Contrarreferencias.

Computo del tiempo, veanse las secs. 72 y 73 del Título 1.

Regla 250. TRIBUNALES SIEMPRE ACCESIBLES.

Todos los tribunales se considerarán siempre abiertos para la presentación de cualquier escrito apropiado, para la expedición o devolución de citaciones y mandamientos, y para la presentación de mociones y expedición de órdenes.

HISTORIAL

Procedencia.

Fed. R. Crim. P. 56.

Regla 251. DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD ROBADA O ILEGALMENTE APROPIADA.

Todo funcionario del orden público que ocupare o recibiere propiedad que se alegare ha sido robada o ilegalmente apropiada la retendrá a disposición del magistrado o tribunal ante el cual estuviere pendiente el proceso por el delito imputado. El magistrado o tribunal correspondiente ordenará la entrega de la propiedad robada o ilegalmente apropiada a la persona que acreditare satisfactoriamente tener derecho a su posesión. De no reclamarse la propiedad dentro de los seis (6) meses de la sentencia u orden condenando o absolviendo al acusado, o archivando el proceso, será entregada al Administrador de Servicios Generales para su disposición de acuerdo a la reglamentación existente para propiedad excedente. Si los bienes fueren vendidos en pública subasta, el producto de la venta será ingresado en el Fondo General, excepto lo que se le reembolse a la Administración de Servicios Generales por los gastos incurridos. El funcionario que ocupare dinero o propiedad de un acusado extenderá inmediatamente un recibo por duplicado especificando el dinero o propiedad ocupada, y entregará una copia al acusado, y presentará la otra en la secretaría del tribunal que conociere o hubiere de conocer de la causa. (Julio 6, 1978, Núm. 101, p. 322.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal**, 1902, arts. 462 a 468; Código Enj. **Criminal** de California, secs. 1407 a 1412.

Enmiendas

-1978, ley 101. - La ley de 1978 enmendó esta regla en términos generales.

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 6, 1978, Núm. 101, p. 322.

Regla 252. REGLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN ANTERIOR AL JUICIO.

Regla 252.1. REGLAS A SEGUIRSE AL EFECTUARSE UNA RUEDA DE DETENIDOS.

(a) Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a continuación deberán seguirse siempre que algún funcionario del orden público someta a un sospechoso a una rueda de detenidos (lineup) con el propósito de identificar al posible autor de un acto delictivo.

(b) Asistencia de abogado. Si al momento de celebrarse la rueda de detenidos (lineup) ya se hubiese radicado denuncia o acusación contra la persona que motiva el **procedimiento**, ésta tendrá derecho a que su abogado se encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos efectos se le advertirá con suficiente antelación a la celebración de la rueda.

La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia legal durante la rueda de detenidos mediante una renuncia escrita ante dos (2) testigos quienes también deberán firmar dicha renuncia.

En caso de que al sospechoso le interesase que su abogado se encontrase presente y así lo manifestara, se notificará al abogado que éste señale con razonable anticipación a la celebración de la rueda. De tratarse de una persona insolvente o si su abogado no compareciese, se le proveerá asistencia legal al efecto.

(c) Participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos. La participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos se regirá por las siguientes reglas:

(1) Se le permitirá al abogado del sospechoso presenciar el proceso completo de la rueda de detenidos.

(2) Se le permitirá durante la celebración de la rueda de detenidos que escuche cualquier conversación entre los testigos y la Policía.

(3) No se le permitirá interrogar a ningún testigo durante la rueda de detenidos.

(4) El abogado podrá indicar al oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos cualquier infracción a estas reglas y si el primero entendiese que dicha infracción se está cometiendo, corregirá la misma.

(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro (4) personas en adición al sospechoso y la misma estará sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del sospechoso.

(2) En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada rueda de detenidos.

(3) No se permitirán indicios visibles que de manera ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que es el sospechoso o detenido.

(e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El **procedimiento** durante la rueda de detenidos se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas:

(1) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a los demás integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebración de la rueda de detenidos.

(2) No se le informará a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso.

(3) No se le dará ninguna información sobre los componentes de la rueda.

(4) Si dos o más testigos fueran a participar como identificantes no se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la identificación y cada uno hará la identificación por separado.

(5) El testigo observará la rueda y con la menor intervención de los agentes o funcionarios de orden público, identificará de manera positiva al autor de los hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda.

(6) Si el sospechoso es requerido para que diga alguna frase, haga algún movimiento o vista algún atavío, se requerirá de los demás integrantes expresión, actuación o vestimenta de forma parecida.

(7) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, ya sea expresamente o de cualquier otra forma.

(f) Récord de los procedimientos. En todo **procedimiento** efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.

En dicha acta se incluirán el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen sucinto de los procedimientos observados.

Deberá, además, tomarse cuantas veces fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue presentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará parte del expediente policiaco o fiscal correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de **procedimiento criminal** vigentes.

(Adicionada en Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90, art. 1, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:
Julio 23, 1974, Núm. 199.

ANOTACIONES

Rueda de detenidos

1. -En general.

2. -Debido **procedimiento**.

Rueda de detenidos

1. -En general.

La validez de una identificación depende de la totalidad de las circunstancias que rodean al proceso de identificación, y para su determinación se debe dilucidar si: (1) dicha identificación ha sido confiable, y (2) en el curso de esta no hubieron irregularidades que afectasen irremediablemente derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630 (1994).

Los factores principales que se deben evaluar para determinar la confiabilidad de la identificación son: la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630 (1994).

En la identificación lo importante no es el método utilizado sino que la misma sea libre, espontánea y confiable. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630 (1994).

La validez de una identificación debe resolverse a base de la totalidad de las circunstancias del caso. Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964 (1991).

Cuando el perjudicado, o testigos, de la comisión de un delito no conocen personalmente al sospechoso de la comisión del mismo, el **procedimiento** más aconsejable a seguirse por las autoridades es la celebración de una rueda de detenidos (*line up*). Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964 (1991).

El mero hecho de que la rueda de detenidos no se celebre, no tiene el efecto per se de hacer inadmisibles en evidencia la identificación llevada a cabo. Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964 (1991).

La sugestión no es excluyente de la rueda de identificación; el jurado y el juez tienen la labor de determinar su confiabilidad. Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600 (1988).

2. -Debido **procedimiento**.

Para evaluar la confiabilidad de la identificación del acusado los elementos a considerar son: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al acusado en el momento en que ocurre el acto delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación, y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991).

No toda anomalía cometida en el proceso de identificación de un acusado mediante rueda de detenidos acarrea la supresión de la evidencia de identificación o la revocación de una sentencia de convicción. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216 (1989).

La admisión de prueba de identificación con elementos de sugestividad no viola el debido proceso de ley si están presentes suficientes elementos de confiabilidad tomando en consideración la totalidad de las circunstancias a la luz de los siguientes factores: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que se cometía el crimen; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción previa del **criminal** hecha por el testigo; (4) el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216 (1989).

Regla 252.2. UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS COMO **PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN.**

(a) Los agentes y funcionarios del orden público podrán hacer uso de fotografías para identificar el posible autor de un acto delictivo únicamente en las siguientes circunstancias:

(1) Cuando por razones fuera del control de los agentes o funcionarios del orden público no fuere posible o necesario realizar una rueda de detenidos.

(2) Cuando no exista sospechoso del acto delictivo.

(3) Cuando existiendo un sospechoso éste se negare a participar en la rueda, o su actuación o ausencia impidiese que la misma se efectúe adecuadamente.

(b) La utilización de fotografías como medio de identificación se regirá por las siguientes reglas:

(1) Se le mostrarán al testigo no menos de nueve (9) fotografías incluyendo la del sospechoso y éstas presentarán, en adición al sospechoso, personas de rasgos similares a éste.

(2) Si dos o más testigos fueran a hacer la identificación fotográfica cada uno hará la identificación por separado.

(3) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, mediante la forma de llevar a cabo el **procedimiento**, por marcas en las fotografías, o cualquier otro medio.

(4) Celebrada la identificación fotográfica, si el testigo identificara el autor de los hechos delictivos se procederá a levantar un acta que resuma brevemente el **procedimiento** seguido y se identificarán las fotografías utilizadas de manera que posteriormente pueda establecerse cuáles fueron las fotografías presentadas al testigo.

(Adicionada en Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90, art. 1, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

HISTORIAL

Exposición de motivos.

Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90.

ANOTACIONES

Rueda de detenidos

1. -En general.

2. -Debido **procedimiento**.

3. -Casos de excepcion.

Fotografías

4. -En general.

5. -Admisibilidad.

Rueda de detenidos

1. -En general.

Se revoco el dictamen del tribunal de instancia, suprimiendo la identificación del acusado por no existir evidencia indicativa de que el agente de policía le sugiriera al testigo que entre las fotografías se encontrara la persona identificada como el acusado, de manera que se viera afectada la identificación espontánea y voluntaria que hizo el testigo. Pueblo v. Mejias, 160 D.P.R. 86 (2003).

La presencia de sugestión no excluye la prueba de identificación del acusado, sino que impone al jurado y al juez la labor de determinar su confiabilidad. Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600 (1988).

La validez de la identificación de un sospechoso o acusado, no obstante el **procedimiento** empleado, debe precisarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987); Pagan Hernández v. Alcalde, 102 D.P.R. 101 (1974).

Los requisitos o directrices exigidos por esta regla son principalmente aplicables y tienen el propósito de regular el **procedimiento** de identificación cuando este esta en manos de, o es dirigido o controlado por, los funcionarios del Estado encargados de la seguridad pública. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Cuando la identificación del imputado de delito es realizada por la víctima o el testigo por si solo, esto es, sin intervención de clase alguna de funcionarios del Estado, no existe el temor de que los funcionarios a cargo del **procedimiento** de identificación en un caso en particular interfieran indebidamente con los testigos de los hechos sugiriéndoles la persona que deben identificar. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Tanto la voz como el cuerpo de una persona son características físicas de identificación. Al igual que los rasgos faciales o la letra, la voz se manifiesta reiteradamente para que otros la oigan. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

La identificación que del acusado realizara la perjudicada en su trabajo, unida, naturalmente, con la realizada en corte, es suficiente por si sola para sostener las convicciones decretadas. La misma fue espontánea, confiable, independiente y anterior a la intervención de la Policía que hacia innecesaria la identificación del apelante por cualquiera de los dos métodos que aparecen en esta regla. Cualquier expresión en contrario debe entenderse expresamente revocada. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Cuando el testigo conoce al acusado con anterioridad a los hechos que se le imputan a este, es innecesaria la utilización de los métodos de identificación que provee esta regla. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Cuando la identificación la hace la víctima y esta conocía al acusado con anterioridad a los hechos, son inaplicables las salvaguardas que requiere la Constitución para la confiabilidad y, por ende, para la validez de la identificación extrajudicial. Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843 (1983), revocada en parte, Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Los criterios a considerarse al analizar la prueba sobre identificación del acusado son los siguientes: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción previa del **criminal** hecha por el testigo; (4) el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983).

La prohibición de esta regla a los efectos de que las personas que van a participar como identificantes en una rueda de detenidos no deben comunicarse entre si con anterioridad a la celebración de la misma no es de aplicación estricta cuando los referidos identificantes son familiares que viven bajo un mismo techo. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983).

El hecho de la similitud de la vestimenta no es mandatorio; la similitud en cuanto a las restantes

características mencionadas en esta regla es mucho más importante; es indispensable que la Policía haga un esfuerzo notable para lograr el mayor parecido físico entre los integrantes de la rueda. *Pueblo v. De Jesús Rivera*, 113 D.P.R. 817 (1983).

El comunicar a unos testigos que se va a efectuar una rueda de detenidos, a ver si pueden identificar a un sospechoso no es un error que implique sugestividad o que le reste confiabilidad al proceso de identificación. *Pueblo v. Rivera Navarro*, 113 D.P.R. 642 (1982).

En apelación, la conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba confiable para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez que en apelación se extiende a las determinaciones de hecho. *Pueblo v. Peterson Pietersz*, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, *Peterson v. People of Puerto Rico*, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

Examinada la prueba se concluye que, aun cuando la rueda de detenidos (*lineup*) fuera innecesaria-ya que la identificación por fotografías franqueaba la vía para la identificación en el juicio-esta no estuvo viciada por irregularidades que afectaran derechos sustanciales de los acusados, siendo el **procedimiento** de confrontación en dicho *lineup* justo y limpio. *Pueblo v. Peterson Pietersz*, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, *Peterson v. People of Puerto Rico*, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

Constituye la rueda de detenidos-valioso método de identificación-un instrumento en reserva para usarse cuando la confusión, el correr del tiempo, la difícil percepción, el recuerdo tenue, la inseguridad del testigo o cualquier otro factor en evaluación lógica enerve la razonable certeza exigida de quien señala al autor de un delito. *Pueblo v. Suárez Sánchez*, 103 D.P.R. 10 (1974).

El tribunal apelativo respetara una conclusión del juez del tribunal de instancia a los efectos de que es confiable y digna de crédito la identificación del acusado-por lo que resultaba de todo punto innecesario recurrir a la rueda de detenidos-siempre y cuando dicha conclusión este sostenida por la prueba. *Pueblo v. Suárez Sánchez*, 103 D.P.R. 10 (1974).

Únicamente en ausencia de prueba se sustituirán en alzada las determinaciones del juez de instancia en cuanto a la identificación de criminales. De haberla, no se intervendrá con dicha identificación. *Pueblo v. Suárez Sánchez*, 103 D.P.R. 10 (1974).

2. -Debido **procedimiento.**

El comunicar a unos testigos que se va a celebrar una rueda de detenidos sin ninguna otra particularidad, indicación o sugerencia en cuanto a su identificación no viola el debido proceso de ley. *Pueblo v. Rivera Navarro*, 113 D.P.R. 642 (1982).

La sugerencia o insinuación como elemento que por si solo ofende el debido proceso de ley y obliga a la exclusión de prueba de identificación de un acusado, ha sido descartada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, haciendo depender la confiabilidad de dicha identificación en la totalidad de las circunstancias aun cuando el **procedimiento** de confrontación haya sido sugestivo. *Pueblo v. Peterson Pietersz*, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, *Peterson v. People of Puerto Rico*, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

Examinada la prueba se concluye que la prueba de identificación de los tres acusados no estaba matizada en parte alguna por violación del debido proceso de ley. *Pueblo v. Peterson Pietersz*, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, *Peterson v. People of Puerto Rico*, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

Cuando el acusado probó que el método de identificación seguido fue el de su exposición a solas al testigo de identificación, y no demostrándose circunstancias extraordinarias, dicha omisión constituye una violación del debido **procedimiento** de ley que justifica la revocación de la sentencia dictada. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10 (1974).

Examinada la totalidad de las circunstancias que rodearon el **procedimiento** de identificación del acusado en el caso de autos-donde no se celebró una identificación en rueda del acusado-se concluye que dichas circunstancias son de tal naturaleza que da certeza a la identificación del acusado realizada por el perjudicado, no constituyendo dicho **procedimiento** una violación del debido **procedimiento** de ley a que tiene derecho el acusado. Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974); Pueblo v. Medina Jiménez, 102 D.P.R. 320 (1974).

La admisión de prueba de un *show up*-método de identificación que consiste en la exposición del sospechoso de haber cometido un crimen a su víctima o perjudicada-sin más, no viola el debido **procedimiento** de ley a que tiene derecho un acusado. Pueblo v. Medina Jiménez, 102 D.P.R. 320 (1974).

Existiendo un sospechoso de la comisión de un delito, viola la cláusula sobre el debido proceso de ley de la Constitución el no someter a dicho sospechoso al sistema de identificación por rueda de detenidos. Tal error no puede luego corregirse en este tipo de situación mediante la formación de tal rueda. Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

3. -Casos de excepción.

La presencia de sugestión en la identificación de un acusado no excluye irremisiblemente la prueba, sino que impone al jurado o al juez constituido en tribunal de derecho la labor de separar campos en el testimonio para determinar su confiabilidad y la existencia de prueba de identificación no influida ni maculada por conducta sugestiva. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), certiorari denegado, Peterson v. People of Puerto Rico, 439 U.S. 989; 99 S. Ct. 587; 58 L. Ed. 2d 663 (1978).

Debe acudir a la identificación de un sospechoso a solas y prescindirse de presentarlo en rueda de personas de vestimenta y características parecidas únicamente cuando existen circunstancias que exijan su uso. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10 (1974); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972).

Demostrado por un acusado-quien tenía el peso de la prueba-un caso prima facie de violación al debido **procedimiento** de ley al ser indebidamente identificado como el sospechoso de cometer algún acto delictivo-al probar que el método de identificación seguido en su caso fue el de su exposición a solas-corresponde al fiscal demostrar que circunstancias especiales requerían el uso de tal método de identificación. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972).

Solo por circunstancias extraordinarias y fuera del control de la Policía podrá abandonarse el **procedimiento** de rueda de detenidos para la identificación con anterioridad al juicio de un sospechoso de haber cometido un delito. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972).

Fotografías

4. -En general.

Se revocó el dictamen del tribunal de instancia, suprimiendo la identificación del acusado por no existir evidencia indicativa de que el agente de policía le sugiriera al testigo que entre las fotografías se encontrara la persona identificada como el acusado, de manera que se viera afectada la identificación espontánea y voluntaria que hizo el testigo. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. 86 (2003).

La validez del **procedimiento** de identificación mediante fotografías debe determinarse a la luz de las

circunstancias particulares de cada caso. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

En la identificación de un sospechoso de haber cometido un crimen, lo importante no es el método que se utilice para la identificación del acusado, lo importante es que la identificación sea libre, espontánea y confiable. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

El derecho de asistencia de abogado no se extiende al examen de fotografías para identificar a un sospechoso y a las identificaciones así hechas. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

La Policía puede usar-a los fines de una investigación o identificación-la fotografía de un sospechoso de haber cometido un delito que esta adherida a una solicitud de licencia para conducir vehículos de motor que aparece en el correspondiente expediente archivado en el Departamento de Obras Publicas, todo ello sin la autorización del sospechoso. Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

La Policía puede utilizar, a los fines de una investigación e identificación, el retrato de un sospechoso radicado en el Departamento de Obras Publicas como parte de una solicitud para conducir vehículos de motor-independientemente del hecho de que dicho retrato no esta investido de confidencialidad protegida Constitucionalmente-cuando dicha fotografía vino a poder de la Policía como resultado de dos investigaciones previas al caso de hurto mayor en que dicha fotografía fue usada, promovidas por quejas de ciertas monjas carmelitas y la corporación Wells Fargo en las que se trazo al convicto en el caso de autos como el individuo de conducta sospechosa en dichas dos investigaciones. Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

Una solicitud para conducir un vehículo de motor y los retratos que la acompañan no están investidos de confidencialidad. Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

La garantía Constitucional establecida por la sec. 10 de la Carta de Derechos no llega al extremo de limitar las fotos al alcance de los agentes del orden público en su labor investigativa a las de personas convictas. Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

En un juicio **criminal**, un tribunal no esta justificado en excluir una fotografía por el mero hecho de que la misma pueda impresionar al jurado desfavorablemente para el acusado. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975).

La identificación de un sospechoso o acusado mediante fotografías es un método del cual puede dependerse tan solo en situaciones donde sea imperioso su uso. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10 (1974); Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

La identificación por exposición del sospechoso a solas o por muestra de fotografías-**procedimiento** que era antes común y en efecto la norma-como regla general, ha desaparecido como método de identificación, constituyendo hoy la regla la rueda de detenidos. Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

Un tribunal debera respetar y sostener el **procedimiento** de identificación anterior al juicio de un acusado mediante fotografías, a menos que se trate de una situación tan impermisiblemente sugestiva que de lugar a una irreparable identificación errónea. Pueblo v. Figueroa Torres, 102 D.P.R. 76 (1974).

5. -Admisibilidad.

En una identificación por fotografía cuando ya el acusado era sospechoso-no admisible por no haberse cumplido las formalidades de esta regla-y subsiguiente ratificación de la identificación en rueda de detenidos (*lineup*) en la que el acusado estuvo representado por abogado, no hay cuestiones de puro

derecho que justifiquen al juez en suprimir la evidencia, siendo todo ello materia de hecho, parte de la prueba que al jurado o a otro juez constituido en tribunal de derecho corresponde aquilatar y adjudicar en el juicio. Pueblo v. Lebron Bones, 110 D.P.R. 780 (1981).

Es permisible la identificación de un sospechoso mediante el **procedimiento** de fotografías bajo circunstancias que no induzcan a sugestión o que no exijan la utilización de otros métodos. Su validez es aceptada, a menos que se trate de una situación tan crasamente sugestiva que de lugar a una identificación errónea. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

En esta jurisdicción las fotografías son admisibles en evidencia: (a) para ilustrar hechos sobre los cuales se ha declarado; (b) para demostrar el número de heridas; (c) para corroborar el testimonio de un testigo; (d) para probar cualquier cosa que sea pertinente sobre la cual un testigo puede dar una descripción oral. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975).

En ausencia en los autos de un caso de indicación alguna representativa de impedimento para la identificación por rueda de detenidos de un sospechoso o acusado, es inadmisibles en evidencia la prueba de identificación de tal sospechoso mediante fotografías, máxime cuando al momento de la identificación la Policía tenía una confianza sobre quien era el sospechoso de haber cometido el delito imputado. Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

Constituye un error el que un juez declare sin lugar una solicitud de la defensa a los efectos de que se le muestren las fotografías alegadamente examinadas por un testigo y que sirvieron de base para la identificación del acusado de haber cometido un delito, privando en esta forma a la defensa de colocarse en posición de examinar la legitimidad de la identificación por tal método a la primera ocasión oportuna. Pagan Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

Regla 253. EXPEDIENTES; LIBROS; ACTAS; REGISTROS.

Los secretarios y alguaciles de los tribunales formarán expedientes y llevarán libros, actas y registros en causas criminales, según lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispusiere administrativamente de tiempo en tiempo.

(Renumerada como Regla 253 en Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90, art. 2, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

HISTORIAL

Procedencia.

Código Enj. **Criminal** 1902, arts. 110 y 112; Código Enj. **Criminal** de California, sec. 1047; Fed. R. Crim. P. 55.

Regla 254. FORMULARIOS.

La Oficina de Administración de los Tribunales preparará los formularios que fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de estas reglas.

(Renumerada como Regla 254 en Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90, art. 3, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

Regla 255. DEROGACIÓN DE LEYES INCOMPATIBLES.

El Código de Enjuiciamiento **Criminal** de Puerto Rico, aprobado el primero de marzo de 1902, según ha sido enmendado hasta el presente, y cualesquiera otras leyes, en todo cuanto se relacione o refiera a **procedimiento criminal** que sea incompatible o contrario a estas reglas, quedan por éstas derogados.

(Renumerada como Regla 255 en Julio 23, 1974, Núm. 199, Parte 2, p. 90, art. 4, ef. 60 días después de Julio 23, 1974.)

ANOTACIONES

1. En general.

El derecho a uno vista en apelación que concedía el Código de **Procedimiento Criminal** de Marzo 1 de 1902 y sus ulteriores reformas no fue abrogado por disposición del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino que lo fue por acto de la Legislatura dentro de sus funciones Constitucionales, al no rechazar las nuevas Reglas de **Procedimiento Criminal** que le fueron sometidas por el Tribunal Supremo, entre las cuales se encuentra la disposición derogatoria del Código de **Procedimiento Criminal**. *Lucret Galarza v. Jiménez Oxio*, 440 F. Supp. 47 (1977).

A partir de la aprobación de las Reglas de **Procedimiento Criminal** de 1963, el art. 351(a) del Código de Enjuiciamiento **Criminal** no esta vigente. Dichas reglas abolieron la vista oral automática como parte del trámite apelativo ante el Tribunal Supremo en un caso **criminal**. *Pueblo v. Flores Rosa*, 105 D.P.R. 479 (1976).

Las Reglas de **Procedimiento Criminal** de 1963 no han derogado el sistema de denuncia y citación simultaneas establecido en las secs. 301 et seq. del Título 9, y los juicios en los meritos por infracciones a dicha ley pueden verse con el formulario o boleto que expide y firma el policía denunciante como base, excepto en los casos en que el propio sistema dispone que se radicara denuncia ordinaria. *Pueblo v. Ramos*, 92 D.P.R. 607 (1965).

Las Reglas de **Procedimiento Criminal** no serán aplicables a procesos penales pendientes a la fecha de aprobación de dichas reglas cuando su aplicación no es ni deseable ni practicable. *Domenech Cerezo v. Jefe Penitenciaria*, 90 D.P.R. 892 (1964).

Esta regla deroga el Código de Enjuiciamiento **Criminal** solo en lo que se relaciona o refiere a **procedimiento criminal** que sea incompatible con o contrario a dichas reglas. *Soto v. Tribunal Superior*, 90 D.P.R. 517 (1964).